



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE POSGRADO

**LA ÉLITE DE PODER EN BUENOS
AIRES COLONIAL:
CABILDO Y CABILDANTES ENTRE
LOS HABSBURGOS Y LOS BORBONES
(1690-1726)**

Carlos María BIROCCO

Tesis para optar por el grado de Doctor en Historia

Director: Dr. Emir REITANO (UNLP)

La Plata, 24 de febrero de 2015

AGRADECIMIENTOS

Cada vez que leo la página de los agradecimientos en las tesis de otros investigadores, tengo que confesarlo, me pongo a unir los nombres de las personas citadas y corroboro que no resulta nada difícil adivinar la pertenencia académica del tesista. No sé si a quien se enfrente a ésta le será tan fácil hacer el mismo ejercicio de predicción. Quizás eso se deba a que, en este caso, los trabajos de rastreo documental, procesamiento de los materiales, reflexión y escritura no tuvieron el apoyo material de ninguna beca ni se llevaron a cabo bajo el padrinazgo de una institución. Esa fase de mi formación, la de investigador becario, ya había quedado muy atrás cuando me propuse enfocarme en el estudio de la dirigencia concejil porteña.

Escribir una tesis implica un recorrido que comienza mucho antes de sentarse a delinear un proyecto, en el que muchas personas dejan una huella profunda sin pertenecer necesariamente al campo disciplinar. Tengo una deuda que podrá parecer remota pero que nunca olvido con Eduardo Azcuy Ameghino y su grupo de investigación, con el que me formé cuando tenía poco más de veinte años. De ellos adquirí una manera de pensar las sociedades coloniales rioplatenses que todavía marca hondamente mi percepción de las oligarquías urbanas y de sus sistemas de dominación. Más tarde incorporé otras herramientas de los autores con que pude compartir y debatir mis trabajos. Agradezco a Raúl Fradkin, Mariana Canedo, Guillermo Banzato, Fernando Jumar y Fernanda Barcos, que fueron mis docentes en distintas instancias de mi formación, que me permitieran la discusión de igual a igual. Ellos enriquecieron mi visión sobre aspectos tan variados y relevantes como la evolución de la propiedad de la tierra, la implementación de la justicia y la complejidad de las transacciones comerciales durante la dominación española. A Juan Carlos Garavaglia le debo esos imprevisibles encuentros en la sala de referencias del Archivo General de la Nación, donde alguna vez me regañó por haber estirado tanto la presentación de esta tesis y de los que siempre salía con el impulso de querer acelerar una investigación que parecía no terminar nunca. A fines de la década del 2000 me vinculé con Darío Barrera y Griselda Tarragó: gracias a ellos conocí el enfoque jurisdiccionalista, que sin dudas ha hecho mella en la escritura de esta tesis.

Guardo un entrañable recuerdo de mis compañeros de cursada de distintos seminarios, algunos de los cuales ya defendieron sus tesis: María Eugenia Alemano, Flor Carlón,

Alejandro Morea, Maxi Camarda, Pedro Berardi, Agustín Galimberti, Eduardo Iraola, Antonio Galarza, Leandro González y Mariano Nagy, entre otros. De Martín Wasserman, compañero también, recuerdo con aprecio esas charlas imposibles sobre el Buenos Aires del siglo XVII que teníamos en la sala de consulta del Archivo. A mi director, Emir Reitano, le debo un especial reconocimiento por la solvencia académica y la paciencia con que supo guiarme, sobre todo al principio, cuando los capítulos parecían no cuajar unos con otros, y por haber hecho todo lo posible para facilitarme una tarea que no contó con tiempos rentados. No me cabe duda que las charlas, almuerzo mediante, que tuvimos con Emir y con Julián Carrera apuntalaron la confianza que a veces me faltaba para seguir con esto.

Del mundo de los afectos, quiero rescatar el apoyo y el amor de mi hija Ariadna. Todavía me río de aquel día que calificó a mis cabildantes como parte de ese mundo de “cosas pequeñas” que solemos estudiar los historiadores... También quiero recordar ese lejano día de febrero de 2010 en que Claudio Cacciatore, mi amigo y hermano, me impulsó a presentar este proyecto cuando parecía inviable, y el trabajo que se tomó después en leer los gráficos de esta tesis y enseñarme cómo se interpretaban según los parámetros de las ciencias duras. Nora Cortese ha sido imprescindible para ayudarme a recomenzar cuando todo parecía que se caía. Sergio Robles, en nuestras largas charlas de sobremesa en su jardín zarateño, supo transmitirme la tranquilidad que tantas veces necesité. Miriam Pistacchi acompañó mis avances en nuestros encuentros de cada martes. Y Germán Rodríguez me reeducó en el arte de compartir un mate en el último mes de escritura, cuando el momento de poner un punto final parecía cercano pero a la vez inalcanzable.

Esta tesis está dedicada a mi abuelo Juan Birocco, a quien perdí cuando todavía era un chico. A él le debo uno de los recuerdos más lindos de mi infancia. Un día en que yo jugaba con herramientas, cables y tacos de madera en su taller de electricista, se me acercó para contarme que Napoleón había dominado el mundo por un solo día. Su relato (¡ay de quien escandalice a los niños!) me llenó de perplejidad y fascinación. Con el pasar de los años nunca se borró de mi mente, pero preferí pensar, no sin un poco de soberbia, que se trataba de una interpretación errónea escuchada a alguna maestra de pueblo. Hasta que un día leí a un poeta que se preguntaba, al ver que una luz se apagaba en medio de la noche, si se trataba de una luciérnaga o del inevitable fin de un imperio: allí entendí que las palabras de mi abuelo era una síntesis tan acabada como esa. Hoy entiendo que él puso la primera piedra de un camino que termina aquí.

INDICE

BUENOS AIRES DURANTE EL RECAMBIO DINÁSTICO.....	5
La dirigencia concejil: algunas precesiones.....	6
Buenos Aires en la navegación atlántica: transformaciones y continuidad en el marco del recambio dinástico.....	35
Buenos Aires entre los Habsburgo y los Borbones. Un relato de su historia política...58	
 EL CABILDO.....	113
Una monarquía y cientos de repúblicas.....	114
El cabildo de Buenos Aires: la configuración institucional.....	126
El cabildo en funciones: los índices de actividad y presentismo y la rotación de los empleos concejiles.....	163
La agenda de los asuntos tratados.....	194
La explotación del ganado cimarrón y la política de beneficencia del cabildo.....	253
 LOS CABILDANTES.....	296
Acerca del enfoque prosopográfico.....	297
Parentesco y procedencia.....	315
Matrimonio y alianza.....	353
El perfil ocupacional: ¿una corporación de comerciantes?.....	387
El perfil ocupacional: la participación en la actividad agroganadera.....	442
 Reflexiones finales.....	499
 Bibliografía.....	509

BUENOS AIRES DURANTE EL RECAMBIO DINÁSTICO

Este canto debiera mecer con la cadencia
de una hamaca de quinta que su chirriar silencia,
pues tiene el Buenos Aires que aquí se canta y pinta
el diseño y el ritmo de una hamaca de quinta.
Quienes su red urdieron de calles y de ejido
en dos siglos muy poco tejieron del tejido,
así que se estiró hacia los pastos secos
merced al revolar de solitarios flecos.
Trenzaron su cordaje fundador y cartógrafos
y se tiende, delante de nuestros ojos geógrafos,
el desierto de un lado y del otro las aguas;
hamaca colonial para enormes enaguas
y para mates lentos y para largas siestas,
a cuyos pies florece, con las puntas enhiestas,
esa pequeña flor del hispano solar
que es el Fuerte primero de San Juan Baltasar.

Manuel Mujica Láinez, *Canto a Buenos Aires*

LA DIRIGENCIA CONCEJIL: ALGUNAS PRECISIONES

Esta tesis es el resultado de varios años de indagación y reflexión sobre la actuación de la dirigencia municipal de Buenos Aires. Hemos escogido para hacerlo un período de transición que estuvo determinado por el recambio dinástico: el traspaso del cetro de la monarquía hispánica de la casa de Habsburgo a la casa de Borbón. Este enfoque no era del todo nuevo para nosotros. Ya habíamos dedicado algunos capítulos de nuestra tesis de licenciatura, hoy lejana en el tiempo, a estudiar el desempeño de los círculos elitistas porteños durante la Guerra de Sucesión española.¹ Después de una larga pausa de más de una década, decidimos volver a enfocarnos en esa élite de poder, pero en un período bastante más amplio, que se extendía desde el ascenso del último gobernador designado por los Habsburgo hasta la fundación de Montevideo. Como la desigual densidad de las fuentes documentales disponibles no acompañó un propósito tan abarcativo, tuvimos que circunscribir nuestra investigación al sector de esa élite para el cual se disponía de material más rico y abundante: los oficiales del cabildo.

A partir de ello, el objetivo de esta investigación fue establecer si el cabildo le brindó a la élite urbana de Buenos Aires la posibilidad de expresar sus intereses de grupo, más allá de que la posesión de un escaño en el ayuntamiento fuera visto por sus integrantes como fuente de prestigio social. Creímos importante preguntarnos si esa élite manipuló desde su plataforma institucional la administración de los recursos locales, en especial las matanzas de ganado cimarrón y el control sobre las ventas de cueros, y desvió las utilidades de su explotación con claros fines sectoriales. Todo ello nos llevó a indagar cuál fue la dinámica de funcionamiento del cabildo, qué peso tuvieron los distintos oficiales concejiles – regidores y otros oficiales venales y electivos– en la toma de decisiones y cuál fue la agenda de asuntos que manejaba esta corporación: de ello nos ocupamos en la primera parte de esta tesis. En una segunda parte de la misma nos abocamos a estudiar a los cabildantes desde un enfoque prosopográfico. Hubo que determinar si hubo rotación entre las familias que ocupaban escaños en el ayuntamiento y dilucidar si los patrones de reclutamiento y las posibilidades de ascenso fueron distintos a los del Buenos Aires virreinal. A partir del origen familiar y geográfico de los oficiales concejiles y de las alianzas matrimoniales que tramaron fue posible reconocer sus estrategias de promoción. El reconocimiento de sus

¹ Carlos M. BIROCCO **Sociedad y política en Buenos Aires durante la Guerra de Sucesión Española (1700-1714)** Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de Luján, 1996.

actividades como comerciantes o productores rurales, por último, nos permitió apreciar cómo evolucionó su perfil socioprofesional a lo largo del período escogido para este estudio.

Nuestra primera tarea fue precisar bien los “bordes” del grupo que nos proponíamos estudiar. ¿Debíamos incluir a todos los que habían recibido un nombramiento de manos de la corporación municipal? ¿O limitarnos a aquellos que tenían derecho a participar de las deliberaciones? En las definiciones en la época, algo imprecisas, la condición de “oficiales” aludía a aquellos que ejercían cargos en el gobierno municipal.² Pero utilizarlas para delimitar el grupo a estudiar lo hubiera reducido a su mínima expresión, ya que podría interpretarse que esa condición sólo la compartían los que tenían voz y voto en los acuerdos –los alcaldes ordinarios, los regidores y algún que otro oficial venal–. El grupo se ampliaba si incluía a todos aquellos que ocuparon puestos en la corporación municipal a través de una ceremonia de posesión o “recibimiento”, independientemente de si se trataba de empleos con capacidad deliberativa. Lo que realmente distinguía a quienes habían de desempeñar un oficio era su investidura, pues ésta los autorizaba a ejercerlo desde el momento mismo de la jura del cargo y los identificaba material y simbólicamente como “servidores del rey”. Por esa razón decidimos adherir a ese criterio de inclusión, en función al cual pudieron ser agregados al conjunto funcionarios menores como los mayordomos del cabildo y los alcaldes de la Hermandad.³

El grupo a estudiar constituía lo que hemos dado en llamar la *dirigencia concejil*, que ejercía diversas funciones vinculadas al gobierno de la ciudad en todo el territorio que se hallaba bajo la jurisdicción de ésta. Teniendo en cuenta que los requisitos básicos de admisión impuestos a los oficiales concejiles eran su pertenencia a la vecindad y el disfrute de una cierta holgura económica, puede aceptarse que todos ellos formaban parte de la oligarquía urbana, aunque su posición dentro de la misma no suponía una homogeneidad de rangos ni la misma disponibilidad de recursos materiales y simbólicos. No cabe duda de que la *dirigencia concejil* era un segmento –pero sólo un

² Al referirse a los oficiales del cabildo, el “Diccionario de Autoridades” explica que “en la Republica son los que tienen cargo del gobierno de ella, como Alcaldes, Regidores, &c.”. **Diccionario de la Lengua Castellana... dedicado al Rey Nuestro Señor Don Phelipe V** Madrid, Imprenta de la Real Academia Española, 1737, Tomo IV.

³ No hay duda de que los alcaldes de la Hermandad y los mayordomos del cabildo, que eran objeto de elección por parte del cuerpo y de una ceremonia solemne de recepción, ejercían un *officium*, es decir, un servicio al monarca. No sucedió lo mismo con los administradores del Hospital de San Martín o los porteros del cabildo, que eran meros empleados del ayuntamiento, cuyo nombramiento carecía de requerimientos ceremoniales.

segmento— de una élite de poder que, por tratarse de una ciudad que era cabecera de una gobernación, abarcaba también a la cúpula eclesiástica y a otros funcionarios de la monarquía, como los oficiales de la Real Hacienda y los cuadros superiores de la oficialidad de la guarnición. Asimismo tuvo cabida en ella un sector de configuración más informal, ya que carecía de un encuadre institucional, pero no poco influyente: el de los miembros de las camarillas que rodeaban a los gobernadores.

La tarea siguiente fue establecer una delimitación temporal. Una importante cuestión a determinar era cómo había afrontado la dirigencia concejil porteña el período de recambio dinástico. Una época que se caracterizó, en el campo de las relaciones internacionales, por el fin del expansionismo francés en el centro de Europa (derrota de la flota francesa en La Hogue, 1692), el cese de las hostilidades entre Francia y España en Flandes y el Caribe (Paz de Ryswick, 1697), la ascensión de Felipe V al trono de la monarquía hispánica (1700) y la sucesión de conflictos bélicos que se desataron a partir de su coronación (la guerra de sucesión en 1700-1714 y las guerras en Italia en 1717-1720). Este estado de recurrente enfrentamiento bélico impidió al primero de los Borbones llevar a cabo hasta bastante tardíamente las muchas innovaciones y reformas que se propuso desde su entronización.⁴ Por tal razón, se trata de una etapa en que la estructura del aparato de dominación fue objeto de escasas modificaciones.

La especificidad del período que hemos elegido también puede justificarse a escala regional. Gracias a acuerdos firmados por Felipe V, se radicaron en Buenos Aires dos consorcios extranjeros, primero la *Compagnie de Guinée* (1701-1714) y luego la *South Sea Company* (1714-1726), ambos vinculados al tráfico negrero. Se trata del único momento (con la excepción del trienio en que el Asiento inglés sufrió su primera confiscación, entre 1719-1721) en que las potencias europeas estuvieron representadas en forma permanente en este puerto y emprendieron el comercio directo apoyándose en un marco de licitud. No por esto cesó la afluencia de navíos de registro desde Cádiz, a no ser durante algunos años de la Guerra de Sucesión. Tampoco significó que una parte de los intercambios con los europeos dejara de canalizarse a través del contrabando, sino que por el contrario estos se intensificaron desde que franceses e ingleses contaron con una base territorial propia en el Río de la Plata.

⁴ La imposibilidad de Felipe V de llevar su plan de reformas a cabo ha sido comentado por Luis NAVARRO GARCIA “Los oficios vendibles en Nueva España durante la Guerra de Sucesión” en *Anuario de Estudios Americanos* Sevilla, 1975, XXXII.

Gracias a la internación de ganado vacuno y mular, de manufacturas europeas y de partidas de esclavos, los porteños habrían de consolidar los vínculos comerciales que ya poseían con el Tucumán y el Alto Perú. Se acrecentó la polaridad que ejercía el puerto de Buenos Aires sobre las regiones meridionales del virreinato del Perú, pues esas transacciones le permitieron reafirmar su posición dentro del circuito de la plata potosina y de otros circuitos secundarios, como fueron el del tráfico yerbatero entre el Paraguay y las provincias altoperuanas. Pero esto ocurría cuando aún no habían sido desmanteladas las estructuras monopólicas tradicionales del imperio español: los flujos hacia la metrópoli seguían siendo vehiculizados por el sistema de flotas y galeones, mientras que los navíos de permiso jugaban un papel aún secundario en un esquema de intercambios excesivamente centralizado, en el que la ciudad de Lima era aún el indisputado epicentro burocrático-mercantil del *espacio peruano*. Lejos de desarticular dicho sistema, Felipe V lo respaldó a través de los reglamentos de flotas de 1720 y 1725, supervisados por su secretario Joseph Patiño.

Otra constante, a escala regional, fue el vínculo conflictivo que sostuvieron las autoridades locales con los portugueses en la Banda Oriental. La Colonia del Sacramento, que desde su fundación se convirtió en un bastión del comercio directo entre los mercaderes porteños y sus pares de Río de Janeiro, fue asediada y conquistada por las tropas regulares y las milicias de Buenos Aires y Córdoba y por un ejército auxiliar de varios miles de guaraníes. Esta pequeña ciudad fue desmantelada por los españoles entre 1705 y 1716, hasta que Portugal recobró el enclave por vía diplomática. La devolución fue vista con recelo, pues al agotarse las reservas de ganado cimarrón en las praderas pampeanas, los vaqueadores porteños pasaron a explotar el que pastaba en territorio oriental. En 1724, las tentativas lusitanas de establecer una nueva población en la bahía de Montevideo movieron al gobernador Bruno Mauricio de Zavala a conducir a las milicias de Buenos Aires para desalojarlos. Dos años más tarde fundaría allí una nueva ciudad, con cuyos vecinos deberían los porteños compartir los recursos pecuarios de la Banda Oriental.

Un tercer paso fue hacer algunas precisiones respecto a la terminología que se utilizaría en esta tesis. Para analizar la sociedad porteña hemos preferido los términos “élite de poder” u “oligarquía”, más adecuados en el contexto de una sociedad de tipo estamental, y no el de “clase dirigente”. Suscribimos lo afirmado por Bottomore, que establece diferencias entre las “élites gobernantes”, minorías organizadas frente a una mayoría desorganizada, y las “clases dirigentes”, cuya existencia supone la de otras

clases sometidas pero organizadas para oponérseles. Las primeras se distinguen por el solo hecho de ocupar posiciones de poder, mientras que las segundas implican el reconocimiento de intereses económicos concretos y de un compromiso permanente en su conflicto con otras clases, promoviendo el surgimiento de una conciencia de pertenencia y una solidaridad entre sus integrantes.⁵ No pretendemos decir con esto que la élite porteña careciera de cohesión para actuar en forma solidaria desde su plataforma institucional, el cabildo, con el fin de controlar a los estratos subalternos, sino sólo notar que coexistieron con otras estrategias para encuadrarlos bajo su dominio, como la formación de tramas verticales a través del clientelazgo.⁶ La estratificación social en Hispanoamérica colonial no sólo es explicable en términos de conflictividad social, sino que remite a un complejo entramado de relaciones verticales y horizontales, activado a través de deberes recíprocos de solidaridad y patronato.⁷

Élites y poder local: un breve balance

En las sociedades del Antiguo Régimen, los grupos dirigentes estuvieron compuestos por aquellos sectores que intervinieron en el proceso de construcción del poder monárquico movidos por un interés propio.⁸ En la monarquía hispánica, esa alianza garantizó la articulación territorial del imperio y el funcionamiento efectivo de las instituciones.⁹ En tal contexto, la práctica política presuponía una compleja interacción entre la corona, las entidades corporativas y dichos grupos, cuya lealtad al soberano no estaba exenta de cuestionamientos ni de situaciones conflictivas motivadas por la

⁵ Tom BOTTOMORE **Elites y sociedad** Talasa, Madrid, 1995, Pág. 38-39. Coincidimos con Burke en que es más explícito y se presta a menos inequívocos hablar de “intereses de clase”, en vez de solidaridad de clase o conciencia de clase; Peter BURKE **Historia y teoría social** Instituto Mora, México, 1997, Pág. 75.

⁶ Con relación a esta conflictividad relativamente limitada que se observa en el ámbito rioplatense, se ha afirmado que las luchas intra-oligárquicas de la élite pudieron llevarse a cabo gracias a que no hubo un asedio político-ideológico desde la base social, inversamente a lo que sucedió en el mundo andino. Tal es la posición de Carlos Real de Asúa, citada por Eduardo SAGUIER “Transformaciones del Estado colonial. Un balance de la cuestión rioplatense” en **Iberoamericana. Nordic Journal of Latin American Studies** Estocolmo, 1991, XXI: 1-2, Pág. 5.

⁷ Richard BOYER “Clientelismo y trabajadores en el México colonial. Algunos efectos en la vida privada” en Pilar GONZALBO AIZPURU y Cecilia RABELL ROMERO (coord.) **Familia y vida privada en la Historia de Iberoamérica** El Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma, México, 1996, Pág. 389.

⁸ Wolfgang REINHARD “Las élites del poder, los funcionarios del Estado, las clases gobernantes y el crecimiento del poder del Estado” en Wolfgang REINHARD (comp.) **Las élites del poder y la construcción del Estado** FCE, México, 1997, Págs. 20-24.

⁹ Existe una extensa bibliografía sobre los vínculos entre las élites y la monarquía hispánica, que se encontrará en José María IMÍZCOZ BEUNZA y Oihane OLIVERI KORTA (eds.) **Economía doméstica y redes sociales en el Antiguo Régimen** Madrid, Sílex, 2010, Págs. 16-21.

presión fiscal y por el peso de las necesidades defensivas.¹⁰ Frente al avance de la monarquía, las élites se parapetaron en un denso sistema de redes relacionales, proyectadas tanto a su interior como al exterior, cuya eficacia les permitían gestionar beneficios y proceder a la distribución del poder entre sus miembros. Sus fluidas conexiones con el centro del sistema, como observa Giovanni Muto, les permitía monitorear el curso entero de la decisión política y, en el caso de que se interpusiesen obstáculos en la consecución de sus objetivos, tanto a nivel institucional como en los espacios sociales, mostrarse capaces de eliminarlos. Esas facultades se completaban con la posesión de recursos materiales y simbólicos, que quedaba puesta al servicio de la obtención de oficios públicos, concesiones honoríficas y prebendas económicas.¹¹

Los territorios americanos de la monarquía hispánica no contaban con la presencia física del soberano, que residía a enormes distancias.¹² Esa falta de contacto con el monarca, suplida en el plano simbólico por el aparato ceremonial, obligó a éste a hacerse representar por un conjunto de funcionarios de alto rango, a quienes delegó la principal función del “oficio” regio, que era la de garantizar la continuidad del ordenamiento jurídico y el respeto a los privilegios de oligarquías y corporaciones. Pero en mayor grado que en sus posesiones europeas, España se mostró en el Nuevo Mundo como una monarquía administrativa, que privilegiaba las necesidades financieras y militares de sus soberanos y excluía a las oligarquías locales de las decisiones políticas trascendentales.¹³ El único espacio de poder con el que la corona evitó inmiscuirse fue el que ofrecía a éstas el gobierno de las ciudades, que de acuerdo con la tradición implantada en la península y reproducida en los territorios americanos quedó reservado a los patriciados urbanos.

Obviamente –y volvemos a su capacidad de infiltrarse en todos los tramos del proceso de decisión política– las oligarquías americanas intentaron burlar las pretensiones de la corona de marginarlas. Con excepción de cargos provistos en Madrid como los de

¹⁰ Xavier GIL PUJOL “Integrar un mundo. Dinámicas de agregación y de cohesión en la Monarquía de España” en Oscar MAZÍN y José Javier RUIZ IBAÑEZ **Las Indias Occidentales. Procesos de incorporación a las Monarquías Ibéricas (siglos XVI a XVIII)** México DF, El Colegio de México-Red Columnaria, 2012, Pág. 85.

¹¹ Giovanni MUTO “La nobleza napolitana en el contexto de la Monarquía Hispánica: Algunos planteamientos” en Bartolomé YUN CASALILLA **Las redes del imperio: élites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714** Marcial Pons, Madrid, 2009, Págs. 144-145

¹² Jean-Frédéric SCHAUB “Sobre el concepto de Estado” en **Historia Contemporánea** Universidad del País Vasco, 2004, N° 28, Pág. 50-51.

¹³ Annick LEMPÉRIÈRE “La representación política del Imperio español a finales del Antiguo Régimen” en Marco BELLINGERI **Dinámicas de Antiguo Régimen y orden constitucional: representación, justicia y administración en Iberoamérica, siglos XVIII-XIX** Otto Editore, Turín, 2000, Págs. 55-56.

virrey o gobernador de una provincia, supieron aprovechar las debilidades financieras de la monarquía y valerse de la venalidad para acceder a magistraturas con atribuciones político-judiciales, como las de las Audiencias, o para participar en el manejo de las finanzas locales, apoderándose de puestos clave en la tesorería de la Real Hacienda o en las casas de acuñación de moneda. La corona identificó esa infiltración con la corrupción administrativa, pues los adquirentes de esos empleos se reembolsaron mediante el cohecho lo que habían invertido en comprarlos, e intentó sustraer a los criollos de los puestos de responsabilidad. Su rechazo se manifestó crudamente en una real cédula de 1662 que negaba a los descendientes de los conquistadores todo acceso a los oficios administrativos.¹⁴ Pero el éxito que tuvo esta disposición fue escaso. Las necesidades del erario real se impusieron sobre estas restricciones y entre 1680 y 1750 los criollos se adueñaron de una porción sustancial de esas magistraturas. Kicza sostiene que se retiraron entonces de los cabildos, pues los oficios concejiles no eran tan redituables, pero nosotros creemos que estos generaron un interés distinto, al convertirse en una suerte de trampolín hacia otros empleos más lucrativos o que brindaban mayores posibilidades de figuración social.¹⁵

La conformación de las élites en la América española se convirtió en una temática que ocupó un lugar central en debate historiográfico de las últimas décadas.¹⁶ Detrás de la pluralidad de criterios que se han esgrimido para indicar la pertenencia de individuos o linajes a los sectores elitistas se esconde la escasez de indicadores fiables. Al analizarse

¹⁴ Michel BERTRAND **Grandezas y miserias del oficio. Los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España, siglos XVII y XVIII** Fondo de Cultura Económica-El Colegio de Michoacán, México DF, 2011, Págs. 28-29.

¹⁵ John KICZA “Formación, identidad y estabilidad dentro de la élite colonial mexicana en los siglos XVI y XVII” en Christian BÜSCHGES y Bernd SCHRÖTER (eds.) **Beneméritos, aristócratas y empresarios: identidades y estructuras sociales de las capas altas urbanas en América hispánica** Frankfurt, Vervuert Verlagsgesellschaft, 1999, Pág. 27.

¹⁶ Se han publicado algunos balances y compilaciones bibliográficas sobre estos debates, entre los que destacamos: Frédérique LANGUE “Las élites en América española, actitudes y mentalidades” en **Boletín americanista**, Universidad de Barcelona, 1992, Vol. 42, Págs. 123-139; Manuela Cristina GARCIA BERNAL “Las élites capitulares indianas y sus mecanismos de poder en el siglo XVII” en **Anuario de Estudios Americanos**, Sevilla, 2000, LVII: 1, Págs. 89-110; Frédérique LANGUE “Las élites en América colonial (siglos XVI-XIX). Recopilación bibliográfica” en **Anuario de Estudios Americanos**, Sevilla, 1997, LIV: 1, Págs. 199-228; Christian BÜSCHGES y Bernd SCHRÖTER “Las capas altas urbanas en la América hispánica colonial. Reflexiones sobre un tema y una conferencia” en Christian BÜSCHGES y Bernd SCHRÖTER **Beneméritos, aristócratas y empresarios...** Págs. 299-315; Christian BÜSCHGES “Las élites de la América española, ¿del éxito historiográfico al callejón interpretativo? Reconsideraciones” en Christian BÜSCHGES y Frédérique LANGUE (coords.) **Excluír para ser, Procesos identitarios y fronteras sociales en la América Hispánica (XVII-XVIII)**, Frankfurt, Vervuert Verlagsgesellschaft, 2005, Págs. 9-22; Luis NAVARRO GARCIA (coord.) **Élites urbanas en Hispanoamérica (De la conquista a la independencia)** Universidad de Sevilla, 2005; Pilar PONCE LEIVA y Arrigo AMADORI “Historiografía sobre élites en la América hispana, 1992-2005” en **Chronica nova. Revista de historia moderna de la Universidad de Granada**, 2006, N° 32, Págs. 21-50.

la composición de las élites de la Hispanoamérica colonial, el parámetro más utilizado ha sido la variable económica. Pero circunscribirnos a la riqueza significaría ignorar toda una serie de restricciones propias de una sociedad estamental, que trababan el ascenso individual y dificultaban la promoción de aquel que no fuese tenido por *español*, aun cuando tuviera chances de destacarse económicamente. Nos encontramos frente a un cuerpo social que tendía a ser estático, en que la promoción de un individuo por mero enriquecimiento se hallaba sujeta a la aceptación de la élite establecida: a menudo no bastaba una vida para lograr ser admitido por ésta, mientras que las posibilidades de ascenso intergeneracional eran relativamente mejores.¹⁷ Existían, no obstante, mecanismos de incorporación que permitían acelerar este proceso, como lo fue el matrimonio, gracias al cual los criollos provenientes de estratos sociales más bajos o los peninsulares recientemente llegados de la metrópoli podían insertarse en las familias más tradicionales y disfrutar de la respetabilidad de que gozaban éstas, aunque a cambio de subordinarse a sus intereses.

De todos modos, es indudable que la riqueza (en palabras de Ganster, el *requisito aristocrático universal*) constituía en la América española el ingrediente imprescindible para la preservación del status social.¹⁸ Aunque no resultaba meritatoria de por sí, permitía a un individuo emprender la búsqueda de honores, puestos y conexiones personales que respaldaran sus aspiraciones y las de sus familiares a ocupar a un lugar en los círculos elitistas. De esa manera, Kicza, Mörner y otros autores coinciden en que la riqueza conducía al poder y al status, y estos incrementaban a su vez las chances de enriquecimiento, una cadena que les permitía mantener su posición en la cumbre de la sociedad.¹⁹

Las principales familias de cualquier ciudad hispanoamericana, independientemente de que se tratara de una cabecera virreinal como Lima o de una ciudad periférica como lo era Buenos Aires, no sólo ambicionaban acceder a la riqueza sino también al poder y

¹⁷ Magnus MÖRNER "Economic Factors and Stratifications in Colonial Spanish America with special Regards to Elites" en **Hispanic American Historical Review** 63:2, mayo de 1983, Pág. 356.

¹⁸ Paul GANSTER "Miembros de los Cabildos eclesiásticos y sus familias en Lima y la ciudad de México en el siglo XVIII" en **Familias novohispanas, siglos XVI al XIX** Seminario de historia de la familia del Centro de Estudios Históricos, México, 1991, Págs. 149-162.

¹⁹ John E. KICZA **Empresarios coloniales. Familias y negocios en la ciudad de México durante los Borbones** Fondo de Cultura Económica, México, 1986, Págs. 27-49; Magnus MÖRNER "Economic Factors and Stratifications...", Pág. 356-357. Con relación a la Europa del Antiguo Régimen, es interesante constatar la misma preocupación en Burke, quien encuentra que en Venecia el poder y la riqueza tendían a seguirse del rango, definido formal y rígidamente, mientras que en Ámsterdam el rango, cuya definición era informal, era la consecuencia de la riqueza y el poder; Peter BURKE **Venecia y Ámsterdam...** Gedisa, Barcelona, 1996 Pág. 42.

los honores, aquello que Fred Bronner denomina acertadamente el *triple atributo de la élite*.²⁰ A causa de ello, al distinguir y caracterizar a los miembros de la élite novohispana, Brading cruzó indicadores de poder económico y político, midiendo en este último caso la pertenencia a instituciones corporativas como los ayuntamientos, las agremiaciones mercantiles y mineras y, en menor medida, la milicia.²¹ En coincidencia con éste, Frédérique Langue ha afirmado que los elementos comunes de las élites sociales americanas, caracterizadas por su pluralidad constitutiva, se resumían en dos: el nivel de riqueza y el ejercicio del poder.²² Este último se fundaba en la detentación de cargos que, al ser considerados un servicio a la corona, no siempre eran rentables, o por lo menos no aportaban ingresos comparables a otras actividades, como el comercio o la minería, pero brindaban un alto prestigio social y acrecentaban la reputación de quienes los ejercían y de sus familias.²³

Naturalmente, al carecer de requisitos nobiliarios de admisión de carácter estricto que les permitieran cristalizarse, esas élites estaban sometidas a un reciclamiento periódico de sus integrantes. En todas las regiones de Hispanoamérica las familias de notables surgidas de la conquista (los *vecinos conquistadores* o *beneméritos*) evidenciaron tarde o temprano signos de declinación y se mostraron relativamente permeables a emparentarse con individuos ligados al comercio o a la burocracia que se afincaron con posterioridad en esas regiones. A la larga, los linajes de *beneméritos* debieron cederle los espacios de poder a nuevos actores sociales, pero mientras que en algunas partes resultaron rápidamente desplazadas, en otras consiguieron retener los cargos en los cabildos a pesar de haber perdido su predominio económico.

Las causas de esta evolución divergente estuvieron ligadas al dinamismo de las relaciones comerciales entre las diversas regiones y la metrópoli. En Lima, durante el primer tercio del siglo XVII los encomenderos, descendientes de los conquistadores, fueron desplazados de los cargos concejiles por comerciantes emigrados de la península y ligados al tráfico con Cádiz por medio del sistema de flotas y galeones, quienes se mostraron ávidos de ocupar empleos que realzaran su recién adquirido prestigio social.²⁴

²⁰ Fred BRONNER "Urban Society and Stratification in Colonial Spanish America: Research Trends" en **Latin American Research Review** 21:1, 1986, Pág. 35.

²¹ David BRADING **Mineros y comerciantes del México borbónico (1763-1810)** Fondo de Cultura Económica, México, 1985, Pág. 403.

²² Frédérique LANGUE "Las élites en América española, actitudes y mentalidades" en **Boletín Americanista** Universidad de Barcelona, 1993, año XXXIII, N° 42-43, Págs. 123-139.

²³ Christian BÜSCHGES y Bernd SCHRÖTER "Las capas altas urbanas..." Págs. 310-311.

²⁴ Guillermo LOHMANN VILLENA **Los regidores perpetuos del Cabildo de Lima (1535-1821). Crónica y estudio de un grupo de gestión** Diputación Provincial de Sevilla, 1983, tomo I, Pág. 223.

En la ciudad de México, que también sostenía vínculos económicos privilegiados con España, los descendientes de los conquistadores fueron rápidamente excluidos de la dirección política. Se presenció allí el ascenso de un nuevo grupo dominante, que obtuvo sus riquezas de la explotación de minas o haciendas, de los cargos burocráticos o del comercio, y reemplazó a los linajes más antiguos gracias a los negocios florecientes, los matrimonios ventajosos o los favores reales. En el terreno político, se suscitó una competencia en el interior de la élite que trajo consigo el inevitable corrimiento de los linajes nacidos de la conquista.²⁵

No obstante, el interés de la oligarquía mexicana por los empleos concejiles decayó. En su estudio sobre el cabildo mexicano del siglo XVII, Luisa Pazos explica que las principales familias aspiraron a otros cargos que les ofrecían mayores chances de poder y de enriquecimiento, como los de la burocracia virreinal. Otros grupos de menor prestigio, fundamentalmente los comerciantes más recientemente afincados, aprovecharon la oportunidad para ocupar las regidurías y otros cargos del cabildo, como un paso previo para luego ir también en busca de otros más provechosos. Pero Pazos también lo atribuye a la creciente intromisión de los virreyes en los asuntos municipales y a su enfrentamiento con el ayuntamiento. Un ejemplo de ello lo encontramos en las dificultosas relaciones que esta corporación mantuvo con el Marqués de Gelves por motivos ceremoniales. Este virrey prohibió las ceremonias civiles porque insumían crecidos gastos, incluso la de su propio recibimiento, y luego castigó con la cárcel a los regidores por haber abandonado estos la catedral durante una misa en honor a la Virgen de la Candelaria, ofendidos a causa de que no se les otorgaron los asientos que habían ocupado tradicionalmente.²⁶

A lo largo del siglo XVII, en las regiones del virreinato del Perú que aún contaban con grandes grupos de aborígenes encomendados, los grupos elitistas originarios se conservaron durante más tiempo en el ejercicio de sus prerrogativas. En la ciudad de Quito, las antiguas familias de conquistadores perdieron hacia mediados de ese siglo sus encomiendas, pero continuaron monopolizando los cargos concejiles hasta por lo menos

²⁵ Esta competencia en el interior de la élite (*intra-elite competition*) condujo, no obstante, a una afirmación de la identidad del sector de las antiguas familias “criollas”, a las que los peninsulares afincados en Nueva España calificaban de poco emprendedoras, racialmente impuras o intelectualmente pobres; Luisa Schell HOBBERMAN **Mexico's merchant elite, 1590-1660: silver, state and society** Duke University Press, Durham, 1991, Págs. 8-9

²⁶ María Luisa PAZOS PAZOS **El ayuntamiento de la ciudad de México en el siglo XVII: continuidad institucional y cambio social** Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Diputación, 1999.

principios del siglo siguiente.²⁷ Una experiencia parecida tuvo la ciudad chilena de La Serena, donde las primeras familias ligadas a la extracción y fundición del cobre y a la explotación agrícola con utilización de indígenas encomendados fueron despojadas progresivamente de esa fuente de mano de obra y resignaron la conducción de la economía lugareña a nuevos sectores, pero no abandonaron sus puestos en el ayuntamiento local.²⁸ En la vertiente transandina del reino de Chile, las antiguas familias de encomenderos de Mendoza y San Juan también mantenían a fines del siglo XVII su predominio en los cabildos locales.²⁹

Lo mismo sucedió durante ese siglo en distintas regiones del virreinato de Nueva España. En Guatemala, los mercaderes avecindados más recientemente integraron los cuadros concejiles, pero durante décadas no lograron despojar a los encomenderos, que descendían de los conquistadores, de por lo menos la mitad de los asientos en el ayuntamiento.³⁰ También en Costa Rica, donde un puñado de parentelas monopolizaba los empleos concejiles, ya no era necesario ser encomendero para aspirar a ocuparlos, pero la posesión de encomiendas sirvió como parámetro para determinar la pertenencia de los individuos a la elite dirigente, al ser un signo externo de prestigio y posición social que actuaba como criterio de ennoblecimiento.³¹ Todavía entre 1700 y 1725 en Mérida, capital de Yucatán, predominaba en el cabildo un reducido grupo de familias con una fuerte tendencia endogámica, la mayor parte de los cuales combinaba la posesión de encomiendas de indios y haciendas ganaderas.³² El corrimiento final de los linajes de conquistadores, encomenderos y *beneméritos* de sus posiciones de poder se debería más a la fusión que al marginamiento. Al comenzar al siglo XVIII, en casi todas partes estos se habían mezclado con peninsulares que arribaron más recientemente, aportando estas uniones cohesión al estrato dominante. Ese ensamblaje entre antiguos linajes dotados de prestigio e individuos sin antecedentes familiares pero dotados de sagacidad para los negocios les permitió sobrellevar la falta de estabilidad estructural

²⁷ Javier de la TABLA DUCASSE **Los encomenderos de Quito: origen y evolución de una élite colonial** Escuela de Estudios Americanos, Sevilla, 1993, Págs. 131 y ss.

²⁸ Eduardo CAVIERES **La Serena en el siglo XVIII. Las dimensiones del poder local en una sociedad regional** Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 1993, Págs. 19 y ss.

²⁹ Eduardo SAGUIER “El parentesco como mecanismo de consolidación política de un patriciado colonial. El caso de las provincias rioplatenses del virreinato peruano (1700-1776)” en **Estudios de historia social y económica de América** Alcalá de Henares, 1993, N° 10, Pág. 70 y ss.

³⁰ José de la PEÑA y María Teresa LOPEZ DIAZ “Comercio y poder. Los mercaderes y el cabildo de Guatemala, 1592-1623” en **Historia Mexicana** El Colegio de México, 1981, N° 120, Pág. 496.

³¹ Eduardo MADRIGAL MUÑOZ “La élite colonial de Costa Rica de cara a las instituciones de poder monárquico, 1600-1718” en *Revista Reflexiones*, Universidad de Costa Rica, 2007, Vol. 86, N° 2.

³² Victoria GONZÁLEZ MUÑOZ y Ana Isabel MARTÍNEZ ORTEGA **Cabildos y elites capitulares en Yucatán (dos estudios)** Escuela de estudios hispano-americanos, Sevilla, 1989, Págs. 165-199.

que fue común a la mayor parte de las oligarquías americanas, ya que la continuidad generacional en la posesión de riquezas y prestigio casi siempre se veía afectada más allá de la segunda generación.³³

A medida que avanzaba el siglo XVIII, las élites criollas se enfrentarían a un nuevo flujo de migrantes, ligado a las reformas económicas y administrativas que impusieron los Borbones. Su posición hostil frente a los burócratas y comerciantes peninsulares se exacerbó, llegando esa tensión a su pico máximo entre 1780 y 1808. Pero la aversión de los criollos contra los mercaderes vascos, catalanes, gallegos y astures que se afincaron tras las medidas de liberalización del comercio y se presentaron como competidores agresivos, lo mismo que la antipatía que generó la arrogancia de los funcionarios de la nueva dinastía, no se manifestó de igual manera en todas partes, y tampoco excluyeron la eventual integración de estos peninsulares a través de las alianzas familiares, tal como venía ocurriendo desde los siglos anteriores.³⁴ Sin embargo, en algunos lugares como el Buenos Aires virreinal, el incremento en el número de peninsulares permitió a estos conformar sus propias redes personales, apoyando en ellas sus negocios y llegando a dominar en ocasiones el cabildo.³⁵

Aunque el lugar destacado que ocuparon las oligarquías criollas del siglo XVIII en la sociedad estamental encontraría apoyatura en su consolidación patrimonial, fueron sus formas distintivas de sociabilidad las que convalidaron esa posición y dinamizaron el funcionamiento interno de estos grupos. Por tal razón, algunos autores han postulado como la mejor manera de acercarse a ellas la reconstrucción de las redes de parentesco y de amistad, de los clanes y de las facciones políticas. Partiendo de esos presupuestos, Fredèrique Langue analizó la conformación de la élite criolla de Caracas entre 1750 y 1810. El propósito de esta autora fue indagar cuáles fueron las raíces del fuerte antagonismo que enfrentó a los “mantuanos” o criollos con los peninsulares en el seno del cabildo de esa ciudad, generando una tensión tal que el mismo monarca tuvo que prestarse a mediar entre ellos, ordenando por una real cédula que se alternaran en los cargos concejiles. Sin embargo, esos sectores que rivalizaban en el interior del ayuntamiento actuaron como un bloque cuando combatieron la falta de subordinación

³³ Fredèrique LANGUE “Las élites en América española...”, Pág. 130.

³⁴ El análisis más acabado del antagonismo entre élites criollas y peninsulares durante el siglo XVIII se encontrará en Guillermo CÉSPEDES DEL CASTILLO **América Hispánica (1492-1898)** (Tomo IV de la “Historia de España” dirigida por Manuel TUÑÓN DE LARA) Labor, Barcelona, 1983, Págs. 401-404.

³⁵ Véase este proceso en: Susan SOCOLOW **Los mercaderes del Buenos Aires virreinal: familia y comercio** Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1991; Laura Cristina del VALLE **Los hijos del poder. De la élite capitular a la Revolución de Mayo: Buenos Aires, 1776-1810** Buenos Aires, Prometeo, 2014.

de las castas. También lo hicieron cuando se produjeron conflictos de etiqueta en las ceremonias públicas y les fueron disputados los escaños en la catedral por los miembros de la Real Audiencia.³⁶

Otro ejemplo de los vínculos tensos entre la élite criolla y los peninsulares recientemente establecidos lo encontramos en el reino de Quito. En 1692, en la ciudad quiteña de Popayán, se elevó una petición al Consejo de Indias para dispusiese que se aplicase la “ley de alternativa”, obligando a que criollos y peninsulares se alternaran en las alcaldías ordinarias, para evitar mayores conflictos. En un valioso estudio sobre la élite y los cabildos quiteños (quizás el más notable de que disponemos para un cabildo hispanoamericano) Pilar Ponce Leiva explica que desde que las regidurías y otros empleos municipales pasaron a ser enajenables, la élite criolla de Quito los tuvo bajo su control, y cuando un peninsular se convertía en regidor era por lo general después de haber ingresado en la élite local por vía del matrimonio y encontrado en ella el apoyo económico para apropiarse del cargo. Entre los miembros de la Audiencia de Quito ocurría, según observó, lo contrario: primero obtenían el prestigioso cargo de oidor y después se casaban con mujeres criollas, mientras que en el caso de los cabildantes, era el matrimonio el que propiciaba la ocupación del empleo concejil.

La venta de los oficios concejiles los colocó en manos de unas pocas familias, que se convirtieron en auténticos clanes y monopolizaron el gobierno local, pero ello no impidió que existiera un contingente flotante de individuos que periódicamente renovaba la composición del cabildo, a veces desequilibrando alianzas y otras reforzando las ya existentes. Ponce Leiva intentó desentrañar en qué actividades se sustentaba la élite capitular quiteña para identificar los sectores económicos que la componían y explicar su interés en el poder político. Encontró que un 78% de los cabildantes era dueño de haciendas, mientras que un 31% era poseedor de obrajes textiles y un 36% incursionó en el comercio. Estas cifras muestran que no se trataba de sectores segregados sino parcialmente coincidentes, siendo usual que los cabildantes afrontaran dos o más actividades. Para Leiva, el sector preponderante estaba compuesto

³⁶ LANGUE, Frédérique, “Antagonismos y solidaridades en un cabildo colonial: Caracas, 1750-1810” en **Anuario de Estudios Americanos**, tomo XLIX, 1992, pp. 371-393. Al intentar identificar a las familias de Guatemala consideradas prominentes entre 1640 y 1820, otra autora, Silvia Casasola, decide no recurrir a atributos personales como la riqueza, pues opina que a través de ellos sólo se aglutinaba a los individuos en categorías sin revelar las relaciones entre ellos, y propone en cambio valerse de un atributo relacional como lo era el matrimonio con el fin de determinar qué familias conformaron el núcleo de la élite; Silvia CASASOLA “El núcleo de la élite colonial de Santiago de Guatemala. Un bloque cohesivo” en **Araucaria: Revista Iberoamericana de filosofía, política y humanidades**, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2003, N° 10.

por “terratenientes-empresarios”, pues los propietarios de haciendas eran con frecuencia obreros o comerciantes. Esta ocupacionalidad múltiple se debía a que Quito abastecía de paños a un amplio mercado que se extendía desde el Río de la Plata hasta el Caribe, y los cabildantes buscaron participar en la producción y el comercio de textiles implicando otros recursos de que disponían, como lo eran sus haciendas y encomiendas.³⁷

No en todas partes las rivalidades entre la élite criolla y los peninsulares se suscitaron con la virulencia que tuvieron en Caracas o Popayán. Un caso diferente lo encontramos en Guatemala, donde una reducida élite urbana mantenía bajo su control tanto la actividad mercantil como la propiedad de la tierra. A diferencia de otras cabeceras administrativas del imperio español, en esa ciudad la relación numérica entre criollos y peninsulares era muy desigual, ocupando estos últimos un lugar escasamente significativo. Eso redujo la posibilidad de la competencia intraétnica y facilitó su integración dentro del grupo criollo. Michel Bertrand, que analizó el caso guatemalteco, encontró pruebas de ello en el funcionamiento del cabildo local, donde los mismos grupos familiares prominentes se mantuvieron en el poder a lo largo del siglo XVIII pero aceptando la incorporación episódica de peninsulares, mostrando a la vez una notable estabilidad y una apertura a la renovación de sus cuadros. Esa élite no era especialmente antigua: la mayor parte de esas familias había sido reclutada hacía dos o tres generaciones, pero consiguió suplantarse en el cabildo a los linajes de más antiguo arraigo. Su originalidad consistió, de acuerdo con este autor, en ese equilibrio, que no excluyó rivalidades internas y enfrentamientos facciosos, pero que les permitió mantener el control político sin impedir cierto flujo social ascendente que le permitiera una renovación gradual.³⁸

Siempre en referencia a Guatemala, otro autor, Gustavo Palma Murga, coincide en que la conformación de la élite de poder era relativamente reciente. De noventa y nueve grupos familiares que pasaron por el cabildo entre 1770 y 1821, sólo siete remontaban su presencia en esa ciudad al siglo XVII. En su opinión, existió una concentración de poder y de cargos honoríficos entre un reducido número de familias, en contraposición con un número relativamente alto de personas que accedieron a los cargos concejiles hasta cinco veces en ese medio siglo. Esto último permitiría apreciar la existencia de un

³⁷ Pilar PONCE LEIVA *Certezas ante la incertidumbre: élite y Cabildo de Quito en el siglo XVII* Abya-Yala, Quito, 1998.

³⁸ Michel BERTRAND “Poder, negocios y familia en Guatemala a principios del siglo XIX” en *Historia Mexicana*, El Colegio de México, Vol. 56, Nº 3, 2007, Págs. 863-917.

flujo social que contribuía a la renovación de los grupos dominantes locales. No obstante, los empleos concejiles fueron parcialmente acaparados por los cinco grupos familiares que tuvieron el mayor número de participaciones en el gobierno municipal de Guatemala, con un total de veintiocho miembros ocupando las alcaldías ordinarias, de los cuales dos entroncaban con los linajes más antiguos y tres se habían establecido a mediados del siglo XVIII.³⁹

Lo que queda en evidencia es que el flujo de migrantes desde la península colocó a las élites criollas en una posición de constante reacomodamiento. No se trató de una migración de caracteres homogéneos.⁴⁰ Parte de la misma fue enviada por la corona a cubrir cargos que quedaron vacantes o ejercer relevos: se trató de funcionarios o de militares de alta graduación que vinieron destinados a ocupar lugares de poder y que en ciertos casos, desafiando las prohibiciones legales, tramaron alianzas matrimoniales con las familias de la oligarquía local y les aportaron una cuota de honorabilidad y prestigio. También formaron parte de esa migración selectiva los cargadores de las embarcaciones procedentes de Cádiz y otros puertos españoles, que al radicarse podían resultar igual de atractivos para las élites locales, ya que aportaban riquezas y una red de vínculos al otro lado del Atlántico, aunque no faltaron casos en que se transformaron en sus competidores en los planos económico y político. Pero el grueso de los migrantes lo constituían criados, soldados y marineros desertores, que por sus oportunidades de avecindarse en las ciudades americanas podían aspirar a promocionarse en un mediano plazo y a insertarse socialmente, lo que a la larga podía habilitarlos para competir en esos mismos planos. Se trató de un verdadero “asedio desde abajo”: en la última década del siglo XVII y las primeras del XVIII, Buenos Aires ofrecerá numerosos ejemplos de ello.

La formación de la élite porteña al compás de la economía portuaria

Como otras oligarquías surgidas de la conquista, la élite porteña atravesó por un primer momento nivelador, en que todos los que participaron de ella se igualaron en

³⁹ Gustavo PALMA MURGA “Núcleos de poder local y relaciones familiares en la ciudad de Guatemala a finales del siglo XVIII” en **Mesoamérica** Centro de Investigaciones Regionales, Guatemala, 1986, Vol. 7, Nº 12, Págs. 241-308.

⁴⁰ Respecto de la inmigración a Indias, véase: Isabelo MACÍAS DOMÍNGUEZ **La llamada del Nuevo Mundo. La emigración española a América (1701-1750)** Universidad de Sevilla, 1999. Para una etapa más tardía, puede consultarse: Nadia DE CRISTÓFORIS **Proa al Plata: las migraciones de gallegos y asturianos a Buenos Aires (fines del siglo XVIII y comienzos del XIX)** Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009.

rango, ya que su reputación se fundó en su participación en la gesta fundadora y desdibujó sus antecedentes raciales y familiares, haciendo olvidar unos orígenes que en muchos casos eran mestizos. Las cartas de privilegio y las concesiones de la monarquía llegarían después y otorgarían a sus descendientes reconocimiento y ventajas materiales por proceder de los “vecinos conquistadores”.⁴¹ Este proceso ha sido bien descrito por Darío Barrera en relación con la fundación de Santa Fe, obra también de Juan de Garay. La ciudad recién fundada debía pasar de ser una avanzada de las milicias conquistadoras a erigirse en un centro de administración, convirtiendo a los soldados en vecinos. Para ello, el primer paso era adjudicarles los recursos para poblarse, asignándoles solares en la planta urbana para que levantaran sus moradas y tierras para que sembraran o criaran sus ganados. El avecindamiento de quienes participaron de la gesta conquistadora y el reconocimiento de la jurisdicción territorial de la ciudad –cuyo epicentro era la picota o *rollo de justicia* que se erigía en la Plaza Mayor– eran los requisitos para que ésta iniciara su transformación en un cuerpo político.⁴²

Así ocurrió en Buenos Aires, cuyos “primeros pobladores” –los que bajaron desde Asunción con Garay a fundar la ciudad en 1580 y los que se les agregaron en 1583, acompañando a Alonso de Vera y Aragón “el Tupí”– no dejaron de advertir las escasas posibilidades de enriquecimiento que les ofrecía la región y en parte la abandonaron para probar suerte en otras partes.⁴³ El dominio sobre el extenso territorio que la rodeaba, insuficientemente controlado y escaso en recursos, se impuso con lentitud. El proceso de apropiación del terreno se inició a dos años de la fundación, cuando Garay procedió a repartir *suertes de chacra* y *suertes de estancia* entre sus principales vecinos, dispuestas en una estrecha franja costera que se prolongaba de la bahía de Samborombón al Paraná de las Palmas. Planificó, asimismo, el reparto de indios en encomienda, pero con pocos resultados concretos. El sometimiento de las parcialidades indígenas –querandíes al sur y etnias guaranitizadas al norte– no se iniciaría hasta la segunda década del siglo XVII, en que comenzó a instrumentarse una política de

⁴¹ Véase un caso similar en Bernd SCHRÖTER “Estructuras, prestigio e identidades de la capa social alta en una ciudad portuaria y fronteriza. Montevideo del siglo XVIII a la Independencia” en Christian BÜSCHGES y Bernd SCHRÖTER Beneméritos, aristócratas y empresarios... Págs. 103 y ss.

⁴² Darío BARRERA **Abrir puertas a la tierra. Microanálisis de la construcción de un espacio político. Santa Fe, 1573-1640** Museo Histórico Provincial de Santa Fe, 2013, Págs. 61 y 112-113.

⁴³ La real cédula por la que se otorgó estatus de “primeros pobladores” a los que llegaron Vera y Aragón, más el listado de estos, en: Jorge LIMA GONZÁLEZ BONORINO Y Hernán LUX-WURM **Colección de documentos sobre los conquistadores y pobladores del Río de La Plata** Buenos Aires, Dunken, 2001.

sedentarización que condujo a su asentamiento en poblados.⁴⁴ A medida que éstas fueron reducidas, el proceso de ocupación del suelo se intensificó. En las décadas de 1630 y 1640 se entregaron mercedes de tierras a los vecinos en los pagos de Luján, Areco, Arrecifes y Magdalena, que no habían sido hasta entonces lo suficientemente seguros para que pudieran establecerse en ellos nuevas fincas ganaderas.

Los “vecinos conquistadores” se convirtieron así en modestos propietarios de rodeos de ganados vacuno y equino. Un puñado de ellos recibió, además, grupos reducidos de indios en encomienda, pero por pertenecer estos a etnias cazadoras o recientemente neolitizadas no estaban preparados para brindar excedentes. La incipiente vecindad se resignó a subsistir en el marco de una economía rudimentaria con los escasos recursos que se les habían repartido: suertes de tierras y unos pocos cientos de aborígenes encomendados. En las chacras que bordeaban la ciudad se desarrolló una agricultura que arrojaba algunos sobrantes y que permitió un modestísimo intercambio con las ciudades vecinas. Pero en sus primeras dos décadas de existencia, en aquella pequeña aldea escasearon los productos locales comercializables. Eso habría reducido a los vecinos conquistadores y a sus familias, según observa Jorge Gelman, a una verdadera “economía natural”, con pocos sobrantes disponibles para el intercambio.⁴⁵

No obstante, la situación de esta humilde aldea ribereña estaba destinada a cambiar. Al margen de esas familias fundadoras empezó a conformarse un grupo de comerciantes establecidos más recientemente, atraídos por las inmejorables condiciones que ofrecía el puerto de Buenos Aires para el tráfico atlántico. En los primeros años del siglo XVII se avecindaron en él Juan de Vergara y Mateo Leal de Ayala, bajados desde Potosí, y el portugués Diego de Vega: estos encabezaban un poderoso grupo de mercaderes contrabandistas que fue mejor conocido como “confederados” y que dinamizaría la vida económica de la ciudad a través del tráfico ilegal con el Brasil, el África portuguesa y la Europa atlántica. Sus maniobras fraudulentas son bien conocidas porque motivaron su enfrentamiento con la facción de los “beneméritos” (designación que se dio por su parentesco con los linajes fundadores) y con el gobernador Hernandarias, quien ordenó en 1619 secuestrar los bienes de Vega, Vergara y sus secuaces y los mandó enjuiciar. Los cabecillas, sin embargo, lograron escapar al Tucumán, donde recibieron la

⁴⁴ Carlos M. BIROCCO “Los indígenas de Buenos Aires a comienzos del siglo XVIII: los Reales Pueblos de Indios y la declinación de la encomienda” en **Revista de Indias** Madrid, 2009. Volumen LXIX, N° 247, Págs. 83-104.

⁴⁵ Jorge GELMAN “Economía natural-Economía monetaria. Los grupos dirigentes de Buenos Aires a principios del siglo XVII” en **Anuario de Estudios Americanos**, Sevilla, 1987, XLIV, Págs. 89-107.

protección de los vecinos de esa provincia, interesados en que el tráfico ilícito continuara.

Desde que en 1580 Felipe II agregó a Portugal al conglomerado dinástico ibérico, pasaron a manos de este monarca los dominios coloniales de este reino: sus factorías en la India y la China, la costa del Brasil y las colonias africanas de El Mina, Angola y Cabo Verde. Estas últimas se convertirían en piezas fundamentales en la primitiva vida económica de Buenos Aires. En un principio éste permitió a los porteños comerciar libremente con los puertos brasileños, y en 1591 dio licencia a los portugueses para que estos vendieran en este puerto esclavos procedentes de Angola. Pero no tardó en advertir que por esa brecha se fugaba la plata potosina y en 1594 emitió una real cédula que prohibía a sus habitantes la navegación con otros puertos. Al comenzar el siglo XVII, los porteños presentaron sus reclamos ante su sucesor, Felipe III, y lograron que éste les diera licencia para vender cueros y sebo en el Brasil y el África portuguesa y luego les franqueó el envío de dos barcos de 100 toneladas a Sevilla. Pero a partir de 1619, esos permisos caducaron y los porteños debieron limitarse a aguardar la llegada de navíos de registro desde la península.

Estas restricciones no alteraron el funcionamiento de los circuitos comerciales ya existentes sino que se limitaron a colocarlos en un plano de cuasi-legalidad. El sector de comerciantes nucleado en torno a la facción de los “confederados” recuperó su posición ni bien Hernandarias dejó el gobierno. La plata potosina dinamizó el tráfico con el Brasil y el África portuguesa. Siendo los esclavos el principal rubro de importación (más de 12 mil “piezas” fueron ingresadas en el puerto entre 1606 y 1640, casi todas ellas por fuera de los circuitos permitidos) y los cueros el principal rubro de exportación, hubo apreciable una enorme desproporción entre entradas y salidas que sólo pudo ser salda con el metálico aportado por ese centro minero. Este también les permitió una diversificación de sus inversiones. Los comerciantes exportadores se convirtieron en propietarios de chacras y estancias que compraron a las familias fundadoras o que recibieron en merced y las hicieron servir por planteles de esclavos y por indios que alquilaban a los encomenderos. Lejos de limitarse a jugar el rol de negociantes-contrabandistas, acometieron distintos emprendimientos productivos (el cultivo y la molienda de trigo, la carpintería de carretas, la fabricación de cecina y de harinas) que sostuvieron gracias al uso de mano de obra forzada.⁴⁶

⁴⁶ Jorge GELMAN “Economía natural-Economía monetaria...”

La dinamización de la economía local promovió la rotación de los grupos dirigentes, colocando a los “confederados” en el control de la actividad comercial e impulsándolos a desplazar del poder local a los descendientes de los conquistadores. Gelman observa que durante un primer período que se extendió de 1580 a 1620, el gobierno de la ciudad todavía se mantuvo en manos de los “beneméritos”, hijos y nietos de los conquistadores, pero en una segunda etapa, entre 1620 y 1640, estos serían desplazados por los “confederados”. Los pobladores originarios intentaron impedir su ingreso en el cabildo y en 1604 consiguieron que Felipe III prohibiera a través de una real cédula a los portugueses adquirir regidurías, alguacilazgos y otros oficios vendibles en Buenos Aires, quedando los empleos concejiles reservados a los descendientes de los conquistadores, pero la misma terminó por no ser acatada. La venalidad en Buenos Aires comenzó en 1607, en que se vendió el cargo de alguacil mayor. En la década siguiente serían rematados los oficios de regidor y alguacil mayor, que serían ocupados por Juan de Vergara y sus secuaces.⁴⁷

El interés que demostró este sector emergente por los oficios concejiles se debía a que la corporación administraba las licencias para la captura de ganado cimarrón y el reparto de solares en el ejido de la ciudad, hasta entonces reservadas a las familias *beneméritas*, y otorgaba cartas de vecindad a los portugueses y otros foráneos, permitiéndoles dar un marco de legalidad a sus negocios en la región. Macarena Perusset ha objetado la periodización presentada por Gelman, pues considera que los “confederados” ya habían logrado introducirse en el cabildo con anterioridad a la venta generalizada de los oficios concejiles. Por medio de la presión, la influencia y los sobornos se apropiaron de cargos electivos como el de alcalde ordinario, ocupados a partir de 1614 por sus partidarios. Tres años más tarde Juan de Vergara, uno de los líderes del bando “confederado”, aprovechó su paso por Potosí para comprar seis regidurías y distribuir las entre sus parientes y aliados. Una de ellas la reservó para sí, mientras que las cinco restantes fueron asignadas a su suegro Diego de Trigueros, sus conuñados Juan de Barragán y Tomás Rosendo, el portugués Francisco de Melo, que era su socio en los negocios, y su ahijado Juan Bautista Ángel.⁴⁸

Otra interpretación del problema es la que ofrece Eduardo Saguier. A finales del siglo XVI, los “beneméritos”, a quienes identifica como productores orientados hacia el

⁴⁷ Jorge GELMAN “Cabildo y élite local. El caso de Buenos Aires en el siglo XVII” en **HISLA Revista Latinoamericana de Historia económica y social** N° 6, 1985, Págs. 3-20.

⁴⁸ Macarena PERUSSET VERAS “Élite y comercio en el temprano siglo XVII rioplatense” en **Fronteras de la Historia** Instituto Colombiano de Antropología e Historia, N° 10, 2005, Págs. 285-304.

mercado interno, estaban fuertemente representados en el cabildo porteño. Pero a comienzos del siglo siguiente, los “confederados”, que eran comerciantes orientados hacia el mercado externo, intentaron desplazarlos del control del ayuntamiento. Desde que en 1619 Juan de Vergara, el líder de esa facción, hiciera efectivas las seis regidurías que había rematado en Potosí, los “confederados” habían conseguido darse unidad política. Por el contrario, la facción de los “beneméritos” fracasó en su intento de mantener un frente unido. Saguier responsabiliza a los líderes “confederados” Diego de Vega y Juan de Vergara de haber socavado esa cohesión. Mediante la venta de cientos de esclavos a crédito, estos ensancharon su clientela política, y muchos de los que se endeudaron, aunque provenían de las familias fundadoras, se pasaron a la facción confederada. Este autor ofrece una peculiar pero sugerente conclusión: con el encumbramiento de los comerciantes-contrabandistas, el cabildo pasó “de ser casi una Junta de Encomenderos a ser casi un Consulado de Comercio”.⁴⁹

Las relaciones entre la oligarquía mercantil y los gobernadores oscilaron entre la tolerancia y el enfrentamiento. Aunque Hernandarias combatió a Vega y a Vergara, su éxito fue relativo, ya que sólo consiguió alejarlos de Buenos Aires durante un corto período. Retornarían a la ciudad durante el gobierno de Diego de Góngora, que se sumaría al comercio ilegal y recurriría a los agentes de Diego de Vega en Lisboa para hacerse remitir a Buenos Aires tres embarcaciones cuya carga estaba valuada en 300.000 ducados, pero éstas fueron detenidas en Bahía por orden del Consejo de Indias.⁵⁰ El regidor Juan de Vergara sería perseguido por el sucesor de Góngora, Francisco de Céspedes, debido a que compitió con éste en introducir esclavos de contrabando. En 1627 fue encarcelado, pero el obispo de Buenos Aires, Pedro de Carranza, reclamó que se le devolviera su libertad, alegando que Vergara era *tesorero de la Santa Cruzada* y gozaba de fuero eclesiástico. Una multitud encabezada por el mismo obispo y compuesta por cabildantes, frailes y vecinos acompañados por sus esclavos derribaron la puerta de la cárcel y lo liberaron, al que condujeron luego al palacio episcopal para que no pudiera ser apresado nuevamente.⁵¹

⁴⁹ Eduardo SAGUIER “Political impact of immigration and commercial penetration on intracolonyal struggles: Buenos Aires in the early seventeenth century” en *Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas* Köln, Böhlau Verlag, 1985, N°22, Págs. 43-166.

⁵⁰ Alice PFIFFER DE CANABRAVA *O comercio português no Rio da Prata (1580-1640)* Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Universidad de Sao Paulo, 1944, Págs. 102-108.

⁵¹ José TORRE REVELLO “Los gobernadores de Buenos Aires (1617-1777)” en Ricardo LEVENE (comp.) *Historia de la Nación Argentina* El Ateneo, Buenos Aires, 1961, Vol. III, Pág. 300-302.

El episodio que acabamos de relatar muestra el influjo que la facción “confederada” ejercía sobre el conjunto de la vecindad porteña. Para entonces las antiguas familias fundadoras y los mercaderes más recientemente afincados se habían entreverado gracias a los frecuentes matrimonios. Las familias fundadoras, observa González Levrero, no desdeñaron casar a sus hijas con los negociantes portugueses, pues les permitía tener acceso a sus riquezas y a sus contactos en el exterior.⁵² Pero esas uniones también fueron ventajosas para estos últimos. Cuando en 1643, a raíz de la sublevación del Duque de Braganza en Lisboa, el gobernador Jerónimo Luis de Cabrera se abocó a cumplir la orden de Felipe IV de expulsarlos de Buenos Aires, quienes estaban casados con las nietas de conquistadores interpusieron su condición de vecinos y eludieron la deportación. Cuando se dispuso la expulsión, los principales magistrados y vecinos de la ciudad salieron en defensa de los portugueses, argumentando que no debían ser deportados por su laboriosidad, su lealtad a la corona y los vínculos de parentesco que los unían a los linajes criollos. Para Oscar Trujillo, esta reacción invalida la pertinencia de analizar los enfrentamientos de facciones definidas por su identidad de origen. Las complejas relaciones de parentesco, los intereses políticos comunes y la integración a través de los negocios habían llevado a actuar a la vecindad porteña como un único bloque.⁵³

La rebelión de Portugal provocaría la desarticulación de los circuitos mercantiles. Para Martín Wasserman, que estimó el impacto que tuvo en la economía local, hubo en Buenos Aires un desmoronamiento momentáneo del comercio atlántico, mientras que el tráfico con la costa del Brasil quedó considerablemente obstaculizado. Como respuesta a la crisis, durante un lustro los comerciantes porteños se volcaron a la producción pecuaria y a la conducción de ganado en pie hacia el interior del virreinato. Habría que aguardar hasta 1645 para que se percibiera cierta recuperación en las actividades navales del puerto.⁵⁴ Pero la secesión lusitana traería consigo un cambio de interlocutor en el comercio directo con Europa. Desde que Felipe IV reconociera en Westfalia a los Países Bajos como república soberana, dando fin a una guerra que se había iniciado en

⁵² Rodolfo GONZALEZ LEBRERO **La pequeña aldea. Sociedad y economía en Buenos Aires (1580-1640)** Biblos, Buenos Aires, 2002, Págs. 88-90.

⁵³ Oscar TRUJILLO “Facciones, parentesco y poder: la élite de Buenos Aires y la rebelión de Portugal de 1640” en Bartolomé YUN CASALILLA **Las redes del imperio. Élités sociales en la articulación de la monarquía hispánica, 1492-1714** Universidad Pablo de Olavide-Marcial Pons, Madrid, 2009, Págs. 341-358.

⁵⁴ Martín WASSERMAN **Más allá de las redes: deudas y contratos en Buenos Aires durante el temprano siglo XVII** Tesis de Maestría en Investigación Histórica, Universidad de San Andrés, 2012, Págs. 50 y ss.

el reinado de su abuelo Felipe II, las relaciones entre ambas naciones volvieron a ser cordiales, y entre 1648 y 1667 se produjo la llegada masiva de buques holandeses a Buenos Aires. Aunque tenían prohibido el comercio con los puertos de la América española, un artículo del tratado de paz permitía a las embarcaciones neerlandesas ingresar a ellos por causas accidentales, dándoles el derecho de la *arribada forzosa* cuando se trataba de reparar un desperfecto o de abastecerse para continuar viaje. La ambigüedad de esta cláusula, sumada a la complicidad del aparato burocrático-militar local, les franqueó la entrada al puerto de Buenos Aires y les brindó la posibilidad de negociar con su carga de manufacturas; falsos comisos o remates fingidos sirvieron para encubrir las ventas. Moutoukias calcula que a lo largo de esos años, más de medio centenar de naves procedentes de Amsterdam ingresaron al estuario.⁵⁵ Pero los portugueses nunca desaparecerían del todo del horizonte mercantil de Buenos Aires, y entre 1648 y 1663, por lo menos ocho buques de esa bandera arribaron desde Angola para desembarcar clandestinamente su cargamento de esclavos.⁵⁶ A partir del comercio directo con ambas potencias, el movimiento portuario experimentó un momento de gran actividad entre 1648 y 1687, en que se introdujeron poco menos de 9000 esclavos y se calcula que fueron exportados más de 1.330.000 cueros.⁵⁷

En la segunda mitad del siglo XVII, la enemistad con los portugueses y la posibilidad de que estos avanzaran hacia el Río de la Plata modificó la política de la corona, que reevaluó su vínculo con la oligarquía mercantil porteña. La pérdida del tráfico que ésta sostenía con el Brasil y el África portuguesa fue compensada con una ampliación en su radio de influencia dentro del virreinato del Perú. Durante el reinado de Felipe III, los comerciantes de Lima habían denunciado a los porteños por introducir en el Tucumán y el Alto Perú mercaderías que competían con las que ingresaban por el sistema de flotas y galeones y lograron que en 1623 ese rey colocara una aduana seca en Córdoba, con el fin de entorpecer su conexión con las provincias arribeñas. Pero a partir de 1661 Felipe IV permitió a los mercaderes de Buenos Aires comerciar libremente con el Tucumán y el Paraguay. Esta última disposición se vio reafirmada en 1698, cuando la aduana seca fue mudada de Córdoba a Jujuy. De esta forma, la corona brindó amparo legal al

⁵⁵ Zacarías MOUTOUKIAS **Contrabando y control colonial en el siglo XVII** Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1988, Págs. 98 y ss.

⁵⁶ Rafael VALLADARES RAMIREZ “El Brasil y las Indias españolas durante la sublevación de Portugal (1640-1668)” en **Cuadernos de Historia Moderna**, Universidad Complutense de Madrid, 1993, N° 14, Págs. 162-164.

⁵⁷ Zacarías MOUTOUKIAS “Comercio y producción” en **Nueva Historia de la Nación Argentina** Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1999, Tomo III: “Período Español (1600-1810)”, Págs. 79-80.

circuito comercial que unía Buenos Aires con Salta. En esta última ciudad se celebraba la feria de ganado de mayor envergadura del continente, la feria del valle de Lerma, a la que desde 1660 los porteños no sólo contribuyeron con vacunos en pie sino también con tropas de mulas.

En 1668 España firmó la paz con Portugal y reconoció su independencia, favoreciendo un nuevo acercamiento entre los comerciantes porteños y el Brasil. En 1680 el tráfico con los lusitanos volvería a preponderar luego de que una escuadra proveniente de Río de Janeiro ocupara la orilla oriental del río de la Plata y fundara Colonia do Sacramento, enclave que actuaría como una nueva plataforma para el contrabando.⁵⁸ El avance de los portugueses en la Banda Oriental llevaría a la corona española a reforzar la guarnición de Buenos Aires y a reorganizarla. Entre 1669 y 1699, cinco de los nueve navíos de registro que arribaron de Andalucía transportaban soldados, armas y pertrechos para el fuerte. El año en que se fundó la Colonia, el Presidio de Buenos Aires llegó a concentrar la mayor cantidad de efectivos conocida hasta entonces, que rondó las 900 plazas, aunque la misma descendería levemente en las dos décadas siguientes hasta ubicarse en 850 plazas a finales de ese siglo. El mantenimiento de la guarnición acantonada en el fuerte dependió del sistema de situados, consistente en la transferencia del pago de las tropas desde los centros de acuñación de moneda – en este caso Potosí– a las plazas militares. De modo que la presencia de un número relativamente abultado de efectivos fue sustentada con la plata potosina, que contribuyó a monetarizar la economía porteña, a pesar de que el pago de las tropas distó en mucho de efectuarse con puntualidad.

Una real cédula de Carlos II puso al mando de la guarnición a un comisario militar, el *cabo y gobernador de la caballería del Presidio*, quien quedaría al mando de la defensa de la ciudad en casos de vacancia, cuando el gobernador se ausentase o muriese. La oficialidad que le estaba subordinada ocupaba alrededor del 25% de las plazas existentes. Los sargentos mayores y los capitanes de las compañías de soldados debían mantener un estilo de vida acorde a su rango, pero como sus sueldos llegaban con retraso se vieron obligados a incursionar en el comercio. Los más de ellos abrieron tiendas al menudeo, mientras que unos pocos llegaron a tener participación en el tráfico de largo alcance y llegaron a despachar tropas de carretas cargadas con esclavos y efectos

⁵⁸ Zacarías MOUTOUKIAS *Contrabando y control colonial...* Págs. 126-133.

de Castilla a las provincias arribeñas.⁵⁹ Los militares de graduación incorporarían nueva sangre a la oligarquía urbana. Su posición al mando de la guarnición los colocaba en la cima de un espacio de estratificación horizontal, permitiéndoles gozar de poder, de prestigio y de la lealtad de quienes les estaban subordinados. Al contraer matrimonio con las hijas de las familias establecidas, accedieron a entroncarse con la élite local y consiguieron integrarse a las redes de parentesco.⁶⁰

Al analizar la transformación de la oligarquía local a partir de la incorporación de la alta oficialidad del Presidio, Moutoukias encuentra que tanto ésta como los funcionarios de la Real Hacienda participaban tanto de negocios legales como fraudulentos, al igual que los miembros de las familias en que se insertaban. Examinando el conjunto de las actividades e inversiones de comerciantes, militares de graduación y magistrados, este autor concluye que no existía una diferenciación interna en el seno de la élite dominante. Quienes participaban en el comercio eran a menudo propietarios de fincas rurales y de esclavos. Rechaza, por ende, la idea de que los mercaderes debían necesariamente ser la capa dominante al ser quienes controlaban el excedente producido por los demás estratos sociales y por las regiones subordinadas a Buenos Aires. Este autor prefiere hablar de la existencia de una “élite polivalente que aseguraba su acceso a la riqueza y al poder a través de mecanismos familiares y de formación de grupos de parentesco”.⁶¹

La situación descrita por Moutoukias para la segunda mitad del siglo XVII no difería demasiado de la que hallamos a comienzos del siglo siguiente. La élite porteña siguió evidenciando una alta receptividad selectiva al efectuar sus alianzas, tendencia que se vio acentuada gracias a los frecuentes recambios en la plana mayor del Presidio de la ciudad, cuyos miembros no desdeñaron vincularse a los grupos locales de poder por medio del matrimonio. A este respecto, resulta especialmente sugestiva la visión del problema que aporta Eduardo Saguier, quien considera el debilitamiento de la naturaleza patricéntrica de las élites locales como una consecuencia de la radicación de un número cada vez mayor de peninsulares en el Río de la Plata, quienes aspiraron a

⁵⁹ Carlos M. BIROCCO **La militarización antes de la militarización. El “Presidio” de Buenos Aires y los militares de la guarnición a comienzos del período borbónico** ponencia presentada en las VII Jornadas de Historia y Cultura de América y II Congreso Internacional y II Encuentro de Jóvenes Americanistas “La construcción de las independencias: documentos, actores y representaciones”, Montevideo, 25 y 26 de julio de 2013

⁶⁰ Carlos M. BIROCCO **La militarización antes de la militarización...**; Zacarías MOUTOUKIAS **Contrabando y control colonial...** Págs. 195-197.

⁶¹ Zacarías MOUTOUKIAS **Contrabando y control colonial...** Pág. 202.

formalizar alianzas matrimoniales con los sectores ya establecidos.⁶² En realidad, si se revisan detalladamente las genealogías de las familias prominentes de las primeras décadas del siglo XVIII se hallará que la mayor parte de ellas descendía por línea paterna de los comerciantes lusitanos o los militares de la guarnición, pero entroncaba por línea femenina con los linajes más antiguos de la ciudad. Esto revela que por medio de una política matrimonial que ya llevaba varias décadas, los peninsulares que se fueron afincando en Buenos Aires a lo largo del siglo XVII habían logrado que los escasos beneficios que originariamente estaban reservados a los descendientes de los fundadores (como las encomiendas de indios, las acciones para vaquear y las mercedes de tierras y de solares) circularan en un espacio social más amplio.

¿Quiénes componían la élite porteña a mediados del período que comprende esta tesis? Para un primer acercamiento a ella, nos hemos valido de una lista de quienes contribuyeron en 1707 a un *donativo gracioso* a favor de Felipe V.⁶³ Este monarca, contra lo que había sido su programa original de gobierno, se vio obligado a continuar con la política mendicante de sus predecesores, los Habsburgo, y no sólo vendió cargos, sino que requirió donaciones forzosas a sus súbditos americanos para afrontar los ingentes gastos de la guerra. Puede que el donativo haya encontrado alguna resistencia, pero la ocasión era buena para hacer ostentación de opulencia frente a los pares, de modo que considero que esta fuente puede ser utilizada como un indicador de relativa fiabilidad de quienes componían la élite porteña. Respondieron al llamado del rey 158 personas, entre vecinos y militares del Presidio, de las cuales 105 hicieron entrega de hasta 25 pesos, 33 de 50 pesos y 20 de 100 o más pesos. Interesa sobre todo saber quienes integraban este último grupo, a los que puede identificarse sin temor a error como los poseedores de las mayores fortunas de la ciudad. En más de la mitad de los casos (Luis Pesoa de Figueroa, Joseph de Arregui, Baltasar de Quintana Godoy, Juan Bautista Fernández Parra, Gaspar de Avellaneda, Miguel de Riblos, Antonio Guerreros, Antonio Meléndez de Figueroa, Bernardo de Arzeniega, Domingo de Acasuso y Joseph de Roxas y Acevedo) se trataba de grandes mercaderes vinculados al tráfico interregional; los cuatro primeros eran, además, cabildantes en ejercicio. El resto de estos grandes donantes se componía de dos magistrados de la Real Hacienda, cinco

⁶² Eduardo SAGUIER “La lucha contra el nepotismo en los orígenes de las reformas borbónicas. La endogamia en los cabildos de Salta y Tucumán (1760-1790)” en **Andes. Antropología e Historia** Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Salta, 1992, N°5.

⁶³ Archivo General de Indias [en adelante AGI] Charcas 212, *Relación de las personas en quienes se ha solicitado el donativo mandado por Su Majestad*. Se encontrará un análisis más completo de esta fuente en Carlos M. BIROCCO **Sociedad y política en Buenos Aires...**

integrantes de la alta oficialidad del Presidio y dos grandes hacendados (permítasenos denominarlos provisionalmente así) de los cuales uno, Domingo González Cabezas, se destacó como recogedor de ganado cimarrón y proveedor de cueros al Asiento de la *Compagnie de Guinée*, y el otro, el maestro de campo Juan de Samartín, como criador de mulas a gran escala.

Al efectuar este primer intento de identificación debe admitirse la dificultad de limitarnos al uso de categorías socioprofesionales como las utilizadas, pues la mayor parte de los individuos prominentes que participaba del comercio con las provincias arribeñas regenteaba asimismo alguna tienda en la ciudad, organizaba esporádicamente vaquerías o dirigía en sus estancias la crianza y el acopio de ganado mular. Varios de ellos eran terratenientes: Joseph de Arregui, por ejemplo, era propietario de una chacra en La Matanza, explotada por esclavos e indios encomendados, lo mismo que de siete suertes de estancia en la Magdalena, cuya frontada a las barrancas del Río de la Plata era de 21.000 varas de frente. El general Miguel de Riblos poseía una rinconada de 15 leguas cuadradas en la intersección entre el río Areco y la Cañada Honda, y el maestro de campo Juan de Samartín era dueño de cuatro suertes de estancia en el pago de los Arrecifes; estas grandes propiedades servían como reservorio de yeguas bagualas y para la cría de mulas en gran escala.

Al recurrir a las historias personales de los miembros de la élite se confirma la inserción de los mismos en las actividades más diversas. Un mercader de la talla de Miguel de Riblos, que despachaba todos los años miles de mulas al Perú y recibía carretas cargadas de yerba y ropa de la tierra, era además criador de todo tipo de ganados en sus estancias, mientras que los altos cuadros militares y los oficiales de la Hacienda rara vez estaban excluidos del comercio, e incluso a veces lo emprendían a gran escala.⁶⁴ Más que una ocupación preferente, los círculos elitistas porteños de comienzos del período borbónico parecen haberse caracterizado por una ocupacionalidad múltiple, mientras que a medida que uno va descendiendo en la escala social esta peculiaridad se observa como menos frecuente.

Al cruzar los datos que nos proporciona este elenco de contribuyentes con indicadores de poder, en este caso los cargos electivos del cabildo entre 1700 y 1708, se observa que

⁶⁴ Para el caso de Riblos véase Carlos M. BIROCCO **Comercio de mulas y producción rural: Miguel de Riblos, tratante y hacendado de Buenos Aires (1673-1719)**, presentado en las II Jornadas de Historia Colonial celebradas en el Museo Roca, Buenos Aires, en agosto de 1993; Carlos M. BIROCCO "Historia de un latifundio bonaerense: las estancias de Riblos en Areco, 1713-1813" en **Anuario de Estudios Americanos** Sevilla, 1996, tomo LIII, N° 1.

el grupo que donó más de 100 pesos a la Corona se reservó los asientos más honorables en dicha corporación, y aunque no constituyó más que el 1,3% de los contribuyentes ocupó el 42,9% de los oficios más honrosos como eran los de procurador, defensor de menores o alcalde ordinario de primero y segundo voto. Pero los cargos de menor prestigio, como el de mayordomo o el de alcalde de la Santa Hermandad, parecieron estar reservados a vecinos menos solventes. Aquellos que desembolsaron 50 pesos a favor del rey, que representaban el 20,9% de los donantes, fueron en el 31,4% de los casos titulares de cargos honrosos y en el 21,7% titulares de cargos menores, mientras que los que dieron hasta 25 pesos, que constituían el 66,5% de los donantes, ejercieron el 5,7% de los cargos de mayor honra y el 39,1% de los menos honrosos.

¿Qué motivó, en suma, que la élite porteña tuviera una tasa de circulación relativamente alta? La posición periférica que ocupó Buenos Aires dentro del *espacio peruano* fue, sin dudas, un factor decisivo, pues facilitó un relajamiento en los controles de la monarquía y favoreció la aparición de grandes fortunas surgidas del comercio directo con otras potencias europeas. Si a esto se agrega la exigüidad de la población aborígen encomendada, que privó de un sólido basamento económico a las familias *beneméritas*, puede explicarse que, a escasas décadas de haber sido fundada la ciudad, éstas fueran forzadas a ceder su lugar en el cabildo a esos grandes comerciantes importadores, parte de los cuales eran portugueses. Los nuevos miembros de la élite económica lograron adquirir el dominio de esa corporación cuando las regidurías comenzaron a ser subastadas en la década de 1610. No había motivos para que los *beneméritos* mantuvieran su cohesión por medio de una rigurosa endogamia, pues no eran propietarios de mayorazgos, dignidades nobiliarias u otras prebendas que les aseguraran renta y honra, por lo que se mezclaron con las nuevas familias de notables surgidas durante el siglo XVII. A comienzos del siglo XVIII, las capas superiores se caracterizaban por una memoria genealógica poco profunda, propia de un sector que no basaba su posición privilegiada en la gesta conquistadora ni en los méritos militares, y la suplantaron por una pródiga red de conexiones horizontales, donde la profusa extensión de los lazos de colateralidad compensaba la ausencia de linajes poderosos de antiguo arraigo.

Pero si las familias *beneméritas* no pudieron conservar su lugar en la vecindad se debió, sobre todo, a que carecieron de privilegios económicos que justificaran su segregación. La mencionada escasez de indios encomendados no llegó a ser subsanada con la deportación de poblaciones aborígenes del Tucumán como los quilmes y

acalianes, que fueron puestos bajo la tutela directa de la Corona y sometidos al sistema de la mita.⁶⁵ Las contadas encomiendas que existían en Buenos Aires retornaron a la administración real a partir de 1720, cuando Felipe V dispuso que éstas pasasen ser administradas por la corona.⁶⁶ En cuanto a la propiedad de la tierra, el surgimiento de nuevas formas de apropiación convirtió a la *merced real*, mecanismo de reparto que daba prioridad a los descendientes de los primeros pobladores, en un recurso cada vez menos utilizado, que ya tendía a desaparecer cuando en 1754 entró en vigencia la Real Cédula sobre venta y *composición* de terrenos realengos. Tampoco los linajes más antiguos detentaban desde fines del siglo XVII el monopolio de las *acciones para vaquear*, que en gran parte habían pasado por compra o por dote a familias más recientemente establecidas, y que perdieron toda significación cuando se extinguió el ganado vacuno cimarrón en las pampas, hacia 1725.

Desde finales del siglo XVII, en síntesis, los grupos elitistas de Buenos Aires dejaron atrás las antiguas pautas de inclusión e incorporación a la vecindad y no se vieron en la necesidad de demostrar su pertenencia a los linajes fundadores para obtener prebendas o acceder a las posiciones de poder. No les fue ya necesario recurrir a un conjunto de principios que podríamos llamar “señoriales” para legitimar su liderazgo en el ámbito local, sino que fundaron su primacía en la posesión de riquezas y en la conformación de extensas redes de vínculos personales y clientelares, herramientas de las que también se valieron para dominar los circuitos mercantiles de un área mucho más vasta. Ello les permitió mantener cierta apertura e incorporar a sectores ascendentes, como lo fueron primero los descendientes de portugueses y luego los peninsulares que llegaron a Buenos Aires como soldados.

Al faltar criterios que pudieran convertirse en barreras de acceso a los cargos del cabildo, esos sectores emergentes pudieron ejercer presión e introducirse en la dirigencia concejil, previa alianza con las parentelas ya consolidadas. Esto fue motivo de tensiones. Al convertirse el cabildo en la plataforma institucional de la oligarquía

⁶⁵ Eduardo SAGUIER “Economic impact of indian immigration and commercial capital on the formation of a colonial labor force. The case of Buenos Aires in the early seventeenth century” en **Revista de Historia de América** Instituto Panamericano de Geografía e Historia, México, 1986, n° 101; Miguel Angel PALERMO y Roxana Edith BOIXADÓS “Transformaciones en una comunidad desnaturalizada: los quilmes, del valle calchaquí a Buenos Aires” en **Anuario de IEHS** Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, 1991, N° 6; Carlos María BIROCCO “Los indígenas de Buenos Aires a comienzos del siglo XVIII...” Págs. 83-104.

⁶⁶ En 1720 se dispuso “*se incorporasen a la Corona todas las que se hallasen vacantes y las que vacasen en adelante, anulando todas las mercedes hechas por más vidas que las que de los actuales poseedores*”: Manuel Josef de AYALA **Diccionario de Gobierno y Legislación de Indias** Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 1988, tomo V, Pág. 356.

urbana, las familias dominantes se articularon en facciones que se disputaron el manejo de los asuntos comunales, convirtiéndose la lucha facciosa en una característica remarcable de la vida política del período que estudiaremos.⁶⁷ También enfrentaron a los gobernadores cuando quisieron despojar al cabildo de sus prerrogativas y consiguieron que Felipe V las convalidara entre 1712 y 1716, devolviendo al ayuntamiento facultades que había perdido, como la venta de cueros a los capitanes de navío o el control sobre la explotación del ganado cimarrón a ambas orillas del estuario. La dirigencia concejil porteña sacó provecho del interés de la corona por reanudar los vínculos con las vecindades americanas, que durante la contienda dinástica se habían aflojado.

⁶⁷ Adherimos al concepto de “facciones” utilizado por Paul Monod, quien al contraponerlas con los descontentos populares o la resistencia de los sectores subordinados, las considera “formaciones de élite que actuaban dentro de las estructuras existentes” y que por lo tanto no las cuestionaban explícitamente. Paul MONOD “Estado, nación y monarquía en el siglo XVIII: visión comparativa” en Conrad RUSSELL y José Andrés GALLEGU (Dir.) **Las monarquías del Antiguo Régimen, ¿monarquías compuestas?** Editorial Complutense, 1996, Pág. 25.

BUENOS AIRES EN LA NAVEGACIÓN ATLÁNTICA: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDAD EN EL MARCO DEL RECAMBIO DINÁSTICO

El deterioro del modelo habsbúrgico

“Este vastísimo Imperio Peruano tiene por dotes de la Divina Providencia todo lo mismo que tienen las otras tres partes de la Esfera Terrestre, con algún privilegio más en su abundancia y fertilidad, porque dejando la ponderación que merecen sus frutos, plantas, animales, lanas, sedas, aromas, sólo por la extremada cosecha de todos los metales es el primogénito de la fortuna”.⁶⁸ Así es como veían al virreinato del Perú sus dominadores españoles: una inagotable sucesión de riquezas que la naturaleza había derramado sobre un desmesurado territorio se extendía desde el istmo de Panamá al Río de la Plata, y que la conquista había colocado en forma legítima en manos del monarca castellano para su deleite.⁶⁹ Pero esa exuberancia, que hubiera bastado para convertir al soberano en el más opulento y poderoso de la tierra, en poco había contribuido a su grandeza, ya que la corrupción y la molicie de sus súbditos americanos habían impedido que el grueso de esas riquezas fluyera a sus arcas. Tales eran las razones que esgrimía el autor de la anterior semblanza, procedente de un libelo que circuló en Lima al promediar la primera mitad del siglo XVIII, primero en la forma de manuscrito y luego como impreso, bajo el título de *Estado político del Reino del Perú*.

Al igual que otros escritos de índole *projectista* que se hicieron conocer a lo largo de esa centuria, este libelo exponía las causas de la degradación del sistema administrativo virreinal y reclamaba que se implantaran reformas.⁷⁰ Pero lo hemos escogido como punto de partida por un motivo diferente. El *Estado político del Reino del Perú* presenta

⁶⁸ Hoy día se coincide en atribuir este libelo a Victorino Montero, Marqués de Piedra Blanca. Se encuentra una copia del mismo en AGN BN 7219 *Estado político del Reino del Perú. Gobierno sin leyes, ministros relajados, tesoros con pobreza, fertilidad sin cultivo, sabiduría desestimada, milicia sin honor, ciudades sin amor patrio, la justicia sin templo, hurtos por comercios, integridad tenida por locura, rey el mayor de ricos dominios pobre de tesoros – Año de 1730*.

⁶⁹ Para la noción de riqueza manejada por los castellanos durante la Edad Moderna, consúltese: Beatriz CARCELES DE GEA “Las Indias y el concepto de riqueza en España en el siglo XVII” en Carlos Martínez SHAW y José María OLIVA MELGAR (ed.). **El sistema atlántico español (siglos XVII-XIX)** Marcial Pons Historia, Madrid, 2005.

⁷⁰ Esta y otras características del libelo fueron analizadas por Anne-Marie BRENNOT “L'étude du non pouvoir dans *Estado Político del Reyno del Perú*, V. Montero del Águila, 1742” en **Histoire, économie et société**. 1989, N°2, Págs. 167-197.

un sugerente sistema de representaciones que permite entender cómo era concebida por sus contemporáneos la dinámica económica de la mitad meridional del imperio hispánico. Este inmenso virreinato se hallaba recostado sobre el océano Pacífico, que el autor describía como una “caja cerrada” que pertenecía al monarca español de un polo al otro. Pero debido a la deslealtad de sus súbditos, la hermeticidad de ese *mare clausum* había sido objeto de fisuras, a través de las cuales los metales preciosos escapaban al circuito castellano y alimentaban la codicia de otras potencias europeas. Para dar un nombre a esas brechas, el libelista recurrió a otra metáfora: se las llamó “puertas”. Dos eran las “*puertas relajadas por donde se manejan las entradas de ropas y salidas de tesoros*”: Panamá y el Río de la Plata. Por Panamá, el contrabando con los ingleses y con otras naciones europeas permitía que se fugasen anualmente unos 500.000 pesos en plata. Pero la “puerta” que se abría en el Río de la Plata era considerada “*mayor que la de Panamá, respecto de la opulenta Colonia de los Portugueses, que con ella se atraen todos los caudales del Potosí y todos los de Chile, llegando hasta Lima los géneros más nobles y menos voluminosos*”. El libelista estimaba que por allí salían anualmente 1.100.000 pesos anuales en plata en dirección a Europa.⁷¹

La filtración del metálico por las fronteras porosas del imperio daba por tierra con las pretensiones exclusivistas del soberano español. Pero no sólo existían “puertas” en las fronteras marítimas, sino también “puertas” interiores. Estas últimas eran las que permitían eludir los dispositivos de control interno: aunque la normativa castellana prohibía el tráfico intercolonial, en la práctica éste no podía ser impedido. Una de ellas era México, desde donde entraban subrepticamente al Perú crecidas partidas de ropa de la China conducidas por el galeón de Manila y por los navíos de Honduras, provocando que saliesen del virreinato unos 3 millones de pesos. Con ellos, aseveraba el libelista, “*el Perú aumenta las riquezas del Reino Mexicano*”. Otra “puerta” interna, aunque de naturaleza diferente, era Cartagena. Violando las disposiciones que obligaban a los cargadores de las flotas a exhibir sus mercancías en las ferias que se realizaban en esa ciudad y a componerse allí con el fisco, estos atravesaban a escondidas la Provincia de Quito con “*gruesas cargazones*” en dirección a la capital peruana. En este caso, el monto de ese tráfico era estimado de 1 millón de pesos por año, aunque podía elevarse a 2 o 3 millones en tiempo de arribada de la flota a Tierra Firme.

⁷¹ AGN BN 7219 *Estado político del Reino del Perú...* f. 179.

El *Estado político del Reino del Perú* es un testimonio del deterioro en que se hallaba el régimen de navegación atlántica impuesto por los Habsburgo a sus dependencias americanas, el cual no sería objeto de retoques por parte de Felipe V, el primer soberano español de la dinastía de Borbón, hasta una etapa bastante tardía de su reinado. La principal característica de ese modelo era su exacerbada centralización: todo el tráfico con las Indias pasaba por un complejo portuario en el que se hallaban montados los dispositivos de control sobre las entradas y salidas. Componían ese complejo los puertos andaluces de Sevilla, Cádiz, Santa María y San Lúcar de Barrameda, dispuestos en torno a la desembocadura del río Guadalquivir. A partir de ellos se articulaba la *carrera de Indias*, el conjunto de los circuitos de navegación que unían a Castilla con América. Aunque Sevilla actuó inicialmente como puerto preferencial de carga y de descarga, fue relevada en 1680 de esa función por Cádiz, pero hasta 1717 continuó siendo la sede del principal organismo regulador de ese tráfico, la Casa de Contratación.

Desde 1564 este complejo portuario sirvió de base al *sistema de flotas y galeones*, un régimen diseñado por la corona para ofrecer seguridad a la navegación oceánica. Estaba previsto que todos los años un convoy surcara el Atlántico, compuesto por hasta cuarenta embarcaciones, un tercio de las cuales estaban artilladas. Al ingresar al mar Caribe se dividía en dos formaciones: los *galeones* (que solía componerse de una docena de navíos de guerra y unos quince buques mercantes) ponían rumbo a Veracruz, puerto de entrada del virreinato de Nueva España, mientras que las *flotas* (que solían integrar dos navíos de guerra, uno de escolta y quince buques mercantes) emprendían la *ruta de Tierra Firme*, dirigiéndose a Portobelo, puerto de ingreso del virreinato del Perú.⁷² Los armadores de esta segunda formación tenían la oportunidad de ofrecer su cargamento en dos ferias: la de Cartagena, a la que acudían los comerciantes de Santa Fe de Bogotá, Antioquia y Quito, y la de Portobelo, montada especialmente para que fuera visitada por los comerciantes de Lima. Ulteriormente las formaciones se reencontraban en el puerto de La Habana, desde donde volvían a Cádiz con su tornacarga de productos americanos y metales preciosos.

La regularidad de las flotas se vería afectada por la competencia de otras potencias europeas. A lo largo del siglo XVII, otras tres naciones se apropiaron de territorios en el Caribe –Gran Bretaña en las islas de Jamaica y Barbados, Holanda en las de Aruba y

⁷² Geoffrey WALKER *Política española y comercio colonial 1700-1789* Ariel, Barcelona, 1979, Págs. 24-27; Henry KAMEN *La España de Carlos II* Crítica, Barcelona, 1981, Págs. 206-215. Véase también Lutgardo GARCIA FUENTES *El comercio español con América, 1650-1700* Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1980.

Curazao y en la costa de Surinam, y Francia en la isla de Guadalupe y luego en Haití— y además de desarrollar allí exitosas economías plantacionistas basadas en el trabajo esclavo, las utilizaron como bases para emprender el comercio directo con la América española. Esto perturbó hondamente al sistema de flotas y galeones, pues con cierta frecuencia los armadores del convoy hallaron impracticable la venta de su cargamento en las ferias debido a que aquellas plazas estaban ya saturadas por mercancías introducidas clandestinamente por sus competidores. Los comerciantes andaluces se resistieron a correr ese riesgo y la partida de las flotas se espació. A resultas de ello, el comercio español en las Indias experimentó un retroceso del 76 % entre 1611 y 1660 y una segunda caída del 53% entre 1660 y 1710.⁷³ La falta de competitividad de la producción manufacturera castellana, que quedó a la zaga frente a la de otras naciones de la Europa occidental, era una de las causas principales de ese hundimiento. En tanto, la población hispanizada de las ciudades americanas crecía ostensiblemente y con ella la demanda de productos europeos. En palabras de Ruggiero Romano, la capacidad de absorción de la América española sobrepasó las posibilidades de su metrópoli e incitó a la concurrencia de otros oferentes.⁷⁴

A causa de su propia incapacidad de abastecer los mercados americanos, la monarquía hispánica acabaría por facilitarle a sus rivales europeos su propio aparato naval, con lo que estos contaron con otra vía de penetración. Una próspera colonia de mercaderes extranjeros se afincó en los puertos andaluces y consiguió desde allí infiltrarse en el comercio con las Indias. El papel más relevante lo jugaron los franceses, fluidamente conectados con las ciudades portuarias de Saint-Malò y Marsella: las manufacturas que se hacían remitir desde estos llegaron a constituirse en la década de 1680 en el 39% de las mercancías transferidas a América, mientras que a comienzos del siglo siguiente pasarían a conformar casi dos tercios de las mismas. Los siguieron en importancia los holandeses y flamencos, los genoveses, los ingleses y los hamburgueses. Todos ellos explotaron la afición cada vez más pronunciada de las oligarquías urbanas hispanoamericanas por las manufacturas de origen europeo, entre las que preponderaban los textiles. Esa preferencia, sumada a la limitada capacidad productiva de Castilla,

⁷³ José María OLIVA MELGAR “Realidad y ficción en el monopolio de Indias: una reflexión sobre el sistema imperial español en el siglo XVII” en **Manuscripts: revista d'història moderna**, Universidad Autónoma de Barcelona: Departamento de Historia Moderna, 1996, N° 14, Pág. 329.

⁷⁴ Ruggiero ROMANO **Coyunturas opuestas. La crisis del siglo XVII en Europa e Hispanoamérica** Fondo de Cultura Económica, México, 1993, Págs. 138 y ss.

explica que a finales del siglo XVII, las remesas de origen español a las Indias apenas sobrepasasen el 5% de dichas cargas.⁷⁵

La falta de restricciones puestas por la corona a la presencia de mercaderes extranjeros en los puertos andaluces no hizo sino potenciar el ingreso de efectos europeos a la América española, a la vez que profundizó la dependencia de bienes foráneos y contribuyó a desviar el flujo de la plata americana hacia otras economías de la Europa Occidental, en desmedro de la castellana. Como explicó sagazmente Carlos Malamud, las otras potencias de Europa occidental, al valerse del sistema de flotas y galeones para introducir sus mercancías en los mercados hispanoamericanos y asegurarse a través de ellos un retorno en metales preciosos, pudieron destinar sus buques mercantes a otros menesteres, resultando España la única en hacer inversiones en costear dicho sistema.⁷⁶ Cuando a fines del siglo XVII el mismo experimentó su peor crisis, el intervalo entre una flota y otra se fue espaciando cada vez más. En las últimas dos décadas de esa centuria sólo zarparon cuatro flotas, y entre 1700 y 1730 otras seis. Esa falta de regularidad tuvo mucho que ver con el creciente debilitamiento de la marina española, pero también a la falta de cooperación de los comerciantes gaditanos. Para Malamud, la frecuencia anual saturaba los puertos hispanoamericanos de productos europeos y hacía más dificultosas las ventas, por lo que dichos comerciantes hallaron más provechoso espaciar sus salidas, pues ello les permitía controlar la oferta y mantener los precios altos.⁷⁷ García Baquero, en cambio, le quita relevancia al ventajismo de este sector y le encuentra muchas otras motivaciones a esta crisis: las de índole político-militar (las frecuentes guerras en Europa y el incremento de la actividad pirática en América), las de naturaleza técnica (las dificultades en reunir el número de navíos suficientes para integrar las flotas o los pertrechos para equiparlas), las de abastecimiento (la lentitud con que se completaba la carga de los navíos, teniendo en cuenta que se componía en gran parte de mercancías extranjeras) y las financieras (escasez de metálico en el momento de realizar las contrataciones).⁷⁸ Ambos coinciden, sin embargo, en que el

⁷⁵ En 1686, las mercancías españolas sólo representaban más que el 5,5 por ciento del valor de lo remitido a Indias, mientras las francesas sumaban el 39 por ciento, las genovesas el 17, las inglesas el 14,5 y las holandesas el 12. José María OLIVA MELGAR “Realidad y ficción en el monopolio de Indias...”, Págs. 337-338. En 1691, un memorial francés afirmaba que tan sólo el 5% de las mercancías que salía de Cádiz era español; Henry KAMEN *La España de Carlos II...* Pág. 215.

⁷⁶ Carlos Daniel MALAMUD RIKLES *Cádiz y Saint-Malò en el comercio colonial peruano (1698-1725)* Diputación Provincial de Cádiz, Jerez de la Frontera, 1986, Pág. 25.

⁷⁷ Carlos Daniel MALAMUD RIKLES *Cádiz y Saint-Malò...* Pág. 111.

⁷⁸ Antonio GARCÍA-BAQUERO “El comercio colonial en la época de Felipe V: el reformismo continuista” en Eliseo SERRANO (editor) *Felipe V y su tiempo*. [Actas del Congreso Internacional celebrado en Zaragoza, 15 al 19 de Enero de 2001] Diputación de Zaragoza, 2004, Tomo I, Págs. 79-80.

sistema evidenció una incapacidad para regularizar el tráfico atlántico difícil de remontar.

A esa falta de regularidad se agregó la desarticulación. Desde mediados del siglo XVII comenzaron a salir flotas con destino a un único virreinato. Esta afluencia diferenciada perjudicó mayormente al del Perú. Mientras que Veracruz fue visitada por aquellas con cierta frecuencia, entre 1696 y 1721 sólo arribaron a Portobelo en una única ocasión.⁷⁹ Los mercaderes peruanos no se lamentaron de ello, ya que jamás brindaron al sistema un apoyo decidido. Margarita Suárez ha demostrado que los negociantes nucleados en el Consulado de Lima retacearon su contribución a los gastos de mantenimiento del sistema, o mejor dicho, la supeditaron a los beneficios que podían conseguir a cambio. A lo largo de todo el siglo XVII, la corona intentó depositar sobre ellos el pago del derecho de avería y de otros impuestos al comercio marítimo, con los que no sólo se solventaba el envío de las flotas sino también la *Armada del Mar del Sur*, una formación naval que unía Lima con otros puertos del Pacífico y que en su mejor momento estuvo compuesta por media docena de barcos artillados y por una flota mercante de unos setenta navíos. En 1667, dicho Consulado aceptó aportar 350.000 ducados anuales, corriendo con casi todo el peso del sostenimiento de ambas flotas, mientras que la Real Hacienda sólo contribuía con 150.000 y los comerciantes de Nueva España con 90.000. Si aceptó hacer semejante desembolso fue porque recibió como contrapartida una serie de concesiones administrativas cuya magnitud que lo convirtió, en palabras de Suárez, en una suerte de organismo paraestatal.⁸⁰ Pero a partir de 1680, la actitud de los comerciantes limeños hacia el sistema experimentó un notable giro, influida por las condiciones de inestabilidad creadas por los asaltos cada vez más frecuentes de piratas y bucaneros en ambos océanos y por la insuficiente rentabilidad que ofrecía el comercio a tan altos costos. Como la corona se negó a desligarlos de las cargas impositivas, se resolvieron por sabotear las ferias de Cartagena, negándose a concurrir a ellas.⁸¹

Esta autonomía de decisión está bien lejos de mostrarlos como los obedientes socios de los mercaderes de Sevilla y Cádiz. La interpretación de Suárez ha dejado atrás la visión tradicional que los consideraba una prolongación del comercio andaluz. Si los

⁷⁹ Pablo Emilio PEREZ MALLAINA BUENO *Política naval española en el Atlántico, 1700-1715* Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1982, Pág. 51.

⁸⁰ Margarita SUÁREZ *Desafíos transatlánticos. Mercaderes, banqueros y el Estado en el Perú virreinal, 1600-1700* Fondo de Cultura Económica-Instituto Francés de Estudios Andinos, Lima, 2001, Págs. 309-313.

⁸¹ Margarita SUÁREZ *Desafíos transatlánticos...* Págs. 380-385.

mercaderes peruanos se apartaron del comercio legal se debió a que, por fuera de éste, las oportunidades de hacer negocios eran mejores. Entre el último lustro del siglo XVII y la primera década del XVIII, un cambio de coyuntura acabaría con el relativo aislamiento en que se hallaba el Pacífico español y favorecería el ingreso de buques de bandera francesa, con los que los mercaderes del virreinato mantendrían tratos ventajosos a lo largo de casi tres décadas. En 1697, la Paz de Rijswijk había dado fin al enfrentamiento multiseccular entre ambas naciones y, amparados en los nuevos vínculos cordiales, los franceses colocaron sus miras en el Pacífico. En 1698 se conformó en Saint-Malò la *Compagnie Royale de la Mer du Sud*, un consorcio comercial que se propuso emprender el tráfico con los puertos españoles de las costas peruana y chilena, aunque sin contar con la autorización de ninguna de las dos coronas, mientras que un marino no vinculado con ésta, Gouin de Beauchesne, comandaba la primer expedición comercial francesa a las costas americanas del Pacífico.⁸²

La Guerra de Sucesión y el fin de las pretensiones exclusivistas

En 1700 moría Carlos II, el último rey de la casa de Habsburgo que gobernó la monarquía hispánica, quien había nombrado como sucesor a un príncipe francés, su sobrino Felipe de Anjou, quien sería coronado con el nombre de Felipe V. Necesitado del apoyo militar de su abuelo, Luis XIV, para sostenerse en el trono, éste buscó un acercamiento otorgando a Francia ventajas económicas. A través de la firma del Tratado del Real Asiento, un consorcio mercantil francés, la *Compagnie de Guinée*, recibió en 1701 una licencia para vender 48.000 esclavos en sus dependencias ultramarinas. Esta concesión se ha señalado como la causa detonante de la formación de una coalición de potencias encabezada por Gran Bretaña, que enfrentó a Felipe y apoyó los derechos de otro pretendiente al trono, Carlos de Habsburgo.⁸³ Así comenzaba la contienda por el trono español.

Pero los comerciantes franceses no se conformaron con la introducción de esclavos. En vistas a que desde 1695 el despacho de nuevas flotas desde Cádiz venía aplazándose en forma indefinida, dejando un vacío en el aprovisionamiento, penetraron con sus buques en el Pacífico y visitaron los puertos de Chile, Perú y Ecuador, donde

⁸² Carlos Daniel MALAMUD RIKLES *Cádiz y Saint-Malò...* Págs. 68 y ss.

⁸³ Joaquim ALBAREDA Y SALVADÓ *La guerra de sucesión de España (1700-1714)* Crítica, Barcelona, 2010, Págs. 68-69.

abarrotaaron los mercados locales de productos europeos. Allí fueron muy bien recibidos por los comerciantes criollos, a pesar de que a través de sucesivos decretos, el mismo Felipe V les había prohibido cualquier trato con ellos; las autoridades locales hicieron poco por hacerlos cumplir. Dos de los virreyes del Perú, el conde de la Moncloa y el marqués de Casteldosrius, se mostraron tolerantes frente a la presencia de estos visitantes, y el último sería además señalado por participar activamente en el contrabando.⁸⁴

Se ha calculado que durante la Guerra de Sucesión, unos 130 buques de bandera francesa navegaron por el Pacífico peruano, algunos de los cuales zarparon de Saint-Malò con ese único destino, mientras que otros lo hicieron con el propósito de visitar los puertos del virreinato para luego continuar hacia la China y retornar a Francia por la ruta del Índico. Al acercarse el conflicto dinástico a su fin, Luis XIV dio órdenes estrictas de que este comercio cesara, pero no sólo no lo consiguió, sino que entre 1713 y 1715 la presencia de embarcaciones francesas en los puertos peruanos se redobló, y por la enorme competencia que se produjo provocaron un fuerte descenso en los precios de las manufacturas. Su intromisión en el Pacífico corrió en paralelo con la reactivación de la producción argentífera potosina y se vio seguramente incentivada por ésta. Aunque se pensaba la recomposición del sector minero altooperuano no se produjo hasta la década de 1730, Enrique Tandeter lo puso en duda: en su opinión, ese incremento se produjo en las décadas iniciales del siglo XVIII, pero no se vio expresado en los libros contables de la Real Hacienda porque una porción significativa de la plata fue absorbida por el tráfico clandestino con los franceses, en la forma de “pasta” y de “piñas”.⁸⁵ El autor del *Estado político del Reino del Perú* coincide en que la elución en el pago del *quinto real* había causado una abrupta caída en la recaudación, que en 1690 había sido de 45 millones de pesos y en 1708 había descendido a 41 millones. “Después acá – agregaba el libelista– *que entraron Franceses al Mar del Sur y que se avecindaron en sus Asientos en Portobelo y Buenos Aires los Británicos, no han podido llegar los registros a 16 millones, aun resguardándose la feria de galeones ocho y nueve años*”.⁸⁶

Pese al abandono temporario de la *ruta a Tierra Firme*, el Perú no dejó de ser abastecido de manufacturas europeas desde la península. A lo largo de todo el siglo XVII, los puertos de la vertiente atlántica del virreinato –compuesta al norte por las

⁸⁴ Geoffrey WALKER *Política española y comercio colonial*... Págs. 61-64.

⁸⁵ Enrique TANDETER *Coacción y mercado. La minería de la Plata en el Potosí colonial, 1692-1826* Sudamericana, Buenos Aires, 1992, Págs. 18-21.

⁸⁶ AGN BN 7219 *Estado político del Reino del Perú*... f. 177.

provincias de Nueva Granada y Venezuela y al sur por el Río de la Plata— recibieron la visita periódica de los navíos de registro. Se trataba de embarcaciones sueltas o que se movían en grupos muy reducidos uniendo Cádiz con Portobelo, Cartagena, Caracas, Maracaibo y Buenos Aires. Si bien en un contexto de conflicto bélico esos navíos no estaban exentos de ser apresados por buques enemigos, el contacto entre la metrópoli y sus dependencias de ultramar pudo gracias a ellos mantenerse en pie. En todos los casos la corona otorgaba los permisos de navegación a cambio de contraprestaciones, como la de transportar a un gobernador con su comitiva, a soldados, religiosos o familias de colonos, o la de entregar expedientes y correspondencia oficial. La Guerra de Sucesión también tuvo un impacto negativo sobre la circulación de estas embarcaciones sueltas. Entre 1701 y 1716 no zarparon de Cádiz más que 106 navíos de registro con destino a América, con un promedio de algo más de seis anuales, una evidencia más de que los vínculos comerciales entre España y sus dependencias atravesaban un momento de profundo debilitamiento.⁸⁷

Buenos Aires, como es bien sabido, ocupó un lugar marginal en la carrera de Indias, no sólo en relación a su posición en los circuitos de navegación sino también en virtud a las prohibiciones que le impuso la corona desde comienzos del siglo XVII. Desde 1619, los navíos de registro se habían convertido en su único canal legal de intercambios con la metrópoli. Entre 1648 y 1697, el puerto fue visitado por treinta de ellos, a los que se sumó otra treintena entre 1698 y 1740: a partir de estas cifras puede deducirse una afluencia promedio de dos navíos cada tres años. Durante la Guerra de Sucesión, se produjeron tres entradas de navíos de registro, pero la conexión con la península sufrió de significativos altibajos, al punto de que entre 1705 y 1711 ninguna embarcación procedente de Cádiz se hizo presente en el estuario.

Ese vacío sería cubierto por el arribo de buques franceses. Se presume que durante la Guerra de Sucesión, ingresaron algo más de 50 barcos de esa bandera en el Río de la Plata, aunque en su mayor parte no se trataba de buques de la *Compagnie de Guinée*. De acuerdo con Fernando Jumar, 28 de ellos se sirvieron de Buenos Aires un puerto de paso en su trayecto hacia el Pacífico, de los cuales la mitad debió hacer escala en él por motivos técnicos o tras denunciar desperfectos que los obligaron a concluir su viaje en nuestro estuario. Como un real cédula de 1701 otorgaba a los franceses el derecho de hacer *arribada forzosa*, los gobernadores debieron franquearle el permiso de invernar,

⁸⁷ Antonio GARCIA BAQUERO GONZÁLEZ *Cádiz y el Atlántico (1717-1778)* Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1976, Tomo I, Pág. 120.

recoger bastimentos o hacer reparaciones antes de continuar con su viaje. Pero en gran parte se trató de *arribadas maliciosas*, esto es, del fingimiento de un pedido de socorro para poder anclar en el puerto y emprender el contrabando. Los buques negreros no habrían pasado de 19. Es imposible saber la cantidad de esclavos que estos transportaron, ya que la compañía sólo se veía obligada a declarar a aquellos que sobrevivían al período de cuarentena, que sumaron unos 3225.⁸⁸

Se estima que durante la guerra ingresaron al estuario algo más de una veintena de embarcaciones por quinquenio, produciéndose un movimiento portuario que no se experimentaba desde mediados del siglo anterior. A lo largo de la contienda, las relaciones entre Buenos Aires y la metrópoli atravesaron tres etapas. La primera transcurrió entre 1700 y 1704, en que esta ciudad contó con una aceptable presencia de transportistas peninsulares, gracias a la presencia de los navíos de Carlos Gallo Serna y de Bartolomé de Urdinsu y Arbeláez. Si bien en 1703 tuvo lugar la llegada del primer buque negrero, seguido de otro un año más tarde, el comercio con los franceses era aún de poca significación. En 1704, al trascender que Portugal había ingresado a la coalición anti-borbónica, Colonia de Sacramento fue sitiada por tropas españolas y pocos más tarde fue tomada, con lo que los lusitanos se vieron alejados del estuario durante una década y cesó el tráfico clandestino que estos realizaban en barcazas entre una y otra orilla. La segunda etapa, entre 1705 y 1711, fue la del apogeo de la presencia francesa, que coincidió con la ausencia absoluta de navíos de bandera española. Tanto los buques negreros como los que recalaban en el puerto antes de continuar su travesía al Pacífico participaron del tráfico clandestino de manufacturas, facilitado por los gobernadores Alonso de Valdés Inclán y Manuel de Velasco y Tejada, que se sumaron a él. Durante la tercera etapa, que se extendió entre 1712 y 1714, se produjo la recuperación de la conexión gaditana: las embarcaciones de bandera española volvieron presentarse en el estuario, mientras que el ingreso de naves francesas se redujo drásticamente, a la vez que se aplicaban medidas punitivas contra el contrabando arbitradas por un juez pesquisidor enviado por Felipe V, Juan Joseph de Mutiloa y Andueza.⁸⁹

⁸⁸ Fernando JUMAR **Le commerce atlantique au Río de la Plata, 1680-1778** Tesis de Doctorado, École des Hautes Études en Sciences Sociales, París, 2000, Págs. 240-247.

⁸⁹ Carlos M. BIROCCO “Cambio de dinastía y comercio interregional. La élite porteña durante la Guerra de la Sucesión de España” en Héctor NOEJOVICH (ed.) **América bajo los Austrias: economía, cultura y sociedad** Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2001, Págs. 361-362.

Las consecuencias de Utrecht

En 1714 la coyuntura volvería a cambiar. La Guerra de Sucesión llegaba a su fin y la coalición enemiga, con excepción de Austria, se decidió a reconocer los derechos de Felipe V a gobernar la monarquía hispánica. Pero ese reconocimiento no era gratuito: por presión de los británicos, éste se vio obligado a aceptar varios recortes territoriales, que lo llevaron a perder sus dominios en Italia y Flandes. También debió beneficiarlos con la concesión de un nuevo tratado del Real Asiento. Merced a los acuerdos firmados en Utrecht, la *South Sea Company* reemplazaría a la *Compagnie de Guinée* en el tráfico de esclavos con la América española, aunque con ventajas mayores que las que se le habían otorgado a ésta, como lo era la de sumar a los buques negreros un “navío de permiso” anual cargado de mercancías a los puertos españoles del Caribe. Las instalaciones que poseyó esta última en Buenos Aires fueron adquiridas por el directorio local de la *South Sea Company*, que además de administrar la introducción de negros desde las factorías africanas supervisó el desembarco clandestino de géneros. El carácter secreto de estas transacciones no quitaba que se lo considerase un tráfico estable, y así se lo reconoce en la misma correspondencia de los directores con Londres, en que estos comunicaban a sus proveedores de textiles cuáles eran los gustos de los porteños y enfatizaban lo exigentes que eran estos en cuestión de indumentaria.⁹⁰

Aunque la duración de la concesión fue establecida en treinta años, la actividad de la *South Sea Company* en el Río de la Plata debió soportar interrupciones imprevistas. Los conflictos entre España y Gran Bretaña condujeron a que las instalaciones que poseía esta compañía en los puertos americanos fuesen confiscadas en tres ocasiones. La primera represalia se produjo entre 1719 y 1722, cuando Felipe V recuperó las islas de Sicilia y Cerdeña, perdidas en Utrecht, y los británicos enviaron su armada a enfrentarlo. Pocos años más tarde se reanudaría la contienda en Italia y este rey ordenó una segunda represalia, que se prolongó entre 1727 y 1730. Un último enfrentamiento en el marco de la Guerra de Sucesión Austríaca llevaría a la incautación definitiva del Real Asiento a partir de 1739. La corona española utilizó las represalias como una forma de extorsión contra sus rivales, ya que no ignoraba la altísima rentabilidad del comercio de esclavos y de la introducción de manufacturas que se encubría tras éste. La detención del tráfico a causa de las guerras incidió en el número de buques negreros que arribaron a Buenos Aires durante los primeros once años del asiento británico, que fue

⁹⁰ José María MARILUZ URQUIJO “La esclavatura” en **Historia Marítima Argentina** Editorial Armada Argentina, Buenos Aires, 1984, Tomo II, Pág. 569.

inferior al de las embarcaciones francesas que ingresaron en los once años que duró su concesión: 18 naves entre 1715 y 1719 y otras 20 entre 1722 y 1726.

Otra consecuencia de la finalización de la Guerra de Sucesión fue la devolución de la Colonia de Sacramento a Portugal. En noviembre de 1716, ésta recuperaba su rol de enclave lusitano en el estuario. Con poco más de mil habitantes, este modesto poblado estaba bastante lejos de ser “*la opulenta Colonia de los Portugueses*” que imaginaba el autor del *Estado político del Reino del Perú*. Pero la monarquía lisboeta, que se propuso resistir a la presión de los españoles y poner bases sólidas a su presencia en la Banda Oriental, transformó a Colonia, que hasta entonces había sido sólo un puerto comercial, en un baluarte poblacional. Se promovió la migración de colonos desde la provincia lusitana de Tras-os-Montes y desde los archipiélagos de Azores y Madeira, se les distribuyó semilla para que sembraran trigo y se intentó introducir, aunque infructuosamente, el cultivo de cáñamo. Los pobladores de este pequeño asentamiento siguieron estrechamente ligados a los intereses de los comerciantes de Río de Janeiro, que al utilizarlo como trampolín para el comercio directo con Buenos Aires encauzaron la introducción de la plata potosina en el circuito mercantil portugués.⁹¹ Desplazándose en navíos de pequeño calado, no sólo traficaban con efectos europeos sino también con productos brasileños, como el tabaco y la cachaza.⁹²

Para Moutoukias, que sopesó los alcances del comercio atlántico en Buenos Aires a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, el movimiento portuario experimentó los años de mayor intensidad entre 1704 y 1720.⁹³ Este apogeo se habría producido entre el arribo de los primeros buques negreros de la *Compagnie de Guinée* y la aplicación de la primera represalia al Real Asiento británico. A comienzos del siglo XVIII, el comercio directo con franceses, británicos y portugueses había convertido a Buenos Aires en uno de los más importantes puertos de la vertiente atlántica del imperio hispánico. En este contexto de crecimiento económico, el tráfico legal encauzado por los navíos de registro se vio opacado por el comercio con las otras potencias y no llegaría a superar el 30% del volumen de mercancías ingresada.

El despegue de esta ciudad fue acompañado de un crecimiento demográfico moderado pero sostenido y de una notable expansión edilicia. Pero el movimiento del puerto no

⁹¹ Fabricio PEREIRA PRADO *A Colonia do Sacramento: O Extremo Sul da América Portuguesa no século XVIII* Prefectura de Porto Alegre, 2002, Págs. 48-49

⁹² Fernando JUMAR *Le commerce atlantique au Río de la Plata...* Págs. 319 y ss.

⁹³ Zacarías MOUTOUKIAS “Comercio y producción” en *Nueva Historia de la Nación Argentina* Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1999, Tomo III: “Período Español (1600-1810)”, Págs. 80-81.

respondía a la capacidad de consumo de sus casi 9000 habitantes ni de su diminuta oligarquía urbana, constituida por la décima parte de esa población, sino que estaba proyectado hacia un espacio mucho más vasto. Por las vías fluviales del Litoral, la circulación de las mercancías europeas alcanzaba las ciudades de Santa Fe y Asunción; por los caminos reales, eran llevadas en carretas en dirección a Santiago de Chile, el Tucumán y el Alto Perú. Influida por el Consulado de Lima, la corona había erigido aduanas terrestres con la finalidad de frenar la expansión de la oligarquía mercantil porteña, en un intento por limitar su radio de acción, pero también con el propósito de desviar hacia las arcas reales una porción de las utilidades del comercio ilícito en la forma de cargas impositivas. La barrera fiscal, al ser mudada en 1698 de Córdoba a Jujuy, les concedió una ampliación de ese radio, que incluiría a partir de entonces las gobernaciones del Río de la Plata, Paraguay y Tucumán y el reino de Chile. Las ricas ciudades altoperuanas de Chuquisaca, Cusco y Potosí quedaban reservados para los limeños, pero los porteños no respetarían ese coto mercantil y sabrían infiltrarse en él con su carga de efectos europeos.

La corona mantuvo a este respecto una actitud ambigua. Por una parte, debía mostrarse complaciente hacia el Consulado de Lima, en tanto era éste quien sustentaba con sus contribuciones el sistema de flotas y galeones, necesario para canalizar y controlar el flujo de los metales preciosos hacia la península. Pero por otro lado, su voracidad impositiva la llevó a desatender su alianza con esta corporación mercantil y a atentar contra dicho sistema al propiciar la competencia en el interior del régimen monopolístico. No faltaron oportunidades en que se franqueó el desembarco de mercancías europeas en Buenos Aires al mismo tiempo en que los cargadores de las flotas ofrecían las propias en las ferias de Cartagena. El sector representado por el Consulado, por otra parte, también sostenía un doble juego. Los limeños acusaron a los factores de los navíos de registro y de los mercaderes porteños de introducir mercancías al Alto Perú a precios con los que no podían competir. Asimismo señalaban como pernicioso el tráfico de géneros prohibidos por la ruta de México y el trato con los buques franceses en las costas del Pacífico. Pero aquello que rechazaban corporativamente lo emprendían clandestinamente.⁹⁴ Si en ocasiones se mostraron resistentes a concurrir a las ferias de Cartagena fue porque ya estaban bien abastecidos

⁹⁴ Geoffrey WALKER *Política española y comercio colonial...* Págs. 176-178; Carlos Daniel MALAMUD RIKLES *Cádiz y Saint-Malò...* Págs. 194-202.

de manufacturas europeas o asiáticas que les llegaban por esas vías alternativas, siendo ellos mismo quienes terminaron saboteando la *ruta de Tierra Firme*.

El autor del *Estado político del Reino del Perú* recoge en este punto el discurso de los grandes mercaderes limeños. Como las incursiones de los comerciantes porteños en el Alto Perú no habían podido nunca ser evitadas ni adecuadamente fiscalizadas, proponía apostar en el Tucumán una guardia de 400 soldados que los obligase a pagar derechos a la corona. Para explicar la significatividad de esta región en el tráfico con las provincias andinas centrales, recurrió a una metáfora de tipo organicista: consideraba al Tucumán una *garganta*, esto es, un paso ineludible que los porteños se veían obligados a atravesar al conducir sus mercancías al Potosí y otras ciudades altoperuanas y que recorrían en sentido contrario llevando sacos de plata sellada y en pasta. Mientras “*aquella precisa garganta*” se hallase sin resguardo, la fuga del metálico por el Río de la Plata sería irrefrenable.⁹⁵

Durante la primera década y media del reinado, la política de Felipe V en relación con el comercio de Indias tuvo ribetes contradictorios. Al verse obligado a enviar ingenieros en fortificaciones, soldados de tropa y pertrechos a distintos puertos del virreinato con el fin de reorganizar el sistema defensivo, necesitó de los navíos de registro para canalizar esos envíos y les otorgó licencias cada vez más amplias. Estas solían contener cláusulas que podían resultar perjudiciales para el comercio de flotas, en particular en relación con la internación de mercancías. Hasta finales de la Guerra de Sucesión continuó en vigencia la normativa aplicada por los Habsburgo, que vedaba a los cargadores y factores venidos en los registros internarse con su cargamento hasta el Alto Perú. Una real cédula de 1690 les impidió adentrarse más allá de las provincias del Río de la Plata, Paraguay y Tucumán. En 1708, otra real cédula repitió esa prohibición pero les otorgó una licencia especial para que enviaran al Alto Perú los utensilios de fierro que se necesitaban para el laboreo de las minas de plata, con lo que se les brindó un pretexto para adentrarse por sí mismos en el territorio.

Cuando la contienda dinástica estaba cercana a su fin, la política sostenida por la corona se volvió menos restrictiva. Como hubo que remitir contingentes de soldados a Buenos Aires desde la península, los comandantes de las embarcaciones que facilitaron su traslado recibieron a cambio el permiso para poder introducir su cargamento en las regiones andinas centrales. En 1711, una real cédula esgrimía que la internación de

⁹⁵ AGN BN 7219 *Estado político del Reino del Perú*... f. 69.

mercancías había sido desaconsejada cuando aún “*era regular el despacho de galeones a Tierra Firme*”, pero aduciendo que estos ya no eran frecuentes, el monarca autorizó a Andrés Martínez de Murguía, capitán de un navío de registro, a que luego de abastecer a esas tres provincias pudiera pasar con lo que le sobrase a las de Chuquisaca y Potosí.⁹⁶ En 1716, otra provisión real concedió al capitán Ibarra Lazcano, que condujo a Buenos Aires al gobernador Zavala y a un piquete de 300 soldados de infantería, la facultad de internarse durante dos años hasta Potosí, Chuquisaca y Chile. Los registreros no sólo pudieron adentrarse en el coto que durante un siglo y medio había estado reservado a los comerciantes de Lima, sino que ya no se vieron necesitados de recurrir a los mercaderes porteños para ingresar a esas regiones. Quizá por esa razón estos últimos se volcaron a comprar los cargamentos de esclavos a la *South Sea Company* y llevarlos a Chile y Potosí, acompañándolos de las mercancías que les facilitaban clandestinamente los británicos.

La reconfirmación de la centralización del tráfico atlántico

El tratado de Utrecht fue siempre considerado por Felipe V como una imposición y nunca renunció a la recuperación de los territorios que se había visto obligado a ceder al Imperio Austriaco, a Holanda y a Saboya. El rey no cesaría en sus intentos de devolver a la monarquía hispánica su antigua conformación territorial y se mostró contrario al equilibrio entre potencias impulsado en Europa por los británicos, que había surgido del fraccionamiento de la antigua monarquía habsbúrgica. La segunda esposa de Felipe, la parmesana Isabel Farnesio, lo alentó a recuperar los dominios perdidos en Italia, con la pretensión de encontrar en ella tronos para sus hijos pequeños. Al calor de estas reivindicaciones fue ganando posiciones un favorito de esta reina, el cardenal Julio Alberoni. Aunque nunca se le concedió el cargo formal de ministro, éste se puso a la cabeza de los negocios del monarca y se convirtió en su intermediario frente a los Consejos y las Secretarías del Despacho.⁹⁷

Durante el quinquenio en que ejerció su influencia, Alberoni propició una serie de reformas en el aparato administrativo de la monarquía, entre ellas el establecimiento del

⁹⁶ El párrafo de la real cédula donde se explican las causas de la licencia se encuentra reproducido en Pablo Emilio PEREZ-MALLAINA BUENO *Política naval española en el Atlántico*... Pág. 55.

⁹⁷ Isabel MARTÍNEZ NAVAS “Alberoni y el gobierno de la Monarquía española” en *Revista Electrónica de Derecho*, Universidad de la Rioja, diciembre 2010, N° 8, Págs. 63-110; Henri KAMEN *Felipe V, el rey que reinó dos veces* Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 2000, Págs. 149 y ss.

sistema de intendentes en la península, que era una adaptación del sistema análogo francés. Asimismo, se enfocó en una reforma del ejército y en la renovación de la armada. Creó la Intendencia General de Marina y colocó en ella a Joseph Patiño, a quien también nombró presidente del Tribunal de la Casa de Contratación, la cual recibió por decreto real la responsabilidad de todo el comercio con las Indias y fue mudada a Cádiz. En este puerto, Patiño se familiarizó con los problemas del comercio de Indias y puso en marcha un plan de reconstrucción de la marina, en virtud a lo cual se hicieron enormes inversiones en la construcción y la compra de barcos, se protegió a los astilleros y se fomentó la fabricación de brea, sogas, lonas y aparejos.⁹⁸ La recuperación del poderío naval llevaría a Alberoni a alentar a Felipe V a recuperar los territorios italianos. En 1717 el monarca dispuso la invasión de la isla de Cerdeña y en 1718 la de Sicilia, que se llevaron a cabo en forma exitosa pero lo obligaron a enfrentar a una coalición de potencias liderada por Gran Bretaña –conocida como la “Cuádruple Alianza”– entre las cuales se hallaba la misma Francia. La derrota de la armada española en el Cabo Passaro dio por tierra con las ambiciones expansionistas del monarca, y fue decisiva para que en diciembre de 1719 despidiera al cardenal. En febrero del año siguiente se acordó la devolución de las islas.

Mientras se mantuvo al frente del gobierno, Alberoni tuvo graves desavenencias con Patiño, pero ambos coincidieron en su interés por rescatar a la economía peninsular de su hundimiento. La importación de manufacturas de origen extranjero había debilitado cualquier intento de resurgimiento de la producción local, pues había modificado los gustos y las pautas de consumo de los sectores urbanos a ambos lados del océano y fomentado la dependencia. La reacción de la corona se hizo visible a partir de 1718, cuando brindó una decidida protección a la fabricación de textiles en la península, estimulando la iniciativa privada a través de la concesión de privilegios fiscales. El mismo monarca costeó la instalación de talleres de paños, como el que se montó en 1719 en Guadalajara, donde se contrató a maestros artesanos holandeses para que comunicaran su técnica a los pañeros locales. Para asegurarle un mercado a esa producción, se decretó la prohibición de la entrada de tejidos de la China y de otras regiones de Asia a todos los territorios de la monarquía. Para Fernández de Pinedo, el propósito de esa política era erradicar el contrabando en la América española, satisfaciendo allí la demanda de los consumidores con productos españoles a precios

⁹⁸ Geoffrey WALKER **Política española y comercio colonial...** Págs. 127 y ss.

internacionales competitivos.⁹⁹ García Baquero coincide en que la política de fomento industrial tuvo por objeto equilibrar la balanza comercial o incluso convertirla en solvente, pero coincide en que el motor económico de estas primeras reformas fue recuperar el comercio con las colonias, donde la metrópoli podía contar con un mercado reservado para sí y complementario al de la península.¹⁰⁰

Por tales motivos no resulta extraño que el fomento que quiso darse a la producción se viese acompañado de un replanteo del funcionamiento del sistema de flotas y galeones. Alberoni se propuso reconfigurar la carrera de Indias y presentó a Felipe V la propuesta de trasladar las ferias de Portobelo a Buenos Aires, con lo que este puerto se hubiese convertido en principal enclave atlántico del virreinato del Perú.¹⁰¹ Pero el rey la desestimó. Luego de la caída del cardenal, Joseph Patiño, que conservó su lugar en el gobierno, logró que éste aprobara un reglamento en que se venía trabajando desde hacía cuatro años: el *Real Proyecto para Galeones y Flotas del Perú y Nueva España y para los Navíos de Registro y Avisos que navegaren a ambos reinos*, promulgado el 5 de abril de 1720. Aunque el esquema tradicional del sistema de flotas se reafirmaba, el monarca redujo la intervención del Consulado de Sevilla, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación en los asuntos vinculados al tráfico marítimo, que quedaba reservada a los ministros que se designase al efecto, y recuperó la percepción directa de los impuestos. Al referirse a este reglamento, Pérez Mallaina desestima su originalidad y sostiene que Patiño se basó en proyectos anteriores.¹⁰² Walker, por su parte, afirma que la intención del soberano era apoyar el resurgimiento de la industria peninsular. Mediante la nueva legislación se pretendió proteger a los astilleros, ordenando que sólo pudiesen formar parte de las flotas los navíos construidos en España, y a los talleres textiles, protegiéndolos de la competencia extranjera mediante la elevación del impuesto que se cobraba a los paños importados de Flandes. Pero el *Real Proyecto para Galeones y Flotas* también buscaba asegurar las rentas de la corona, pues aumentó los gravámenes sobre los metales preciosos y simplificó las cargas impositivas al tráfico ultramarino, imponiendo una tasa única establecida por palmo cúbico de mercaderías (*palmeo*) y eliminando los impuestos cobrados en los puertos, con excepción de la alcabala.¹⁰³

⁹⁹ Emiliano FERNANDEZ DE PINEDO “Coyunturas y políticas económicas” en Manuel TUÑÓN DE LARA (director) *Historia de España* Labor, Barcelona, 1981, Tomo VII, Págs. 89-96.

¹⁰⁰ Antonio GARCÍA-BAQUERO “El comercio colonial en la época de Felipe V...” Pág. 76.

¹⁰¹ Geoffrey WALKER *Política española y comercio colonial*... Pág. 140.

¹⁰² Pablo Emilio PEREZ-MALLAINA BUENO *Política naval española en el Atlántico*... Pág. 371 y ss.

¹⁰³ Geoffrey WALKER *Política española y comercio colonial*... Págs. 144-145.

García Baquero reduce a dos los objetivos esenciales de este reglamento: reanimar y regularizar el tráfico con las Indias, sin trastocar el viejo esquema del sistema de flotas y galeones, y simplificar la percepción de los impuestos, con lo que quedó atrás el anticuado régimen fiscal de los Habsburgo. Pero este autor admite que no pudo conseguirse la regularidad en el despacho de las flotas y que por esa razón Patiño elevó en 1724 un informe al rey en el que se evaluaban los resultados de la aplicación de las nuevas normas. A resultas de ello, Felipe V instó al Consejo de Indias a que elaborase un nuevo reglamento, que fue promulgado el 28 de agosto de 1725. El mismo recogió todo lo dispuesto en 1720, pero obligó a las flotas a zarpar de Cádiz todos los años –con lo que se volvía a lo legislado en 1564– y ordenó que se respetaran puntualmente las fechas señaladas para las salidas y los regresos de los convoyes.¹⁰⁴ De esta forma, el esquema originario que tenía centro en el complejo portuario andaluz cobraba nuevo vigor.

La promulgación del *Real Proyecto para Galeones y Flotas* incitó a la crítica de sus contemporáneos. Circularon en Madrid varios escritos que denunciaban la mala gestión del sistema de flotas pero que no proponían su abandono, sino sólo modificar su periodicidad, mejorar los aranceles o incorporar una mayor cantidad de barcos de guerra para reforzar la seguridad.¹⁰⁵ Pero una década de vigencia de esta reglamentación bastaría a la corona para comprobar su inaplicabilidad. Ni los comerciantes gaditanos se ajustarían a él con la docilidad esperada, ni sus émulos limeños se prestarían a apoyarlo, llegando en 1722 estos últimos a negarse a acudir a las ferias de Portobelo. En cuanto a los navíos de registro, estos continuaron ocupando un lugar secundario en la Carrera de Indias, pero su llegada no coordinada a los puertos del virreinato siguió atentando contra la rentabilidad del sistema de flotas.

La reglamentación del comercio ultramarino se vio precedida y acompañada de medidas punitivas contra el comercio directo con Francia. Alberoni encargó al marino Jean Nicolás de Martinet la adquisición de tres navíos de guerra para capturar buques franceses en las costas del virreinato del Perú. Estos partieron de Cádiz en enero de 1717 y al ingresar al estuario del Río de la Plata capturaron las primeras dos presas, cuya carga fue incautada y subastada en Buenos Aires. Luego penetraron en el Pacífico por el cabo de Hornos y capturaron en el puerto de Arica a otras cinco naves, para luego

¹⁰⁴ Antonio GARCÍA-BAQUERO “El comercio colonial en la época de Felipe V...” Págs. 90 y ss.

¹⁰⁵ José Miguel DELGADO BARRADO *Quimeras de la Ilustración (1701-1808). Estudios en torno a proyectos de hacienda y comercio colonial* Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 2009, Págs. 330-331.

dirigirse con ellas a El Callao, donde fueron incorporadas a la Armada del Mar del Sur.¹⁰⁶ En el Caribe, Patiño ordenaría en 1723 la creación de una flotilla de buques guardacostas cuyo objeto era combatir a los contrabandistas ingleses, que fue costeadada gracias a un gravamen especial que se impuso a los comerciantes andaluces y que estos se complacieron en pagar con tal de desembarazarse de esos competidores.¹⁰⁷ El enérgico Marqués de Castelfuerte, que fue investido como virrey del Perú en mayo de 1724, completaría el repertorio de medidas punitivas y se organizaron patrullas guardacostas en el Pacífico para evitar la reaparición de los buques franceses, y también se confirió su captura a compañías de corso. En contraste con la permisividad de sus predecesores, Castelfuerte enfrentó con dureza al contrabando y sostuvo un vínculo ríspido con los principales beneficiarios de ese tráfico, los mercaderes de Lima, que seguían ejerciendo una resistencia pasiva contra las flotas. En junio de 1725 los excluyó del aparato de recaudación fiscal, apartando al Consulado del cobro de las alcabalas y del derecho de avería, que encabezaba desde hacía varias décadas.¹⁰⁸

El papel que desempeñaba Buenos Aires en el comercio regional no estuvo sujeto a grandes cambios desde que la nueva legislación comenzó a ser aplicada. Los capitanes de los navíos de registro que llegaban a este puerto siguieron recibiendo licencia para internarse hasta el Alto Perú. En 1725, una real cédula agregó complejidad a la situación, contradiciendo de lleno los propósitos de los reglamentos de flotas: se permitió a los asentistas británicos o a sus agentes conducir libremente partidas de negros hasta Chile y el Alto Perú.¹⁰⁹ Estos desperfectos en la aplicación de la nueva normativa, empero, serían combatidos desde el interior del virreinato. Uno de los objetivos que se propuso el Marqués de Castelfuerte fue la reactivación de la flota de la Armada del Mar del Sur, cuyo desplazamiento debía sincronizarse con la llegada de las flotas. En enero de 1726, luego de tensas negociaciones con el Consulado de Lima, la misma zarpó desde El Callao a Panamá, logrando articular su partida con la apertura de las ferias de Portobelo, puerto en que aún se hallaba anclada la flota que había arribado allí dos años atrás. Como no estaba dispuesto a permitir que los factores de los navíos de registro y los comerciantes porteños ingresaran con mercancías desde Buenos Aires,

¹⁰⁶ Un análisis sobre la preparación y los alcances de la expedición de Martinet se hallará en Carlos Daniel MALAMUD RIKLES *Cádiz y Saint-Malò*... Págs. 159-175.

¹⁰⁷ Geoffrey WALKER *Política española y comercio colonial*... Pág. 190.

¹⁰⁸ Un análisis pormenorizado de la obra de este virrey se hallará en: Alfredo MORENO CEBRIÁN *El virreinato del marqués de Castelfuerte, 1724- 1736. El primer intento borbónico por reformar el Perú* Catriel, Madrid, 2000.

¹⁰⁹ María Jesús ARAZOLA CORVERA *Hombres, barcos y comercio de la ruta Cádiz-Buenos Aires (1737-1757)* Diputación de Sevilla, 1998, Pág. 209.

afectando la rentabilidad de las ferias, lanzó una provisión por la cual se les impedía sacar plata en moneda o en piñas fuera de los límites del Alto Perú. Con esta medida terminaba el ciclo de apertura que había beneficiado a los porteños y que duró unos quince años, en el cual la circulación del metálico en dirección al Río de la Plata había sido liberada por obra de la misma corona.

En los albores del “complejo portuario bonaerense”

El año de 1726 no sólo nos coloca ante el fin del breve período de flexibilización en el vínculo comercial con las zonas andinas centrales. También nos pone en el umbral del surgimiento del *complejo portuario rioplatense*, que integró a los territorios que se hallaban a ambas orillas del estuario. De acuerdo con Fernando Jumar, que fue el propulsor de este concepto, dicho complejo estaba conformado por las ciudades-puerto de Buenos Aires, Colonia del Sacramento y Montevideo, lo mismo que por una serie de puertos secundarios que se les fueron integrando, como el de Las Conchas, Maldonado y la Ensenada de Barragán, y un número indefinido de fondeaderos clandestinos, que se hallaban ubicados principalmente en la costa bonaerense.¹¹⁰ Coincidimos con este autor en que la dinámica de los intercambios en el litoral rioplatense sólo puede ser explicada en función a la complementariedad entre aquellas tres ciudades portuarias, que obviamente no excluyó la rivalidad.¹¹¹

No obstante, queremos agregar un elemento que permitirá comprender mejor la incidencia del surgimiento de este complejo en el proceso de atlantización de la economía regional. La puesta en funcionamiento del mismo se vio precedida por un ajuste en la delimitación de las jurisdicciones de las ciudades que lo componían, con lo cual cada una de ellas se aseguró de no tener que competir con las demás por sus recursos (fundamentalmente la tierra y los ganados). Con la fundación de Montevideo, los españoles se posicionaron firmemente a ambos lados del estuario, pero a cambio de ello, Buenos Aires debió renunciar a sus proyecciones territoriales en la Banda Oriental. Hasta entonces, los vaqueadores porteños habían podido adentrarse en ella sin otro obstáculo que el temor a un ataque de los minuanes u otras etnias no sometidas. El gobernador Zavala encargó al capitán Pedro Millán que demarcara los límites de la

¹¹⁰ Fernando JUMAR et al. “El comercio ultramarino y la economía local en el complejo portuario rioplatense, siglo XVIII” en *Anuario IEHS Instituto de Estudios histórico sociales*, Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, 2006, N° 21, Págs. 235-254.

¹¹¹ Fernando JUMAR *Le commerce atlantique au Río de la Plata...* Pág. 112.

jurisdicción de Montevideo, que fueron presentados al cabildo de esa ciudad y aprobados por éste el 24 de diciembre de ese año. El territorio que le fue asignado se extendió desde la desembocadura del arroyo de Cufre hasta las sierras de Maldonado y la Cuchilla Grande. Buenos Aires sólo conservaría su jurisdicción sobre la franja situada entre el arroyo de Cufre y el río Negro, en la que se hallaban situados el pueblo de indios Santo Domingo Soriano y la guardia de San Juan. Se trataba de la zona menos rica en ganado cimarrón por haber sido sobreexplotada. Enclavada en la costa del río de la Plata, por último, se hallaba la Colonia del Sacramento, cuyo territorio, de acuerdo con el convenio de devolución a los portugueses, sólo se extendía a una distancia de 600 toesas en redondo.

Hubo otra transformación que afectó la posición de Buenos Aires en el tráfico regional. No referimos a la aplicación de la real cédula de 18 de agosto de 1726, que otorgó a Santa Fe el privilegio de *puerto preciso*. Quienes navegasen por el Paraná conduciendo yerba, tabaco, azúcar y algodón desde el Paraguay estarían obligados a contribuir con un arbitrio al cabildo santafecino.¹¹² Se intentó así reanimar a la decaída economía ganadero-mercantil santafecina, muy afectada por las frecuentes invasiones de los guaycurúes. Al sancionar ese privilegio, la corona modificaba sus prioridades. Anteriormente había querido solventar la reconstrucción del fuerte de Buenos Aires mediante un gravamen conocido como *nuevo impuesto*, que Felipe V aplicó a la vecindad santafecina entre 1701 y 1717.¹¹³ Este gravaba al tráfico de yerba y de ganado cimarrón, y al coincidir con los frecuentes períodos de cierre de las vaquerías, se convirtió para ésta en una pesada carga. Pero con la real cédula de 1726, el monarca priorizó el ofrecimiento de recursos a Santa Fe con el objeto de financiar su defensa. Las incursiones de las etnias chaqueñas habían llevado a sus pobladores a abandonar sus estancias –salvo en los pagos situados más al sur, como Coronda y los Arroyos– y en 1725 el peligro era tan extremo que se planteó el abandono de la ciudad y su mudanza al paraje de la Bajada, en el actual territorio entrerriano.¹¹⁴ La interferencia de los guaycurúes provocó, además, el aislamiento de Santa Fe, que perdió sus propias vías de comunicación con las provincias arribeñas y desvió el tráfico yerbatero hacia Buenos

¹¹² Marina CAPUTO y Analía MANAVELLA “Rosario desde antes del Pago de los Arroyos” en Ricardo FALCÓN y Myriam STANLEY (dir.) **La historia de Rosario** Homo Sapiens Ediciones, Rosario, 2001, Pág. 46.

¹¹³ Nidia ARECES “Milicias y faccionalismo en Santa Fe, 1660-1730” en **Revista de Indias**, Instituto de Historia-SCIC, Madrid, 2002, vol. LXII, núm. 226, Pág. 599; Alejandro DAMIANOVICH “En torno a la antigüedad del privilegio santafesino de puerto preciso” en **Revista de la Junta Provincial de Estudios Históricos**, Nº 56, Santa Fe, 1986.

¹¹⁴ Nidia ARECES “Milicias y faccionalismo en Santa Fe...” Pág. 600.

Aires.

Las economías de Santa Fe y de Asunción adolecían de otro grave mal: su progresiva desmonetarización. En 1714, un testigo afirmaba que en la primera no circulaban “*otras monedas que la de yerba, tabaco, lienzo, algodón... y que con ésta se compra el trigo, el maíz, la carne, el vino y los demás mantenimientos y los géneros de Castilla y de la tierra para vestirse la vecindad*”.¹¹⁵ Esa falta de liquidez agudizó su dependencia de otra economía más monetarizada: la de Buenos Aires. Los comerciantes santafecinos y asunceños recibían de los porteños fardos de textiles europeos o bien le solicitaban sumas de plata para emprender otras transacciones, obligándose a saldar estos compromisos en la especie que era más corriente en sus provincias: la yerba. Ya hemos referido en otra parte la casi ausencia de vínculos de parentesco que se constata entre las principales parentelas de Buenos Aires y las de Santa Fe y Asunción, lo que resulta llamativo si se considera que los porteños nunca habían desdeñado concertar alianzas matrimoniales con las oligarquías de Cuyo y el Tucumán. Les resultaba evidentemente innecesario consolidar los vínculos económicos a través de las redes de parentesco, cuando podían mantenerlas subordinadas a través del endeudamiento.¹¹⁶

Al convertirse en *puerto preciso*, Santa Fe se reposicionó en los circuitos del comercio regional. El privilegio que le fue concedido estuvo lejos de arrojar los beneficios esperados, porque tanto los comerciantes de Buenos Aires como los de Asunción se opusieron a él, llevando su reclamo a la Real Audiencia de Chuquisaca, y además de eso eludieron los controles para no contribuir al arbitrio. Pero quedaba claro que la corona confería un nuevo estatus a aquella ciudad. Poco antes, los cabildos de Santa Fe y Buenos Aires habían esclarecido sus límites territoriales: en 1721 aceptaron el arroyo del Medio como hito divisorio. Cuatro años más tarde, el cabildo santafecino colocó por primera vez un alcalde de la Hermandad en el pago de los Arroyos, situado en las inmediaciones de ese deslinde.¹¹⁷ No es casual que esto sucediera casi al mismo tiempo en que se establecía la delimitación de las jurisdicciones territoriales de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo en la Banda Oriental. En esta parte de América, tocaban su fin los tiempos en que los límites jurisdiccionales entre las ciudades se proyectaban hacia un territorio impreciso, mal conocido y poco poblado. Hasta entonces, aquellas

¹¹⁵ AGN IX -40-3-5, *La ciudad de Santa Fe contra el bando relativo a la venta de tabaco, yerba y algodón*, f. 8.

¹¹⁶ Carlos M. BIROCCO “Cambio de dinastía y comercio interregional...” Pág. 375.

¹¹⁷ Darío BARRIERA *Instituciones, gobierno y territorio: Rosario, de la capilla al municipio (1725-1930)* Rosario, ISHIR-CONICET, 2010, Pág. 40; Marina CAPUTO y Analía MANAVELLA “Rosario desde antes del Pago de los Arroyos...” Pág. 30.

ciudades se habían enfrentado no por el control del espacio sino por el de un recurso: el ganado vacuno cimarrón. Pero ahora éste estaba extinto, o se hallaba en proceso de estarlo, y se estaba en los umbrales de un nuevo proceso: el de la *territorialización*. Este conduciría a una revalorización de las zonas rurales, impulsada en una economía que se sustentaba enteramente en la domesticación del ganado y el cultivo de cereales y en el asentamiento de una población permanente, los cuales serían acompañados por la imposición de nuevas formas de control y de nuevos modelos de administración y de impartición de la justicia.

BUENOS AIRES ENTRE LOS HABSBURGO Y LOS BORBONES. UN RELATO DE SU HISTORIA POLÍTICA

La investidura de un nuevo gobernador

En 1690, Buenos Aires se aprestaba a presenciar un cambio de autoridades. A ambos lados del Atlántico, el gobernador entrante y el gobernador saliente aguardaban el momento de partir. En Sevilla, donde la Casa de Contratación despachaba las autorizaciones de embarque de los que iban o venían de las Indias, ya se había aprobado la partida del sargento general de batalla Agustín de Robles, designado gobernador de la Provincia del Río de la Plata por Carlos II en marzo de ese año. Sus familiares y dependientes se encontraban ya en Cádiz, preparados para embarcarse en los navíos de registro de Francisco de Retana: su esposa Ana de Monforte, sus tres hijos, su madre anciana y cuatro criados. Robles pasó esos días de espera visitando a los mercaderes de esclavos de aquel puerto, pues su licencia de embarque incluía el permiso de transportar cuatro negras y cuatro negros que podría vender ventajosamente del otro lado del océano. En ese mismo momento, Joseph de Herrera y Sotomayor, que se preparaba para dejar el gobierno Buenos Aires, escribía a la Casa de Contratación solicitándole un permiso de embarque. Si lograba sobrellevar sin sobresaltos el juicio de residencia a que lo sometería su sucesor, toda su familia –su esposa María de los Ríos, sus cuatro hijos varones, una huérfana a la que criaron, tres sirvientes y dos esclavos negros– habría de abordar los primeros navíos de registro que llegasen al puerto para volverse a España.

El gobernador entrante y el saliente se distinguían por haber accedido al cargo por vías distintas. El ascenso de Herrera tuvo bastante de accidental: cuando su antecesor, Joseph de Garro, debió alejarse de Buenos Aires para hacerse cargo de la capitanía general de Chile le confirió el interinato del gobierno, en el que un año más tarde fue confirmado por el Duque de la Palata, virrey del Perú. Robles, en cambio, había sido elegido entre otros muchos candidatos por el Consejo de Indias. Pero en lo demás mostraron muchas similitudes. Los dos provenían del mundo de las armas. Habían hecho parte de sus carreras en los campos de batalla de Flandes y podían alardear de una larga lista de servicios militares al rey. Ninguno de ellos, por otra parte, había accedido al cargo por

medio de la venalidad.¹¹⁸ Tuvieron también un estilo parecido de gobierno: se dejaron tentar fácilmente por el contrabando y por la corrupción, aunque los rechazaron firmemente desde la retórica. Incluso se asemejaron en sus deseos de ostentar la opulencia. Herrera había ordenado edificar una lujosa mansión en las inmediaciones de los conventos, con una fachada adornada de cornisas y capiteles y una docena de cuartos y oficinas, pero Robles logró superarlo al mandar construir otra mucho más grande en el Retiro, con más de cuarenta habitaciones, que sin embargo nunca llegaría a ocupar.

Herrera y Robles se mantuvieron durante largo tiempo en el gobierno: casi una década cada uno. Aunque los nombramientos solían ser por cinco años, ambos habían sido prorrogados en el mando a pedido del cabildo, que confiaba en el talante decidido de estos dos viejos soldados frente a la amenaza de una incursión naval francesa. Con frecuencia la historiografía ha contrapuesto la propensión a la venalidad de los Habsburgo con la tendencia a la burocratización de los Borbones, que ordenaron la supresión de la venta de cargos y la concesión de las gobernaciones periféricas a militares de carrera. Por lo menos en el Río de la Plata, ese supuesto contraste merece ser revisado, ya que hasta 1715 el orden pareciera haber sido el inverso. Entre 1630 y 1680, todos los gobernadores de esta provincia que habían recibido su nombramiento en Madrid contaban con una foja de destacados servicios militares, independientemente de que alguno hubiera ocupado el puesto por medio de la venalidad.¹¹⁹ Y desde que los portugueses se introdujeron en el estuario y fundaron la Colonia de Sacramento, la administración Habsburgo se había preocupado por reforzar esa política, poniendo al frente de la misma a militares experimentados y militarizando la ciudad con reiterados envíos de soldados. Pero cuando Felipe V llegue al poder, la situación se revertirá y se sucederán tres gobernadores que habían comprado sus empleos en Madrid.

Los navíos de registro de Retana arribaron a Buenos Aires en los primeros días de abril de 1691. Respetando el protocolo, Robles permaneció con su familia en la nao en

¹¹⁸ Herrera ya se encontraba en Buenos Aires cuando asumió la gobernación, por lo que la instancia de la adquisición del empleo por medio de la compra no se presentó. En cuando a Robles, recibió el cargo en virtud a sus servicios, sin haber pagado por él; Ángel SANZ TAPIA “Leoneses en cargos de gobierno indios a fines del siglo XVII” en **Estudios humanísticos** Universidad de León, 2005, N°. 4, Pág. 259.

¹¹⁹ “El perfil militar de los funcionarios a cargo de la representación gubernativa en Buenos Aires fue una constante. De los 13 Gobernadores que ejercieron el cargo en la ciudad desde 1630 hasta 1680, todos los que fueron nombrados desde Madrid, tenían una vasta experiencia militar. 8 de ellos eran Maestres de Campo, mientras 2 habían alcanzado el grado de Capitán”; Oscar TRUJILLO **Consenso, negociación y conflicto en la Monarquía Hispánica: La élite de Buenos Aires en el XVII** Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de Luján. 2012, Págs. 204-205.

que se habían embarcado, y desde allí envió sus cartas de presentación a las autoridades locales. El 3 de ese mes, Herrera se apersonó en la casa del cabildo y presentó una misiva en la que aquel les había saber que había sido nombrado gobernador. Los presentes dejaron sentado en el acta de esa jornada que le responderían “*con la [mayor] brevedad posible*”, lo que significaba que se tomarían algún tiempo antes de recibirlo.¹²⁰ La ceremonia de recepción era la única pieza en el complejo engranaje ritual que aún faltaba activarse, y los cabildantes, conscientes de que su reconocimiento resultaba imprescindible para que Robles fuese investido en su cargo, sabían que el manejo de los tiempos estaba en sus manos. Pero en este caso la demora fue breve. Tres días más tarde, éste entraba en la sala de reuniones del ayuntamiento y entregaba los pliegos de su nombramiento al escribano del cabildo, que dio fe de que había sido firmado por el rey. Diego Pérez Moreno, el regidor decano, los besó y los puso sobre su cabeza: era una señal de sometimiento y respeto al soberano, que estaba físicamente distante pero se hacía presente mediante la lectura ritual de los documentos reales, enriquecida por gestos y ceremonias como éstos.¹²¹ Luego todos corearon la expresión ritual: “*Se obedece, que se cumpla y ejecute*”. Sólo entonces Robles pudo proceder a jurar su cargo y así se completó el ritual del recibimiento.¹²² Sus familiares recibieron la indicación de descender de la nao y acomodarse en las habitaciones que los aguardaban en el fuerte, donde en atención a las reglas del ceremonial local, el gobernador y los suyos iban a gozar del derecho de “despensa” que les aseguraba el cabildo, quien se obligaba a no hacerles faltar provisiones ni leña durante sus primeras semanas en la ciudad.

Agitación en el Presidio de Buenos Aires

El gobierno de Agustín de Robles coincidió con uno de los picos de mayor tensión en la guerra francohispana. Aunque la disputa territorial entre ambas potencias se centraba en Flandes, el teatro de la contienda se extendió a las dependencias españolas en América. El puerto de Buenos Aires vivió por lo menos tres veces la amenaza de una

¹²⁰ Archivo de Extinto Cabildo de Buenos Aires [en adelante AECBA] Serie I, Tomo XVII, Págs. 349-350.

¹²¹ Poner una carta del rey sobre la cabeza “tenía el simbolismo de someter a la soberanía y humillar al órgano por antonomasia del hombre como guarda y contenedora de los más nobles atributos: la memoria, la inteligencia y la libertad”; Manuel ROMERO TALLAFIGO “Las ceremonias de recepción del documento real en los cabildos municipales del Antiguo Régimen” en Manuela Cristina GARCIA BERNAL y Sandra OLIVERO (coord.) **El municipio indiano: relaciones interétnicas, económicas y sociales. Homenaje a Luis Navarro García** Universidad de Sevilla, Sevilla, 2009, págs. 445-459.

¹²² AECBA Serie I, Tomo XVII, Págs. 350-352.

invasión. En 1693 unos corsarios franceses se apostaron a la salida del estuario, al asecho de los navíos que salían de él. Cuatro años más tarde se supo que una escuadra francesa dirigida por el Barón de Pointis había saqueado la ciudad de Cartagena de Indias, noticia que al propagarse causó pavor en todo el virreinato. Enterado de que una docena de esas naves se hallaba apostada en Río de Janeiro para poner proa hacia el Río de la Plata, Robles recurrió al auxilio de la Compañía de Jesús, que le envió desde las Misiones del Alto Paraná un contingente de 2000 guaraníes armados para que defendiesen la ciudad. Estos, encabezados por tres capellanes de la orden, se limitaron a desfilar frente a la vecindad, haciendo ostentación de una rígida disciplina militar, y ni bien se supo que la ciudad estaba fuera de peligro se los hizo regresar a su tierra, pues no soportaron la crudeza del otoño porteño.¹²³ La tercera alerta se produjo en 1700, cuando una flota dinamarquesa que merodeaba por el Atlántico sur se acercó al estuario con el propósito de asaltar el puerto, aunque terminó por alejarse sin ingresar a él. Pero las tropas de guaraníes fueron solicitadas nuevamente en Buenos Aires, esta vez en número de 3000.¹²⁴

Buenos Aires era entonces la sede de un Presidio militar: allí se acuartelaba una guarnición rentada por la corona. La ciudad no estaba rodeada de murallas y su único bastión defensivo era el fuerte de San Juan Baltasar de Austria, un mediocre cuadrángulo construido en adobe que se hallaba situado entre la Plaza Mayor y la barranca del río, desde el que no se hubiera podido resistir una acometida de magnitud. En las dos décadas anteriores, los navíos de registro habían colaborado en transportar contingentes de soldados para aumentar el número de plazas. En los tiempos de Robles, se hallaban destacados unos 800 hombres, entre soldados y oficiales. Los sueldos de la tropa eran abonados por medio del *Real Situado*, un sistema de transferencias por el que se solventaba a los Presidios desde el sitio de acuñación de la moneda.¹²⁵ En el caso de Buenos Aires, el pago era girado desde las Reales Cajas de Potosí, pero esta

¹²³ **Correspondencia de la ciudad de Buenos Ayres con los reyes de España. Documentos del Archivo de Indias.** Edición preparada por Roberto Levillier, Tomo III (1660-1700), Págs. 496-501.

¹²⁴ El 29 de julio de 1700, se tuvo noticia de que “*el enemigo de Europa está para venir a invadir este puerto*” y se dio cuenta de ello al presidente de la Audiencia de Chile y al virrey. Se previno a las milicias de la Provincia y a las de Tucumán que estuvieran alertas y se solicitó al superior de las Misiones “*que bajen prontamente a esta plaza tres mil indios de armas con las milicias referidas*”; Archivo General de la Nación [en adelante AGN] IX-13-8-9 *Libro de Acuerdos de la Real Hacienda (1677-1710)*.

¹²⁵ Sobre el sistema de *Reales Situatedos*, puede consultarse: Carlos MARICHAL y Matilde SOUTO MANTECÓN “Silver and Situatedos: New Spain and the financing of the Spanish Empire in the Caribbean in the eighteenth century” en **Hispanic American Historical Review** Duke University, 1994, N° 74:4, Págs. 587-613; Rafael REICHERT “El situado novohispano para la manutención de los presidios españoles en la región del Golfo de México y el Caribe durante el siglo XVII” en **Estudios de historia novohispana** Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM 2012, N° 46, p. 556-631.

operación solía a veces retrasarse por años. Las condiciones de la vida militar en Buenos Aires, que eran especialmente duras entre la soldadesca, se hicieron más penosas a causa de esa demora y las deserciones parecen haber sido bastante frecuentes. A comienzos de 1693, cuando el pago de los sueldos se había atrasado ya por dos años, se descubrió una conspiración entre los acuartelados y Robles castigó a los cabecillas antes de que sublevaran al resto de la tropa.¹²⁶ En enero de 1697, habiendo pasado casi siete años sin que se liquidase la paga, se produjeron algunos disturbios en la guarnición, que acompañaron el descontento general de la población española por un aumento en el precio del trigo. El clima de tensión llegó a su máxima expresión cuando dos oficiales y un soldado asaltaron la casa de un vecino y le causaron la muerte. Este estallido logró ser contenido con bastante dificultad y Robles mandó ejecutar en forma sumaria a cuantos se hallaron implicados en el motín.¹²⁷

Para contener a los militares del Presidio, este gobernador organizó la entrega de provisiones y vestuario a cuenta de sus futuros sueldos. Las mismas se sustanciaban a través de vales que sólo podían ser canjeados en los almacenes señalados para ello. Esa distribución de *socorros* a oficiales y soldados no era cosa nueva, sino que varios de sus antecesores habían sustentado de esa forma el consumo básico de la población militar. Para el gobernador y sus allegados se convirtió en un negocio muy lucrativo, pues cuando el *Situado* llegaba a Buenos Aires los sueldos pasaban directamente a manos de los proveedores, que cancelaban así las deudas que los militares tenían con ellos. El grueso de los *socorros* solía recaer en algún personaje allegado al mandatario de turno, en cuya tienda se abastecía a algunas o a la totalidad de las compañías. Robles confirió esta prebenda al general Miguel de Riblos, que se había enriquecido gracias al comercio de mulas con las provincias arribeñas, y que tenía un gran ascendiente sobre los demás oficiales.

No era la primera vez que Riblos ingresaba a la camarilla de un gobernador. Ya Joseph de Herrera y Sotomayor le había mostrado su favor, otorgándole la tenencia de gobernación de la ciudad de Santa Fe y poniéndolo luego a la cabeza de la *Compañía de los Gobernadores*, una especie de “guardia de corps” que tenía a su servicio, honor que

¹²⁶ **Correspondencia de la ciudad de Buenos Ayres...** Tomo III, Pág. 283.

¹²⁷ En el juicio de residencia se acusaría a Robles, en efecto, de haber permitido que “*los soldados de este Presidio se hallasen en la suma miseria de desnudez y hambre por falta de pagas y socorros, estándoseles debiendo siete años devengados, de que resultó un motín entre algunos soldados de este Presidio, ejecutando después una muerte alevosa y otros excesos...*”. Se sabe que dos alféreces y un soldado raso asaltaron la casa de un vecino, causándole la muerte; AGN IX-42-2-6 *Juicio de residencia a Agustín de Robles*.

aquel agradeció costear la paga de veinte soldados. Pero fue Robles quien lo convirtió en su *privado*, confiándole el manejo de sus negocios personales, tanto particulares como públicos. En 1693, cuando se cernían sobre Buenos Aires las primeras amenazas de invasión francesa, éste le confirió el cargo de teniente de gobernador.¹²⁸ Cuatro años más tarde, ante la inminente invasión de la escuadra del Barón de Pointis, lo nombró *cabo y gobernador de la caballería del Presidio* y lo colocó al mando de toda la guarnición. El grueso de los gastos para la defensa de la ciudad recayó sobre Riblos, quien hizo construir a su costa en los astilleros del Paraguay dos embarcaciones con las que patrullar el estuario, para lo cual remitió a Asunción barras de hierro, oficiales de lima y peones.¹²⁹ Puso asimismo a disposición de Robles 20.000 pesos con que financiar el rearme de la plaza.

Cuando se le encargó que abasteciera de raciones y de vestimenta a todas las compañías del Presidio, Riblos les abrió sus almacenes y asentó los suministros en un libro de cuentas.¹³⁰ Pero no sólo lo auxilió a Robles en los asuntos públicos, sino que administró también sus negocios privados. Uno de los motivos por los que se conservó en la privanza del gobernador fue por hallarse preparado para responder a sus necesidades de crédito.¹³¹ Como las leyes de Indias impedían a este último participar en el comercio con las regiones vecinas, los enmascaró con la excusa de socorrer las necesidades de la ciudad y confió su ejecución a Riblos. En 1692, al iniciarse en el Paraguay la construcción de las embarcaciones para la defensa del estuario, éste envió a Asunción 30.000 pesos en mercaderías que, con el pretexto de solventar los gastos, convirtieron la empresa en redituable.¹³² La iglesia catedral de Buenos Aires se hallaba

¹²⁸ AGN IX-48-8-1, *Escribanías Antiguas (1693-1694)*, f. 145v.

¹²⁹ La armazón de estos navíos había sido comenzada unos cinco años antes, en 1692, pero fue estorbada por Sebastián Félix de Mendiola, gobernador del Paraguay, que paralizó las obras hasta mediados de 1697. El 25 de junio de ese año Robles facultó a Riblos para viajar a esa provincia y acelerar la construcción, urgido por la amenaza francesa. Riblos había ofrecido fabricar las embarcaciones “a su costa en el astillero de la provincia del Paraguay para el servicio de Su Majestad y resguardo de este puerto sin el menor costo de la Real Hacienda”; AGN IX-42-2-7 *Juicio de residencia a Agustín de Robles*.

¹³⁰ No se conservaron esas contabilidades, pero entre los papeles que años más tarde se encontraron en el despacho de este mercader figuraban “unos autos obrados por el señor don Agustín de Robles sobre los socorros de vestidos y comidas que mandó dar a don Miguel de Riblos para la guarnición de este Presidio” y se menciona un libro de cuentas que contenía “lo que deben los soldados de este Presidio a don Miguel de Riblos”; AGN Sucesiones 8122, *Concurso de bienes de Miguel de Riblos*.

¹³¹ Refiriéndose al gobierno de Robles, este comerciante afirmará haberse hallado entonces “con el primer caudal y crédito de esta ciudad”; AGN Sucesión 8122, *Concurso de los bienes de Miguel de Riblos*.

¹³² La memoria de los artículos remitidos por Riblos al Paraguay incluye efectos europeos (holandillas, sombreros de breda) pero también de la tierra (sombreros de vicuña); a estos agregó 80 docenas de cuchillos, 75 libras de acero y una fragua vieja, a la espera de sacar tajada de la crónica escasez de metales ferrosos que sufría esa provincia; AGN IX-42-2-7 *Juicio de residencia a Agustín de Robles*.

por entonces en un estado ruinoso y el gobernador decidió costear las reparaciones. Para ello encargó a Riblos que reuniera una tropa de más de 30.000 vacunos cimarrones y los enviase a Jujuy, donde la esperaba Juan de Robles Lorenzana, secretario del Tribunal de la Inquisición en Lima y hermano del gobernador, al que habían otorgado un poder para la colocación de “mulas, vacas, yerba y otros cualesquiera géneros de frutos y mercaderías” en el mercado peruano.¹³³ Esta venta del ganado solventó las refacciones del templo y contribuyó al enriquecimiento del gobernador y de su privado.

En los últimos años del siglo XVII los negocios de Riblos, apoyados en la vastedad de la red de conexiones que poseía en interior del virreinato, adquirieron un sesgo monopolístico y provocaron la quiebra de otros comerciantes de menor envergadura. Al punto de que los vecinos de la ciudad lo acusaron de haber convertido la venta de yerba y de otros productos provenientes de Asunción, Santa Fe y Corrientes en una suerte de estanco.¹³⁴ Su intromisión en el comercio interregional generó la misma oposición en Asunción, donde el gobernador Sebastián Félix de Mendiola intentó entorpecer la construcción de las embarcaciones. Riblos retribuyó el apoyo de Agustín de Robles con generosos desembolsos en metálico, parte de los cuales jamás fueron saldados.¹³⁵ Cuando luego de afrontar un controvertido juicio de residencia este último se preparó para regresar a España, intentó liquidar una parte de esos compromisos transfiriendo a su acreedor la mansión del Retiro, el palacio gubernativo que había mandado edificar pero que nunca habitó, valuado en unos 40.000 pesos. Riblos la alquilaría a los directores de los asientos negreros, que usarían algunas de sus habitaciones como oficinas administrativas y otras para barracas para los esclavos.

El cabildo presenta sus demandas en Madrid

A fines del siglo XVII, el ayuntamiento de Buenos Aires contaba con un ínfimo número de miembros. De los empleos que contaban con voz y voto, es decir, con capacidad de deliberar en la sesiones, sólo quedaban un regidor, una alguacil mayor y los dos alcaldes ordinarios elegidos anualmente. Hasta 1697 también hubo un alcalde

¹³³ AGN IX-48-8-2, *Escribanías Antiguas (1696-1703)*, fs.19 y 107.

¹³⁴ La participación de Riblos en el comercio con estas ciudades litorales se convirtió, según sus contemporáneos, en un “estanco público, especialmente en tiempo que gobernó don Agustín de Robles, de todas las mercaderías y frutos del Paraguay, Corrientes, Santa Fe y otras partes” AGN IX-42-2-7 *Juicio de residencia a Agustín de Robles*.

¹³⁵ Al morir Riblos en 1720, sus herederos apuntaron que el difunto Robles había quedado debiendo 7380 pesos y 2 reales; AGN IX-49-1-2 *Escribanías Antiguas (1720-1721)*, f. 512.

provincial de la Hermandad, pero tras la muerte de su titular el cargo quedó vacante. Así concluía el proceso de vaciamiento de la planta concejil que venía experimentándose desde la década de 1670, a medida que los regidores y otros oficiales venales nombrados en 1664 por la efímera Real Audiencia de Buenos Aires fueron abandonando sus empleos, sin que estos volvieran a cubrirse. Este proceso corrió en paralelo con la pérdida de varias de las facultades corporacionales en manos de los gobernadores, particularmente las vinculadas con su intermediación en el tráfico portuario y la administración de los recursos comunales.

El ayuntamiento clamó contra ese despojo. El aparato administrativo de la monarquía le facilitaba un marco de negociación que daba cabida a la presentación de denuncias contra los excesos de virreyes y gobernadores y al reclamo de una reparación o de compensaciones. Debido a que el monarca garantizaba a sus súbditos el derecho de acercarle peticiones, las élites criollas, representadas por los ayuntamientos de las ciudades, tuvieron el camino franqueado para elevar sus propuestas o sus protestas al Consejo de Indias, quien resolvía cada caso en forma individual y no se expedía sin haber antes realizado consultas a jurisperitos, pedido testimonio a los agentes de la administración que se hallaban implicados y analizado concienzudamente un corpus legal que a menudo se prestaba a interpretaciones contradictorias. Mediante la utilización de esos canales no siempre conseguían que se derogaran las normas o se modificaran situaciones conflictivas, pero los ayuntamientos americanos eran plenamente conscientes de que la resolución de los pleitos podía prolongarse durante años y que mientras tanto podían aprovecharse del estado de indefinición de la causa para actuar de la manera que más le conviniera. Esto ocurría en el momento de mayor autonomía de las oligarquías criollas, que abarcó los reinados de Felipe IV y Carlos II y los primeros años de Felipe V: fue el período en que según Pietschmann hubo mayor acercamiento entre la corona hispánica y las oligarquías criollas, que pudieron servirse de la burocracia imperial para gestionar mejoras que se acomodasen a sus intereses.¹³⁶

El malestar que existía en la dirigencia concejil porteña a causa de la pérdida de las facultades corporacionales fue expresado en varios informes y memoriales que presentó al Consejo de Indias. Paradójicamente, mientras esto ocurría el cabildo de Buenos Aires solicitó a los consejeros de Carlos II que prorrogaran el mandato de un gobernador en

¹³⁶ Horst PIETSCHMANN “Los principios rectores de la organización estatal en las Indias” en Antonio ANNINO y François-Xavier GUERRA **Inventando la nación: Iberoamérica, siglo XIX** México DF, Fondo de Cultura Económica, 2003, Págs. 53-55 y 66.

por lo menos cuatro oportunidades: a favor de Joseph de Garro en 1680, de Joseph de Herrera y Sotomayor en 1683 y de Agustín de Robles en 1693 y 1698.¹³⁷ En dos de esas ocasiones la corona accedió a conceder esa extensión. Esto constituye una clara muestra del peso que tenía para la administración de los Habsburgo el diálogo con las corporaciones ciudadanas en el proceso de toma de decisiones. El contraste con la administración borbónica, en este punto, es absoluto. Un siglo más tarde, llevar a cabo una acción de esa naturaleza se hubiera considerado un acto de sedición, o por lo menos de mucha temeridad. Cuando en 1777 el ayuntamiento porteño se atrevió a enviar una representación a Carlos III para rogarle que el virrey Pedro de Ceballos permaneciera en su cargo, fue severamente amonestado por excederse en sus atribuciones y se amenazó con desterrar a las islas Malvinas a quienes habían firmado esa petición.¹³⁸

Ahora bien, ¿no era una contradicción respaldar la continuidad de un gobernador que se inmiscuía en asuntos que eran de clara competencia del cabildo? Nosotros preferimos hablar de un movimiento pendular. Al comienzo de su gestión, el gobernador solicitaba a algunos de los miembros de la oligarquía local que actuaran como sus fiadores, requisito que le imponía la corona para poder asumir al cargo, con lo que se producía un primer acercamiento a ésta. Ya afianzado en su empleo, exploraba las posibilidades de enriquecimiento que se le ofrecían y trataba de aprovecharlas, dando participación a un reducido sector de los vecinos y entrando en coalición con el resto. Los reclamos contra la usurpación de las facultades corporacionales solían estallar en ese momento, ocultando tras de sí el recelo de quienes se veían excluidos de los negociados. Con el transcurso de los años, la vecindad se acomodaba al estilo del gobernante (salvo en los casos en que ese estilo se volvió intolerable, como había sucedido en las décadas anteriores con Jacinto de Laris y en menor medida con Andrés de Robles) y se establecía una convivencia que podía ser amable o tensa. En el primero de los casos, el cabildo podía solicitar al Consejo de Indias que el mandato fuera extendido, como una forma de prolongar ese *status quo*.

Pero ello nunca condujo a que el cabildo de Buenos Aires renunciara a presentar sus reclamos a la monarquía. En 1685 elevó un memorial al rey en que protestaba contra “*las extorsiones de los Gobernadores*”.¹³⁹ En él, sin embargo, sólo se refirió tangencialmente a la merma de sus facultades corporacionales en manos de estos. Los

¹³⁷ **Correspondencia de la ciudad de Buenos Ayres...** Tomo III, Págs. 124-125, 150, 283-286, 491-495.

¹³⁸ Laura Cristina del VALLE **Los hijos del poder. De la élite capitular a la Revolución de Mayo: Buenos Aires 1776-1810** Prometeo, Buenos Aires, 2014, Págs. 227-230.

¹³⁹ **Correspondencia de la ciudad de Buenos Ayres...** Tomo III, Págs. 181-187.

acusó de haber recreado un dispositivo policíaco-carcelario paralelo al que poseía el cabildo, pues disponían que los reos fueran encerrados en las torres del fuerte y no en la cárcel pública, y se valían para detenerlos de piquetes de soldados, cuando eso era competencia del alguacil mayor. Se centró más bien en la defensa de los privilegios oligárquico-estamentales: solicitó que se diera preferencia a los vecinos para cubrir los oficios políticos y militares que quedasen vacantes y que estos no fuesen obligados a acudir con sus armas y caballos a hacer malocas contra los indios, requiriéndoseles que se formasen en cuerpos de milicias sólo en el caso de que la ciudad corriera el riesgo de una invasión enemiga. El grueso de sus requerimientos, no obstante, estaba dirigido a conseguir la rehabilitación de Buenos Aires como puerto atlántico. El ayuntamiento suplicó que se le devolviera a la ciudad el derecho de remitir anualmente dos navíos a Cádiz, que había caducado en 1619, y sugirió que se enviaran todos los años a esta puerto uno o más navíos de registro, cuando por entonces no arribaban a él sino cada cuatro o cinco años. Ninguna de esas demandas fue atendida.

El cabildo volvió a presentar sus reclamos a la corona en 1695. Esta vez no lo hizo por escrito, sino que envió una diputación a la corte de Madrid, compuesta por los dos vecinos, Gabriel de Aldunate y Rada y Juan de Prada y Gayoso, que pasaron a la península en los navíos de registro de Francisco Retana.¹⁴⁰ El ayuntamiento había “aceitado” previamente los mecanismos de negociación: les confió dos cartas, una pidiendo la renovación del mandato de Agustín de Robles y otra ponderando el celo que éste había puesto en contener a los portugueses dentro de los límites de la Colonia de Sacramento, con lo que evitaron que este gobernador entorpeciera la misión; paralelamente, inició una colecta entre los vecinos para ofrecerle un “donativo gracioso” en plata al rey. La representación, que finalmente fue llevada a solas por Aldunate, que concentró parte de sus esfuerzos en conseguir la recuperación de las facultades corporativas. El Consejo de Indias no ignoraba lo escasas que eran las rentas con que contaba la ciudad, por lo que aquel le solicitó que se permitiera al cabildo enviar de su cuenta un patache de 200 toneladas cargado de frutos de la tierra a Cádiz, para poder con ello solventar el ceremonial público y construir un nuevo edificio donde sesionar. Pero no le fue concedido. Luego presentó las *Ordenanzas* del cabildo, un cuerpo de normas que regía el funcionamiento del gobierno municipal y que aunque había sido redactado en 1664 aún no había sido aprobado por el Consejo. También solicitó ampliar

¹⁴⁰ *Correspondencia de la ciudad de Buenos Ayres...* Tomo III, Págs. 188-193.

el *staff* de oficiales concejiles permitiendo que la corporación nombrase cada año seis regidores, en atención a que no había vecinos con suficiente caudal para comprar esos cargos.

No faltaron reclamos en defensa de las prerrogativas oligárquico-estamentales de los vecinos, por ejemplo cuando se denunció a los militares por abrir tiendas de comercio, por abastecer a los navíos de registro y por haber ejercido el cargo de corregidores de los pueblos de indios, prebendas que deberían haber estado reservadas a las principales familias de la ciudad. Aldunate combatió la arbitrariedad de los gobernadores para con la vecindad en un caso concreto. Desde los tiempos de Joseph de Herrera y Sotomayor, se había impuesto a los vecinos un tributo de la tercera parte de las maderas que cortasen en las islas del Paraná y se les habían impedido que pasasen a hacer leña y carbón en la Banda Oriental. Aquel pidió al Consejo de Indias que se diera fin a esas imposiciones y consiguió que éste reiterara una real cédula de 1676 que garantizaba a los vecinos el derecho a cortar maderas libremente.

La gestión de Gabriel de Aldunate obtuvo pocos resultados en el plano económico. Reiteró algunos de los pedidos del memorial de 1685, como el derecho de enviar dos navíos a Cádiz, y agregó otros nuevos, como la solicitud de que los navíos de permiso ingresasen esclavos a Buenos Aires, pero le fueron denegados. Tampoco consiguió que se restituyera al cabildo la facultad de negociar la venta de cueros con los capitanes de los navíos de registro, que le había sido arrebatada en 1677, cuando se otorgó a dichos capitanes la libertad de concertar la compra de corambre con quienes quisiesen. Aldunate argumentó que de esa manera, los registreros pasaban por encima de los derechos de los *vecinos accioneros*, que eran los propietarios del ganado cimarrón, y podían adquirir las pieles de toro a cualquiera que se adentrase a las pampas a vaquear sin contar con la autorización del cabildo para hacerlo. En este plano, el único logro relevante fue el desplazamiento de la aduana seca de Córdoba a Jujuy, con lo se permitió que los comerciantes de Buenos Aires traficaran libremente con el Tucumán.¹⁴¹

En el orden político, en cambio, no puede negarse que la misión de Aldunate fuera exitosa. Se consiguió la ampliación de la planta concejil gracias a un despacho del rey por el que ordenaba sacar a subasta seis nuevas regidurías. Contra lo que se había pedido, éstas no serían electivas y anuales sino venales y vitalicias, saciando con ello las necesidades pecuniarias de la monarquía. También se obtuvo la aprobación de las

¹⁴¹ Las peticiones y presentaciones de Gabriel de Aldunate y las respuestas del Consejo de Indias han sido publicadas en: **Correspondencia de la ciudad de Buenos Ayres...** Tomo III, Págs. 289-487.

Ordenanzas del cabildo. Pero quizás el mayor logro de esta gestión haya sido modificar el *status* que poseía la ciudad de Buenos Aires en el seno de la monarquía hispánica. Aldunate acusó a los gobernadores de haber “*atendido más a lo militar que a lo político*” y de alterar el ceremonial cívico-religioso, no respetando el orden de las *precedencias* que aseguraban a los miembros del cabildo los asientos más honrosos en la iglesia o en los palcos que se montaban durante las fiestas. Con tamaña falta de consideración, Agustín de Robles y sus predecesores no sólo habían insultado a los cabildantes sino al cabildo como *cuerpo*, en atención a que se trataba del órgano representativo de la vecindad de una ciudad que era cabecera de una gobernación. El diputado de la corporación exigió que se diera a Buenos Aires “*el tratamiento que le toca por ciudad capital*”. El 31 de diciembre de 1695, Carlos II respaldó su pedido con una real cédula que declaraba a esta ciudad “*capital de las Provincias del Río de la Plata*”. Ordenó que en adelante fuera “*atendida y tratada como tal y se le guarden y hagan guardar las honras, preeminencias, prerrogativas, inmunidades y excepciones que por esta razón le pertenezcan y deban guardársele según y como se hace con las demás ciudades capitales de las otras provincias de mis Reinos de las Indias*”.¹⁴² Con ello no sólo se aumentaban los privilegios de que debía disfrutar el ayuntamiento como cuerpo, que a partir de entonces serían análogos a los que gozaban los “grandes de España”, es decir, la alta nobleza peninsular. También se reconsideraba el rango que tenía Buenos Aires en el conjunto de las ciudades americanas, pues el protocolo regio le reservó desde entonces un lugar por detrás de las capitales de los virreinos.

La jura de un nuevo rey

En enero de 1698, el ayuntamiento porteño enviaba un informe al rey ensalzando la labor de Agustín de Robles y pidiendo que se lo prorrogara en el mando. No hubo tiempo de esperar la respuesta del Consejo de Indias: a finales de agosto recibía un pliego en que se anunciaba la llegada de su sucesor, Manuel de Prado y Maldonado. Cuando fue leído, surgió entre los presentes la preocupación por ofrecerle un recibimiento honroso y se encargó a uno de los alcaldes ordinarios que tomara providencias para “cortejarlo” a su llegada con viandas decentes. Pero aunque arribó a Buenos Aires en mayo de 1699 a bordo de los navíos de registro de Carlos Gallo Serna,

¹⁴² AGN RC 757 *Estatutos y Ordenanzas de la ciudad de Buenos Aires (1695)*.

no sería recibido por la corporación hasta el 5 de febrero del año siguiente.¹⁴³ Por primera vez en varias décadas, quien se hacía cargo del gobierno no era un militar de carrera sino un magistrado civil, que anteriormente había sido regidor del ayuntamiento de Sevilla y funcionario de la Casa de Contratación. Al nuevo gobernador del Río de la Plata le tocaría saludar la entronización de los Borbones.

A Prado y Maldonado también le correspondería hacer cumplir una real cédula de Carlos II, fechada en 1695, que ampliaba la planta del cabildo con la creación de seis regidurías. Este incremento, como se recordará, se debía a la gestión de Gabriel de Aldunate en la corte de Madrid. Se dispuso que éstas, al igual que otros dos empleos venales, el alferazgo real y la alcaldía provincial de la Hermandad, fueran sacadas a almoneda para que pudieran ser compradas por los vecinos de la ciudad. El 18 de marzo de 1701, el gobernador presentó al cabildo los títulos de los seis nuevos regidores. Ese mismo día, cuatro de ellos tuvieron su ceremonia de recepción, mientras que los dos restantes debieron posponerla por hallarse fuera de la ciudad. Tres de estos nuevos integrantes del cabildo eran descendientes de las familias más antiguas de la ciudad: Baltasar de Gaete era biznieto de un *vecino conquistador* de Buenos Aires, mientras que Fernando Rivera Mondragón y Juan de Castro Naharro eran el uno hijo y el otro nieto de dos *segundos pobladores*. Pero otros dos regidores pertenecían a una parentela que lograría en unos años ejercer un poder hegemónico sobre la corporación: el clan de los Samartín, representado por Joseph de Arregui y Baltasar de Quintana Godoy.

Seis días más tarde, Prado comunicaba a los oficiales de la Real Hacienda la noticia de que el rey había muerto. El trascendido llegó a Buenos Aires desde la otra orilla del estuario. “*Con la ocasión de haber llegado un navío a la Colonia del Sacramento, población de los portugueses –les escribió– se hallaba con noticias de haberse llevado Dios para sí a nuestro Rey y Señor Dn Carlos Segundo y que éstas las confirmaban varias cartas misivas escritas de España a particulares que se hallaban en esta ciudad*”.¹⁴⁴ Inmediatamente se envió a un soldado a Chuquisaca y a Lima para informar del suceso a los oidores y al virrey. La comunicación oficial del deceso no se produjo hasta el 17 de agosto. El cabildo se sumó al luto y declaró suspendidas las corridas de toros que iban a realizarse unos meses más tarde en honor al Patrono San Martín de Tours.

Cuando los ecos de la noticia de la muerte del último de los Habsburgo llegaban a los

¹⁴³ AECBA XIII-588

¹⁴⁴ AGN IX-13-8-9 *Libro de Acuerdos de la Real Hacienda (1677-1710)*.

márgenes del virreinato del Perú, en Madrid ya hacía varios meses que se había puesto en marcha el ceremonial de ungimiento y coronación del nuevo soberano. El 8 de mayo de 1701, el Duque de Anjou, sobrino nieto del fallecido, había recibido su cetro, su corona y el nombre de Felipe V en la iglesia de San Gerónimo el Real. En la América española, las vecindades criollas acataron casi sin excepción el recambio dinástico. Ello se debió a que éste tomó control de inmediato sobre el aparato administrativo de la monarquía y se cercioró de que los funcionarios de la corona que se hallaban del otro lado del océano le ofrecieran muestras de su lealtad. No hubo virreyes, oidores ni gobernadores que cuestionaran los derechos hereditarios del nuevo rey. En cuanto a los cabildos, uno solo se le opuso: el de la ciudad de Caracas. Cuando las pretensiones al trono español del archiduque austríaco Carlos de Habsburgo, otro de los sobrinos de Carlos II, provocaron el estallido de la Guerra de Sucesión, la élite caraqueña se proclamó a favor de éste. Ello se debió a que el diplomático austriaco Bartolomé de Capocelato promovió la propaganda filoaustríaca desde la cercana isla holandesa de Curaçao, donde fijó para ello su residencia, pero fue capturado cuando visitaba furtivamente Venezuela. También el gobernador británico de Jamaica, Lord Bembow, intentó ganar apoyos para el archiduque, infiltrándose por medio de espías en las posesiones españolas del Caribe.¹⁴⁵ Su plan era fomentar el surgimiento de facciones a favor del pretendiente austríaco y promover una guerra civil entre éstas y las que simpatizaban con los Borbones. Que se sepa, sólo llegó a conformarse un pequeño grupo austracista en México, pero fue detectado y perseguido por el Duque de Albuquerque, virrey de la Nueva España.¹⁴⁶ El conjunto de las oligarquías indianas se mostró leal a la nueva dinastía o, si se quiere, expectante al desarrollo de la guerra.¹⁴⁷

En Buenos Aires, tanto Manuel de Prado y Maldonado como el ayuntamiento se mantuvieron fieles al bando borbónico. El 10 de enero de 1702 esta corporación celebró

¹⁴⁵ María del Carmen MENA GARCIA “Santa Marta durante la Guerra de Sucesión Española” en **Anuario de Estudios Americanos** Sevilla, 1979, XXXVI, Pág. 615. La propaganda iba a llevarse a cabo en México, Venezuela, Nueva Granada y Cuba y, eventualmente, en las ciudades del Perú. Que sepamos, las provincias del Río de la Plata ni siquiera fueron tenidas en cuenta en los planes de los austríacos; sí, en cambio, figuraban en los de los ingleses, que ambicionaron la conquista de Buenos Aires para establecer allí una base desde donde poder comerciar con las costas del Pacífico. Este proyecto había sido formulado en 1711 por John Pullen, antiguo gobernador de las islas Bermudas, pero fue descartado por el conde de Oxford, ministro de la reina Ana; Boleslao LEWIN **La rebelión de Tupac Amaru y los orígenes de la independencia de Hispanoamérica** Sociedad Editora Latinoamericana, Buenos Aires, 1967, Pág. 43.

¹⁴⁶ Entre los austracistas de México se encontraban algunos gallegos, un catalán y dos andaluces, uno de los cuales era el gaditano Salvador José Mañer, que anteriormente había estado en Caracas y entrado allí en contacto con Capocelato; Joaquim ALBAREDA Y SALVADÓ **La guerra de sucesión de España...** Pág. 216.

¹⁴⁷ Guillermo CESPEDES DEL CASTILLO “América Hispánica (1492-1898)” en Manuel TUÑÓN DE LARA (director) **Historia de España** Labor, Barcelona, 1982, tomo VI, Págs. 111-113.

en Buenos Aires la proclamación de Felipe V. El ceremonial local imitó la usanza sevillana: se alzaron los pendones y se juró a viva voz lealtad al soberano. En el centro de la Plaza Mayor se erigió un catafalco con las armas de la corona y esa noche se encendieron luminarias y se saludó el suceso con cohetes. Un incidente ocurrido en el transcurso de la celebración dejó entrever la posible existencia de un grupo austracista en la ciudad. En medio de los festejos el general Miguel de Riblos, que como se recordará había sido el *privado* de Agustín de Robles, se mostró “*inquieto y revoltoso*” y se negó a obedecer las órdenes de Prado. Este lo sentenció a ser desterrado a la isla de Martín García, a la espera de ser embarcado en el primer navío que saliera del puerto con destino a España. Pero Riblos, que estaba informado de que los días de este gobernador estaban contados, se refugió en la iglesia catedral: por su condición de lugar sagrado, ni los soldados ni el alguacil mayor podrían entrar allí a prenderlo. Gracias al respaldo que recibió de la cúpula episcopal, se refugió en la casa curial hasta el mes de julio, en que se presentó en Buenos Aires un nuevo gobernador y consiguió su indulto.

Los gobernadores andaluces en el Río de la Plata

Los vecinos de Buenos Aires consideraron a Manuel de Prado y Maldonado un gobernante justo. Al tomársele juicio de residencia se lo sobreseyó de cualquier cargo en su contra. El cabildo le destinó un raro elogio: “*Ha merecido el bien de la República*”.¹⁴⁸ Sus dos sucesores, Alonso Valdés Inclán y Manuel de Velasco y Tejada, eran andaluces como él: esto no llama la atención, ya que desde mediados del siglo XVII los funcionarios enviados a la América española que procedían de esa región predominaron por sobre los que provenían de otras partes de la península.

Prado, Valdés Inclán y Velasco tuvieron otro rasgo en común: el haber accedido a sus cargos por medio de la venalidad. De acuerdo con la terminología de la época, se decía que sus cargos habían sido *beneficiados*: la Real Hacienda había recibido dinero a cambio del nombramiento, considerándose esa transacción como un servicio económico hecho al rey.¹⁴⁹ Estas operaciones aceptadas y fomentadas por la corona, frecuentes bajo los últimos Habsburgo, se continuaron durante los primeros años del reinado de Felipe

¹⁴⁸ AGN IX-41-09-05 *Juicio de residencia a Manuel de Prado y Maldonado*.

¹⁴⁹ Al tratarse de cargos temporales, no se trataba estrictamente de una venta, como sí lo era por ejemplo la de una regiduría, cuyo desempeño era vitalicio. Ángel SANZ TAPIA “Andaluces en cargos políticos hispanoamericanos (1674- 1700)” en Antonio GUTIÉRREZ ESCUDERO y María Luisa LAVIANA CUETOS (coord.) **Estudios sobre América, siglos XVI-XX: Actas del Congreso Internacional de Historia de América** Sevilla, Asociación Española de Americanistas, 2005, págs. 614 y ss.

V, alcanzando su momento álgido entre 1705 y 1711.¹⁵⁰ El gobierno del Río de la Plata permaneció de esa forma en el lote de los empleos venales. Sin embargo, el monarca, que era consciente del valor estratégico de esta Provincia, considerada el contrafuerte meridional del virreinato del Perú, estableció un contrapeso para intentar moderar la actuación de estos gobernadores: colocó a su lado a un militar de carrera como *cabo y gobernador de la caballería* del Presidio, especie de comisario general que estaba al mando de la guarnición.¹⁵¹ En 1702, designó para ocupar ese puesto a un oficial que se había destacado por sus servicios en la guerra de Flandes, Manuel del Barranco y Zapiáin, quien se mantendría en él a lo largo de más de una década.

El comportamiento arbitrario de Valdés Inclán y de Velasco estuvo muy lejos de la afabilidad de Manuel de Prado y Maldonado y se convertiría en objeto de graves cuestionamientos. El director de la *Compagnie de Guinée* tuvo la oportunidad de tratar con ambos y de ser testigo de sus iniquidades, y nos ha dejado observaciones llenas de agudeza. Se trata de Georges Hays, que representó en Buenos Aires a este consorcio negrero entre 1703 y 1710. Señalaba éste que podía “*verse a los gobernadores de este país como tiranos y a los habitantes como sus esclavos, a los que exigen derechos injustos y siempre renovados*”. Un gobernador, agregaba, encontraba siempre la manera amasar fortunas inmensas y se mostraba “*tan soberano que exige contribuciones sobre todas las mercancías y géneros que pasan de una gobernación a la otra, como si fuera un país extranjero, de suerte que toda la plata del país cae en las manos de los gobernadores, que se preocupan poco del servicio y de los acontecimientos que su negligencia pudiera causar en adelante*”. Los porteños aparecen en su relato como un pueblo sumiso, al que homologaba con las naciones orientales cuando observaba que se hallaba habituado al yugo de la tiranía (*ce peuple accoutumé au joug de la tyrannie*). Un contemporáneo de Hays, también francés, aseguraba que en Buenos Aires, el poder del

¹⁵⁰ Rafael GUERRERO ELECALDE *Las élites vascas y navarras en el gobierno de la Monarquía Borbónica. Redes sociales, carreras y hegemonía en el siglo XVIII (1700-1746)* Universidad del País Vasco, Bilbao, 2012, Pág. 53.

¹⁵¹ Con la llegada de los Borbones al poder, estos despojaron a sus funcionarios americanos de la prerrogativa de designar a la alta oficialidad, por lo que el nombramiento de los comisarios volvió a ser atribución del monarca. Felipe V decidió apropiarse del nombramiento de los oficiales: al principio sólo se reservó el de los coroneles y otros militares de alta graduación (ordenanzas del 10 de abril de 1702), pero luego extendió esa reserva a todos los grados, de sargento para arriba (ordenanzas de febrero de 1704). Véase al respecto: Jean-Pierre DEDIEU “La Nueva Planta en su contexto: Las reformas del aparato del Estado en el reinado de Felipe V” en *Manuscripts: Revista d'història moderna* Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d'Historia Moderna, N° 18, 2000, Págs. 113-139.

gobernador era más absoluto que el del mismo monarca español (*plus absolu que le roy d'Espagne*).¹⁵²

Al poco tiempo de haber asumido Valdés Inclán el gobierno, llegaron al Río de la Plata los primeros buques negreros de la *Compagnie de Guinée* y se detuvieron frente a las islas de San Gabriel, a la espera de recibir el permiso para ingresar al puerto. Atento a que podía tratarse de una estratagema para despachar desde allí lanchones cargados con mercancías de contrabando, le ordenó a un teniente del Presidio que patrullara la costa del Paraná entre la Reducción de Baradero y el Rincón de Escobar, donde podrían existir fondeaderos clandestinos.¹⁵³ Pero al hacer rondar las costas, su verdadera preocupación era que el tráfico ilícito con los franceses se escapara de sus manos. En 1704, los capitanes de los buques negreros *L'Amphitrite* y *Mendemblique* recibieron la indicación de desembarcar fardos de textiles en una chacra del Riachuelo, desde donde luego los conducirían a los almacenes de Valdés. Dos años más tarde, mandó ocultar en la misma chacra los géneros que le destinó el capitán de la fragatilla *La Dichosa*. Luego serían conducidos a Potosí por un mercader altoperuano, Antonio de la Tixera, quedando para Valdés utilidades por valor de 160.000 pesos. Este se apropió también de las barras de hierro que descargaron en forma clandestina los capitanes de los buques negreros *L'Amphitrite* y *El Héroe*, y más tarde las envió a Juan Joseph Moreno, teniente de gobernador de Santa Fe, para que las vendiera en ese puerto.¹⁵⁴

De la misma manera que Agustín de Robles, Valdés Inclán contó también con un *privado* que lo auxilió en el manejo de todos sus asuntos, tanto públicos como personales. Se trató de Antonio Guerreros, un comerciante nacido en Portugal que había llegado a Buenos Aires en 1671 y luego había tramitado con éxito su carta de naturaleza. Se hallaba vinculado por matrimonio con el clan de los Samartín, que entonces era la parentela más poderosa de Buenos Aires. En 1702 Valdés Inclán le encargó el aprovisionamiento de los soldados las ocho compañías de la guarnición, a quienes obligó a proveerse de ropas y alimentos en la tienda de este portugués mediante el sistema de vales canjeables. También lo puso a cargo de los almacenes donde resguardaba las barras de hierro y las manufacturas que recibió en su trato con los franceses. A mediados de 1704, cuando Valdés Inclán inició el asedio de la Colonia del

¹⁵² Estos relatos, transcritos en su lengua original, pueden hallarse en el **Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas** Buenos Aires, enero-marzo de 1929, año VII, n° 39, Págs. 291-297 y 301-308.

¹⁵³ AGN IX-14-7-20, *Real Compañía de Guinea*.

¹⁵⁴ AGN IX-39-9-5, *Demanda que Joseph de Narriondo puso en la residencia de Alonso de Valdés*; AGN IX-39-9-3, *Prisión y embargo de Diego de Sorarte y Miguel Castellanos*.

Sacramento, encargó a Guerreros el envío de provisiones para el ejército sitiador, que serían costeadas por el tesoro de la Real Hacienda local. Este se componía de las compañías de infantería, caballería y artillería del Presidio y de los cuerpos de milicias de la ciudad, a los que se sumaron tres compañías de milicias venidas desde Córdoba y una tropa de 4000 guaraníes bajados desde las Misiones. Sólo estos últimos llegaron provistos de yerba, harina y granos para sostener su campamento durante unos cuatro meses, mientras que el resto debió ser mantenido desde Buenos Aires. Como se sabría más tarde, los precios de las provisiones se volcaron sumamente inflados a los libros de la Real Hacienda, por lo que el asedio se convirtió para Valdés Inclán en uno de sus negocios más redituables.

Colonia fue abandonada por los portugueses el 15 de marzo de 1705. El gobernador encargó a una partida de soldados que se internara en el territorio oriental para emprender una enorme vaquería. Miles de cueros de toro fueron cargados en una embarcación que había sido apresada a los portugueses durante el asedio y enviados a Cádiz a ser vendidos de su cuenta. Cuatro meses más tarde, Valdés Inclán quitaba de escena al poderoso Antonio Guerreros. Llegó a Buenos Aires una real cédula que disponía una represalia contra todos los portugueses que residían en la América española, ordenando que sus bienes fueran incautados.¹⁵⁵ La fortuna que había amasado este comerciante fue estimada en más de 150.000 pesos. Aunque el gobernador permitió que la tienda de este portugués fuera entregada en carácter de depósito a Joseph de Narriondo, esposo de una de sus sobrinas, la represalia le serviría como excusa para excluirlo del reparto de suministros a la guarnición. Confió el negocio del abastecimiento de la tropa a otro comerciante, Antonio Meléndez de Figueroa, en cuyos almacenes los soldados cambiarían vales por alimentos e indumentaria.

Con la caída de Guerreros se quebraba la alianza entre el clan de los Samartín y Valdés Inclán. Tras quedar apartada de los negocios del gobernador, esta influyente parentela formó un frente opositor en el cabildo. A partir de ese momento, los Samartín comenzaron a perfilarse más como una facción, ya que recurrieron a alianzas políticas para acrecentar su poder en dicha corporación. El liderazgo de la misma recayó en uno de los miembros jóvenes del clan, Joseph de Arregui, quien detentaba desde 1702 los empleos venales de regidor y alférez real y en 1708 asumió, además, como alcalde

¹⁵⁵ La real cédula había sido emitida el 11 de junio de 1704 y a través de ella el monarca ordenaba que “*se embarguen a un mismo tiempo a todos los portugueses que residen en ella, sin excepción de personas, los bienes y haciendas que se hallare ser suyos*”.

ordinario de primer voto. Otros dos integrantes del clan también acumularon cargos: Baltasar de Quintana Godoy, que era alcalde provincial de la Hermandad desde 1705, fue elegido procurador del cabildo en 1707, y Francisco de Tagle Bracho, quien ya se desempeñaba como protector de naturales, se convirtió en procurador en 1708. Desde esas funciones, los tres se prepararon para lanzar sus imputaciones contra Valdés Inclán cuando éste fue sometido a juicio de residencia. Lo inculparon de haber prohibido a los vecinos que pasaran a las costas de la Banda Oriental a cortar maderas silvestres, cuando una real cédula de 1695, conseguida por la ciudad gracias a la gestión de Gabriel de Aldunate, reconocía el disfrute gratuito de los montes y aguadas. También se lo acusó de haber sobreexplotado a los indígenas de los pueblos de Baradero, Quilmes y Santo Domingo Soriano, quitándoles el tiempo que necesitaban para atender sus propias sementeras.

El juicio de residencia del gobernador saliente, de acuerdo con la normativa castellana, debía serle tomado por el gobernador entrante. El 2 de febrero de 1708, Manuel de Velasco y Tejada había sido recibido por el cabildo y pocos días más tarde se constituía en cabeza del tribunal que juzgaría a su predecesor. Pero no estaba en su ánimo punir a Valdés Inclán por sus excesos, sino más bien mantener en funcionamiento el aparato creado por éste para explotar los contados recursos que ofrecía esta provincia. Había comprado el cargo en 16.000 pesos y tenía la pretensión de darle la máxima rentabilidad posible a su inversión. En tal sentido, el juicio de residencia a su predecesor le sería de gran utilidad para instruirse sobre qué resortes podía activar para enriquecerse.¹⁵⁶ La primera medida que tomó fue apropiarse del dispositivo que había montado Valdés Inclán para hegemonizar el tráfico clandestino con los franceses: incorporó a su servicio a su secretario, Francisco Antonio Martínez de Salas, y al administrador de sus almacenes, Antonio Meléndez de Figueroa, quienes estaban bien al tanto de las operaciones fraudulentas que se habían llevado a cabo hasta

¹⁵⁶ Ya hemos referido en otro lugar que el juicio de residencia era para el gobernador sumariante una manera de “apropiarse” del cúmulo de conocimientos adquirido por su antecesor y de informarse sobre cómo poner en funcionamiento el aparato recreado por éste para beneficiarse a través de la corrupción y la extorsión. Carlos María BIROCCO “La pesquisa de Mutiloa en Buenos Aires. Conformación de facciones y lucha por el poder en el cabildo porteño” en Paula POLIMENE (comp.) **Autoridades y prácticas judiciales en el Antiguo Régimen. Problemas jurisdiccionales en el Río de la Plata, Córdoba, Tucumán, Cuyo y Chile** Prohistoria Ediciones, Rosario, 2011, Pág. 42. Oscar Trujillo hace consideraciones parecidas a las nuestras: “Los Juicios de Residencia, constituyeron un excelente mecanismo que permitió al nuevo Gobernador comprender las redes de relación de su antecesor, desarticularlas o aprovecharlas en beneficio propio; a la vez que otorgaban un grado de control sobre la realidad local para la Corona. Así entendidos, los Juicios de Residencia, fueron mucho más que un mero instrumento de vigilancia del poder central”; Oscar TRUJILLO **Consenso, negociación y conflicto en la Monarquía Hispánica...** Pág. 15

entonces. Meléndez se convertiría en el *privado* del nuevo gobernador, y administraría en su nombre las mercancías adquiridas a los franceses, valiéndose de ellas para repartirlas a los militares del Presidio a cuenta de sus futuros sueldos.

La embestida de Velasco contra el cabildo

El frente faccioso encabezado por el clan de los Samartín no tardaría en entrar en conflicto con el nuevo gobernador. La disputa se produjo en relación con la venta de corambre a los cargadores de los navíos. Desde 1677, el cabildo había perdido el derecho de encabezar las negociaciones por la venta de cueros, pues el monarca había permitido a los registreros mantener un trato directo con los vaqueadores. Pero desde los tiempos de Joseph de Herrera y Sotomayor y de Agustín de Robles, los gobernadores se habían interpuesto como mediadores obligados en ese tráfico, con quienes los cargadores de los navíos debían negociar las cuotas de corambre y el precio por unidad. También se arrogaron otra facultad tradicionalmente atribuida al ayuntamiento: la de autorizar las vaquerías. Manuel de Velasco y Tejada logró estrechar los controles sobre la explotación del ganado cimarrón. Agregó a su camarilla a un experimentado vaqueador, Domingo González Cabezas, y le encomendó el despacho de las licencias para salir a vaquear. Estas sólo se otorgarían a un puñado de vecinos, a quienes en principio se les impuso como gravamen la entrega de un cuero por cada cuatro que faenasen. Luego se les obligó a contribuirle al gobernador la suma 2 reales por cada cuero que vendiesen a los registreros o a los asentistas franceses.

Ante las repetidas protestas del cabildo, Velasco encontró la manera de neutralizar ese peligroso polo de oposición. Habían transcurrido seis años desde que se mandara cumplir la real cédula que creaba nuevas seis regidurías en Buenos Aires. De acuerdo con lo establecido, los regidores tenían ese plazo para conseguir que el Consejo de Indias los convalidara en sus empleos. Como ninguno de ellos recibió su confirmación, el gobernador proclamó la nulidad de sus títulos. La facción de los Samartín fue la más perjudicada. En diciembre de 1708 quedó cesante Baltasar de Quintana Godoy, y a comienzos del año siguiente Joseph de Arregui. Otros tres regidores –Juan Pacheco de Santa Cruz, Fernando Rivera Mondragón y Diego Pérez Moreno– se vieron obligados a dejar sus escaños por no haber recibido sus títulos la confirmación del monarca.

Este incidente obligó a los miembros de la facción opositora a recurrir a nuevas estrategias para reorganizarse. Habiendo perdido los empleos venales, regresaron a la

corporación a través de los empleos electivos. En las elecciones de capitulares de 1709 y 1710, el bando de los Samartín se atrevió a devolverle el golpe a Velasco, logrando para ello el apoyo mayoritario del resto de los cabildantes. Nunca como en 1709 los miembros de la referida facción lograron un monopolio tan claro de los oficios electivos. Baltasar de Quintana Godoy y Francisco de Tagle Bracho fueron nominados alcaldes ordinarios, y cuando este último abandonó su escaño para pasar a España a litigar contra una multa que le cobrara Velasco en el juicio de residencia a Valdés Inclán, se lo substituyó en la alcaldía por Juan Bautista Fernández Parra, quien a su vez abandonó la defensoría de menores para ser reemplazado por Gaspar de Avellaneda. Estos dos últimos eran estrechos aliados políticos del clan de los Samartín. Hacia esta época se incorporaron a la facción opositora Pedro de Giles y su yerno Joseph Ruiz de Arellano; éste último obtuvo su voto para convertirse en procurador de la ciudad, y al año siguiente Giles se convirtió en alcalde ordinario.

Así fue que la facción de los Samartín fue engrosándose con nuevos miembros y ampliando su base de alianzas. La misma llegó a proyectarse a la plana mayor de la guarnición, donde el militar de más alto rango, el *cabo y gobernador de la caballería* Manuel de Barranco y Zapiáin, se sumó al sector discrepante. Ese mismo año, éste enviaría una comunicación por vía secreta a la corona, en la que informó los excesos que venía cometiendo Velasco y la abierta participación que éste y los oficiales de la Real Hacienda tenían en el contrabando con los franceses. Por entonces, Felipe V atravesaba uno de los peores tramos de la Guerra de Sucesión: a lo largo de 1710 estuvo jaqueado por las maniobras militares de sus enemigos. No fue hasta fines de ese año en que, con la llegada de refuerzos desde Francia, su posición en la península adquirió una mayor solidez. El arribo del duque de Vendôme al frente de nuevas tropas enviadas por Luis XIV le permitió el 3 de diciembre hacer una entrada triunfal en Madrid, de donde había tenido que retirarse. Eso lo llevó a retardar su decisión de enviar un juez pesquisidor al Río de la Plata, como ya le había recomendado el Consejo de Indias, para encarcelar y juzgar al gobernador y a los oficiales reales.¹⁵⁷

Pero Velasco ignoraba la celada que se estaba tramando contra él. Reaccionó contra la consolidación de la facción opositora mediante un intento burdo pero efectivo de

¹⁵⁷ La misiva de Barranco y Zapiáin, fechada en septiembre de 1710, advertía al rey sobre el contrabando que venían llevando a cabo Velasco y los oficiales reales. Que el Consejo de Indias ya estaba al tanto de esta situación lo demuestra su respuesta a la consulta del 21 de enero de 1710, en que recomendó a Felipe V que depusiera y encarcelase a Velasco, y que para ello despachase un pesquisidor en los navíos de permiso que preparaban su partida para el Río de la Plata; Pablo Emilio PEREZ-MALLAINA BUENO *Política naval española...* Págs. 95 y ss.

introducir a sus acólitos en el cabildo. En diciembre de 1710 fraguó el remate de las regidurías y otros oficios venales que habían quedado vacantes. Los pregoneros convocaron a la vecindad para las cuatro de la tarde, hora en que eran costumbre ese tipo de almonedas en la ciudad, pero la subasta se efectuó al mediodía, estando sólo enterados de ella los miembros de la camarilla del gobernador. El único miembro del bando opositor que pudo hacerse presente fue Pedro de Giles, alcalde de primer voto, que no pudo lograr que la almoneda se pospusiera hasta la hora en que fuera convocada. Fue así que por medio de un remate fraudulento, Sebastián Delgado se convirtió en alcalde provincial de la Hermandad, Joseph Rubín de Celis y Cristóbal de Rivadeneira en regidores y Miguel de Obregón en alguacil mayor; a ellos se agregaron Juan Joseph Moreno, que había adquirido en 1707 una regiduría cuyos títulos habían sido hasta entonces rechazados por el cabildo y vinieron a ser ahora reconocidos por Velasco, y el general Miguel de Riblos, que se convirtió en depositario general. Cuando los demás interesados en adquirir dichos oficios fueron puestos al tanto intentaron acceder al gobernador, éste se negó a escuchar sus quejas y mandó colocar en prisión a Domingo de Oliva, que fue al parecer fue el vecino que protestó con mayor vehemencia¹⁵⁸.

Los vecinos que se consideraron perjudicados elevaron una protesta a la Real Audiencia de Chuquisaca en que responsabilizaban de la venta fraudulenta de los oficios concejiles a Velasco y a los oficiales reales. En 1711, con el ingreso de los nuevos capitulares, Velasco contó por primera vez con un ayuntamiento adicto. La facción de los Samartín, no obstante, poseía todavía allí dos regidores en ejercicio, Juan Bautista Fernández Parra y Gaspar de Avellaneda, y aún sus mismos contrincantes, en un intento de frenar a los opositores mediante concesiones parciales, dieron su voto a Joseph Ruiz de Arellano, que se convirtió de esta forma en alcalde ordinario. Pero los enfrentamientos entre esta minoría y los acólitos del gobernador no se harían esperar, y después de las elecciones se presentaron ante el ayuntamiento Amador Fernández de Agüero y Antonio de Igarzábal reclamando ser los legítimos alcaldes ordinarios, ya que habían sido votados por Avellaneda y Fernández Parra, únicos capitulares que no debían su escaño al fraude. Finalmente, el 23 de junio de ese año la Real Audiencia se expidió mediante una real provisión que reponía a los regidores anteriores en sus oficios,

¹⁵⁸ La almoneda se realizó “con notable aceleración y hecha en los primeros postores parciales del gobernador”; AGN IX-39-9-5, *Contra Sebastián Delgado, Miguel de Obregón y otros*.

disponiendo una prórroga para que logaran la confirmación de sus títulos, pero Velasco y sus partidarios en el cabildo se limitaron a dilatar su cumplimiento.¹⁵⁹

La escena del escarnio

A fines de diciembre de 1711, la actitud intransigente del gobernador precipitó los hechos. Joseph Ruiz de Arellano hizo abandono de su alcaldía y pasó a Chuquisaca a solicitar la nulidad de la subasta de oficios venales del año anterior, en tanto que los capitanes Joseph de Arregui, Antonio de Larrazábal y Tomás de Arroyo se presentaron ante el ayuntamiento a intimar a sus miembros a que obedecieran la real provisión del 23 de junio y exigieron que se devolvieran sus escaños a los regidores que habían cesado entre finales de 1708 y principios de 1709.

Velasco tenía ya madurada su respuesta. El 31 de diciembre, pasada la medianoche, movilizó a una partida de soldados armados y se presentó en las casas de estos tres vecinos.¹⁶⁰ Los hizo engrillar delante de sus familias y los condujo a los calabozos del cabildo. Tomás de Arroyo dejó un vivo relato de los padecimientos a que se vio sometido:

“...estando durmiendo en mi casa con mi mujer, hijos y familia la noche del día 31 de diciembre próximo pasado de 711 como a las 12 y más llegó a ella el general Dn Manuel de Velasco, gobernador que era de esta ciudad, y con gran aparato y número de gente del Presidio y criados con chuzos, partisanas y alabardas me sacó del lado de la dicha mi mujer y me llevó preso a la cárcel pública de esta ciudad y me metió en un calabozo muy húmedo por estar todavía sin acabar de hacer, y lo cerró y se llevó la llave de él, y en cuatro días no lo mandó abrir sino para que me diesen de comer, dando orden que no hablasen conmigo, causando esta operación por entonces un gran escándalo en esta ciudad contra los buenos y honrados procederes que he imbuido en ella, manteniéndome en el crédito y estimación que es notorio, y al cabo de cuatro

¹⁵⁹ AECBA Serie II, tomo II, Págs. 438-453.

¹⁶⁰ Fueron prendidos por Velasco, según refiere un testigo, “sin más causa que haber solicitado intimar a diferentes capitulares una real provisión”; Archivo General de Indias [en adelante AGI] Escribanía de Cámara 887A, *De la acusación, defensa y sentencia de Juan de la Camara*.

días me hizo sacar y llevar al fuerte, donde me tomó declaración... y después de lo dicho me tuvo dieciséis días preso sin darme causa de mi prisión...”.¹⁶¹

El momento no fue elegido al azar: las detenciones se ejecutaron la víspera de las elecciones en el cabildo, Velasco se aseguró así de que sus enemigos no pudiesen ser postulados para un cargo. Larrazábal fue retenido durante cuarenta días en el fuerte, hasta que el regidor Gaspar de Avellaneda ofreció fianza para que saliera libre. Arroyo y Arregui fueron relegados a los calabozos del cabildo, pero mientras que el primero estuvo preso sólo veinte días, el otro quedó recluido por tiempo indeterminado.¹⁶² Los cuantiosos bienes que Arregui había acumulado gracias al tráfico de mulas y esclavos con las provincias arribeñas fueron confiscados y pasaron a manos del general Miguel de Riblos, el depositario del cabildo, aunque lo más probable es que las mercancías de su tienda, una de las mejor provistas de Buenos Aires, hayan sido trasladadas a los almacenes administrados por Antonio Meléndez, y utilizadas en el negocio del aprovisionamiento del Presidio. También le fueron incautadas fuertes sumas en plata.¹⁶³

A partir del encarcelamiento de Joseph de Arregui, el convento de San Francisco, en que profesaban sus hermanos fray Juan y fray Gabriel de Arregui, se convirtió en el epicentro de la oposición. Aquel venía actuando desde hacía una década como síndico de esa comunidad religiosa y los franciscanos pretendieron que Velasco le concediera la libertad en virtud del fuero eclesiástico de que gozaba, lo que de haber sido aceptado, lo hubiera convertido en poco menos que intocable para el poder secular. Como no pudieron lograrlo, no se cuidaron de desairar al cabildo, al que reconocían adicto al gobernador, excluyéndolo de sus ceremonias y procesiones. El 7 de enero de 1712, el padre provincial de los franciscanos, Francisco Benítez, y los frailes Juan de Arregui, Pedro del Castillo y Joseph de Cárdenas se presentaron ante el cabildo eclesiástico de la ciudad a informarlo de que el síndico de su convento se hallaba preso por orden del gobernador, quien se negaba a liberarlo, pese a los derechos forales que le otorgaba su

¹⁶¹ AGN IX-40-1-3 *Tomás de Arroyo contra el gobernador Velasco por perjuicios*

¹⁶² Avellaneda, en efecto, otorgó fianza para que Larrazábal obtuviera la libertad, “*por cuanto el señor gobernador y capitán general de estas provincias le tiene preso en la fortaleza*”; AGN IX-48-9-1, *Escribanías Antiguas*, f. 564.

¹⁶³ No hay duda de que Velasco se apropió de la plata que tenía atesorada Arregui. Entre los bienes de Riblos se hace alusión a un recibo extendido por el escribano Fernando Esquivel en 1712 “*sobre la plata labrada que llevó a la Caja Real de la que paraba en poder de don Miguel de Riblos por vía de depósito de los bienes embargados de don Joseph de Arregui*”. Alegará posteriormente Josepha Rosa de Alvarado, su esposa, que “*los depósitos...no estaban ni habían estado nunca en su poder*”; AGN Sucesiones 8122, *Concurso de bienes de Miguel de Riblos*.

cargo. No obstante, el deán Domingo Rodríguez de Armas, que desde la muerte del obispo Azcona Imberto se hallaba interinamente a la cabeza del obispado, se excusó de intervenir en el asunto. El provincial franciscano lo amenazó con recurrir a la Curia romana para hacerlo despojar de sus dignidades eclesiásticas, pero sólo logró que el deán se endureciera aún más en su posición. Cuando el 20 de enero, convaleciente de una indisposición, éste no concurrió a los acuerdos del ayuntamiento eclesiástico, un jerarca del clero secular que simpatizaba con los Samartín, el maestro Joseph Marciáñez, convocó a los franciscanos y proclamó vigentes los privilegios concedidos a los síndicos de San Francisco en Joseph de Arregui. Al día siguiente, no obstante, el deán ordenó anular las actas de la jornada anterior, bajo el pretexto de que no había sido él quien había abierto el cónclave.¹⁶⁴

En medio del fragor de estos debates, que dividieron a la Iglesia porteña durante el mes de enero de 1712, Arregui logró fugarse de los calabozos del cabildo y se refugió en el convento franciscano. Su hermano, el padre guardián, mantuvo cerradas las puertas del monasterio y aún de la iglesia, llegando a no permitir durante días que los feligreses entraran a oír misa por temor a que un piquete de soldados asaltara el convento. Pero Velasco no se atrevió a cometer un acto que hubiera sido tomado por sacrilegio y que era de todos modos innecesario, tras haber logrado su cometido de sacar a su principal opositor de escena. Se preparó para gozar –por cierto que no por mucho tiempo– de un horizonte despejado de competidores, tanto en el contrabando como en el comercio interregional. Proyectó una incursión a las provincias arribeñas, y por medio de su secretario, Francisco Antonio Martínez de Salas, encargó que un vecino que partía por entonces para el Perú le trajese de allí 12.000 pesos en mercaderías¹⁶⁵.

La pesquisa de Mutiloa

En 1711, la contienda dinástica comenzaba a decidirse a favor de Felipe V. Luego de tomar Madrid, éste pudo forzar al ejército del archiduque Carlos a replegarse a Cataluña, donde su presencia tenía los días contados, ya que las potencias europeas que lo habían apoyado se disponían a negociar la paz. El rey pudo por fin dedicarse a sus dominios de ultramar. Trasladó la corte al poblado de Corella por recomendación de los

¹⁶⁴ Francisco C. ACTIS *Actas y documentos del Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires* Junta de Historia Eclesiástica Argentina, Buenos Aires, 1943, tomo I, Pag. 233.

¹⁶⁵ AGN IX-48-9-1, *Escribanías Antiguas*, f. 565.

médicos de la reina María Luisa de Saboya, que padecía de tuberculosis, pues opinaban que el clima seco de la región contribuiría a aliviarla. Allí permaneció entre junio y octubre de 1711. En el tranquilo retiro de esa pequeña ciudad de Navarra maduró una nueva política en relación a sus posesiones rioplatenses, basada en la limitación de los poderes que los gobernadores habían acopiado desde el reinado de su predecesor. También fue en Corella donde, tras encontrar fundadas las denuncias presentadas por el comisario Barranco y Zapiáin contra Velasco, tomó la decisión de enviar a Buenos Aires a uno de sus consejeros, el alcalde de Casa y Corte Juan Joseph de Mutiloa y Andueza, para iniciarle un juicio de pesquisa.

En tres reales cédulas firmadas por Felipe en Corella el 22 de junio de 1711 queda clara su intención de devolver a la vecindad de Buenos Aires las prerrogativas que había perdido en manos de los gobernadores. La primera de ellas reconocía a los vecinos como únicos poseedores del ganado cimarrón, mientras que en la segunda ordenaba que se respetara su derecho a gozar de la madera de los montes silvestres y de trasladarla en canoas sin sufrir contratiempos: se trataba de dos disposiciones lanzadas puntualmente contra el poder omnímodo de que habían gozado Valdés Inclán y Velasco, quienes se había apropiado del control de las vaquerías a ambas bandas del río, al igual que del tráfico de maderas. Una tercera real cédula autorizaba al cabildo a aumentar en cuatro el número de pulperías que poseía la ciudad, posiblemente para desbaratar el monopolio de provisiones ejercido por los gobernadores desde los almacenes del Presidio, en que se abastecía a los soldados por medio de vales. Aunque estas cédulas permiten adivinar el golpe que se pensaba asestar a Velasco, no hacen mención al juicio de pesquisa que se planeaba contra él, que obviamente se basó en instrucciones secretas. Fueron remitidas a Buenos Aires en la nao Nuestra Señora de la Concepción y la balandra Nuestra Señora del Pópulo, dos navíos de registro al mando del capitán Andrés Martínez de Murguía, en que también se embarcó el pesquisidor Mutiloa y su pequeña comitiva. El único encargo explícito que éste recibió fue el de hacerlas obedecer: tal era la manera, afirmaba el rey, de garantizar que terminasen “*los continuos agravios que ha experimentado [la ciudad] a causa de los violentos procedimientos de sus gobernadores*”.

La operación del desembarco de Mutiloa fue llevada a cabo con absoluto sigilo. Los navíos se detuvieron en la bahía de Montevideo y el pesquisidor fue llevado en una barcaza hasta Buenos Aires, donde arribó al atardecer del 27 de marzo de 1712. Quizá con credenciales falsas, pidió ser conducido al convento de San Francisco, donde había

resuelto alojarse hasta decidir cuáles serían las acciones a seguir. La elección de este sitio era de por sí un gesto político. En sus claustros se hallaba refugiado Joseph de Arregui. La noticia fue pronto conocida por otros miembros de la facción opositora, que se apresuraron a acercársele para ponerse bajo sus órdenes.¹⁶⁶ Cerca de la medianoche, Mutiloa abandonó el convento e hizo llamar a los alcaldes del cabildo para leerles el pliego por el que se lo nombraba pesquisidor, intimándoles a que lo acataran. Luego se presentó en el fuerte, asistido por uno de los capitanes del Presidio y por una partida de soldados, y arrestó al gobernador. Lo hizo custodiar hasta uno de los navíos de Martínez de Murguía y dispuso que permaneciera allí hasta que le iniciara juicio. Aunque a la mañana siguiente los vecinos Juan Báez de Alpoin y Pedro de Saavedra, que habían formado parte del círculo de Velasco, ofrecieron fianza para su liberación, se lo mantuvo confinado. La principal acusación que se presentó contra él fue la de haber recibido mercancías del capitán de un navío francés, Benoit Benac, y haberlas vendido por su cuenta en la tienda de Antonio Meléndez de Figueroa.¹⁶⁷ También fueron puestos en prisión los oficiales de la Real Hacienda, Diego de Sorarte y Juan Antonio de Anuncibay, señalados como cómplices de Velasco, y el secretario de éste, Francisco Antonio Martínez de Salas. A Meléndez se le ordenó que permaneciera recluido en su casa hasta nueva orden.¹⁶⁸

Al ser sometido a juicio de pesquisa, Velasco denunciaría la complicidad entre Mutiloa y la facción opositora. La defensa del gobernador acusaría a líder de dicha facción, de ser su “*enemigo capital*”.¹⁶⁹ Indicaría que el pesquisidor había actuado en confabulación “*con don Joseph de Arregui, con quien comía y cenaba... sirviéndose de sus criados y viviendo hasta hoy en su casa en prueba de la amistad que con él tuvo y ha mantenido tan estrecha con sus parientes*”¹⁷⁰. Entre sus adversarios se hallaban tres de los esposos de las primas de Arregui, Lucas de Belorado, Baltasar de la Quintana Godoy y Tomás de Arroyo, y también Joseph Ruiz de Arellano, Alonso de Beresosa y Contreras, Juan Bautista Fernández Parra, Pablo González de la Cuadra y Antonio Larrazábal, “*los más regidores y todos parientes y aliados*”, todos ellos complicados con la caída del gobernador.¹⁷¹

¹⁶⁶ AGN IX-39-9-8, *Copia de diferentes autos que tocan a la recusación hecha a Velasco*.

¹⁶⁷ Archivo General de Indias [en adelante AGI] Escribanía de Cámara 901, *Juicio de residencia a Manuel de Velasco y Tejada*.

¹⁶⁸ AGN IX-39-9-8, *Testimonio de la pesquisa, prisión y embargo de bienes contra Velasco*.

¹⁶⁹ AGN IX-40-1-2, *Autos contra Juan Joseph de Ahumada*.

¹⁷⁰ AGN IX-39-9-8, *Copia de diferentes autos que tocan a la recusación hecha a Velasco*.

¹⁷¹ AGN IX-39-9-8, *Copia de diferentes autos que tocan a la recusación hecha a Velasco*.

Seguidamente, Mutiloa tomó medidas para devolver a dicha facción el control sobre el cabildo. Desde la subasta fraudulenta de oficios pergeñada por Velasco, la corporación se encontraba en manos de los acólitos de éste. En primer lugar, el pesquisidor reincorporó a los regidores que habían sido dejados cesantes en 1708 y 1709, aunque sin excluir a los que habían ingresado posteriormente a través del fraude. El 23 de mayo el alcalde ordinario Pedro de Saavedra, que respondía a Velasco, fue detenido en su casa, bajo la inculpación de que había colaborado con éste en el ocultamiento de barras de plata, y Mutiloa ordenó que su vara pasase al regidor más antiguo. Este era Hernando Rivera Mondragón, quien se excusó por falta de salud, por lo que la alcaldía pasó al quien le seguía en antigüedad, Baltasar de Quintana Godoy, miembro de la facción de los Samartín. Pero el 27 de junio Saavedra obtuvo la libertad bajo fianza y volvió a su cargo. El 29 de agosto, finalmente, Mutiloa presentó al cabildo una provisión de la Real Audiencia que declaraba nula la subasta fraudulenta de los oficios concejiles perpetrada por Velasco y que invalidaba las elecciones de alcaldes que se llevaran a cabo en enero de ese año. Con ello los acólitos de Velasco eran expulsados del cabildo, quedando Sebastián Delgado, Joseph Rubín de Celis, Cristóbal de Rivadeneira y Miguel de Obregón exonerados de sus empleos.¹⁷² Arregui fue llamado a la casa capitular y allí expresó su propuesta sobre quienes debían ser los nuevos alcaldes, que fue seguida en forma casi invariable por los demás regidores. A resultas de ello, recibieron la vara Antonio de Larrazábal, el mismo que sufriera prisión en tiempos de Velasco, y Alonso de Beresosa y Contreras.¹⁷³ En los meses siguientes, los oficios venales vacantes fueron ocupados por sus parientes y aliados políticos: Lucas Manuel Belorado y Pablo de Ramila se convirtieron en regidores, Joseph Ruiz de Arellano en alcalde provincial de la Santa Hermandad y Joseph de Narriondo en alguacil mayor.¹⁷⁴ La facción de los Samartín se había apoderado nuevamente del ayuntamiento.

No obstante, Arregui no pudo disfrutar más que por un par de meses de su victoria. Mutiloa había premiado su lealtad al monarca encargándole la conducción del grueso de las mercancías que trajeran de Cádiz los navíos de permiso de Martínez de Murguía, y en octubre de ese año partió hacia Potosí a la cabeza de un cargamento varias veces

¹⁷² AGN IX-41-1-4, *Pablo González de la Cuadra sobre nulidad de remate*.

¹⁷³ AECBA Serie II, tomo II, Págs. 534-537.

¹⁷⁴ Belorado, como se recordará, era el esposo de una de las primas de Arregui, mientras que Pablo de Ramila era sobrino del socio de éste, Pedro García de la Yedra; AECBA Serie II, tomo II, Págs. 553, 578 y 597.

millonario.¹⁷⁵ Parece que Mutiloa tuvo noticia de que éste había aprovechado la ocasión para traficar con barretones de oro y plata en piñas sin quintar, y se dispuso a castigarlo. Arregui vendió una importante porción de géneros en Potosí y luego pasó a Chuquisaca a hacer lo mismo. Fue allí que lo sorprendió la llegada de un soldado con unos pliegos secretos dirigidos a la Real Audiencia con orden de detenerlo. La casa en que residía fue registrada y se halló escondida una gran cantidad de plata en *piñas* no declarada a las autoridades fiscales. Pero como supo sobornar a los oidores fue pronto puesto en libertad y siguió con sus negocios. Así se hallaban las cosas cuando habiendo pasado nuevamente a Potosí, la muerte lo sorprendió en esa villa en agosto de 1714.¹⁷⁶

Mientras tanto en Buenos Aires, luego de depurar el cabildo de elementos adictos a Velasco, Mutiloa hizo publicar las reales cédulas que trajo de la península y le devolvió gradualmente sus antiguas facultades. El 31 de marzo de 1712, se presentó ante los cabildantes para proclamar la que permitía a los vecinos el corte de maderas y el libre uso para su conducción de botes, lanchas y canoas.¹⁷⁷ Al año siguiente, el ayuntamiento recuperó el control sobre el ganado cimarrón de las pampas, cuando el pesquisidor le permitió nombrar dos diputados, los capitanes Alonso de Beresosa y Contreras y Lucas Manuel Belorado, para que ajustaran la venta de 20.000 cueros de toro con el director del Real Asiento. Aunque la corporación no recobraría formalmente ese derecho hasta 1716, en que una real cédula le otorgó la facultad privativa de repartir licencias para hacer corambre, Mutiloa le confirió el control sobre el comercio de cueros al dejarle las manos libres para otorgar permisos para vaquear y hacer contrataciones con los

¹⁷⁵ El 25 de octubre de 1712 Arregui ya no se hallaba en Buenos Aires, pues el estandarte que debía portar como alferez real en las fiestas de San Martín de Tours fue llevado por Beresosa y Contreras; AECBA Serie II, tomo II, Pág. 569. Para el escribano Fernando de Esquivel, no cabían dudas de que Mutiloa conocía su participación en el contrabando, y le había permitido “*ir a las provincias del Perú con la cargazón de los navíos de registro del cargo de don Andrés Martínez de Murguía, sin duda para que ejecute los extravíos de piñas para la carga de dichos navíos como lo acostumbra*”; AGI Charcas 212, *Denuncia de Fernando de Esquivel contra Joseph de Arregui*.

¹⁷⁶ Conocemos este episodio gracias al testimonio de Bartolomé de Arzans de Orsúa y Vela, cronista de la villa de Potosí: “*El alferez real de aquella ciudad, don José de Arregui, era venido con otros cargadores a esta imperial villa con muchos millares de ropa, y después de haber venido con mucha porción de ella, se fue a la ciudad de La Plata y estando en ella a fines del mes de mayo llegó un soldado de Buenos Aires enviado por el señor Mutiloa con pliegos secretos para la Real Audiencia, que luego fue preso don José de Arregui, y pidiendo de ello certificación el soldado se volvió sin detenerse ni dar tiempo a enviar alguna súplica. [...] Más todo esto pasará en nada, pues el alferez real don José de Arregui y don Pedro de la Yedra, a los cinco meses de su casi libre y regalada prisión que tuvieron en La Plata, dando fianzas de lo juzgado y sentenciado y de la hacienda propia (que también tenían muchísima ajena) se volvieron a venderla muy a su sabor*”. Bartolomé de ARZANS DE ORSUA Y VELA **Historia de la villa imperial de Potosí** Edición a cargo de Lewis Hancke y Gunnar Mendoza, Providence, Rhode Island, 1965, tomo III, Págs. 5 y ss.

¹⁷⁷ AECBA Serie II, tomo II, pág. 497.

capitanes de navío.¹⁷⁸

El cabildo de Buenos Aires, agradecido por la restitución de sus prerrogativas, informó favorablemente al rey sobre la labor de Mutiloa. El 2 de junio de 1713, en una carta a Felipe V, los cabildantes agradecieron al monarca las “*repetidas cédulas*” con que los había favorecido y aplaudieron su decisión de deponer “*un gobierno tan penosamente tiránico y arrogante*” como el de Velasco. Pero el objeto de la misiva era encomiar la labor del pesquisidor y pedirle al monarca que le permitiera seguir ejerciendo el mando político: “*¡Oh, Señor –le rogaban– si estos vuestros rendidos vasallos mereciesen que Dn Juan Joseph de Mutiloa, después de dar cumplimiento a los negocios que trajo a su cargo, continuase en el gobierno!*”.¹⁷⁹ Este escrito, a pesar de su tinte laudatorio, tenía una innegable intencionalidad política: secundar el propósito de Mutiloa de mantenerse en el poder. Para entonces, Felipe V ya había otorgado el gobierno de esta Provincia al coronel Alonso de Arce y Soria, que había comprado el cargo en 18.000 escudos y aguardaba ser investido en el cargo, pero el pesquisidor hallaría en este cabildo adicto una herramienta para demorar la transmisión del mando y mantenerse en el poder.

La vuelta de la facción de los Samartín al cabildo no estuvo exenta de desquites. La llegada de Mutiloa produjo desplazamientos no sólo en el ayuntamiento sino también en la cúpula del Presidio. El pesquisidor hizo encarcelar durante doce días al ingeniero militar Joseph Bermúdez, dueño de una foja de servicios impecable, que había servido en Flandes como jefe de los artilleros y había sido enviado a Buenos Aires a rediseñar las fortificaciones de la ciudad, sólo por haber representado en la guarnición, también dividida en facciones, los intereses del depuesto gobernador Velasco. Aunque el motivo real de esta detención era sustituirlo como castellano del fuerte por el principal aliado de los Samartín en el Presidio, el comisario de la caballería Manuel de Barranco y Zapiáin, Mutiloa arguyó haber actuado “*con el pretexto de que debía satisfacer al público*”.¹⁸⁰ Sin considerar siquiera que existiera algo parecido a la opinión pública en el remoto Buenos Aires de comienzos del siglo XVIII, es posible que buena parte de la élite de comerciantes y militares de alto rango hayan manifestado su simpatía hacia el nuevo bloque dominante. El mismo Velasco daría prueba de ello cuando se atrevió a afirmar

¹⁷⁸ El texto de esta real cédula se encuentra en MANUEL JOSEF AYALA, **Diccionario de gobierno y legislación de Indias**, Madrid, 1989, tomo V, pág. 7.

¹⁷⁹ La carta fue firmada por los cabildantes Beresosa y Contreras, Larrazábal, Narriondo, Quintana Godoy, Fernández Parra, Belorado y Ramila; AGI Charcas 221 *Expediente de la causa contra Manuel de Velasco y Tejada*.

¹⁸⁰ Copias de documentos del Archivo de Indias del Museo Etnográfico [en adelante ME] Carpeta H 22.

en el juicio de pesquisa: “*la astucia de mis enemigos ha conseguido que los más favorecidos y los criados más antiguos se hayan vuelto mis contrarios*”.¹⁸¹

Pero la víctima principal de las represalias de la nueva facción dominante fue el general Miguel de Riblos, que colaborara desde su función de depositario general en la confiscación de los bienes de Arregui cuando la prisión de éste. Riblos no se vio comprendido por las purgas que sufriera el cabildo en agosto de 1712, pero se lo intimó a que en su carácter de depositario general diera razón de las fianzas que habían estado en su poder desde que subastara el oficio. Llamado a presentarse en el ayuntamiento, sólo consintió en hacerlo en enero del año siguiente, e incluso entonces se negó a dar razón de cuenta alguna, alegando que ninguna ley disponía que debía informar de los depósitos a los demás capitulares.¹⁸² Sus adversarios, sin embargo, hallaron su flanco más débil. El esposo de una de las primas de Arregui, Pedro Constanza, que había pasado a España diez años atrás como médico de Agustín de Robles y regresó a la ciudad en las naos de Martínez de Murguía, facilitó el instrumento con que se selló la suerte de Riblos: una ejecutoria contra éste por 9025 pesos que la justicia peninsular lanzara a favor de uno de sus acreedores, el mercader gaditano Francisco de Rivera.

Provistos de esta nueva arma, los enemigos de Riblos provocaron finalmente su caída en febrero de 1713. Estuvieron implicados en la intriga, además de Constanza, el pesquisidor Mutilo y el alcalde Alonso de Beresosa y Contreras, en representación de los capitulares que le mostraran mayor hostilidad. El ardid de los coaligados consistió en dar gran notoriedad a la ejecución de bienes a favor de Rivera, con lo que lograron que el resto de los acreedores de Riblos, temiendo verse postergado en sus reclamos, se constituyera en concurso. Aunque la fortuna de este fuerte comerciante doblaba las sumas que se le exigían, su disponibilidad inmediata de metálico no llegó a satisfacer el conjunto de las deudas: tratándose del mayor prestamista de la época, es explicable que el grueso de la plata que ingresaba en sus arcas entrara en circulación rápidamente, impidiéndole responder en forma ágil a un imprevisto como éste. A pesar de que ofreció sus bienes inmuebles como garantía de pago, el gobernador ordenó al alguacil mayor Joseph de Narriondo que procediera a su arresto y aprisionamiento en la cárcel real. La quiebra fue tan inesperada y las circunstancias de la misma tan notoriamente escandalosas que, para evitar la deshonra de ser conducido en público a prisión, Riblos se refugió en el Colegio de San Ignacio de la Compañía de Jesús. Allí residiría durante

¹⁸¹ AGN IX-39-9-5, *Manuel de Velasco y Tejada, su prisión*.

¹⁸² AECBA Serie II, tomo II, Pág. 539, 547 y 619.

más de tres años, amparándose en la condición de lugar sagrado concedida a los edificios religiosos y gozando de la protección de los jesuitas, gracias a la cual no debió temer el ingreso de oficiales de justicia. Pero sus propiedades fueron embargadas por un concurso de acreedores, donde varios representantes de la facción que le era contraria lograron introducirse en calidad de representantes de sus demandantes.

El último gobernador venal del Río de la Plata

Alonso de Arce y Soria, nombrado gobernador por Felipe V, había arribado a Buenos Aires en los mismos navíos que Mutiloa –los de Martínez de Murguía– en abril de 1712. Era un militar que se había destacado en la guerra de Flandes, donde fue promocionado al grado de coronel. En reconocimiento a sus servicios se le permitió en 1689 comprar el corregimiento peruano de Huaylas, y como otros tantos magistrados venales, partió al Nuevo Mundo cubierto de deudas y decidido a recuperar su inversión explotando a la población indígena.¹⁸³ En el Perú contrajo matrimonio con doña Claudia de Arcos, que era nacida en Panamá y tenía dos hijas de una unión anterior. Al hacerlo, ella no traía una dote y sólo era dueña de algún vestuario y de la decencia de su persona; él, en cambio, poseía una fortuna calculada en unos 30.000 pesos, quizás procedentes de la acumulación de sus sueldos como militar.¹⁸⁴ Tuvieron dos hijos, Alonso y Joseph, que nacieron en Huaylas y permanecieron en el corregimiento, junto con su madre y hermanas, cuando en 1706 Arce retornó a España a negociar la compra de otro cargo.

Luego de tres años de costosas gestiones en Madrid, Arce logró que se le concediera el Gobierno y la Capitanía General del Río de la Plata, a cambio de entregar 12.000 escudos de contado y otros 6.000 antes de tomar posesión del cargo. El 16 de febrero de 1709 se le hizo despacho del título y se le recibió el juramento en el Consejo de Indias: esto demuestra que su designación no tuvo relación alguna con las denuncias contra Velasco, sino que más bien respondió a las angustiosas necesidades económicas de la Corona, que casi tres años antes de que éste dejara el poder ya le había encontrado un sucesor y se hacía hecho adelantar parte de la suma convenida por la venta del cargo. Pero el rey sólo autorizó su partida en julio de 1711 y le ordenó que ni bien llegase a

¹⁸³ Arce formó parte de la primera camada de corregidores nombrados por el Consejo de Indias, que en la década de 1680 le arrebató esa facultad a los virreyes del Perú; DAVID BRADING **Orbe Indiano. De la monarquía católica a la república criolla, 1492-1867** Fondo de Cultura Económica, México, 1993, págs. 432-433.

¹⁸⁴ El testamento de Alonso de Arce y Soria se encuentra en AGN Registro de Escribano N° 2 de 1714-1716, fs. 50v.-52v.

Buenos Aires se retirara a cien leguas de la misma a aguardar que concluyeran los cinco años de gobierno de Velasco: éste había comprado su cargo y no debía ser despojado de él antes de tiempo, ni siquiera si se lo hallaba culpable de las acusaciones de extorsión y contrabando.

Los cinco años de Velasco se cumplieron el 4 de febrero de 1713. Obedeciendo las directivas del rey, Arce había sentado su residencia en Mendoza, donde se reencontró con su esposa y sus hijos, que viajaron desde el Perú a reunirse con él. Mantuvo desde allí alguna correspondencia con Mutiloa, quien le insinuó que le haría entrega de la capitanía general pero no del gobierno político, que retendría hasta que finalizara la pesquisa. Esto preocupó a Arce, que sin aguardar la invitación del pesquisidor, inició a finales de marzo un costoso viaje a Buenos Aires, junto con su familia y criados, en el que consumió buena parte de su fortuna. Cuando llegó a la guardia de Luján se hizo anunciar a Mutiloa, aguardando su invitación para mudarse al fuerte, que era entonces la sede de los gobernadores. Pero éste, lejos de hacerlo, siguió ocupando las habitaciones de la fortaleza que debieran haber albergado al gobernador y a sus familiares.

Ya en Buenos Aires, Arce comprendió que Mutiloa no cejaría en su propósito de perpetuarse en el poder. El 27 de abril se presentó en el despacho de la Real Hacienda y entregó los 6000 escudos que quedaban por pagar de los 18.000 en que había comprado el cargo de gobernador. Al parecer, el pesquisidor le había sugerido que podría cederle el gobierno hasta que saldase sus deudas con la Corona. Se trató de una maniobra dilatoria, pues Mutiloa sabía que éste se hallaba fuertemente endeudado y sospechaba que no podría disponer de esa suma a corto plazo. Pero Arce recurrió a prestamistas para conseguirla y presentó a los oficiales reales el pliego con su nombramiento, exigiéndoles que lo asentaran en los libros de la Real Hacienda. Esa misma tarde, estos se lo enviaron de regreso sin inscribirlo en los libros, con el pretexto que no era costumbre sentar plaza de los títulos de gobernador. Pero en confidencia admitieron que el propio Mutiloa les había prohibido que lo asentasen.

Arce cambió entonces de estrategia y decidió hacerse reconocer por la oficialidad del Presidio para que el pesquisidor le cediera al menos el gobierno militar. El 10 de mayo, cercano el mediodía, se presentó en el fuerte de San Baltasar de Austria. Entró acompañado por tres de los capitanes del Presidio e instó a otros que encontró allí a que se sumaran a su comitiva. La hora no fue escogida al azar: aprovechando la presencia de parte de la soldadesca, que se agolpaba en la entrada del fuerte por producirse el cambio de guardia, dio orden a los oficiales de que llamaran a Manuel del Barranco y Zapiáin,

que como comisario de la caballería del Presidio era la más alta autoridad militar de Buenos Aires, con el objeto de intimarle a reconocerlo. Más tarde se lo acusaría de haber querido generar un tumulto, cosa que Arce se empeñaría en negar, afirmando que sólo pretendía ser reconocido como gobernador por la alta oficialidad de la guarnición. Pero aunque lo trató con la reverencia que correspondía a su rango, Barranco se negó a aceptarlo como tal, alegando que el cabildo debía proclamarlo formalmente antes de ser recibido por la plana mayor del Presidio.

Arce conocía bien la alianza entre la facción que dominaba el ayuntamiento, y Mutiloa, por lo que sólo recurrió a lanzar una intimación a la corporación como último recurso. Para evitar que se lo acusara nuevamente de sedicioso, prefirió no presentarse ante los capitulares y les envió un emisario, Joseph García Inclán. El 12 de mayo, éste se apersonó en la casa consistorial y les leyó un exhorto en que aquel solicitaba que obedecieran el pliego real, como primer paso en la ceremonia de su proclama como gobernador. Los amenazó con aplicarles penas por daños y perjuicios si no lo hacían y, apelando a su honor de leales súbditos del rey, afirmó que en ese caso ordenaría que sus nombres fueran asentados “*con notas de inobedientes a las Reales Órdenes de Su Majestad*” en los libros de la ciudad.¹⁸⁵ Regidores y alcaldes no se dejaron amedrentar y pospusieron la contestación del exhorto para una futura sesión, pretextando que dos miembros del claustro se hallaban ausentes ese día. Tres días más tarde, el cabildo sesionó nuevamente, esta vez con todos sus miembros presentes. Se decidió devolver a Arce su exhorto, indicando que Mutiloa seguiría siendo reconocido como gobernador político en tanto no concluyese el juicio de pesquisa. La facción de los Samartín, que dominaba la corporación, y el comisario de la caballería Manuel del Barranco y Zapiáin, que gobernaba el Presidio, habían cerrado filas en torno al pesquisador, dejando aislado a Arce.

A éste sólo le quedaba como opción escribir al monarca. Ello suponía aguardar que algún navío zarpara hacia Cádiz llevando su denuncia, encargar a un agente de negocios que la condujera a Madrid y petitionara en su nombre ante el rey. El escrito que envió a Felipe V fue firmado el 2 de junio de 1713; la respuesta del rey data del 11 de julio de 1714 y llegó a Buenos Aires cuando Arce ya había muerto. Las causas de este retraso habrá que buscarlas menos en la afluencia de navíos a través del Atlántico que en la inmensidad de otro océano: el de la burocracia imperial, cuyos engranajes necesitaban

¹⁸⁵ AECBA Serie II, tomo II, págs. 663 (título de Arce y Soria) y 670 (exhorto presentado al cabildo).

de largas y costosas gestiones para moverse y conseguir que un reclamo llegara al despacho del monarca. El cumplimiento del despacho real parecía destinado a ser postergado indefinidamente, pero en otoño del año siguiente se conoció en Buenos Aires una real cédula del 7 de septiembre de 1712, ignorada u ocultada hasta entonces por Mutiloa, que le ordenaba que no demorase la entrega del gobierno a Arce aunque el juicio de residencia a Velasco se prolongara. El 17 de mayo de 1714 Arce intimó al pesquisidor y al cabildo a que le dieran inmediato cumplimiento. Ya no había pretexto para demoras.

El ayuntamiento se vio forzado a recibirlo formalmente. La ceremonia de *recibimiento*, como ya dijimos, era el requisito ritual que necesitaba para ser reconocido en posesión del gobierno: si en Europa la entronización “hacía” al rey, en América el recibimiento del cabildo de la ciudad cabecera “hacía” a un gobernador.¹⁸⁶ La mañana del 19 de mayo, cuando Mutiloa se presentó en la casa consistorial y el portero anunció su llegada, la rueda del aparato ceremonial comenzó a girar. Los alcaldes ordinarios y los regidores dejaron los asientos que ocupaban de acuerdo a su antigüedad y rango, intercambiaron saludos y cortesías con el pesquisidor y éste les expresó que estaba allí “*para efecto de recibir los cargos de Gobernador y Capitán General de estas Provincias al Sr. Coronel Dn Alonso de Arce y Soria*”. Este último entró poco después y presentó sus credenciales al cabildo: el real despacho firmado por Felipe V en 1709, que fue leído en el recinto, y las dos cédulas reales de 7 y 20 de septiembre de 1712. Admitiendo que esas disposiciones regias no tenían vicios de forma ni de fondo, Baltasar de Quintana Godoy, el regidor decano, las tomó, las besó, las puso sobre su cabeza y proclamó que iban a ser obedecidas. Arce entonces pronunció el juramento de rigor, prometiendo guardar las leyes, ordenanzas y pragmáticas reales y respetar las preeminencias e inmunidades de la ciudad. Luego de la jura, le fue entregado el bastón de mando.¹⁸⁷ Los fiadores que ofreció, que fueron los capitanes Bernardo Saavedra y Antonio de Merlo, fueron admitidos.¹⁸⁸

De inmediato, el nuevo gobernador quiso forzar el ingreso de miembros de su propia camarilla al ayuntamiento. Pero su intento de penetrar en la corporación tuvo un magro éxito. Arce no ignoraba que allí se encontraba el “núcleo duro” de la facción de los

¹⁸⁶ Georges BALANDIER, **El poder en escenas. De la representación del poder al poder de la representación** Paidós, Buenos Aires, 1992, pág. 33.

¹⁸⁷ Referencias a esta ceremonia en Constantino BAYLE **Los cabildos seculares en la América Española** Sapiencia, Madrid, 1952, pág. 612.

¹⁸⁸ AECBA Serie II, Tomo III, págs. 43-44.

Samartín, aliada con Mutiloa, y que una depuración a corto plazo resultaba imposible, ya que no disponía de herramientas legales para expulsar regidores ni anular elecciones como los tuvo en su momento el pesquisidor. Debíó conformarse con cubrir con personas de su entorno los escasos cargos que quedaban vacantes, que eran aquellos en que la facción dominante no se hallaba interesada debido a su escasa gravitación política. El 11 de junio de 1714, Bernardo Saavedra presentó el título de protector de naturales, expedido seis días antes por Arce, y fue admitido sin reparos.¹⁸⁹ Dos días más tarde, Cristóbal de Rivadeneira ingresó al ayuntamiento con “*un título de alguacil mayor en arrendamiento*”, rubricado también por éste. Ambos vecinos habían sido acólitos de Velasco y ahora se había unido al círculo del nuevo gobernador. El regidor decano le tomó juramento, le entregó la vara de alguacil y le señaló el lugar en que debía sentarse.¹⁹⁰

A pocas semanas de haber asumido, Alonso de Arce y Soria cayó enfermo. Afincado en una de las habitaciones del fuerte, adonde se mudó con su esposa y sus hijos, quedó postrado y ya no volvió a abandonarla. En su entorno comenzó a hacerse visible la figura del sargento mayor Joseph Bermúdez, quien lo auxilió en el manejo de los asuntos públicos. Este, como se recordará, era un ingeniero militar que había sido enviado por la corona para rediseñar las endebles fortificaciones de Buenos Aires y había formado parte de la camarilla de Velasco. El estado de salud de Arce se agravó al comenzar la primavera. Consciente de que el fin se acercaba, decidió poner en orden sus asuntos personales. El 29 de septiembre, postrado en su lecho pero lúcido aún, hizo llamar al escribano Tomás Troncoso y le dictó su testamento. Sus últimas disposiciones, en las que no hubo referencia alguna a la coyuntura política, se limitaron a dar escuetas indicaciones sobre el destino de su cuerpo y de sus bienes. Hizo mención a una memoria de sus deudas, que no detalló pero ordenó a sus albaceas que pagaran, y describió escuetamente su patrimonio, que se componía de 3000 pesos en plata labrada, seis esclavos y el menaje de su casa, y también de un mayorazgo en España que dejó en herencia a su hijo mayor. Nombró albaceas a doña Claudia de Arcos, su esposa y al capitán Pedro de Saavedra. Al rubricar el testamento estuvieron presentes algunos oficiales del Presidio –los capitanes Justo de Ramila, Joseph García Inclán y Sebastián

¹⁸⁹ AECBA Serie II, Tomo III, pág. 53-58.

¹⁹⁰ AECBA Serie II, Tomo III, pág. 60.

Delgado y el ayudante Juan Diego— y su confesor, el fraile dominico Gerardo de León.¹⁹¹

Ese mismo día se ocupó también de nombrar un eventual sucesor, designando al sargento mayor Joseph Bermúdez *teniente general y gobernador de Armas*.¹⁹² Pero inmediatamente se topó con la oposición del cabildo. En vano Bermúdez procuró persuadirlo de que aceptara esa delegación del mando. Cuando al día siguiente, asistido por el escribano Troncoso, aquel visitó al ayuntamiento para obtener su reconocimiento, sólo obtuvo una respuesta dilatoria. Los cabildantes, habituados a discutir cuestiones controversiales fuera de la publicidad del recinto, postergaron el tratamiento del asunto para otra sesión, pretextando que no todos los miembros del claustro habían concurrido ese día. Acto seguido, Bermúdez entregó el título a los oficiales de la Real Hacienda, que sí lo reconocieron, anotándolo en los Libros Mayores y aceptando los 50 pesos que le correspondían pagar en concepto de *media anata*.¹⁹³

Reunidos nuevamente, alcaldes y regidores se pronunciaron el 1° de octubre. Tras haber “*conferido largamente sobre el particular*” decidieron rechazarlo. Consideraban que la designación de Bermúdez contravenía lo dispuesto por la Recopilación de Leyes de Indias de 1680, que ordenaba que el teniente de gobernador fuese aprobado por el Consejo de Indias si era nombrado en la península, y por la Audiencia más próxima si lo era en América. El cabildo se negó a admitirlo sin que mediara la confirmación de la Real Audiencia de Chuquisaca y agregó que por sus calidades personales, Bermúdez se hallaba inhabilitado para ejercer el gobierno por ser “*avecindado, hacendado y emparentado en esta dicha ciudad, ser militar y no letrado*”. Al declarar viciado el título de Bermúdez, la facción que dominaba el cabildo apostaba su carta al cercano fin de Arce. Aguardaba que se produjera la vacancia para apropiarse del mando político de esta Provincia, ya que la Recopilación de Indias dejaba bien establecido que si un gobernador moría sin haber designado teniente, correspondía que el mando político pasara a los alcaldes ordinarios del cabildo.

¹⁹¹ AGN Registro de Escribano N° 2 de 1714-1716, fs. 50v.-52v.

¹⁹² AECBA Serie II, Tomo III, pág. 101.

¹⁹³ AGN XIII-14-1-2 *Caja de Buenos Aires Carta Cuenta (1712-1714)*.

La “Anarquía” de 1714

La muerte de Alonso de Arce y Soria conduciría a la acefalía en el gobierno político y militar de esta Provincia. Esta daría lugar a que dos bandos se proclamaran sus sucesores y desencadenaría una secuencia de hechos de violencia que concluiría con el atrincheramiento del cabecilla de uno de ellos en el fuerte.¹⁹⁴ Los hechos se desencadenaron cuando Arce, en su lecho de muerte, fue informado de que los capitulares habían cuestionado la designación del sargento mayor Joseph Bermúdez. Su postración no le impidió dictar un auto en que ordenaba severas sanciones contra quienes habían objetado su derecho a nombrarlo.¹⁹⁵ Esa misma noche, Bermúdez prestó juramento como teniente en el fuerte y visitó luego a algunos de los capitulares en sus casas para intimidarlos. Se presentó ante los regidores Juan Bautista Fernández Parra y Gaspar de Avellaneda y les hizo lectura del auto, tras lo que consiguió que por lo menos el primero le reconociera como tal.¹⁹⁶ Arce murió a las 6 de la mañana del 2 de octubre. Las honras fúnebres se celebraron en un recinto del fuerte. Como lo había pedido en su testamento, su cuerpo fue conducido a la iglesia del convento de Santo Domingo y sepultado en la capilla de Nuestra Señora del Rosario, vestido con el hábito de los religiosos de esa orden.

No habían concluido los rituales fúnebres cuando Bermúdez dirigía presentaciones al virrey en Lima y a la Audiencia de Chuquisaca para ser reconocido como sucesor del gobernador fallecido. Extendió poderes de representación a tres personajes influyentes de la corte virreinal, a un mercader porteño que se encontraba en el Alto Perú y a un abogado de Chuquisaca, no sólo para gestionar la validación del título, sino para que los cabildantes que lo habían impugnado fueran castigados, tal como lo había dispuesto Arce antes de morir.¹⁹⁷ Los nombres de sus representantes en Lima —el maestre de campo Jorge de Villalonga, conde de Cuevas y gobernador de El Callao, Dn Juan

¹⁹⁴ Esta “anarquía” —permítasenos utilizar este término extemporáneo— ha sido anteriormente analizada por dos historiadores de la iglesia, Rómulo Carbia y Cayetano Bruno, que enfatizaron el rol de mediador que ejerció el obispo en la resolución del conflicto. Más recientemente, Víctor Tau Anzoátegui publicó un excelente artículo que inserta este episodio en el proceso de construcción del marco regulatorio indiano. Dicho artículo, por desgracia, no tiene en cuenta la lucha facciosa que se venía produciendo en Buenos Aires desde hacía más de una década, por lo que la sugestiva mirada lanzada por este autor desde la Historia del Derecho resulta incompleta; ROMULO CARBIA **Historia eclesiástica del Río de la Plata** Buenos Aires, Alfa y Omega, 1914, tomo II, págs. 72-73; CAYETANO BRUNO **Historia de la Iglesia en la Argentina** Don Bosco, Buenos Aires, 1968, Vol. IV, págs. 128-132; VÍCTOR TAU ANZOATEGUI “Poderes y normas a través de un ejercicio de casuística indiana (Buenos Aires, 1714-1717)” en LUIS GONZALEZ VALES (coord.) **XIII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano: Actas y estudios** Academia Puertorriqueña de la Historia, 2003, Vol. 1.

¹⁹⁵ AGN Registro de Escribano N° 2 de 1714-1716, f. 53.

¹⁹⁶ AECBA Serie II, Tomo III, pág. 106.

¹⁹⁷ AGN Registro de Escribano N° 2 de 1714-1716, fs. 52v.-55v.

Cervino de Luna, vizconde y Miraflores, y Dn Juan de Veytía y Aguirre, miembro del consulado— muestran a las claras que esta partida no se jugaba solamente en Buenos Aires, sino también en la capital del virreinato, y que Bermúdez recurrió a la red de vínculos de Arce para encontrar quien lo sostuviera.

El alcalde Pablo González de la Cuadra asistió a la ceremonia fúnebre a expresar sus condolencias en nombre de la corporación. Se produjo un momento de tensión cuando, acompañado por el escribano del cabildo, pidió las llaves de los apartamentos del difunto para inventariar sus bienes. Bermúdez se interpuso y le informó que él ya había realizado el inventario, asistido por el escribano Tomás Troncoso; intuimos que había adelantado los trámites sucesorios para apropiarse de los papeles de gobierno. El ayuntamiento se resolvió entonces a ignorar las últimas disposiciones de Arce y se proclamó en posesión del mando político, en tanto se aguardaban instrucciones del virrey y de la Real Audiencia. El 3 de octubre, Pablo González de la Cuadra —uno de los aliados más conspicuos de los Samartín durante su resistencia contra el gobernador Velasco— fue proclamado gobernador en calidad de alcalde ordinario de primer voto; el regidor decano Baltasar de la Quintana Godoy le tomó juramento y Joseph de Narriondo ofreció la fianza acostumbrada. Mientras el cabildo se arrogaba el ejercicio del *gobierno político*, el *gobierno de las Armas* recaía en el comisario de la caballería Manuel del Barranco y Zapiáin, a quien el ayuntamiento reconoció como autoridad militar suprema, por encima de Bermúdez y desconociendo a éste.

La disputa por el mando dividió a los principales personajes de la ciudad en dos facciones. Joseph Bermúdez contaba con la adhesión de los oficiales de la Real Hacienda, de los vecinos que había formado parte de la camarilla de Velasco y de algunos de los capitanes del Presidio. La dupla González de la Cuadra-Barranco, por su parte, era sostenida por la facción de los Samartín, que dominaba el cabildo, y por un importante sector de la oficialidad del Presidio, y contaba también con el guiño cómplice de Mutiloa.

Rivalizando por poner su poder en escena, Barranco y Bermúdez se lanzaron a la publicación de *bandos de buen gobierno*, que uno y otro hicieron pregonar en los sitios acostumbrados. No creemos, como se ha afirmado, que el objeto de estos pregones haya sido el de legitimarse frente a la vecindad, ya que el peso que podía tener ésta en la definición de este conflicto era virtualmente nulo, aunque se puede admitirse que la lectura de bandos, acompañada por el usual desplazamiento de soldados y el repique de

cajas, pudo haber actuado como una forma de intimidación frente a la facción rival.¹⁹⁸ El 5 de octubre, Bermúdez hizo leer un bando que reglaba distintos aspectos la vida de los habitantes de la ciudad, prohibiendo, entre otras cosas, la portación de armas, las blasfemias, el vagabundeo y las reuniones a deshoras en las pulperías.¹⁹⁹ Al día siguiente le tocó el turno a Barranco, quien publicó otro en que acusaba a Bermúdez de haber atentado contra las leyes y las ordenanzas reales al haberse adjudicado la tenencia de gobernador y ordenaba que se lo reconocieran como gobernador militar. Quizá lo que buscaban ambos era la descalificación del contrincante: en el caso de Bermúdez, que se adelantó a condenar la indecencia y las malas costumbres, poniendo en duda la adhesión de su contendiente a los principios de rectitud moral; en el de Barranco, ofreciendo la proclamación de aquel como una escandalosa afrenta a las leyes del reino.²⁰⁰

El pesquisidor Mutiloa, al ser consultado por los oficiales de la Real Hacienda sobre a cuál de ellos debían reconocer como gobernante en ejercicio, desestimó los derechos del sargento mayor Bermúdez al *gobierno político* por no haber sido investido por el cabildo.²⁰¹ Bermúdez acudió entonces al obispo fray Gabriel de Arregui para que éste interviniera y al menos se le otorgara el *gobierno de las Armas*. La facción que dominaba el cabildo advirtió la posición endeble en que colocaba al hacerlo y decidió explotarla: fray Gabriel, antiguo monje franciscano que había sido nombrado obispo interino del Río de la Plata por real cédula del 23 de junio de 1713, era primo del alcalde ordinario de segundo voto, Juan de Samartín, y estaba emparentado con la mayor parte de los capitulares.²⁰² Dos diputados de la corporación –el referido Samartín y el alcalde provincial Ruiz de Arellano– fueron enviados a conferenciar con el obispo para impulsarlo a que aceptara el papel de mediador. Se consiguió así que Barranco y

¹⁹⁸ Opina Tau Anzoátegui que se trató de una manera de “ganar espacio público en la búsqueda de legitimar su autoridad”; VICTOR TAU ANZOATEGUI “Poderes y normas...”

¹⁹⁹ Tau Anzoátegui, que la considera una pieza preparada con precipitación, observa que reproduce 11 de los 13 preceptos que contiene del *pregón de buena gobernación* del jurista castellano Jerónimo Castillo de Bobadilla, aunque con una redacción más simplificada. VICTOR TAU ANZOATEGUI Los bandos de buen gobierno del Río de la Plata, Tucumán y Cuyo (época hispánica). Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, 2004, Págs. 33-34.

²⁰⁰ Sobre la concepción de “publicidad” en el mundo hispánico y su relación con la publicación de bandos de buen gobierno, véase ANNICK LEMPÉRIÈRE, “República y publicidad a finales del Antiguo Régimen (Nueva España)” en FRANÇOIS-XAVIER GUERRA y ANNICK LEMPÉRIÈRE **Los espacios públicos en Iberoamérica...** Págs. 61-64

²⁰¹ El defensor de Velasco en la pesquisa atribuiría los desórdenes que se produjeron en los días siguientes a Mutiloa, quien dio “*su parecer firmado y por escrito para que recayese el gobierno político en don Pablo de la Cuadra y el militar en don Manuel Barranco, de que se originó la conmoción de la gente del Presidio, el sitio del fuerte y el alboroto que fue público y notorio*”; AGN IX-39-9-8, *Copia de diferentes autos que tocan a la recusación hecha a Velasco*.

²⁰² El nombramiento de fray Gabriel en: Rómulo CARBIA **Historia eclesiástica del Río de la Plata...** tomo II, Pág. 71.

Bermúdez firmaran un compromiso por el cual depositaban en fray Gabriel y en Mutiloa la tarea de dirimir a quién correspondía el mando militar. Estos reconocieron la existencia de una real cédula de 1673 que disponía que en caso de acefalía, el *gobierno de las Armas* debía ser ofrecido al sargento mayor del Presidio, pero la misma había caducado en 1680, cuando se creó un cargo que lo superaba en rango, el de *cabo y gobernador de la caballería*. El mando militar debía corresponder a Barranco, pues era quien ocupaba ese cargo y, además, el oficial que ostentaba la mayor graduación.²⁰³

Bermúdez no se conformó con el dictamen. Pidió al obispo que reviera su posición, pero como no lo consiguió movilizó a sus hombres para enfrentar a Barranco y al cabildo. El 12 de octubre ocupó el puerto sobre el Riachuelo, una posición estratégica, ya que los navíos de registro de Ibarra y Lazcano se preparaban a zarpar y podían ser utilizados por sus enemigos para enviar recados al monarca. Cuando el alcalde Pablo González de la Cuadra visitó el puerto para fiscalizar el cargamento de un buque de la *Compagnie de Guinée*, Bermúdez destacó una pequeña partida de soldados, encabezados por el cabo de la guardia, para se lo impidiera.²⁰⁴ Fue necesario que Manuel del Barranco acudiera con sus hombres para hacerla retroceder.

Tres días más tarde, éste último hizo proclamar un bando en que acusaba a Bermúdez de haber faltado a la promesa de respetar el dictamen del obispo y le puso un ultimátum de 24 horas para que lo reconocieran como *gobernador de las Armas*. El sargento mayor se atrincheró entonces en el fuerte, amunicionando los cañones que miraban hacia la guardia del Riachuelo y hacia el cabildo. Pero sólo encontró apoyo en los capitanes Juan Antonio Quijano y Antonio de Aguirre y en los hijos adolescentes del difunto Arce, Joseph y Alonso de Arce y Arcos, que se hallaban al mando de 25 soldados y no disponían de víveres para resistir un asedio. Barranco colocó a las compañías a su cargo frente a la fortaleza, para sitiarse o atacar.

Viéndose perdido, Bermúdez hizo llegar un recado al obispo, declarándose dispuesto a acatar una nueva mediación. En un esfuerzo por salvar su honor y el de sus partidarios, propuso a fray Gabriel de Arregui que asumiera el gobierno político y militar de la Provincia. El prelado rechazó la proposición pero consiguió detener la reyerta antes de que se produjera el enfrentamiento armado. El 18 de octubre, logró que Bermúdez se apersonara en la mansión episcopal y reconociera a Barranco como *gobernador de las*

²⁰³ Los fundamentos legales de los respectivos pronunciamientos de Arregui y Mutiloa se encuentran analizados por VICTOR TAU ANZOATEGUI “Poderes y normas...”

²⁰⁴ El 4 de diciembre de 1714, Pablo González de la Cuadra denunció que el 12 de octubre, Bermúdez le puso embarazo para visitar una embarcación francesa apostada en el puerto.

Armas. Posteriormente, vencedor y vencido caminaron hacia la fortaleza, donde el puñado de oficiales que apoyaba al sargento mayor presentó su rendición.

Una nueva intervención del monarca

La rendición de Bermúdez no puso fin a las discordias. Aunque el alcalde ordinario Pablo González de la Cuadra y el comisario de la caballería Manuel del Barranco y Zapiáin se avinieron a compartir el gobierno de esta Provincia –aquel como *gobernador en lo Político* y éste como *gobernador de las Armas*– no ignoraban que se trataba de una solución provisoria y que tanto la Real Audiencia de Chuquisaca como el virrey en Lima se hallaban anoticiados de la vacancia dejada por Arce. En la Real Audiencia de Chuquisaca, Bermúdez movió sus influencias sobre los oidores y consiguió que le reconocieran sus derechos.²⁰⁵ El 13 de diciembre de 1714, se presentó ante el cabildo con el título de gobernador “*de lo político y de las Armas*” que le había expedido esa Real Audiencia. Los cabildantes le pidieron que saliera para poder deliberar en secreto, pero luego lo llamaron y se manifestaron “*unánimes y conformes*” con su nombramiento. Al día siguiente, lo convocaron para su ceremonia de recepción. Bermúdez “*hizo alguna relación, diciendo que estaba pronto a servir y a atender a esta Ciudad en cuanto se le ofreciese*”. Acto seguido, el regidor decano Baltasar de Quintana Godoy le recibió juramento y aceptó a los fiadores que presentó, para luego invitarlo a sentarse en el lugar usualmente destinado a los gobernadores.²⁰⁶ Con estas formalidades, aquel se recibía del cargo, que ocupó hasta el 23 de mayo del 1715. La facción que dominaba al cabildo de Buenos Aires no cejó en su intención de despojarlo del poder político y siguió conspirando contra Bermúdez hasta que consiguió un despacho del virrey por el que se lo obligó a entregar el mando a Baltasar García Ros, un militar con una prestigiosa foja de servicios que había sido anteriormente gobernador interino del Paraguay.²⁰⁷ Pero tampoco se conformó con ello. En junio de 1717, el virrey atendió finalmente a sus reclamos y recolocó (aunque por brevísimo tiempo) a Manuel de Barranco y Zapiáin a la cabeza del gobierno del Río de la Plata.²⁰⁸

²⁰⁵ Para la batalla legal que se produjo en la Audiencia y luego en la corte virreinal, véase VICTOR TAU ANZOATEGUI “Poderes y normas...” págs. 103-106.

²⁰⁶ AECBA Serie II, Tomo III, pág. 141.

²⁰⁷ AECBA Serie II, Tomo III, pág. 191.

²⁰⁸ AECBA Serie II, Tomo III, pág. 414

Finalmente le tocó al monarca tomar cartas en el asunto. Cuando los sucesos de Buenos Aires llegaron a oídos de Felipe V, la Guerra de Sucesión llegaba a su fin y lograba ser reconocido como monarca español por casi todos los demás soberanos del continente, aunque al costo de tener que ceder a sus rivales sus territorios italianos y flamencos. La necesidad de recursos, alimentada por su participación en nuevas guerras, le impidieron renunciar a la venalidad de los cargos en Indias: como se ha dicho, debe verse en este sentido a Felipe V como un continuador de los Habsburgo.²⁰⁹ Sin embargo, el gobierno del Río de la Plata fue la excepción. Ello tenía una explicación: en febrero de 1714, como parte de los convenios firmados en Utrecht y en Radstadt, se acordó la paz con Portugal y se le prometió la devolución de la Colonia del Sacramento. El rey, obligado a reconocer que Buenos Aires era el principal baluarte frente a aquella avanzada portuguesa, sustrajo el gobierno del Río de la Plata del lote de los empleos venales y lo reservó a militares de carrera, el primero de los cuales fue Bruno Mauricio de Zavala, que en julio de 1717 sucedió a Barranco y Zapiáin.

Pero Felipe V quiso también precaverse de que Buenos Aires no volviera a ser presa de enfrentamientos facciosos que pudieran colocar a esta ciudad en un estado de debilidad frente a la siempre presente amenaza portuguesa. Para evitar futuras desavenencias en el seno de la vecindad porteña o de la oficialidad del Presidio, decidió establecer un nuevo esquema sucesorio a aplicar en el caso de que la gobernación quedase vacante. Por real cédula del 16 de marzo de 1716 creó el cargo de *teniente de rey*, que sería ocupado por un militar de rango y reemplazaría al gobernador en caso de que éste se ausentase o muriese. Dos eran las preocupaciones evidenciadas por el monarca. La primera era establecer un procedimiento a seguir en los casos de acefalía o ausencia del gobernador. Su cargo debía ser ocupado por el *teniente de rey*, pero si éste no estuviera en condiciones de hacerlo quedaba establecido el orden de quiénes lo reemplazarían: en primer lugar el sargento mayor del Presidio, en segundo el capitán más antiguo, en tercero el capitán que seguía en rango a éste y así en graduación descendente. Existía, no obstante, otra motivación menos visible que la anterior pero quizás más contundente: en adelante, el cabildo de Buenos Aires quedaría privado de la posibilidad de asumir el mando en caso de vacancia. La real cédula establecía que al ausentarse el gobernador propietario, los *tenientes de rey* “han de mandar ambas

²⁰⁹ FRANCISCO ANDUJAR CASTILLO *Necesidad y venalidad. España e Indias, 1704-1711* Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008; ANGEL SANZ TAPIA *¿Corrupción o necesidad?: la venta de cargos de gobierno americanos bajo Carlos II (1674-1700)* Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2009.

jurisdicciones política y militar”. Felipe V había resuelto que el ayuntamiento debía abocarse en forma exclusiva al tratamiento de los asuntos municipales y ya no podría aspirar al *gobierno político* de la Provincia, ni aun en circunstancias extraordinarias, convirtiendo así en letra muerta lo establecido por la Recopilación de Leyes de Indias de 1680.

Puede creerse que esto constituyó un duro golpe a la facción que dominaba el cabildo, pero esa no era la intención del monarca. Este sólo deseaba dejar atrás el confuso edificio administrativo construido por los Habsburgo y delimitar con claridad las funciones e incumbencias del gobernador, de las autoridades militares y del cabildo, evitando que en adelante se presentara cualquier tipo de superposición que pudiera generar conflictos. Por ello, no resulta incongruente que, por un lado, hubiera otorgado al ayuntamiento facultades para controlar la explotación del ganado cimarrón, el corte de maderas en las islas y la Banda Oriental y el tráfico de cueros con los capitanes de navío y que, por otro, circunscribiera sus competencias administrativas al plano municipal. No hubo una animadversión hacia la “ciudad” –la vecindad y el cabildo– y eso quedará en evidencia cuando el 5 de octubre de ese mismo año, Buenos Aires recibiera de Felipe V los títulos de “*muy noble y muy leal*”.

Detrás de la real cédula del 16 de marzo de 1716 existía también el propósito de atenuar los fuertes rasgos corporativos que había adquirido la administración en las Indias durante los últimos Habsburgo. Ello se aprecia cuando Felipe V depositó en el *teniente de rey* –o en quienes por orden debían suplirlo, todos ellos militares– tanto el *gobierno de lo Político* como el *gobierno de las Armas*. Se trató de un notable giro en la política seguida por la monarquía, que se había mostrado cuidadosa en respetar a las jerarquías vecinales y militares, consideradas las dos columnas en que se asentaba la dominación española en las Indias, y que hasta entonces en los casos de acefalía había dispuesto que el mando político recayera en el cabildo de Buenos Aires, mientras que el mando militar debía ser confiado al oficial de mayor rango del Presidio.

La “hora navarra” en Buenos Aires

La historiografía reciente ha estudiado la creciente participación de las élites vascas y navarras en el gobierno de la monarquía hispánica, particularmente durante las primeras décadas del siglo XVIII. La misma estuvo vinculada al proceso de transformaciones que se llevaron a cabo en los planos administrativo, hacendístico y militar con la finalidad

de apuntalar el poder del soberano. A comienzos de su reinado, Felipe V desplazó de los espacios de decisión a la alta nobleza castellana y comenzó a rodearse, entre otros, de muchos de esos cántabros o “norteños”. Estos no provenían de la aristocracia latifundista sino que estaban ligados al sector exportador de hierro y lanas del Cantábrico, y ofreciendo dinero y servicios a la corona y ganando lealtades para la nueva dinastía fueron introduciéndose en el entorno del monarca y se ganaron el favor de éste. Un importante número de individuos procedentes de las regiones del norte de la península aprovechó la Guerra de Sucesión para mostrar una participación activa y fidelidad al bando borbónico, por lo que fueron premiados con cargos y honores. Vinculados al programa reformista de Felipe V, unos pocos lograron ocupar lugares de influencia en la Corte, mientras que el resto escalaría posiciones en la alta oficialidad del ejército y en la administración de los territorios de la monarquía. Relacionados en muchos casos con una actividad extractiva como la minería del hierro, construyeron vastas redes de comercialización del metal gracias a la colocación de familiares y socios en los puertos de uno y otro lado del Atlántico. Así, el imperio hispánico ofreció a vascos y navarros la posibilidad de enriquecerse tanto en el servicio del rey como participando del tráfico indiano. El secreto de su éxito, según explica Guerrero Elecalde, fue que identificaron sus propios intereses con los de la corona.²¹⁰

El Río de la Plata fue uno de los puntos del imperio en que los cántabros lograron estar mejor posicionados. En el Buenos Aires posterior a la “anarquía” de 1714 vemos sucederse en el gobierno a tres de ellos: Baltasar García Ros, natural de la villa navarra de Valtierra; Manuel de Barranco y Zapiáin, oriundo de San Sebastián, y Bruno Mauricio de Zavala, nacido en Durango de Vizcaya. Los caminos que los llevaron al poder difirieron, pero su pasado militar observó similitudes. Los tres habían comenzado sus servicios a la corona en el ejército de Flandes y eran esencialmente militares de carrera. Tanto García Ros como Barranco y Zapiáin debían sus nombramientos al virrey Diego Ladrón de Guevara, quien si bien pudo haber estado influido por los reclamos del cabildo de Buenos Aires, los designó por hallarse imbuido de las nuevas políticas de la corona. Luego de concluida la contienda dinástica, fue necesario acatar los acuerdos del monarca con Gran Bretaña y Portugal, por los que se facilitaba a estas potencias el acceso al Río de la Plata. Tocó a García Ros supervisar en septiembre de 1715 la instalación del Real Asiento británico en Buenos Aires y devolver tres meses más tarde

²¹⁰ Rafael GUERRERO ELECALDE *Las élites vascas y navarras...* Págs. 77 y ss.

la Colonia de Sacramento a los portugueses. La estrecha vigilancia que debería ejercerse de allí en más sobre ambas orillas del estuario justificaba que el gobierno de esta provincia fuera confiado a un militar experimentado como él. Cuando García Ros debió dejar el gobierno, la corona no quiso renunciar a mantenerlo en su planta funcional y lo colocó en otro cargo de importancia, el de teniente de rey, que tenía a su mando todas las compañías de la guarnición de Buenos Aires y, como ya se dijo, quedaba a cargo del gobierno de la provincia en caso de una vacancia inesperada.

En el caso de Bruno Mauricio de Zavala, nos hallamos ya ante la intervención directa de la corona, que con el objeto de afianzar la estructura de dominación colonial en el Río de la Plata sustrajo a esta gobernación del lote de los empleos venales y la destinó de allí en más a militares de carrera. Zavala formó parte de un destacado grupo de hombres de armas que habían demostrado su probada fidelidad a la causa borbónica y se habían destacado por sus carreras exitosas y por su participación comprometida en las empresas bélicas del rey.²¹¹ Lejos de tratarse de una medida aislada para un territorio en concreto, estos nombramientos pueden ser vistos como parte de una política de carácter más general, orquestada en los años en que el cardenal Julio Alberoni tuvo mayor influencia sobre Felipe V, la cual se aplicó a los territorios de manejo más problemático. No casualmente, el nombramiento de Zavala fue contemporáneo a la imposición de los *Decretos de Nueva Planta* en Cataluña, Valencia, Mallorca y Cerdeña, que propugnaban una administración fuertemente militarizada en esos reinos.²¹²

Tanto en el caso de García Ros como en el de Zavala, puede percibirse nítidamente cómo estos tuvieron vínculos cercanos con otros vasco-navarros que se hallaban en Buenos Aires y seleccionaron entre ellos a sus auxiliares en el ejercicio del poder. En esto se diferenciaron de los gobernadores anteriores, que se habían contentado con apoyarse en alguna de las facciones de vecinos o se habían apropiado del aparato recreado por su predecesor para extraer el *máximo* de utilidades al cargo. Baltasar García Ros mantuvo un vínculo de proximidad con un navarro llegado a la ciudad muchos años antes que él, el general Joseph Ruiz de Arellano, quien como alcalde provincial de la Hermandad disponía de un escaño en el cabildo porteño. Cuando aquel asumió el gobierno, convirtió a éste en su *teniente de gobernador*, cargo que le

²¹¹ Griselda TARRAGÓ “Las venas de las Monarquías. Redes sociales, circulación de recursos y configuraciones territoriales. El Río de la Plata en el siglo XVIII” en José María IMÍZCOZ y Oihane OLIVERI (coords.) **Economía doméstica y redes sociales...** Págs. 199-200.

²¹² Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ “El debate civilismo-militarismo y el régimen de Nueva Planta en la España del siglo XVIII” en **Cuadernos de Historia Moderna**, Universidad Complutense de Madrid, Vol.15, 1994, págs. 41-75.

otorgaba, entre otras facultades, las de representarlo en el ayuntamiento y presidir las sesiones en su nombre. Con esto se vulneraba una costumbre que había sido respetada durante las últimas dos décadas: la de otorgarle esa tenencia al alcalde ordinario de primer voto. Pero el cabildo no sólo debió resignarse a ello, sino también aceptar la controversial decisión de la corona de encargar a Ruiz de Arellano que tomara residencia a cuatro gobernadores –Pablo González de la Cuadra, Joseph Bermúdez, Manuel de Barranco y Zapiáin y Baltasar García Ros–.²¹³ Aun así, la mayoría de los cabildantes objetó la real cédula que lo nombraba juez de residencia, ya que había actuado como fiador del último de ellos cuando éste se recibió del cargo.²¹⁴

Durante el tumultuoso gobierno de Zavala nos encontraremos con un binomio semejante. Cuando en 1724 éste debió alejarse de Buenos Aires para expulsar a los portugueses de la bahía de Montevideo, que habían ocupado con la finalidad de fundar un asentamiento, dejó la ciudad en manos de su teniente Antonio de Larrazábal, vizcaíno al igual que él. Este último tampoco gozaría de la aceptación del cabildo porteño y se vería pronto enredado en una disputa con éste. A resultas de ello, la corporación sería sometida por Zavala a un fuerte correctivo que terminó con la expulsión de varios de sus miembros.

La querrela del bastón y la vara

En 1724 se produjo en el Río de la Plata una coyuntura alarmante: al recrudecimiento de la presión ejercida por las primeras avanzadas de los araucanos en la frontera bonaerense se le sumó la sorpresiva presencia de portugueses en la bahía de Montevideo, que ocuparon con miras a establecer un asentamiento permanente. La urgencia de atender ambos frentes decidió al gobernador a convocar a las milicias, ya que las tropas regulares destacadas en Buenos Aires, cuyo número había descendido a unos 400 soldados, resultaban insuficientes para enfrentar ambos peligros.²¹⁵ Sin

²¹³ En una relación de sus servicios presentada en 1736, Ruiz de Arellano observará que en 1720 tomó residencia correspondiente a 14 años de gobierno; AGN IX-19-2-1 *Archivo del Cabildo de Buenos Aires (1735-1738)*. En los acuerdos del cabildo se encuentran los nombres de los gobernadores residenciados.

²¹⁴ AECBA Serie II, Tomo IV, pág. 436.

²¹⁵ En una misiva dirigida al mismo Zavala, uno de los vecinos afectados por la convocatoria se quejaría de haber tenido que abandonar precipitadamente el cuidado de sus cosechas, y agregó que por entonces “*toda la gente de dichas milicias estaban ocupadas y embarazadas, así en la salida que de orden de VS hizo a las campañas de esta jurisdicción a limpiar los indios pegüenches y aucaes que las infestaban, como del apercibimiento que mandó VS hacer del demás resto de la gente para el desalojo de los portugueses que se habían poblado en Montevideo*”; AGN IX-40-5-3 *Sebastián de Castro contra Andrés Gómez de la Quintana*.

pretender que se haya tratado de una convocatoria general como las que se dispondrían más de medio siglo más tarde, durante el virreinato, la misma parece haber tenido una envergadura no conocida hasta entonces. Zavala se aprestó a pasar a la Banda Oriental a desalojar a los lusitanos, a la cabeza de tres compañías de milicias que reunían unos 250 hombres. Mientras disponía el alistamiento y preparaba su embarque, delegó el manejo de los asuntos públicos en Antonio de Larrazábal. El 15 de enero, éste se presentó ante el cabildo con su título de *“Teniente General en lo Político”*. Los cabildantes aceptaron sus credenciales y Larrazábal prestó juramento en manos del regidor decano Baltasar de Quintana Godoy.²¹⁶

El cabildo que recibía a Larrazábal era un cabildo distinto al de una década atrás. Felipe V había conferido a esta corporación facultad para nombrar nuevos regidores y desde entonces el número de los oficiales concejiles se amplió significativamente, al punto de que entre 1721 y 1723 llegó a ser común que se sesionara con la presencia de quince o más cabildantes. Con el incremento de la planta concejil, vieron franqueado su ingreso a ésta los miembros de distintos sectores de la oligarquía local. Se produjo así la incorporación de representantes de las antiguas familias luso-criollas, como lo fueron Amador Fernández de Agüero y Miguel Rodríguez de Sosa, así como también de integrantes de la que fuera la camarilla de los gobernadores Manuel de Velasco y Alonso Arce y Soria, como Sebastián Delgado y Juan Vicente de Vetolaza y Luna, y de “hombres nuevos” sin antecedentes personales ni familiares en la política, como Tomás Monsalve y Luis Navarro. Esa heterogeneidad de su composición no significó que no pudieran formar un bloque bastante compacto frente a Zavala, quien a diferencia de algunos de sus predecesores estableció una relación distante con los cabildantes, y que además tuvo una clara tendencia de entrometerse en los asuntos municipales.

Los integrantes de la antes poderosa facción de los Samartín no quedaron excluidos del ayuntamiento pero sí en minoría. No obstante, sostuvieron una relación privilegiada con Antonio de Larrazábal y fueron los únicos aliados con los que éste habría de contar en el seno de la corporación. El joven Juan de Samartín, que se convirtiera en el patriarca del clan desde la muerte de Joseph de Arregui, estaba casado con Rosa de Avellaneda, mientras que Larrazábal desposó a Agustina de Avellaneda, ambas hijas del otrora regidor Gaspar de Avellaneda, que fuera en los tiempos de Velasco y de Mutiloa uno de los miembros más destacados de dicha facción. Cuando Larrazábal fue aceptado

²¹⁶ AECBA Serie II Tomo V, Págs. 244-248.

en el empleo de teniente por el ayuntamiento, ofreció como fiador a su conuñado Juan. Singular posición la de este teniente de gobernador, en cuya persona se imbricaban dos tramas relacionales: por un lado, la paisanal-amical, que lo acercaba al gobernador Zavala y a otros vasco-navarros que ocupaban lugares de poder en Buenos Aires; por otro, la de parentesco, que lo unía al clan de los Samartín y, por intermedio de éste, a sus aliados políticos.

El conflicto entre Larrazábal y el cabildo comenzó a poco de haber recibido aquel la tenencia. El enfrentamiento, que se enmascaró tras un asunto de etiqueta, se originó en la súbita disposición de fondos con que contó el ayuntamiento, habituado hasta entonces a manejar una escueta caja de caudales proveniente de sus escasas rentas. En 1723, el directorio del Real Asiento británico saldó la mayor parte de las obligaciones que tenía con esta corporación. Pagó los tradicionales derechos de leña y anclaje que se aplicaban los navíos que entraban en el puerto y que los buques negreros no habían satisfecho hasta entonces, y le entregó una enorme suma en plata en concepto de alícuota de los cueros de toros cimarrones que durante varios años habían embarcado a Inglaterra. Esa suma correspondía a los derechos de los *vecinos accioneros*, que eran teóricamente los dueños del ganado cimarrón, y debía ser repartida entre estos. Pero el cabildo se manejó arbitrariamente y dispuso que buena parte de la misma fuera utilizada para distribuir limosnas entre los pobres de la ciudad, escogiendo a quien beneficiar, con lo que dio prioridad a allegados de los cabildantes y miembros de su clientela.

Larrazábal no solamente estaba al tanto de este negociado sino de que el ayuntamiento se había servido de los fondos de los *Propios y Arbitrios* (es decir, de las rentas corporacionales) para facilitárselos a terceros en carácter de préstamos. El 17 de febrero, Larrazábal se presentó en una sesión para que leer un auto sobre el cumplimiento de la ley de Propios, que impedía los gastos extraordinarios sin autorización del gobernador o de su teniente y prohibía a los regidores que salieran de la ciudad en comisiones con salario. Aplicarla hubiera sido excluir a los cabildantes de hacer rentables sus empleos. Les dio un plazo de treinta días para rendirle cuentas de las sumas prestadas y exigir su devolución. Seis días más tarde, el cabildo rechazó el auto sobre los Propios, según expresó, por ser contrario a la costumbre inmemorial por la que se consideraba habilitado “*para librar de sus Propios y rentas infinitas y mayores cantidades que las prohibidas en la ley que cita*”.²¹⁷

²¹⁷ AECBA, Serie II, Tomo V, pág. 293.

Entretanto, un problema de etiqueta concejil había suscitado fuertes roces entre varios miembros del ayuntamiento y el teniente de gobernador. Este último intentó encuadrar a los cabildantes tras de sí en las ceremonias religiosas a que estaban obligados a concurrir como *cuerpo*, es decir, no individualmente sino representando a la corporación. No habían pasado quince días de haberse recibido en el cargo que Larrazábal quiso forzarlos a que concurriesen con él a la celebración de una misa en honor a San Pedro Nolasco en la iglesia del convento de Nuestra Señora de La Merced. No se trataba de un festejo *de tabla*: no formaba parte del calendario litúrgico en que el cabildo estaba obligado a concurrir *en cuerpo* para exhibirse ocupando los lugares que estaban destinados a sus miembros. El teniente los intimó por medio de un auto a asistir, so pena de 200 pesos de multa a quienes no lo hiciesen, pero los cabildantes no se dejaron intimidar y le respondieron que si aceptaban lo harían “*por convite y no por obligación*”. Lamentaron que lo violento de su pedido no les dejara madurar una decisión y decidieron diferirla para otra sesión. Era una forma de no acatar la imposición y de poder ganar tiempo para discutirla fuera del claustro y de la vista de aquel.

El empleo de *Teniente de gobernador* no era de índole militar, sino sólo *político*: su función era la de reemplazar al gobernador en asuntos competentes a la administración y a la justicia ordinaria. Se recordará además que, desde 1716, existía en Buenos Aires otro funcionario que actuaba en reemplazo del gobernador en asuntos de incumbencia militar cuando éste se ausentaba: el *teniente de rey*. Por lo tanto, en las celebraciones de carácter público, Larrazábal debería haber empuñado una vara, símbolo de la justicia ordinaria, y vestir traje con golilla y capa. No obstante ello, el día de San Pedro Nolasco se presentó vistiendo un uniforme del ejército y empuñando un bastón, que según las normas cortesanas era una insignia militar.²¹⁸ El uso de este atuendo, que el cabildo consideraría un acto de osadía, llevaría a una violenta discrepancia respecto de las prerrogativas que tocaban a cada uno de los actores que intervinieron en esta disputa, que fue una de las más agresivas que se hayan vivido en el siglo XVIII en esta ciudad. Estas querellas de preeminencia, que se produjeron con frecuencia en la América española, no deben ser subestimadas como si se tratara de nimiedades sino consideradas la manifestación de cómo estos actores se veían a sí mismos y pretendían mostrarse

²¹⁸ El ayuntamiento porteño le reprocharía “*haber concurrido dicho Sr. Teniente General con bastón y en cuerpo, habiéndose ya tratado en el cabildo en otro anterior acuerdo de ver, ir y asistir con capa y vara a todas las concurrencias públicas*”. Pero Larrazábal asistió “*en traje y con insignia militar siendo como es el empleo que obtiene dicho Sr. Teniente General de mera jurisdicción ordinaria*”.

frente a pares y superiores, expresada en el ámbito simbólico.²¹⁹ Indicaban, sobre todo, el temor de perder el lugar que les estaba deparado en una sociedad escalonada donde esos privilegios y prerrogativas determinaban las distancias entre sus miembros. Ello explica la reacción de individuos, linajes o corporaciones frente a cualquier mínima amenaza contra éstos, pues podía acarrear su derogación y provocar un descenso en su posicionamiento.²²⁰

El pórtico de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced sirvió como escenario del conflicto. Allí los dos alcaldes ordinarios del cabildo, el alguacil mayor y varios regidores encontraron a Larrazábal esperándolos para entrar *en cuerpo* al templo. Miguel Rodríguez de Sosa, el alcalde de primer voto, escandalizado de ver el bastón entre sus manos, le preguntó si pretendía llevarlo consigo a la misa. Aquel le respondió airado: “¿No lo ve usted?”. Y como los cabildantes amenazaron con retirarse, se dirigió a ellos con firmeza: “*Entren ustedes y no causen escándalo*”. Su exigencia de acatamiento evidenciaba su preocupación de cómo repercutiría en la vecindad este tenso diálogo, que había sido presenciado por otras personas que se agolpaban para ingresar al templo. Pero los cabildantes, ofendidos por el maltrato, se negaron a obedecerlo y abandonaron el convento.²²¹ Larrazábal entró entonces a la iglesia y se sentó en el escaño que le estaba reservado. Dos regidores que ya estaban sentados en los suyos, Miguel de Esparza y Tomás Monsalve, al observar que llevaba consigo el bastón se levantaron y se fueron.²²²

Pocos días después, cuando llegó a Buenos Aires la noticia de que Zavala había desalojado a los portugueses de la bahía de Montevideo, se celebró en la catedral una misa de acción de gracias y Larrazábal volvió a presentarse en la ceremonia empuñando el bastón. El asunto ocupó a los cabildantes durante varias sesiones. Dejaron sentado en el libro de acuerdos que éste no sólo había actuado contra las costumbres de las ciudades del Río de la Plata y del Tucumán, sino que había contrariado la Recopilación de Leyes de Indias, que señalaba que un teniente de gobernador debía exhibirse públicamente portando la vara de justicia y no un bastón militar. No obstante, el parecer no fue unánime. Ocho de los presentes votaron que debía ser intimado a que obedeciese

²¹⁹ François- Xavier GUERRA “Hacia una nueva Historia Política. Actores sociales y actores políticos” en *Anuario IEHS*, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, N° IV, 1989, Págs. 243-264.

²²⁰ Norbert ELIAS *La sociedad cortesana* Fondo de Cultura Económica, México, 1996, Págs. 118-124.

²²¹ Más tarde le reprocharían que “*con imperiosa y destemplada voz mandó recado a este cabildo en el soberano nombre del Rey se cumpliera con lo que tenía mandado, y si no procedería contra ellos, hablando con tan desusadas como no experimentadas palabras*”.

²²² IX-42-9-2 Bruno Mauricio de Zavala, *actos varios de su gobierno (1724)*.

dicha ley, mientras que dos regidores se opusieron a ellos: Baltasar de Quintana Godoy y Pedro Zamudio. Estos últimos representaban lo que quedaba de la antigua facción de los Samartín, que estaban aliados al teniente pero ocupaban una bancada minoritaria en la corporación municipal.

Larrazábal recurrió al testimonio de los miembros más ancianos de dicho facción, algunos de los cuales se habían retirado desde hacía años del gobierno municipal. El recién nombrado Quintana Godoy, de 70 años de edad, apeló a su larga memoria como cabildante: en los veintidós años que había sido regidor siempre había visto a los tenientes de gobernador concurriendo a los actos públicos y a las festividades de la Iglesias con bastón. Desde fuera del cabildo, Tomás de Arroyo y Luis Pesoa de Figueroa, que como Quintana Godoy habían formado parte de la facción en los tiempos de Velasco, convalidaron su declaración. El general Joseph Ruiz de Arellano, que encabezó la protesta contra Larrazábal, descalificó a quienes lo sostuvieron por estar unidos a él por medio del parentesco o por haber recibido sus favores.²²³ El regidor Sebastián Delgado sostuvo lo mismo: los declarantes presentados por el teniente eran *“unos parientes suyos por las mujeres y otros sus comensales”*.

El 20 de marzo de 1724, finalmente, Antonio de Larrazábal determinó que los capitulares que se le habían opuesto –los alcaldes ordinarios Miguel Rodríguez de Sosa y Juan Gutiérrez de Paz, el alcalde provincial Joseph Ruiz de Arellano, y los regidores Miguel de Esparza, Sebastián Delgado, Juan de Palma Lobatón y Tomás Monsalve– quedarían privados de sus cargos hasta que la Real Audiencia de Chuquisaca no determinase otra cosa. Les otorgaba nueve días para que pagasen una multa de 200 pesos, y en tanto no lo hicieran permanecerían recluidos en sus casas. Dispuso, además, que las varas de los alcaldes ordinarios y del alcalde provincial recayeran en los tres regidores más antiguos, que se harían cargo de la administración de los distintos ramos de justicia.

²²³ Explicó Ruiz de Arellano que Baltasar de Quintana Godoy es parcial de Larrazábal *“por el parentesco contraído por las mujeres”*; lo mismo dice de Pedro de Saavedra y de Tomás de Arroyo (*“pariente... por las mujeres”*). Lo mismo afirma del regidor Juan de Zamudio, a quien concedió una alcaldía luego de dejar suspensos a los capitulares: éste era *“yerno de Dn Luis de Pesoa y persona que por parcial de Vmd le depositó la vara de segundo voto contra derecho, tocándole por la antigüedad de más de seis años de recibimiento a Dn Lucas de Belorado”*. Y agrega que *“el dicho Dn Juan de Zamudio, Dn Santiago y Dn Pedro de Zamudio, todos tres regidores y hermanos de padre y madre, y siguen un mismo dictamen con Vmd, y no siendo de menos consideración el que al regidor Dn Bartolomé Montaner haya Vmd conferido todas las acciones privilegios que tengo adquiridos en propiedad y posesión de mi oficio para tenerle de su parte”*.

Inmediatamente, Ruiz de Arellano pasó a Chuquisaca a reclamar a la Real Audiencia que se los repusiera en sus escaños, cosa que no conseguiría hasta después de un largo pleito que finalizó en 1730. A su regreso de la Banda Oriental, Bruno Mauricio de Zavala respaldó la resolución de Larrazábal. Este último presentaría también sus argumentos a la Real Audiencia a través de la pluma de un procurador, acusando a los cabildantes expulsados de sediciosos. Si en cualquier ciudad, explicó, debía haber armonía entre los cabildantes y los representantes del rey, más aún debía haberla en Buenos Aires, pues *“por ser Presidio y llave de este Reyno y estar en fronteras en donde pueden tenerse invasiones de enemigos, deben sus habitantes estar con más unión y con más ciega obediencia a los preceptos justos del superior, sin fomentar parcialidades perniciosas y opuestas a la tranquilidad y sosiego de la República”*.²²⁴ Las discordias internas eran tan amenazantes, en su opinión, como las amenazas externas. Larrazábal acusó a sus opositores de haber querido sobrepasar la potestad de los representantes del rey, entre los cuales se encontraba él mismo como teniente de gobernador. Esta acción temeraria equivalía a haber querido aventajar al mismo monarca, siendo que desde 1715 el ayuntamiento no disponía de poderes fuera del ámbito del gobierno municipal: *“Reside en el soberano todo el poder, no quedando en los cabildos ni más jurisdicción ni más facultad que en algunas cosas menores y siempre subordinado a lo que mandare el Príncipe”*.²²⁵

La intervención de Larrazábal, convalidada por Zavala, debe verse como el último paso dado por los agentes de la corona para moderar a la dirigencia concejil porteña, acostumbrada desde el siglo anterior a aprovechar las vacancias temporales para hacerse cargo del gobierno de la provincia. La real cédula de creación del cargo de Teniente de Rey la había despojado de esa facultad, pero era evidente que se creía destinada a ella, por lo que combatió a Larrazábal desde su ascenso al cargo de teniente de gobernador. Por otro lado, Zavala no ignoraba que, para aplicar el plan de gobierno que le había confiado la corona, le sería necesario desarmar a ese cabildo que se mostraba capaz de hacer frente a sus imposiciones. Luego de la expulsión de los cabildantes, amenazó con

²²⁴ Notablemente, el argumento de Larrazábal reproducía los fundamentos de la batería de recursos de poder que se dieron a Bruno Mauricio de Zavala cuando se hizo cargo del gobierno del Río de la Plata, que destacaban *“la suma importancia de mantener aquella Plaza de Buenos Aires, llave de todo el Reyno del Perú, de suerte que siempre se halle preservada de cualquiera invasión de enemigos”*; véase Griselda TARRAGÓ “Espacios de tensión, territorios en construcción. Santa Fe y Buenos Aires durante la primera etapa borbónica (1700-1745)” en Darío BARRIERA y Raúl FRADKIN **Gobierno, justicias y milicias. La frontera entre Buenos Aires y Santa Fe, 1720-1830** Universidad Nacional de La Plata, 2014, Pág. 46.

²²⁵ IX-42-9-2 Bruno Mauricio de Zavala, *actos varios de su gobierno (1724)*.

quitarle al ayuntamiento los fondos que se le habían destinado para reconstruir la casa capitular y destinarlos a la fundación de Montevideo.²²⁶ Posteriormente quiso ejercer su supervisión sobre las potestades corporacionales y prohibió que se otorgaran licencias a los vaqueadores sin su aprobación, a lo que el cabildo se opuso, recordándole que tenía “*posesión inmemorial*” de esa facultad.²²⁷ Aunque finalmente no lo despojó ni de sus caudales ni de sus facultades, reconfirmó a Larrazábal como teniente de gobernador y lo hizo presidir las sesiones, por lo que todas las decisiones que tomase la corporación en relación con unos u otras serían supervisadas por éste. A fines de 1724 el gobernador previó la posibilidad de trasladarse con tropas al Paraguay, donde había estallado la rebelión de los comuneros, pero en la ocasión no volvió a depositar el mando supremo en Larrazábal, a quien reservó la tarea de controlar al cabildo, sino que decidió que durante su ausencia el gobierno político y militar sería confiado al teniente de rey Baltasar García Ros. De nuevo en una coyuntura conflictiva existió en Zavala una inocultable apelación a sus vínculos paisanales, recurriendo a la colaboración de sus allegados más cercanos, que eran cántabros como él.

En 1725 el gobernador debió intervenir en una nueva querella por prerrogativas. Con pocos meses de diferencia se conoció ese año en Buenos Aires que Felipe V había abdicado al trono en su hijo Luis, y que éste, tras brevísimo reinado, había muerto, volviendo entonces el trono a su padre. Durante las honras fúnebres a Luis I, se experimentó “*rumor y alboroto*” entre los vecinos cuando Joseph González Marín, el alférez real del cabildo, disputó al tesorero y el contador de la Real Hacienda, Alonso de Arce y Arcos y Juan Domingo Quijano, los escaños que estos se dispusieron a ocupar en la iglesia catedral.²²⁸ El cargo de alférez real, el más prestigioso de los que había en el cabildo, le otorgaba numerosos privilegios, entre ellos el de llevar un pendón con las armas del rey en los actos civiles, ocupar un lugar delante de los regidores en la sala capitular y ser el primero en votar después de que lo hicieran los alcaldes ordinarios, y también se esperaba que se le ofrecieran los mejores asientos en las celebraciones religiosas. Los demás cabildantes querían excluirlo de parte de estas prerrogativas, menos porque estas le fueran ofensivas que a causa de los humildes orígenes de González Marín: éste había arribado a la ciudad en 1702 como sirviente del gobernador Alonso de Valdés Inclán. Pero Zavala no apoyaba las pretensiones exclusivistas de la

²²⁶ AECBA Serie II, Tomo V, Págs. 337-339.

²²⁷ AECBA Serie II, Tomo V, Págs. 354-356.

²²⁸ AGN IX-23-10-01 *Guerra y Marina (1711-1765)*.

oligarquía porteña y el 13 de septiembre de ese año notificó al cabildo y a la oficialidad de la Real Hacienda que la Real Audiencia había fallado a favor del alférez real y que sus preeminencias debían serle reconocidas y respetadas, bajo pena de 1000 pesos de multa.

La progresiva intromisión de Zavala en los asuntos del ayuntamiento respondió, como dijimos antes, a la necesidad de aplicar el plan de gobierno que le impuso la corona. Antes de partir al Río de la Plata, el intendente general de la Marina y presidente del Tribunal de Contratación de Indias, Joseph Patiño, le había encargado la fundación de un asentamiento en la bahía de Montevideo, pero no llegó a cumplir con sus directivas por haber sido este último alejado temporariamente del gobierno en 1719. Finalmente, luego del desalojo de los portugueses de aquella bahía, Zavala se decidió a reclutar pobladores y fundar en ella una ciudad. Hasta ese momento, el cabildo porteño se había comportado como dueño y señor de la Banda Oriental, firmando *concordias* o compromisos con el cabildo de Santa Fe y con la Compañía de Jesús para garantizarse la exclusividad en la explotación de las enormes manadas de ganado cimarrón que existían en aquel territorio. La creciente presión que ejerció este gobernador, sometiendo constantemente las prerrogativas del ayuntamiento a su escrutinio y expurgándolo de sus miembros más díscolos, le permitió a mediano plazo convertirlo en un dócil instrumento de su política. Sólo así se explica la mansedumbre con que el cabildo de Buenos Aires aceptó que se lo despojara de la mayor parte del territorio de la Banda Oriental para que se le asignara al de la recién fundada Montevideo, perdiendo con ello la disponibilidad sobre la porción más importante de las reservas pecuarias con había contado hasta entonces.

EL CABILDO

Los señores vecinos, alcaldes, regidores,
comerciantes en frutos del país, vendedores
de cueros de vacuno y de grasa de potro
(alguno vagamente negrero y algún otro
un sí es o no es dado a los contrabandos);
los señores vecinos que escuchaban los bandos
en la Plaza Mayor; que mandaban al chico
a besar las dos manos del fraile dominico;
que solían quejarse, junto a los soportales,
por el papel de sellos y otros terribles males
nacidos en la Corte; el grave vecindario
que asistía al sermón y usaba escapulario;
que servía sus mates en vajilla de plata
y vivía aguardando que al Río de la Plata
se acercara un navío con bellas baratijas
para ornar a la esposa y dar gusto a las hijas...

Manuel Mujica Láinez, *Canto a Buenos Aires*

UNA MONARQUÍA Y CIENTOS DE REPÚBLICAS

“...el saber bien gobernar Repúblicas, es ciencia y arte,
y la más dificultosa de todas, según Platón, Santo Tomás y otros...”
Castillo de Bobadilla, *Política para Corregidores*

El vínculo entre la monarquía y los cuerpos políticos

En la Castilla del Antiguo Régimen, las ciudades fueron reconocidas como formaciones político-administrativas dotadas de amplias capacidades de decisión. Los gobiernos municipales fueron espacios políticos autónomos que, aunque no estuvieron exceptuados de cumplir con la obligación de obedecer las órdenes reales, estaban en condiciones de imponer su propio criterio, basado en una legitimidad propia. La ciudad se convirtió de esa forma en el nivel básico de agrupación política y la monarquía hispánica en una suerte de federación de repúblicas urbanas.²²⁹ Para enfatizar la envidiable autonomía de los municipios castellanos, que se reprodujo con idéntico vigor en América, un historiador español acuñó una expresión que se ajusta a las vastas libertades de que gozaron: los llamó *republicas ciudadanas*. El término *república* fue el comúnmente utilizado por los juristas y por la administración imperial para designar al gobierno de las ciudades. Al identificarse con él se convalidaban los principios rectores del gobierno municipal emparentándolos con las concepciones políticas de la Antigüedad clásica, pues evocaba tanto a los pensadores griegos, para quienes la *política* era el arte de gobernar la ciudad, como a los juristas romanos, que interpretaban la *res publica* como la gestión de la sociedad civil.²³⁰

²²⁹ Jean-Pierre DEDIEU y Christian WINDLER “La familia: ¿una clave para entender la historia política?: El ejemplo de la España moderna” en **Studia histórica** Universidad de Salamanca, Departamento de Historia Moderna, Nº 18, 1998, Págs. 201-236.

²³⁰ Francisco José ARANDA PÉREZ “Repúblicas ciudadanas. Un entramado político oligárquico para las ciudades castellanas en los siglos XVI y XVII” en **Estudis: Revista de historia moderna**, Universidad de Valencia, Nº 32, 2006, Págs. 7-48. Los términos de la Antigüedad clásica vinculados con la ciudad, *polis* y *urbs*, generan desde la Edad Media una serie de vocablos que cubren ampliamente el campo semántico de la civilización y que permanecen en los teóricos de la Edad Moderna; Jacques LE GOFF **Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente Medieval** Gedisa, Barcelona, 1986, Págs. 163 y ss.

La monarquía hispánica era una *monarquía compuesta*, surgida de la agregación de varios reinos, incorporados por herencia o conquista. Los unía su fidelidad y obediencia al mismo soberano, quien aunque con frecuencia se hallaba ausente de esos territorios, respetaba la indivisibilidad de los mismos y los privilegios locales.²³¹ A la pluriterritorialidad, que la convertía en un verdadero conglomerado dinástico, se le sumaba la confesionalidad: la monarquía hispánica se veía a sí misma como una *monarquía católica*, que se consideraba depositaria de la misión providencial de propagar la fe en el mundo y continuadora de la idea medieval del imperio cristiano universal.²³² El principio agregativo al que aludimos se aplicaba también a los municipios castellanos e indianos, que como el resto de los cuerpos incorporados a ese conjunto vieron salvaguardados sus ordenamientos jurisdiccionales, frente a los cuales el monarca aparecía como garante de esa diversidad constitutiva.

El soberano, colocado en la cima del edificio político, era señalado como el único que no reconocía un poder jurisdiccional superior.²³³ Uno de sus roles privativos era el de legislador: él continuaba siendo, como habían afirmado siglos atrás los legistas medievales, la fuente viva de las leyes (*lex animata*). No estaba sujeto a ellas sino que se encontraba por encima de las mismas, ya que podía promulgarlas o derogarlas, al igual que eximirse a sí mismo de cumplirlas, dispensar de hacerlo a otros o reemplazarlas por leyes nuevas. Se trataba siempre de un acto volitivo, al que nada podía obligarlo. Así lo aseguraba Castillo de Bobadilla en una de las más conocidas sentencias de su “Política para Corregidores”: “*El Rey, hacedor de la ley, se quiso obligar á ella por voluntad, y el Pueblo se obligó de necesidad*”.²³⁴

Precisamente en eso consistía el poder soberano del monarca: en su capacidad exclusiva de otorgar, modificar o abrogar las leyes.²³⁵ Ese principio de la no subordinación de la persona regia a la ley civil fue ampliamente comentado por los

²³¹ Xavier GIL PUJOL “Integrar un mundo. Dinámicas de agregación y de cohesión en la Monarquía de España” en Oscar MAZÍN y José Javier RUIZ IBAÑEZ **Las Indias Occidentales. Procesos de incorporación a las Monarquías Ibéricas (siglos XVI a XVIII)** México DF, El Colegio de México-Red Columnaria, 2012, Págs. 70 y ss.

²³² David BRADING **Orbe indiano: de la monarquía católica a la república criolla, 1492-1867** Fondo de Cultura Económica, México, 1993, Págs. 239 y ss.

²³³ Sobre la noción de *iurisdictio* aplicada a la monarquía hispánica, véase la excelente síntesis de Miriam MORICONI **Política, piedad y jurisdicción. Cultura jurisdiccional en la Monarquía Hispánica. Liébana en los siglos XVI-XVIII** Rosario, Prohistoria, 2011, Pág. 39 y ss.

²³⁴ Jerónimo CASTILLO DE BOVADILLA **Política para corregidores y señores de vasallos en tiempo de paz y de guerra** Madrid, Imprenta Real de la Gazeta, 1775 [original de 1597] Libro I, Pág. 381.

²³⁵ José Manuel DE BERNARDO ARES “Rey-Reino: el binomio estatal de la corona de Castilla en el siglo XVII” Juan Luis CASTELLANO y Jean Pierre DEDIEU **La pluma, la mitra y la espada. Estudios de Historia Institucional en la Edad Moderna** Universidad de Burdeos y Marcial Pons, Madrid, 2000, Págs. 350-351.

tratadistas españoles de los siglos XVI y XVII. Pero si se quiere comprender la naturaleza del poder real, es necesario enfocarse también en su contraparte, es decir, en el papel que se asignaba a los gobernados en esas relaciones contractuales. Reinar, explica Antonio Maravall, era ejercer un “señorío sobre hombres libres”: estos últimos, que estaban constituidos en República pero se mostraban obedientes al Príncipe, no perdían sus libertades por el hecho de estar subordinados a él.²³⁶ A diferencia de los esclavos, que estaban sujetos a una relación de dominio, los súbditos estaban insertos en un *orden de imperio*. El oficio del rey era servir a sus vasallos y garantizar el bien común: en función a ese criterio, él era un oficial más en su reino, aunque el primero de todos y el de más amplio servicio. La obediencia de los súbditos no era una actitud de mero acatamiento: Maravall recoge en este sentido las consideraciones del Padre Mariana, quien atribuía a estos un poder de “obediencia activa”, porque al ser llamados a cooperar con el monarca debían de realizar acciones que sobrepasaban su capacidad natural, como lo eran la de integrar las milicias durante la guerra o la de desempeñar un oficio civil en tiempos de paz. Sin desconocer la diferencia de calidades que existía entre ellos, el rey debía sostener el honor de todos sus súbditos y hacer que los demás lo respetasen. Ese era, de acuerdo con los juristas, el basamento de la quietud social, en que se fundaban la seguridad colectiva e individual en el reino.²³⁷

No obstante, al “hacer justicia” el monarca acataba las diferencias de calidad que existían entre sus súbditos y propendía al sostenimiento de los equilibrios sociales establecidos. Refiere Carlos Garriga que el Príncipe, como titular del poder político supremo, manifestaba en todos sus actos la “*perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo que es suyo*”, manteniendo a cada uno en su derecho. Este autor propone una concepción *jurisdiccionalista* del poder político, pues éste se fundaba en el reconocimiento de un orden jurídico que asumía como ya existente, el cual respondía a una arraigada cosmovisión de base religiosa que se expresaba en la idea de un orden natural que debía ser universalmente respetado. Este orden reconocía los derechos propios de las múltiples corporaciones que articulaban la vida social y gozaban de capacidad para autoadministrarse. La potestad del soberano era un instrumento que se legitimaba gracias al sostenimiento de ese orden constituido y consistía básicamente en la resolución de conflictos entre esferas de intereses diversos atendiendo a los derechos

²³⁶ José Antonio MARAVALL *Teoría del Estado en España en el siglo XVII* Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, Págs. 205-206.

²³⁷ José Antonio MARAVALL *Teoría del Estado en España...* Págs. 219-240.

propios de los múltiples cuerpos que integraban el reino. La Edad Moderna, concluye Garriga, se caracterizó por el desarrollo de un intenso proceso de integración corporativa, cuyo resultado más significativo fue la composición de las formaciones políticas tradicionalmente llamadas “Estados Modernos”, uno de cuyos rasgos característicos fue el proceso de fortalecimiento del poder real.²³⁸

El papel de la corona consistía en garantizar la administración de justicia distributiva y en mantener un orden social mediante la resolución de conflictos entre una pluralidad de cuerpos, cada uno de los cuales estaba dotado de sus derechos correspondientes.²³⁹ Cada uno de esos cuerpos poseía un poder de autorregulación y autogobierno y gozaba además de *iurisdictio*, es decir, de la potestad de decir el derecho y de imponer soluciones de equidad. Por tal razón, Antonio Hespanha prefirió dar al “Estado Moderno” la denominación de “Estado Estamental”, ya que en el seno de las monarquías ibéricas, el poder político y el derecho común emanaban directamente de la potestad autónoma de los diversos cuerpos que componían la monarquía, entre los cuales se contaban las ciudades.²⁴⁰ En semejante contexto, un juez local (como podía serlo en una ciudad un alcalde ordinario) era un magistrado de la comunidad que tenía la función (*officium*) de resolver los conflictos según las normas que la comunidad se había dado a sí misma, y no el mero delegado del poder superior del monarca. Considera Hespanha que esta situación, lejos de ser una figura recreada por los juristas académicos, se correspondía, por el contrario, con una autonomía realmente vivida por los cuerpos inferiores y muy especialmente por las ciudades.²⁴¹

La construcción del absolutismo monárquico, como puede apreciarse, no resultó contradictoria con la persistencia de la sociedad corporativa. Todo lo contrario: la monarquía estaba lejos de querer suprimir esa red de cuerpos intermedios y más bien se apoyó en ella para expandir su propio poder. El soberano fue reconocido como fuente de toda jurisdicción (*fons iurisdictionis*) lo que le permitió ofrecer una representación

²³⁸ Carlos GARRIGA “Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen” en **Istor, Revista de Historia Internacional** Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, 2004, Año IV, N° 16, Págs. 9-18.

²³⁹ Contamos con una excelente reflexión sobre ello en Luciano ALONSO “Definición y comparación de estructuras de dominación en la historiografía modernista y en la sociología histórica: ¿alternativas irreconciliables?” en **Pensar. Epistemología y Ciencias Sociales** Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales (CIESO), Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario, 2010, N° 5.

²⁴⁰ También Norbert Elías recurre al concepto de “Estado estamental”, al que define como la organización social en “que no rigen las mismas leyes para todos y mucho menos las mismas normas y valores”. Norbert ELÍAS **El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas** Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1987, Pág. 29.

²⁴¹ Antonio HESPANHA **La gracia del derecho. Economía de la cultura en la Edad Moderna** Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, Págs. 43-44.

del reino en términos de unidad. Esa posición, a su vez, le sirvió para legitimar las medidas de intervención que dirigió a los espacios corporativos que le estaban jerárquicamente subordinados. Pero los principios de la sociedad corporativa fueron siempre respetados y eso permitió a la ciudad sobrevivir como espacio político relevante. La convivencia de ambos órdenes de principios, afirma Federica Morelli, favoreció una constante dialéctica entre el poder real y los poderes intermedios y dio lugar a una multiplicidad de formas de relación posibles entre las ciudades y la corona.²⁴²

Los juristas españoles pusieron fundamento a la preeminencia del soberano: si el poder se situaba en el rey, cabeza de la monarquía, se debía a que las distintas comunidades del reino se lo habían delegado. A cambio de ello, éste les habría reconocido la facultad de resolver sus propios asuntos. Quedaba así preservada la supremacía jurisdiccional del monarca, que si bien permitía a las comunidades sostener su autonomía lo hacía en términos de concesión real, permitiéndole ejercer una supervisión sobre los privilegios y libertades de éstas. Al otorgar al Príncipe la capacidad privativa de mantener el orden, dichos juristas recurrieron al modelo aportado por la Roma clásica. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en la ya citada “Política para Corregidores”, cuando su autor sostiene que *“el Pueblo Romano, Cabeza del Mundo (en quién estaba y residía toda la Jurisdicción y la facultad de hacer y abrogar Leyes y nombrar Jueces) quitó y apartó de sí todo el poder y jurisdicción, y lo pasó y transfirió en el Príncipe, y reside en él todo el imperio, poderío y hacienda publica, y en él está subordinado a su buen gobierno y justa disposición, el cual quedó por Cabeza, y el Pueblo por miembros de él”*.²⁴³

Castillo de Bobadilla, como otros tratadistas españoles de la Modernidad, recurría a la alegoría del cuerpo humano para explicar la unidad del reino y la superioridad del monarca por sobre sus gobernados. La noción de “cuerpo”, aplicada a un organismo político, servía para designar la unidad en que aparecían fundidos todos los miembros de una comunidad, comparable en ese aspecto a la del cuerpo humano.²⁴⁴ Esta metáfora organicista permitía simbolizar de acuerdo con un orden de jerarquía a los distintos miembros en función de la misión que cada uno estaba llamado a cumplir, haciendo

²⁴² Federica MORELLI “Pueblos, alcaldes y municipios: la justicia local en el mundo hispánico entre Antiguo Régimen y Liberalismo” en **Historia crítica**, Universidad de los Andes, Bogotá, N° 36, 2008, Págs. 39-40

²⁴³ Jerónimo CASTILLO DE BOVADILLA **Política para corregidores...** Libro II, Pág. 184.

²⁴⁴ José Antonio MARAVALL **Teoría del Estado...** Pág. 115.

hincapié en sus diferencias cualitativas y en el carácter necesario de cada uno. Por medio de dicha metáfora se destacaba la preeminencia de la cabeza, que era la encargada de regir el comportamiento de dicho organismo, pero que necesitaba que el resto de los miembros desarrollara su misión específica para mantenerlo en funcionamiento. Sostiene Alejandro Agüero que al valerse de este simbolismo, se apelaba a la naturaleza corporativa del reino, pues se colocaba al monarca en su cúspide y se representaba a todo poder político fluyendo desde él hacia los distintos cuerpos sociales.²⁴⁵

Al igual que los autores antes citados, Agüero insiste en la supremacía jurisdiccional del monarca y propone un sugestivo desarrollo del problema. Al constituirse en fuente de toda jurisdicción, todo poder ejercido en el espacio municipal no era sino una manifestación derivada del poder regio, puesto que se consideraba a los privilegios y las libertades de que gozaban las ciudades como una concesión del soberano. Ciertamente, cada ciudad gozaba de un espectro de capacidades políticas propias, surgidas muchas de ellas del derecho consuetudinario, pero esas prácticas jurídicas y los derechos de autorregulación aparecían como si hubiesen sido otorgados por el soberano. Este asumía el papel de garante máximo del equilibrio entre los muchos cuerpos que componían el reino, asegurándole a cada uno el goce de sus respectivos derechos. Esa preeminencia de la función jurisdiccional del monarca permitiría entender la escasa intromisión de la corona en las funciones relacionadas con la gestión de los intereses colectivos de cada cuerpo político, que quedaban generalmente reservados a sus esferas de autonomía. El reino, concluye Agüero, se mostraba de esa manera bajo la forma de un agregado de sujetos (una *república de repúblicas*) que se reconocían mutuamente y se vinculaban mediante lazos recíprocos de lealtad, expresados en el discurso jurídico en la forma de pactos.²⁴⁶ Así se explica que en el Antiguo Régimen, toda relación política estable fuera representada como una relación pactada, que François-Xavier Guerra parangona con las que hoy regulan las relaciones entre los diversos estados, y que se expresaba entonces por medio de los usos consuetudinarios o a través de estatutos y privilegios escritos.²⁴⁷

²⁴⁵ Alejandro AGÜERO “Ciudad y poder político en el Antiguo Régimen. La tradición castellana” en **Cuadernos de Historia** Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 2005, N° 15, Pág. 131.

²⁴⁶ Alejandro AGÜERO “Ciudad y poder político en el Antiguo Régimen...” Págs. 132-136.

²⁴⁷ François-Xavier GUERRA “Hacia una nueva historia política...”

Del concejo castellano al concejo indiano

Por detrás de la justificación jurídico-simbólica de la supremacía del monarca, que se atribuyó la facultad de confirmar y controlar las atribuciones y privilegios políticos de las ciudades, se esconde un proceso histórico durante el cual se produjo la progresiva subordinación de éstas a la corona. El gobierno de las ciudades nació en la Alta Edad Media, en la forma de asambleas generales de vecinos o *concejos abiertos*, que eran sólo practicables en poblados de dimensiones más o menos reducidas, pero con el correr de los siglos estos fueron transformándose en *concejos cerrados*, en los que se fijaron criterios cada vez más estrictos para ingresar en ellos. Esta oligarquización de los gobiernos municipales fue fomentada por la monarquía, pues le permitió entrometerse en los asuntos internos de los ayuntamientos favoreciendo a determinadas facciones urbanas si éstas apoyaban los intereses de la corona. No obstante, el cabildo de la Edad Moderna no quedó del todo despojado de algunos de sus rasgos comunitarios originarios. En las estructuras político-administrativas de los ayuntamientos, observa Antonio Hespanha, se superpusieron empleos que habían surgido en épocas distintas y estaban ligados, por ende, a universos político-sociales diferentes. De esa manera, en el sistema político concejil sobrevivieron elementos de un sistema político más arcaico, entre ellos algunos funcionarios honorarios que por su forma de designación y sus funciones se entroncaban con los *honoratiores* (los hombres buenos, los vecinos honrados) de las comunidades campesinas tradicionales, pero que acabarían ligados a un contexto administrativo racionalizado, ya que el crecimiento de los grupos humanos y la diversificación de la vida social tornó imposible el tratamiento directo de todas las cuestiones por magistrados honorarios.²⁴⁸

Al estudiar los sistemas concejiles ibéricos, Hespanha ha vinculado este pasaje del sistema patriarcal-comunitario al sistema administrativo concejil con la generalización de la comunicación escrita, que habría permitido una mejor conexión de los consejos con el monarca y la consolidación de una memoria administrativa más exacta y verificable. Pero otros autores han preferido explicar esa transformación en función a la intromisión de la corona, que permitió a las oligarquías locales adueñarse de los gobiernos municipales a través de la adquisición de regidurías y otros cargos venales. Francisco Tomás y Valiente se cuestionó hasta qué punto la venta o transmisión de

²⁴⁸ Antonio HESPANHA *La gracia del derecho...* Pág. 130.

regidurías fortaleció a las oligarquías que gobernaban las ciudades.²⁴⁹ Para Isabel del Val Valdivieso, en cambio, no quedan dudas de que la imposición del regimiento en las ciudades castellanas fue un triunfo de las oligarquías urbanas, que gracias al apoyo regio conseguirían perpetuarse en el gobierno concejil, desplazando a los pecheros (o como se lo denominaba entonces: el “común”) de éste.²⁵⁰ Este tránsito del concejo abierto al concejo cerrado se habría iniciado bajo el reinado de Alfonso XI. Este dispuso que en cada ciudad existiera un número variable de regidores (entre ocho y veinticuatro): ellos conformaron una asamblea reducida (*Regimiento*) que se convirtió en el órgano máximo del gobierno municipal, en el seno del cual se procedía a la elección del resto de los oficios concejiles. También les correspondía la administración de los bienes y rentas del común y la supervisión de las cuentas del ayuntamiento. Como su cargo provenía del rey, los regidores eran considerados oficiales reales.

Bajo el reinado de Juan II se introdujo la práctica del *renunciamento* a los oficios, con el propósito de que el rey designase como titular a la persona propuesta por el regidor renunciante, reproduciendo el modelo canónico de la *resignatio in favorem*. La introducción de este procedimiento es interpretado por Tomás y Valiente como una manifestación de la decidida tendencia a la patrimonialización que afectó a los oficios municipales. Aunque en teoría el monarca podía rechazar la propuesta, la práctica de transmitir un oficio venal a los herederos o de venderlo a otros particulares fue cobrando arraigo. Los oficios renunciabiles no pertenecían en propiedad a sus titulares, quienes tenían sobre ellos el usufructo vitalicio en virtud del título real y el derecho a renunciarlos; por tal razón, los regidores prefirieron comprar sus oficios en concepto de *juro de heredad*, adquiriéndolos en propiedad perpetua, de modo que pasaran al patrimonio de su titular, quien podía transmitirlo libremente a sus herederos o a cualquier otra persona. Esta práctica, aunque fue combatida por los Reyes Católicos, llegó a ser corriente luego del reinado de estos y se intensificó durante los reinados de Felipe II (en que se vendió la mayor cantidad de oficios concejiles de toda la historia de la monarquía española) y de sus sucesores Felipe III y Felipe IV, urgidos igual que aquel por los apuros financieros. Bajo el último de estos monarcas se incrementó en los

²⁴⁹ Francisco TOMÁS Y VALIENTE “La venta de oficios de regidores y la formación de oligarquías urbanas en Castilla (siglos XVII y XVIII)” en **Historia, instituciones, documentos** Universidad de Sevilla: Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, 1975, N° 2, Págs. 523-547.

²⁵⁰ María Isabel del VAL VALDIVIESO “Oligarquía versus común (Consecuencias sociopolíticas del triunfo del regimiento en las ciudades castellanas)” en **Medievalismo Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales** Universidad de Murcia, 1994, N° 4, Págs. 41-58.

ayuntamientos el número de regidurías para venderlas al mejor postor, y también se concedió la perpetuidad a quienes poseían oficios renunciables. Asimismo, se permitió que una sola persona pudiera acumular diferentes oficios al aceptarse la práctica de la separación entre la titularidad y el ejercicio de los mismos, para que así pudiera arrendados a terceros.²⁵¹

Gracias a esta progresiva imposición de la venalidad en los empleos concejiles, ese modelo de ayuntamiento cerrado y oligárquico acabaría por triunfar tanto en la península como en sus dependencias ultramarinas, sustituyendo por completo al antiguo concejo abierto de basamento popular. Para explicar el lugar que ocuparon los regidores en el gobierno municipal, los tratadistas también recurrieron a la metáfora organicista. Dicha metáfora, aplicada a escala de la monarquía, servía como hemos visto para describir la función rectora que debía cumplir el soberano. Las ciudades, en consideración a que se trataba de organismos políticos, también necesitaban de una “cabeza” o miembro directivo que los condujera, y en razón a ello se les reconocía la potestad de dotarse de autoridades, ya que sus gobiernos no debían quedar acéfalos. En los ayuntamientos, el miembro rector era el “*Regimiento*” o colegio de regidores, convertido en “*cabeza de la ciudad*”, al que correspondía ejercer el gobierno económico y político de la misma, pues estaba colocado en la cima del cuerpo social del municipio y acaparaba la representación corporativa de todos los estados pertenecientes a la república.²⁵² La representatividad de los regidores no provenía de haber sido elegidos por el vecindario: no se basaba en criterios de mandato representativo, pues la noción de representación no estaba construida a partir de la voluntad de los representados. Ella se fundaba en la vinculación natural entre éstos y los representantes, semejante a la que existía (recurriendo de nuevo a la metáfora organicista) entre la cabeza y el resto del cuerpo. Por ello los mecanismos de nombramiento y composición del cuerpo municipal se hallaban muy distantes de los sistemas electivos actuales, ya que la presencia de los regidores y de otros oficiales venales o electivos en un ayuntamiento no respondía al derecho de los vecinos a estar representados, sino a la necesidad natural del cuerpo político de estar dotados de órganos rectores.²⁵³

²⁵¹ Darío BARRIERA “La dimensión agónica de un oficio patrimonial y de vara: prescriptiva, configuraciones políticas y gobierno en Santa Fe la Vieja (Gobernación del Río de la Plata, 1573-1660)” en **Chronica Nova. Revista de historia moderna** Universidad de Granada, 2011, Vol. 37, Págs.70-71.

²⁵² Alejandro AGÜERO “Ciudad y poder político en el Antiguo Régimen...” Págs. 138-139

²⁵³ Federica MORELLI “Pueblos, alcaldes y municipios...” Pág. 41.

A fines del siglo XV, el ayuntamiento cerrado y oligárquico estaba ingresando en Castilla en su fase final de consolidación, fundamentalmente por impulso de los Reyes Católicos, que crearon la figura de un funcionario real, el *corregidor*, para controlar a los cabildos. Pero aunque en los albores de la conquista americana el modelo de municipio oligárquico castellano ya se hallaba bastante afianzado en la península, los primeros cabildos del Nuevo Mundo todavía conservaban resabios del modelo concejil abierto. Recordemos que la existencia legal de una ciudad era consecuencia de su fundación, un acto administrativo por el que se le asignaba categoría, distrito y autoridades.²⁵⁴ Por tal razón, a partir de 1493 los conquistadores erigieron cabildos en las ciudades que fundaron y nombraron a sus primeros alcaldes ordinarios y regidores. Pero esos primeros ensayos de conformación de un gobierno concejil reprodujeron con frecuencia las características del municipio castellano bajomedieval: no podía ser de otra manera, pues al ser los conquistadores en su mayor parte oriundos de las modestas villas castellanas, imitaron aquello que conocían. Durante el siglo XVI, tanto los alcaldes ordinarios como los regidores fueron por lo general designados por los propios vecinos o por sorteo. El régimen concejil indiano comenzó siendo electivo y no fue hasta el siglo siguiente que se introdujo la compra de oficios, aunque las alcaldías ordinarias siempre seguirían siendo electivas.²⁵⁵

En las provincias del Tucumán y el Río de la Plata, los cabildos originarios reprodujeron ese régimen abierto, que era sin duda el que mejor se acomodaba a las escasas diferencias jerárquicas que existieron entre los primeros pobladores. Al fundar la ciudad de Santa Fe, Juan de Garay resolvió que los regidores serían “cadañeros”, es decir, que serían elegidos entre el “común” de los vecinos y se renovarían cada año, sin que estuviera permitida la reelección inmediata.²⁵⁶ El fundador de Córdoba, Gerónimo Luis de Cabrera, optó por una solución similar: estableció que el cabildo de esa ciudad se compondría de dos alcaldes ordinarios y de seis regidores “cadañeros”, que se renovarían anualmente hasta que la corona dispusiese suplantarlos por regidores perpetuos.²⁵⁷ Si en ambos casos el cabecilla de la hueste conquistadora se volcó por un

²⁵⁴ Ricardo ZORRAQUIN BECU **La organización política argentina en el período hispánico** Perrot, Buenos Aires, 1981, Págs. 51 y ss.

²⁵⁵ Francisco Javier GUILLAMON ALVAREZ “Algunas reflexiones sobre el cabildo colonial como institución” en **Anales de Historia Contemporánea** Universidad de Murcia, Nº 8, 1991, Págs. 151-161.

²⁵⁶ Darío BARRIERA **Conquista y colonización hispánica. Santa Fe la Vieja (1573-1660)** (Tomo II de la “Nueva Historia de Santa Fe”) Prohistoria, Rosario, 2006, Pág. 112.

²⁵⁷ Adolfo Luis GONZALEZ RODRIGUEZ “El Cabildo de Córdoba durante el siglo XVI: encomenderos, propietarios de tierras, tratantes de negros y comerciantes. Análisis de un grupo de poder”

régimen electivo fue porque éste se correspondía con las tradiciones municipales que los oficiales y soldados traían consigo desde la península. Pero se trató de una solución provisoria que se adecuaba a la precariedad de un poblado recién fundado, en el que todavía ninguno de los vecinos sobresalía por su fortuna ni su preeminencia. También en Buenos Aires los cargos concejiles fueron en un principio de carácter electivo. El testimonio más antiguo que se conserva de una elección en el cabildo es del 24 de junio de 1589, y por el acuerdo firmado ese día consta que Juan de Garay, fundador de la ciudad, había dispuesto que todos los años se eligieran tanto los alcaldes ordinarios como los regidores.²⁵⁸ Aunque en el cabildo porteño hubo cierta resistencia frente a la prohibición de readjudicar los empleos concejiles a los mismos vecinos, que le había sido impuesta por Garay, no se conocieron en Buenos Aires, a diferencia de Santa Fe, ni reclamos ni sublevaciones causados por el acceso desigual a cargos y mercedes.

El intervencionismo de la monarquía impondría gradualmente el modelo concejil oligárquico en América. A través de las Ordenanzas del Bosque de Segovia, Felipe II depositó la jurisdicción de las ciudades indianas en los alcaldes ordinarios y los regidores, aunque estos recibirían el auxilio de otros funcionarios menores como procuradores, mayordomos y escribanos públicos. Sus sucesores pulieron el carácter cerrado de los ayuntamientos acotando el número de los empleos concejiles. Felipe III ordenó en 1610 que los regidores no pasaran de doce en las ciudades principales y de seis en las sufragáneas. Felipe IV hizo un último ajuste cuando dispuso que los virreyes de Perú y Nueva España no admitieran que en ninguna ciudad se nombraran más de dos alcaldes ordinarios, elegidos en forma anual. Se recomendaba que esos oficios, que estaban reservados a los vecinos de la ciudad, fueran conferidos a los descendientes de los descubridores, pacificadores y pobladores.²⁵⁹ Si bien en un principio los asientos en el cabildo fueron patrimonio exclusivo de los linajes de los conquistadores, estos serían pronto desplazados por nuevas camadas de familias arribadas de la metrópoli, ligadas al comercio y a la burocracia. Pero más allá del inevitable proceso de rotación que afectó a los sectores dominantes, los primeros siglos de ocupación española verían consolidado

en **Estudios de historia social y económica de América** Universidad de Alcalá, 1988, Nº 3-4, Págs. 29-46.

²⁵⁸ Reza el referido acuerdo: “*Juan de Garay en la fundación de esta ciudad manda que cada año se elijan alcaldes y regidores*”. AECBA Libro I, Serie I, Págs. 27-29.

²⁵⁹ Para la legislación de Indias relativa a los ayuntamientos, consúltese: Manuel Josef de AYALA **Diccionario de Gobierno y Legislación de Indias** Edición y estudios de Milagros del Vas Mingo, Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 1988, Tomo II, Págs. 92-96.

en nuestro continente un modelo de ayuntamiento de carácter cerrado con un restringido número de plazas, semejante al que se impuso en la península.

A resultas de las sucesivas intervenciones de la corona, surgió en las Indias un ayuntamiento en el que podían predominar los cargos venales pero subsistían ciertos cargos electivos, si bien es cierto que la selección de los vecinos que habrían de ocupar estos últimos estaría casi siempre supeditada a la decisión de quienes había adquirido los suyos por compra o por herencia. Coincidimos con Federica Morelli en que esa complejidad constitutiva dio a las oligarquías locales un amplio margen de maniobra para apoderarse de un mayor número de empleos, lo que les permitiría convertir al cabildo en un órgano con cierta autarquía del poder monárquico.²⁶⁰ Interesa aquí remarcar que, paralelamente a que se instituía en forma gradual un régimen concejil cada vez más cerrado, los sectores oligárquicos que habrían de beneficiarse con ello también irían mutando, en algunos casos debido a la incorporación de peninsulares y en otros al ascenso de nuevos sectores criollos. Ese será uno de los aspectos a ser analizado en estas páginas: el proceso de rotación experimentado por la dirigencia concejil de Buenos Aires, sustentado en los cargos venales pero mejor expresado en la circulación de los cargos electivos.

²⁶⁰ Federica MORELLI “Orígenes y valores del municipalismo iberoamericano” en **Araucaria: Revista Iberoamericana de filosofía, política y humanidades** Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México, 2007, N° 18, Págs. 118-119.

EL CABILDO DE BUENOS AIRES: LA CONFIGURACIÓN INSTITUCIONAL

La construcción del marco organizativo: las *Ordenanzas* del cabildo

Los cabildos indianos gozaron de una envidiable libertad para establecer sus reglas de funcionamiento interno –ateniéndose, claro está, a lo legislado por la corona– y para imponer sus criterios de administración dentro de sus límites jurisdiccionales. Esa autonomía del gobierno municipal, gestada en la Castilla medieval al calor de la Reconquista, se mantuvo firme a lo largo de la Edad Moderna, tanto en las ciudades de la península como en las americanas. A ambos lados del océano, para regular el funcionamiento de los ayuntamientos y regir la vida de la ciudad, esas repúblicas concejiles se valieron de un cuerpo orgánico de disposiciones conocido como *Ordenanzas*. Santayana Bustillo, un tratadista catalán de la primera mitad del siglo XVIII, observaba que el contenido de esas disposiciones debía circunscribirse al gobierno político de la ciudad, ateniéndose a asuntos de naturaleza local como las elecciones en el cabildo, la provisión de abastos o la administración de las rentas y bienes comunales. Consideraba que la redacción de las mismas era privativa de los ayuntamientos, que también podían reformarlas, y que sólo debían ser aprobadas por el monarca si afectaban a terceros, como en el caso de la regulación de la actividad de tenderos, artesanos u otros *oficios mecánicos*. En ningún caso, agregaba, debían ser contrarias a las leyes del reino ni opuestas al derecho divino ni a las buenas costumbres.²⁶¹ No obstante, lo afirmado por Santayana Bustillo no pasa de ser una teorización, ya que aunque las *Ordenanzas* municipales generalmente fueron elaboradas por el cabildo, no faltaron los casos en que éstas les fueron impuestas a éste por la corona.²⁶²

Esa autonomía normativa, que ha sido vista como una continuación del régimen foral del Medievo ibérico, presentó sus particularidades en América, pues debió dar respuesta

²⁶¹ Lorenzo de SANTAYANA BUSTILLO *Gobierno político de los pueblos de España y el Corregidor, Alcalde, Juez en ellos* Zaragoza, Imprenta de Francisco Moreno, 1742, Págs. 40-42

²⁶² Juan Manuel de BERNARDO ARES “Las Ordenanzas municipales y la formación del Estado Moderno” en *En la España Medieval*, Universidad Complutense de Madrid, 1987, Vol. 10, Pág. 27.

a los problemas que planteaba el contexto regional. Aunque los cabildos de este continente tuvieron la facultad de dictar sus *Ordenanzas*, éstas también pudieron serles impuestas por virreyes o Audiencias, sobre todo si se trataba de ciudades recientemente fundadas, o cuando las discordias entre facciones de vecinos no les permitían convenir una carta estatutaria. No obstante, lo usual era que su redacción fuera confiada por el ayuntamiento a uno de sus miembros o a un letrado. Más allá de que su autoría fuera o no de carácter corporativo, no podían entrar en aplicación si no eran aprobadas por la autoridad superior. Luego de ser acordadas por el cabildo, debían ser remitidas a la Real Audiencia más inmediata para que las ratificara; conseguido esto, entraban en vigor en forma provisoria, a la espera de la confirmación del Consejo de Indias. La intervención de éste último solía a veces retrasarse por años, pero esta demora no impedía que el cabildo las hiciese obedecer. Esa flexibilidad se ha constatado también en la posibilidad de reformar el articulado: una vez puestas en vigencia, no fue inusual que el ayuntamiento las revisara y decidiera actualizarlas.

Las disposiciones que recogen las *Ordenanzas* de los cabildos americanos dejan traslucir las problemáticas que estos debían afrontar y las estrategias que elegían para resolverlas. Preponderaban las materias de carácter político-administrativo, entre las cuales la composición y funcionamiento del gobierno municipal gozaban de un lugar relevante: era común que se ocuparan puntillosamente del nombramiento o elección de los oficiales concejiles, de las responsabilidades que les competían y de su rango respectivo dentro del ayuntamiento y de la periodicidad de las sesiones. Se prestaba menos atención a los aspectos de la vida religiosa de la ciudad y por lo general hicieron escasas referencias a las obligaciones militares de la vecindad. Sí eran tratadas, en cambio, materias de carácter económico, pues los cabildos se ocupaban de que el mercado urbano estuviese bien abastecido de víveres, lo mismo que de asegurarse los recursos que necesitaban para su propio funcionamiento. Por último, comprendían disposiciones de orden social, que atendían básicamente a las regulaciones sanitarias, al control sobre la actividad del comercio al menudeo y los oficios manuales y a la conservación de la moral y el orden público.²⁶³

Analizando el grado de coincidencia entre los asuntos abordados por las *Ordenanzas* de distintas ciudades americanas, la historiografía ha rastreado paralelismos o

²⁶³ Francisco DOMINGUEZ COMPAÑY **Ordenanzas municipales hispanoamericanas** Asociación Venezolana de Cooperación Intermunicipal – Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid-Caracas, 1982.

divergencias en su estructura y contenidos. Ana Barrero García encontró que sólo dos de ellas se centraron en una única problemática, mientras que el resto se expidió con mayor o menor amplitud sobre dos o más materias, aunque la diversidad temática no se correspondió necesariamente con la extensión de su tratamiento. Entre las materias que resultaron comunes se destacaron la organización del cabildo y la administración de justicia, el control sobre la población negra e india, la regulación de la higiene y la conservación del medio, la administración de los bienes comunales, la política de abastecimiento, la supervisión sobre el adecuado uso de las medidas de peso, sobre la molienda y la venta de pan, carne y bebidas, la reglamentación de los oficios manuales y la celebración de las festividades religiosas. El asunto que fue objeto de mayor atención parece haber sido el abastecimiento, seguido de la regulación de las medidas de peso, el protocolo capitular y la administración de justicia.²⁶⁴

Buenos Aires no contó en un principio con *Ordenanzas* propias sino que adoptó las que dictó el virrey Francisco de Toledo en 1572 para la ciudad de Cuzco. No hay noticia de cómo se implantaron aquí, pero según parece entraron en vigencia en la década de 1610. Los capítulos de las *Ordenanzas* cuzqueñas reflejaban como pocos la complejidad del mundo andino: los enfrentamientos facciosos que dividían a la opulenta vecindad española, el intento de controlar a una población indígena numerosa que intentaba escabullirse de las cargas que se le imponían, la escasez de agua con que abastecer a una ciudad populosa enclavada en un medio semiárido... Nada más distante de la antigua capital de los Incas que la casi despoblada Buenos Aires de comienzos del siglo XVII. Es posible que el cabildo de esta ciudad se limitara a obedecer los artículos que trataban asuntos de carácter más general, como la reglamentación de las funciones de los empleos concejiles, el ordenamiento de las sesiones del cabildo o la regulación de los oficios artesanales.

En febrero de 1642, un incidente movería al ayuntamiento de Buenos Aires a dictar sus propias *Ordenanzas*. Por pedido del procurador de la ciudad se quiso consultar el ejemplar de las *Ordenanzas* de Cuzco que se guardaba en las arcas del cabildo pero no se lo pudo hallar. En las dos siguientes sesiones, los capitulares se abocaron a redactar diecinueve artículos y los presentaron al gobernador para que los aceptara como nueva

²⁶⁴ Ana M. BARRERO GARCÍA “Las relaciones textuales de las ordenanzas de los cabildos americanos” en **XIII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Actas y Estudios** Asamblea Legislativa de Puerto Rico, 2000, Tomo I, págs. 157-197.

carta estatutaria.²⁶⁵ Una revisión de los mismos permite apreciar la escasa importancia que se otorgó a las reglas de carácter interno. Uno solo intentaba regular el protocolo concejil: el que disponía que el ayuntamiento se reuniera todos los lunes y se multara a los alcaldes y regidores que no acudiesen sin justificación. El resto de los artículos tenía una clara proyección externa y apuntaban a estrechar la vigilancia sobre los sectores subalternos y la actividad mercantil. Cinco de ellos procuraban precaver desórdenes y escándalos en la ciudad: se perseguían el juego y las borracheras en la población negra e india, se prohibía a los soldados circular armados de noche para evitar pependencias, se castigaban los “pecados públicos” y se desterraba a las mujeres de mala vida a los arrabales. Otros dos recogían disposiciones de justicia rural, ordenando proceder contra los cuatrerros y los vagabundos y contra quienes tuviesen peones sin papeleta de concierto en sus chacras y estancias. En los artículos que tocaban asuntos económicos, el cabildo fiscalizaba la actividad de los *regatones* (pequeños comerciantes independientes) y de los herreros, zapateros y otros *oficios mecánicos*, recurriendo a la imposición de aranceles, la inspección de pesas y medida y el control sobre las ventas. No conforme con esas medidas, que ya eran contempladas por las *Ordenanzas* de Cuzco, arremetió contra los comerciantes que hacían atender sus tiendas por esclavos negros, multándolos con la incautación de sus mercancías. También prohibió a los negociantes que enviaran fuera de la ciudad fardos de ropa de la tierra, hierro, acero o municiones, bienes que por entonces eran escasos debido a la conexión poco fluida con la metrópoli.

²⁶⁵ AECBA Serie I, Tomo IX, págs. 255-262.

Cuadro N° 1 – Síntesis del articulado de las Ordenanzas de 1642

1. Los regatones no comprarán ni venderán mercancías sin manifestarlo a las justicias ordinarias y se pondrá límite a las utilidades de su comercio.	11. No andarán de noche los soldados portando sus espadas por el daño que pudieran ocasionar.
2. Para combatir el cuatrismo, se publicará un bando que recogerá la legislación precedente y se encargará su ejecución a la justicia.	12. El gobernador lanzará un bando de justicia "por lo mucho que conviene a la quietud de la tierra y seguridad de las haciendas".
3. Nadie podrá asilar a vagabundos ni tener personas sin concierto en sus chacras y estancias.	13. Se castigarán "los pecados públicos y los usureros y logreros y otros escándalos".
4. Quedan prohibidas las casas públicas de juego.	14. No serán consentidos el juego a los negros ni las borracheras a los indios.
5. Se hará inventario de los bienes de menores y se nombrará un defensor que cuide de ellos.	15. Se atenderá al reparo de la casa del cabildo y la cárcel.
6. No se harán más visitas anuales a las tiendas que las tres ordinarias y se ajustarán pesas y medidas de acuerdo a los patrones del cabildo. Se prohíbe que haya pulperos negros: en concepto de multa, sus amos perderán todas las mercaderías.	16. Se reunirá cada lunes el cabildo, poniendo penas a los capitulares que estuvieran en la ciudad o a menos de 5 leguas de ella y no acudiesen sin tener causa legítima para ausentarse.
7. Los zapatos se venderán a menos de 2 pesos, ya que los cordobanes con que se los fabrica valen menos de la mitad de eso.	17. Se aplicará una RC expedida a favor de la ciudad de Asunción para el aumento de los Propios de Buenos Aires, o bien se suplicará al monarca o al virrey que envíen una provisión similar.
8. [Falta en el original]	18. Se guardarán en el archivo todas las provisiones enviadas por el rey.
9. Se impondrá un arancel a los herreros y otros oficios mecánicos, encargándose a personas expertas y de conciencia que establezcan los precios.	19. Las mujeres mal opinadas no vivirán en las casas honradas ni en las calles principales de la ciudad, sino que se las conducirá a los suburbios.
10. No se permitirá sacar de este puerto ropa de la tierra, hierro, acero ni municiones, debido a su escasez.	20. Todos los sábados los vecinos y habitantes limpiarán sus casas y calles, y serán multados los que acumulasen paja o basura en ellas.

Poco más es lo que sabemos sobre las *Ordenanzas* de 1642. Al parecer, en 1661 las de Cuzco volvieron a ser puestas en vigencia, cayendo aquellas en desuso.²⁶⁶ Pero dos años más tarde se estableció la primera Real Audiencia en Buenos Aires, que aunque de efímera duración realzaría con su presencia la categoría de nuestra ciudad. Y a imitación de otras ciudades del virreinato del Perú, ésta ordenó que se designara un *corregidor* para que supervisara los actos del cabildo y representara en él los intereses del monarca. Todo ello hizo necesario que el ayuntamiento contara con *Ordenanzas* propias con que posicionarse frente a las autoridades recién instauradas. La tarea de redactarlos fue

²⁶⁶ En el acuerdo del cabildo de Buenos Aires de 21 de julio de 1661 se afirma que las *Ordenanzas* del Cuzco "se han observado y guardado en esta provincia de cincuenta años a esta parte"; véase: Ricardo ZORRAQUIN BECU *La organización política argentina en el período hispánico*. Perrot, Buenos Aires, 1981, Págs. 76-77.

confiada a uno de sus miembros, el regidor Juan Fernández Guillén, que fue asistido por el escribano Juan de Reluz y Huerta. A fines de 1668, estos presentaron las nuevas *Ordenanzas* al cabildo, que las aprobó y elevó a la Real Audiencia local. Unos meses más tarde también fueron validadas por esta.²⁶⁷ El texto original se componía de 46 artículos, que posiblemente estuvieron sometidos a las correcciones de uno de los oidores, el jurista Alonso de Solórzano Velasco, a quien en ocasiones se identificó erróneamente como su autor.²⁶⁸

El tercer paso necesario para su aprobación –la presentación al Consejo de Indias– se demoró durante dieciocho años. En 1695 el cabildo de Buenos Aires envió a Madrid al procurador de la ciudad, Gabriel de Aldunate, para iniciar las gestiones ante el Consejo. Este dio su conformidad y las *Ordenanzas* obtuvieron la sanción del rey el 31 de diciembre de ese año. Pero esa dilación de casi dos décadas no significó que no fueran juradas y obedecidas por los sucesivos *staff* del cabildo. Quienes las redactaron se mostraron muy influidos por las *Ordenanzas* cuzqueñas que anteriormente habían sido acatadas en Buenos Aires. Eso llevó a que en algunas de las materias abordadas, la originalidad del tratamiento fuese muy limitada. Diecisiete artículos reproducían, con poca o ninguna modificación, los contenidos de aquellas, y sus redactores lo admitieron en por lo menos dos de ellos. Un ejemplo lo encontramos en el procedimiento decretado para el festejo de Corpus Christi, que se diferenciaba en poco del que ordenó el virrey Toledo para la ciudad de Cuzco en 1572. Después de haber sido respetadas en Buenos Aires durante casi medio siglo, no es ilógico suponer que las formalidades y rituales que prescribían las *Ordenanzas* cuzqueñas habían arraigado lo suficiente como para convertirse en costumbre.

A diferencia de las de 1642, las *Ordenanzas* de 1668 tenían escasa proyección externa. Estas ya no se ocupaban con preferencia del ordenamiento social ni de la fiscalización de la actividad mercantil. Un solo artículo regulaba el comercio: el que disponía que el cabildo pusiera precio al trigo y a otros bienes de abasto. La impartición

²⁶⁷ AECBA Serie I, Tomo XIII, pág. 139 y ss.

²⁶⁸ La transcripción que hoy se conservan del texto original de las *Ordenanzas* identifica claramente a Reluz y Huerta y Fernández Guillén como sus autores. Pero en más de una ocasión, el cabildo hace referencia a las *Ordenanzas* de Solórzano y Velasco. Todavía a fines del siglo XVII, los cabildantes juraban “*las Ordenanzas que hay en este Cabildo... en lo que toca a la administración de Justicia, Política Cortesana y demás que contienen... hechas por el Dr. Alonso de Solórzano y Velasco, Oidor de la Real Audiencia que residió en este Puerto, su fecha en esta Ciudad en trece de noviembre del año pasado de Sesenta y Ocho y aprobadas por los Señores Presidente y Oidores de ella...*”. Por la fecha en que fueron redactadas, se trata de las mismas *Ordenanzas* y no de piezas distintas. Véase: AECBA Serie I, Tomo XVII, pág. 325.

de justicia ocupaba un lugar algo más relevante: siete artículos en que se reglamentaba, entre otros aspectos, el horario de las audiencias de los alcaldes ordinarios y el manejo de la cárcel. Pero el tema más abordado eran las reglas de protocolo. Con el propósito de evitar las rencillas entre los cabildantes, nada se dejó librado al azar: veintiún artículos abordaron parcial o íntegramente problemas de etiqueta concejil. No estaba permitido a los cabildantes, por ejemplo, el intercambio de opiniones en una discusión, sino que se les fijó un estricto orden de intervención para que pudieran expresarse sobre cualquier asunto. El alcalde de primer voto sería el primero en hablar y luego lo harían los regidores de acuerdo a su orden y antigüedad. Si uno de ellos se adelantaba o interrumpía a los demás, no se lo tendría en cuenta y su voto sería nulo.

La exhibición material y simbólica de las jerarquías también estaba rígidamente regulada: el teniente de gobernador no podría entrar en el salón de sesiones del cabildo llevando en sus manos un bastón sino una vara de justicia, mientras que los cabildantes se presentarían en “traje decente”, preferentemente de color negro. Quedaba asimismo contemplado el día y horario de las sesiones y a quienes les correspondía suplir a los que se ausentaran, siguiendo un riguroso orden de rango: si alguno de los alcaldes ordinarios abandonase la ciudad, ejercería su oficio el alférez real, y si no el regidor más antiguo. Dos artículos se ocupaban del orden estipulado para ocupar los asientos. El primero de ellos disponía que los regidores se sentaran en orden a su antigüedad en un escaño de madera, colocado bajo el escudo de armas de la ciudad; los alcaldes lo harían en dos escaños más pequeños, situados a los lados, y el teniente general en un silla en el medio, ocupando la cabecera. El otro precavía los disgustos que podían suscitarse cuando aquellos abandonaban de sus asientos y les ordenaba que lo hicieran sin hacer demostración alguna, so pena de ser multados.

La etiqueta capitular se observaría también durante el ceremonial religioso, al que se dio generosa cabida en las *Ordenanzas* de 1668: catorce artículos hacen referencia al lugar que ocuparían los miembros del cabildo en la misa, las procesiones y los festejos de Corpus Christi. Al igual que en la sala de sesiones del cabildo, cada cabildante tenía reservado su asiento en la capilla mayor de la iglesia catedral: el primer escaño lo ocupaba el teniente de gobernador y los siguientes los alcaldes ordinarios y los regidores, de acuerdo con su orden y antigüedad. Ninguno tenía permitido sentarse fuera de los lugares asignados ni ceder a otros sus asientos. En las procesiones, los capitulares también se desplazarían en *cuerpo*, detrás del pendón real y a continuación de los miembros del cabildo eclesiástico

**Cuadro N° 2 – Síntesis del articulado de las Ordenanzas de 1668
y sus semejanzas con las Ordenanzas de Cuzco de 1572**

ORDENANZAS DE 1668	ORDENANZAS DEL CUZCO
1. Cada Año Nuevo, los capitulares oirán misa en la sala del ayuntamiento y elegirán a los alcaldes ordinarios, alcaldes de la Hermandad y procuradores	Título IV. Que se escuche misa en Año Nuevo y se elijan los alcaldes ordinarios
2. El alcalde de 1er voto será preferido en asiento, voz y voto.	
3. Los regidores se turnarán para usar la vara de fiel ejecutor por turnos de cuatro meses.	Título IV. Un regidor será elegido para usar la vara de fiel ejecutor cada seis meses.
4. Ocho días antes de las elecciones de cargos, deberán reunirse los cabildantes para exponer las causas que tuviesen para impedir el voto de algunos de ellos	
5. El procurador de la ciudad será persona "hábil, capaz y suficiente, e inteligente en negocios" y podrá participar en los acuerdos del cabildo.	
6. Respecto al orden de los temas a tratar en los acuerdos, se comenzará con lo acordado en la sesión antecedente. Los regidores hablarán "por su orden y por su antigüedad" y se votará si hubiere discrepancias en lo que se tratare.	Título V. Se tratará en primer lugar lo que quedó acordado en la sesión antecedente. Dispone que los cabildantes vayan "hablando por su orden y antigüedad" y que se proceda a votar si hay divergencias.
7. Si alguno de los temas tratados implicara a uno de los cabildantes, éste será obligado a abandonar la sala capitular.	Título V. Si alguno de los negocios tratados implicara al corregidor o a los cabildantes, estos deberán salir de la sala.
8. Si algún cabildante denunciara que no se realizó lo dispuesto en un acuerdo, la materia no podrá tratarse sin que éste esté presente.	
9. El cabildo se reunirá por lo menos una vez a la semana. Señala para que acudan sus miembros el día lunes a las 9 de la mañana; las faltas se apuntarán en el libro de acuerdos y podrá hacerse cargo de ellas a los ausentes en el juicio de residencia.	Título V. El cabildo se reunirá dos días a la semana, lunes y viernes, juntándose cuando se escuche el tañido de las campanas de misa mayor.
10. Se podrá conceder a un regidor permiso para ausentarse por un año o más "siendo la necesidad precisa", con aprobación del gobernador.	
11. Al teniente de gobernador no se le permitirá entrar en el cabildo con bastón sino con vara de la Real Justicia.	
12. Los alcaldes ordinarios deberán todos los días dar audiencia a quienes quieran pedir justicia, dos horas por la mañana y dos por la tarde.	
13. Si alguno de los alcaldes ordinarios se ausentase de la ciudad, ejercerá su oficio el alférez real, y si no el regidor más antiguo.	
14. Se nombrará todos los años juez de menores a uno de los alcaldes ordinarios, que será acompañado por un regidor.	
15. Uno de los regidores será nombrado cada año defensor de menores.	
16. Ningún alcalde ni regidor podrán tienda de menudeo en su casa ni fuera de ella.	Título V. Ningún alcalde ni regidor podrá vender al menudeo en su casa ni fuera de ella.
17. Los capitulares respetarán las leyes que les prohíben "tener tratos ni contratos, ni arrendar propios ni rentas de la ciudad ni otras reales".	
18. En los actos públicos, ningún alcalde ni regidor deberá vestir decentemente, con preferencia con indumentaria de color negro.	
19. No se podrá sesionar en el cabildo sin que asista el teniente de gobernador.	Título V. No sesionará el cabildo en ausencia del corregidor o de su teniente.
20. En la iglesia catedral, ocuparán los escaños que están puestos en la capilla mayor por orden: primero el teniente de gobernador, después los alcaldes ordinarios y regidores por su orden y antigüedad, y por último el procurador general.	Título VI. En el escaño que está puesto en la iglesia mayor, se sentarán primero el corregidor, luego los alcaldes ordinarios y regidores por orden, y por último alguacil mayor y escribano.
21. Ninguna persona podrá ocupar los escaños que están reservados al cabildo. El alguacil mayor quedará al cuidado de que ello no suceda, y la que lo hiciese pagará una multa y será desterrado de la ciudad por cuatro meses.	Título VI. Ninguna persona ajena al cabildo, de estado o condición que sea, podrá ocupar el escaño reservado a éste; el corregidor o alcalde ordinario mandarán en caso contrario a que se desocupe.

22. El alguacil mayor guardará que en las procesiones y fiestas no haya ruidos ni pendencias.	Título VI. El alguacil mayor procederá en las procesiones contra deshonestidades, insultos y pendencias.
23. En las procesiones, los capitulares irán juntos luego de los miembros del cabildo eclesiástico	Título VI. En las procesiones, los capitulares irán juntos detrás de los “capitulares de la iglesia”.
24. El estandarte real será sacado por el alférez real o quien usare de dicho oficio.	
25. El cabildo hará lo que le fuera posible para dar solemnidad a la fiesta de Corpus Christi.	
26. Para lucimiento de la fiesta de Corpus Christi, los indios de la ciudad barrerán las calles por donde pasará la procesión. Los españoles aderezarán los frentes de sus casas con colgaduras y en las esquinas montarán altares.	Título VIII. Las calles por donde pase la procesión de Corpus Christi estarán limpias y enramadas. Los españoles tendrán “entapizadas las calles” con lo mejor que tengan en sus casas.
27. Quince días antes de Corpus Christi, el cabildo estimará el gasto de ramas, juncos e hinojos para aderezar las calles y los vecinos darán limosna voluntariamente.	Título VIII. Treinta días antes de Corpus Christi, el corregidor y el cabildo se reunirán para planear los festejos. Se obligará a los gremios a que organicen sus danzas “sin que se pueda conmutar a dineros”
28. Se proclamará por bando el inicio de la fiesta de Corpus Christi a 10 leguas a la redonda, con penas para los vecinos que faltasen.	
29. En dicha fiesta de Corpus Christi, los regidores llevarán la vara del palio y el gobernador el estandarte del Señor hasta el primer altar, y luego se turnarán.	Título VIII. En Corpus Christi, el corregidor llevará el estandarte del Santísimo Sacramento y los regidores llevarán la vara del palio.
30. El alguacil mayor irá delante de la procesión de Corpus Christi despejando a la gente, y los alcaldes no deberán consentir que entre las mujeres vaya ningún hombre.	Título VIII. Se prohibirá a las mujeres que se asomen a las ventanas para que no se quiebre el “hilo” de la procesión.
31. Antes de Corpus Christi, uno de los alcaldes hará lista de todos los indios de esta ciudad y conforme las naciones que hubiere, los agrupará para que hagan danzas y representaciones.	
32. Para evitar que los indios se embriaguen en Corpus Christi, el alguacil mayor recorrerá la ciudad y sus arrabales y disolverá sus “juntas”.	Título VIII. Los alguaciles del corregidor impedirán las “borracheras exorbitantes y desconciertos en el beber” de los indios.
33. El último día de las fiestas de Corpus Christi se sacará en procesión el Santísimo Sacramento a la plaza y se harán altares y danzas.	
34. No se admitirán pleitos ni demandas por menos de 20 pesos.	
35. No se celebrarán acuerdos en el cabildo sin que asistan todos los regidores que estuvieren en la ciudad, so pena de nulidad.	
36. El mayordomo hará construir un escaño de madera donde se sienten los regidores en orden a su antigüedad y lo hará colocar debajo de las armas de la ciudad.	
37. El libro de acuerdos no podrá sacarse de la sala capitular y será guardado en un armario bajo llave.	
38. Los regidores hablarán y votarán respetando el orden de ancianidad y antigüedad, y serán declarados nulos los votos de quien no callase cuando le tocara hablar a otro.	
39. Cuando un regidor se conforme con el voto de otro, no será necesario transcribirlo entero por escrito.	
40. Se multará al cabildante que revele lo que se tratase en secreto.	
41. Cada cuatro meses, el cabildo pondrá precio a los bienes de abasto.	Título IV. Se hará arancel con los precios “de la comida y los demás bastimentos”.
42. El regidor más antiguo cumplirá con las solemnidades de recibir y dar cumplimiento a las RC.	
43. Todos los Años Nuevos se leerá este estatuto y se lo jurará.	
44. Todos los sábados un regidor visitará la cárcel y se informará de las causas de los pobres para pedir su soltura y se acelere la causa.	
45. Se saldrá todos los sábados a pedir limosna para sustentar a los pobres de la cárcel.	
46. Cuando llegase desde el campo noticia de algún exceso en perjuicio de la República, se obligará a los alcaldes de la Hermandad a dar cumplimiento a las comisiones del cabildo.	

El contraste entre las *Ordenanzas* de 1642 y 1668 resulta evidente. Cuando las primeras se pusieron en ejecución, el cabildo estaba aún en manos de la facción aportuguesada que había mostrado recientemente su cohesión al resistir la expulsión de los lusitanos de la ciudad. Esa uniformidad hacía innecesario reglar la convivencia en el seno del cabildo; en cambio, se apuntó a subordinar a los estratos subalternos y a los pequeños mercaderes que podían convertirse en competidores molestos. Se deja entrever, en suma, la existencia de una élite política con escasas contradicciones internas pero consciente de que su posición en la cima de la pirámide estamental distaba aún de hallarse consolidada. Las de 1668, en cambio, respondieron a propósitos distintos. En 1663, varios nuevos regidores habían ingresado al cabildo, luego de que el Consejo de Indias ordenara sacar a remate esos empleos; a ellos se agregó la presencia de nuevos funcionarios a los que la corona ordenó fiscalizar en forma directa o indirecta la actividad del concejo, como el corregidor y los oidores de la Real Audiencia local. Ya no era prioritario, como en 1642, asegurar el orden exterior al cabildo, quizá porque éste contaba con otras herramientas para hacerlo: se trataba ahora de que sus integrantes respetaran una rigurosa etiqueta, dándole así exclusividad al orden interno. Con el objeto de reconocer los privilegios y prerrogativas de sus miembros, se aseguró que cada uno de ellos ocupara el lugar que le correspondía en la sala capitular y en las ceremonias públicas, evitando conflictos de protocolo, a fin de poder concentrar las energías de la corporación en enfrentar la intromisión de las autoridades residentes en asuntos de su injerencia.

La composición de la planta capitular: oficios concejiles mayores y menores

A medida que la composición de los ayuntamientos adquiría un tinte oligárquico cada vez más definido, sus integrantes fueron tendiendo a una mayor especialización en sus funciones. La estructura orgánica de la corporación municipal se amoldó a las dos atribuciones que le fueron reconocidas por la corona: la de ser *Justicia* y *Regimiento*. El primero de estos atributos aludía a su competencia en el ramo de la justicia ordinaria, que le permitía zanjar causas civiles y criminales. El segundo, a que le fuera confiada la resolución de asuntos de interés local como el abastecimiento de productos de primera necesidad, la transitabilidad y limpieza de calles y caminos, la administración de los bienes comunales y la organización de festividades públicas. En uno y otro ámbito de

acción, el cabildo disponía de un conjunto de oficiales cuyas facultades y funciones estaban bien delimitadas por las leyes del reino y por los estatutos de cada corporación. Pero en este organismo colegiado, aunque los asuntos comunales se resolvían en forma deliberativa, no todos los oficiales que componían su planta orgánica tenían voz y voto en la toma de decisiones.

La historiografía se ha valido de distintos criterios para clasificar a los miembros del cabildo. El más tradicional es el que se funda en el origen de sus nombramientos. Una parte de los cabildantes desempeñaba sus cargos en forma anual por haber sido elegido entre los vecinos, mientras que los restantes los ejercían en forma vitalicia por haberlos adquirido por compra: esto nos colocaría ante *empleos electivos* y *empleos venales*. Ampliando un poco esa catalogación, Constantino Bayle afirmaba que la planta de un ayuntamiento estaba básicamente compuesta por alcaldes ordinarios y regidores, a los que podían añadirse otros oficios, unos de honra y otros de utilidad pública: la tendencia era que los empleos honoríficos fueran de carácter venal y los de utilidad pública fueran electivos.²⁶⁹ Ana Guerrero Mayllo, siguiendo a Rafael Gibert, propuso catalogar los oficios concejiles de acuerdo con las funciones que se les asignaban: existieron los de jurisdicción –a los que competía la función judicial, como las alcaldías ordinarias–, los administrativos –generalmente de carácter electivo, en quienes se delegaba la administración económica del ayuntamiento y la recepción de rentas, como las mayordomías– y los profesionales –a los que se deparaba una labor técnica o letrada, como las procuradurías generales–. No obstante, esa autora también los clasificó de acuerdo con el origen de los nombramientos: algunos de los oficiales del cabildo eran designados por el rey o por sus representantes y luego confirmados por la corporación, mientras que la designación de otros era incumbencia exclusiva de ésta última.²⁷⁰

Para el caso de Buenos Aires hemos preferido ensayar una clasificación propia. Detectamos la presencia de dos circuitos semicerrados en el seno de los cuales se produjo la rotación de determinados oficios concejiles. Esa segmentación se produjo debido a la escasa carga honorífica de algunos de esos oficios, que los colocó por debajo de las apetencias de los sectores dominantes. En función a ello, nos referiremos a *oficios mayores* y *oficios menores*. Los primeros, vinculados a la justicia, a la resolución de los asuntos comunales y a la representación de la ciudad frente a las autoridades centrales,

²⁶⁹ Constantino BAYLE *Los cabildos seculares en la América Española...* Pág. 101.

²⁷⁰ Ana GUERRERO MAYLLO *El gobierno municipal de Madrid (1560-1606)* Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, 1993, Págs. 24-26.

quedaron reservados a un círculo más acotado de vecinos, los de mayor riqueza e influencia. Se trató de las regidurías, las alferecías mayores, las alcaldías provinciales de la Hermandad, las alcaldías ordinarias y las procuradurías, empleos que disponían de un asiento en las sesiones del concejo y que tenían franqueado, si no en todos los casos el voto, por lo menos la intervención en las deliberaciones. Los oficios menores fueron confiados, en cambio, a los estratos medios de la vecindad local, compuestos por comerciantes más modestos y por hacendados. Estos empleos exigían un pesado desempeño y eran de escasa rentabilidad, razón por la cual no fueron considerados lo suficientemente atractivos por los sectores dominantes, que prefirieron delegarlos en personas de su clientela. Nos referimos a las mayordomías y las alcaldías de la Hermandad. El ejercicio externo de estos dos cargos impidió a quienes los detentaban tener participación en las sesiones del cabildo, a excepción de cuando eran llamados a presentarse con motivo de exponer sobre algún asunto concreto, pero sin poder alternar en las discusiones ni votar en ellas.

Nos hallamos, como afirmamos al principio, ante dos circuitos semicerrados, pues quienes ejercieron estos últimos empleos no se promocionaron con facilidad al grupo de los oficios mayores: fueron contados los vecinos que experimentaron el trasvaso de un grupo a otro, aunque en todos los casos que conocemos lo hicieron en sentido ascendente. De los 174 vecinos que fueron llamados a desempeñar cargos electivos en el cabildo de Buenos Aires entre 1690 y 1726, 93 ejercieron oficios menores, pero sólo 7 de ellos desempeñaron más tarde oficios mayores: en sus inicios, 4 de estos fueron alcaldes de la Hermandad y 3 fueron mayordomos.

Oficios mayores de carácter venal: los regidores

El colegio de regidores era, en palabras de Aranda Pérez, la verdadera esencia del régimen municipal.²⁷¹ Como *cabeza de la ciudad*, dicho colegio acaparaba la representación corporativa de todos los estamentos que componían la república y capitalizaba simbólicamente las atribuciones que se desprendían del concepto político de *pueblo* que, como refiere Alejandro Agüero, guardaba evidentes reminiscencias del concepto de *populus* esgrimido por los juristas romanos.²⁷² Este autor reproduce en este punto los criterios de Castillo de Bobadilla, para quien la representación conferida a los

²⁷¹ Francisco José ARANDA PÉREZ “Repúblicas ciudadanas...” Págs. 26-27.

²⁷² Alejandro AGÜERO “Ciudad y poder político en el Antiguo Régimen...” Págs. 138-139.

regidores se fundaba en la imposibilidad de reunir a la totalidad de la vecindad para conferirle capacidades resolutivas. Desde que quedara atrás el antiguo concejo abierto, integrado por la congregación de todos los vecinos, el colegio de regidores había asumido la representación de todo el cuerpo social. A fines del siglo XVI, Castillo de Bobadilla había afirmado, en efecto, que *“los Regidores representan al Pueblo y [a] todos los estados de la República, y tienen el poder de ella para todas las cosas que le tocan y convienen, sin que sea necesario Concejo abierto para ello esto es, en las Ciudades y Lugares populosos, porque en las pequeñas Villas costumbre hay de juntarse el Pueblo para algunas cosas señaladas”*.²⁷³ Pero dos siglos más tarde, Santayana Bustillo consideraba que el origen de esa delegación no se hallaba en la imposibilidad de reunir a una comunidad numerosa con fines deliberativos, sino en la insolvencia política de ésta, a quien parangonaba con un menor que requería de tutela. Sostenía que *“la obligación del Regidor para con su República es la misma que la del Tutor y Curador para con el menor y el pupilo. Está el Regidor obligado a procurar la utilidad de su Pueblo, poner todo cuidado y diligencia en las dependencias de su cargo y comisiones de Ciudad que se le encarguen. Si se le diese alguna, no puede rehusarla y ha de cumplirla; si la dejase sin causa, podrá y aun deberá castigársele”*.²⁷⁴

Los regidores conformaban la planta estable del cabildo y a ellos les pertenecía el gobierno económico y político del municipio. Tanto en el reino de Castilla como en sus dependencias americanas, la implantación de las regidurías facilitó a las oligarquías locales el control de los asuntos municipales. Este oficio había surgido en el siglo XIV, pero con los primeros Habsburgo se convirtió en *venal* y en *vitalicio*, en un proceso que fue de la mano con una concepción patrimonial cada vez más acentuada de los cargos municipales; esos atributos lo dotarían de una autonomía e independencia de la que carecieron quienes dependían de una elección para ocupar un asiento en el concejo. Durante el siglo XVII la corona, movida por sus urgencias económicas, dio un último paso en ese sentido: concedió a este oficio el carácter de *perpetuo y renunciable*, por el cual quien lo detentaba adquirió la posibilidad de legarlo a uno de sus herederos o de venderlo a un tercero, previo pago de una contribución al erario que oscilaba entre el tercio y la mitad del precio en que fuera comprado. Al estar sujetas a la transmisión por herencia y al derecho de abolengo, que trababa su transmisión a otros linajes, las

²⁷³ CASTILLO DE BOVADILLA *Política para corregidores...* Pág. 153.

²⁷⁴ Lorenzo de SANTANA BUSTILLO *Gobierno político de los pueblos de España...* Págs. 47-49.

regidurías se convirtieron en patrimonio de las familias principales de los municipios.²⁷⁵ Paralelamente a ello y respondiendo también a los aprietos financieros de la corona, fue produciéndose en las ciudades del imperio hispánico un acrecentamiento en el número de las mismas, lo que permitió a las oligarquías indianas apoderarse de la mayor parte de los asientos en los ayuntamientos e imponerse con facilidad en las votaciones o en las elecciones de cargos.

Hubo otro factor que contribuyó a dar atractivo a este oficio: el prestigio. El cargo de regidor, considerado una dignidad, convertía en honorable a quien lo poseía. Pero ese atributo venía acompañado de una serie de exenciones y privilegios que podían eventualmente transformarse en ventajas materiales. Algunas de esas prerrogativas eran puramente honoríficas pero contribuían a recalcar su superioridad frente al resto de la vecindad, como la de poder portar armas en horas y lugares prohibidos o el hecho de que se les reservaran las mejores carnes cuando se sacrificaban reses en los mataderos de la ciudad. Más significativas eran las de carácter judicial: en caso de que los magistrados requirieran de su testimonio en un pleito, no podía obligarse a los regidores a concurrir al estrado sino que se los hacía declarar en sus hogares, alejados de la expectación pública. Si no mediaba dictamen del monarca no se los podía someter a tormento (salvo por crimen de Lesa Majestad o por *pecado nefando* o sodomía) ni tampoco a las penas de azotes, galeras o muerte.²⁷⁶

Al encabezar el ayuntamiento, los regidores no debían ausentarse de la ciudad más que excepcionalmente. Solórzano Pereira afirmaba que su obligación era servir a su empleo por lo menos durante cuatro meses al año, pero les estaba permitido tomarse una licencia anual de hasta noventa días aunque el concejo se la denegase. Agregaba que los que tuvieran estancias u otros establecimientos rurales a menos de seis leguas de la ciudad no necesitaban pedir licencia para visitarlas.²⁷⁷ Esto último indica que era bien aceptado que subsistieran de la explotación de sus fincas. Tenían prohibido, en cambio, desempeñarse como *regatones* o revendedores de mercancías, pues durante el Antiguo Régimen el comercio al menudeo estuvo identificado con los oficios manuales, que eran

²⁷⁵ Según Castillo de Bobadilla, las regidurías eran análogas a los bienes raíces: podían computarse al hijo en la legítima y fundarse censos sobre ellas. Estaban sujetas a los derechos de retracto y de tanteo, como bienes de abolengo que eran. Justificaba este autor que “*en los tales Oficios que tienen honra y dignidad cae más afición de retractarlos, por haber sido de los abuelos, que no la casa o la viña, pues las cosas de honra se prefieren a la hacienda*”. CASTILLO DE BOVADILLA **Política para corregidores...** Pág. 233.

²⁷⁶ Lorenzo de SANTANA BUSTILLO **Gobierno político de los pueblos de España...** Págs. 47-49.

²⁷⁷ Juan de SOLÓRZANO PEREIRA **Política Indiana** Madrid, 1776, Tomo II. [Original de 1646], Pág. 259.

considerados deshonorosos. Pero ello no significó que la práctica del comercio les estuviera vedada. Santayana Bustillo expresaba claramente que “*al Regidor y demás Oficiales de República no les está prohibida la negociación y granjería... ni se ha promulgado Ley que les prohíba ser comerciantes*”.²⁷⁸ Quizás porque en Buenos Aires un número no despreciable de regidores estuvo vinculado al comercio terrestre, las *Ordenanzas* de 1668 les concedían excepcionalmente permiso por un año o más para ausentarse del cabildo, “*atento a la distancia de las ciudades y provincias*” del virreinato, siempre que contasen con la autorización del gobernador.

El gobierno político y económico de la ciudad era oficio privativo de los regidores y no podía ser estorbado por los tribunales superiores ni por las autoridades residentes.²⁷⁹ Los diversos ramos de la administración municipal les pertenecían: las cuestiones que debía resolver el concejo eran por lo general debatidas en las sesiones, pero algunos asuntos podían ser confiados por éste a comisiones compuestas por dos o más regidores, que luego de estudiarlos proponían al resto de los cabildantes su parecer. También se les encargaba que se presentaran ante el gobernador a negociar asuntos que requerían de la aprobación de éste. Estas dos últimas funciones, que implicaban una delegación pero nunca capacidades individuales de resolución, eran conocidas como *diputaciones*. El regidor que ocupaba un asiento desde más antiguo recibía el nombre de *regidor decano* y era quien guardaba las llaves de la ciudad y las del archivo del cabildo. Este cumplía, además, con un importante rol en el protocolo concejil: era quien recibía los despachos reales y los colocaba sobre su cabeza en testimonio de obediencia. También le correspondía investir a los alcaldes ordinarios y a los alcaldes de la Hermandad, poniendo en sus manos la vara de la justicia, y era quien las recibía cuando estos abandonaban sus cargos. En ausencia o muerte de un alcalde ordinario, tomaba su vara y ejercía ese empleo.²⁸⁰

Correspondía a los regidores la cobranza de las rentas reales (como las alcabalas, recaudadas en Buenos Aires por el cabildo) y la supervisión sobre el precio de los bienes del abasto. Por esta última razón, se alternaban cada cuatro meses para desempeñar el cargo de *fiel ejecutor*, funcionario municipal que debía garantizar la exactitud de los pesos y medidas en las tiendas y pulperías de la ciudad y procurar que

²⁷⁸ Lorenzo de SANTANA BUSTILLO *Gobierno político de los pueblos de España...* Pág. 8.

²⁷⁹ “*A los Regidores toca la economía y Gobierno de los Pueblos tan privativamente, que no habiendo instancia de parte o del Fiscal del Rey, no pueden entrometerse en ellos los Tribunales Superiores*”; Lorenzo de SANTANA BUSTILLO *Gobierno político de los pueblos de España...* Págs. 47-49.

²⁸⁰ Constantino BAYLE *Los cabildos seculares en la América Española...* Pág. 185.

los productos de consumo básico se vendieran a los precios fijados por el cabildo. Desde 1605, los fieles ejecutores gozaron en Buenos Aires de facultades judiciales. Visitaban en compañía de un alcalde ordinario los comercios y controlaban el correcto uso de balanzas y pesas, y en los casos de fraude podían actuar sumariamente, imponiéndole multas por irregularidades en el pesaje, un porcentaje de las cuales les correspondía como pago a sus servicios. Otras de sus funciones eran poner arancel a los *oficios mecánicos*, impedir el acaparamiento de cereales y de otros artículos de consumo básico, vigilar la correcta edificación de casas y ranchos en cuadrícula urbana e imponer penas a los vecinos por la falta de limpieza de las calles.²⁸¹

Desde la segunda mitad del siglo XVII, los regidores comenzaron a detentar en Buenos Aires cargos de justicia. A partir de 1661 uno de ellos actuó como *juez de menores*, con potestad para exigir el rendimiento de cuentas a quienes administraban bienes pertenecientes a menores de edad. Desde 1664 el cabildo nombró un *defensor general de menores* y más tarde un *defensor de pobres*, oficios que con frecuencia fueron confiados a los regidores. Como los tribunales que se hallaban a cargo de los alcaldes ordinarios debieron resolver un número cada vez más abultado de pleitos, se estableció en 1712 el cargo de *conjuez*, que recayó en manos de un regidor, a quien se hizo responsable de un tercer tribunal de fuero común.

La Recopilación de Leyes de Indias disponía que en las ciudades principales hubiera doce regidores y en las demás ciudades y villas hubiera sólo seis.²⁸² Pero en la práctica fueron las negociaciones que cada ayuntamiento sostuvo con la corona lo que determinó en cada ciudad el número de regidurías. En Buenos Aires contamos con una breve reseña histórica sobre los oficios concejiles que fue escrita durante el virreinato y que hoy resulta de considerable utilidad para entender a grandes rasgos la evolución de este empleo venal. En 1782, en atención al crecimiento de la ciudad, el cabildo porteño había sondeado a las autoridades sobre la posibilidad de extender a una docena el número de regidores. El virrey Vértiz se interesó en la propuesta y pidió que se lo pusiera al tanto de situaciones parecidas que pudieran tomarse como antecedentes. La tarea fue encargada al regidor Gregorio Ramos Mejía, quien luego de revisar cuarenta libros de acuerdos, presentó un *extracto* en que esbozó una breve historia de los principales oficios concejiles. Quedaron excluidos de este esbozo los primeros años de

²⁸¹ Ricardo ZORRAQUIN BECU *La organización política argentina en el período hispánico* Perrot, Buenos Aires, 1981.

²⁸² *Recopilación de Leyes de Indias*, Libro IV, Título X, 2.

la ciudad, pues no pudo dar con los libros de los años inmediatos a la fundación y sólo pudo consultar los posteriores a 1605. Pero esa laguna temporal no impidió que su informe se constituyera en la tentativa más antigua que se conoce de delinear una historia de las instituciones municipales en el Río de la Plata.²⁸³

El interés de Ramos Mejía se centró lógicamente en las regidurías, ya que el informe que envió al virrey tenía por objeto reunir fundamentos que justificaran una ampliación en su número. Comenzó su relato en los años que siguieron a la fundación de Buenos Aires. Por entonces, los regidores eran *cadañeros*: al igual que los alcaldes ordinarios, se nombraban a comienzos de cada año, asignándoles sus asientos de acuerdo con el orden en que habían sido designados. El primero en recibir su nombramiento era investido como *Regidor de 1er Voto y Alférez Real* y le tocaba empuñar el pendón real durante las procesiones. Ese carácter electivo, que como ya dijimos no fue excepcional en la monarquía hispánica, parece haber respondido a la falta de solvencia que tuvieron los primeros vecinos para comprarlas, más que a una supuesta equidad en la rotación de los empleos concejiles.

La real cédula de 14 de diciembre de 1606, que convertía el oficio de regidor en perpetuo y renunciable, fue conocida en Buenos Aires por medio de una real provisión remitida por la Real Audiencia de Chuquisaca el 17 de diciembre de 1607.²⁸⁴ Pocos años más tarde, el cumplimiento de esos decretos permitiría que la oligarquía local se adueñase de las regidurías: en 1619 se subastaron seis de ellas en propiedad, que el célebre contrabandista Juan de Vergara adquirió para sí y para sus allegados. A pesar de que el cabildo y los vecinos más antiguos se opusieron a ello y llevaron el pleito a la Real Audiencia, el virrey Esquilache los confirmó provisoriamente a los seis regidores en sus cargos, aunque advirtiéndoles que se les otorgaban cuatro años para obtener la confirmación real.

En 1623, dos de esas regidurías quedaron vacantes porque sus propietarios no consiguieron la confirmación del monarca, y se sacó a remate otra más, que luego de controversias y reclamos tampoco tuvo quien la ocupara.²⁸⁵ Ramos Mejía puso el acento

²⁸³ El informe de Gregorio Ramos Mejía, fechado en 22 de mayo de 1782, se encuentra en AGN IX-19-3-2 *Archivo del Cabildo de Buenos Aires (1780-1783)*.

²⁸⁴ Solórzano menciona estas disposiciones en su **Política Indiana**, Capítulo 13, Libro 6, Págs. 996-997. También la **Recopilación de Leyes de Indias** en el Libro 8, Títulos 21 y 22, Tomo III.

²⁸⁵ En 1623 se denunció que dos de las regidurías rematadas por Vergara y al año siguiente se remató una séptima regiduría en un sujeto en Potosí, pero un vecino de Buenos Aires, Juan Gutiérrez Barragán, presentó un reclamo por agravio y remató el oficio en esta ciudad. Finalmente el virrey no confirmó a ninguno de los dos. El oidor Alonso Pérez de Salazar visitó Buenos Aires y dio por nulo tanto estos dos remates como el de la séptima regiduría. En 1624 y 1626, dos vecinos –Vicente Bracamonte y Domingo

en la preponderancia de los empleos venales que se apreció en la década de 1620, cuando la mayor parte de los capitulares había adquirido su asiento por compra. En 1626, año en que la corporación alcanzó el mayor número de miembros, ésta estuvo integrada por “*ocho Regimientos o Regidores, con los dos Oficiales Reales [que ocuparon los asientos que dejaron las regidurías vacantes] sin incluir el Alférez Real ni el Depositario General ni Receptor de Penas de Cámara, que con los dos Alcaldes Ordinarios y Alguacil Mayor se debía de componer de catorce vocales*”. Pero a partir de entonces el número de oficiales venales iría menguando progresivamente.

En 1663, cuando se estableció la primera Real Audiencia en Buenos Aires, hacía algunos años que ya no quedaban regidores en el cabildo y sólo asistían a él dos alcaldes ordinarios y el depositario general. Por auto del 17 de diciembre de ese año, ésta dispuso que se diera cumplimiento a una real cédula expedida el 2 de noviembre de 1661 por la que se otorgaba a la ciudad de Buenos Aires ocho nuevas regidurías. Tres años más tarde se sacó a subasta la *Regiduría de primer voto* en 1210 pesos y las siete restantes en 800 pesos. Aunque fueron adquiridas por diferentes vecinos, el proceso anterior se repitió y una tras otra fueron quedando vacantes. En 1675 el escribano del cabildo, Bernardo Gayoso, informó al rey sobre la “*decadencia de individuos*” que venía sufriendo la corporación: al no recibir los regidores salario como en otras partes de América ni guardársele los privilegios y preeminencias que correspondían a sus empleos, los vecinos mostraban escaso interés por adquirir el cargo.²⁸⁶ Para entonces, sólo tres de los ocho regidores ingresados en 1664 seguían ocupando sus asientos en el cabildo. Durante el resto del siglo no hubo nuevas incorporaciones y en 1696 sólo seguía asistiendo a las sesiones uno de ellos, Diego Pérez Moreno.

El *extracto* de Gregorio Ramos Mejía permite apreciar cómo a lo largo del siglo XVII la composición del cabildo fue simplificándose y el número de sus miembros fue

de Ibarra— ocuparon dos de esas regidurías. En 1629, estos dos ya no las detentaban y uno de sus lugares fue ocupado por Diego de Roxas y Briones.

²⁸⁶ Observaba Gayoso: “*Los Regidores no tienen conveniencia ni emolumentos algunos como en otras ciudades para que asistiendo en la ciudad puedan sustentar el lustre de sus personas, y habiéndole costado los oficios tan crecido número de pesos, no solamente para la desdicha a lo referido sino que aun sus privilegios y preeminencias no se les guarda, manteniéndoles en el crédito y veneración que merecen sus personas por el oficio por suposición le manifiesta el derecho, que les equipara a los Consejeros de Su Majestad, y aquí los vemos prender por deudores, y otros casos muy leves y ordinarios hacerles molestias de que se ha sacado harto escándalo y menosprecio que hacen los súbditos, así de la República como de los mismos oficios; de que se sigue notable perjuicio a la Real Hacienda pues así los que lo tienen por verse con inquietudes y menospreciados los quieren dejar, como así sucederá, no habrá sin duda quien jamás los compre, pues por respeto de buenos me consta no han hecho dejación con justas causas algunos de los presentes. Y de aquí se reconoce parte de la total ruina con que ya mira esta República y que si se corre en esta forma ha de ser necesario apremio para ocupar los oficios, aun de alcaldes ordinarios...*”.

raleando hasta llegar a su mínima expresión a finales de esa centuria. La corona intentó revertir la situación y por medio de una real cédula dispuso en 1695 la creación de seis nuevas regidurías. Pero no se le dio cumplimiento hasta 1702, cuando el gobernador Manuel de Prado y Maldonado dio orden de sacarlas a subasta. Quien lo sucedió en el gobierno, Alonso de Valdés Inclán, dispuso sacar a almoneda dos de ellas, que habían quedado vacantes por muerte de sus titulares, y provocó con ello las protestas del cabildo, que le negaba facultades para hacerlo. Diez años más tarde, cuando esta disputa ya había llegado al Consejo de Indias, Felipe V reconoció la validez de los títulos de estos dos últimos regidores pero dispuso que en adelante sólo el cabildo tuviera competencia para hacer nuevos nombramientos e incrementar su número. El ayuntamiento de Buenos Aires disfrutó a partir de entonces de ese privilegio y gracias a ello la cantidad de escaños ocupados por los regidores aumentó en forma significativa: en 1718 pasaron a ser 7, entre 1719 y 1722 ascendieron a 9 y en 1723 llegó a haber 13. Al producirse este incremento ya había quedado atrás la reducida élite del siglo anterior, reemplazada por una oligarquía opulenta que se mostraba ávida por asumir el gobierno municipal y gestionar los recursos comunales. El cabildo porteño continuaría en goce de esa atribución hasta que una Real cédula de 20 de febrero de 1752 –que fue recibida por la corporación a fines de 1753– le prohibió efectuar nuevos nombramientos.

Desde la entronización de los Borbones, las atribuciones del ayuntamiento porteño corrieron el riesgo de ser cercenadas por la corona, cuya tendencia fiscalizadora, como es bien sabido, se contrapuso con la autonomía que permitieron los Habsburgo a las oligarquías criollas. Todavía Felipe V reconocería al cabildo de Buenos Aires la potestad de crear nuevas regidurías o cubrir las que quedaban vacantes, pero Fernando VI, su sucesor, le recortó esas facultades. Esto, según creemos, pudo haberse debido a que éste último considerara impropia esa libertad de acción, pero también a motivaciones de índole distinta. Desde su coronación, el primero de los Borbones se había visto impulsado a sostener continuas guerras en el continente europeo, situación que casi no varió a lo largo de su extenso reinado. Ello le llevó a no descartar ningún posible ingreso para su exigido erario, siendo la venta de los cargos concejiles una de las entradas con que contaba. De allí la “liberalidad” que exhibió frente al cabildo porteño. Su hijo Fernando, en cambio, se destacó por su política pacifista, que le permitió llevar adelante la desarticulación de la venalidad en las magistraturas, que como es sabido fue el paso previo a la creación de una burocracia rentada que emprendió su sucesor, Carlos III. Es en ese contexto que el ayuntamiento de Buenos

Aires fue despojado de una atribución que conservó durante cuatro décadas. Lo que se aprecia es el deseo de la corona de no dejar librado los nombramientos en manos de la oligarquía local.

No obstante, hay algo que el *extracto* de Ramos Mejía no consigue reflejar: que las atribuciones que el ayuntamiento porteño perdió en 1752 no habían sido un obsequio espontáneo del monarca, sino el fruto de una larga transacción con la corona. A lo largo de varias décadas, la dirigencia concejil se había visto obligada a negociar con ésta para conseguir una ampliación en el número de las regidurías, convencida de que sólo habilitando más bancas el cabildo podría asegurarse el control de los asuntos comunales con más comodidad. En 1695, el cabildo de Buenos Aires había enviado a Madrid a un representante, Gabriel de Aldunate, para que gestionara, entre otros muchos encargos, la creación de nuevas regidurías, ya que por entonces quedaba sólo una en ejercicio. El 28 de febrero de ese año, el Consejo de Indias despachó una real cédula que disponía el nombramiento de seis nuevos regidores, pero el gobernador Agustín de Robles se resistió a cumplirla y hubo que esperar a que su sucesor, Manuel de Prado y Maldonado, la hiciera obedecer y sacara estos empleos a subasta.

En los primeros años del siglo XVIII, como ya dijimos, el cabildo de Buenos Aires se quejaría de las crecientes intromisiones de los gobernadores, que reclamaban como propia la facultad de nombrar regidores y otros oficiales venales. La corporación se vio obligada a enviar a otro representante a Madrid, Francisco de Tagle Bracho, a quien se encargó que negociara ante Felipe V “*el restablecimiento de sus regimientos, sin los gravámenes a que los han reducido los gobernadores*”.²⁸⁷ En respuesta a su gestión, el rey firmaría el 7 de diciembre 1708 una real cédula por la que concedía al cabildo la facultad privativa para sacar a remate las regidurías cada vez que quedaran vacantes y para imponer el empleo a los vecinos de su elección si no se conseguía quien las adquiriera, quedando el gobernador reducido a firmar el despacho de los títulos. En las consideraciones expresadas en dicha real cédula se entrevén las estrecheces económicas que padecía el monarca: se hallaba atravesando el momento más engorroso de la Guerra de Sucesión y no estaba en condiciones de despreciar la venta de oficios, siquiera en el caso de una vecindad “pobre” como la de Buenos Aires. Felipe V manifestó conocer “*la suma pobreza de dicha ciudad y la ninguna estimación que por esta razón tenían los oficios del Cabildo y especialmente los regidores, sin que hubiese persona que quisiese*

²⁸⁷ AGN IX-19-8-2 *Propios del Cabildo*

entrar en su compra o arrendamiento de que se seguía hallarse sin aquellas personas que son necesarias para la buena administración y régimen de las Repúblicas” y reiteró que había concedido al cabildo “seis regimientos [para] que ejerciesen las personas más beneméritas y se mandó al Gobernador les diese el despacho necesario para su ejercicio, con obligación de que dichos oficios fuesen renunciables y de llevar confirmación mía, concediendo asimismo facultad para que a los que así se nombrasen se les pudiese apremiar a su aceptación”.

Pero la resolución del monarca fue lisa y llanamente ignorada por Manuel de Velasco y Tejada, gobernador del Río de la Plata, que siguió considerándose con facultades para realizar los nombramientos. El cabildo apeló a la Real Audiencia de Chuquisaca, que anteriormente había respaldado sus pretensiones, en tanto esperaba que el Consejo de Indias se expidiera. Pero los oidores, sobornados por Velasco, revirtieron el fallo y le reconocieron autoridad para hacer designaciones. Felipe V fue advertido de ello y amparó al ayuntamiento, en atención a *“los perjuicios que tendría de apropiarse los Gobernadores de la facultad de elegir dichos oficios, pues era verosímil que por sus fines particulares eligieran personas menos beneméritas en grave perjuicio de aquella República y de los vecinos”*. En 1711 repitió la real cédula por la que se concedían facultades privativas al cabildo y envió a Buenos Aires al pesquisidor Mutiloa para que depusiese a Velasco y la hiciese obedecer.²⁸⁸

Oficios mayores de carácter venal: alférez real, alguacil mayor, alcalde provincial de la Santa Hermandad y depositario general

Quizás el oficio concejil más prestigioso haya sido el de *alférez real*, que pertenecía al lote de los empleos venales. Era considerado un oficio “de mera honra”, ya que en tiempos de paz no tenía asignado otro cometido que el de portar el estandarte con las armas del rey durante las procesiones civiles o religiosas. En tiempos de guerra, en cambio, desempeñaba un importante papel: tenía encargada la organización de las milicias de la ciudad. Gozaba de voz y voto en el ayuntamiento y se le reservaba el asiento más honorable, situado junto al que ocupaban los alcaldes ordinarios. Esa posición privilegiada fue resaltada por Solórzano Pereira, quien en la *Política Indiana* afirmaba que *“El Alférez Real tiene voz y voto en el cabildo y prefiere a todos los*

²⁸⁸AGN Manuscritos de la Biblioteca Nacional 959.

Regidores dentro y fuera de él".²⁸⁹ En las ciudades donde este cargo se encontraba vacante, los regidores se turnaban para conducir las insignias reales durante las ceremonias. Si el alférez real se ausentaba de la ciudad, estaba autorizado a elegir un sustituto que portara en su nombre el pendón real.

Durante casi medio siglo no hubo alférez real propietario en el ayuntamiento porteño. El febrero de 1702, al tiempo que se sacaban a almoneda seis nuevas regidurías, también se hizo oferta de este empleo, que fue adquirido por Joseph de Arregui. Al presentarle su nombramiento al cabildo, éste remarcó que el cargo no había sido ocupado desde 1655 y exigió que le fueran reconocidas las preeminencias que correspondían al oficio. Afirmó que durante esa larga vacancia, el estandarte había sido confiado a uno de los alcaldes ordinarios, lo mismo que el asiento que estaba reservado a su empleo en las ceremonias religiosas.²⁹⁰ A lo largo de dos décadas, los alféreces reales de Buenos Aires sostuvieron un conflicto de prelación con los oficiales de la Real Hacienda. En 1708, Arregui inició un pleito contra el tesorero de la Real Hacienda, que pretendía ocupar en la catedral el asiento que le estaba reservado y prefirió la misa antes de verse obligado a aceptar un escaño menos honroso. Diecisiete años más tarde uno de sus sucesores en el empleo, Joseph González Marín, tuvo idénticos problemas con el tesorero y el contador de la Real Hacienda.²⁹¹ Esta querrela de prelaciones no fue resuelta hasta 1728, en que el Consejo de Indias reconoció el derecho del alférez real a ocupar el asiento continuo al que correspondía a los alcaldes ordinarios en los actos públicos a los que concurriese con el cabildo, mientras que los oficiales reales serían ubicados en otros menos honorables.

Otro oficio venal fue el de *alguacil mayor*. Este tenía a su cargo la seguridad de la ciudad, aunque usualmente no la recorría en persona sino que encargaba a sus agentes (conocidos como *ministros de justicia*, *alcaldes*, *tenientes de alguacil* o *alguaciles menores*) que patrullaran las calles durante la noche y garantizaban el orden público durante el día. De esa manera fue, junto con el alcalde provincial de la Santa Hermandad, uno de los oficiales del cabildo que contó con aparato propio: mientras que

²⁸⁹ Juan de SOLORZANO PEREIRA *Política Indiana* Madrid, 1776, Tomo II. [Original de 1646], Pág. 257.

²⁹⁰ Afirmaba Arregui que "*el Real Estandarte recaía en uno de los Alcaldes Ordinarios y que estos como tales se sentaban en los actos públicos donde concurría este ayuntamiento en los asientos que les tocaba*"; AECBA Serie II, Tomo I, pág. 320.

²⁹¹ Arregui "*ocasionó lance en la Santa Iglesia Catedral con el tesorero Don Pedro Fernández de Castro, a quien le quiso disputar el asiento y obligó su cordura y respeto al santo templo y por no dar escándalo a su posesión a que se saliera sin asistir a la función a que quiso concurrir*"; AGN IX-23-10-01 Guerra y Marina (1711-1765).

uno movilizaba a sus subalternos en la ciudad, el otro lo hacía en las zonas rurales. El alguacil mayor percibía un porcentaje de las multas que cobraban por contravención y se encargaba, además, del buen estado de la cárcel de la ciudad y del bienestar de los presos. Participaba de las sesiones del cabildo y, respetando el orden de prelaciones, emitía su voto después de los alcaldes ordinarios y del alférez real.

En el *extracto* del regidor Gregorio Ramos Mejía se deja entrever el poco aprecio que tuvo este oficio concejil en Buenos Aires. Debido a que no siempre se encontró quien estuviera interesado en adquirirlo en propiedad, en varias ocasiones tuvo que ser arrendado. Según explicaba dicho regidor, se estableció que quienes subastaran este empleo debían pagar 100 pesos anuales a la Real Hacienda, hasta que en 1710 Miguel de Obregón ofreció por él la suma de 300 pesos. Pero dos años más tarde, Joseph de Narriondo obtuvo el oficio en propiedad, “*con voz y voto en el Cabildo y con facultad de poner Tenientes y Alcayde, pero con obligación de dar fianzas como todos sus antecesores y de la seguridad de los presos de la cárcel*”. Narriondo lo remató en carácter de oficio perpetuo en 1050 pesos, pero en 1714 renunció a él. El alguacilazgo volvió entonces a ser arrendado, esta vez por Cristóbal de Rivadeneira, que ofreció por él 150 pesos anuales y gozó “*de asiento, voz y voto*” en el cabildo, al igual que quienes lo habían precedido. Si no fue un empleo particularmente apreciado, probablemente se debió a que no resultaba tan rentable como podía serlo en urbes populosas como Lima o México, donde el monto de las multas debía de ser cuantioso. Presumiblemente quienes lo arrendaron se interesaron en él porque a un costo relativamente bajo les otorgó el derecho a poseer una banca en el cabildo, y por la honra que les proporcionaba detentar el oficio.

Un tercer empleo venal fue el de *alcalde provincial de la Santa Hermandad*, que como los dos anteriores gozaba de voz y voto y de un asiento en el cabildo. Es el que mejor conocemos, ya que hubo en Buenos Aires quien lo ocupara en forma prácticamente ininterrumpida en los últimos dos tercios del siglo XVII y a lo largo de todo el siglo XVIII. El oficio había nacido en la península, donde los Reyes Católicos habían creado un cuerpo policíaco con relativa autonomía, la Santa Hermandad, destinado a enfrentar el bandidaje rural y las arbitrariedades de la justicia señorial. Su función era imponer el orden y combatir los delitos que se cometían en los parajes despoblados, teniéndose por tales aquellos que no llegaran a congregarse una treintena de vecinos. Dichos delitos, como podían serlo el salteamiento de caminos, el incendio de los campos o las muertes, heridas, violaciones y robos acaecidos en descampado o en

pequeños caseríos, eran tipificados por las leyes como “casos de Hermandad”. Una provisión de Carlos V de 22 de abril de 1544 permitió a los alcaldes provinciales nombrar sus propios cuadrilleros y alguaciles para que patrullasen los campos, a la vez que puso bajo sus órdenes a los agentes nombrados por el cabildo para aprehender criminales en las zonas rurales, los alcaldes de la Hermandad, a quienes eventualmente podía castigar a causa de su desobediencia o negligencia. En el Perú el cargo fue implantado en 1548 y en Nueva España en 1603. Pero además de impartir justicia, el alcalde provincial participaba con voz y voto en las deliberaciones del cabildo. Al igual que el alferazgo real y el alguacilazgo mayor, se trataba de un oficio de honra que daba a su titular el derecho de ocupar en la sala capitular uno de los asientos más honorables, lo que fue no pocas veces motivo de conflicto.

En 1631, una real cédula de Felipe IV convirtió a la alcaldía provincial en un oficio perpetuo y renunciable, y concedió a quien la detentara el derecho de llevar en público vara de justicia y espada.²⁹² En Buenos Aires, el primer alcalde provincial del que se tiene noticia fue Pedro de los Ríos, que murió antes de 1639 estando en ejercicio del oficio. Su sucesor fue Sebastián Crespo Flores, que en 1639 remató el oficio en Potosí en la suma de 1650 pesos pero no consiguió la confirmación del rey hasta casi seis años más tarde.²⁹³ Crespo Flores murió en 1664, también en ejercicio del oficio, por lo que la alcaldía provincial fue sacada de nuevo a remate, esta vez por orden del gobernador Joseph Martínez de Salazar, y adquirida en 1000 pesos por Juan del Pozo y Silva, con las mismas preeminencias de que había gozado su predecesor.²⁹⁴ Con él comenzó la rispidez entre los alcaldes provinciales y el resto de los cabildantes por asuntos de etiqueta. Pozo y Silva le disputó al alferez real del cabildo el derecho a prelación en los asientos que debían ocupar en la sala capitular, un asunto que no se acabó de dirimir hasta setenta años más tarde.²⁹⁵

Antes de morir, el tercer alcalde provincial de Buenos Aires renunció el oficio en su hijo, Alonso del Pozo y Garro, pero que sepamos, éste jamás llegó a ser admitido en el

²⁹² Reza la real cédula de 30 de mayo de 1631: “*Que perpetuamente sea provincial de la dicha ciudad, su tierra y provincia, con vara y espada, voz y voto, asiento y lugar de alcalde mayor en el cabildo de ella, que como tal provincial y juez executor de la hermandad de la dicha ciudad y su tierra y su provincia pueda poner los oficiales y cuadrilleros de ella y entender en la ejecución de la justicia de la dicha hermandad... que tenga facultad para que pueda renunciar y renuncie al dicho oficio*”. AECBA Serie I Tomo VIII Pág. 386.

²⁹³ AECBA Serie I Tomo VIII Pág. 383-384; Serie I Tomo IX Pág. 446-449.

²⁹⁴ AECBA Serie I Tomo XII Pág. 64-68.

²⁹⁵ AECBA Serie I Tomo XIII Pág. 24.

empleo.²⁹⁶ El mismo permaneció vacante entre 1697 y 1702. Este último año, como se recordará, se sacaron a subasta seis regidurías y otros cargos venales, entre ellos la alcaldía provincial, que fue adquirida Baltasar de Quintana Godoy.²⁹⁷ Pero seis años más tarde, éste sería suspendido en el cargo por no haber conseguido la confirmación del rey.²⁹⁸ En 1710, en un período de creciente turbulencia política, el gobernador Manuel de Velasco y Tejada concedió el empleo –no en propiedad sino en arrendamiento– a uno de sus acólitos, Sebastián Delgado, pero dos años más tarde ambos fueron despojados de sus cargos por el pesquisidor Juan Joseph de Mutiloa y Andueza, enviado por Felipe V a Buenos Aires para castigar a los funcionarios reales que habían contrabandeado en forma abierta con los franceses.

Entre la última década del siglo XVII y la primera del XVIII la alcaldía provincial sólo estuvo ocupada de modo intermitente y todo parece indicar que el cabildo aprovechó para avanzar por sobre las atribuciones de ese empleo y conseguir una mayor presencia en el desempeño de la justicia rural. Pero esta situación cambiaría promediando la segunda década de la nueva centuria. El general Joseph Ruiz de Arellano subastó el empleo en 1300 pesos y lo ejerció entre 1713 y 1747. Al presentar su nombramiento al cabildo, se aseguró de que las preeminencias que correspondían a su rango fueran respetadas y consiguió que le reconocieran los mismos privilegios que a los alcaldes provinciales en las ciudades de Sevilla, Lima, Guatemala y Santiago de Chile.²⁹⁹

Paso seguido, Ruiz de Arellano recuperó el control efectivo sobre la justicia rural. El 23 de enero de 1714 propuso al cabildo a Juan de la Cruz Gaytán como alguacil de la Santa Hermandad. La corporación resolvió no aceptarlo por “*no haber ejemplar de semejante nombramiento*” en Buenos Aires, pero aquel recurrió al pesquisidor Mutiloa y Andueza, que detentaba el mando político de la Provincia desde la deposición del gobernador Velasco, y consiguió su respaldo. El 31 de enero, Gaytán se volvió a presentar ante el cabildo con un título refrendado por el pesquisidor y logró que se lo confirmara como alguacil. Se lo autorizó “*para que pueda prender, correr y rondar la campaña para asegurarla de ladrones, salteadores y demás malhechores que perturban e inquietan la seguridad de los caminos, chacras y estancias*” y se le otorgó el uso de

²⁹⁶ Esta transferencia está consignada en el testamento de Pozo y Silva en AGN IX-48-8-2 *Escribanías Antiguas* f. 35.

²⁹⁷ AECBA Serie II, Tomo I, Pág. 103.

²⁹⁸ AECBA Serie II, Tomo II, Pág. 128.

²⁹⁹ AECBA Serie II, Tomo II, Págs. 682-683 y 700.

vara alta de justicia, entre otras prerrogativas.³⁰⁰ A partir de entonces, nadie se interpuso cuando el alcalde provincial nombró a otros cuadrilleros para que lo asistieran en el patrullaje de los campos.

Un último empleo concejil de carácter venal fue el de *depositario general*. Este oficial del cabildo recibía bajo custodia los bienes que se encontraban en litigio. Se trataba de un cargo lucrativo, ya que se le abonaba el 2,5% del valor de los bienes que recibía en tenencia. Como se recordará, cuando se instaló la primer Real Audiencia en Buenos Aires, ésta se ocupó de sacar a remate los empleos concejiles que se hallaban vacantes o no confirmados por el rey. Uno de ellos fue el de depositario general, que fue adquirido en 1664 por Joseph Gil Negrete en la suma de 1900 pesos. El título le otorgaba asiento, voz y voto en el cabildo.³⁰¹ Aunque le fue dificultoso encontrar fiadores abonados y conseguir la confirmación del rey, Gil Negrete participó asiduamente en las sesiones de la corporación hasta que en 1681 el gobernador Andrés de Robles lo suspendió en sus funciones a raíz de una denuncia que se le puso en un juicio de residencia.³⁰² El empleo se mantendría vacante durante tres décadas, hasta que en 1711 el mismo fue adquirido en subasta pública por el general Miguel de Riblos, que era entonces el vecino más rico de Buenos Aires. Este seguramente se percató de la rentabilidad que tendría este empleo concejil en momentos en que el gobernador Velasco se disponía a encarcelar a varios comerciantes que formaban parte de la facción rival y a incautarles sus bienes. Al asumir, Riblos solicitó a la corporación que se le concediera el asiento que seguía al del alcalde provincial de la Hermandad, que según alegó le correspondía a su rango.³⁰³ Como había sucedido con el alférez real en 1702, la prolongada vacancia de este empleo había alterado las reglas del protocolo y hubo que consultar los archivos para establecer qué lugar le tocaba ocupar en la sala del concejo.

Oficios mayores de carácter electivo: alcaldes ordinarios y síndicos procuradores

Los cabildos americanos no sólo se abocaban a resolver los asuntos comunales, sino que estaban dotados de competencia judicial. Durante la Edad Moderna, “hacer justicia” era función privativa del monarca: mediante la resolución de conflictos de intereses entre sus súbditos, éste garantizaba los derechos y deberes radicados en el orden jurídico

³⁰⁰ AECBA Serie II Tomo III, Pág. 18.

³⁰¹ AECBA Serie I, Tomo XII, Pág. 185.

³⁰² AECBA Serie I, Tomo XV, Págs. 485-486.

³⁰³ AECBA Serie II, Tomo II, Pág. 363.

y mantenía así el orden social y político establecido.³⁰⁴ Pero la inabarcable extensión de sus dominios lo movió a delegar esa función en los ayuntamientos de las ciudades, a quienes encargó que nombraran cada año a dos *alcaldes ordinarios* para que estos se ejercitaran como jueces de primera instancia en las causas civiles y criminales. La justicia municipal adquirió de esa forma un basamento corporativo, pues fue confiada a magistrados elegidos por los cabildos. La actuación de los alcaldes ordinarios se limitó al fuero común y se les vedó la intervención en asuntos tocantes a cualquier fuero especial o privilegiado. Pero la monarquía resguardó a estos alcaldes en sus funciones y prohibió a gobernadores y oidores estorbar su desempeño.

Como jueces de los tribunales inferiores, los alcaldes ordinarios estaban sometidos a las vías recursivas que garantizaban el acceso a los tribunales supremos del rey.³⁰⁵ Si un vecino quedaba insatisfecho por la resolución de un pleito podía recurrir a la Real Audiencia más inmediata (en el caso de Buenos Aires, a la de Chuquisaca en el Alto Perú) para que fuera revisada la sentencia. Además de ello, la actuación de los alcaldes no estaba exenta de supervisión, ya que estaban obligados a responder a denuncias o cuestionamientos en los juicios de residencia, de la misma manera que lo hacían otros funcionarios de la corona. En la América española, dichos alcaldes no tuvieron exclusividad en el ejercicio de la justicia ordinaria, ya que eventualmente los gobernadores actuaron como jueces de primera instancia. Se ha conjeturado que esto último pudo haberse debido a una mera contingencia –cuando un pleito, por ejemplo, era presentado ante un gobernador en vez de a un alcalde– pero también pudo responder a la gravedad de la causa litigada, por considerarse aconsejable la mediación de una autoridad superior. Se producía así una superposición de competencias múltiples, atribuidas a funcionarios que a menudo compartían una misma ciudad como sede.³⁰⁶

La Recopilación de Leyes de Indias establecía que los alcaldes ordinarios debían ser vecinos de la ciudad, contar con casa poblada en ella y ser reconocidos por sus pares como personas de honestidad y suficiencia, dándose preferencia para ocupar el cargo a los descendientes de los conquistadores y primeros pobladores. Solórzano Pereira citaba a este respecto una real cédula de 1565, por la que se ordenara que se prefiriera “a los primeros Conquistadores, Pobladores y sus hijos” y que sólo se confiriera el cargo a los

³⁰⁴ Esta concepción *jurisdiccionalista* del poder político permite entender la administración de justicia como incumbencia exclusiva del rey; Carlos GARRIGA “Orden jurídico y poder político...” Págs. 17-18.

³⁰⁵ Alejandro AGÜERO “Ciudad y poder político en el Antiguo Régimen...” Págs. 144-149.

³⁰⁶ Darío BARRIERA “La ciudad y las varas: justicia, justicias y jurisdicciones (siglos XVI-XVII)” en **Revista de Historia del Derecho** Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, 2003, N° 31, Págs. 69-95.

que fueran “*muy honrados y estimados*”.³⁰⁷ Respecto a la edad desde la cual podían ser elegidos, Santayana Bustillo observaba que “*no es necesario tenga 25 años completos, basta sea mayor de 20 y entrados los 21, para como los demás oficios*”.³⁰⁸ No podían ser deudores del fisco y ni ejercer oficios viles como el de taberneros o tenderos.³⁰⁹ A pesar de tratarse de un oficio electivo, la etiqueta concejil reservaba a los alcaldes ordinarios los escaños más honorables en la sala del cabildo, porque al detentar la vara de justicia —considerada una representación del cetro del monarca— personificaban simbólicamente al soberano. Si el gobernador o su teniente no se encontraban presentes, presidían las sesiones y encabezaban el orden de las votaciones. Precedían a los demás cabildantes en las procesiones civiles y ocupaban un asiento destacado en la iglesia durante las ceremonias religiosas.

Cada alcalde tenía a su cargo un juzgado: en Buenos Aires, las *Ordenanzas* de 1668 los obligaban a dar audiencia diariamente, permaneciendo en el estrado dos horas por la mañana y dos por la tarde. Si alguno de ellos se ausentaba de la ciudad, pasaban a reemplazarlo el alférez real o en su defecto el regidor más antiguo. Pero como es sabido, los alcaldes ordinarios no sólo impartían justicia sino que presidían los acuerdos del cabildo y eran los primeros en expresar su parecer al tratarse un asunto. Anualmente el cabildo elegía un alcalde de primer voto y otro de segundo voto: esas designaciones hacían alusión al orden en que intervenían en las votaciones.

Las leyes establecían que debía haber un *hueco* de tres años para que un vecino fuera reelecto como alcalde ordinario, pero esto a menudo no se respetaba. De acuerdo con la *Política Indiana*, si los alcaldes ordinarios se limitaban a ejercer el empleo durante un año era con el fin de que “*este honor se reparta entre más ciudadanos y los nombrados sean menos dañosos, si acaso no acertasen a salir buenos*”. La corona quiso que los ayuntamientos gozaran de entera libertad al elegir los candidatos y prohibió a virreyes y oidores asistir a las elecciones. Los gobernadores de las provincias, a quienes tocaba confirmar a los magistrados electos, estaban autorizados a concurrir, pero no podían impedirlos ni interferir en los nombramientos, y si se hallaban presentes sólo debía ser para garantizar “*que se hagan con más quietud y autoridad*”.³¹⁰

³⁰⁷ Juan de SOLORZANO PEREIRA *Política Indiana* Madrid, 1776, Tomo II. [Original de 1646], Págs. 256-258.

³⁰⁸ Lorenzo de SANTAYANA BUSTILLO *Gobierno político de los pueblos de España...* Pág. 10.

³⁰⁹ Constantino BAYLE *Los cabildos seculares en la América Española...* Págs. 106-107 y 159.

³¹⁰ Juan de SOLORZANO PEREIRA *Política Indiana* Madrid, 1776, Tomo II. [Original de 1646], Pág. 258.

Otro cargo electivo de duración anual fue el de *síndico procurador*. Los orígenes de este oficio hunden sus raíces en la romanidad: su antecesor fue el *defensor civitatis* de las ciudades romanas, quien las representó ante emperadores y reyes entre los siglos IV y VII. En los municipios españoles, se sabe de la existencia de procuradores desde fines del siglo XII: representaron a las ciudades en las cortes leonesas de 1188 y en las cortes castellanas de 1250. Podían presentar peticiones al monarca y lo que éste les contestara tenía fuerza de ley. A partir de las cortes de Valladolid de 1351, los procuradores adquirieron plena inmunidad. En 1519, Carlos V dio potestad a las ciudades americanas para nombrar procuradores para hacer presentaciones en el Consejo de Indias y pleitear en las Reales Audiencias y otros tribunales.

Al igual que los alcaldes ordinarios, el síndico procurador tenía que ser vecino de la ciudad y debía ser considerado hábil para ejercer el cargo. La Recopilación de Leyes de Indias lo convirtió en “personero del común”, es decir, en representante de los vecinos ante al cabildo. También actuó como delegado de la corporación municipal frente al gobernador y las demás autoridades locales. Sus funciones eran solicitar lo que fuera de utilidad para la ciudad o los vecinos, peticionar en su nombre contra aquello que pudiera perjudicarlos, poner demandas o comparecer en juicio ante los tribunales de cualquier fuero o jurisdicción.³¹¹

Oficios menores: los alcaldes de la Santa Hermandad

Fuera de la ciudad, el cabildo ejercía su jurisdicción sobre un vasto territorio. Contó con agentes de justicia especialmente nombrados para las zonas rurales, los *alcaldes de la Santa Hermandad*, que tenían por función imponer el orden y combatir los delitos tipificados como “casos de Hermandad”, de los que hemos ya hablado. El origen de dichas alcaldías rurales se remonta a los tiempos de los Reyes Católicos, que crearon en la península un cuerpo armado conocido como la Santa Hermandad con el propósito de acabar con el bandolerismo rural. La institución pasó a la América española, donde estos alcaldes eran habitualmente elegidos por los ayuntamientos y duraban un año en su función, aunque ésta podía ser prorrogada. En Buenos Aires los hubo casi sin interrupción entre 1606 y 1821. Hasta la década de 1750, el cabildo de esta ciudad se conformó con designar dos de ellos para toda la campaña, aunque en la segunda mitad

³¹¹ Francisco DOMINGUEZ COMPAÑY **Estudios sobre las instituciones locales hispanoamericanas** Academia Nacional de la Historia de Venezuela, Caracas, 1981, Págs. 231 y ss.

de esa centuria se vio forzado a aumentar su número. Hasta entonces, estos debieron ocuparse de múltiples asuntos en un territorio desmesuradamente extenso que iba desde el límite con Santa Fe hasta el río Salado: uno de esos alcaldes operaba al norte del río de las Conchas y el otro al sur de ese río.

Los alcaldes de la Hermandad cumplían con funciones policíacas –perseguir a cuatrerros, vagos y gente de mal vivir– a las que paulatinamente se fueron agregando funciones judiciales –en principio, resolver causas por deudas de poca cuantía y desde 1786, encabezar sumarias e iniciar testamentarias–. Como ya hemos afirmado en otra parte, aunque sus facultades fueron bastante amplias, no fue inusual que les faltara la instrucción y los conocimientos jurídicos más elementales.³¹² En las últimas décadas del siglo XVIII, el cabildo de Buenos Aires los elegiría entre los propietarios rurales, casi siempre entre los individuos que residían en la campaña y estaban emparentados con las familias de mayor raigambre en los partidos donde ejercían justicia. Pero esta figura del alcalde local-residente fue más propia de los tiempos virreinales que de las décadas que los precedieron. En el siglo XVII y la primera mitad del XVIII, se trató de individuos que alternaban su residencia entre la ciudad y el campo, pues tenían inmuebles urbanos y rurales.

Los alcaldes de la Hermandad respondían a las órdenes del cabildo cada vez que éste lo requiriera, pero su superior inmediato era un magistrado que ya hemos mencionado, el alcalde provincial de la Hermandad. A lo largo de todo el siglo XVIII, la corporación tuvo frecuentes entredichos con este oficial venal, que pretendía que los alcaldes rurales le rindieran pleitesía y sólo obedecieran a sus encargos. El conflicto recrudeció en 1715, cuando uno de ellos, Francisco Casco de Mendoza, se negó a reconocer al alcalde provincial Joseph Ruiz de Arellano como su superior y se quejó ante el ayuntamiento de que éste pretendía subordinarlo, contradiciendo la supuesta inmunidad de que gozaba su

³¹² Para las alcaldías de la Santa Hermandad, véase: Raúl FRADKIN (comp.) **El poder y la vara. Estudios sobre la justicia y la construcción del Estado en el Buenos Aires rural** Prometeo, Buenos Aires, 2007; Juan Carlos GARAVAGLIA “Alcaldes de la Hermandad et juges de paix à Buenos Aires (18^e-19^e siècle)” en **Études Rurales** Paris, enero-junio de 1999, N° 149-150; Carlos M. BIROCCO “La estructuración de un poder local en la campaña bonaerense: las alcaldías de la Santa Hermandad de los partidos de Areco y la Cañada de la Cruz (1700-1790) en Gabriela GRESORES y Carlos M. BIROCCO **Tierra, poder y sociedad en la campaña rioplatense colonial** IHES, Facultad de Ciencias Económicas, Buenos Aires, 1998, Págs. 53-95; Eduardo AZCUY AMEGHINO **La Otra Historia. Economía, Estado y Sociedad en el Río de la Plata Colonial** Imago Mundi, Buenos Aires, 2002, Págs. 309 y ss.; Silvia MALLO **La Sociedad rioplatense frente a la justicia. La transición del siglo XVIII al XIX** Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 2004; Abelardo LEVAGGI “La alcaldía de hermandad en el virreinato del Río de la Plata (1776-1810) (Casuística y jurisprudencia)” en **Revista de Estudios Histórico-Jurídicos**, Valparaíso, Chile, 2009, N° XXXI, Págs. 317-348.

empleo. Ruiz de Arellano le respondió que le debía sujeción en los casos de la Hermandad y que no había ley, estatuto ni ordenanza que lo exceptuara de obedecerlo.

El pleito que le inició Casco de Mendoza se prolongó durante casi tres años y se sumaron a él como denunciantes los alcaldes de la Hermandad nombrados en los años subsiguientes, Bernardino de Acosta, Bernardo Peñalba y Gonzalo Villoldo. La estrategia del cabildo, que respaldaba a estos en sus reclamos, fue fundarse en los usos locales, que aunque contradecían la legislación de Indias merecían en su opinión ser priorizados. Varios vecinos testimoniaron que “*de tiempo inmemorial ha sido estilo en esta ciudad que los alcaldes de la Santa Hermandad han estado exentos del Provincial de ella*” y aseguraron que quienes ejercieron ese empleo jamás habían pretendido subordinarlos. Pero en 1717, el gobernador Bruno Mauricio de Zabala sentenció que en adelante los alcaldes de la Hermandad deberían sujetarse al alcalde provincial “*en todos los casos y cosas tocantes a Hermandad, obedeciendo y ejecutando sus órdenes y mandatos*”. Como uno de ellos, Gonzalo Villoldo, se negó a aceptarlo y quiso llevar el pleito a la Real Audiencia de Chuquisaca, el gobernador se opuso a dar lugar a la apelación y en 1722 volvió a proclamarse a favor de Ruiz de Arellano.³¹³

Algunas de las funciones atribuidas a los alcaldes de la Hermandad surgen de los interrogatorios presentados en los juicios de residencia. En el del gobernador Manuel de Prado y Maldonado, llevado a cabo en 1702, los vecinos presentaron varios reclamos contra ellos. Se les preguntó si se los había visto “*correr la tierra y comarca de su jurisdicción*” y “*si por no haberlo hecho se han cometido muertes, hurtos, robos salteamientos e incendios y daños en las sementeras y chacras*”. También si se habían empeñado en perseguir a los delincuentes o habían renunciado a hacerlo “*por amor de amigos, personas poderosas y parientes*”.³¹⁴ Posiblemente se tratara de un formulismo, pero ello no quitaba que la sospecha de parcialidad estuviese siempre presente.

En 1702 los vecinos presentaron cargos contra los dos alcaldes de la Hermandad nombrados ese año. A uno de ellos, Diego García, se le imputó no haber apartado los ganados que causaban daños en los sembrados. Este explicó lo dificultoso que era conseguir la cooperación de los labradores para evitarlo:

³¹³ AGN IX-36-4-1 *Autos seguidos por el Gral. Joseph Ruiz de Arellano contra los alcaldes de la Hermandad.*

³¹⁴ AGN IX-41-09-05 *Juicio de residencia a Manuel de Prado y Maldonado.*

“Continuamente están los alcaldes de la Hermandad notificando a los vecinos retiren los ganados que tienen fuera de las sementeras por los daños que hacen en ellos, que es lo más de que se quejan, sin que por más diligencias que se hagan lo puedan conseguir ni que hagan corrales para encerrar el ganado que precisamente han de tener para el uso y manejo de las chacras, y siendo ellos los quejosos son los mismos que ocasionan este daño”.

También se culpó a García de no haber prevenido la quema de cardales y pajonales, una costumbre que era común en la campaña y que perjudicaba a los labradores. García declaró que *“hubo muchos fuegos y se quemaron algunos trigos, lo cual ocasionan muchas veces el que dichos vecinos envían sus criados a recoger el ganado y estos, sea con el vicio del tabaco sea porque se dividen para hacer leña, queman el pajonal, fomentando el fuego, [que] con el aire suele llegar a las sementeras”*. El otro alcalde de la Hermandad, Amador Fernández de Agüero, fue acusado de no haber patrullado los campos en el pago de Magdalena. Este alegó que sí lo había hecho, pero que los hacendados no se habían percatado de ello por estar siempre ausentes, *“atento que es muy ordinario el estar los sobredichos retirados en otras partes en las faenas de la campaña cogiendo vacas o haciendo sebo y grasa”*.

Las preocupaciones de los alcaldes de la Hermandad de comienzos del siglo XVIII no estuvieron muy distantes de las de sus pares de finales de esa centuria. Eso se desprende del que acaso es el cuerpo de *bandos de buen gobierno* más antiguo producido por un alcalde de la Santa Hermandad que se conserva en Buenos Aires: el que presentó en dicho juicio de residencia el capitán Antonio Lobo Sarmiento, que data de 1701.³¹⁵ Una de ellas fue combatir la presencia de *agregados* en chacras y estancias y compelerlos al trabajo. El 17 de febrero de ese año prohibió a los vecinos alojar en sus tierras *“así mozos españoles de pocas obligaciones como indios, negros y mulatos libres bien ociosos y sin quererse concertar por andarse en vida libertina, y sin apremio de personas por andar con toda libertad y soltura... porque semejantes excesos son en deservicio de Dios Nuestro Señor y en detrimento de la causa pública, pues viven de robos y latrocinios”*. Ordenó que en el término de ocho días esos criollos, indios, negros y mulatos libres se presentaran ante el alcalde ordinario a informar con qué vecino se

³¹⁵ AGN IX-41-09-05 Juicio de residencia a Manuel de Prado y Maldonado.

habían conchabado o recibirían la pena de 50 azotes y serían destinados cuatro meses a servir en las obras del fuerte de la ciudad.

Otras de sus disposiciones estuvieron relacionadas con la división entre espacios productivos. Desde los repartos de tierras efectuados por Garay existía en torno a la ciudad un cinturón agrícola, que se extendía a siete leguas a la redonda, donde quedaba prohibida la crianza de animales, a excepción de un número muy limitado de bestias de tiro para servicio de las labores de campo. En función a esta normativa, Lobo Sarmiento prohibió a los criadores del pago de las Conchas que dejaran animales sueltos y dispuso que *“todos los vecinos y moradores dueños de ganados... pasen todos sus ganados a la parte de las estancias y los saquen de entre las chacras y no consientan que se vuelvan a pasar hacia las chacras aunque para sujetarlos hayan de tenerlos debajo de pastoreo y corral”*. Cuando le llegaron noticias de que en el pago de la Costa los dueños de chacras hacían *“muchos daños en los ganados de los vecinos desjarretando, matando y alanceando bueyes, vacas, yeguas y caballos so color de que les hacen daño en las sementeras, árboles y plantas”*, dictaminó que se sacaran los animales de las tierras de chacra y se los llevara donde no sufrieran menoscabo, pudiendo conservarse unos pocos bueyes o equinos en corrales o bajo pastoreo. En esta ocasión volvió a prohibir a los vecinos que tuvieran agregados en sus chacras.

El área a controlar por sólo dos alcaldes de la Santa Hermandad era de tal extensión que desde temprano estos se vieron obligados a valerse de auxiliares. Lobo Sarmiento nombró en 1701 tres *“comisionados para que corriesen la campaña”*, uno para el pago de la Costa, otro para las Conchas y el tercero para la Matanza, a los que el cabildo agregó otro comisionado para la Magdalena. Esa misma vastedad condujo a que la zona se constituyera en objeto de superposición jurisdiccional, pues el ayuntamiento no gozó en ningún momento de derechos exclusivos en el nombramiento de funcionarios rurales, sino que en numerosas ocasiones estos partieron de autoridades centrales como el gobernador o el teniente de rey, que se arrogaron facultades para designar *jueces comisionarios* que respondieran en forma directa a sus órdenes.

Oficios menores: los mayordomos

Los mayordomos del cabildo eran los responsables de la administración de la hacienda municipal. Esta se componía de dos grandes ramos: los *propios* y los *arbitrios*. Los *propios* eran las casas y solares pertenecientes al cabildo, que generaban ingresos en

concepto de arriendo. Los *arbitrios* o *rentas* eran las percepciones, multas e impuestos recaudados por el erario municipal: entre ellos se destacaban los derechos de mojonería, romana y pregonería, los que se cobraban por el corte de leña y por el anclaje de navíos, el “cuartillo” que debían abonar algunos productos introducidos desde las Provincias Arribeñas y la licencia anual que pagaban las pulperías. Pero en Buenos Aires, la mayor parte de esos gravámenes no eran percibidos en forma directa sino que su recaudación era arrendada a terceros, por lo que los mayordomos no tenían mayor injerencia sobre ellos. Era usual, además, que el cabildo porteño “encabezara” las alcabalas, es decir, que la corporación adquiriera de la Real Hacienda el derecho a recaudarlas y dispusiera para sí de un porcentaje de las mismas. Su cobranza, empero, tampoco era confiada a los mayordomos, sino que recaía en dos “diputados” del cabildo, que unas veces eran dos regidores y otras los alcaldes ordinarios.

La tercerización de la recaudación de los principales gravámenes municipales redujo la tarea de los mayordomos, limitados a percibir los alquileres de las casas y aposentos que pertenecían al cabildo y algún otro ingreso menor. En el Buenos Aires pre-virreinal, su rol era se reducía a valerse de los pocos fondos que colectaba y otros que se le proporcionaban para financiar las funciones del ceremonial público y las diversiones que la corporación municipal ofrecía a los vecinos, así como para mantener en buen estado los inmuebles de propiedad concejil, entre los cuales se encontraban la casa capitular y la cárcel. Durante el juicio de residencia del gobernador Agustín de Robles, el mayordomo Francisco de la Fuente reaccionó contra esas limitaciones y levantó una queja contra la persona que había arrendado el derecho de mojonería porque no había dado cuenta al cabildo de lo que había recaudado: detrás de ello se escondía su pretensión de que recuperar el manejo directo sobre los derechos de mojonería, romana y pregonería. Pero el ayuntamiento no respaldó sus reclamos, aunque reconoció que la labor de los mayordomos había quedado prácticamente reducida a administrar los gastos de la corporación:

“...nunca ha estado puesto en estilo el que la administración y cobranza de los derechos y rentas de la ciudad corran por mano de sus mayordomos... respecto de que los que se componen del arrendamiento de las Reales Alcabalas los han recaudado los diputados del cuerpo de este cabildo [que] se nombran todos los años, y las que resultan de la mojonería, romana y pregonería los arrendadores en quienes se rematan por cuatro y cinco años, y que a lo que han asistido

siempre los mayordomos es sólo a la cobranza de los libramientos que se le dan para cobrar los gastos de las festividades, de la dotación del cabildo y del regocijo de los toros que se lidian en obsequio de la celebridad del Señor San Martín su Patrón y de los reparos que se ofrecen hacer en los calabozos de la cárcel y otras obras públicas de su cargo, y lo que en esta forma entra en su poder es de lo que dan cuenta, acabado el año de su nombramiento, a los diputados que para este efecto se nombran en el cabildo, la cual ajustada se pasa al Libro de los Propios...”

Los mayordomos llevaban la contabilidad de entradas y salidas en libros manuales, que aún se conservan y son la principal fuente documental con que contamos para conocer las finanzas municipales. Al finalizar cada año debían rendir cuentas de su administración al ayuntamiento, que nombraba a dos regidores para que las revisaran y propusieran la aprobación o el rechazo de las mismas. No era inusual que al concluir el ejercicio anual quedaran numerosas partidas sin cobrar. El gobernador Alonso Juan de Valdés Inclán advirtió a los miembros del cabildo que debían cobrarse todas las deudas que los vecinos tuvieran con la hacienda de la ciudad, y aunque lo absolvió de las que quedaban pendientes, dispuso que en el caso de que se acarrearán nuevas deudas impagas los mayordomos responderían con sus propios bienes.³¹⁶

La singularidad de los estatutos y de la composición del cabildo

Bernardo Ares denominó acertadamente a las *Ordenanzas* municipales “la médula del ordenamiento jurídico local”. Pero aunque se pretendió por medio de éstas regular los aspectos más relevantes de la vida político-administrativa y socioeconómica local, no eran más que una porción del corpus normativo que regía a una ciudad.³¹⁷ No podríamos considerarlas en sí mismas los estatutos de una república concejil, ya que estos se componían también de los privilegios que fueran concedidos a la ciudad por la corona en la forma de *reales cédulas*, lo mismo que de las *reales provisiones* que le extendían las Reales Audiencias o los virreyes para que fueran aplicadas en su jurisdicción territorial. A ellos se sumaban los *bandos de buen gobierno*, dictados por el gobernador local o por el mismo ayuntamiento, que estaban destinados a complementar los capítulos de las *Ordenanzas* municipales o a reglamentar aspectos no contemplados

³¹⁶ AGN IX-47-8-13 *Propios del Cabildo*

³¹⁷ Juan Manuel DE BERNARDO ARES “Las Ordenanzas municipales...” Pág. 19.

por éstas. La primera característica remarcable de este corpus, como puede apreciarse, era la multiplicidad de actores que participaban en su redacción. Desde los representantes del monarca a escala imperial y regional hasta el mismo gobierno concejil, estos contribuyeron a estatuir las normas que conformaban el derecho municipal local.

La segunda característica sobresaliente de dichos estatutos era su singularidad. Eran distintivos de cada ciudad, pues resultaban de la yuxtaposición de las normas redactadas por su cabildo y de las que le eran impuestas por el monarca o sus representantes. El variable número de prerrogativas y exenciones de que gozaba una ciudad dependía del lugar que ésta ocupaba en la escala jerárquica imperial. Las ciudades marginales no estaban en la misma posición que las capitales virreinales o las principales urbes comerciales americanas para obtener privilegios o resistir imposiciones de la corona. Por tal razón, los estatutos de una ciudad se fueron conformando a partir de la tensión que se producía entre el impulso centralizador de la monarquía y la capacidad de negociación de las oligarquías locales.

La misma composición de la planta concejil fue el resultado de esas transacciones entre la oligarquía dirigente y los representantes de la monarquía. Era el soberano quien establecía el número de regidores que debía haber en un cabildo y quien aprobaba sus títulos y los de otros oficiales venales, como el alférez real o el alcalde provincial de la Hermandad. Las Reales Audiencias podían otorgarles confirmaciones provisorias, a la espera de que el Consejo de Indias resolviese estampar en sus nombramientos la firma del rey, pero ese engorroso trámite, casi imposible de sustanciar si no se contaba con un representante en la Corte que lo agilizara, a veces no llegaba a concretarse en los seis años que se les otorgaba para llevar a cabo esa tramitación. Las razones de esa dilación no siempre eran puramente burocráticas. En el caso de Buenos Aires, esas demoras obedecieron casi siempre a los frecuentes altercados entre el cabildo y los gobernadores, que llevaron a estos últimos a interferir en el proceso de aprobación de esos títulos y en algunas ocasiones sólo alcanzaron a dirimirse muchos años más tarde en la Corte de Madrid.

Durante el primer siglo de existencia de Buenos Aires, el acceso a los cargos por medio de la venalidad sólo contribuyó a colmar la sala del cabildo de Buenos Aires en dos oportunidades: a mediados de la década de 1620 y a finales de la década de 1660. Pese a que esporádicamente la corona se resolvió a incrementar el número de regidurías, éstas fueron quedando vacantes por falta de confirmación o por muerte de sus titulares,

por lo cual las funciones esenciales del ayuntamiento terminarían recayendo en manos de oficiales electivos, acompañados de un número cada vez más reducido de oficiales venales. Pero a comienzos del siglo XVIII esa tendencia comenzó a revertir, en un principio porque los gobernadores se apropiaron de la facultad de nombrar regidores y otros oficios vendibles y cubrieron las vacancias que se producían, y luego porque la corona les arrebató esa facultad y se la otorgó al cabildo, que siguió haciendo uso de ella durante cuatro décadas.

De esa forma, durante la primera mitad de esa centuria el número de oficiales venales en el ayuntamiento porteño tendió a crecer y alcanzó un número nunca conocido en los tiempos precedentes. Pero como veremos en el capítulo que sigue, ese acrecentamiento de la planta de oficiales concejiles no coincidió necesariamente con su participación efectiva en el cabildo. El comportamiento de los oficiales venales difirió en este punto del que ostentaron los oficiales electivos, cuyo número permaneció invariable a lo largo de todo el período. Mientras que estos últimos solían concurrir puntualmente a las sesiones, la asistencia y participación de aquellos distó de guardar proporción con la cantidad de asientos que ocuparon.

Para orientarnos al respecto, tomaremos en cuenta la concurrencia de los cabildantes a las sesiones en dos años testimoniales. En 1701, poco antes de que se aplicara la real cédula que otorgaba seis nuevas regidurías a la ciudad, los oficiales electivos se constituían en el 38% de los asistentes a los acuerdos. Ello es fácilmente explicable, pues entonces no quedaba más que sólo un regidor en ejercicio de sus funciones. Pero en 1725, el año en que la corporación trató el mayor número de asuntos, los oficiales electivos fueron el 39,5% de los concurrentes a las sesiones, un porcentaje no muy diferente del anterior, a pesar de que la planta del cabildo se había visto engrosada en los años previos con más de una docena de oficiales venales. La elección de este último año como ejemplo, como se comprenderá más adelante, podrá ser tildada de capciosa, pero nos mueve a plantearnos algunas cuestiones que juzgamos relevantes. ¿A qué se debieron esos desniveles en la asistencia? ¿Aquellos que detentaban los empleos venales los adquirieron solamente por su carga honorífica y no por un especial interés en administrar los asuntos comunales? ¿O mediaron, en cambio, otros factores que no estaban necesariamente ligados a la composición de la planta concejil y que resulta necesario indagar? Estas preguntas sólo encontrarán una respuesta cuando estudiemos al cabildo porteño en funciones y revelemos qué incidentes políticos lograron interferir en su normal funcionamiento.

EL CABILDO EN FUNCIONES: LOS INDICES DE ACTIVIDAD Y PRESENTISMO Y LA ROTACIÓN DE LOS EMPLEOS CONCEJILES

La actividad del cabildo de Buenos Aires

En el capítulo anterior hemos resaltado el valor de los estatutos de una ciudad como fuente histórica. Este conjunto de disposiciones legales –que según dijimos no sólo estaba compuesto por las *Ordenanzas* redactadas por el ayuntamiento sino también por las reales cédulas, bandos y otras normas emanadas de los funcionarios de la corona o de la misma corporación– es uno de los repertorios documentales que nos ofrece mayores oportunidades de acercarnos a los intereses y propósitos de la dirigencia concejil, ya que se constituían en el dispositivo jurídico de que se valían éstas para reglar la convivencia en el ámbito urbano. Pero de su lectura surge forzosamente una pregunta: ¿hasta qué punto eran respetados? La misma sólo puede ser respondida mediante el sondeo de otra fuente de calibre similar: las actas capitulares. Es gracias a estas últimas que hoy pueden conocerse los alcances reales de dichos estatutos –no era inusual que el mismo ayuntamiento pasara por alto las normas establecidas cuando las circunstancias así lo requerían– al igual que el grado de injerencia que tenían dichas oligarquías en la administración de los asuntos locales.³¹⁸

Los *libros de acuerdos* del cabildo de Buenos Aires, que se conservan completos a partir de 1605, nos permitirán adentrarnos en esas cuestiones. En primer lugar, podremos revisar la periodicidad de las sesiones y establecer mediante indicadores relativamente fiables cómo fueron variando los niveles de actividad anual y de asistencia. A lo largo del período abordado en esta tesis, que se extiende entre enero de 1690 y diciembre de 1726, esta corporación celebró 1975 *acuerdos*, a los cuales asistieron una parte o la totalidad de sus miembros, y en ocasiones el gobernador o su lugarteniente. Pero no siempre se contaba con una agenda concreta de temas a tratar y en 293 ocasiones los concurrentes retornaron a sus hogares en forma inmediata, dejando constancia de que no había asuntos puntuales que resolver. Esas sesiones interrumpidas

³¹⁸ M.C. Belmonte LÓPEZ HUICI, M. CUESTA MARTÍNEZ, M. I. GARCÍA CANO y L. POZAS POVEDA “Las actas capitulares como fuente para la historia urbana” en *En la España medieval* Madrid, 1987, N° 10, Págs. 39-68.

por falta de temario se constituyeron en un nada despreciable 10,5% de los acuerdos. De ese modo, en los treinta y siete años seleccionados, el número de consistorios en que los cabildantes se abocaron al tratamiento efectivo de los asuntos comunales se redujo a 1682.

Al indagar los niveles de actividad de la corporación, no hemos de perder de vista esas ocasiones en que los cabildantes concurrían a la sala capitular por mera formalidad y luego se retiraban del recinto sin tratar asunto alguno. Hubo años en que estas sesiones sin actividad, que hemos dado en llamar sesiones “pasivas”, llegaron a sobrepasar el tercio de los consistorios. En contraposición con ellas, hemos denominado sesiones “activas” a aquellas en que se trataron uno o más asuntos. La frecuencia de las sesiones “pasivas” aumentó al promediar el gobierno de Agustín de Robles, entre 1694 y 1696, y aunque tendió a decaer a finales del siglo XVII, repuntó durante los gobiernos de Alonso de Valdés Inclán y Manuel de Velasco y Tejada, particularmente entre 1703 y 1711. Los gobernadores que acabamos de mencionar avanzaron sobre los asuntos de competencia municipal y despojaron al cabildo de una parte de los recursos materiales con que contaba para sustentarse, por lo que no resulta casual que la actividad de éste decayera. Con posterioridad a dichos gobernadores, sólo se ha detectado una fuerte presencia de sesiones “pasivas” en 1715, un año que estuvo signado por cierta inestabilidad política, en que los capitulares parecen haber moderado su actividad como una manera de preservarse de posibles conflictos. Pero durante la primera fase del gobierno de Bruno Mauricio de Zabala, que se extendió entre 1717 y 1726, el ayuntamiento porteño intentó recuperar su autarquía en la resolución de los asuntos comunales al tiempo que aumentaba la planta de oficiales concejiles gracias a la incorporación de nuevos regidores, y ello se vio expresado en la ausencia casi absoluta de sesiones “pasivas”.

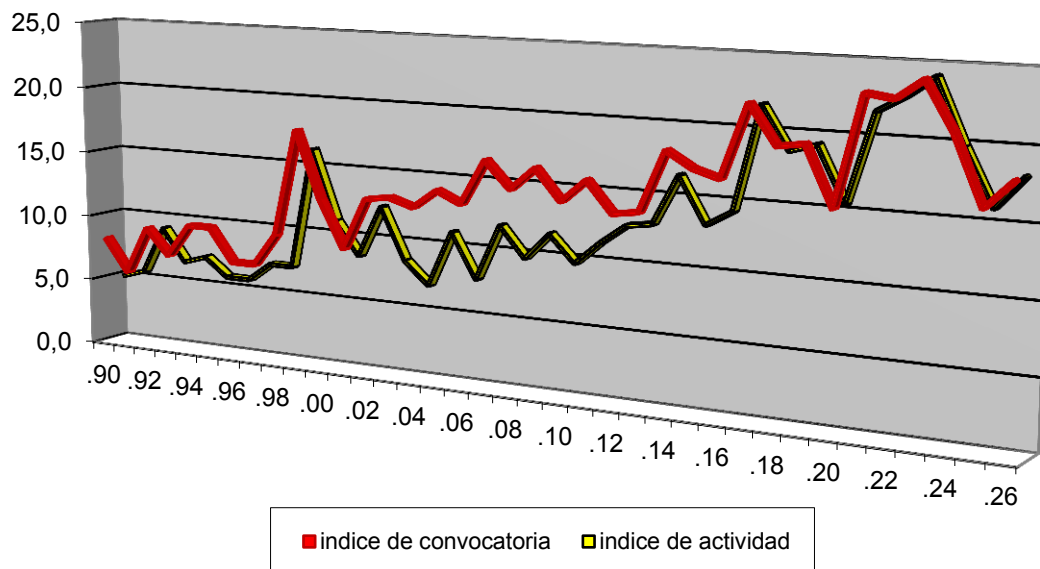
Otro indicador de la actividad del cabildo porteño fue la frecuencia con la que éste sesionaba. El artículo 9no de las *Ordenanzas* de 1668 establecía que el ayuntamiento debía reunirse por lo menos una vez a la semana. En teoría, sus miembros debían acudir todos los lunes a las 9 de la mañana; si no lo hacían, sus faltas serían apuntadas en el libro de acuerdos y se les haría cargo de ellas durante los juicios de residencia. En caso de fijarse otros días de reunión, el portero del cabildo anunciaría el inicio de la sesión tocando la campana durante un cuarto de hora o acudiría a las casas de los cabildantes para citarlos. Pero hubo quien considerara que una única sesión semanal resultaba insuficiente y en el juicio de residencia del gobernador Manuel de Prado y Maldonado

se intentó levantar cargos contra los alcaldes ordinarios por no haber convocado por lo menos dos cada semana. Bernardino Antonio de Acosta, que había sido alcalde en 1700, señaló al tribunal residenciante que las *Ordenanzas* de 1668 establecían la obligatoriedad de una única sesión semanal y que ésta incluso podía ser considerada excesiva por el escaso volumen de los asuntos que se debían tratar. Arguyó Acosta que semejante frecuencia sólo se justificaba “*en ciudades donde la concurrencia de negocios son muchos, pero en una ciudad donde son muy singulares los que se ofrecen, con un acuerdo cada mes era bastante para su conferencia y despacho*”.³¹⁹

No contamos con testimonios posteriores sobre el número de sesiones que los cabildantes consideraron apropiadas para resolver los asuntos comunales. No obstante, la tendencia al alza que se produjo en la frecuencia con que se reunió la corporación, sobre todo en la segunda y tercer década del siglo XVIII, revela que el crecimiento de la población, las dificultades en el abastecimiento de la ciudad y la desaparición del principal recurso con que se contaba –el ganado cimarrón– fueron problemáticas de complicada resolución que movieron al ayuntamiento a sesionar con una mayor asiduidad. Para constatar esa tendencia se han establecido dos índices. El primero, denominado *índice de convocatoria*, se define como el porcentaje de días en que el cabildo fue llamado a reunirse cada año; el segundo, el *índice de actividad*, representa el porcentaje anual de sesiones “activas”. Las curvas del Gráfico 1 expresan esos índices a lo largo del período analizado.

³¹⁹ AGN IX-41-09-05 *Juicio de residencia a Manuel de Prado y Maldonado*.

Gráfico 1 – índices de convocatoria y de actividad (1690-1726)



Fuente de los datos: AECBA, varios tomos.

A partir de los datos con que se confeccionó el Gráfico anterior es posible analizar la actividad de la corporación determinando etapas. En los últimos años del siglo XVII, se convocó a un promedio de 35 sesiones anuales, pero sólo hubo actividad en 28 de ellas. El índice de convocatoria para el período 1690-1700 fue de 9,6% y el índice de actividad de 7,8%. Al pasar a la primera década de la siguiente centuria, nos encontramos con que el promedio sesiones anuales ascendió a 50, aunque no se constató actividad más que en 35 de ellas. El índice de convocatoria para el período 1701-1710 fue de 13,8% y el índice de actividad de 9,7%. Estas dos décadas estuvieron dominadas por la presencia de gobernadores venales (Robles, Maldonado, Valdés Inclán y Velasco) que tuvieron una actitud francamente intrusiva en los asuntos de índole municipal y que, a excepción del segundo de ellos, mantuvieron vínculos ríspidos con el cabildo. En el período 1690-1700, el ayuntamiento porteño había sido convocado a reunirse cada 11 días promedio, mientras que en el período 1701-1710 lo sería cada 7,4 días. Pero aunque la convocatoria se volvió más frecuente, el número de sesiones “pasivas” fue claramente en aumento: el cabildo aceptó la formalidad de congregarse cada semana,

pero optó con mayor frecuencia por disolverse sin tratar asunto alguno. Hubo años en que la elusión de la actividad por medio de las sesiones “pasivas” llegó a porcentajes altísimos: el 40% de los consistorios en 1690, el 42,9 en 1704 y el 46,8 en 1706. Estos dos últimos años, que pueden servir para ejemplificar esta tendencia, fueron de intensa conflictividad entre los cabildantes y el gobernador Valdés Inclán, lo que indica que aquellos se replegaron para evitar la fricción. No obstante, guardaron la formalidad de asistir a los consistorios para no ser multados en los juicios de residencia.

En las siguientes etapas, las tendencias que constatamos para las décadas anteriores se revirtieron. En la segunda década del siglo XVIII, se convocó a un promedio de 63 sesiones anuales y hubo actividad en 57 de ellas. El índice de convocatoria para el período 1711-1720 resultó ser de 17,2 y el índice de actividad de 15,5. En los últimos seis años analizados en esta tesis, finalmente, el promedio sesiones anuales fue de 46 y hubo actividad en 45 de ellas. El índice de convocatoria para el período 1721-1726 fue de 20,8 y el índice de actividad de 20,4. Para analizar estos años, debe tenerse en cuenta que el cambio de política que tuvo la corona en relación con el Río de la Plata: Felipe V, como se recordará, envió en 1712 al pesquisidor Mutiloa para deponer a Velasco y le encargó que por medio de un conjunto de reales cédulas le restituyese al cabildo en sus facultades y los recursos que le habían sido quitados. Esto último, sumado al aumento de miembros de la planta capitular, favoreció una suba drástica en el índice de convocatoria, a la vez que las sesiones “pasivas” descendieron a un mínimo casi imperceptible. Entre 1711 y 1726 los consistorios se celebraron, en promedio, cada 5,5 días, aunque en los primeros tres años de la década de 1720 llegaron a convocarse cada 4 días. No faltaron momentos de alta conflictividad, pero con excepción de 1715, los cabildantes los enfrentaron en el seno de la corporación en vez de disolverse. Esto nos muestra que se encontraban en una posición más sólida para resistir como cuerpo político las arbitrariedades de los gobernadores.

Las fluctuaciones en la asistencia de los cabildantes no deben ser siempre atribuidas a contingencias de tipo político sino también a motivos de otra índole. Las epidemias, por ejemplo, no incidieron en ellas. Las actas del cabildo mencionan casos de “peste” en 1695, 1710 y 1713, pero el único episodio epidémico de gravedad que se produjo en el período estudiado ocurrió entre 1717 y 1718 –al parecer se trató de peste bubónica y afectó a todo el extremo meridional de Sudamérica–. No hubo alteración en el normal funcionamiento de los tribunales ordinarios ni en la convocatoria a sesionar del ayuntamiento, ni se registraron casos de enfermedad entre los cabildantes que afectaran

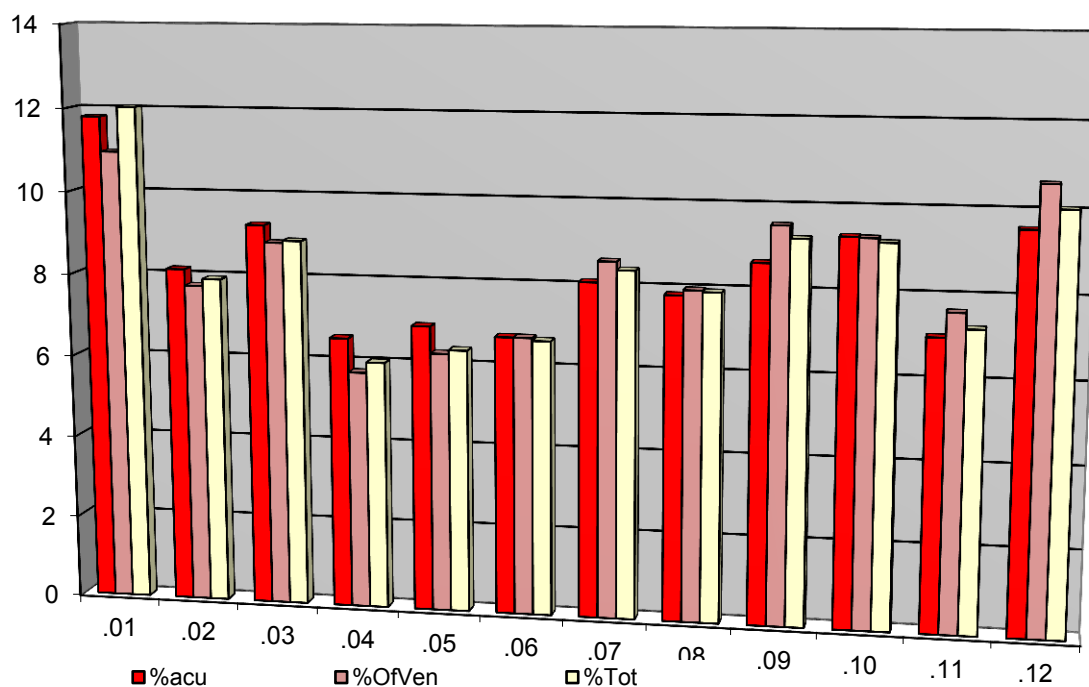
su asistencia. Los eventos climáticos, en cambio, parecen haber tenido una incidencia más marcada en la actividad o el presentismo. Las actas no omiten mencionarlos: a comienzos de abril de 1704, por ejemplo, las sesiones debieron ser suspendidas por las fuertes lluvias que se padecieron, y lo mismo sucedió en junio de 1719. La circunstancia de que la mayor parte de los cabildantes viviera en un radio de cinco cuadras en torno al edificio del cabildo debería haber contribuido a que la asistencia de sus miembros se viera escasamente afectada, pero la existencia de lodazales en las calles y la falta de veredas y pasos empedrados por donde transitar afectó su concurrencia, con más razón cuando se requería que asistiesen vestidos con decencia y pulcritud. Se observa claramente que los meses de menor asistencia resultaron ser los del otoño, caracterizados en Buenos Aires por su abundancia de precipitaciones. En cambio, los meses de invierno, por lo general fríos y secos, estuvieron entre los más concurridos.

Lo que sí tuvo una fuerte incidencia en la actividad de la corporación fueron las ocupaciones de sus miembros, en especial el manejo de sus haciendas de campo, que los movió a abandonar esporádicamente la ciudad. En las actas del cabildo abundan las referencias a cabildantes que se excusaban de asistir a las sesiones para supervisar la cosecha en sus chacras o hacer una visita a sus estancias. Ese fue el principal motivo que esgrimieron para ausentarse, seguido por la enfermedad, el servicio a la corona y el luto por la muerte de un familiar. No resulta casual que en noviembre y febrero detectemos una menor concurrencia que en otros meses de la primavera y el verano: en noviembre se herraban las mulas y se las preparaba para enviarlas a los mercados andinos; en febrero, cuando ya estaba asegurada la cosecha de trigo, visitaban sus chacras para supervisar el traslado del grano a Buenos Aires y cobrar en semilla los arrendamientos. No obstante, también debe tenerse en cuenta que en noviembre se celebraba la fiesta del patrono de la ciudad, San Martín de Tours, y que el cabildo estaba a cargo de los festejos. Estos, que se celebraban en la Plaza Mayor, podían llegar a durar una semana y obligar a la suspensión de las sesiones.

En el Gráfico 2 puede observarse el efecto de la estacionalidad en la actividad del cabildo y la concurrencia de sus miembros. Allí puede constatar el porcentaje de sesiones que hubo en cada mes del año, lo mismo que la manera en que se repartió mensualmente la asistencia de los cabildantes, tomados estos en conjunto, o bien considerando específicamente la de los oficiales venales. Los tres indicadores coinciden en señalar los meses de diciembre y enero como de mayor concurrencia, y los de abril, mayo y junio, seguidos por febrero y noviembre, como los de concurrencia menor.

Todo parece indicar que los cabildantes, que acudían en pleno a las sesiones para la defensa de sus intereses facciosos, tendían a dispersarse cuando eran llamados a concentrarse en sus negocios personales, llegando esto último a afectar la asiduidad con que se reunía la corporación.

Gráfico 2 – Estacionalidad en la actividad y la concurrencia (1690-1726)



Referencias – Acu: Porcentaje mensual de sesiones; Of T: asistencia mensual promedio de la totalidad de los cabildantes; Of V: asistencia mensual promedio de los oficiales venales.

Fuente de los datos: AECBA, varios tomos.

La asistencia de los cabildantes a las sesiones

En el ayuntamiento porteño hubo flexibilidad al aplicar las normas en materia de asistencia. En el período que analizamos, quienes se ausentaron repetidas veces a los acuerdos nunca fueron amonestados con firmeza a causa de ello; se les destinó, a lo sumo, alguna vaga advertencia sobre su obligación a concurrir. Entre los oficiales concejiles electivos, sólo los alcaldes ordinarios estaban obligados a asistir a los consistorios y fueron los que evidenciaron mayor puntualidad en asistir a las sesiones. Lo usual era que otros oficiales electivos como los alcaldes de la Hermandad o los mayordomos, que desempeñaban sus tareas fuera de la sala capitular, solamente

acudieran a recibirse de sus cargos; fuera de ello, rara vez el cabildo les requirió que se presentasen a informar sobre un asunto en concreto.

Tampoco estaba obligado a asistir el síndico procurador, pero su papel de defensor de la ciudad lo llevó a hacerlo con cierta regularidad. De hecho, se trató del único oficial, electivo o venal, cuya presencia en el concejo crecería significativamente a lo largo del período que analizamos. Entre 1690 y 1708, su asistencia se mantuvo por debajo del 10% de las sesiones, pero ello se revirtió a partir de los últimos años del gobierno de Velasco. Entre comienzos de la década de 1710 y mediados de la de 1720, la tendencia ascendente se hizo más acusada y su asistencia superó en algunos años el 60% de las sesiones. Tras la pesquisa de Mutiloa, el cabildo respaldó calurosamente la libertad de intervención de los procuradores, reconociéndole la facultad de dirigirse a los tribunales superiores, tanto a dicha Real Audiencia como a los de la península.³²⁰ Esa libertad, empero, en 1717 sería objeto de discusiones, al debatir los cabildantes si un procurador podía poner pleitos contra el mismo ayuntamiento, sin que faltase quien sostuviera que eso era factible si lo hacía en defensa del bien común.³²¹ La intensa actividad de los procuradores en las décadas de 1710 y 1720 se focalizó en dos graves problemas que afectaron a la vecindad: las dificultades en el abastecimiento de artículos básicos y la declinación del ganado cimarrón en las pampas, que condujo a la corporación a reglamentar las matanzas de reses en la Banda Oriental, donde todavía abundaba.

Entre 1690 y 1726, los procuradores asistieron al 23,2% de los consistorios. Los alcaldes ordinarios, en cambio, estuvieron presentes en el 93,9% de los mismos. Tanto por motivos simbólicos –representaban a la persona del rey en el ayuntamiento– como por razones operativas –les estaba asignada la conducción de los consistorios– resultaba inconcebible que la corporación sesionase sin la presencia de por lo menos uno de los alcaldes ordinarios. No obstante ello, ocasionalmente alguno se ausentó durante un período relativamente extenso. En 1690, a los pocos meses de haber sido elegido alcalde de segundo voto, Francisco de Arroyo fue presa de delirios demenciales y debió ser recluido en su casa durante casi seis meses; curiosamente, no se tomaron medidas para que fuera suplantado y se siguió sesionando con la sola asistencia del otro alcalde. Algo parecido sucedió en 1710, en que el alcalde de segundo voto, Juan Maciel del Águila, faltó repetidas veces a causa de una enfermedad. Pero lo usual era que se le designara un reemplazo. En 1696, Vicente Pérez de Otálora, alcalde de primer voto, murió en

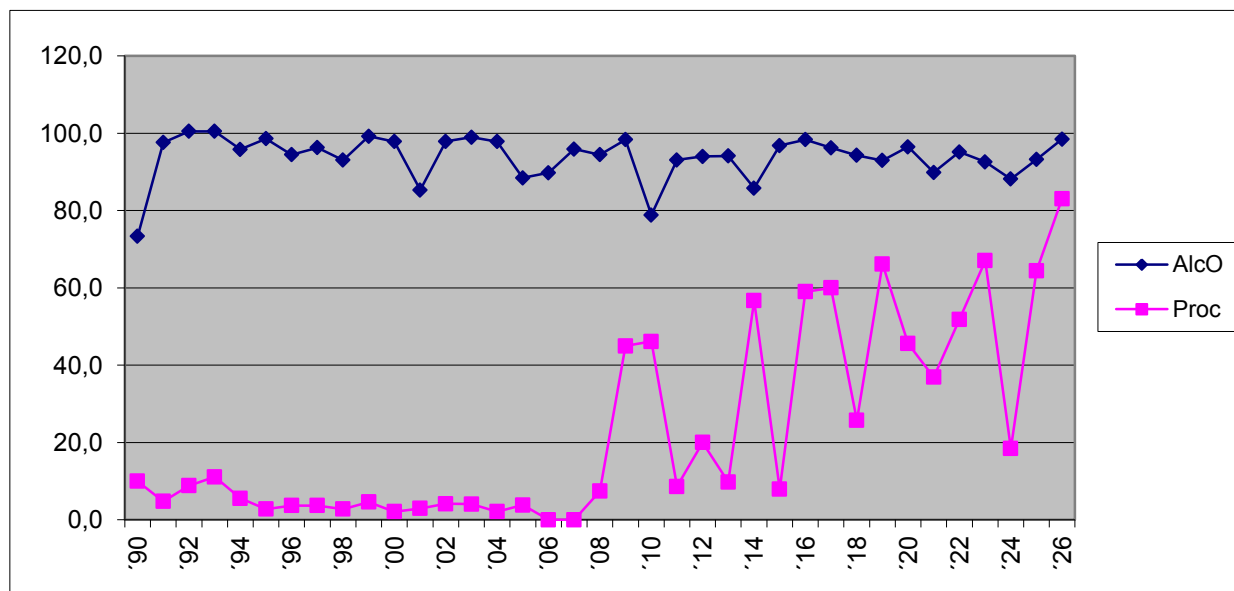
³²⁰ AECBA Serie II, Tomo III, págs. 616-617.

³²¹ AECBA Serie II, Tomo III, pág. 487.

ejercicio del empleo y su lugar fue ocupado por el alcalde de segundo voto, a la vez que un regidor ocupaba el de este último. En 1701 y 1705 la situación se repitió: el lugar del alcalde fallecido fue ocupado respectivamente por un regidor y por el alférez real. Cuando las ausencias se hacían más o menos prolongadas, se otorgaba al alférez real la alcaldía vacante, y en su defecto al regidor más antiguo, respetando el estricto orden de prelación establecido por las *Ordenanzas* de 1668.

Tan sólo en 8 de los 37 años estudiados, el presentismo de los alcaldes ordinarios se mantuvo por debajo del 90%, y en apenas 2 años si situó por debajo del 80%. Pero no solamente la enfermedad provocó que este empleo se mantuviera temporalmente vacante. Cuando en 1714 la muerte del gobernador Alonso de Arce y Soria condujo a una situación de acefalía, el alcalde de primer voto, Pablo de la Cuadra, fue llamado a desempeñar interinamente el mando político de la Provincia y no acudió durante algunas semanas al cabildo “*por estar embarazado en cosas de gobierno*”. Pero se trató de una circunstancia extraordinaria, que no volvió a repetirse y entre fines de la década de 1710 y mediados de la de 1720, la asistencia de los alcaldes ordinarios se mantuvo por encima del promedio anual del período.

Gráfico 3 – Asistencia de los alcaldes ordinarios y los síndicos procuradores (1690-1726)

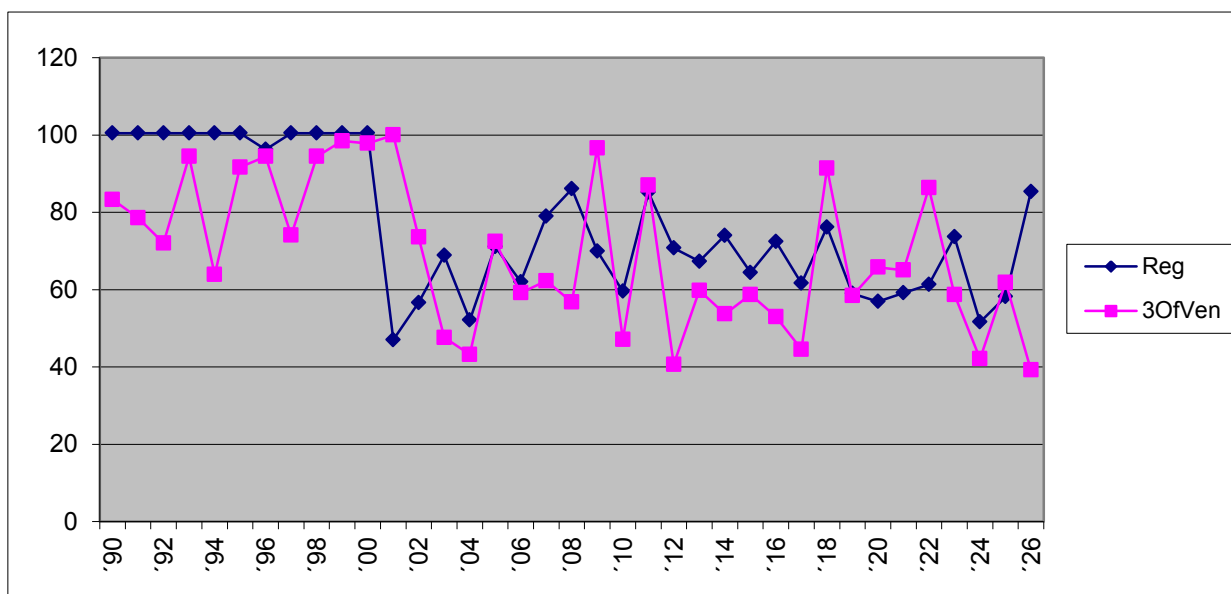


Fuente de los datos: AECBA, varios tomos.

En el caso de los oficios concejiles de carácter venal, resulta más difícil analizar la problemática de la concurrencia a los consistorios. Los regidores tenían un régimen de asistencias bastante flexible que les permitía ausentarse hasta por ocho meses al año. Para los demás oficiales venales las normas eran más laxas aún, ya que aunque tenían asiento en la sala capitular no tenían un régimen de asistencia formalmente establecido. Por lo general, unos y otros sólo solicitaban licencias cuando debían ausentarse durante algunos meses para concretar negocios en las provincias del interior o presentar reclamos a la Real Audiencia de Chuquisaca. Pero la mayor parte de sus inasistencias no se produjo cuando abandonaron la ciudad sino mientras permanecieron en ella.

Para analizar la asistencia de los oficiales venales a los consistorios, se ha dividido a estos en dos grupos: por un lado, los regidores; por otro, los tres oficiales cuyos empleos gozaron de mayor continuidad en el período estudiado, que fueron el alguacil mayor, el alférez real y el alcalde provincial de la Hermandad. No se ha incluido en el conjunto a un cuarto oficial venal, el depositario general, porque este empleo estuvo representado en forma muy discontinua y su incorporación a la muestra hubiera distorsionado los resultados. En el caso de los regidores, su número creció en forma exponencial: partiendo de un único regidor en la década de 1690, se llegó a superar la docena en 1721. Pero a pesar de que la convocatoria a sesionar se hizo más frecuente y que la corporación tuvo ante sí problemas complejos que resolver, se mostraron esquivos a concurrir cotidianamente. Entre 1690 y 1700 el cabildo contó con un único regidor, el cual tuvo prácticamente asistencia perfecta a lo largo de esos once años. Entre 1701 y 1717, se sumaron al ayuntamiento otros seis regidores, cuya asistencia anual promedio fue del 67%. Entre 1718 y 1726, con un número de regidores que osciló entre los seis y los trece, su asistencia a las mismas apenas descendió al 64%. Ello indica que entre 1701 y 1726, la asistencia anual promedio de los regidores fue equivalente a los dos tercios de las sesiones celebradas. Esa tendencia puede observarse en el Gráfico 4.

Gráfico 4 – Asistencia de los regidores y de otros tres oficiales venales (1690-1726)



Nota: Los tres oficiales venales considerados en la segunda curva son el alcalde provincial de la Hermandad, el alférez real y el alguacil mayor

Fuente de los datos: AECBA, varios tomos.

El segundo grupo de oficiales venales cuya asistencia analizaremos se compone, como dijimos anteriormente, del alférez real, el alguacil mayor y el alcalde provincial de la Hermandad. Al detentar el empleo concejil de mayor honra, tocaba al alférez real recibir la vara de la justicia y preceder las sesiones cuando uno de los alcaldes ordinarios se veía obligado a ausentarse en forma prolongada, tal como ocurrió en 1702, 1705, 1722, 1723, 1724 y 1725. Quizá en razón a esa preeminencia, los alféreces reales fueron los oficiales concejiles que mayores roces tuvieron con las autoridades centrales y con el resto de los miembros de la corporación: de los tres vecinos que detentaron el cargo en el período estudiado, dos de ellos –Joseph de Arregui, que además de alférez real fue regidor, y Gregorio de Avellaneda– sufrieron la cárcel por enfrentar al gobernador de turno, mientras que el tercero –Joseph González Marín– fue combatido desde su investidura por el resto de los miembros del ayuntamiento, que no lo consideraban digno de ejercerlo. Pero el alférez real podía ausentarse por largos períodos sin resentir el normal funcionamiento del cabildo: si se hallaba ausente cuando una alcaldía ordinaria quedaba vacante, era el regidor decano quien recibía la vara de justicia. En rigor a la verdad, en sólo 12 de los 37 años que estudiamos, quienes detentaron este empleo concurrieron a más de 10 sesiones anuales. Los negocios de Arregui con las

provincias andinas (a comienzos del siglo XVIII fue uno de los mayores tratantes de mulas del virreinato del Perú) lo movieron a abandonar Buenos Aires durante largas temporadas. Quien asistió con mayor puntualidad a los consistorios fue González Marín, que asumió el empleo en diciembre de 1720 y estuvo presente en los cinco años siguientes en el 55% de los mismos, aunque en 1723 también se alejó durante algunos meses de la ciudad para realizar un viaje al Perú.

El alguacil mayor fue el oficial venal que marcó mejor su presencia en el cabildo a lo largo del período. Debido a que debía garantizar el orden en la ciudad no le hubiera sido posible alejarse por demasiado tiempo de ésta. Su labor, como hemos dicho en otra parte, estaba estrechamente ligada a las funciones judiciales de los alcaldes ordinarios: debía asegurarse de que se cumplieran las sentencias dictadas por estos y estaba a cargo de la cárcel del cabildo. Muchos de los asuntos que se trataban en el ayuntamiento afectaban en forma directa su labor, razón por la que se requirió que estuviese presente cada vez que se sesionaba. Esa imprescindibilidad hizo que en 1693, cuando el alguacil mayor Miguel de Obregón obtuvo una licencia para conducir una tropa de mulas al Perú, el gobernador Agustín de Robles le designara de inmediato un sustituto. Mientras que los alféreces reales sólo asistieron al 21% de las sesiones celebradas, los alguaciles mayores concurren al 85,5% de las mismas.

Los alcaldes provinciales, por el contrario, no cumplían con un rol esencial en el seno del ayuntamiento, a pesar de contar con voz y voto en él. A lo largo del período estudiado asistieron al 37,2% de las sesiones celebradas. Esa irregularidad en la asistencia podría ser atribuida a que una de sus funciones era salir a la campaña a perseguir a cuatreros y bandidos, pero se sabe que en la práctica rara vez abandonaron la ciudad, por lo menos durante el período que estudiamos. Baltasar de Quintana Godoy, que además de ser regidor ejerció este empleo entre 1702 y 1708, fue acusado de no haber salido nunca a recorrer los campos. Tampoco tenemos noticias de que lo haya hecho Joseph Ruiz de Arellano, que lo sucedió en el cargo entre 1713 y 1747, pues depositó la vigilancia de los parajes rurales en sus alguaciles y subordinados. Además de desempeñar ese oficio, en 1715 Ruiz de Arellano fue nombrado lugarteniente por el gobernador Baltasar García Ros y en 1720 recibió comisión del virrey del Perú para residenciar a los gobernadores anteriores a éste. Cargado de ocupaciones, vio dificultada su normal asistencia al cabildo y las actas dieron a menudo testimonio de ello.

El comportamiento de los alguaciles mayores, alféreces reales y alcaldes provinciales muestra en este punto bastante semejanza con el de los regidores. Durante los treinta y

siete años estudiados en esta tesis, la tendencia a asistir a las sesiones fue en declive. Pero si nos centramos en las primeras décadas del siglo XVIII observaremos que su nivel de asistencia a los consistorios tendió a amesetarse, manteniéndose en un promedio anual cercano al 60%, como se pudo apreciar en el Gráfico 4. Recurriendo a la misma periodización que consideramos válida para los regidores, constatamos que aquellos oficiales venales concurrieron entre 1690 y 1700 al 85,8% de las sesiones, entre 1701 y 1717 al 63,2 % y entre 1718 y 1726 al 62,2%. La corporación se mostró igual de complaciente con estos que con los regidores, concediéndoles las licencias que solicitaron para ausentarse de las sesiones durante parte del año y absteniéndose de cuestionar toda inasistencia motivada por asuntos personales. Ni siquiera cuando se produjeron violentas luchas de facciones en el seno del cabildo porteño se recurriría al control sobre la asistencia para desautorizar a los opositores. La recurrente falta de concurrencia a los acuerdos de muchos de los cabildantes jamás fue utilizada para poner en tela de juicio su derecho a ocupar un asiento en la sala capitular y si alguna vez se hizo un llamado de atención sobre ello, éste no pasó de ser retórico. Ciertamente, pudieron valerse de artilugios mucho más eficaces para sacar del ruedo a sus contrincantes.

El comportamiento de los regidores a lo largo de un año

Para observar más de cerca el comportamiento de los regidores y analizar con mayor detenimiento los motivos de sus ausencias, hemos escogido un año: 1721. Lo hemos elegido porque se trató de un año sin turbulencias políticas, en que el cabildo contó con una planta estable que incluía inicialmente a doce regidores, aunque a fines del mismo incorporó a un decimotercero. Uno de ellos, Amador Fernández de Agüero, desempeñó entonces (a pesar de que estaba contraindicado por las leyes) el oficio de alcalde ordinario de primer voto. A lo largo de dicho año, dos regidores renunciaron a sus empleos, lo que permitió que otros dos ocuparan los asientos dejados por los anteriores. En 1721 se celebraron 84 sesiones. En 5 de ellas no hubo tratamiento de asuntos, es decir, fueron sesiones “pasivas”. Se trató de un año con alta convocatoria a reunión, que se encuentra entre los que tuvieron los más altos índices de actividad del período estudiado.

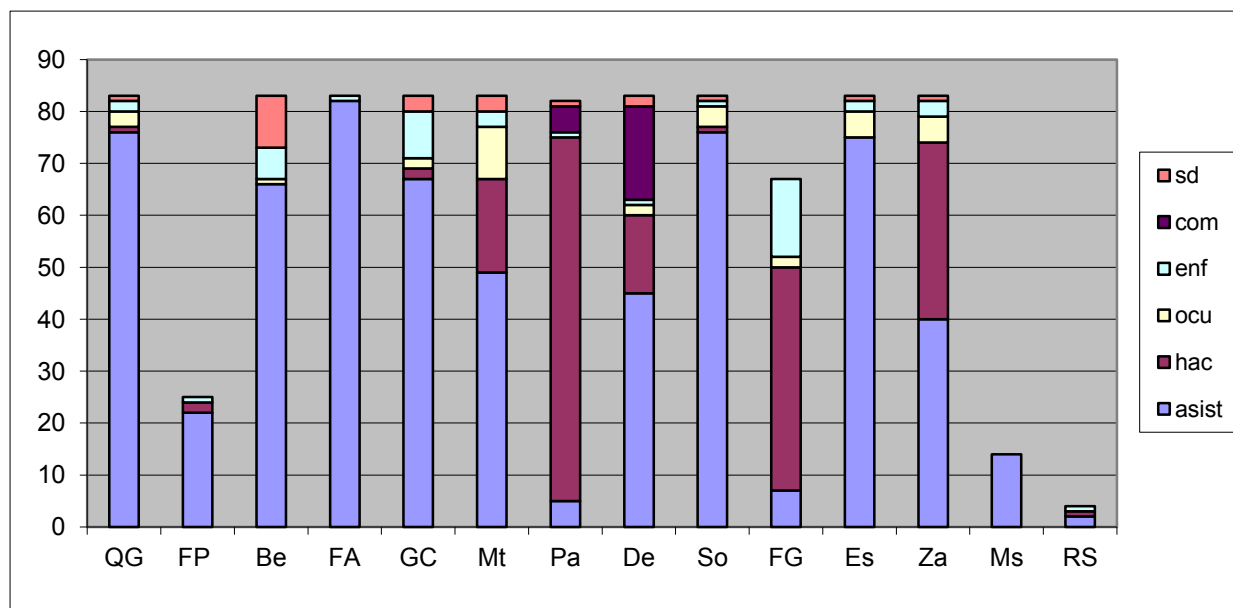
El gobernador Bruno Mauricio de Zavala mantenía por entonces buenas relaciones con la corporación y encargó a uno de sus miembros, el regidor Sebastián Delgado, que

se trasladara a la Banda Oriental y le enviara un informe sobre el estado de los campos. El ganado cimarrón se agotaba en las pampas y los vecinos de Buenos Aires reclamaban como propios los que se hallaban en la campaña oriental, que todavía eran abundantes pero le eran disputados por los vaqueadores portugueses y los indios tapes bajados de las Misiones. Delgado estuvo ausente por ese motivo en 15 sesiones del cabildo. Otro regidor, Juan de la Palma, se vio obligado a faltar a otras 5 sesiones, enviado por Zavala a conferenciar con los indios minuanes para que no estorbaran las faenas de los vaqueadores porteños y santafecinos.

Se confiaron otras comisiones a los regidores –recoger limosnas para los presos de la cárcel, por ejemplo– pero tales encargos no acarrearón más que una porción insignificante de ausencias. La mayor parte de sus inasistencias se originó en sus actividades personales, entre las cuales se destacó la necesidad de visitar sus chacras y estancias (60%). Uno de los regidores, el referido Juan de la Palma, pidió una licencia de 8 meses para retirarse a sus haciendas de campo, mientras que otros dos, Francisco Fernández Guillén y Juan de Zamudio, estuvieron ausentes por la misma razón en 43 y 34 sesiones respectivamente. Otros motivos que esgrimieron para ausentarse fueron la enfermedad (15%), las ocupaciones y negocios privados (15%) y las ya referidas comisiones especiales (7,3%), mientras que el resto de las inasistencias no tuvo causa justificada o explícita (7,3%). Pero el pronunciado índice de ausentismo, equivalente a un tercio de las sesiones, no generó reproches entre los cabildantes. Antes bien, hallamos que en abril se disculpó a quienes faltaron a causa de las grandes lluvias, mientras que en otros meses se aprecia que en los días con poca concurrencia se trataron temas de escasa relevancia o se envió a casa a los presentes sin tratar tema alguno.

En el Gráfico 5 observamos el comportamiento individual de cada regidor. Puede verse cómo algunos se ausentaron gran parte del año sólo para hacerse cargo de sus haciendas, mientras que otros faltaron al ayuntamiento por razones más variadas. Un tercer grupo fue el que ostentó altos niveles de asistencia.

Gráfico 5 – Presentismo y causas de las inasistencias en 1721



Referencias: los regidores considerados fueron Baltasar Quintana Godoy (QG), Juan Bautista Fernández Parra (FP), Lucas Belorado (Be), Amador Fernández de Agüero (FA), Pablo González de la Cuadra (GC), Bartolomé Montaner (Mt), Juan de la Palma (Pa), Sebastián Delgado (De), Matías Solana (So), Francisco Fernández Guillén (FG), Miguel Gerónimo Esparza (Es), Juan de Zamudio (Za), Tomás Monsalve (Ms) y Miguel Rodríguez de Sosa (RS). Se expresan en las barras los días asistidos sobre un total de 84 sesiones (asist), lo mismo que las inasistencias por haberse retirado a sus haciendas (hac), por otras ocupaciones personales (ocu), por enfermedad (enf), por comisión (com) o aquellas de las que no se tienen datos de sus causas (sd).

Fuente de los datos: AECBA, varios tomos.

Ana Guerrero Mayllo, que ha analizado la concurrencia de los regidores al ayuntamiento de la villa de Madrid, ha constatado lo mismo: que algunos de ellos ostentaron un alto nivel de presentismo, mientras que en otros se aprecian bajos niveles de asistencia. Esta autora afirma que los primeros mostraron un mayor interés en los asuntos municipales que los segundos y lo atribuye a su perfil socio-ocupacional. A su entender, los individuos vinculados a actividades mercantiles y los pertenecientes a la oligarquía rentista arraigada desde antiguo en esa villa habrían estado más ligados a los asuntos tratados en los consistorios y fue por ello que se hallaron presentes con mayor frecuencia.³²² Aunque no dudamos que los intereses personales de los cabildantes pudieron haber motivado su ingreso y permanencia en el cabildo, creemos que ese factor no alcanza para explicar los niveles de asistencia. La posibilidad de no concurrir a las sesiones descansaba, según creemos, en que podían apoyarse en una trama de alianzas que les garantizaba que sus intereses no se vieran atacados durante su ausencia.

³²² Ana GUERRERO MAYLLO *El gobierno municipal de Madrid...* Pág. 166.

Un regidor podía ausentarse temporalmente, pero verse mientras tanto representado por sus aliados en el cabildo, a la vez que podía ser forzado por estos a retornar a su banca en momentos de crisis o de elección de nuevos cabildantes.

De hecho, el año de 1721 formó parte de una coyuntura política de escasa conflictividad, lo cual permitió que varios de los regidores pudieran abandonar sus asientos en la sala capitular para dedicarse con tranquilidad a sus negocios personales. Durante ese año los regidores, que habían logrado colocar a uno de ellos en el principal empleo electivo, la alcaldía ordinaria de primer voto, a pesar de que las Leyes de Indias lo prohibían, parecieron actuar corporativamente, tendiendo a resolver los asuntos en forma mancomunada y evitando enfrentamientos con sus pares. A lo largo del mismo, sólo cinco de ellos (entre ellos el que detentaba la alcaldía ordinaria) evidenciaron altos niveles de asistencia, mostrándose tolerantes hacia el resto, que se alternó para estar presente. Sólo en los meses en que se prepararon y consumaron las elecciones de cargos anuales –enero y diciembre– la concurrencia repuntó y se verificaron las pocas sesiones en que la totalidad de los regidores estuvo presente.

La intervención de los gobernadores en el cabildo

El ayuntamiento porteño nunca gozó de la suficiente autonomía para escabullirse del control de las autoridades centrales. El hecho de que cabildo y gobernadores tuvieran la misma ciudad por residencia hizo que las intromisiones de estos últimos fueran más que frecuentes y causó fuertes roces entre ambos, al punto de que el colegio de regidores sufrió la expulsión de varios de sus miembros en tres oportunidades. Uno de estos incidentes se produjo en 1708, cuando el gobernador Velasco suspendió al alferez real y a tres regidores, para después colocar en esos cargos a sus adláteres. Un segundo episodio sobrevino en julio de 1712, cuando el pesquisidor Juan Joseph de Mutiloa y Andueza cesó a los alcaldes ordinarios, convocó a nuevas elecciones y revocó los títulos de dos regidores para alejar de él a los acólitos del depuesto gobernador Velasco. Otro evento similar acaeció en 1724, cuando durante el gobierno de Bruno Mauricio de Zavala los alcaldes ordinarios, cinco regidores y el alcalde provincial de la Hermandad fueron suspendidos en sus cargos por conformar un frente de oposición contra su lugarteniente, Antonio de Larrazábal.

Estos sucesos, aunque excepcionales, resultan sintomáticos del complejo vínculo que sostuvo el cabildo porteño con los gobernadores. Las visitas que estos últimos

realizaron a la sala capitular fueron bastante esporádicas. Por lo general, se encontraron presentes en ella el día de las elecciones de oficios concejiles –que se celebraban cada 1° de enero– o con motivo de algún asunto que concitaba su interés. El grueso de la comunicación se canalizaba por escrito o bien a través de diputaciones que el cabildo enviaba al gobernador para llevarle propuestas. Pero el medio escrito era el que primaba: si los diputados regresaban de la entrevista con el gobernador con una contestación, en un corto plazo ésta debía ser convalidada por un auto firmado por éste y enviado al cabildo por medio de su escribano.

La presencia física de los gobernadores en el ayuntamiento porteño fue un poco más corriente antes de la pesquisa de Mutiloa pero a la larga se redujo a lo estrictamente requerido por el protocolo. El que se hizo presente en forma más habitual en las sesiones fue Velasco, que estuvo en 56 de ellas en los cuatro años de su gobierno. Agustín de Robles asistió a 27 sesiones en los nueve años que le tocó gobernar, Prado y Maldonado a 11 sesiones en dos años, Valdés Inclán a 13 en seis años, Mutiloa a 11 en dos años y García Ros a 7 en dos años. Alonso de Arce y Soria, cuyo gobierno duró apenas un par de meses, sólo se presentó en el cabildo como gobernador una vez, cuando se recibió del cargo. Bruno Mauricio de Zavala, por último, presenció las sesiones en 20 oportunidades entre 1717 y 1726.

El promedio de visitas que hizo Valdés Inclán al cabildo, a comienzos del siglo XVIII, fue semejante al de Zavala, que accedería al gobierno quince años más tarde: el equivalente a dos escasas sesiones por año. Pero eso no los hizo menos intrusivos en los asuntos municipales. Valdés Inclán, que pronto se encontró con que una facción de cabildantes encabezada por el alférez real Joseph de Arregui lo resistía sostuvo con la corporación frecuentes entredichos, pero en casi todas las ocasiones estos se dieron por la vía escrita. En junio de 1705, cuando Arregui fue llamado a suplir al alcalde ordinario Gerónimo de Gaete, víctima de una enfermedad prolongada, aquel lo prohibió por medio de un auto, arguyendo que el paso de la vara de justicia a manos del alférez real no se justificaba, ya que no se trataba de muerte ni de ausencia.³²³ Sostuvo un pleito con la corporación porque ésta se oponía a que los alcaldes ordinarios oficiaran también como tenientes de gobernador, y aunque la Real Audiencia de Chuquisaca falló a favor del cabildo porteño, Valdés Inclán la desobedeció. Sin embargo, no se presentó en la sala capitular a confrontar a sus adversarios, sino que se limitó a declarar nulos los

³²³ AECBA Serie II, Tomo I, Pág. 345.

acuerdos en que el ayuntamiento había proclamado su obediencia a la provisión de la Real Audiencia.³²⁴ Otro conflicto se suscitó cuando luego de la muerte de dos regidores, Valdés Inclán sacó a remate los cargos y designó a otros dos. El procurador del cabildo lo acusó por medio de una presentación a la Real Audiencia de usurpar una competencia que pertenecía a la corporación. El gobernador, que no pudo oponerse a que recurriera a esa instancia judicial, lo calificó como “impertinente” en otro escrito.³²⁵

Velasco, sucesor de Valdés Inclán, tuvo un promedio de 14 visitas anuales al cabildo, llegando en 1711 a presentarse en 21 ocasiones. Nos encontramos aquí frente a dos estilos distintos. Valdés Inclán no se preocupó por incrementar el número de sus aliados en el ayuntamiento y por ello prescindió de presentarse en la sala capitular. Velasco, en cambio, logró dividir a los cabildantes, incorporó a su camarilla a una de las facciones en pugna y combatió ferozmente a la opositora. Tenía modos intimidantes, y a poco de llegar a Buenos Aires se ganó la enemistad de la facción encabezada por Arregui al suspender a éste en sus funciones, lo mismo que a tres de los regidores, bajo el pretexto de que no habían sido confirmados por el rey en sus empleos. Aunque el virrey del Perú y la Real Audiencia interfirieron y le ordenaron restituirlos en sus cargos, él los desobedeció, y cuando el cabildo reaccionó contra esto, amenazó con multarlo y lo acusó de desobediencia.³²⁶

Pero Velasco no rehuía a confrontar a sus adversarios. La víspera de navidad de 1708 estuvo presente en el cabildo cuando se suspendió al alférez real y a los regidores; unos días más tarde se celebraron nuevas elecciones y él también estaba allí, cuestionando la designación de Francisco de Tagle Bracho como alcalde ordinario y haciendo ver a los presentes que éste era indigno del empleo por las imputaciones que tenía puestas en el juicio de residencia del gobernador anterior.³²⁷ También se sentó en la sala de consistorios cuando se leyó la provisión del virrey que ordenaba que se devolvieran sus empleos a los regidores suspendidos y declaró que no la aceptaría. Velasco no sólo acudió a causa de las rencillas políticas, sino que se presentó para asegurarse que se le reconocería el control sobre la provisión de cueros a los navíos negreros franceses, con la que esperaba enriquecerse a expensas de la vecindad.³²⁸ Y presidió la sesión en que puso el estandarte real en manos del alcalde ordinario de primer voto, luego de expulsar

³²⁴ AECBA Serie II, Tomo I, pág. 680 y ss.

³²⁵ AGN IX-20-2-3 *Cabildo de Buenos Aires, Procuradores (1604-1821)*

³²⁶ AECBA Serie II, Tomo II, pág. 140 y ss. y 439.

³²⁷ AECBA Serie II, Tomo II, pág. 131.

³²⁸ AECBA Serie II, Tomo III, pág. 338.

al alferez real Arregui, y más tarde se complació en recibir personalmente en la sala capitular a los regidores que reemplazaron a los que hizo suspender, pertenecientes todos ellos a su camarilla.³²⁹

El estilo controversial de Velasco tuvo poco en común con el de Bruno Mauricio de Zavala, que se hizo cargo del gobierno una década más tarde, en julio de 1717. Este último, como afirmamos, sólo concurrió al cabildo un promedio de dos veces por año. La comparación entre ambos no expresa un progresivo relajamiento del control gubernamental sobre la corporación, sino que nos pone ante dos formas distintas de vincularse con ésta. Mientras que Velasco mostró propensión a entrometerse en las disputas intestinas del ayuntamiento e incluso las favoreció, Zavala sostuvo una actitud más distante, pero no por ello menos amenazadora. Este gobernador también dispensó sus favores a quienes formaban parte en su entorno, pero éste no incluía al cabildo, y cuando un grupo de cabildantes reaccionó contra sus imposiciones no dudó en aplastar su resistencia. En septiembre de 1717 le ordenó que agilizara la cobertura de dos regidurías que habían quedado vacantes, y cuando unos meses más tarde los dos nuevos regidores se presentaron en la corporación, cuestionó el nombramiento de uno de ellos, Sebastián Delgado, y retrasó su recibimiento.³³⁰ Por razones que no conocemos bien, ese mismo año se presentó en la sala capitular para despojar al alferez real Gregorio Avellaneda del estandarte real y depositarlo en manos del alcalde de segundo voto, y más tarde lo envió a prisión. En 1722 haría encarcelar a otro oficial concejil, el alguacil mayor Francisco Díaz Cubas.³³¹ En varias oportunidades apercibió al cabildo por considerar que se había extralimitado en sus facultades y llegó a amenazar a sus miembros con privar de su oficio a quienes lo desobedecieran.³³² No obstante, se cuidó de respetar sus prerrogativas y en julio de 1718 ordenó por medio de un auto que se guardara la costumbre de reservar los mejores vinos a los cabildantes en los tiempos de carestía.³³³

El momento más virulento de la relación entre Zavala y el cabildo de Buenos Aires se produjo entre 1724 y 1725, cuando aquel se vio obligado a dejar la ciudad, primero para expulsar a los portugueses de la bahía de Montevideo y luego para sofocar la rebelión de los comuneros en Asunción. Su ausencia ocasionó un fuerte enfrentamiento entre el

³²⁹ AECBA Serie II, Tomo III, pág. 362.

³³⁰ AECBA Serie II, Tomo III, pág. 501.

³³¹ AECBA Serie II, Tomo III, págs. 566-567 y 655-658

³³² El 7 de junio de 1719, un auto de Zavala mandaba a los cabildantes que “*no se otorguen poderes apud acta pena de privación de oficio*” (sic).

³³³ AECBA Serie II, Tomo III, pág. 579.

cabildo y el teniente de gobernador, Antonio Larrazábal. Este último, como se recordará, se atrevió a concurrir a las ceremonias religiosas portando un bastón (símbolo del poder militar, que no le había sido delegado) y no con una vara, como hubiese correspondido. En la semana santa de 1724, los cabildantes se negaron a asistir en cuerpo a la misa para no sentarse en la iglesia junto con Larrazábal, desobedeciendo con ello una carta del gobernador en que se les ordenaba que no provocaran un “disturbio”. El teniente de gobernador castigó su transgresión expulsando a cinco de los regidores y al alcalde provincial de la Hermandad, y luego de ordenar a los alcaldes ordinarios que le hicieran entrega de sus varas de justicia, convocó a nuevas elecciones y los suplantó.³³⁴ Cuando Zavala retornó a Buenos Aires, respaldó a su lugarteniente, condenando al cabildo a que sesionara durante los dos siguientes años con una planta reducida, de la que había sido expurgada la mitad de sus oficiales venales.

La figura del *teniente de gobernador* no era nueva: varios de los gobernadores que precedieron a Zavala se valieron de ella para verse representados en el cabildo. Para entonces, ya hacía algunas décadas que en Buenos Aires no había un *corregidor*. En otras ciudades de la América española, la corona había designado corregidores para que representara los intereses del soberano en el cabildo, con el que intentó contrapesar el poder de las oligarquías locales. Su presencia fue vista en todas partes como una intromisión del ascendente poder real y sus actos fueron juzgados con frecuencia como arbitrarios, pues no era inusual que coartaran los propósitos de esas oligarquías para imponer los propios. En nuestro continente, muchos de los corregidores fueron antiguos militares de carrera o funcionarios con una abultada trayectoria que lograron que la corona recompensara sus servicios con un cargo que, gracias a la corrupción, podía convertirse en sumamente lucrativo. En Buenos Aires, sin embargo, se trató de un oficio que tuvo breve duración, pues apenas perduró mientras funcionó la primera Real Audiencia de esta ciudad, entre 1663 y 1672, y gozó aquí de los mismos privilegios y facultades que se le habían otorgado en Santiago de Chile. Pero desde fines de 1672, quien ejercía este cargo comenzó a ser designado como teniente de gobernador y el corregimiento jamás volvió a ser mencionado.

De esta manera, las funciones de un oficio acabaron siendo absorbidas por el otro, aunque estos distaban de ser equivalentes. A diferencia de los corregidores, el teniente de gobernador no debía su nombramiento al rey, sino al gobernador. Durante el siglo

³³⁴ AECBA Serie II, Tomo V, págs. 298 y 310.

XVII se lo conoció como *Lugarteniente General y Capitán a Guerra*, ya que teóricamente quedaba a cargo de las defensas de la ciudad si éste último se veía forzado a abandonarla. En Buenos Aires, empero, la situación era más compleja, pues desde 1680 se hallaba a la cabeza de la guarnición un comisario militar, el *Cabo y Gobernador de la Caballería del Presidio*, en quien se depositaba el mando militar en casos de muerte o alejamiento del gobernador. Por tal razón, las funciones del teniente se redujeron a secundar a este último en el gobierno político de la ciudad: fiscalizaba en su nombre las entradas y salidas de carretas y visitaba las tiendas y las pulperías para que sus propietarios se compusieran con la Real Hacienda. Ejercía asimismo funciones delegadas de justicia: cuando las ocupaciones del gobernador no le permitían desempeñarse como juez de apelaciones de los tribunales ordinarios, esa tarea recaía teóricamente en su teniente, aunque en Buenos Aires muy rara vez se los vio cumpliéndola.³³⁵ Estaba facultado, por último, para intervenir en asuntos vinculados con la población indígena local: examinaba las contratas de los indios libres y garantizaba que en la reducción de Santa Cruz de los Quilmes la mita se observara “*en la conformidad que se ha estilado*”, con el fin de que los mitayos que pasaban a la ciudad asistieran con preferencia a las viudas y vecinos pobres.

El protocolo capitular asignaba al teniente de gobernador un importante papel: el de convocar a las sesiones del concejo. Según rezaba el título que se otorgó a uno de ellos, debía “*llamar y juntar [a] los capitulares y regidores para hacer los acuerdos y cabildo ordinarios y particulares para tratar las cosas tocantes al servicio de Su Majestad y bien común de esta República*”.³³⁶ El artículo 19 de las Ordenanzas de 1668 prohibía que se sesionase sin la asistencia del teniente de gobernador, pues debía garantizar “*que en ningún cabildo haya disensiones*”, y en caso de que estuviese enfermo o ausente debía dejarse razón de ello en el libro de acuerdos. El citado *extracto* de Gregorio Ramos Mejía destacaba la importancia de este empleo como nexo necesario entre el gobernador y la corporación, pero observaba que no en todas las ocasiones llegó a haberlos y que no fue raro que uno de los alcaldes ordinarios fuese designado para desempeñar el cargo.³³⁷

³³⁵ En 1707 Valdés Inclán nombró teniente al alcalde Luis Pesoa de Figueroa e interrogó a varios vecinos si éste había “*ejercido algunos actos de la jurisdicción privativa que toca al Teniente General como son conocer en causas de grado de apelación de los Alcaldes Ordinarios*”. Los testimonios coincidieron en que no habían visto a ningún teniente de gobernador desempeñar el rol de juez de apelaciones. AGN IX-42-2-7 *Real Audiencia, sobre una información*.

³³⁶ AECBA Serie I, Tomo XVII, Págs. 368-370.

³³⁷ AGN IX-19-3-2 *Archivo del Cabildo de Buenos Aires (1780-1783)*.

No todos los gobernadores se hicieron representar por sus tenientes en el cabildo de Buenos Aires. En 1690, último año del gobierno de Joseph de Herrera y Sotomayor, su teniente, Pedro de Vera y Aragón, presenció 28 de las 30 sesiones que se celebraron. Esos altísimos niveles de concurrencia no volverían a repetirse. En 1693 su sucesor en el gobierno, Agustín de Robles, nombró teniente al licenciado Francisco Bustillo, un abogado de la Real Audiencia de Chuquisaca. En julio de ese año, el cabildo denunció a este sujeto por la vida escandalosa que llevaba –se rumoreaba que convivía con una concubina mulata y había sido visto frecuentando durante la noche a mujeres de dudosa reputación en los arrabales de la ciudad– y notificó a Robles de su poca aplicación al empleo, pidiéndole que lo exonerase del cargo. En enero de 1694 el gobernador lo reemplazó por uno de los alcaldes ordinarios, Baltasar de Quintana Godoy. De allí en más, tanto Robles como sus sucesores Prado y Maldonado y Valdés Inclán depositaron el ejercicio de este empleo en los alcaldes ordinarios de primer voto. Estos últimos se vieron tan sobrecargados de trabajo que en 1707 el cabildo tuvo que solicitar a la Real Audiencia de Chuquisaca que prohibiera que se los volviera a designar tenientes, y consiguió que ésta fallara a su favor.³³⁸ Dejó de haber en Buenos Aires tenientes de gobernador hasta 1715, en que el gobernador García Ros, reflatando la antigua costumbre, confirió el empleo al alcalde ordinario Tomás de Arroyo, bajo el fundamento de que había sido “*estilo practicable que hagan este oficio los alcaldes de Primer Voto*”.³³⁹ Pero al año siguiente el cargo recayó en un oficial venal, el alcalde provincial Joseph Ruiz de Arellano.³⁴⁰ Bruno Mauricio de Zavala, en contraposición con los anteriores, escogió como lugarteniente a un personaje de su entorno que era ajeno al cabildo, Antonio de Larrazábal, algo que no ocurría desde hacía más de tres décadas. Este tuvo un respetable nivel de concurrencia al ayuntamiento, pues acudió en 28 ocasiones en 1724 y en 17 en 1725, equivalentes al 38,8 y 28,8% de las sesiones celebradas en esos años, todas ellas mientras Zavala se encontraba fuera de la ciudad.

La rotación de los oficios venales: investiduras, suspensiones y renunciaciones

Las “purgas” que sufrió el cabildo de Buenos Aires en marzo de 1724, al igual que la que había padecido en diciembre de 1708, deben ser consideradas eventos de excepción

³³⁸ AGN IX-42-2-7 *Real Audiencia, sobre una información*.

³³⁹ AECBA Serie II, Tomo III, Págs. 204-205.

³⁴⁰ AECBA Serie II, Tomo III, Págs. 272-273.

en la vida de esta corporación. Lo usual era que la eliminación de los regidores se produjera por “goteo”, es decir, mediante la suspensión de uno o dos de ellos cuando se sacaba a relucir que sus títulos no habían recibido la confirmación del rey en un plazo de seis años. No fue casual que la utilización de este recurso, perfectamente legal, soliera retrasarse hasta que promediaba el mes de diciembre, cuando se vislumbraba el momento de las elecciones. La suspensión de uno o más regidores puede ser vista como como una herramienta utilizada por el gobernador o por la facción apadrinada por éste para desbaratar alianzas o manipular las elecciones de alcaldes ordinarios, procuradores y mayordomos e imponerse en el ayuntamiento.

Los ejemplos no faltan: diciembre solía ser un mes en que se producían altas y bajas en la planta del cabildo porteño. Cuando en 1708, Velasco suspendió al alcalde provincial Baltasar de Quintana Godoy y a los regidores Hernando de Rivera Mondragón y Juan Pacheco de Santa Cruz, la fecha escogida fue el 24 de diciembre. Al año siguiente, tras sacar a almoneda esos cargos, eligió el 29 de diciembre para que el nuevo alcalde provincial Sebastián Delgado y los nuevos regidores a Joseph Rubín de Celis y Cristóbal de Rivadeneira se recibiesen de sus empleos. El 5 de diciembre de 1715, durante el gobierno de Baltasar García Ros, el cabildo invistió como alférez real a Gregorio de Avellaneda y el 24 de ese mes se conminó al regidor Juan Josep Moreno a que dejara su asiento por falta de confirmación de su empleo. El sucesor de García Ros, Bruno Mauricio de Zavala, también afectó el equilibrio de las alianzas facciosas a lo largo de ese mes crucial: en diciembre de 1717, envió a prisión al alférez real Avellaneda y retrasó la confirmación de un regidor, Sebastián Delgado; el 20 diciembre de 1721 aceptó la renuncia del regidor Francisco Fernández Guillén y su sustitución por Miguel Rodríguez de Sosa, y el 17 de diciembre de 1722 confirmó las renunciaciones de los regidores Fernández de Agüero y González de la Cuadra y fueron investidos en su lugar los hermanos Santiago y Pedro Zamudio. Resulta evidente que estos tres gobernadores favorecieron el recambio de oficiales venales en la planta del cabildo para beneficiar a una facción o, por el contrario, con el fin de desplazar de la corporación a elementos que consideran hostiles y evitar que en el enero siguiente estos incorporaran nuevos aliados a través de la renovación de los cargos electivos.

A fines del siglo XVII, los gobernadores Joseph de Herrera y Sotomayor y Agustín de Robles no se habían visto obligados a utilizar ese recurso para manipular las elecciones: con una planta reducidísima, los miembros del cabildo tenían escasas chances de articular alianzas que movilizaran a una parte de la vecindad. Pero a partir de 1701, con

el ingreso de nuevos oficiales venales, y en particular de varios regidores, la corporación empezaría a cobrar otra envergadura, que a comienzos de la década de 1720 la asemejaría a los ayuntamientos de otras ciudades cabeceras del imperio español. Pero esas magistraturas venales se vieron sujetas a rotación. A lo largo del primer cuarto del siglo XVIII, treinta y dos vecinos ocuparon más de una docena de regidurías. Catorce de ellos fueron suspendidos en sus empleos por no haber sido confirmados por el rey, aunque seis los recuperarían más tarde. El hecho de que se tratara de un oficio “vendible y renunciable” posibilitó que otros cinco vendieran su regiduría a otros vecinos. Por último, dos de ellos murieron en el ejercicio del cargo, que fue sacado a almoneda para que otro lo ocupara. Con excepción de Diego Pérez Moreno –que ejerció el oficio entre 1663 y 1707–, de Baltasar Quintana Godoy y de Lucas Manuel Belorado, los regidores se mantuvieron en el empleo por un lapso igual o menor a diez años, que a veces se vieron interrumpidos por accidentes políticos.

Cuadro N° 3 - Regidurías en Buenos Aires (1700-1726)

REGIDOR	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726
PEREZ MORENO Diego	>	>	>	>	>	>	>	R																			
CASTRO NAHARRO Juan		E	>	M																							
PACHECO STA CRUZ J.		E	>	>	>	>	>	S					E	M													
RIVERA MONDRAGON H		E	>	>	>	>	>	S					E	S													
GAETE Baltasar		E	>	>	>	M																					
ARREGUI Joseph			E	>	>	>	>	>	S				E	>	M												
QUINTANA GODOY B.			E	>	>	>	>	S					E	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	R	
AVELLANEDA Gaspar						E	>	>	>	>	>	>	Y	>	R												
FERNANDEZ PARRA J.B.						E	>	>	>	>	>	>	Y	>	R												
MORENO Juan Joseph										E	>	>	>	>	S												
RIVADENEIRA Cristóbal											E	>	S														
RUBIN DE CELIS Joseph											E	>	S														
BELORADO Lucas													E	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
RAMILA Pablo													E	>	R												
GONZ DE LA CUADRA P																E	>	>	>	>	>	R					
MENA Y MASCARUA M.																E	R										
FERNANDEZ AGÜERO																E	>	>	>	>	>	R					
MONTANER Bartolomé																	E	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
PALMA Juan de la																	E	>	>	>	>	>	>	S			
DELGADO Sebastián																	E	>	>	>	>	>	>	S			
ZAMUDIO Juan																	E	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
SOLANA Matías																		E	>	>	>	>	>	>	>	>	>
FERNANDEZ GUILLEN F.																		E	>	>	>	S					
ESPARZA Miguel G.																		E	>	>	>	>	>	S			
MONSALVE Tomás																					E	>	>	S			
RODRIGUEZ DE SOSA																					E	>	>	S			
ZAMUDIO Santiago																						E	>	>	>	>	>
ZAMUDIO Pedro																						E	>	>	>	>	>
NAVARRO Luis																									E	>	>

Referencias – E: ingreso como regidor; S: suspendido;
Y: suspendido y reincorporado el mismo año; R: renuncia a la regiduría; M: muerte.

En el Cuadro N° 3 podemos observar el trayecto de los treinta y dos regidores en los primeros años de la centuria. En él puede apreciarse el traspaso de las regidurías a nuevos titulares por renuncia o muerte, que se presentó en forma esporádica y favoreció la circulación de las mismas en el seno de la oligarquía dirigente. Pero deja en claro que el principal motivo de las bajas dentro del colegio de regidores fueron las expulsiones que siguieron a las crisis políticas de 1708, 1712 y 1724.

En cuanto a los demás oficiales venales, en líneas generales sus trayectorias fueron más accidentadas que las de los regidores. El alguacil mayor Miguel de Obregón y los alféreces reales Joseph de Arregui y Gregorio Avellaneda fueron encarcelados por orden del gobernador, aunque los dos últimos retornaron más tarde a sus cargos. El depositario general Miguel de Riblos también fue condenado a prisión, pero logró eludirla refugiándose en el convento de los jesuitas. En cuanto a los alcaldes provinciales de la Hermandad Baltasar de Quintana Godoy y Joseph Ruiz de Arellano, fueron víctimas de los dos momentos de mayor turbulencia política del período y cesados respectivamente en sus empleos en 1708 y 1724.

La rotación de los oficios electivos: las elecciones

Por razones obvias, el recambio en la planta de los oficiales concejiles evidenciaba una mayor regularidad cuando se trataba de los empleos electivos. Los nombramientos eran anuales, y sin bien en algunos casos el desempeño del cargo se extendió a causa de la reelección, en el período que estudiamos ello se dio con poca frecuencia. Enfermedades y licencias podían eventualmente acortar la permanencia de los oficiales electivos en sus empleos, y en ciertos casos pudo verse afectada por episodios de índole política: en dos ocasiones que ya hemos mencionado, en 1712 y 1724, el cabildo fue disuelto y debieron realizarse nuevas elecciones para reemplazar a los alcaldes ordinarios despedidos.

En Buenos Aires se acostumbraba celebrar las elecciones el día de Año Nuevo. Pero no fue infrecuente que un único consistorio no bastara para elegir a los nuevos cabildantes y se hicieran necesarias una segunda y hasta una tercera sesión entre el 3 y el 11 de enero. Antes de 1718, las elecciones sólo insumieron un día en 1706 y 1709, mientras que el resto de los años se extendieron a las siguientes jornadas. Pero durante el gobierno de Bruno Mauricio de Zavala, la condensación de dicho proceso en una única sesión parece haberse convertido en norma, ya que desde 1718 hasta 1726 todos

los oficiales que renovaban sus cargos fueron elegidos el primer día del año. Entre 1690 y 1726, en suma, las elecciones insumieron unas 70 sesiones. En 40 de ellas, dichos oficiales fueron designados por unanimidad, mientras que en las 30 restantes lo fueron por mayoría de votos.

El protocolo capitular imponía pautas estrictas a la realización de las elecciones. Ocho días antes de las mismas, los cabildantes debían exponer las causas que tuviesen para impedir el voto de algunos de ellos, pues se tomaba por malicioso que eso se hiciese el día mismo de la elección. Ello se dispuso, según expresaba el artículo 4to de las *Ordenanzas* de 1668, “*porque suele acontecer que el día de las elecciones se mueve discordia de pleitos para impedir alguno de los votos, valiéndose de diferentes pretextos de que debe plata a la Real Hacienda, o que tiene pendiente causa criminal*”. De acuerdo con dichas *Ordenanzas*, en Año Nuevo los cabildantes oían misa en la sala del ayuntamiento y luego, por estricto orden jerárquico, proponían sus candidatos. Así eran elegidos los dos alcaldes ordinarios, el síndico procurador, el mayordomo, los dos alcaldes de la Hermandad y, si el cargo se hallaba eventualmente vacante, también el alférez real.

Las *Ordenanzas* de 1668 establecían que la elección debía hacerse “*en las personas que fuesen tenidas y reputadas por hidalgos y cristianos viejos*”. La fórmula que se reproducía comúnmente en el libro de acuerdos expresaba que debía tratarse de “*personas celosas del servicio de Dios Nuestro Señor y de Su Majestad, cristianas y de todo buen crédito y reputación para que mediante lo dicho acudan al bien común, paz, conservación y aumento de esta república y sus habitantes*”. La reputación frente a los pares era considerado por la oligarquía urbana el principal criterio de habilitación para ejercer el poder municipal. Se exigía a los candidatos a los cargos electivos que gozaran de buen crédito frente a la vecindad y que ésta diera fe de su honestidad y capacidad. A pesar que los formulismos hablaban todavía de reservar los empleos a los “cristianos viejos”, de a poco fueron perdiendo terreno los criterios de limpieza de sangre propios del siglo XVI, que apuntaban en la península a segregar a los individuos de origen judeo-converso o morisco. Desde el siglo XVII, el rechazo se dirigiría, en cambio, hacia aquellos que ejercían oficios mecánicos, considerados impropios para un vecino.³⁴¹

¿Quiénes votaban en los cabildos de la América española? Se hallaban habilitados para hacerlo, en primer lugar, los regidores y los oficiales venales que detentaban cargos

³⁴¹ Francisco José ARANDA PÉREZ “Repúblicas ciudadanas... Págs. 26-35.

honoríficos con derecho a voz y voto, como lo eran los alguaciles mayores, los alféreces reales, los depositarios generales y los alcaldes provinciales de la Hermandad. En algunas ciudades hispanoamericanas, los alcaldes ordinarios que cesaban también contaban con voz y voto, mientras que en otras no. La costumbre en Panamá era la de despedir a los alcaldes ordinarios del año anterior antes de elegir a los que lo sucederían, excluyéndolos del acto eleccionario. Era una manera de garantizar a los regidores el control absoluto sobre la selección de los candidatos. Esa misma costumbre se impuso en Quito y en México y también se hizo respetar en Caracas. En Buenos Aires, en cambio, los alcaldes ordinarios cesantes participaban de la elección de los nuevos oficiales concejiles. En esta ciudad, el primero en votar era el alcalde de primer voto, luego lo hacía el de segundo voto y por último los regidores y demás oficiales venales, respetando el orden de su antigüedad y jerarquía. En otros cabildos americanos, el voto de los cabildantes era secreto, pero eso no ocurría aquí, sino que era expresado individualmente en las actas.

El gobernador, y en ocasiones su teniente, asistían a la sesión. No sólo lo hacían con el fin de asegurarse de que los oficiales elegidos reunieran las calidades exigidas y aprobar formalmente las elecciones, sino para representar al monarca en el ritual cívico. Con excepción del alférez real, las ceremonias de investidura de los oficiales electos eran conducidas por el regidor decano. Si se hallaban entonces en la ciudad, los alcaldes ordinarios electos se presentaban ese mismo día en la sala capitular, daban las gracias al cabildo por sus empleos y aquel regidor les tomaba el juramento de usarlos fielmente, *“administrando recta justicia a las partes que la pidiesen sin pasión ni afición, guardando las leyes, cédulas y ordenanzas reales”*. Si alguno de los alcaldes ordinarios se encontraba ausente en sus haciendas de campo en el momento de ser electo, uno de los regidores era designado para ejercer la vara de justicia hasta que se presentase y se recibiese de su empleo.

Dos principios debían respetarse cuando se nombraba a los alcaldes ordinarios: la “ley del hueco” –estos no debían ser reelectos por el lapso de dos años– y la prohibición de elegirlos entre los regidores. Ambos fueron quebrantados en Buenos Aires. En la última década del siglo XVII, las reelecciones –si no impulsadas, por lo menos toleradas por Agustín de Robles– se presentaron con cierta frecuencia: Juan Bautista de Matos fue elegido alcalde en 1693 y 1694, Alonso de Herrera y Guzmán y Antonio Guerreros en 1697 y 1698 y Bernardino Antonio de Acosta en 1699 y 1700. La situación sólo volverá a suscitarse en 1704, cuando fueron reelectos los alcaldes ordinarios del año anterior,

Gaspar de Avellaneda y Juan Bautista Fernández Parra. El gobernador Valdés Inclán, que no se encontraba en los mejores términos con el cabildo, intervino abiertamente y justificó la reelección, afirmando que era deseada por “*toda la ciudad*”. Al año siguiente, en contra de los deseos de la corporación, convirtió a Avellaneda y a Fernández Parra en regidores.

Contrariamente a lo sucedido con la reelección de los alcaldes ordinarios, que parece haber sido apadrinada por aquellos dos gobernadores, la transgresión de las leyes que prohibían que los regidores fueran elegidos alcaldes fue una estrategia de los círculos oligárquicos que dominaban el cabildo para obstruir la incorporación de nuevos individuos a la planta concejil. En la América española, algunas ciudades populosas como Lima, Potosí, Chuquisaca y Cuzco habían conseguido que el monarca levantara esa prohibición a cambio de un donativo. Chuquisaca, por ejemplo, había obtenido ese privilegio a cambio del desembolso de 2600 ducados.³⁴² De esa forma, los ayuntamientos de dichas ciudades tendían a convertirse en un ámbito cerrado, en que estaba clausurada la entrada a los vecinos que no detentaban empleos venales. Buenos Aires no contaba con ingresos suficientes para negociar esos privilegios con la corona. No obstante, a partir de la pesquisa de Mutiloa se permitió que las alcaldías ordinarias recayeran en manos de los regidores. El mismo Mutiloa, al disolver en julio de 1712 el cabildo y hacer elegir nuevos alcaldes, nombró alcalde de segundo voto al regidor Gaspar de Avellaneda. Cinco años más tarde, durante el gobierno de García Ros, el regidor Baltasar de Quintana Godoy se convirtió en alcalde de primer voto. Pero durante el gobierno de Zavala esto se volvió más habitual: fueron nombrados alcaldes ordinarios los regidores Pablo González de la Cuadra en 1720, Amador Fernández de Agüero en 1721 y Miguel Rodríguez de Sosa en 1724.

El alférez real Joseph González Marín, cuyo ingreso a la corporación había sido muy cuestionado por los demás cabildantes, encontró en esa irregularidad un argumento para enfrentarlos. Denunció en la Real Audiencia de Chuquisaca que a pesar de que estaba contraindicado que los regidores fueran elegidos alcaldes ordinarios en las *repúblicas*, el cabildo de Buenos Aires había pasado por alto dicha prohibición, pues había “*intentado en alguna ocasión elegir por alcaldes ordinarios a los mismos regidores de su cuerpo*”. Solicitó que se comunicara al ayuntamiento que actuaba en forma ilegal, pues no había recibido dispensa de la corona para hacerlo. El fiscal de ese alto tribunal admitió que

³⁴² Constantino BAYLE *Los cabildos seculares en la América Española...* Pág. 117

Buenos Aires no gozaba del mismo privilegio que las ciudades de Lima y Potosí, en razón a lo cual lo que pedía González Marín era conforme a derecho. Los oidores coincidieron con él y el 29 de mayo de 1723 enviaron una provisión confirmando la prohibición.³⁴³ No obstante, la misma parece haber sido pasada por alto por el cabildo porteño, que al año siguiente nombró alcalde ordinario al regidor Miguel Rodríguez de Sosa, y Zavala parece haber amparado a éste en su desobediencia, confirmándolo en el cargo.

La denuncia de González Marín contra el cabildo puede ser considerada un episodio más en el ciclo de luchas facciosas que venían produciéndose en el interior de la corporación desde comienzos de ese siglo. Más allá de eso, permite apreciar lo cohesionados que se hallaban los miembros del cabildo a comienzos de la década de 1720 al cerrarse al ingreso de nuevos integrantes y reservarse una porción de los cargos electivos. En los años inmediatamente anteriores, el movimiento se había producido en el sentido contrario: quienes habían sido alcaldes, como Pablo de la Cuadra o Francisco Fernández Guillén, se habían convertido luego en regidores. Pero todo parece indicar que el período de apertura de la planta capitular había llegado a su fin y que se estaba pasando a una fase caracterizada por una mayor oclusión. Este proceso se vio dramáticamente interrumpido por el conflicto con Larrazábal y la suspensión de seis oficiales venales en 1724, que supuso un quiebre en dicha cohesión y puso fin a la década de mayor actividad que el cabildo de Buenos Aires había conocido hasta entonces.

La actividad concejil entre 1690 y 1726: una interpretación

La rotación de los empleos concejiles entre la vecindad porteña fue en un principio sumamente limitada. Durante la última década del siglo XVII, la planta concejil se caracterizó por estar compuesta por un reducido número de miembros. La circulación de los cargos electivos entre los vecinos, por otra parte, se mostró muy restringida, ya que con frecuencia esos empleos fueron reasignados a los mismos sujetos a través de la reelección. A pesar de que los cabildantes tuvieron una asistencia casi perfecta a los consistorios, se celebraron muy pocas sesiones anuales y se evidenció un alto porcentaje de sesiones “pasivas”, en que aquellos acudieron a la sala capitular pero se abstuvieron de tratar asunto alguno.

³⁴³ AGN IX-30-1-3 *Real Provisión librada contra los regidores de esta ciudad.*

Durante la primera década de la siguiente centuria, aunque el número de cabildantes aumentó gracias a la incorporación de seis nuevos regidores y de otros oficiales venales, la tendencia a mantener bajos los niveles de actividad se modificó en poco. Se sesionó más que antes, es cierto, pero el porcentaje de sesiones “pasivas” creció también. No fue casual que mientras ello ocurría, la intrusión de los gobernadores en los asuntos municipales fuera en ascenso. Estos favorecieron la reelección de los alcaldes ordinarios cuando así les convino, a pesar de que estaba expresamente prohibido por las leyes. Manipularon además las subastas de oficios venales para hacer ingresar a la corporación a sujetos pertenecientes a su camarilla y suspendieron a aquellos que les manifestaron hostilidad. La coyuntura europea –a causa de las continuas guerras con las potencias rivales, durante los últimos años del reinado de Carlos II y los primeros de Felipe V, la corona relajó su control sobre sus dependencias ultramarinas– permitió a dichos gobernadores imponerse cómodamente sobre la corporación. Su objetivo era contar con un cabildo que les fuera adicto, expurgándolo de elementos hostiles, y luego de un período de fricciones que se extendió entre 1691 y 1711 acabaron por conseguirlo.

La pesquisa de Mutiloa se convirtió en un punto de inflexión a partir del cual el perfil del ayuntamiento porteño se transformó. El pesquisidor devolvió al cabildo las facultades que le habían sido usurpadas durante dos las décadas anteriores, al igual que los recursos con que lo había dotado la corona. A las facultades restituidas se le agregó una nueva: la de nombrar regidores sin intervención del gobernador. A resultas de esto último, la planta capitular pudo ampliarse, brindando a la oligarquía local mayores oportunidades de ingresar en ella. Surgió una corporación a la que se le habían restituido todas sus preeminencias y que sabría mostrarse más sólida frente a las imposiciones de las autoridades centrales. Tras una breve transición signada por las perturbaciones políticas, que se extendió entre 1713 y 1715, sus niveles de actividad se robustecieron y las sesiones “pasivas” se volvieron casi inexistentes.

Cuando Bruno Mauricio de Zavala llegó a Buenos Aires, a mediados de 1717, se encontró ante un cabildo que, tras haber franqueado una década de luchas facciosas, gozaba de una envidiable cohesión interna. Pero este gobernador, aunque reconocía que los asuntos municipales eran competencia del ayuntamiento, no por ello depuso sus pretensiones de fiscalizar en forma pormenorizada su actuación. A diferencia de sus predecesores de comienzos del siglo, Zavala debió lidiar con una corporación que contaba con las herramientas necesarias para ensanchar la base de alianzas que la unía con la vecindad. Haciendo uso de los mecanismos que le había otorgado el monarca

para incrementar la planta concejil, el cabildo porteño la amplió hasta contar con un número de integrantes no conocido hasta el momento. Entre 1721 y 1723, sumados los oficiales venales y los electivos, no fue inusual que se sesionara con más de 15 cabildantes presentes.

Esos años en que se produjo la más alta concurrencia a los consistorios fueron, paradójicamente, aquellos en que se computaron mayor cantidad de inasistencias. El ausentismo, que se hizo habitual sobre todo entre los oficiales venales, fue tolerado por el cuerpo en su conjunto, que lo compensó sesionando durante un número mayor de jornadas anuales. Pero la corporación, que en la década anterior había experimentado una apertura hacia la vecindad incorporando nuevos vecinos a su planta, comenzó a cerrarse sobre sí misma, tendiendo a colocar a los regidores en las alcaldías ordinarias, a pesar de que la prohibición legal de hacerlo fue reiterada por una provisión expedida por la Real Audiencia en 1723. El cabildo porteño experimentaba esa tendencia a la oclusión cuando, aprovechándose de la ausencia de Zavala, decidió hacer frente al lugarteniente de éste, Antonio de Larrazábal. Esta investida contra el representante del gobernador en defensa de las prerrogativas corporacionales le costaría ser sometido a un expurgo, que hizo retroceder al número de sus integrantes al que contaba dos décadas atrás.

LA AGENDA DE LOS ASUNTOS TRATADOS

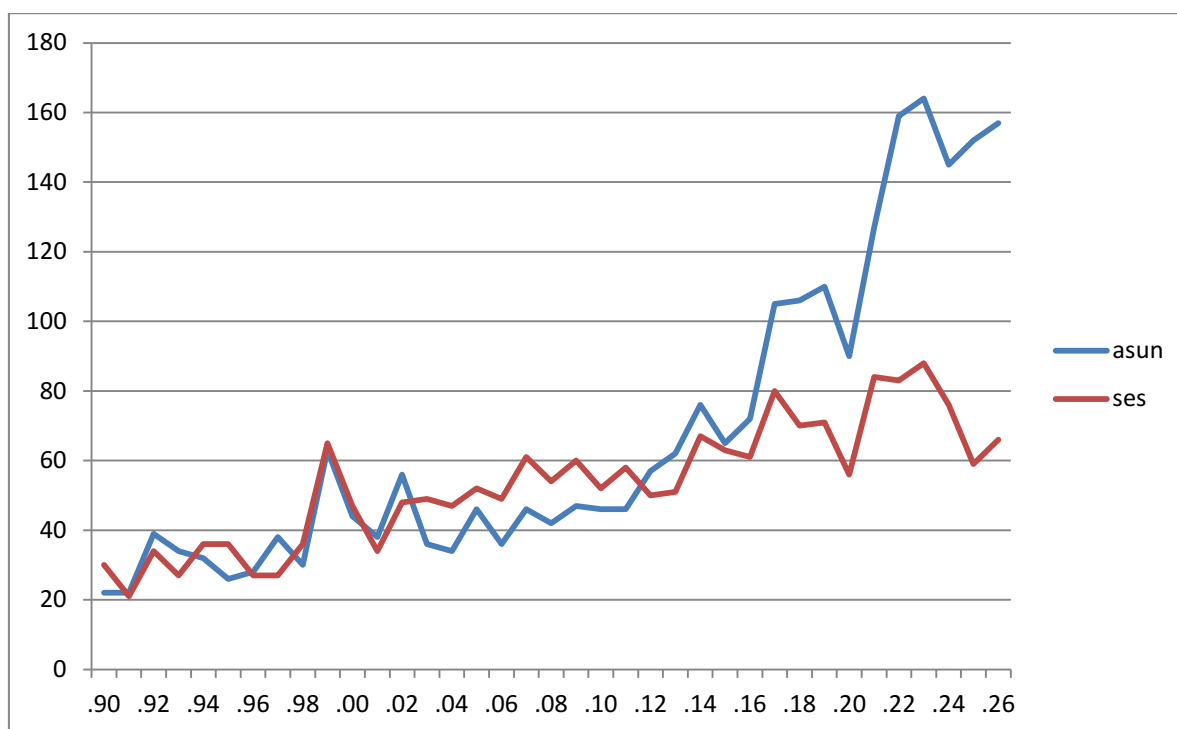
Constantes y variaciones en los asuntos abordados

“Los negocios del cabildo se han de tratar por su orden y determinar con brevedad”, rezaba el capítulo 6to de las *Ordenanzas* del cabildo de Buenos Aires. La sesión comenzaba formalmente con una lectura de lo acordado en la reunión anterior y dando cuenta de que se había cumplido con lo que se había mandado ejecutar. Verificado esto, los cabildantes podrían abocarse a los asuntos incluidos en el orden del día. La etiqueta concejil establecía que los alcaldes ordinarios serían los primeros en verter su opinión, seguidos de los regidores, quienes lo harían *“por su orden y por su antigüedad”*. Cuando no había unanimidad en la resolución de un asunto se pasaba a la votación, que no era secreta y respetaba el mismo orden de prelación. Las *Ordenanzas* indicaban, en efecto, que *“cuando hubiere diferencia en lo que se tratare, se vote, y lo que se votare por la mayor parte se ejecute”*.

Pero como se ha visto en el capítulo anterior, la labor de los cabildantes evidenció tener niveles muy desparejos a lo largo del tiempo. Hubo sesiones en que abordaron múltiples cuestiones y otras en que acudieron sólo para salvar la formalidad de estar presentes y luego abandonaron la sala sin tratar asunto alguno. Para examinar los niveles de actividad del cabildo de Buenos Aires, nos hemos servido hasta aquí de dos variables: la concurrencia de los cabildantes a las sesiones y el tratamiento de por lo menos un asunto durante las mismas. Estas fueron expresadas a través de un *índice de convocatoria* —el porcentaje de días en que el cabildo fue llamado a reunirse cada año— y de un *índice de actividad* —el porcentaje anual de sesiones “activas”, es decir, aquellas en que se discutieron uno o más asuntos—. Pero somos conscientes de que este último indicador sólo permite fijarle un “piso” a la labor del ayuntamiento, sin expresar necesariamente los niveles reales de actividad. Queda por indagar cuál fue el promedio de temas tratados por sesión y si éste fue o no aumentando a lo largo del período estudiado. A partir de ello será posible determinar si los asuntos que se abordaron en los consistorios se diversificaron a través de los años o si, por el contrario, la coyuntura obligó a la corporación a concentrarse en algunos de ellos o a darles prioridad por sobre los otros.

Como punto de partida, en el Gráfico 6 se han cruzado dos series de datos: el número de sesiones convocadas anualmente y el número de asuntos tratados. Podrá observarse que con anterioridad a 1712, la cantidad de asuntos abordados por sesión concuerda con el número de sesiones o incluso se manifiesta inferior a éste. Pero a partir de ese año, el volumen de los asuntos tratados tiende a crecer y la brecha entre ambas curvas se amplía, lo que evidencia de que la actividad de la corporación se intensificó.

Gráfico 6 – Sesiones convocadas y números de asuntos tratados (1690-1726)



Referencias – ses: número de sesiones convocadas; asun: número de asuntos tratados

Fuente de los datos: AECBA, varios tomos.

Este Gráfico nos ayuda a percibir, además, tres etapas claramente definidas. La primera de ellas se extendió entre la última década del siglo XVII y comienzos del siguiente siglo. Puede observarse que en dicha fase, el número de sesiones y el de asuntos que se trataron tienden a calcarse el uno al otro. Esta etapa coincidió con los gobiernos de Agustín de Robles y Manuel de Prado y Maldonado, entre 1690 y 1701. El índice más bajo, que es de 0,73 asuntos tratados por sesión, lo hallamos en 1690. Pero a lo largo de la misma, el promedio general fue de un asunto por sesión, y en seis de esos doce años se superó levemente la media, observándose el índice más alto (1,41) en 1697. Se trató de un período en que las relaciones entre el gobernador y el cabildo no

pasaron por su peor momento, en especial con Prado y Maldonado. Pero el cabildo porteño funcionaba con muy pocos integrantes –dos alcaldes ordinarios y dos oficiales venales– que estaban sobrecargados de tareas, como la atender las causas presentadas en los tribunales ordinarios o inspeccionar las tiendas, los talleres de oficios y el mercado. Ello sin duda contribuyó a que un número tan escueto de cabildantes no pudieran sesionar con una mayor frecuencia.

La segunda etapa que puede identificarse a partir del Gráfico 6 se extendió entre 1702 y 1711. Aunque a comienzos de la misma se incorporaron varios oficiales venales al cabildo, el volumen de asuntos tratados descendió abruptamente, colocándose por debajo del número de sesiones celebradas. Hubo un alto número de sesiones “pasivas”, en que no se trató tema alguno, y un número equivalente de sesiones en que no se trató más que un tema. Tan sólo en 1702, el año de la asunción de Alonso de Valdés Inclán, el promedio alcanzó los 1,17 asuntos por sesión. En los años que siguieron, el referido promedio fue de menos de un asunto por sesión, con una media general de 0,82. Este bajísimo nivel de actividad concuerda con los gobiernos de Alonso de Valdés Inclán y de Manuel de Velasco y Tejada, cuyo vínculo con el ayuntamiento, como es sabido, estuvo atestado de rispideces. Además de ello, estos gobernadores avanzaron por sobre las atribuciones de la corporación y excluyeron de su agenda muchos asuntos que debieron ser resueltos por ésta.

La tendencia se invirtió en una tercera etapa, que comenzó con la pesquisa de Mutiloa y se cerró con el gobierno de Bruno Mauricio de Zavala, extendiéndose entre 1712 y 1726. A lo largo de la misma, la cantidad de asuntos tratados por sesión fue *in crescendo* hasta que en 1725 se produjo la media anual más alta de todo el período, que fue de 2,58. El promedio general en esta etapa se situó en 1,59 asuntos por sesión. Pero a pesar de que el cabildo recobró sus antiguas facultades en 1712 y pudo gracias a ello ampliar su agenda, el despegue en su actividad no se observa con nitidez hasta cinco años más tarde, con la asunción de Zavala al poder. Con anterioridad a 1717, hallándose todavía el cabildo bajo el efecto de las convulsiones políticas que siguieron a la pesquisa de Mutiloa, el volumen de los asuntos tratados no aumentó sino moderadamente. No faltaron incluso en aquellos años algunas tentativas de elusión por parte de los cabildantes, apreciables en el número considerable de sesiones “pasivas” que se produjeron en 1715, a las que ya aludimos en el capítulo anterior.

Frente al gradual incremento en la actividad del cabildo porteño, apreciable a lo largo de casi cuatro décadas, nos preguntamos si ese acrecentamiento encontró un correlato

en la diversificación de las temáticas tratadas en las sesiones. Antes de responder a esa cuestión, es necesario establecer cuáles fueron las temáticas que se abordaron. Se ha procedido a agrupar los múltiples asuntos tratados por la corporación en doce categorías, como paso previo a estimar el grado de importancia que cobró cada una de ellas en las etapas que se desprenden del análisis anterior. Dichas categorías son las siguientes:

a) *Elecciones*: Postulación de candidatos a los oficios electivos y su elección mediante la votación.

b) *Abasto*: Provisión de carne, sebo, pan, vino, legumbres y otros productos de primera necesidad, fijación de precios, supervisión sobre la utilización de pesas y medidas.

c) *Ganado cimarrón*: Revisión y reconocimiento de las “acciones” al ganado, emisión de permisos para vaquear y vender cueros, conflictos con otras corporaciones municipales y religiosas por la explotación del semoviente.

d) *Urbanismo y saneamiento*: Vigilancia del estado de las edificaciones y los espacios públicos, medidas de profilaxis para prevenir o enfrentar enfermedades infectocontagiosas.

e) *Propios y arbitrios*: Cobro de rentas, multas e impuestos, aprobación de las cuentas del mayordomo y de los recaudadores de la alcabala.

f) *Festejos públicos*: Organización y costeo del ceremonial cívico y los agasajos públicos.

g) *Relación con la Iglesia*: Aportes del cabildo al ceremonial religioso, problemas de protocolo entre el ayuntamiento y los jerarcas de la catedral.

h) *Etiqueta concejil*: Ceremonias de investidura de oficiales electivos y venales, conflictos de prelación en el cabildo y en las ceremonias públicas, debates sobre asuntos de protocolo.

i) *Moralidad y educación*: Establecimiento de escuelas para niños y de casas de recogimiento para doncellas pobres, control ejercido sobre sectores marginales de la población.

j) *Personal rentado por el cabildo*: Contratación de médicos, maestros, porteros y otros trabajadores dependientes.

k) *Justicia*: Problemas vinculados con la justicia ordinaria, mantenimiento de la cárcel.

l) *Otros*: Cualquier asunto tratado no incluido en las categorías anteriores.

Hecha la agrupación de los asuntos en una docena categorías, se buscó establecer la significación que tuvo cada una de ellas a lo largo del período estudiado. En el Cuadro N° 4, éste ha sido dividido en lustros.³⁴⁴ Las cifras expuestas expresan los porcentuales correspondientes a cada categoría a lo largo de un lustro. En los últimos años del siglo XVII, el primer lugar en interés lo ocupan los Propios y Arbitrios, es decir, las rentas e ingresos de la corporación. En 1695, no casualmente, el ayuntamiento envió un procurador a la Corte de Madrid para implorar a la corona que incrementara sus escasas rentas. Durante los primeros dos lustros del siglo siguiente preponderaron, en cambio, los problemas de Etiqueta Concejil, en coincidencia con el crecimiento de la planta de oficiales venales del cabildo y con los violentos enfrentamientos que se produjeron en el seno de éste durante los gobiernos de Valdés Inclán y Velasco y Tejada, muchas veces expresados a través de conflictos protocolares. Pero a partir de 1712 disminuiría la importancia de los problemas internos y cobrarían protagonismo los externos. Se dio entonces prioridad a las complicaciones surgidas de la extinción del ganado cimarrón en las pampas y de la relocalización de las áreas de explotación pecuaria en la Banda Oriental. El segundo lugar lo obtendría el abastecimiento de productos básicos, en parte por la esporádica falta de carne y de sebo derivada de ese reacomodamiento, pero también a causa de las necesidades de una población urbana en franco crecimiento y con pautas de consumo renovadas.

³⁴⁴ Hacemos la advertencia de que los años de 1690 y 1711 fueron agregados al primer y cuarto lustro respectivamente. La imposibilidad de dividir 37 años en lustros nos obligó a sumar esos dos años excedentes al lustro que juzgamos más afín.

Cuadro N° 4 - Porcentaje de los asuntos abordados por lustro
(1690-1726)

	Ele	Aba	Vac	Urb	Prp	Fst	Igl	Etq	Mor	Per	Jus	Otr
90.95	7,9	15,5	7,1	2,0	16,9	2,6	16,1	5,9	4,4	7,1	5,0	9,4
96.00	5,4	15,8	9,5	2,2	18,2	2,7	14,9	12,6	2,9	5,3	8,2	2,3
01.05	6,2	9,3	7,5	5,0	11,1	6,4	16,0	20,0	1,4	3,6	3,0	10,4
06.11	4,9	7,0	10,0	10,2	9,3	7,9	9,0	23,6	0,0	10,8	1,5	5,8
12.16	3,2	6,0	24,4	3,8	10,7	3,8	12,6	18,5	0,0	9,6	1,8	5,6
17.21	1,1	18,7	26,1	4,7	9,4	2,3	7,0	12,9	0,4	7,8	1,5	8,0
22.26	0,6	12,2	24,8	10,1	11,7	2,8	8,0	8,5	1,5	9,8	4,0	5,7

Referencias: Ele: Elecciones; Aba: Abasto; Vac: Ganado cimarrón; Urb: Urbanismo y saneamiento; Prp: Propios y arbitrios; Fst: Festejos; Igl: Relación con la Iglesia; Etq: Etiqueta concejil; Mor: Moralidad y educación; Per: Personal rentado por el cabildo; Jus: Justicia; Otr: Otros.

Fuente de los datos: AECBA, varios tomos.

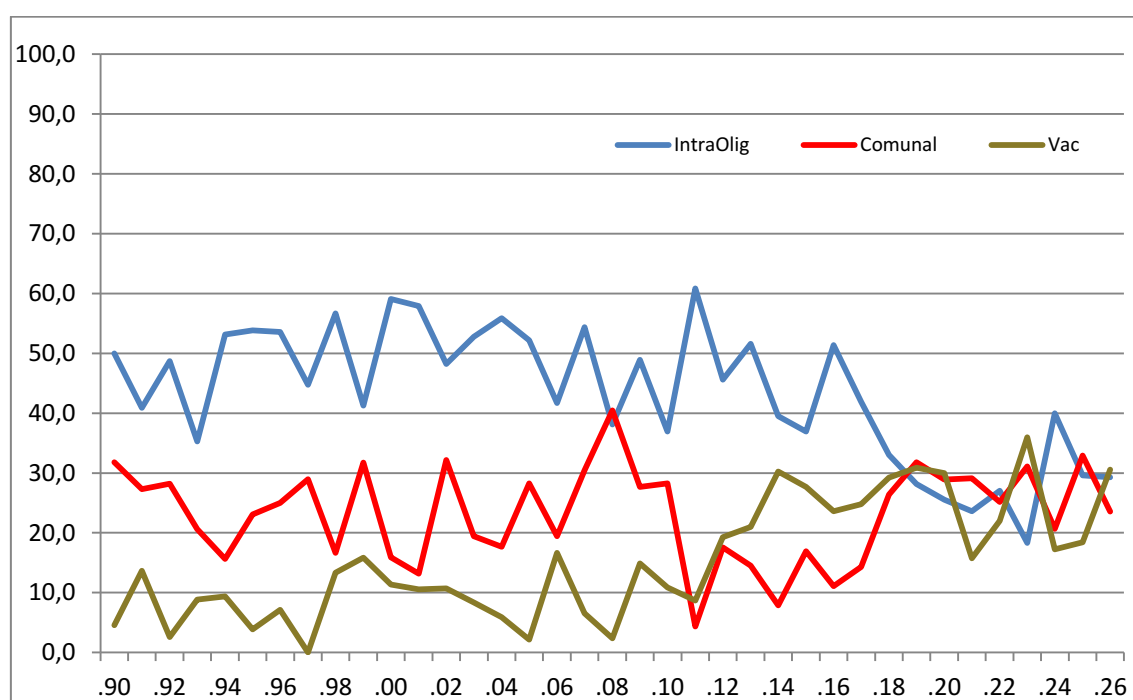
Así como puede observarse que ciertas categorías se imponen y otras retroceden en orden de importancia, también se aprecian algunas constantes. El tratamiento de asuntos relacionados con los Propios y Arbitrios, por ejemplo, se mantuvo durante todo el período cercano al 12%, sin oscilaciones significativas, y lo mismo sucedió con los asuntos vinculados con la Iglesia. Las categorías que recibieron menor atención del ayuntamiento fueron: Urbanismo y Saneamiento (5,4%), Elecciones (4,2), Festejos Públicos (4,1), Justicia (3,6) y Moralidad y Educación (1,5). En el caso de las elecciones y de las celebraciones públicas, ello ocurría porque dichos eventos se concentraban en momentos precisos del año y luego dejaban de ser asuntos de interés. La escasa relevancia dada a los otros tres renglones se debió, según creemos, a que la corporación aún no había articulado políticas precisas para reordenar la trama urbana y disciplinar a la población. En Buenos Aires, la oligarquía dirigente todavía reaccionaba débilmente frente a las transformaciones de una ciudad que, siendo poco más que una aldea a fines del siglo XVII, mostraba inocultables signos de crecimiento a comienzos de la década de 1720.

Lo que se deja entrever es que la priorización de los asuntos estrechamente ligados a los intereses de la oligarquía dirigente comenzó a ceder frente al tratamiento de asuntos que concernían al conjunto de los habitantes. Los primeros, que hemos dado en llamar *intraoligárquicos*, atendían a la adecuada administración de las rentas del ayuntamiento,

a la posición ocupada por sus miembros gracias a las elecciones y las normas de prelación y al vínculo que el cabildo sostenía con otras corporaciones como el cabildo eclesiástico, los conventos o la cúpula de la guarnición militar. Los segundos, que denominaremos *comunales*, eran aquellos que permitían al cabildo proyectarse a la población en su conjunto, como el abasto de bienes de consumo básico, la higiene, el desagote pluvial de las calles, el adoctrinamiento de niños y doncellas y el control que pretendió ejercer sobre los trabajadores libres y los estratos marginales.

En el Gráfico 7 hemos intentado ilustrar esa tendencia, reconstruyendo la evolución de ambos conjuntos. A efectos de ofrecer más elementos para su comprensión, se ha agregado por separado un tercer renglón de indiscutible relevancia: la explotación del ganado cimarrón.

Gráfico 7 – Tratamiento de los asuntos intraoligárquicos y comunales (1690-1726)



Referencias – IntraOlig: Asuntos Intraoligárquicos; Comunal: Asuntos Comunales; Vac: Asuntos vinculados con el manejo del ganado cimarrón.

Fuente de los datos: AECBA, varios tomos.

Para confeccionar este Gráfico, hemos partido de las categorías enumeradas arriba. Los datos que anteriormente habíamos incluido en cuatro de ellas (Elecciones, Propios y Arbitrios, Relación con la Iglesia, Etiqueta Concejil) fueron agrupados como *asuntos*

intraoligárquicos, mientras que los comprendidos en otras cuatro (Abasto, Urbanismo y Saneamiento, Festejos Públicos, Moralidad y Educación) fueron considerados *asuntos comunales*. La categoría Ganado Cimarrón se mantuvo separada de las anteriores, a efectos de apreciar su magnitud *per se*. El tratamiento de asuntos de índole intraoligárquica en el seno del cabildo preponderó entre 1690 y 1713, alcanzando su pico más alto en 1711, en el momento mismo en que la lucha de facciones alcanzaba su momento de mayor tensión. En esos años, dichos asuntos alcanzaron a ser, en promedio, el 49% de los abordados. Ello no significó que los asuntos comunales fueran desestimados, pero se mantuvieron por debajo del 25%. No obstante, la etapa en que estos últimos recibieron menos atención fue durante los años que podrían señalarse como políticamente más turbulentos: los comprendidos entre 1712 y 1716, desde fines del gobierno de Velasco y Tejada hasta el comienzo del de Baltasar de García Ros, en que descendieron a un promedio del 13% de los asuntos tratados. En tanto, y por los motivos que ya hemos expuesto repetidas veces, el ganado cimarrón se convertía en la principal preocupación de la corporación. A partir de 1717, con la llegada de Zavala al poder, la relevancia de los asuntos intraoligárquicos declinó y los tres renglones tendieron a equipararse en importancia.

Luego de analizar la actividad del ayuntamiento, es necesario hacer una salvedad: hasta aquí sólo se ha considerado la labor de los cabildantes en el interior de la sala capitular. Pero ésta, obviamente, no se limitaba a su participación en las sesiones en el cabildo. La tarea principal de los alcaldes ordinarios, como ya referimos, era atender diariamente los tribunales del fuero común, adonde los regidores también acudían para desempeñarse como defensores de menores o conjuceces. Además de ello, fue necesario testear los precios, disponibilidad y condiciones sanitarias de los artículos de primera necesidad, por lo que alcaldes ordinarios y regidores se vieron obligados a rondar la ciudad. Estos magistrados se apostaron diariamente en la Plaza Mayor a vigilar la entrada de cereales, pescados, frutas y legumbres, todos ellos vendidos en la vía pública. Recorrían las pulperías y tabernas para comprobar que los vinos y los aguardientes fueran fraccionados apropiadamente y visitaban los talleres de compostura para que el calzado y los trajes fueran confeccionados de acuerdo con establecido en los reglamentos. En las atahonas verificaron que el volumen de harina entregado tras la molienda guardara adecuadas proporciones con el volumen de grano triturado. A ello se agregaba la fiscalización de las carretas que entraban a la ciudad, en especial cuando traían cargamentos de vino, aguardiente, granos o tejidos bastos. En ocasiones el

gobernador les encargó salir a la campaña a escudriñar cuanto trigo se había cosechado, tarea que no veían con agrado y que demoraron como una manera de resistirla.

Como las tareas de fiscalización del mercado urbano eran una pesada obligación, los regidores se rotaban para cumplirlas. Cada cuatro meses, un regidor era elegido *fiel ejecutor* y salía a examinar el mercado y las tiendas al menudeo, corroborando los precios de los productos y la exactitud del pesaje. Desde 1605, este funcionario tuvo en Buenos Aires facultades judiciales. Llevando consigo los patrones de pesos y medidas, visitaban las tiendas en compañía de un alcalde ordinario para controlar que las balanzas fueran precisas y que las pesas utilizadas estuviesen debidamente selladas. En casos de fraude, estaban autorizados a actuar sumariamente e imponer multas. Otra de sus funciones era vigilar la edificación de la ciudad y penalizar a los vecinos que arrojaban escombros y basuras en las calles.³⁴⁵ Las leyes de Indias les prohibían, lo mismo que a los alcaldes ordinarios, cualquier actividad mercantil vinculada a los productos de abasto, como una forma de garantizar su imparcialidad al vigilar los precios.³⁴⁶

El abastecimiento de productos de consumo básico: la administración de precios

Tanto en la península como en las dependencias ultramarinas, la corona española delegó en las corporaciones municipales la tarea de controlar que los mercados urbanos estuviesen abastecidos de los productos de consumo básico. Dichas corporaciones ejercieron un fuerte intervencionismo en la economía comunal, regulando una porción no poco significativa de los intercambios mercantiles.³⁴⁷ Esa fue la razón por la que el aprovisionamiento de granos, la calidad de la producción artesanal, el problema de la escasez de metales ferrosos o la correcta utilización de pesas y medidas en las transacciones comerciales fueron asuntos de tratamiento recurrente en las sesiones de los cabildos americanos, entre los cuales el de Buenos Aires no se constituyó en excepción.

³⁴⁵ Ricardo ZORRAQUIN BECU **La organización política argentina en el período hispánico** Perrot, Buenos Aires, 1981.

³⁴⁶ “Los fieles ejecutores... son los encargados de regular y vigilar en nombre de las autoridades municipales los precios y la forma de venta de los principales productos de consumo, de aquellos artículos de primera necesidad que son de uso común y básico de la sociedad comunal”. Francisco DOMINGUEZ COMPAÑY **Estudios sobre las instituciones locales hispanoamericanas** Academia Nacional de la Historia de Venezuela, Caracas, 1981, Pág. 202.

³⁴⁷ José Manuel de BERNARDO ARES “El régimen municipal en la Corona de Castilla” en **Studia historica. Historia moderna** Nº 15, 1996, Pág. 47.

Nuestro propósito es establecer hasta qué punto los precios de los bienes de consumo básico fueron administrados por el cabildo y de qué criterios se valió éste para ejercer esa regulación. Por desgracia, los autores que han elaborado series de precios para Buenos Aires y las vecinas ciudades de Santa Fe y Córdoba no lo han hecho para un período tan temprano como las últimas décadas del siglo XVII, sino que por lo general su punto de partida fueron los primeros años del siglo XVIII.³⁴⁸ No obstante, gracias a los datos que ofrecen esas series y a los que extrajimos de las fuentes documentales, disponemos de un panorama de cómo evolucionaron los precios de dichos bienes a lo largo del período analizado. Esa información fue de indudable utilidad para establecer a qué estímulos respondió la corporación al regularlos.

Antes de examinar de qué manera intervino el cabildo de Buenos Aires en los precios, es importante dilucidar cuáles eran las concepciones económicas que lo guiaron al hacerlo. La sociedad porteña de fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, como cualquier otra sociedad del Antiguo Régimen, no respondía a una estricta lógica de mercado y estaba lejos de constituirse en una “sociedad de consumo”. La circulación de bienes obedecía tanto a exigencias de índole material como simbólico, razón por la cual las pautas para las transacciones se relacionaran menos con el cálculo económico que con imperativos morales y culturales.³⁴⁹ Esas preocupaciones de orden moral no estaban ausentes cuando se pretendía que los precios de aquellos bienes fueran “justos”. Los tratadistas coincidían en que el *iustum pretium* no se determinaba en el proceso de producción sino durante el intercambio. El valor de un bien no era considerado una cualidad que le fuera inherente, y aunque los costes de producción y transacción eran factores que habían de tenerse en cuenta, se pensaba que el precio no era consecuencia necesaria de estos. El valor dependía, en concepción de dichos tratadistas, del uso que se fuera a hacer de ese bien y de la estimación que se atribuía a ese uso, aun cuando

³⁴⁸ Véase Martín CUESTA **Precios, población, impuestos y producción. La economía de Buenos Aires en el siglo XVIII**, Buenos Aires, Temas, 2009; Julio DJENDEREDJIAN y Juan Luis MARTIRÉN “Los precios de los bienes en las fronteras bravías del Río de la Plata colonial: Santa Fe durante la primera mitad del siglo XVIII” en **América Latina en la Historia Económica**, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, vol.20 no.2 México mayo/agosto de 2013; Aníbal ARCONDO **El ocaso de una sociedad estamental. Córdoba entre 1700 y 1760** Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 1992.

³⁴⁹ Jean Ives GRENIER “¿Qué es la economía del Antiguo Régimen?” en **Anuario del Instituto de Historia Argentina**, Universidad Nacional de La Plata, 2012, N°12, Pág. 32-33.

admitían que estaba condicionada por la abundancia o escasez del bien en cuestión. Ese estimación se desprendía de la mayor o menor utilidad que se le atribuía.³⁵⁰

El beneficio obtenido por el negociante durante la transacción no era moralmente cuestionable, pese a que se reconocía que podía ser impulsado por la especulación. Se consideraba que en un período normal debía mantenerse estable, pero podía modificarse debido a las alteraciones coyunturales del mercado y brindar un premio adicional de monto muy variable.³⁵¹ Se creía que este beneficio adicional se justificaba por las altas tasas de riesgo y los elevados costos de transporte asumidos por el traficante, pero podía verse suprimido cuando la corporación municipal consideraba que podía perjudicar al común y decidía moderar los precios en favor de éste.

¿Cuál era la idea de justicia que guiaba las transacciones? La concreción de operaciones mercantiles se apoyaba en el principio de *justicia conmutativa*, que se diferenciaba de la *justicia distributiva* y obedecía a diferentes parámetros que ésta. Bartolomé Clavero la definió como “la igualdad entre quienes pueden obligarse y respecto a aquello en lo que se obligan”.³⁵² Se presumía, en efecto, que existía una igualdad contractual entre quienes realizaban una transacción mercantil o entre quienes firmaban un contrato de obligación, que impedía que pudieran interponerse privilegios o fueros en favor de uno de los actantes. La justicia distributiva, por el contrario, no se guiaba por la idea de igualdad sino por la de proporción: se trataba de dar a cada uno lo que le correspondía. Esta última garantizaba que se respetaran las preeminencias de quienes formaban parte de cada uno de los cuerpos que integraban la monarquía.

Básicamente, el precio de la mercancía debía ser aceptable tanto para el consumidor como para el vendedor: tal era el principio que respetó el cabildo de Buenos Aires en las ocasiones en que se abstuvo de intervenir en los precios de los productos de consumo básico. No obstante, la corporación sostuvo su derecho de arancelarlos en beneficio del común cuando se rompía ese equilibrio, no solamente en tiempos de carestía sino también en los de excesiva abundancia. El objeto acostumbrado de esa intervención eran los artículos de producción local (el trigo, la carne y el sebo) pero también se aplicaba a algunos artículos de producción regional (generalmente al vino y al aguardiente, y en menor número de ocasiones al azúcar y a la yerba).

³⁵⁰ José Ignacio FORTEA PEREZ “Economía, arbitrismo y política en la Monarquía hispánica a fines del siglo XVI” en *Manuscripts Revista d'història moderna*, Universidad Autónoma de Barcelona, Departamento de Historia Moderna, 1998, N° 16, Págs. 155-176.

³⁵¹ Jean Ives GRENIER “¿Qué es la economía...?”, Pág. 25.

³⁵² Bartolomé CLAVERO *Antidora, Antropología Católica de la Economía Moderna* Milán, Giuffrè Editore, 1991, Pág. 62.

Para ilustrar la política de administración de precios impulsada por el ayuntamiento porteño nos concentraremos en un producto: el vino. Este era considerado parte de los productos de consumo básico no sólo por hallarse ampliamente difundido entre todos los sectores de la población sino por ser preciso en el ritual de la eucaristía en la misa. El tráfico de *caldos* –nombre genérico que recibían el vino y el aguardiente– fluía a Buenos Aires desde las provincias andinas: el principal proveedor de vinos del mercado local era entonces Mendoza, seguida bastante de lejos por La Rioja, mientras que el aguardiente provenía preferentemente de San Juan.³⁵³ En 1686, habían llegado desde Mendoza y San Juan entre 7.000 y 8.000 botijas de *caldos*, esto es, entre 14.000 y 16.000 arrobas. No todos los años las entradas eran tan considerables: en 1690, un año en que el cabildo consideró que la ciudad se hallaba pobremente abastecida, habían ingresado 1200 botijas de aguardiente de Cuyo y La Rioja y tan sólo 300 botijas de vino.³⁵⁴ En la primera década del siguiente siglo, la ciudad recibía en promedio unas 60 carretas anuales cargadas de vinos de Mendoza, lo que se traducía en unas 1.800 botijas anuales.³⁵⁵ Más allá de sus oscilaciones, la importancia de este tráfico fue incuestionable y tiene una explicación: Buenos Aires era un puerto de ultramar y en él se aprovisionaba no sólo la población estable sino también la ocasional, compuesta por la tripulación de los navíos de registro y los buques negreros, que solía ser una poderosa demandante de ese producto.

Tanto el vino como el aguardiente eran envasados en botijas y conducidos a esta ciudad en tropas de carretas. Las botijas eran recipientes de barro cocido que habían sido forrados en cuero e impermeabilizados con brea antes de afrontar la travesía. Habían sido fabricadas reproduciendo una medida estandarizada, cuyo contenido era de 2 arrobas (71 litros) por envase.³⁵⁶ Se calcula que cada carreta podía transportar 150 arrobas de carga, es decir, unas 75 botijas de vino o aguardiente. Al llegar a Buenos

³⁵³ Para el papel del vino y el aguardiente como nexo entre las provincias cuyanas y Buenos Aires: Juan Carlos GARAVAGLIA y María del Rosario PRIETO “Diezmos, producción agraria y mercados: Mendoza y Cuyo, 1710-1830” en **Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani** N°30, Buenos Aires, enero/diciembre de 2007; Samuel AMARAL “Comercio libre y economías regionales: San Juan y Mendoza, 1780-1820” en **Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas** N° 27, 1990, Köln, Págs. 1-67.

³⁵⁴ XI-296 y 306-309.

³⁵⁵ Pablo LACOSTE “La vid y el vino en América del Sur: el desplazamiento de los polos vitivinícolas (siglos XVI al XX)” en **Revista Universum**, Instituto de Estudios Humanísticos “Juan Ignacio Molina”, Universidad de Talca, 2004, Vol. 2, N° 19, Págs. 62-93.

³⁵⁶ Pablo LACOSTE “Instalaciones y equipamiento vitivinícola en el Reino de Chile. Vasijas, pipas, lagares (siglo XVIII)” en **Revista de Historia Social y de las Mentalidades**, Santiago de Chile. 2006, Vol. 1, No 10, Págs. 93-118. En relación con la arroba de vino o aguardiente, los distintos artículos que consultamos la establecen como equivalente a 35,5 litros.

Aires, el cabildo las inspeccionaba con el propósito de cobrar los derechos de alcabala y mojonería. Pero su intervención no terminaba allí. Un regidor o un alcalde ordinario se hacían presentes cuando el traficante vendía su cargamento a los comerciantes y pulperos locales. El motivo de esta inspección era vigilar el traspaso del aguardiente y del vino a las *pipas* –es decir, los toneles– de estos, cuyos agujeros eran lacrados por orden del cabildo, en un intento por evitar que el contenido sufriera adulteraciones con el agregado de agua o de alcoholes de calidad inferior. Asimismo se les obligaba a utilizar jarras selladas, a fin de que no cometieran fraude al fraccionarlo. En el comercio al menudeo, la capacidad de los frascos también reproducía una medida estandarizada, que rondaba el medio litro de vino o aguardiente.³⁵⁷

A lo largo del período 1690-1726, el precio del vino fue objeto de más de una docena de intervenciones por parte de la corporación. La primera de ellas fue en el 1692, cuando luego de haber bajado de Cuyo un considerable número de carretas cargadas de botijas, consideró que no se justificaba su “*precio muy excesivo respecto de la abundancia con que hoy se halla esta república de dicho género*”.³⁵⁸ En julio del año siguiente, el precio de la arroba de vino se elevó a 14 pesos en razón a su falta, pero al llegar la primavera el tráfico se reactivó y al volver la “*abundancia de vino*” ordenó a los traficantes que lo bajasen.³⁵⁹ En los años que siguieron, el sobrestock generó un fuerte descenso en el precio del producto y el cabildo recurrió a subirlo para estimular a los mercaderes a sacarlo de sus depósitos y ponerlo a la venta. Así obró en marzo de 1695 y en enero de 1698: en este último caso, respondiendo al pedido de los mercaderes Joseph de Aberasturi y Joseph Villegas, acordó llevarlo a 12 pesos la arroba, pero sólo hasta que la ciudad volviera a estar abastecida normalmente. En octubre de ese año le tocó el turno al aguardiente: a petición de Joseph de Urbiola y de otros pulperos, se llevó el precio del cuartillo de 6 a 8 reales, “*atendiendo al bien común de esta república y a la conveniencia de los suplicantes*”.³⁶⁰

Ese movimiento pendular se continuó durante el cambio de siglo. En noviembre de 1699, el cabildo dispuso bajar el precio al vino para que “*todo el común participe de esta conveniencia*”, pues habían llegado grandes cargamentos de vino desde Cuyo.³⁶¹ En diciembre, cuando había “*vino suficiente para el abasto de sus habitantes*”, se fijó

³⁵⁷ En 1720, el ayuntamiento establece que cada botija equivaldrá a 24 frascos y cada frasco a 2 cuartillos; AECBA Serie II, Tomo IV, págs. 133-137. Equivale a decir que en un frasco se envasaban 1,48 litros.

³⁵⁸ AECBA Serie I, Tomo XVII, págs. 68-69.

³⁵⁹ AECBA Serie I, Tomo XVII, págs. 146-147.

³⁶⁰ AECBA Serie I, Tomo XVII, págs. 279-280 y 439.

³⁶¹ AECBA Serie I, Tomo XVII, págs. 568-569.

el precio a 12 pesos la arroba.³⁶² En agosto de 1701 el producto volvió a faltar y ordenó subirlo a 14 pesos, pues se alegó que a precios más bajos no habría “*persona que se atreva a echarlo en las pipas*”.³⁶³ En enero de 1702 las existencias se habían incrementado lo suficiente para que la corporación volviera a moderar los precios, arancelando la arroba de vino a 10 pesos y el cuartillo de aguardiente a 8 reales.³⁶⁴

Durante los gobiernos de Valdés Inclán y de Velasco, en los que el cabildo tuvo los índices de actividad comparativamente más bajos de todo el período, las regulaciones se volvieron más raras y en todos los casos para moderar los precios. La primera no ocurrió hasta febrero de 1706, en que bajo el pretexto de que la ciudad se hallaba “*muy abastecida de vino*”, el cabildo ordenó que bajaran de 16 a 12 pesos la arroba.³⁶⁵ En noviembre de 1709 tuvo que volver a intervenir para que el precio bajase, en este caso a 10 pesos. En junio de 1710 recurrió a una estrategia diferente: ya no se dispuso un arancelamiento general, sino que se encargó a Miguel de Riblos y a otros dos cabildantes que salieran a reconocer las partidas de vino y actuaran conforme a la calidad de las mismas, señalándoles precios diferenciados.³⁶⁶ Todo parece indicar que paralelamente se produjo un relajamiento en los controles sobre las ventas: los regidores fieles ejecutores dejaron de fiscalizarlas y depositaron esa tarea en el recaudador de los Propios, que no era un funcionario del cabildo sino el arrendatario de los impuestos municipales. Se encargó a éste que recogiera las medidas que se usaban para fraccionar en las pulperías, las arreglara y las sellara.³⁶⁷ Al arribar el pesquisidor Mutiloa a Buenos Aires, la botija de vino (equivalente a media arroba) costaba unos 25 pesos, es decir, unos 12½ pesos la arroba. En julio de 1712, el cabildo consideró que este precio era exorbitante y se dispuso a “*moderarle en su justo precio de modo que no se tiranice al Pueblo*”. El mismo fue bajado a 18 pesos la botija, o lo que es lo mismo, a 9 pesos la arroba.³⁶⁸

Durante el período de turbulencias políticas que se extendió entre 1713 y 1716, el cabildo porteño se abstuvo de administrar los precios de vinos y aguardientes. Pero desde la llegada de Zavala al gobierno, la corporación procedió a arancelarlos anualmente, lo mismo que a la mayor parte de los productos de consumo básico. Esta

³⁶² AECBA Serie I, Tomo XVII, pág. 573-574.

³⁶³ AECBA Serie II, Tomo I, pág. 635.

³⁶⁴ AECBA Serie II, Tomo I, pág. 85.

³⁶⁵ AECBA Serie II, Tomo I, pág. 432.

³⁶⁶ Se dispuso que “*conforme a su calidad... señalen a los dueños un precio competente a que lo puedan vender*”; AECBA Serie II, Tomo II, 302.

³⁶⁷ AECBA Serie II, Tomo II, 204-205.

³⁶⁸ AECBA Serie II, Tomo II, 521-522.

política de controles parece haber afectado a los productores y traficantes de caldos, que le hicieron llegar sus reclamos. En una petición presentada en 1720, un grupo de viñateros mendocinos, que aseguraba haber remitido los vinos de mejor calidad y más añejos, imploró que se les permitiera aumentar los precios de venta. Al discutir el asunto, el ayuntamiento se mostró dividido. El alcalde de 1er voto Pablo González de la Cuadra opinó que la botija de vino tenía un costo de 13 pesos y que su precio en Buenos Aires no debía bajar de 17 pesos. El alcalde de 2do voto Juan Vicente de Vetolaza y Luna, por el contrario, aseveró que no era de tan buena calidad como afirmaban los viñateros y desaconsejó un aumento. El alcalde provincial Ruiz de Arellano y el alguacil mayor Luis Navarro, a quienes sus pares reconocían como peritos por haber participado en el tráfico de caldos, difirieron en sus consideraciones, pues el primero sostuvo que el precio era insuficiente y el segundo que era excesivo. Los regidores presentes dividieron sus votos, inclinándose tres de ellos por el parecer de Vetolaza y otros dos por el de González de la Cuadra. Pero aunque se impuso la opción de moderar el precio por botija, el gobernador Zabala ignoró la votación y lo aumentó a 16 pesos, fijándolo por medio de un auto.³⁶⁹

Las existencias de vino y aguardiente en Buenos Aires tendían a agotarse cuando el tráfico desde las ciudades andinas menguaba en forma estacional, particularmente en invierno, y eso solía generar desabastecimiento y especulación. En esas situaciones el cabildo se creía forzado a intervenir. Pero su objetivo prioritario no era abaratar los precios sino garantizar el normal suministro de esos productos, evitando que las existencias fueran ocultadas en los depósitos de los mercaderes. Por tal razón, la estrategia básica a la que recurría la corporación era la de moderar los precios cuando la plaza se hallaba atestada de dichos productos e incrementarlos en momentos en que estaba mal abastecida. Mediante la suba de los precios, se estimulaba a acaparadores y tenderos a ofrecer sus existencias en momentos de escasez; mediante la baja, se buscaba que aquellos almacenaran una parte del stock, a fin de que estuviesen disponibles cuando el tráfico de esos productos decayese.

Al establecer el “justo precio” de un producto de consumo básico como el vino, en suma, el propósito del cabildo fue conseguir un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades del común y el beneficio esperado por traficantes y dispenseros. Se conjugaban de esa forma los factores de mercado y el peso teológico de la noción de

³⁶⁹ AECBA Serie II, Tomo III, págs. 149-155.

justicia.³⁷⁰ No obstante, ni los argumentos del cabildo se agotaron en esos postulados ni sus políticas de intervención se limitaron a la administración de los precios. No faltaron los casos en que la abundancia de estos productos resultó reprochable desde un ángulo moral distinto y movió a la corporación a interponerse. En 1690, por ejemplo, el procurador denunció que circulaba abundante aguardiente en las tabernas y que ello era perjudicial para los esclavos y la gente de servicio. Esa fue una de las razones que impulsó a que el ayuntamiento dispusiera que solamente pudiese ingresar a la ciudad una botija de aguardiente en cada carreta que llegase a Buenos Aires, mientras que no se establecían restricciones al ingreso de vino, que por entonces escaseaba.³⁷¹

Todavía durante la última década del siglo XVII, la administración de precios alternó con medidas regulatorias de carácter coactivo. Una de ellas fue el abastecimiento forzoso: en tiempos de carestía, se obligaba a un comerciante a sacar a la venta sus reservas respetando los precios impuestos por la corporación. En 1691, bajo el pretexto de que había “*gran falta de vino para el mantenimiento común y general de esta república*”, dos comerciantes fueron forzados a hacerlo: Diego Martínez Tirado debió desprenderse del tercio de una carga de aguardiente que había traído de Mendoza y Gerónimo de Gaete de una carga de vino que acarreó desde La Rioja. En 1699, el procedimiento se repitió: Diego de Videla había entrado con 160 botijas y se le ordenó que no las vendiese “*si no fuere en las pipas de la ciudad*”, reservando el vino que le quedase para cuando se agotara el que se volcare en dichos toneles. Al optar por el abastecimiento forzado, el cabildo buscaba evitar que los traficantes prefirieran negociar sus ventas con los capitanes de las embarcaciones que se hallaban en el puerto, de los que podían obtener precios más convenientes. La corporación recurrió también a ofrecer el monopolio de la plaza a un comerciante a cambio de que se respetara un precio previamente convenido. En 1697 dos mercaderes porteños, Juan de Sosa y Monsalve y Juan Antonio de Zeballos, ofrecieron proveer de vino a las pulperías a 9 pesos la arroba “*con tal que sean preferidos y antelados en la venta*” y consiguieron que no se permitiera a otros intervenir en el mercado hasta que hubiesen colocado todas sus existencias.³⁷² Pero aunque el monopolio de las ventas era usual en el abastecimiento de

³⁷⁰ Kendall BROWN “El estudio de la historia de los precios en la América española colonial: metodología y oportunidades” en **América Latina en la Historia Económica**. Boletín de Fuentes, N°5, enero-junio de 1996, Págs. 19-30.

³⁷¹ AECBA Serie I, Tomo XVII, pág. 296 y 306-309.

³⁷² AECBA Serie I, Tomo XVIII, pág. 407.

carne, en el caso del vino no fue sino una medida de carácter excepcional, y la administración de los precios se impuso como la estrategia de regulación más utilizada.

¿Arancelamiento general o intervenciones puntuales en los precios?

El cabildo de Buenos Aires tuvo dos maneras de ejercer un control sobre los precios. La primera de ellas era vigilar las oscilaciones que se producían en el de un producto específico –como hemos visto en el caso del vino– e intervenir cuando se veían afectadas las expectativas normales de abastecedores y consumidores. La segunda era confeccionar un listado de los productos considerados esenciales para el abastecimiento de la población y arancelarlos. Las dos prácticas coexistieron, aunque la segunda, a la que en un principio se recurrió más raramente, acabó por imponerse. A lo largo del período estudiado, el testimonio más antiguo de arancelamiento que hemos hallamos se remonta a 1693. Ese año el cabildo expresó haber encontrado un “*gran desorden*” en los precios de los géneros de abasto y fijó los del pan, la yerba, el tabaco, las azúcares blanca y negra, la miel y el jabón. Se delegó en el fiel ejecutor la tarea de ponerle precio al resto de los “*géneros menestibles*”.³⁷³ La operación se repitió en febrero de 1699, en que se agregaron a los productos anteriores las cuartillas de vino y aguardiente y diferentes tipos de legumbres.³⁷⁴ En enero de 1702, respondiendo a un pedido del procurador Francisco de Tagle Bracho, sólo fueron arancelados la arroba de vino, el cuartillo de aguardiente, el ají, el tabaco, la sal y el azúcar del Cuzco y del Paraguay.³⁷⁵

A partir de allí, la práctica del arancelamiento fue abandonada durante más de una década y media. No fue hasta 1719 en que el ayuntamiento volvió a listar los productos de consumo básico para señalarles un precio: en este caso fueron incluidos el frasco de vino, el de miel, la yerba, las azúcares blanca y negra, el tabaco, el ají, la sal, algunas legumbres como los porotos, las lentejas y los garbanzos, las pasas de higo y de uva, los panes de jabón, las velas, los huevos y el queso.³⁷⁶ En abril de 1720 se agregó a los productos anteriores el maní y se establecieron precios distintos para el tabaco de pito y el tabaco de hoja.³⁷⁷ Pero en junio de 1721 se produjo una importante innovación: el listado incluyó por primera vez las distintas variedades de pan, al disponer que por la

³⁷³ AECBA Serie I, Tomo XVII, págs. 122-123.

³⁷⁴ AECBA Serie I, Tomo XVII, 510-511.

³⁷⁵ AECBA Serie II, Tomo I, pág. 85.

³⁷⁶ AECBA Serie II, Tomo IV, pág. 21.

³⁷⁷ AECBA Serie II, Tomo IV, pág. 163.

suma de 1 real podrían adquirirse 2 libras de pan blanco, 3 libras de pan bazo o 4 libras de *semita* (nombre que se daba al salvado menudo, una suerte de “harina para pobres”).³⁷⁸ Tanto en esa ocasión como en enero de 1723 se sumó a la lista de precios el frasco de aguardiente, que había sido pasado por alto en los aranceles de 1719 y 1720.³⁷⁹ Ello demuestra una actitud ambigua frente al consumo de esta bebida, que en repetidas ocasiones había sido señalada como perjudicial para los esclavos y la población de casta.

Las listas de alimentos arancelados –es decir, considerados de consumo básico para los pobladores de todas las categorías socioétnicas de la ciudad– se fue ampliando a lo largo del período estudiado. La presencia de cereales y legumbres es el testimonio incontestable de la temprana adaptación de la agricultura europea al medio rioplatense, y revelan el éxito de la vecindad española en implantar las pautas alimentarias y las prácticas culinarias procedentes del Viejo Mundo. El único componente dietario de origen americano que fue contemplado fue el ají, utilizado como condimento. Llama la atención la ausencia del maíz, del que sabemos que estaba presente en el mercado, ya que por entonces formaba parte del grano recaudado por los cobradores de diezmo: quizás no fue arancelado porque aún no formaba parte de la dieta de la vecindad blanca, sino sólo de la de los mestizos, indios y negros. Los demás elementos que aparecen listados revelan pautas alimentarias de antigua raigambre europea.³⁸⁰ La excepción fue el azúcar, pero como puede apreciarse en los aranceles, a dos siglos de haber sido incorporada a la dieta occidental ésta seguía compitiendo con la miel en su condición de edulcorante básico. El hecho de que la carne vacuna –el “alimento universal” de todos los grupos humanos en Buenos Aires– y la grasa –usada para freír y dar sabor a las comidas, pues suplía en las cocinas porteñas al aceite– no estuvieran incluidas en ellos respondió en un principio a su abundancia y baratura. Pero más tarde, cuando las reses comenzaron a escasear, esa ausencia se debió a que el régimen de precios de dichos productos se pactó por fuera de los aranceles.

En el Cuadro N°5 hemos sintetizado las políticas intrusivas del cabildo en relación con la venta de productos de consumo básico. Se ha considerado tanto la administración de los precios como otro tipo de intervenciones que precedían o acompañaban a esa regulación, generalmente dirigidos a regular las condiciones de almacenamiento y venta

³⁷⁸ AECBA Serie II, Tomo IV, pág. 310.

³⁷⁹ AECBA Serie II, Tomo IV, pág. 39.

³⁸⁰ Jesús CONTRERAS HERNÁNDEZ y Mabel GRACIA ARNAIZ **Alimentación y cultura. Perspectivas antropológicas** Ariel, Barcelona, 2005, Págs. 231 y ss.

de dichos productos. Para los sábalos y bagres pescados en el río, por ejemplo, no sólo se establecía el precio por unidad sino el sitio de la Plaza Mayor en que debían ser vendidos. En el caso de vinos y aguardientes, la fijación del precio venía casi siempre acompañada de la prohibición de venderlo en frascos u otros envases no autorizados por la corporación. Pero el producto que fue vigilado más de cerca fue el trigo: con frecuencia, el ayuntamiento controlaba el tráfico desde las chacras hasta su entrada en el mercado de la plaza y su conversión en harina.

Cuadro N° 5 - Intervenciones del cabildo de Buenos Aires en el abastecimiento de los productos de consumo básico (1690-1726)

	.90	.91	.92	.93	.94	.95	.96	.97	.98	.99	00.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Arancelamiento Gral.				1	1					1			1																	1	1	1		1	1		1
aguardiente		2	1		1			1	1		1									1									1								
vino		1		1	1	2	1		2	2	1	1	1	1			1		1	1	1		1						1		2			1			
yerba				2				1																													
trigo y pan										1		1	1	1	2	1										1	2		1			4	1				2
sebo y grasa															1												1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1
carne																											1	1	2					1		1	
sal																							1										1				
pescado										1													1														

Fuente de los datos: AECBA, varios tomos.

En el cuadro anterior se observa que los productos que fueron objeto de mayor número de intervenciones hasta la primera década del siglo XVIII fueron el vino y el aguardiente, seguidos algo de lejos por el trigo y el pan. Es importante destacar que desde el gobierno de Velasco y Tejada hasta el de Baltasar García Ros –los años más tormentosos de la lucha facciosa– los niveles de intervención bajaron a un mínimo, al punto de desaparecer entre 1713 y 1714. Sólo el precio del vino siguió siendo objeto de control por parte del cabildo. Pero durante el gobierno de Zavala cambiarán las tendencias. Por un lado, se aprecia el interés que tuvo el cabildo en mantener controlados los precios de la carne vacuna, la grasa y el sebo a partir de la declinación del ganado cimarrón en las praderas pampeanas. La necesidad de recurrir al escaso ganado doméstico que se criaba en las estancias o de suplirlo por reses traídas desde la Banda Oriental lo llevó a propulsar nuevas medidas, entre las cuales se destacó la construcción de un matadero, donde la faena y el almacenamiento de las medias reses

respondía a ciertos criterios elementales de salubridad. También se fiscalizó el tráfico de trigo y se inauguró el primer “pósito” o depósito municipal de granos. Además, se amplió el repertorio de productos incluido en los aranceles, entre ellos las legumbres, las hormas de queso y los huevos, lo que revela que estos últimos habían pasado a formar parte de la dieta alimentaria básica de todos los sectores de la población.

El abastecimiento de carne y de trigo

A continuación analizaremos dos de los renglones del abasto supervisados por el cabildo porteño: la carne de res y el trigo. Su intervención se asemejó al de otras corporaciones municipales en otros puntos del imperio español. En el caso de la carne, el abasto a pregón fue sacado a pregón y concedido a quien presentara la oferta más conveniente en calidad y precios. De esa manera, el aprovisionamiento quedaba en manos de un asentista que se comprometía a surtir a la ciudad durante un año. Aunque el suministro era objeto de control por parte del ayuntamiento, éste garantizaba al abastecedor el monopolio sobre las ventas. El abasto de trigo, en cambio, no podía colocarse en manos de asentistas, ya que la imposibilidad de prever los resultados de las cosechas convertía en impracticables los contratos de esa naturaleza.³⁸¹ Hubo que recurrir a otro tipo de regulaciones, fundamentalmente los controles sobre el tráfico de granos, para impedir el acaparamiento y la especulación. En situaciones extremas, tanto si escaseaba trigo como las reses, se recurrió a medidas coactivas: el gobernador o la corporación forzaron a los productores a enviar sus existencias al mercado, operación que era supervisada por los alcaldes de la Hermandad en la campaña y por el fiel ejecutor u otro de los miembros del cabildo en la ciudad.

El abastecimiento de carne fue el que debió someterse a mayor cantidad de ajustes a lo largo del período que estudiamos. La carne vacuna era para los porteños un alimento de consumo diario, salvo en las fechas del calendario religioso en que se practicaban el ayuno y la abstinencia. Su importancia en la dieta está sobradamente confirmada por los testimonios de la época, a veces no sin exageración. En 1696, cuando el alcalde ordinario Vicente de Otálora dispuso que se faenaran reses en los corrales de la ciudad tres veces por semana –los lunes, miércoles y sábados– explicó que el objeto de esta medida era “*que tengan sus vecinos y moradores carne fresca, que es el único*

³⁸¹ Concepción de CASTRO **El pan de Madrid. El abasto de las ciudades españolas del Antiguo Régimen** Alianza Editorial, Madrid, 1987, Pág. 187.

mantenimiento con que se sustentan”.³⁸² La dieta alimentaria de los habitantes de Buenos Aires, como afirmamos arriba, se encontraba atravesando entonces un proceso de complejización y mostraba variaciones significativas de acuerdo con la extracción socioétnica del consumidor. Quizás no coincidamos con Otálora en que la carne de res fuera el único componente de su ingesta, pero era sin dudas el alimento más barato y el que gozaba de mayor difusión entre todos los estratos de la población.

Usualmente, el cabildo sacaba a pregón el abasto anual de carne. Si se postulaban varios vecinos se optaba por el mejor postor, que era quien ofrecía el precio más conveniente por animal. Pero hubo años en que el negocio de suministrar carne a la ciudad no resultó rentable y las ofertas se retrasaban o no había quien se postulase. En esas ocasiones, el ayuntamiento obligaba a los hacendados a turnarse semanalmente para conducir reses a los corrales del abasto. El primer testimonio de esa práctica se remonta a 1690, en que veintiséis vecinos debieron alternarse para abastecer la ciudad de cuartos de res, carne de ternera y sebo.³⁸³ En marzo de 1699 volvió a repartirse la carga, imponiéndola a un hacendado por mes, y se encomendó a los alcaldes de la Hermandad que visitaran las estancias para que hicieran elección de las mejores reses.³⁸⁴ En 1708 no hubo oferentes para el abasto y el cabildo despachó comisiones para reconocer el ganado de rodeo en las estancias de Luján, Cañada de la Cruz, Conchas, Matanza y Magdalena, luego de lo cual tomaría providencias para establecer “*la forma en que se han de repartir las semanas del año*” entre los hacendados.³⁸⁵ La ventaja de aprovisionarse en las estancias consistía en que éstas proporcionaban animales gordos y de mejores carnes, diferentes del ganado cimarrón, que era flaco y correoso.

En la segunda década del siglo, las razones por las que se recurrió al ganado doméstico fueron diferentes: el ganado cimarrón en las pampas comenzó a ralear y había que internarse muchas leguas en la pampa para capturarlo, con lo cual la rentabilidad de la explotación de este recurso se convirtió en nula. El cabildo ordenó entonces inspeccionar las estancias en procura de animales invernados: en 1712 designó a dos hacendados para hacerlo, y cuatro años más tarde confió esa tarea al alcalde provincial de la Hermandad, Joseph Ruiz de Arellano. A falta de postores para el abasto, en 1716 y 1717 se dispuso que los hacendados se turnaran semanalmente para

³⁸² AGN IX-19-01-07 *Archivo del Cabildo (1690-1728)*.

³⁸³ AECBA Serie I, Tomo XVII, pág. 294-297.

³⁸⁴ AECBA Serie I, Tomo XVIII, pág. 513.

³⁸⁵ AECBA Serie II, Tomo II, pág. 67-69.

proveer de reses a la ciudad. La corporación consideraba que no lo harían si no se los forzaba: aseguró que “*los pocos vecinos que tienen dicho ganado reusarán el matarlo por la poca esperanza de volverse a proveer, por estar la campaña ya del todo destruida*”.³⁸⁶ Asimismo estableció los precios para las reses en pie y para las terneras, lo mismo que para el cuarto de res, las lenguas, ubres y capaduras. En los años que siguieron, continuaría fijándolos en forma separada de los aranceles generales.³⁸⁷

Pero las existencias de ganado doméstico no bastaron para responder a la demanda, ya que durante décadas los hacendados habían renunciado a criarlo en sus estancias, salvo el necesario para el sustento de peones y esclavos. En ocasiones fue necesario sacrificar vacas lecheras para sostener el aprovisionamiento de carne. En enero de 1718, el alcalde provincial Ruiz de Arellano fue enviado a Santa Fe a adquirir 16.000 cabezas de ganado traído de la otra banda del Paraná —es decir, de Entre Ríos— para normalizar el suministro. Pero se trataba de una solución provisoria. Anteriormente se había encomendado a Juan de Samartín, Fernando Valdés y otros traficantes de ganado que trajeran grandes tropas de animales de la Banda Oriental para el abasto. Pero ello no había atemperado el problema de la escasez y el ayuntamiento percibía que ésta continuaría hasta que se repoblaran las estancias. En junio de ese año se debatió la posibilidad de comprar 12.000 vacunos y repartirlos por el precio de costo a los estancieros, quienes podrían así formar nuevos rodeos y “*lograr multiplico*” y así acabar con la dependencia que se tenía de las tropas traídas de otras regiones.³⁸⁸

El repoblamiento de las estancias, no obstante, no se conseguiría sino a mediano plazo, por lo que se siguió recurriendo a traerlo desde la otra banda del río. En 1719 se planeó realizar una *recogida general* de 50.000 cabezas de ganado vacuno en la Banda Oriental: el propósito de la misma era tanto abastecer de carne a la ciudad como repartir vacas de vientre entre los estancieros.³⁸⁹ En la década de 1720 se dispuso realizar una *vaquería anual* en territorio oriental para abastecer de carne a Buenos Aires. En 1723, ésta fue sacada a pregón, como se hacía antes con el abasto de carne. El asiento fue concedido a Juan de Rocha, que abasteció a la ciudad con reses traídas de la otra banda, a las que hacía pasar por un corto período de engorde en un campo de invernada sobre el río Areco antes de conducir las al matadero.³⁹⁰

³⁸⁶ AECBA Serie II, Tomo II, pág. 297-298.

³⁸⁷ AECBA Serie II, Tomo III, pág. 548-549; Serie II, Tomo V, pág. 455.

³⁸⁸ AECBA Serie II, Tomo III, pág. 570-571.

³⁸⁹ AECBA Serie II, Tomo IV, págs. 25 y 28.

³⁹⁰ AECBA Serie II, Tomo V, pág. 455.

En su preocupación por garantizar el consumo de la carne de res, el cabildo advirtió que las monedas de baja denominación —el medio real y el cuarto de real o “cuartillo”— no circulaban suficientemente y que esto impedía a los menesterosos adquirir los cortes más baratos. En 1716, el procurador observaba que para “*el común de los pobres era corriente comprar medios cuartos de carne*”, pero como escaseaba la moneda sencilla se veían obligados a comprar medias reses. La corporación propuso que se fabricaran “señales” de plomo con el sello de armas de la corona para que circularan en reemplazo de los cuartos de real.³⁹¹ El gobernador García Ros respaldó la iniciativa y ordenó que entraran en circulación las primeras 160 piezas de plomo para que las familias pobres pudieran comprar un octavo de res.³⁹² Estas cuasi-monedas continuaron vigentes hasta por lo menos los primeros meses de 1718.³⁹³

En 1722, el alcalde provincial Ruiz de Arellano propuso que las reses fueran trozadas en seis partes y no en cuatro, como se venía haciendo habitualmente. Si bien los estratos bajos de la población pudieron beneficiarse con cortes más reducidos y por lo tanto más asequibles, su propuesta estaba más bien dirigida a reducir los desperdicios y la pestilencia en los meses más calurosos. Ruiz de Arellano consiguió que el cabildo le concediera licencia para construir un matadero que respondiera a ciertos estándares de higiene, en que se dispondría de un corral de piso enladrillado para realizar las faenas, de un corredor bien ventilado donde colgar la carne a resguardo de la luz solar y de un despacho de venta con romanas y pesas.³⁹⁴ Entre 1722 y 1725, sus instalaciones fueron sometidas a varias inspecciones y se convirtieron en objeto de fuertes críticas por parte de otros cabildantes, menos por objeciones técnicas que a causa de las tensiones facciosas que dividieron a la corporación durante el gobierno de Zavala. Pero el matadero fue finalmente habilitado y reemplazó a los corrales adonde anteriormente se conducía al ganado para faenarlo. Fue el primer intento que se hizo por erradicar la hediondez y la enorme acumulación de inmundicias que acompañaba al faenamiento de las reses.

El abasto de trigo no sólo estuvo signado por las fluctuaciones en las cosechas sino también por las diferentes coyunturas por las que atravesó la ciudad. La presencia de las compañías negreras —la de Guinea entre 1703 y 1713 y la del Mar del Sur entre 1714 y

³⁹¹ AECBA Serie II, Tomo III, págs. 301-302.

³⁹² AGN IX-42-8-1 *Legajo que contiene diferentes bandos y otras providencias de gobierno del Sr. Zabala y de Dn Baltasar García Ros.*

³⁹³ AECBA Serie II, Tomo IV, 548-549.

³⁹⁴ AECBA Serie II, Tomo V, pág. 530.

1719 y entre 1722 y 1726— trajo al puerto un importante número de buques. Estos demandaron pan para aprovisionar a su tripulación durante la estadía en la ciudad y biscocho para cargar en sus bodegas antes de zarpar. Recurrieron también a los panificados para alimentar a los africanos recién desembarcados durante su período de cuarentena: en 1719 se encontraron en los depósitos del Retiro, donde se hallaban las barracas de los asentistas ingleses, 230 bolsas de biscocho almacenadas con ese fin.³⁹⁵ A esa demanda se sumaba la que generaban los tripulantes de los navíos de registro que arribaron al puerto de Buenos Aires, en convoyes de entre dos y cuatro barcos.

Una buena cosecha podía bastar para aprovisionar de harinas a la población estable y accidental de la ciudad. Pero las evidencias documentales demuestran que esto no se conseguía sino ajustadamente y que cualquier accidente que alterara ese frágil equilibrio podía conducir al desabastecimiento. Un ejemplo de ello lo encontramos en el bienio 1704-1705. Mientras que se producía la llegada al puerto de varios buques franceses cargados de esclavos, el gobernador Valdés Inclán emprendía la toma de la Colonia del Sacramento auxiliado por las compañías de veteranos y de milicianos de la ciudad, que debieron ser aprovisionados desde Buenos Aires. Esta explosión coyuntural de la demanda se conjugó con dos malas cosechas. En respuesta a ello, el cabildo se vio obligado a inspeccionar los depósitos de trigo en la campaña y sólo permitió a los labradores que conservaran lo estrictamente necesario para siembra y el sustento de sus familias.³⁹⁶

Al afrontar a la carestía de granos, la corporación actuó de manera diferente que al enfrentar la escasez de vino. En este último caso, como hemos visto, se incitaba a los acopiadores a poner a la venta sus reservas permitiéndoles que subieran los precios. Eso no ocurrió con el trigo más que en una sola ocasión, en 1704, cuando se permitió que el precio se elevara de 10 a 14 pesos, en atención a la “esterilidad” de la cosecha y a la numerosa gente de mar que había arribado en los cinco navíos que se encontraban en el puerto.³⁹⁷ Pero en otras coyunturas de escasez, el ayuntamiento actuó obedeciendo a una lógica distinta. El principio del “justo precio”, que debía resultar satisfactorio tanto para el vendedor como para el comprador, no fue aplicable al trigo, las harinas o el pan. Sólo se reconocía al labrador el derecho a conservar la porción de semilla necesaria para el sustento y la futura siembra. A los traficantes de granos, los atahoneros y los panaderos

³⁹⁵ AGN IX-41-1-4 *Providencias de embargo ordenadas por Bruno Mauricio de Zavala contra el Real Asiento*.

³⁹⁶ AECBA Serie II, Tomo I, pág. 329.

³⁹⁷ AECBA Serie II, Tomo I, pág. 174.

se les negaba el beneficio adicional que podía brindarles la especulación, que la corporación podía llegar a pasar por alto cuando se trataba de otros productos. Estos criterios estrictos la movieron a intervenir no sólo para fijar los precios, sino para forzar a labradores y acopiadores a vender sus existencias o incautarlas si estos se mostraban reticentes a obedecer.

La primera disposición que se tomaba frente a la amenaza de escasez era ordenar a los alcaldes de la Hermandad que registraran los graneros de las chacras y estancias para calcular las reservas de grano. Eso podía suceder cuando recién había sido levantada la cosecha –lo que podríamos considerar una medida de previsión– o en cualquier otro momento del año en que el grano comenzara a escasear. Esto último sucedió, por ejemplo, en 1702, año en que la indagación se realizó en el mes de julio.³⁹⁸ En 1718, 1721 y 1726, en cambio, el escrutinio se realizó en febrero, apenas finalizada la siega.³⁹⁹ El propósito de inspeccionar las fincas en ese momento parece haber sido adelantarse a los acopiadores, quienes al conocer los resultados de la cosecha salían a la campaña a negociar con los labradores. El escrutinio de 1721 es el único del período del que se han conservado cifras: en su recorrido, los alcaldes de la Hermandad encontraron almacenadas 8314 fanegas de trigo. Dado lo exiguo de esa cosecha, sólo se permitió a los labradores conservar el grano necesario para su gasto. El resto lo mantendrían en sus graneros “*a ley de depósito*” –es decir, como si no fueran sus propietarios, sino sólo sus administradores– y cuando bajaran a la ciudad a venderlo deberían dar noticia al fiel ejecutor.⁴⁰⁰ Recordemos que éste se encontraba en la Plaza Mayor, que era el único sitio autorizado para realizar estas transacciones.

Una segunda medida que se tomó contra la escasez fue la de restringir el radio de las ventas. Para garantizar que la ciudad estuviera bien abastecida se hizo necesario impedir la saca de trigo fuera de su jurisdicción. Tanto el gobernador como el cabildo prohibieron la saca en 1711, 1715, 1718, 1721, 1722 y 1726.⁴⁰¹ En 1721, el gobernador Zavala ordenó a los alcaldes de la Hermandad que registrasen las carretas que salían de la ciudad por el camino real, ya que podían ocultar costales de trigo: el objeto de esta disposición parece haber sido el de impedir su extracción a Santa Fe, cuyos vecinos habían intentado sin éxito aprovisionarse en Buenos Aires. Ese mismo año, el cabildo

³⁹⁸ AECBA Serie II, Tomo I, págs. 131-132.

³⁹⁹ AECBA Serie II, Tomo III, pág. 524; Serie II, Tomo V, págs. 281-282 y 576.

⁴⁰⁰ AECBA Serie II, Tomo V, págs. 281-282.

⁴⁰¹ AECBA Serie II, Tomo III, págs. 164-165 y 524; Serie II, Tomo IV, pág. 456; Serie II, Tomo V, pág. 587.

restringió el tráfico de trigo a otras ciudades y prohibió que fuera embarcado en el Riachuelo.⁴⁰² Esta colocación de barreras entre el mercado local y los de las ciudades vecinas fue la causa principal por la que quedó trabada la formación de un mercado regional de cereales.⁴⁰³ Disentimos en este punto con lo afirmado por otros autores, que proponen un mercado porteño integrado regionalmente, lo que no ha podido ser constatado durante la época aquí estudiada.⁴⁰⁴

Fueron raras las ocasiones en que el cabildo intervino para moderar los precios del trigo. Este no era en sí mismo un producto de consumo básico, como llegó a serlo su derivado, el pan, de modo que fue este último el que se convirtió en objeto de arancelamiento. Una de las excepcionales intervenciones de la corporación se produjo en mayo de 1716, en que habiendo subido el precio de la fanega de trigo a 12 pesos, dispuso que fuera vendido a 8. La segunda que se registra acaeció en junio de 1721, cuando ordenó bajarlo de 6,5 a 4,5 pesos. Unas semanas más tarde de que se tomase esta última medida, se presentó en el ayuntamiento el labrador Antonio Sotelo, quien afirmó hacerlo “*en nombre de los demás labradores y cosecheros*”, y solicitó que no se le pusiera precio máximo al trigo. Esta quizás haya sido la primera *representación de los labradores* en la historia de nuestra ciudad. Luego de largas discusiones, los cabildantes optaron por rechazar su pedido.⁴⁰⁵

La carestía de 1721 parece haber sido particularmente grave. Curiosamente, quienes han reconstruido la evolución de los precios del trigo a lo largo del siglo XVIII no la han dejado registrada.⁴⁰⁶ Zavala ordenó a los alcaldes ordinarios y regidores que salieran a inspeccionar los graneros, asignándose a cada uno de ellos un pago de la campaña. Los cabildantes se resistieron a emprender una tarea que ordinariamente era asignada a los alcaldes de la Hermandad, demorando una y otra vez su salida. El gobernador invitó a la corporación que propusiera una solución alternativa y ésta dispuso comprar el trigo que fuera bajado a la ciudad y almacenarlo en los calabozos de la cárcel. Se formó así un rudimentario “pósito” o granero municipal —el primero del

⁴⁰² AECBA Serie II, Tomo IV, pág. 372.

⁴⁰³ Para los factores que trabaron la consolidación de mercados regionales y luego de un mercado nacional, véase: Enrique LLOPIS y Sonia SOTOCA “Antes, bastante antes: la primera fase de la integración del mercado español de trigo, 1725-1808” en **Historia Agraria** Universidad de Murcia, N° 36, agosto de 2005, Págs. 225-262.

⁴⁰⁴ Se ha sostenido que “el mercado porteño tenía cierto grado de apertura hacia otros mercados” y que “la economía de Buenos Aires no era tan cerrada como suponía la historiografía”. Martín CUESTA **Precios, población, impuestos y producción...** Pág. 101.

⁴⁰⁵ AECBA Serie II, Tomo IV, pág. 327.

⁴⁰⁶ Véase el apéndice de Martín CUESTA **Precios, población, impuestos y producción...**; allí podrá apreciarse que los precios no parecen variar entre 1719 y 1722.

que se tenga noticia en Buenos Aires— que fue puesto a cargo del alcalde de 2do voto y del fiel ejecutor. El propósito de este pósito era disponer de suficientes reservas para atender al consumo de los habitantes. En este caso, no se trató solamente de impedir el acopio de grano en manos de especuladores, sino también de evitar que los panaderos monopolizaran el expendio de pan, cuyo precio también estaba en alza. Se distribuyó parte de ese grano entre las vecinas de la ciudad, para que éstas amasaran pan y lo vendieran.⁴⁰⁷

Además, el cabildo incautó el diezmo recaudado ese año, que alcanzaba las 1550 fanegas de trigo. Mientras que los acopiadores ofrecían la fanega a 3 pesos, aquel salió a venderlo a 1 peso con 6 reales y distribuyó en veinte días unas 800 fanegas entre los vecinos, obligando a los demás oferentes a bajar los precios.⁴⁰⁸ No sabemos cuánto del grano que conservaban los labradores en sus trojas fue enviado al pósito. Cuando los alcaldes de la Hermandad recorrieron chacras y estancias registrando los graneros, hallaron en ellos 8314 fanegas. Considerando que la cosecha rondó las 15.000 fanegas, aquellos aún retenían alrededor del 55% del grano recogido: si se conjetura que los labradores apartaban un 40% del grano para su consumo y siembra, no sería aventurado afirmar que cuando los alcaldes realizaron su recorrido, aquellos ya habían vendido un tercio de lo producido a espaldas del cabildo y sólo retenían un 15% de excedente.⁴⁰⁹ Por otra parte, los calabozos eran húmedos y de exiguas dimensiones, lo que pudo haber disuadido al ayuntamiento de recurrir a medidas coactivas para hacerse enviar el grano que aún retenían los labriegos para almacenarlo.⁴¹⁰ Lo cierto es que el gobernador

⁴⁰⁷ AECBA Serie II, Tomo IV, págs. 332-336.

⁴⁰⁸ En 1723 la Iglesia se reservó el diezmo de grano de dos pagos y en ellos se recogieron más de 1550 fanegas de trigo; éstas fueron puestas por orden del cabildo en el pósito, “*dando orden de que se diesen a 4 reales menos de lo que en las casas particulares se vendiese; por el mes de noviembre inmediato se llegó a bajar un peso pues se llegó a dar por 14 reales valiendo por 20 reales y 3 pesos en la ciudad, de que se siguió haberse vendido a los pobres de esta ciudad y vecinos en veinte días ochocientas fanegas con que se concluyó...*”. AGN IX-13-2-1 *Diezmos Clase II (1636-1731)*.

⁴⁰⁹ En un trabajo anterior hemos hecho una estimación de cómo resultaba distribuido el grano entre consumo y venta. Nos basamos en las declaraciones hechas por los labradores del pago de las *Conchas de esta banda* al alcalde ordinario Juan Joseph Castilla en 1755. En esa ocasión, algo menos de la mitad del grano declarado quedó disponible para su venta (47,6%), mientras que una proporción algo menor fue imputada a la manutención de los cultivadores y a la semilla que se necesitaba para sembrar al siguiente año (39,6 %). El resto correspondió a otras erogaciones, entre ellas el pago del diezmo y el arrendamiento. Carlos M. BIROCCO “Política municipal de aprovisionamiento de trigo en el Buenos Aires colonial” en **Revista de la Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y Humanidades**, la Universidad de Morón, N° 8, mayo de 2001, Págs. 71-73.

⁴¹⁰ De acuerdo con el libro de Propios del cabildo, ese mismo año hubo que recomponer las puertas de los calabozos. No faltan en dicho libro las alusiones a goteras en los techos de las celdas ni a la reparación de huecos en sus muros, hechos por los presos para fugarse. La infraestructura de este improvisado pósito debe haber dejado bastante que desear.

Zavala consideró que la gestión de la corporación en administrar aquella “*porción de trigo*” había sido exitosa y le hizo saber su aprobación por medio de un auto.

Otra preocupación conjunta del gobernador y del cabildo fue la de asegurarse que los labradores dispusieran de brazos para segar sus trigos. En 1692, el cabildo solicitó al Colegio de la Compañía de Jesús que remitiese guaraníes desde las Misiones para que trabajaran en la temporada de cosecha. Pero a partir de allí, durante más de una década y media faltaron medidas concretas para reclutar trabajadores para la siega. No fue hasta fines de 1719 en que se volvió a convocar a los guaraníes que se encontraban en la ciudad (posiblemente trabajando en las obras de las fortificaciones), lo mismo que a los mulatos libres, indios y mestizos. Como estos no resultaron suficientes, unos días más tarde se hizo concurrir a los portales de la plaza a zapateros, sastres y carpinteros para ser repartidos entre las “*pobres viudas*” labradoras.⁴¹¹ Esta operación se repitió en enero y diciembre de 1721: como se aguardaba una abundante cosecha de trigo, se apercibió a los “*oficiales de todos los oficios mecánicos*” para que salieran a segarlo. Pero la primera “*leva de peones*” no se produjo hasta diciembre de 1723, en que Zavala ordenó a los cabildantes a que salieran ellos mismos a la campaña a reclutar segadores para la cosecha. Los regidores no estuvieron exceptuados de participar en esta “*matrícula de los peones, indios, mulatos y esclavos*”. Como estos opusieron resistencia, el gobernador les ordenó que aprontaran la recorrida de los campos. Terminaron disculpándose por sus demoras, pretextando que aún no se había concluido con la leva de peones en los arrabales de la ciudad, y aceptaron el encargo con la condición de que no sirviera en adelante de ejemplar.⁴¹²

Nos queda, por último, referirnos a los derivados del trigo: las harinas y el pan. Los panaderos de la ciudad hacían moler el trigo en atahonas –norias movidas por caballos que trituraban el grano con piedras dentadas– ya que los molinos hidráulicos eran raros en Buenos Aires. Lo que le interesaba al cabildo era precaverse de que los atahoneros cometieran fraude al moler el grano, ocultando parte de la harina, por lo que creyó necesario establecer una correlación entre el grano a triturar y la harina resultante. Se recurrió para ello a un recipiente estandarizado para pesar la harina, la *cuartilla de medir*, que respondía a un patrón de medida fijado por la corporación.⁴¹³ El fiel ejecutor recorría las atahonas para asegurarse de que los propietarios sólo utilizaran las *cuartillas*

⁴¹¹ AECBA Serie II, Tomo IV, pág. 121.

⁴¹² AECBA Serie II, Tomo IV, págs. 216-217 y 232.

⁴¹³ Este recipiente no se correspondía a la unidad de medida conocida como “cuartilla”, equivalente a un cuarto de fanega.

que habían sido distribuidas por el cabildo y llevaban su sello. En 1704, el regidor Hernando Rivera Mondragón se presentó en una atahona y calculó los rendimientos de la molienda, a partir de lo cual se acordó que por cada fanega de trigo debían devolverse 6 *cuartillas de medir* de harina.⁴¹⁴ Pero no se hicieron precisiones sobre el peso ni la calidad de ésta. No obstante, gracias a un testimonio de la época virreinal sabemos que con una fanega de trigo, que equivalía a alrededor de 91 kilogramos, “antiguamente” se producían una 100 libras de harina flor, más otras 50 libras de salvado menudo o “semita” (45,9 y 22,9 kilogramos respectivamente).⁴¹⁵

Respecto del precio que cobraban los atahoneros para moler el grano, no contamos más que con una referencia. En mayo de 1699, los dueños de las atahonas decidieron tasar sus servicios en 6 reales por fanega de trigo, cuando con anterioridad sólo cobraban 4 reales. Esto inflamó la retórica del cabildo, que proclamó “*grandemente damnificados [a] esta república y todos sus habitantes*” y aseguró que no toleraría “*semejante desorden*”, ordenándoles retrotraerse al precio anterior. Los atahoneros presentaron una súplica: afirmaron que debido a la falta de pastos causada por la sequía, sus caballos no soportaban el trabajo y se morían de flacos, complicando su labor y redoblando sus gastos. Pero la corporación no cedió.⁴¹⁶ En 1704 y 1708, se continuó haciendo alusión a los numerosos engaños que se cometían en las mediciones.⁴¹⁷ Uno de los regidores afirmó que había “*muchos milites*” que administraban atahonas: se trataba de oficiales de baja graduación y soldados que, a causa de los retrasos en los pagos, encontraban en ello con qué sustentarse.⁴¹⁸

Pasemos, por último, al pan. ¿Cuál era el lugar que ocupaba éste en la dieta alimentaria de los porteños? Garavaglia, sin negar la preponderancia de las proteínas animales, ha mostrado lo difundido que llegó a ser entre los habitantes de todos los estratos sociales. De acuerdo con sus apreciaciones, a fines del siglo XVIII el consumo anual *per capita* promediaba los 158,7 kilogramos, colocándose algo por encima del estimado por García Belsunce, quien lo calculó en 136 kilogramos. Este último agregó que durante esa centuria, la ingesta anual *per capita* se estimaba en Francia en 147 kilogramos: de ser así, Buenos Aires habría ostentado una ingesta estándar de pan que

⁴¹⁴ AECBA Serie II, Tomo I, pág. 263.

⁴¹⁵ Véase Carlos M. BIROCCO “Política municipal de aprovisionamiento de trigo...”

⁴¹⁶ AECBA Serie I, Tomo XVIII, págs. 537-540.

⁴¹⁷ La denuncia más concreta es la de septiembre de 1708, en que se afirma que “*hay mucha desorden en el modo de moler el trigo en las atahonas, en que está informado se sustrae mucha cantidad de harina de los que la llevan a hacer*”; AECBA Serie II, Tomo II, pág. 91.

⁴¹⁸ AECBA Serie II, Tomo I, pág. 263.

se acercaba bastante a la europea occidental.⁴¹⁹ No obstante, ambos autores se remiten al período virreinal y nada autoriza a pensar que la ingesta de pan haya sido la misma a comienzos del siglo XVIII.

Parece haber existido una estrecha correlación entre la condición social del consumidor y el tipo de pan consumido. A partir de los distintos grados de refinamiento se obtenían tres tipos de harinas panificables. La más refinada era la *harina flor*, que estaba destinada a la fabricación del pan blanco. A ésta la seguía en calidad la *harina cabezuela*, que se utilizaba para la obtención del pan común.⁴²⁰ La tercera, llamada *semita* o salvado menudo, se destinaba a un producto considerado de calidad inferior conocido como pan bazo, de color moreno, que a lo largo de esa centuria fue señalado como el preferido de la plebe urbana y la servidumbre indígena.⁴²¹ El origen de esos hábitos alimenticios estratificados debe buscarse en un prejuicio común en la Europa Mediterránea que se remonta a los romanos: el de considerar la superioridad del pan blanco por sobre el pan moreno, sin que haya prueba fehaciente de que uno tenga alguna ventaja nutricional sobre el otro.⁴²²

Ahora bien, ¿cuáles era el consumo anual *per capita* en el período que estudiamos? Para saberlo, necesitamos cifras confiables sobre la producción de trigo. Sólo contamos con un dato de relativa fiabilidad: en 1723 y 1724, el obispado de Buenos Aires se decidió a no tercerizar el cobro del diezmo y apeló a recaudarlo por sus propios medios. En 1723 los labradores tributaron 3080 fanegas y al año siguiente, 2643.⁴²³ En base a

⁴¹⁹ Juan Carlos GARAVAGLIA “El pan de cada día: el mercado del trigo en Buenos Aires, 1700-1820” en **Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani**, Tercera Serie, N°4, Buenos Aires, segundo semestre de 1991, Pág. 16; César GARCIA BELSUNCE “Diezmos y producción agrícola en Buenos Aires virreinal” en **Investigaciones y Ensayos** N° 38, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1990, Pág. 351.

⁴²⁰ Juan Carlos GARAVAGLIA “El pan de cada día...”, Pág. 15.

⁴²¹ Esto se observa, por ejemplo, en las cuentas del Hospital Real de San Martín, cuyo administrador se servía de mitayos de nación quilme y distribuía entre ellos raciones de harina de semita, con la que estos sirvientes indios amasaban algún tipo de pan o tortas; véase Carlos M. BIROCCO “La primera Casa de Recogimiento de Huérfanas de Buenos Aires: el beaterio de Pedro de Vera y Aragón (1692-1702)” en José Luis MORENO (comp.) **La política social antes de la política social (caridad, beneficencia y política social en Buenos Aires, siglos XVII a XX)** Trama, Buenos Aires, 2000, Pág. 36.

⁴²² Jack GOODY **Cocina, cuisine y clase. Estudio de sociología comparada** Gedisa, Barcelona, 1995, Págs. 127-128.

⁴²³ La iglesia da detalle de lo que se recaudó en cada partido. Se recogieron en 1723 en el pago de la Costa 680 fanegas, en Matanza 400 fanegas, en los pagos de Luján a Areco 1200, en los pagos de Areco a las Hermanas 450, en Magdalena 350. En 1724, se recogieron entre Conchas, Magdalena, Matanza y Costa 1700 fanegas, en Luján 680 y en Areco 263. AGN IX-13-2-1 *Diezmos Clase II (1636-1731)*. Por razones que desconocemos, las cifras difieren de las que registra Juan Carlos GARAVAGLIA “Producción cerealera y producción ganadera en la campaña porteña: 1700-1820” en Daniel SANTAMARINA, Herbert KLEIN, Luis MILLONES, Juan Carlos GARAVAGLIA, Jorge GELMAN y Dedier Norberto MARQUIEGUI **Estructuras sociales y mentalidades en América Latina. Siglos XVII y XVIII** Biblos, Buenos Aires, 1990, Pág. 223.

ello, la “cosecha anual promedio” del bienio pudo estimarse en 28.615 fanegas, de las que habrá que deducir el diezmo y el pago del arrendamiento en especie (que evaluamos en un 5% de la semilla).⁴²⁴ Si aceptamos considerar que los labradores se reservaron el 40% del grano cosechado para mantener a sus familias y sembrar al año siguiente, habrían quedado disponibles para el mercado unas 12.877 fanegas.

¿Cómo calculamos a partir de ello el consumo individual de pan? Gracias a un informe de la época virreinal, sabemos que harina flor y semita, reducidas a una común especie, se convertían en 115 libras de harina mezclada, con las que se producían 138 libras de pan cocido, o lo que era lo mismo, 2208 onzas de pan: con una fanega de trigo, en síntesis, se producían alrededor de 63,3 kilogramos de pan común.⁴²⁵ Si conjeturamos que las fanegas de trigo que quedaron disponibles para el mercado en 1723-1724 (dos años que se caracterizaron por cosechas relativamente abundantes y precios estables, por lo que no existen razones para pensar que la oferta de este producto pudo haberse contraído) fueron convertidas en pan, la ingesta de los alrededor de 9000 habitantes de Buenos Aires se redujo a tan sólo 90,5 kilogramos anuales *per capita*.

A partir de estas estimaciones, es posible entender mejor por qué el cabildo sólo fijó una vez el precio del pan en la década de 1690 y no volvió a hacerlo por casi dos décadas. Si el pan tardó en ingresar en la canasta de los artículos con precios regulados pudo haberse debido a que aún no estaba lo suficientemente difundido entre el común de la población para forzar su inclusión. Es posible que existieran pautas diferenciadas en el consumo de este producto que separaban no sólo a los españoles de la población indígena y mestiza –como se ha constatado, por ejemplo, en el caso de Córdoba– sino a los españoles europeos de los españoles americanos.⁴²⁶ Esto último se desprende de un acuerdo del cabildo de 1690, en que se afirma que “*el mayor consumo que hay de pan recae en la gente militar de este Presidio*”.⁴²⁷ Se aludía en ese caso a los oficiales y soldados de la guarnición, la inmensa mayoría de los cuales había nacido en la península, de donde vinieron con sus preferencias alimentarias a cuestas.

⁴²⁴ El arriendo en semilla, que era el más difundido, era por costumbre igual a la semilla sembrada. El rendimiento promedio de una siembra variaba entonces entre 1/10 y 1/20; en este caso, tratándose de dos “buenos años” para el trigo, proponemos valernos del rendimiento hipotético mayor, lo que llevaría la renta al 5% de lo cosechado.

⁴²⁵ AGN IX-19-3-2, *Archivo del cabildo de Buenos Aires (1780-1783)*.

⁴²⁶ Se ha sostenido que en Córdoba existía una “diferenciación entre los grupos de españoles que consumían casi con exclusividad pan de trigo y el de las castas que comían harina de maíz... por ser el primero un bien asociado a un grupo al que se reconocía cierta distinción”; Aníbal ARCONDO **El ocaso de una sociedad estamental**... Pág. 227-228

⁴²⁷ AECBA Serie I, Tomo XVII, pág.

Pero el consumo del pan entre la población parece que se estaba consolidando a comienzos de la década de 1720, cuando el cabildo comenzó a arancelar anualmente este producto. No es casual que ello ocurriera en el mismo momento en que la carne vacuna empezó a escasear y a encarecerse, obligando a la población a variar su habitual ingesta de proteínas animales. Fue entonces que el cabildo hizo por primera vez referencia a la existencia de dos variedades distintas de pan: el blanco (es decir, el que se amasaba en base a harina flor) y el bazo (aquel en cuya elaboración se utilizaba la semita). La mención a este último deja entrever que el consumo de pan estaba penetrando en los sectores de menores recursos, a quienes estaba destinado este producto de inferior calidad y bajo costo. Hasta que incluyó al pan en el arancel anual, el cabildo sólo se había preocupado de establecer el peso de cada hogaza, que debía ser de 12 onzas (aproximadamente 350 gramos).⁴²⁸

Uno se pregunta por qué durante casi tres décadas la corporación se ocupó de fiscalizar el precio del trigo y la calidad de las harinas y pareció desentenderse del pan, salvo para evitar que se cometieran fraudes en el pesaje. El hecho de que el ayuntamiento tuviera mayor interés en la provisión de harinas que en la venta de pan se debió, según creemos, a que aquellas fueron en su mayor parte destinadas a producir biscocho para abastecer a las embarcaciones que recalaban en el puerto: esa era la única ocupación lícita de las mujeres casadas y viudas en Buenos Aires, además de ser uno de los emprendimientos domésticos más lucrativos.⁴²⁹

Ordenamiento de la trama urbana y saneamiento

Otro de los problemas que el cabildo de Buenos Aires tuvo que enfrentar fue el impulso que recibió el crecimiento edilicio a partir de los últimos años del siglo XVII, que aportó densidad a la trama urbana a la vez que desbordó los límites de ésta. Los primeros indicios del mismo pueden apreciarse a partir de 1690, aunque cobró mayor vigor desde finales de la década de 1710. En 1718, dos oficiales de la Real Hacienda, Martín de Mena y Mascarúa y Alonso de Arce y Arcos, afirmarían que medio siglo atrás “*esta ciudad era la mitad o menos de lo que hoy es*”.⁴³⁰ La corporación acompañó la

⁴²⁸ AECBA Serie II, Tomo II, pág. 309. La onza equivalía a 28,71 gramos.

⁴²⁹ Para la fabricación y venta de bizcocho en el Río de la Plata colonial, véase: María Emilia SANDRIN **El sitio a Colonia del Sacramento, la economía local y su gente 1735-1737** Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2011.

⁴³⁰ AGN IX-41-9-6 *Autos arreglando el número de pulperías de la ciudad*.

expansión urbana propiciando el ensanche de la cuadrícula de la ciudad a expensas del ejido circundante. Pero también tuvo el propósito de poner orden en ese crecimiento, disponiendo que los frentes de las casas respetaran una imaginaria “línea municipal” y no avanzaran sobre la calzada, y cuidando que las calles se mantuviesen limpias de escombros y basuras y respetasen la dirección trazada desde la fundación, todo ello con el objeto de que la circulación de carretas y personas no se viese entorpecida. Asimismo, se ocupó de que pudiesen evacuarse los efluentes pluviales en dirección del río o de las zanjales laterales a la ciudad.

Desde fines del siglo XVII, los terrenos baldíos y huertas, que hasta la década de 1670 parecen haber ocupado gran parte de la trama originaria de la ciudad, empezaron a ceder frente a las edificaciones. El crecimiento demográfico que acompañó a esta modesta pero sostenida expansión edilicia no fue solamente la consecuencia del crecimiento vegetativo de la población, sino que obedeció a la llegada de tandas de peninsulares al puerto. La política defensiva impulsada por el gabinete de Carlos II y mantenida por Felipe V se sostuvo gracias al envío de contingentes de soldados, en su gran mayoría jóvenes solteros que terminaron entroncándose mediante el matrimonio con las familias de la vecindad española y requirieron de parcelas para levantar nuevas viviendas. A ello se sumó el arribo de población de casta desde el interior, atraída por los altos jornales que se pagaban en la ciudad, que también acabó por radicarse en ella. Hacia 1690, la zona edificada dentro de la trama originaria tendía a completarse y el cabildo dispuso su ampliación mediante la ocupación de una porción del ejido circundante.

El ejido era un área de propiedad municipal, originariamente libre de construcciones y repartos, que bordeaba el trazado de la ciudad y quedaba disponible para ampliar la trama urbana en el caso de que la población se incrementara. En tanto esto no ocurriera solía estar dedicada a la producción hortícola. Constituía, como observa Aguilera Rojas, un auténtico cinturón protector y un elemento de transición y de filtro entre las áreas construidas y las tierras de labranza.⁴³¹ A imitación de lo que sucedía en Castilla, las Leyes de Indias respetaban el carácter de ejido que se daba a los terrenos que se encontraban a la salida de los poblados: tratándose de tierras municipales, estaban colocadas bajo administración de los cabildos.⁴³² Se acostumbraba que fueran estos

⁴³¹ Javier AGUILERA ROJAS **Fundación de ciudades hispanoamericanas** Mapfre, Madrid, 1994, Págs. 131-132.

⁴³² María Fernanda BARCOS “El influjo del Derecho Indiano en la legislación sobre ejidos de la Provincia de Buenos Aires, 1782-1870” en **Revista de Indias** Universidad Complutense de Madrid, Vol. 72, Nro. 256, Págs. 687-715.

quienes repartieran terrenos en el ejido a los vecinos, pero la Recopilación de Leyes de Indias cuestionó esa facultad y dispuso que los virreyes (o en su lugar los gobernadores) revocaran las concesiones hechas por los ayuntamientos y obligaran a los poseedores de esos lotes a adquirirlos en *moderada composición*, haciéndolos medir a su costa y abonando un derecho a la corona.⁴³³ No obstante, en Buenos Aires las autoridades centrales no pusieron obstáculos a que el cabildo continuase con la venta de manzanas o solares en el ejido de la ciudad, debido a las escasas rentas propias con que contaba para solventar sus muchos gastos.

Juan de Garay había organizado la cuadrícula de la ciudad disponiendo las calles de norte a sur y de este a oeste. Pero el trazado no fue objeto de regulación hasta 1608, en que el gobernador Hernandarias, acompañado de dos peritos amojonadores y de tres vecinos, emprendió la mensuración de la ciudad y del ejido. Partiendo de la plaza, se midieron 12 cuerdas de 151 varas (1570,3 metros) en dirección al norte y otras tantas en dirección al sur, y se colocaron los mojones que servirían en adelante para fijar los lindes de la ciudad. Luego se echaron 24 cuerdas en dirección al poniente (3140,6 metros) hasta llegar a los fondos de la traza originaria. La operación se completó con la medición del ejido de la ciudad, que se extendía una legua hacia las afueras en dirección norte, sur y oeste.

En 1689, la corporación se propuso ensanchar la traza de la ciudad “*en todo su contorno*”, incorporando a la cuadrícula originaria 150 varas en dirección norte, sur y oeste. Pero el gobernador Joseph de Herrera y Sotomayor sólo aprobó la extensión hacia el poniente, ya que al norte y al sur el terreno debía quedar reservado para fortificar la ciudad ante la eventualidad de un ataque enemigo. En 1692, la corporación consultó a su sucesor, Agustín de Robles, y éste le dio libertad para que también se ampliaran las 150 varas en dirección al norte y pudiese vender manzanas, solares y cuartos de solar, siempre que se dejase desocupado un terreno de 1000 pies de circunferencia que se tenía destinado a construir un bastión defensivo.⁴³⁴

Tras incorporar una reducida franja de terrenos a la cuadrícula de la ciudad, hubiera debido hacerse un reajuste en las medidas del ejido, pero el cabildo no se ocupó de ello sino tardíamente. En 1711 se dispuso efectuar una mensura de las chacras del pago de

⁴³³ José María OTS CAPDEQUI **El régimen de la tierra en la América Española durante el período colonial** Montalvo, Ciudad Trujillo, 1946, Pág. 148.

⁴³⁴ Archivo de Geodesia y Catastro de la Provincia de Buenos Aires, Duplicado de Mensura N° 2 de la Capital Federal, *Ejido de 24 cuerdas de Buenos Aires (1608)*.

Monte grande (San Isidro) para determinar hasta donde llegaba éste por el norte.⁴³⁵ Es posible que esa medición se hiciera también en dirección al sur, ya que un testimonio de 1714 indica que la rinconada que se hallaba más allá del Riachuelo (donde hoy se encuentra la ciudad de Avellaneda) formaba parte de los terrenos ejidales.⁴³⁶

Durante la primera década del siglo XVIII, fueron escasas las intervenciones del cabildo en los espacios públicos. En 1709, el procurador Joseph Ruiz de Arellano relataba que las lluvias, combinadas con los baches que dejaba el trajín de caballos y carretas, convertían las calles en un lodazal, al punto de que “*las paredes de las casas rozan las aguas y barro, sin dejar la menor senda por donde poder caminar a pie*”. Agregaba que las casas de los vecinos, afectadas por la humedad, se desmoronaban en breve tiempo, y que los sacerdotes se veían imposibilitados de asistir a los enfermos y llevarle el viático a los moribundos mientras que las lluvias no cesaban. Pero su propuesta de traer piedra desde Martín García y adoquinar las calles fue rechazada por el gobernador Velasco.⁴³⁷

Hasta iniciarse la segunda década del siglo XVIII, el ayuntamiento se mostró menos preocupado en el reordenamiento urbano que en extremar medidas para evitar la difusión de enfermedades infectocontagiosas, particularmente aquellas que podían transmitir los esclavos africanos ingresados por franceses e ingleses. Los consorcios negreros fueron obligados a concentrar su mercancía humana en sitios periféricos, en un principio en barracas sobre el Riachuelo y luego en el Retiro. Las medidas de profilaxis resultaron insuficientes y, entre 1717 y 1718, Buenos Aires vivió el episodio epidémico de mayor gravedad en más de medio siglo. Se trató de un brote de peste bubónica, que ocasionó un considerable número de decesos.⁴³⁸ La corporación prestó auxilio a los afectados por la enfermedad, en su mayoría personas menesterosas. En opinión de los facultativos, el contagio se intensificó por las condiciones degradantes de los tugurios en que éstas vivían.⁴³⁹ Pero faltó un albergue con la capacidad y los medios suficientes

⁴³⁵ AECBA Serie II, Tomo II, pág. 421.

⁴³⁶ En el libro de Propios, al ser inventariados los bienes del cabildo, se incluye “*la rinconada de la otra banda del Riachuelo que pertenece a esta ciudad como consta de una Real Cédula, toca su arrendamiento a los Propios de esta ciudad habiendo quien la arriende*”. AGN IX-47-8-13 *Propios del cabildo*.

⁴³⁷ IX-19-01-07 *Archivo del Cabildo (1690-1728)*.

⁴³⁸ Un acuerdo hace alusión a las 5000 muertes que produjo la peste en 1717 y 1718. Aunque la exageración es evidente, muestra que el número de decesos fue elevado.

⁴³⁹ En una real cédula, Felipe V aprobó la forma en que había procedido el cabildo en la epidemia que sobrevino en 1717, “*de que resultaba moribunda mucha gente pobre*”, socorriéndola a costa de los Propios. Los médicos convocados por el cabildo declararon “*no ser contagio ni proceder la forma en que*

para que todas ellas pudieran ser atendidas: el Hospital de San Martín, que era una dependencia del cabildo, no estuvo preparado para sobrellevar un evento de esa magnitud. Tal fue la razón que se invocó unos años más tarde, en 1724, cuando éste fue cedido a una orden hospitalaria, la de los Betlemitas, para que lo administrara.

Es probable que la peste haya movido al ayuntamiento a poner más atención en el aseo de la ciudad, pues las creencias de la época vinculaban las emanaciones pútridas de los desperdicios con la aparición de enfermedades contagiosas. A fines de 1717 solicitó al gobernador que lanzara un bando contra quienes arrojaran inmundicias en las calles y envió a dos regidores para que hicieran remover “*todo cuanto pueda ser dañoso al bien común*”. En el otoño de 1721 se dispuso que los solares no edificados fuesen cercados por sus dueños para que no se convirtieran en muladares o en refugio de malvivientes, imponiendo una multa de 100 pesos a los contraventores.⁴⁴⁰ Al año siguiente, el cabildo ordenó acondicionar las calles principales de la ciudad, señalando que algunas de ellas se hallaban tan arruinadas que resultaban “*incapaces [para] el trajín de la gente*”.⁴⁴¹ Sospechamos, sin embargo, que su interés en repararlas era puramente coyuntural: se aproximaban los festejos de San Martín de Tours y estaba prevista la conmemoración de la coronación de Luis I, en los que el alférez real, seguido por los demás oficiales concejiles, encabezaría la procesión cívica que conduciría el pendón real por la plaza y las calles que la rodeaban. Las tareas de conservación y limpieza no fueron costeadas por el ayuntamiento sino delegadas en los vecinos, a quienes amenazó con sancionar si no se ocupaban de ellas. La única mejora concreta que sobrellevó la corporación estuvo relacionada con la evacuación de las aguas pluviales. En octubre de 1725, un regidor fue enviado a corroborar de qué manera las dificultades en el drenaje de las calles afectaban las edificaciones contiguas. A resultas de esa inspección se dispuso que se construyeran bocacalles en las esquinas y montaran terraplenes para desviarlas hasta sus canales naturales de desagüe.⁴⁴²

Paralelamente, el reordenamiento se proyectó hacia las afueras de Buenos Aires. Como la construcción de edificios públicos y viviendas requirió de materiales, aparecieron en el ejido una multitud de pequeños hornos en que se fabricaban tejas y ladrillos. Estos generarían un trajín de carretas en dirección a la ciudad de tal magnitud

morían los más sino de la mucha necesidad y desabrigo que padecían”. AGN IX-19-8-1 *Copiador de Reales Cédulas y Provisiones (1583-1725)*, f. 315.

⁴⁴⁰ AECBA Serie II, Tomo IV, pág. 305.

⁴⁴¹ AECBA Serie II, Tomo IV, pág. 372.

⁴⁴² AECBA Serie II, Tomo V, pág. 512.

que en 1724 el ayuntamiento los amonestaría por entorpecer el tránsito en los caminos. Paradójicamente, el principal demandante de esos materiales era la misma corporación, que había invertido más de 4600 pesos en reedificar la casa capitular y los calabozos, y solventó además la refacción del pórtico y las torres de la catedral y la reparación de la iglesia de San Juan. El ayuntamiento jamás se hubiera opuesto al crecimiento edilicio de la urbe pues dio un notable impulso a la venta de los terrenos ejidales, que se convirtió para él en un nuevo renglón de ingresos. A partir de 1722 comenzó la asignación de parcelas en el ejido, algunos de cuyos beneficiarios fueron los mismos cabildantes o sus allegados. Previamente emprendió un reconocimiento general de los suburbios con el propósito de indagar si los dueños de hornos, casas, ranchos y huertas contaban con títulos de propiedad y así desalojar a los ocupantes precarios del terreno.⁴⁴³

Propios, arbitrios y otros ingresos del cabildo

La gestión pública del cabildo dependía de su propia habilidad para generar recursos: los servicios prestados a la vecindad, la reparación de los edificios públicos y el sostén del ritual cívico-religioso no eran subsidiados por la corona sino solventados por la hacienda municipal. En el Buenos Aires de fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, el erario concejil contaba con ingresos aún escasos. Sus entradas proveían de dos ramos: los *Propios* y los *Arbitrios*. Los *Propios* eran los bienes que pertenecían al patrimonio comunal y las rentas que arrojaban estos: entre ellos se encontraban los terrenos fiscales del ejido, que podían arrendarse o venderse, y las casas que pertenecían a la corporación y que ésta alquilaba en forma unitaria o por aposentos. A esas rentas se agregaban las que provenían de censos o hipotecas emplazados en los inmuebles de propiedad concejil. Algunos vecinos habían destinado legados y limosnas al Hospital de San Martín, la edificación de mayor envergadura que pertenecía a la corporación, y esos fondos fueron colocados a réditos, gracias a lo cual se obtenía una utilidad anual que en 1708 ascendía a 265 pesos.⁴⁴⁴

El segundo renglón de entradas eran los *Arbitrios*, que eran los ingresos fiscales del ayuntamiento. Algunos se remontaban a los tiempos de la fundación de la ciudad y otros le habían sido otorgados más tarde por la corona. Las rentas originarias consistían en el

⁴⁴³ AECBA Serie II, Tomo V, pág. 576.

⁴⁴⁴ Los réditos eran pagados por Pedro Millán, María Rosa Alvarado (la esposa de Miguel de Riblos), Domingo Calvo, Juan de Sosa y Monsalve y Hernando Rivera Mondragón; IX-11-7-9 *Hospital de San Martín, cuentas (1708-1728)*.

cobro de distintos derechos que eran usuales en las comunas castellanas. Uno de ellos era la *correduría de lonja*, que se cobraba a las transacciones entre vecinos y era de 4 reales al vendedor y 4 al comprador. Le seguían la *pregonería*, que consistía en el 1,5% del valor de todo lo que se remataba en pública almoneda; la *romana*, que gravaba en 8 reales el pesaje de cada 180 arrobas de mercancías, y la *mojonería*, de 1 real por cada botija de vino que entrase en la ciudad. También se cobraban diferentes lacrados: 2 reales por los sellos que se ponían en las pipas de vino en las tabernas y 1 real por los que se colocaban en las pesas y medidas utilizadas por mercaderes y pulperos.⁴⁴⁵ El conjunto de estos derechos era sacado a pregón y subastado a un tercero: el mejor postor se convertía en el “arrendatario de Propios”, generalmente por un lapso de cinco años. En 1693, éste abonaba al cabildo la suma de 300 pesos por año; la misma bajó a 220 pesos anuales en 1697, pero ascendió a 235 pesos en 1702 y a 350 pesos en 1709.⁴⁴⁶ En 1713, el mayordomo del cabildo debió hacerse cargo de la recaudación por no haberse presentado postores, y de allí en más continuó bajo la administración directa por la corporación.⁴⁴⁷

Un tercer renglón de ingresos fue la recaudación de la alcabala. Este impuesto sobre las ventas, calculado en el 4% del monto de cada operación, fue en un principio de carácter universal, ya que no estaban exceptuadas personas o congregaciones en razón de fuero o privilegio, pero con el tiempo la corona fue concediendo ciertas excepciones. Esta no emprendía la percepción directa ni lo arrendaba a particulares, sino que prefería “encabezarlo” en los ayuntamientos de las ciudades, a los que confiaba su recaudación a cambio de pagar a la Real Hacienda una suma previamente convenida.⁴⁴⁸ En Buenos Aires, fueron los alcaldes ordinarios quienes obraron usualmente como recaudadores, aunque con frecuencia solicitaron la ayuda de los regidores u otros oficiales para la cobranza. No tenemos indicadores fiables de qué utilidades arrojó la administración de las alcabalas para la corporación. En 1724, el síndico procurador las remató en nombre del ayuntamiento por 5 años en la suma de 2505 pesos: esto sugiere que la recaudación anual prevista superaba los 500 pesos. Más allá de los rendimientos, fue el recurso fiscal que más se prestó a la corrupción, ya que ofrecía a los recaudadores la posibilidad de

⁴⁴⁵ **Correspondencia de la ciudad de Buenos Aires con los reyes de España...** Págs. 270-271

⁴⁴⁶ AGN IX-19-4-1 *Archivo del Cabildo (1790)*. XII, 401

⁴⁴⁷ Hubo algunas excepciones. En 1722, se hace mención a 34 pesos ingresados de la “*mojonería de yerba que se remató*” en Francisco de Merlo.

⁴⁴⁸ Miguel ARTOLA “El encabezamiento de alcabalas, 1537-1546” en **Economía y cambio histórico. Estudios en homenaje a Luis Ángel Rojo** Editorial Complutense, Madrid, Vol. II, Págs. 3 y ss.

exigir a los comerciantes una gratificación a cambio de reducir u omitir el cobro de este impuesto.

Los gravámenes a las pulperías fueron otro renglón de ingresos de la hacienda concejil. Cada cuatro meses, el fiel ejecutor las visitaba para inspeccionar las pesas y medidas, haciéndose acompañar por un auxiliar que llevaba los patrones de medición, y les imponían un *derecho de visita* de 8 reales. En 1716, el virrey del Perú dispuso que no se efectuara más que una inspección al año: la corporación resistió la medida, pero el gobernador Zavala le ordenó acatarla. En Buenos Aires sólo estaba habilitado un número limitado de pulperías, a las que se reconocía exclusividad en la venta de los llamados *géneros pulperiles*, como lo eran la grasa, el vino, el aguardiente, la yerba, el azúcar y el tabaco. Esas restricciones era una manera de controlar el expendio de artículos de consumo básico. Dichas pulperías debían pagar un *derecho de compostura* de 20 anuales pesos a la Real Hacienda, pero la corona renunció a la contribución que le debían algunas de ellas y la cedió al cabildo: estas últimas, que en un principio eran cuatro y en 1708 ascendieron a ocho, fueron conocidas como “*pulperías del número de la ciudad*”. Al margen de ellas, existían numerosos tendejones que ofrecían esos artículos al público, desafiando las prohibiciones y eludiendo las cargas fiscales. En 1718, el ayuntamiento reaccionó contra esa proliferación de tiendas clandestinas, atendidas en su mayor parte por soldados y marineros, que superaban el centenar. Se afirmaba que vendían grasa y otros productos a precios exorbitantes, y que algunas de ellas oficiaban como tabernas, a las que acudían indios y esclavos a jugar y embriagarse. Tras denunciar los “*inconvenientes que hay en la República causados de la muchedumbre de pulperías*”, se determinó que éstas no pasarían de veinte: ocho de ellas contribuirían al cabildo y doce a la Real Hacienda. Se dispuso que los tendejones que vendían ropa y otros géneros no pulperiles pagaran un derecho especial, consistente en 10 pesos anuales; los demás fueron clausurados.⁴⁴⁹

Un quinto renglón de ingresos fueron los gravámenes cobrados a las embarcaciones. Se trataba de los derechos de anclaje y de leña, que debían cobrarse a los navíos que recalaban en el puerto: el primero por fondear en él y el segundo por franquearles el corte de maderas en las islas del Paraná y la Banda Oriental. Por medio de una real cédula de 1708, Felipe V confirmó al ayuntamiento en posesión de estos derechos, pero los gobernadores Valdés Inclán y Velasco le impidieron recaudarlos, bajo el argumento

⁴⁴⁹ AGN IX-41-9-6 *Autos arreglando el número de pulperías de la ciudad*.

—en el caso de la leña— de que los montes de árboles eran bienes realengos y no municipales. Estos dos gobernadores impidieron al cabildo el disfrute de ésta y otras facultades que la corona le había reconocido, como las de negociar el embarco de cueros con los capitanes de navío y otorgar permisos para realizar vaquerías, todas las cuales les serían restituidas por el pesquisidor Mutiloa a partir de 1712. Desde entonces, la corporación no tuvo inconvenientes en cobrar el anclaje a los navíos de registro y de aviso venidos de Cádiz, pero debió enfrentar la resistencia a pagarlo de los asentistas ingleses. Cuando en 1713 la *South Sea Company* se radicó en Buenos Aires, el cabildo envió un diputado a negociar el cobro del gravamen, pero el director de dicha compañía argumentó que esa obligación no constaba en el tratado de asiento firmado por ambas coronas y se negó a contribuir hasta que le fuera ordenado hacerlo por un juez competente. Durante casi una década, la corporación se dirigió a los virreyes del Perú para que exigiera a las embarcaciones negreras que se compusieran, pero debió aguardar hasta 1723 para que los asentistas se avinieran a pagar el derecho de anclaje.

En 1717, un nuevo renglón de ingresos se agregó a los anteriores: el *cuartillo de mulas*. En 1715, el cabildo había encargado a su representante en la corte de Madrid que negociara la imposición de un gravamen de $\frac{1}{2}$ real a cada mula que saliese de su jurisdicción. En marzo del año siguiente, el Consejo de Indias le concedió lo que solicitó, estableciéndose que el vendedor pagaría $\frac{1}{4}$ de real por cabeza y el comprador el $\frac{1}{4}$ de real restante.⁴⁵⁰ En abril de 1717 se sacó el derecho a pregón para tercerizar su recaudación, y cinco meses más tarde fue arrendado a Antonio Martínez Pantoja.⁴⁵¹ Pero a partir de 1718, el cobro del cuartillo de mulas fue confiado a uno de los alcaldes de la Hermandad, a quien se retribuyó con el 8% de lo que recaudase. El mismo siguió siendo administrado de esa forma hasta por lo menos 1723.⁴⁵²

Al repasar la evolución de los ingresos del cabildo de Buenos Aires nos encontramos con un escollo insalvable: una parte de ellos no ha quedado registrada en los *libros de Propios*, en que los mayordomos volcaban las cuentas de su gestión. De los derechos de leña, anclaje y cuartillo de mulas, por ejemplo, no quedan sino datos aislados de las utilidades que arrojaron. En cuanto a las alcabalas, aunque eran recaudadas por los alcaldes ordinarios o por un regidor y se registraban con cierta puntualidad en un libro

⁴⁵⁰ No hemos hallado el texto de esta real cédula, sino sólo una mención en AGN IX-19-8-2 *Cabildo de Buenos Aires: Propios (1712-1746)*, donde se refiere que se “mandó dar cédula para que la ciudad perciba medio real de las mulas por mitad del vendedor y comprador”.

⁴⁵¹ AECBA Serie II, Tomo III, pág. 457.

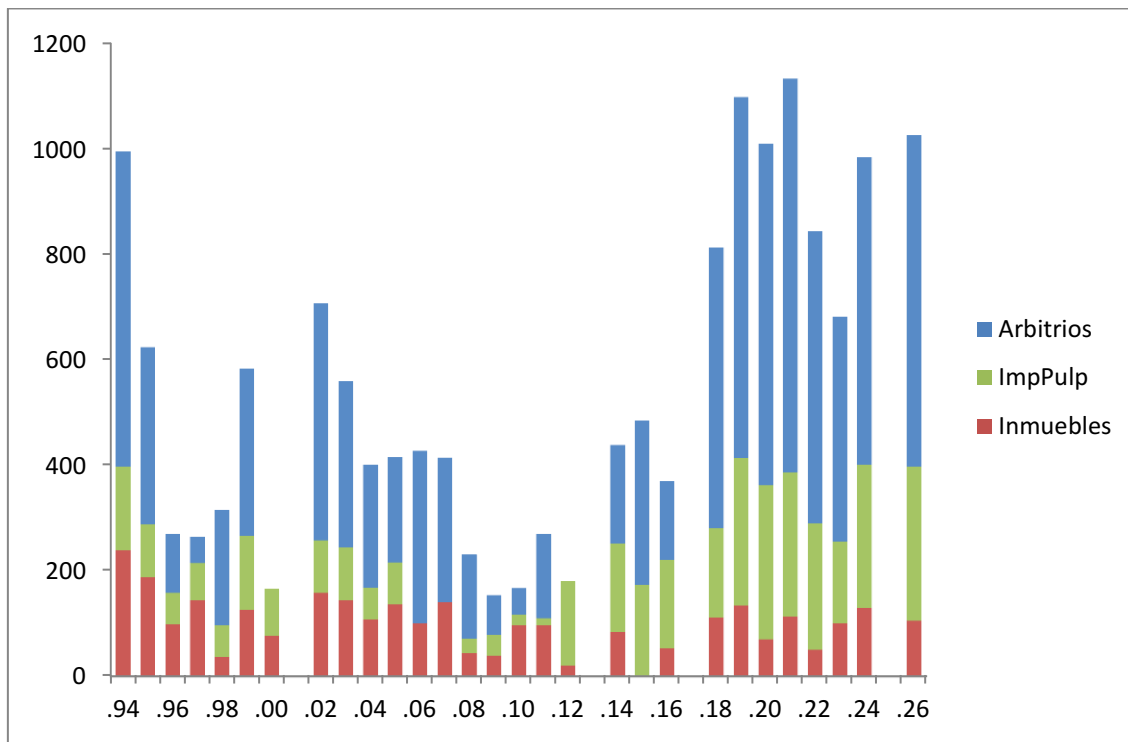
⁴⁵² AECBA Serie II, Tomo III, pág. 488.

separado, no queda en claro qué porción de la recaudación se reservó la corporación. Pero los libros de la mayordomía nos permitirán hacer un seguimiento de tres ramos de ingresos: los derechos que hemos señalado como arbitrios (en particular la pregonería y la mojonería), el arrendamiento de inmuebles urbanos y las contribuciones a las pulperías (visitas y derechos de compostura). Asimismo, constituyen una incomparable fuente de datos para reconstruir los gastos e inversiones de la corporación, ya que era el mayordomo quien procuraba los insumos necesarios para los festejos públicos, socorría a las comunidades religiosas en las ceremonias del ritual católico y supervisaba la adecuada conservación de los edificios que pertenecían al ayuntamiento.

Se conservan dos *Libros de Propios* que conciernen al período estudiado, los cuales se inician en 1694 y se extienden hasta más allá de 1726.⁴⁵³ Estos contienen algunas lagunas: por razones que desconocemos, no han sido volcadas las cuentas de 1701, 1713, 1717 y 1725. En los años restantes contamos con un detalle de las entradas, enumeradas por partidas, cada una de las cuales describe sucintamente el motivo de la contribución y el monto recaudado. En base a ellas se ha podido confeccionar el Gráfico N° 8, en que puede apreciarse la evolución de los tres ramos de ingresos a los que nos referimos anteriormente.

⁴⁵³ AGN IX-47-8-13 *Propios del cabildo de Buenos Aires (1695-1719)*; AGN IX-19-8-2 *Cabildo de Buenos Aires: Propios (1712-1746)*.

Gráfico 8 – Recaudación de contribuciones municipales
ingresadas al Libro de Propios (1694-1726)



Referencias – Arbitrios: incluyen mojonería, romana y pregonería; ImpPulp: derechos de compostura y de visita cobrados a las pulperías; Inmuebles: alquileres de casas y aposentos.

Expresado en pesos de a 8 reales.

Fuente de los datos: AGN IX-47-8-13 y XI-19-8-2.

De los tres ramos de ingresos, las rentas de los inmuebles urbanos fueron las únicas que mostraron una tendencia a estancarse. Decrecieron en importancia dentro del conjunto, a pesar de las constantes inversiones que se hicieron en ellos. Los derechos cobrados a las pulperías tendieron en cambio a incrementarse, no tanto debido al crecimiento del sector sino a que aumentó el número de las que se componían con el cabildo y al hecho de que se presionó eficazmente a los pulperos para que pagaran con mayor puntualidad. Pero el ramo de arbitrios cobró progresivamente importancia y acabó por imponerse a las demás entradas del erario concejil. Hasta 1710, éste no fue administrado por el cabildo sino subastado a particulares, por lo que este renglón de ingresos consistió en las cuotas que estos pagaban al mayordomo. No obstante, los arrendatarios de los arbitrios mostraron cierta irregularidad en el cumplimiento de sus obligaciones, retrasando los pagos o cumpliendo parcialmente con ellos, y hubo uno que

llegó a fugarse para no pagar lo que adeudaba. A partir de 1713, la corporación prefirió delegar la recaudación de los arbitrios en el mayordomo. Este debió ocuparse de cobrar el derecho de mojonería a las botijas de vino y aguardiente que entraban desde Cuyo y La Rioja, el cual dejó utilidades cada vez mayores para la corporación. En 1717 se colocó un puesto de inspección en la Guardia de Luján, en que se detenían las carretas que venían del poniente, del que la corporación se serviría para estrechar los controles sobre los traficantes de caldos y aplicar eficazmente el cobro de este impuesto. A partir de entonces, como se observa en el Gráfico N° 8, no sólo se percibe un aumento en la recaudación de los arbitrios sino de los tres ramos en su conjunto.

Hacia fines de esa década, el cabildo confió la administración del resto de sus ingresos a uno de sus miembros, al que se designó *tesorero de Propios*. Se creó una caja separada de la que administraba el mayordomo, a la que ingresaron las sumas correspondientes a la alícuota que tocó al cabildo en la venta de cueros al Real Asiento británico, las utilidades de las alcabalas y las que arrojó el cuartillo de mulas. Entre 1719 y 1720, el cargo recayó en el regidor Fernández Guillén y en 1721 pasó al regidor Matías Solana. Pero a comienzos del año siguiente, Juan Vicente de Vetolaza y Luna, procurador del cabildo, propuso que fuera conferido a un vecino ajeno a la corporación. Aunque uno de los regidores, el referido Solana, rechazó la propuesta por considerarla indecorosa y opuesta a los privilegios del concejo, los demás cabildantes la aceptaron. Nombrar como tesorero a un vecino que no ejercía un empleo en el ayuntamiento no implicaba necesariamente introducir sujetos extraños al círculo dirigente. El elegido fue un individuo con inocultables vínculos con la camarilla gobernante, Antonio Díaz, dueño de un sólido conocimiento en los asuntos del erario concejil, que había sido mayordomo en 1719 y volvería a serlo en 1724.⁴⁵⁴

Obrando de esa manera, la totalidad de los recursos fiscales del cabildo pasaba a ser administrado por la corporación en forma directa, renunciando a la tercerización parcial de la recaudación. Acabar con el arrendamiento de los impuestos fue otra manifestación del proceso de oclusión que se venía manifestando en el seno de la dirigencia concejil en el plano político. Como referimos en el capítulo anterior, luego de un proceso de apertura en que individuos procedentes de distintos sectores de la élite adquirieron las regidurías recientemente creadas, se produjo un proceso contrario, en que los oficiales concejiles intentaron que los vecinos desvinculados con la camarilla gobernante

⁴⁵⁴ AECBA Serie II, Tomo V, pág. 452.

tuvieran acceso a los empleos electivos y prefirieron asumir ellos mismos dichos cargos. En 1723, la liquidación de las deudas que tenía el Real Asiento británico con el cabildo otorgó a sus miembros la posibilidad de especular con los fondos corporacionales. El teniente de gobernador, Antonio de Larrazábal, irritado por esto, los acusó en febrero de 1724 de defraudación. Enterado de que habían prestado sumas pertenecientes a los fondos corporacionales a terceros, les instó a que nombrasen dos diputados para que en treinta días consiguieran su devolución y presentaran cuentas de la administración de dichos fondos. También dispuso que se respetara lo ordenado en la Recopilación de Leyes de Indias y los regidores no recibieran salario por las comisiones que realizaran a nombre del cabildo. Larrazábal mandó que ninguno se excusase de concurrir el día en que debían nombrarse los diputados, pero el ayuntamiento recurrió a una de sus acostumbradas estrategias de resistencia: la de posponer el tratamiento del asunto.⁴⁵⁵ El conflicto con el teniente de gobernador, que acabaría con la expulsión de la mitad de los regidores, se inició con este entredicho sobre el manejo de los fondos municipales.

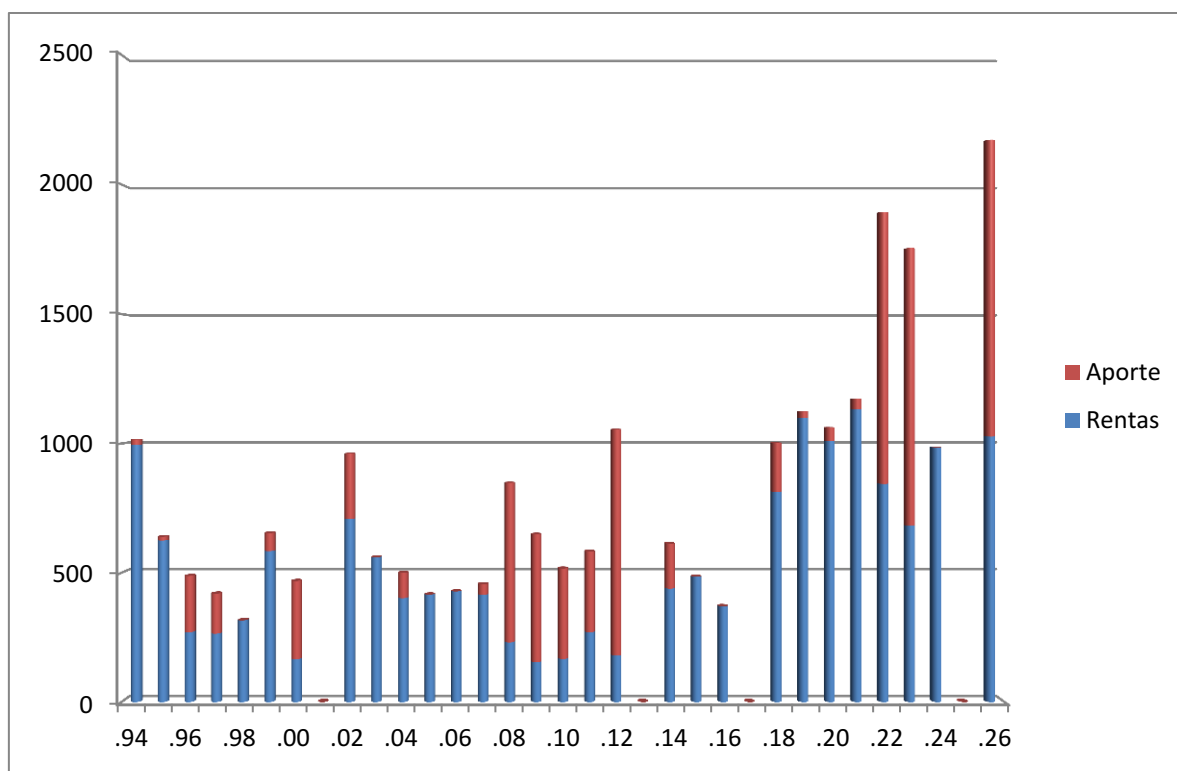
El repertorio de gastos del cabildo

Un último aspecto a analizar es el de los egresos de la caja concejil. Desde temprano, la corporación se quejó de la insuficiencia de sus rentas y de encontrarse abrumada por los gastos que debía afrontar. En 1693, los ingresos del concejo no llegaban a los 500 pesos, mientras que las festividades que se había visto obligado a costear habían insumido unos 800 pesos y el sueldo de los porteros había ascendido a 150.⁴⁵⁶ La tendencia al déficit se mantuvo a lo largo de todo el período y los mayordomos, encargados de arbitrar los recursos que se necesitaban para solventar esos gastos, tuvieron que ser a menudo auxiliados con fondos transferidos de otras áreas, como la caja de las alcabalas. Como se podrá apreciar en el Gráfico N° 9, hubo dos momentos en que los aportes externos cobraron una mayor significación. El primero fue durante el gobierno de Velasco, en que las rentas se redujeron al mínimo y se requirió de esos auxilios para cumplir decorosamente con el acostumbrado ritual cívico-religioso. El segundo fue durante el gobierno de Zavala, en el cual, aunque las rentas concejiles repuntaron notablemente, la corporación se embarcó en una empresa sumamente gravosa: la edificación de una nueva casa capitular.

⁴⁵⁵ AECBA Serie II, Tomo V, págs. 284-286.

⁴⁵⁶ AGN IX-19-1-7 *Archivo del Cabildo (1690-1728)*.

Gráfico 9 – Rentas municipales y aportes desde otros ramos (1694-1726)

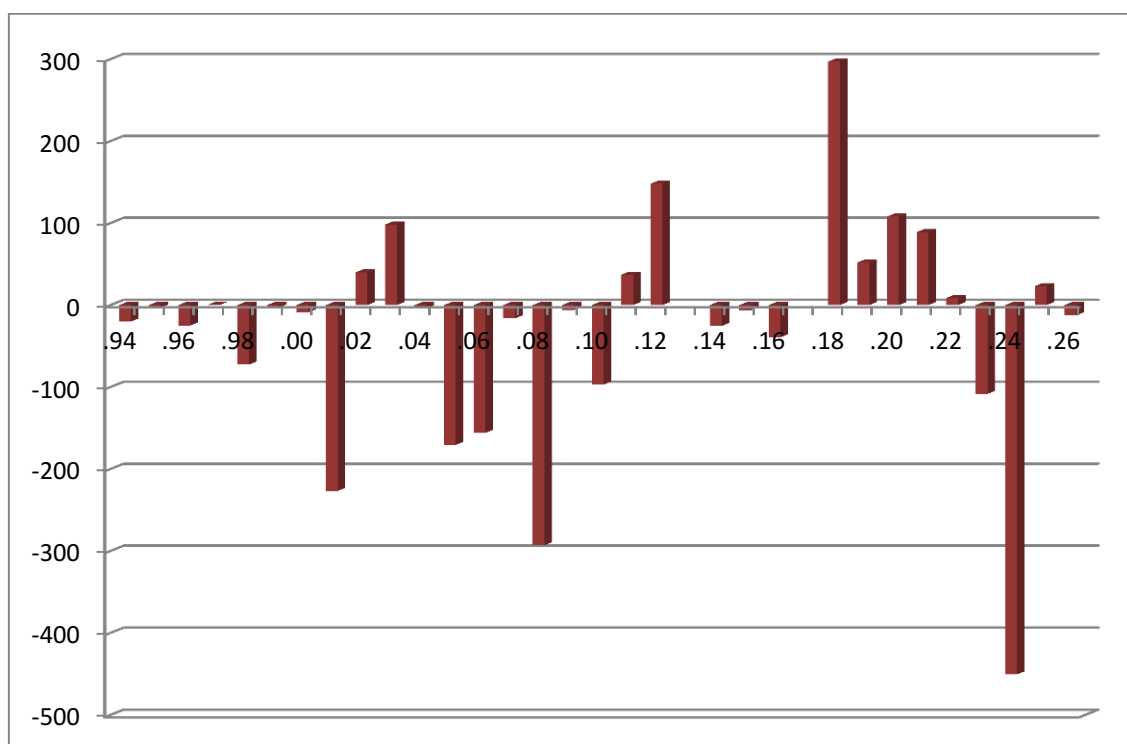


Referencias – Aporte: Transferencias desde otros ramos; Rentas: arbitrios y otras rentas del cabildo manejadas normalmente por el mayordomo.

Fuente de los datos: AGN IX-47-8-13 y XI-19-8-2.

Antes de pasar a analizar los gastos afrontados por la corporación, debemos referirnos a los fondos que administraban los mayordomos. Los balances aportados por estos nos han permitido indagar el origen de dichos fondos, que como ya se aclaró no incluían la totalidad de las entradas de la corporación. Al finalizar el ejercicio anual, las cuentas debían ser inspeccionadas por dos diputados del cabildo: el mayordomo presentaba para su aprobación una contabilidad rudimentaria pero minuciosa, en la que se registraba cada ingreso y cada gasto, imputándolos en el “descargo” y el “cargo” (debe y haber). Las sumas proporcionadas por otros ramos para socorrer a esta caja fueron ingresadas como entradas y no como pasivos: como no debían ser retornados a sus cajas de origen, no calificaban como deudas. Pero a pesar de la gratuidad de esas transferencias, en buena parte de las ocasiones no se consiguió equilibrar las cuentas: en veinte de los treinta y un años de los que tenemos registros, éstas habrían de cerrar con saldo negativo. En el Gráfico N° 10 se podrá apreciar la evolución de dichos saldos.

Gráfico 10 – Saldos anuales de la caja de la mayordomía del cabildo (1694-1726)



Fuente de los datos: AGN IX-47-8-13 y XI-19-8-2.

En el Gráfico anterior se observan tres claramente tres etapas. La primera se extendió entre 1694 y 1711 y comprendió los gobiernos de Robles, Prado y Maldonado, Valdés Inclán y Velasco. Los recursos corporacionales habían sido cercenados por estos gobernadores, que no le permitieron acordar la provisión de cueros con los capitanes de los navíos que visitaban el puerto ni distribuir licencias para vaquear, de todo lo cual el cabildo obtenía una alícuota. Los mayordomos se resignaron a no esperar aportes significativos de la corporación y debieron conformarse con los escuetos fondos que les aportaban el alquiler de algunos aposentos, la compostura de cuatro pulperías y los pagos que efectuaban con poca regularidad los arrendatarios de Propios. Pero en nueve de esos años, el debe quedó apenas por debajo del haber, lo cual indica que hubo un esfuerzo por dar un cierto equilibrio a las cuentas. Los mayores gastos se efectuaron en 1702, el año en que se celebró en Buenos Aires la coronación de Felipe V, en que los egresos de caja llegaron a 1194 pesos. Lo seguirían en importancia los dos primeros años del gobierno de Velasco, en que se hicieron algunas reparaciones en las casas del

cabildo y hubo un incremento en lo que usualmente se invertía en fiestas públicas, quizás a instancias del mismo gobernador, que era amigo de la fastuosidad. Pero la erogación anual fue en realidad modesta y promedió los 611 pesos, sin alcanzar a ser un tercio de lo que se gastaría en la década de 1720.

La segunda etapa, que fue más breve, se produjo entre la pesquisa de Mutiloa y el gobierno de García Ros, entre 1712 y 1716. El pesquisidor, como ya se ha dicho, devolvió al cabildo los recursos que le habían sido arrebatados y éste contó con fondos para auxiliar a los mayordomos en sus gastos. En 1712, obedeciendo a una real cédula que le permitió embarcar cueros en los navíos de registro, entregó al mayordomo Luis Navarro 875 pesos, que eran producto de la venta de 2000 pieles de toro. Se trató de un período de turbulencia política que no se vio acompañada por gastos excesivos, pero en la cual los egresos igualmente crecieron, llegando a promediar los 770 pesos anuales. Los mayordomos intentaron equilibrar entradas y salidas, pero con excepción de 1712, la caja que manejaban resultó ser deficitaria.

Durante la tercera etapa, que se inició con la llegada de Zavala al gobierno, dicha caja tendió, por el contrario, a arrojar superávit. En 1718 presentó el saldo positivo más alto del período, que fue de 297 pesos. No obstante ello, ese superávit se logró gracias a los auxilios provenientes de otros fondos. Durante esta fase funcionaron paralelamente dos cajas municipales, la del mayordomo y la del tesorero de Propios, la última de las cuales subsidió en algunos casos a la primera. El tesorero no se inmiscuyó en la recaudación de los derechos tradicionalmente administrados por el mayordomo, y cuando recibió el monto adeudado por los asentistas británicos por la compra de cueros, se preocupó por girarle lo que le correspondía por el derecho de anclaje.⁴⁵⁷ A lo largo de esta etapa, la hacienda concejil fue eficientemente manejada por un equipo compuesto por el regidor Baltasar de Quintana Godoy, por el referido Antonio Díaz, quien fue tesorero en 1722 y 1723 y mayordomo en 1724, y por Bernardino Rodríguez de Agüero, que se desempeñó como mayordomo entre 1720 y 1722, fue sobrestante de las obras edilicias que llevó a cabo el cabildo en 1723 y 1724 y volvió a ser mayordomo en 1725 y 1726.

Si el ayuntamiento dispuso de ingresos cuantiosos se debió en parte a que el Real Asiento saldó las deudas que tenía con él. Estas consistían fundamentalmente en una

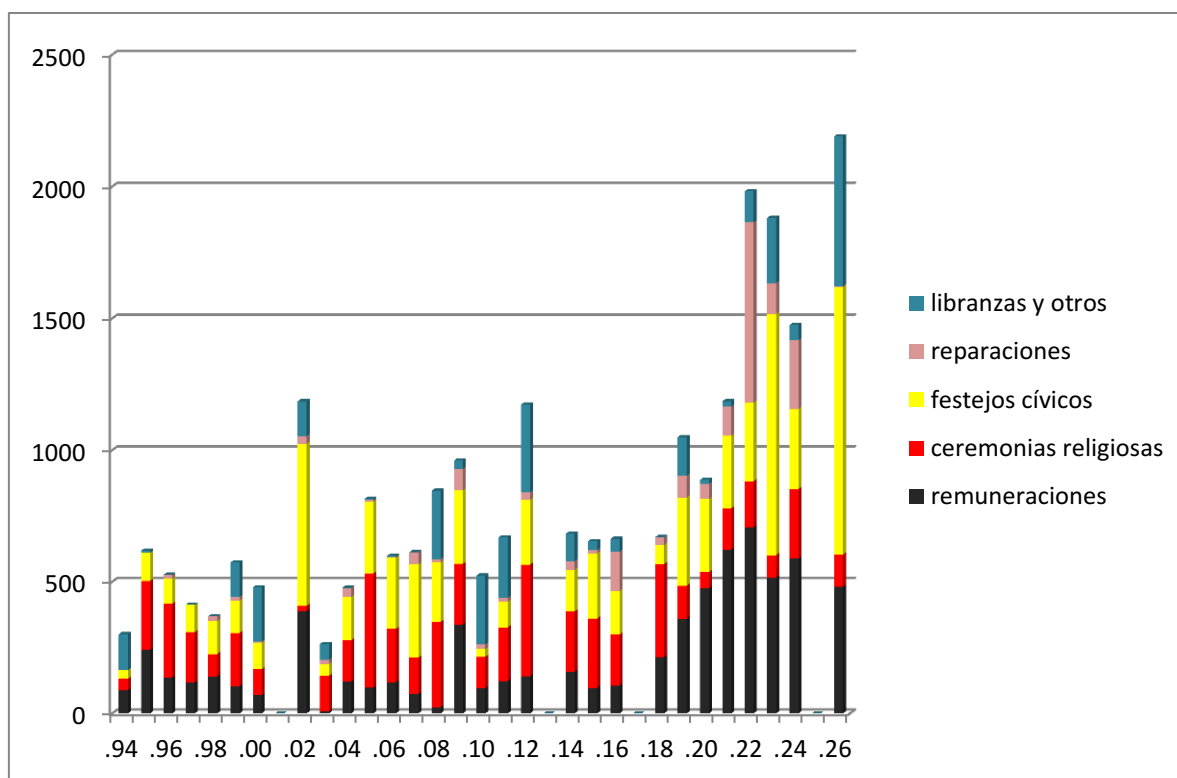
⁴⁵⁷ El tesorero de Propios recibió en 1723 tres partidas del Real Asiento que sumaban 20.000 pesos, provenientes en su mayor parte de la corambre. De estos se excluyeron 1000 “*que debían a la ciudad de anclaje*” y eran “*pertenecientes a los propios*”. Véase el libro del tesorero en AGN IX-19-8-2 *Cabildo de Buenos Aires: Propios (1712-1746)*.

alícuota en el valor de los cueros que la compañía asentista embarcó a Inglaterra, que tardó a ser liquidada debido a dificultades coyunturales. Los bienes de la *South Sea Company* habían sido embargados en 1719, cuando España entró en guerra con Gran Bretaña a causa de la recuperación de Sicilia y Cerdeña, pero les fueron devueltos cuando se firmó la paz, con la condición de que liquidase sus compromisos pendientes. Esto último no se consiguió, empero, hasta 1723. En 1722 sólo habían ingresado a la caja de la tesorería 8169 pesos, que incluían 300 pesos del cuartillo de mulas y 2037 de las alcabalas, mientras que al año siguiente entraron en ella 20.000 pesos, provenientes en su mayor parte de las dependencias que saldaron los asentistas. En esos dos años, los ingresos de la caja de la mayordomía resultaron ser bastante más modestos: 2029 pesos en 1722 y 1780 en 1723. Fue esta caja la que solventó en un principio la construcción de un nuevo edificio para el cabildo, pero en 1724 fue relevada de ese gasto por la caja de la tesorería y en adelante sólo se ocupó de la reparación de los calabozos y de las casas de alquiler. Se encargaron los planos a Domingo Petrarca, ingeniero del Presidio de la ciudad, que diseñó una casa de dos plantas y una torre. La obra insumió 10.075 pesos en 1723 y alrededor de 22.000 pesos más en los siguientes tres años. Obviamente, los caudales reunidos por el ayuntamiento resultaron insuficientes para afrontar tamañas exigencias y hubo que recurrir a las libranzas de la Real Hacienda, que debían ser autorizadas por Zavala. Pero las Cajas Reales pronto se vieron imposibilitadas de continuar con sus aportes, ya que este gobernador desvió el grueso de esos fondos hacia otro emprendimiento: la fundación de Montevideo.

La caja de tesorería afrontó otro de los gastos del cabildo: la beneficencia pública. De las sumas pagadas por los asentistas británicos y los capitanes de los navíos de registro a cambio de corambre, hubo que separar 10.000 pesos para repartirlo entre los vecinos accioneros, que eran legalmente reconocidos como los propietarios del ganado cimarrón faenado. Tradicionalmente, estos debían recibir el tercio de las utilidades del tráfico de cueros. Pero los cabildantes transformaron ese reparto en una obra de beneficencia, incluyendo en él a las viudas y huérfanas desvalidas y a los vecinos pobres de la ciudad. Tanto estos desamparados como los vecinos accioneros no recibieron sino excepcionalmente pequeñas cantidades de dinero, mientras que el grueso del repartimiento consistió en cortes de tela y artículos de mercería adquiridos a los mismos ingleses o a los registreros, que luego fueron contabilizados a precios inflados. De este emprendimiento nos ocuparemos en el siguiente capítulo de esta tesis.

Mientras que la caja de la tesorería de Propios se hacía cargo de la edificación de la nueva casa capitular, de cumplir con el tercio de los accioneros y de repartir limosnas entre los pobres, la caja de la mayordomía siguió ocupándose de sus gastos habituales. Entre 1694 y 1726, los mayores desembolsos que hicieron los mayordomos fueron destinados a costear los festejos públicos (27,5%), seguidos muy de cerca por las contribuciones al ritual religioso (27,4%). Luego se hallaban las remuneraciones al personal estable del cabildo y a los conchabados que éste contrató en forma eventual (25,2%). En último lugar se encontraban las libranzas a terceros y otros gastos accidentales solventados por el ayuntamiento (12,7%) y las mejoras y reparaciones en los inmuebles de propiedad concejil (7,2%). No obstante, estos rubros no tuvieron la misma significación a lo largo de todo el período, por lo que será necesario establecer cuál fue su importancia en cada una de las etapas consignadas. La evolución de los mismos puede seguirse en el Gráfico 11, que presentamos a continuación.

Gráfico 11 – Egresos de la caja de la mayordomía del cabildo (1694-1726)



Fuente de los datos: AGN IX-47-8-13 y XI-19-8-2.

A lo largo de las dos primeras etapas, entre 1694 y 1716, los gastos más abultados que debió afrontar la caja de mayordomía provinieron del subsidio al ceremonial católico, los cuales rondaron el tercio de sus egresos (el 32,2% entre 1694 y 1711 y el 34,8% entre 1712 y 1716). La corporación acostumbraba rentar a los religiosos de la catedral y de los conventos para que dijeran misa durante las festividades de Corpus Christi, de la Santísima Trinidad, del patrón de la ciudad San Martín de Tours, de los Santos Sabino y Bonifacio, de los apóstoles Simón y Judas y de Nuestra Señora del Rosario. También se ofrecieron rogativas en ocasión de pestes y sequías, todo a costa de la hacienda municipal, que proporcionaba la cera y el incienso necesarios para cumplir con los ritos. De hecho, el insumo más costoso fue la cera para las velas, que en algunas ocasiones fueron hechas labrar por el mismo cabildo. En 1707, por ejemplo, se hicieron fabricar 142 velas de a media libra cada una, que se repartieron entre los conventos el día de Corpus Christi. En 1712, en cambio, se compró al mercader Joseph de Ibarra una enorme marqueta de cera por la que hubo que pagar la exorbitante suma de 280 pesos, y luego se la repartió entre iglesias y conventos. Pero otras veces se optó por economizar y se prefirió alquilar las velas.

Probablemente la ceremonia más onerosa del calendario religioso fue la de Corpus Christi. Como se pretendía que toda la feligresía se hallara presente, la plaza y su entorno eran convertidos en un gran escenario: los pilares de la catedral eran enramados con manojos de hinojo, varas de sauce y ramas de laurel y se construía un altar mayor al aire libre, bajo el pórtico del cabildo, adornado con un dosel y colgaduras. Los portales de la catedral y del cabildo eran cercados para no ser dañados por la aglomeración de público, y en sus inmediaciones se levantaba un tablado, dotado de una escalera y un espaldar, para que se sentaran el gobernador y los cabildantes a escuchar la misa.

En el marco de la fiesta de Corpus Christi, al igual que de otras celebraciones del calendario ritual católico, se llevaba a cabo una procesión en que se paseaba el viático o las imágenes de bulto veneradas en las iglesias de la ciudad. La corporación costeara los gastos de las procesiones y hacía rastrillar las calles por las que éstas se desplazaban.⁴⁵⁸ Entre las erogaciones más frecuentes se hallaban la de engalanar las andas de las imágenes, haciéndolas forrar con tafetán carmesí, y la de reemplazar periódicamente sus ropajes. En 1699 se hizo dorar el báculo de la estatua de San Martín de Tours y se adquirieron varios pliegues de encaje dorado, seda blanca y otras telas

⁴⁵⁸ En 1714, por ejemplo, se rellenó una “zanja que atajaba el camino por donde se había de llevar al Santo Patrón a la Santa Iglesia”.

finas para hacerle una capa nueva y un roquete. La renovación de la indumentaria del santo patrono se repitió año a año.

Hubo ocasiones en que el cabildo solventó también el ritual funerario. La ceremonia del velatorio del gobernador Arce y Soria en la catedral fue costeadada por el mayordomo, quien detalló: “*El día de dicha función [se colocaron] en el túmulo 50 velas de a libra, 50 de a media libra, 20 hachas de a media libra; a todas las divinidades se dio vela de a libra; en los altares se pusieron 16 velas de a 6 en libra y 2 de a media libra en la mesita; 6 de a libra en el Altar Mayor, y todas se quedaron en la iglesia*”.⁴⁵⁹ Además, proporcionó cera a todos los conventos para que oficiaran en el responso. También se celebraron en ausencia las honras fúnebres de personajes de la familia real. En 1716, al conocerse algo tardíamente el deceso de la reina María Luisa Gabriela de Saboya, se levantó en la catedral un túmulo en que se le hicieron honras póstumas y se gastaron para ornarlo 45 pesos en cera, tarjetas y paños negros.

La corporación realizó también gastos de consideración en los festejos públicos. Esas erogaciones mantuvieron una notable estabilidad a lo largo de las etapas consignadas: constituyeron el 27,3% de los egresos entre 1694 y 1711, el 26,7% entre 1712 y 1716 y el 28,5% entre 1717 y 1726. Es necesario resaltar la dificultad que se presenta al estudiar de las sociedades del Antiguo Régimen al diferenciar los festejos cívicos de los religiosos, ya que las fiestas de carácter civil –por ejemplo, las que se realizan en honor a un triunfo de las armas del rey o al nacimiento de un príncipe– casi siempre incluían ceremonias religiosas, mientras que las procesiones se veían con frecuencia acompañadas de diversiones de carácter profano. El aparato ceremonial fue bastante modesto en Buenos Aires, si se lo compara con el de las grandes urbes de la América Española: no hubo desfiles ecuestres, juegos de cañas, simulacros de combate entre moros y cristianos u otros espectáculos deslumbrantes, que en cambio fueron comunes en Lima o en México.⁴⁶⁰ Pero ello no fue obstáculo para hacer un despliegue de teatralidad que apuntaba a afirmar la subordinación a la Iglesia y al monarca y a poner en relieve las jerarquías sociales.⁴⁶¹ Hubo festejos que estuvieron dirigidos a la población en su conjunto, sin exclusión de la población de casta, y otros que estuvieron reservados a la élite dirigente. Entre los primeros se destacaron las lidias de toros y los

⁴⁵⁹ AGN IX-47-8-13 *Propios del cabildo de Buenos Aires (1695-1719)*.

⁴⁶⁰ Octavio RIVERA “Fiestas por los Austrias en la ciudad de México, siglo XVI” en *Destiempos*, Marzo-Abril de 2008, Año 3, N° 14, Págs. 250-261.

⁴⁶¹ George BALANDIER *El poder en escenas. De la representación del poder al poder de la representación* Paidós Studio, Barcelona, 1994, Págs. 15 y ss.

fuegos de artificio; entre los segundos, los agasajos ofrecidos al gobernador y a los miembros del cabildo en el marco de esas celebraciones.

En Buenos Aires, el festejo público por excelencia eran las corridas de toros que se celebraban en honor al patrón de la ciudad, San Martín de Tours. Hasta comienzos de la década de 1690, los toros lidiaron en la plazuela que se encontraba junto a la iglesia de la Merced, pero poco más tarde las funciones fueron mudadas a la Plaza Mayor. La preparación de los juegos se extendía durante semanas. En primer lugar, había que conducir los toros desde la campaña: estos eran proporcionados gratuitamente por los abastecedores de carne, pero debía pagarse a quienes los traían desde las estancias. En tanto, se construía el toril en la plaza: se levantaba una empalizada con postes de laurel u otras maderas semiduras, entretejidos con rejones y garrochas amarradas con guascas de cuero. Una cuadrilla de peones trabajaba en el montaje del cerco y luego rastrillaba el terreno y lo regaba durante las corridas; otros controlaban las trancas y se hacían cargo de los animales. Durante las corridas, que duraban tres días consecutivos, los toreros eran auxiliados por peones a caballo, provistos de picanas de madera, desjarretadoras y lazos. Las funciones eran anunciadas por uno o más percusionistas (cajeros y tambores) y por dos trompeteros. Músicos y conchabados recibían sus jornales del mayordomo, que además los gratificaba con yerba y tabaco.

Desde comienzos del siglo XVIII, los toreros cobraron un fuerte protagonismo. En 1714, uno de ellos hizo una entrada triunfal al toril: el mayordomo no dudó en pagar 4 reales a un porteador “*para cargar a este caballero en un borrico muy ufano con su paje, que lo cabrestó a la plaza con mucho acompañamiento*”. A partir de 1709, los libros de mayordomía comienzan a mencionar por sus nombres a estos *rejoneadores*, que a partir de 1719 fueron llamados *toreadores*. Se presentaban en el ruedo calzando borceguíes y exhibiendo ricos ropajes que adornaban con vistosas cintas coloridas. Su indumentaria era costeadada en forma íntegra por el ayuntamiento: según rezan dichos libros, la hacienda municipal les proporcionaba todo “*lo necesario para el lucimiento*” de sus personas, salvo la espada que usaban para ultimar a los toros, que le era prestada por algún vecino, seguramente como un gesto de distinción. En 1709 se menciona a dos rejoneadores, Gerónimo Flores y el hijo del alférez Marcos Félix; en 1710, a Francisco Gómez de Saravia; en 1712, a un fulano Lozano y a Andrés Hermosilla; este último volvió a ser nombrado en 1719, junto con Bernardo Carrasco y Sebastián Morales. En 1726, los libros de Propios consignan a Pedro Rivadeneira, Miguel Domínguez, Juan Gaitán, Pedro de Matos y Joseph Ramírez; al parecer ostentaban distintos estilos, pues

los primeros cuatro eran toreadores de a caballo y el último, toreador de a pie. En un principio se les pagaba 15 pesos por cada día de corridas, pero luego el jornal subió a 30 pesos, a petición de los mismos toreros. Al finalizar las funciones, el cabildo los obsequiaba con una colación.

Rara vez se recurrió a la tauromaquia para festejar los sucesos de la monarquía. Se prefería darles notoriedad a través de espectáculos nocturnos, iluminando el entorno de la Plaza Mayor y lanzando cohetería. La más costosa de esas celebraciones fue la proclamación de Felipe V, celebrada en Buenos Aires en 1702. El ayuntamiento resolvió que “*el día que se hubiere de aclamar se prevenga para la noche hacer unos fuegos y quemar unas mazas y poner luminarias en toda la plaza pública y sus contornos*”.⁴⁶² Los mismos cabildantes inauguraron los festejos, alzando los pendones y jurando lealtad al soberano. Para fabricar los cohetes, el mayordomo adquirió 500 cañas, algodón, brea y azufre y encargó a un herrero cuatro taladros y un torno. En la Plaza Mayor se montó una verdadera muestra de “arte efímero”: se levantó un *castillo* – un catafalco cubierto con cueros sujetos por tachuelas– en el que se pintaron las armas de la corona, por detrás del cual salieron disparados los fuegos de artificio. Las calles circundantes estuvieron esa noche iluminadas por mazas y candiles.

La utilización de este recurso se repitió en los años que siguieron. En 1707, al conocerse la victoria del ejército de Felipe V en Almansa, se colocaron “*cien luminarias y doce masas de fuegos en la frente de la casa del cabildo, sin reparar en gasto por ser en aplauso de la felicidad que ha tenido Su Majestad*”. Los materiales utilizados, empero, resultaron ser más modestos que al conmemorarse su coronación: cardo, leña y unos mecheros.⁴⁶³ En 1714 se lanzaron fuegos artificiales para celebrar el nacimiento de un nuevo príncipe (el futuro Fernando VI) y en 1715, para conmemorar el “*festejo de las paces*” entre el rey y sus enemigos –los tratados de Rasdtatt y Utrecht, que fueron conocidos en Buenos Aires con algo de retraso–. En 1716, en ocasión del casamiento entre Felipe V y la princesa Isabel Farnesio, el ayuntamiento dispuso que se encendieran luminarias durante tres días.⁴⁶⁴

Estos espectáculos ofrecían a los magistrados la ocasión de hacer gala de ostentación mediante el dispendio de los recursos públicos. Esta actitud, observa Arlette Farge, solía tener como contrapartida la pasividad de los espectadores, de los que se esperaba que

⁴⁶² AECBA Serie II, Tomo I, pág. 82

⁴⁶³ AGN IX-47-8-13 *Propios del cabildo de Buenos Aires (1695-1719)*.

⁴⁶⁴ AECBA Serie II, Tomo III, pág. 349

demostraran fidelidad, asentimiento y regocijo.⁴⁶⁵ No obstante, en Buenos Aires se permitió la participación popular en algunos de los festejos, siempre bajo el control de una diputación de regidores. En Corpus Christi, por ejemplo, la procesión de los vecinos españoles era usualmente seguida por la de las castas, que se expresaban por medio de sus bailes característicos: los acuerdos del cabildo refieren que había danzas de indios y danzas de mulatos.⁴⁶⁶ Lo usual fue recompensar a la plebe que asistía a las procesiones y a los espectáculos públicos brindándoles alguna distracción. Luego de la procesión de Corpus Christi se sacaban a las calles dos o más “gigantones” –muñecos cuyos armazones de madera y vestidos eran costeados por el cabildo– y eran hechos bailar para divertir a los concurrentes, mientras que en las fiestas patronales se exhibía otro monigote, “una estatua de cuero que festejan los muchachos, a quien llaman don Pedro Leño”.⁴⁶⁷ Por lo menos en dos ocasiones se ofrecieron al público unas comedias. La primera de ellas fue en 1708, con motivo de la llegada del gobernador Velasco a la ciudad, en que se montó un tinglado en la plazuela que se hallaba frente al convento de Santo Domingo.⁴⁶⁸ La segunda fue en 1723, en que el alcalde provincial Joseph Ruiz de Arellano contrató una compañía de actores para celebrar el desposorio entre el príncipe Luis, heredero del trono, y la princesa Luisa Isabel de Orleans.

El gobernador y los cabildantes presenciaban las corridas de toros desde un tablado engalanado con colgaduras, en los que ocupaban asientos acordes a su rango. Esto los colocaba visual y simbólicamente por encima del vulgo. Después del espectáculo se los invitaba a una *colación*, en que se les ofrecían refrescos y una mesa de platos dulces. Las anotaciones de los mayordomos, que costeaban este agasajo, son un sugestivo aporte al conocimiento de la repostería porteña colonial. La de 1704, el convite se realizó en la casa del alférez real Joseph de Arregui y entre otras delicadezas se sirvieron tartas azucaradas de almendras, anís y coco. En 1705 se ofreció a los asistentes “*torta de rosa*” y refrescos de guinda y de limón. En 1708 se habían preparado confituras de naranjas y tartas de brevas cubiertas de grana, pero los cabildantes no pudieron degustarlas porque las fiestas patronales fueron suspendidas.⁴⁶⁹ En 1709 se

⁴⁶⁵ Arlette FARGE **La vida frágil. Violencia, poderes y solidaridades en el París del siglo XVIII** Instituto Mora, México, 1994, Págs. 188 y ss.

⁴⁶⁶ AECBA Serie II, Tomo IV, pág. 399.

⁴⁶⁷ AGN IX-47-8-13 *Propios del cabildo de Buenos Aires (1695-1719)*.

⁴⁶⁸ Entre los gastos de 1708, se consigna la devolución a Miguel de Riblos de unos tabladitos que había prestado “*para unas comedias que se dedicaron al Sr. Gobernador en la plazuela de dicho convento [de Santo Domingo]*”.

⁴⁶⁹ Advirtió el mayordomo que aunque “*se le había ordenado mandase hacer la confitura para el cortejo acostumbrado*”, las fiestas patronales fueron suspendidas y las 20 libras de colación que se habían

compraron 50 libras de postres y golosinas, a las que se agregaron jarras de aloja especiada con canela y tres frasqueras de refrescos. En la década siguiente, el aumento en el número de cabildantes obligó al mayordomo a invertir fuertes sumas en estos convites: en 1715 hubo que adquirir 109 libras de confituras a un costo de 109 pesos; cuatro años más tarde, se gastaron 142 pesos, más otros 19 pesos en bebidas y sorbetes.

Cuando un gobernador y su familia hacían su entrada en la ciudad y los cabildantes se presentaban a rendirle sus respetos, las reglas de cortesía los obligaban a emprender otro gasto. Existía la costumbre de “dar despensa”, esto es, de obsequiar a los recién llegados con manjares y provisiones. En 1700, a diez días de que Manuel de Prado y Maldonado llegara a Buenos Aires, el “*refresco que envió la ciudad para los criados y familia del Sr. Gobernador*” consistió en aves de corral, 86 libras de azúcar, una botija de aguardiente y dos botijas de vino, en lo que el mayordomo gastó 200 pesos.⁴⁷⁰ Pero el mismo resultó exiguuo en comparación con el que se brindó a Manuel de Velasco y Tejada. Este “*saltó en tierra*” el 31 de enero de 1708 y fue conducido al cortijo de quien más tarde sería su más acérrimo enemigo, el alférez real Joseph de Arregui: allí lo aguardaba una nutrida “despensa”, que incluía 2 botijas de vino, 2 arrobas de azúcar, 20 carneros, 2 cestos de carbón, 24 quesos, 2 fanegas de sal, 2 botijas de grasa, 500 cebollas, 107 gallinas, 1 fanega de garbanzos, 1 fanega de habas, 2 almudes de azafrán, velas y jabón.⁴⁷¹ El pesquisidor Mutiloa también fue cortejado por el cabildo, aunque su “despensa” fue más modesta que la de su predecesor: se le enviaron 50 gallinas, 3½ arrobas de azúcar del Cusco, 2 botijas de vino, 12 cestos de carbón, 2 botijas de grasa, leña y velas. A Alonso de Arce y Soria y a Baltasar García Ros no se les obsequió con provisiones, posiblemente porque ya hacía tiempo que se encontraban residiendo en Buenos Aires cuando fueron proclamados gobernadores, pero al segundo se le hizo objeto de una ceremonia de recepción pública, haciéndolo entrar simbólicamente a la ciudad por debajo de unos pilares enramados. Sí las recibió Bruno Mauricio de Zavala: aunque no sabemos de qué constó su “despensa”, ésta insumió 205 pesos, que se descontaron del ramo de la alcabala y no de los Propios del cabildo.

En la última de las etapas consignadas, que se extendió entre 1717 y 1726, los gastos insumidos en ceremonias religiosas y festejos cívicos fueron superados por otro renglón de egresos: las remuneraciones pagadas al personal estable y eventual del cabildo. Los

preparado fueron entregadas a Miguel de Riblos “*con especificación de volverlas cuando las haya menester la ciudad*”. AGN IX-47-8-13 *Propios del cabildo de Buenos Aires (1695-1719)*.

⁴⁷⁰ AECBA Serie I, Tomo XVIII, págs. 602-603.

⁴⁷¹ AGN IX-47-8-13, *Propios del cabildo de Buenos Aires (1695-1719)*.

dos porteros del cabildo, que también se desempeñaban como “*ministros de justicia*” o alguaciles de la cárcel, recibían en un principio un sueldo de 75 pesos anuales, que luego ascendió a 80 y por último fue de 100 pesos; no obstante estos reajustes, el estipendio que recibían parece haber sido insuficiente y solicitaron frecuentes adelantos a cuenta de su anualidad. Pero frente al sueldo del personal estable, que era casi invariable, el monto de las erogaciones destinadas a los jornales de los conchabados crecería exponencialmente, en particular durante la década de 1720.

La mano de obra eventual constituía un conjunto muy variado. La corporación se veía obligada a contratar un pregonero y un tamborillero cuando se debían proclamar bandos y anunciar almonedas, y a emplear a albañiles, carpinteros y peones cuando había que reparar las paredes y los techos de los calabozos o las casas de alquiler. Para las corridas de toros, una cuadrilla de más de veinte peones se ocupaba durante dos semanas de construir el tablado y el toril y de traer a los animales desde el campo; durante los juegos, se encargaban de vigilar las tranqueras y de auxiliar a los toreros valiéndose de lazos y picanas. A estos conchabados no sólo debían pagársele sus jornales, sino que se les proporcionaba el diario sustento de carne, pan y yerba. Esto provocaba gastos tan subidos que en la fiestas patronales de 1710 se decidió a sacar los presos de la cárcel para que levantaran el toril. Cuatro años más tarde, el cabildo se ahorró parte del pago de jornales solicitando a los vecinos que le facilitaran por unos días los peones que tenían conchabados a su servicio.

El problema del elevado costo de la mano de obra se suscitó en toda su crudeza cuando se emprendió la construcción de la nueva casa capitular. En 1720, cuando aún se discutía la posibilidad de sustituir el edificio antiguo, se emprendieron en él algunas mejoras: se afirmó la tirantería de los techos, se reemplazaron las tejas y se blanqueó con cal la sala del consistorio. Hasta entonces, la corporación había recurrido a contratar peones esporádicamente, despidiéndoles luego de concluidos los trabajos, pero ese año se decidió por tener a disposición una cuadrilla semipermanente. Esta estuvo compuesta inicialmente de nueve hombres, a los que el cabildo pagó un total de 903 jornales, lo que equivalía al trabajo de 3,3 meses por individuo. Entre 1721 y 1723 la cuadrilla se fue reduciendo: el primer año a siete hombres, el segundo a seis y el tercero a cinco. Pero la cantidad de jornales liquidada anualmente creció, llegando a 1152 en 1722, el equivalente a 6,4 meses trabajados por individuo. Ello indica que aunque el trabajo se concentró en un número más reducido de brazos, los peones contratados tuvieron una permanencia mayor.

Las obras de edificación de la nueva casa capitular avanzaron en un principio muy lentamente. En diciembre de 1721, el mayordomo Bernardino Rodríguez de Agüero adquirió 72.500 adobes para iniciar los trabajos. Avalado por la corporación para dirigir las tareas, se lo mantuvo en ese cargo durante tres años, pero sólo recibió cantidades acotadas de dinero para afrontar los gastos de materiales y mano de obra, mientras se demoraban los aportes prometidos por el gobernador. Las obras no obtuvieron un fuerte espaldarazo hasta 1724, en que se encargó al regidor Baltasar de Quintana Godoy que las supervisara y Rodríguez de Agüero pasó a ser sobrestante de la misma. La caja de mayordomía fue desligada de los gastos de la edificación, que pasaron a depender de fondos especiales que en parte provinieron de la caja de tesorería de Propios y en parte de las libranzas de la Real Hacienda. Se alquiló a Josefa Rosa de Alvarado, viuda de Miguel de Riblos, un salón en la mansión que ésta tenía frente a la plaza para que el ayuntamiento pudiera seguir sesionando.

El número de trabajadores empleados en la obra se incrementó notablemente. En 1724 y 1726 se liquidaron 12.644 jornales, que correspondieron a 47 trabajadores en el primero de esos años y a 50 en el segundo (por razones que desconocemos, las cuentas de 1725 fueron omitidas). La quinta parte de ellos se componía de carpinteros y albañiles, mientras que el resto eran no calificados. La novedad consistió en que casi la mitad de los trabajadores se componía de esclavos, algunos de ellos alquilados a los vecinos y otros comprados por el mismo cabildo al Real Asiento. En septiembre de 1725, en efecto, el ayuntamiento adquirió diez negros bozales recién traídos de Guinea con el objeto de ahorrar en peones, cuyos salarios, según se expresó, eran muy crecidos.⁴⁷² Excepcionalmente, los esclavos formaron parte de la mano de obra cualificada: en junio del año siguiente se compró en 330 pesos un esclavo llamado Juan, del que se dijo que era “*hábil y necesario*” para la construcción.⁴⁷³ Tanto a libres como a esclavos hubo que proveerlos de alimentos y de “vicios”. Este renglón de gastos no fue irrisorio: en esos dos años se gastaron 720 pesos en repartirles carne, pan, sal y yerba. A algunos esclavos se les gratificó, además, con tabaco, y a los maestros de albañil con botellas de aguardiente. En cuando a las remuneraciones —considerando como tales no sólo el pago de jornales a quienes trabajaron en la refacción del cabildo entre 1720 y 1726, sino también el estipendio que recibieron los propietarios de los esclavos que participaron en ella— sumaron 5120 pesos.

⁴⁷² AECBA Serie II, Tomo V, pág. 519.

⁴⁷³ AECBA Serie II, Tomo V, pág. 637.

Hemos empezado este capítulo planteándonos cuáles fueron los asuntos tratados en las sesiones del cabildo porteño. Se pudo comprobar que, aunque en las primeras dos décadas del período estudiado se dio prioridad a los que estaban vinculados con los intereses de la oligarquía dirigente, la corporación acabaría por inclinarse por los problemas que concernían al conjunto de los habitantes, aunque sin renunciar a aquellos. En función a ello, queda plantearnos una última cuestión: ¿existió un correlato entre la tendencia que acabamos de exponer y la tipología de los gastos que la corporación se vio obligada a atender? La respuesta a esta pregunta parece ser compleja. Si abordamos la relación entre el ayuntamiento y la jerarquía eclesiástica local, por ejemplo, podríamos responder que sí. En las sesiones, la asiduidad en el tratamiento de asuntos vinculados con la Iglesia se mantuvo relativamente constante a lo largo de todo el período estudiado. La misma constancia puede observarse en los gastos insumidos por la caja de la mayordomía en las celebraciones religiosas, aunque estos se mostraron cada vez menos significativos en relación con otros gastos.

En lo que respecta a los festejos cívicos, en cambio, debemos responder que no. Estos fueron el rubro de gastos más significativo para dicha caja, pero en las sesiones del cabildo recibió una atención puntual pero no frecuente. La categoría Festejos Públicos apenas englobó el 4,1% de los asuntos abordados a lo largo del período estudiado. Según creemos, la parquedad mostrada en el tratamiento de este asunto se debió a que dichos festejos ocupaban un lugar preciso en el calendario de las actividades de la corporación y a que se hallaban profusamente reglamentados por las *Ordenanzas* de 1668. Por tal razón, al ayuntamiento le bastó con delegar su organización a una diputación de dos regidores y al mayordomo y atender eventualmente a sus pedidos. Durante las décadas de 1710 y 1720, los mecanismos del aparato ceremonial del cabildo se hallaban lo suficientemente aceitados como para que éste pudiera concentrar su atención en problemas más urgentes o de resolución más complicada.

Entre 1717 y 1726, la corporación priorizó en sus sesiones el tratamiento de asuntos de interés comunal, como lo era el abastecimiento de la ciudad. Paralelamente, las cajas municipales que manejaban el mayordomo y el tesorero de Propios se enfocaban en la construcción de un nuevo edificio para la corporación. La concreción de esta obra fue la expresión material de la solidez de una dirigencia que, superando las fisuras que pudiera haber entre sus miembros, se mostró compacta y decidida frente a los representantes de la corona. El carácter oligárquico de esta empresa, claramente dirigida a consolidar la posición del grupo dirigente, difícilmente pueda ser rebatido. No obstante, en el mismo

momento se llevó a cabo un formidable desembolso de fondos con el fin de asistir a huérfanas, pobres y viudas, a quienes se destinó la mayor parte del “tercio” que hubiera correspondido repartir entre los vecinos accioneros a cuenta del ganado cimarrón que había sido sacrificado para vender corambre a los británicos. La proyección comunal de esta medida está fuera de toda duda. Creemos, en conclusión, que ambas acciones, más que contradictorias, no hicieron sino afirmar la posición dominante de los miembros del cabildo: la primera, ofreciendo una muestra simbólico de su poderío a través de la edificación de una nueva casa consistorial; la segunda, alentando la gratitud y la sumisión por parte del sector más empobrecido del vecindario, bajo la expectativa de que retornaría más tarde en la forma de vínculos de contraprestación.

LA EXPLOTACIÓN DEL GANADO CIMARRÓN Y LA POLÍTICA DE BENEFICENCIA DEL CABILDO

La corporación como representante de los vecinos accioneros

La vecindad de Buenos Aires careció de las riquezas minerales y de la mano de obra indígena excedentaria con que se sustentaron las oligarquías urbanas de las regiones centrales del Imperio Hispánico. Pero a comienzos del siglo XVII, en las extensas praderas que circundaban aquella ciudad había comenzado a generarse un recurso que consiguió paliar la “pobreza” originaria de esta ciudad: los rebaños de ganado vacuno cimarrón. Este tuvo su origen en los animales que huyeron de los rodeos de los conquistadores y de sus descendientes y por lo tanto nunca fue considerado un *bien mostrenco*, sino perteneciente a los vecinos que tenían estancia poblada con ganados. Estos se incrementaron sustancialmente a partir de 1652, al producirse el *alzamiento* general de los rebaños domésticos provocado a causa de la epidemia que mermó en forma dramática el servicio de indios encomendados, esclavos y peones de las estancias. Para evitar su explotación indiscriminada, el cabildo porteño procedió a matricular a los propietarios y reconocerle su *acción* a ese ganado.

Estos *vecinos accioneros* fueron representados a partir de 1609 por el cabildo, que en un principio corrió con la legitimación de sus títulos, la autorización de las expediciones de caza o *vaquerías* y la venta de los cueros a las embarcaciones que se presentaban en el puerto. Los cimarrones se convirtieron, en suma, en un bien de administración comunal pero de propiedad individual. Desde el último tercio del siglo XVII, sin embargo, los gobernadores de Buenos Aires consiguieron desplazar a la corporación municipal en la comercialización de los cueros. Su grado de injerencia se hizo cada vez mayor y en los tiempos de Agustín de Robles, Alonso de Valdés Inclán y Juan de Velasco y Tejada, todo tipo de contratación relacionada con la explotación del ganado cimarrón quedó supeditada a su aprobación. Los accioneros, aunque jamás fueron despojados de sus derechos de propiedad sobre el ganado, fueron así perdiendo gradualmente la posibilidad de usufructuarlo. Las familias accioneras no consiguieron mantenerse como un sector relativamente cerrado: la titularidad sobre las acciones era susceptible de ser transferida por medio de herencias, ventas o donaciones y terminó

recayendo con frecuencia en congregaciones religiosas o individuos no capacitados para emprender la explotación por sí mismos. De ello resultó la profesionalización de las figuras del *vaqueador* o el *recogedor*, que eran distintas de las del accionero, a quienes las autoridades otorgaban licencia para hacer corambre.

Esta temática de los orígenes y la explotación de los rebaños de ganado cimarrón en las praderas pampeanas ha sido escasamente tratada por la historiografía de los últimos treinta años. Esto resulta contrastante con lo que ha sucedido con el proceso de conformación de la “estancia colonial” y con la evolución de la ganadería doméstica, temáticas que han sido sobradamente revisadas en las últimas décadas. Debido a ello, los estudios realizados sobre el ganado cimarrón y las vaquerías por Emilio Coni, Horacio Giberti, Julio V. González y Alfredo Montoya aún no han sido sometidos a discusión.⁴⁷⁴ Cuando a mediados de los 80 fueron revisadas las concepciones que se consideraban “tradicionales” de la historiografía rural –latifundio contra explotaciones familiares, gauchos y terratenientes contra campesinos, entre muchos otros– las investigaciones se centraron en la etapa tardocolonial (más o menos coincidente con el virreinato) mientras que el período precedente, que se extendía entre finales del siglo XVII y mediados del XVIII, fue tratado con descuido o directamente ignorado. A mediados de los 90, cuando el debate sobre el agro colonial quedó atrás, el estudio de las zonas rurales en dicho período, salvo por unos pocos pero valiosos estudios, mantuvo su carácter de asignatura pendiente.

Una de las contadas excepciones fue un artículo escrito por Andrea Campetella sobre el vínculo entre las vaquerías y las relaciones interétnicas en la frontera bonaerense. Esta sugiere que la explotación del cimarrón fue una derivación vernácula de las prácticas de la “ganadería a campo abierto” que los conquistadores trajeron de la península. Ante la proliferación de animales que se produjo en las praderas pampeanas cuando escaparon de las estancias, a partir de 1609 el cabildo habría respondido en respaldo del sector propietario, otorgándoles derechos exclusivos sobre los cimarrones bajo la excusa de que estos procedían de los rebaños de los primeros pobladores. A su entender, los estancieros se habrían transformado en *accioneros*, pues eran reconocidos por el ayuntamiento como poseedores de *acciones* sobre el ganado cimarrón, que por lo

⁴⁷⁴ Emilio A. CONI **Historia de las vaquerías de Río de la Plata (1555-1750)** Platero, Buenos Aires, 1979; Horacio GIBERTI **Historia económica de la ganadería argentina** Ediciones Solar, Buenos Aires, 1986, Págs. 36-39; Julio V. GONZÁLEZ **Historia** Argentina Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1957, Tomo I: La Era Colonial, Págs. 126-162; Alfredo Juan MONTOYA **Cómo evolucionó la ganadería en la época del virreinato** Plus Ultra, Buenos Aires, 1984

menos en un principio fueron prolijamente asentadas en un libro de matrícula.⁴⁷⁵

Un episodio ocurrido a mediados del siglo XVII, continúa explicando Campetella, salió a reforzar posición del ayuntamiento: la gran epidemia de 1652, que provocó la muerte o la fuga de la mayor parte del personal de servicio de las estancias –esclavos y peones– y el *alzamiento* generalizado del ganado vacuno, que hasta ese momento se encontraba aún en gran medida sujeto a rodeo. Dicha autora considera que el cabildo necesitaba de un argumento poderoso para justificar una práctica que se alejaba de las que se habían traído de España y que contradecían a las Leyes de Indias, y lo encontró en el *alzamiento* de 1652. La “Recopilación General de las Leyes de Indias” establecía que los ganados debían ser confiados a un pastor y debidamente marcados, y que si por falta de cuidado estos escapaban y volvían a “*su fiera naturaleza*”, podía adueñarse de ellos “*el primero que los ocupare*”. El hecho de que los animales se volvieran cerriles a partir de esa epidemia habría dado al ayuntamiento de Buenos Aires el “argumento de que los cimarrones eran en realidad animales de las estancias porteñas que se habrían alzado no por descuido de sus legítimos dueños sino por un hecho tan fatídico como el *gran contagio* de 1652”. El cabildo de Buenos Aires, concluye, habría elaborado “un argumento alternativo al de las leyes y costumbres indianas para justificar el derecho de los accioneros porteños al ganado cimarrón” y de esa manera poder legitimar el apoyo que daba a estos.⁴⁷⁶

Pueden hacerse dos importantes objeciones al artículo de Campetella. En primer lugar, el ayuntamiento porteño no necesitó de argucias argumentativas para justificarse por haber contrariado lo dispuesto por las Leyes de Indias. Aunque la Recopilación de 1678 no hiciera mención al ganado cimarrón y a su explotación a través de las *vaquerías* y las *recogidas*, varias reales cédulas reconocieron estas prácticas y concedieron a los vecinos *accioneros* el pleno derecho a la propiedad sobre aquellos rebaños.⁴⁷⁷ Curiosamente, la autora no hace alusión alguna a las mismas, quizás porque desconozca su existencia. El cabildo jamás se colocó al margen de la legalidad sino que, por el contrario, encontró pronto respaldo en la corona, que sancionó dicha práctica con fuerza de ley. Esta última

⁴⁷⁵ Andrea CAMPETELLA “Asegurar la 'defensa y custodia' de las campañas: Vaquerías y diplomacia interétnica en las sierras pampeanas durante la primera mitad del siglo XVIII” en **Trabajos y Comunicaciones** Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata 2006/2007 (32-33), pág. 85 y ss.

⁴⁷⁶ Andrea CAMPETELLA “Asegurar la 'defensa y custodia' de las campañas...” Págs. 87-88.

⁴⁷⁷ Véase, por ejemplo, la real cédula del 15 de noviembre de 1695, por la que Carlos II ordena a la Audiencia de Charcas que mantenga en su posesión a los accioneros del ganado vacuno de Buenos Aires; **Libros Registros Cedularios del Río de la Plata (1534-1717)** Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, 1991, tomo III, pág. 70.

era muy consciente de que si no daba amparo a la vecindad porteña en el goce de este recurso, la misma no dispondría de otro renglón de ingresos que su participación en el contrabando.

Una segunda objeción tiene que ver con su interpretación del *contagio* de 1652. Campetella confiere a este episodio un mero valor argumentativo, que habría permitido al ayuntamiento legitimar la explotación de los rebaños cerriles, y minimiza su importancia como suceso histórico. Muy por el contrario a lo que sostiene, la epidemia es un acontecimiento documentalmente verificable, que habría de constituirse en un mojón divisorio entre dos etapas perfectamente distinguibles de la ganadería bonaerense. Declarada a fines de 1651 y con secuelas hasta 1653, la misma parece haberse cebado con encarnizamiento en la servidumbre: sólo en 1652 fallecieron a causa del contagio unos doscientos negros, y se ha calculado que en el lapso de tres años murieron unas mil quinientas personas entre indios encomendados y esclavos, los cuales representaban alrededor de dos tercios del servicio de los vecinos.⁴⁷⁸ Las estancias no quedaron al margen del brote infeccioso y la muerte de negros e indios las dejó en un estado de transitorio abandono que provocaría el *alzamiento* general de los animales. Sumémosle a esto que en 1654, cuando los efectos de la enfermedad comenzaban a atenuarse, los campos sufrieron la sequía más intensa registrada en todo el siglo XVII, con su consecuente efecto dispensor sobre las pocas haciendas que aún se hallaban formando rodeo.

Como resultado de nuestras propias investigaciones, hemos podido establecer que la fuga masiva de los ganados incidió en forma directa en el cambio en la especialización ganadera que se produjo en la segunda mitad del siglo XVII. Con anterioridad al gran *alzamiento* de 1652, los estancieros porteños se dedicaban fundamentalmente a la cría de ganado vacuno; esto por ejemplo se comprueba en los inventarios de estancias de 1626-1640 analizados por González Lebrero, en los que esta especie se constituía en cerca del 78% del stock ganadero de las mismas.⁴⁷⁹ Pero luego de que la desaparición del personal de servicio en las estancias provocara que estos animales abandonaran su condición doméstica, los hacendados no volvieron a repoblarlas con bovinos, sino que rearmaron sus planteles con yeguas para la cría de ganado mular, renglón productivo cuya etapa experimental parece haber acontecido con alguna anterioridad a la peste. Si

⁴⁷⁸ Alfredo Juan MONTROYA *Cómo evolucionó la ganadería...* Págs. 44-46.

⁴⁷⁹ Rodolfo GONZÁLEZ LEBRERO "Chacras y estancias en Buenos Aires a principios del siglo XVII" en *La historia agraria del Río de la Plata colonial. Los establecimientos productivos* C.E.A.L., Buenos Aires, 1993, Págs. 81-89.

nos remitimos a las cifras barajadas por Saguier y Moutoukías, comprobamos que ya se remesaban desde Buenos Aires a las provincias arribeñas en las décadas de 1650 y 1660 las primeras tropas de mulas, cuyo número osciló entonces entre las 800 y las 1600 cabezas anuales.⁴⁸⁰ En las décadas siguientes, recuas de miles de mulas serían remitidas a las tabladuras de Salta y Jujuy, y desde allí al Alto Perú.

La crianza del mular, cuyas técnicas de reproducción necesitaban de un concurso mayor de brazos que la del ganado vacuno, acarreó serias dificultades a los productores, que durante todo el siglo XVII padecieron de una insuficiencia crónica de mano de obra. Los criadores solucionaron este inconveniente manteniendo al vacuno en estado natural, permitiendo que pastara a su albedrío, aunque reclamándolo en épocas de incremento de la demanda mediante la invocación de su *acción* al ganado cimarrón. El hecho de que las manadas se volvieran cimarronas ha de verse, en conclusión, como una estrategia de los ganaderos de aquella centuria para ahorrar mano de obra, optando por valerse de la que escasamente disponían para la producción de mulas, que además de constituirse en el rubro más redituable requería la intervención del hombre, ya que el apareamiento entre yeguas y asnos nunca se ha conseguido de manera espontánea. Aunque la práctica de mantener cimarrones a los bovinos existía desde los tiempos de Garay, había sido hasta entonces paralela a la domesticación en rodeos y sólo se mostraría a partir de la epidemia como la modalidad prevaleciente. Este estado de las cosas se mantendría hasta las primeras dos décadas del siglo XVIII, cuando los cimarrones comenzaron a dar las primeras muestras de agotamiento definitivo.

Ahora bien, la peste de 1652 tendría también una influencia directa en el registro de los títulos sobre el cimarrón. Tras la matriculación inicial de los vecinos accioneros en 1609, el cabildo había descuidado continuar con el registro periódico de las acciones, muchas de las cuales habían mudado de dueño a causa de compras y herencias.⁴⁸¹ Tras medio siglo de desprolijidades, faltaban repositorios actualizados donde constatar la legitimidad de las aspiraciones de los vecinos, y ello movió al ayuntamiento a revisar las acciones al ganado, solicitando a aquellos que se consideraran en posesión de una, presentaran títulos en respaldo de su pretensión. La mayor parte de quienes acudieron al llamado se remitieron, directa o indirectamente, a la dispersión de los ganados de sus

⁴⁸⁰ Zacarías MOUTOUKIAS **Contrabando y control colonial**... Págs. 180-181.

⁴⁸¹ Cuando en 1719 se hizo una revisión general de las acciones, los diputados del ayuntamiento manifestaron no contar más que con la "*matrícula antigua*" de 1609, por lo que los interesados debieron acudir con sus instrumentos para iniciar un nuevo libro de matriculación; AECBA Serie II, tomo IV, págs. 108-113.

padres y abuelos que provocara la peste de 1652. El hecho de que este episodio fuera tomado como factor ordenador se conjugaba con una memoria genealógica de corto alcance, que impedía a los vecinos retroceder más de tres generaciones para fundar su titularidad a la acción. Pero también confirmaba que las acciones habían escapado del dominio exclusivo de los descendientes de los linajes fundadores y circulaban en un espacio social más amplio, dando cabida en el disfrute de este recurso a las familias que se habían incorporado a los grupos elitistas a lo largo del siglo XVII.

También pueden hallarse referencias concretas a la epidemia en varios títulos presentados ante el cabildo. En 1699, por ejemplo, el cabildo revisó las acciones para vaquear de María González Malagueño, Antonio Segura y Paula de las Casas, y encontró que éstas se remontaban a tiempos de la peste: sus antepasados “*tuvieron Estancias Pobladas en la Jurisdicción de esta ciudad a más de cincuenta años con cuantiosos caudales de ganados que tenían de rodeo, los cuales se le alzaron y fueron a las campañas de esta Jurisdicción por causa de haber muerto los esclavos con que las mantenían con la peste general que hubo en esta ciudad*”.⁴⁸² Los tres fueron admitidos, luego de esta constatación, en la matrícula de los accioneros. En 1713, Francisco Alvarez de Acosta respaldaba sus derechos en un único antecedente: su abuelo había poblado una estancia en la Magdalena con ganado y lo tuvo bajo rodeo “*hasta que desde el año de cincuenta y uno y cincuenta y dos por falta y muerte del servicio se fue retirando a la campaña... como a los demás ganaderos de esta jurisdicción*”. Lo mismo alegaban Francisco y Juan Maciel, cuyo abuelo había gozado del multiplico de sus animales hasta 1650, o Domingo García, yerno de Juan Gutiérrez Barragán, quien herraba en su estancia de la Magdalena unas 1300 cabezas anuales “*el año antes del contagio*”.⁴⁸³

En la lista de los vecinos con acción que en 1707 solicitaron permiso para entrar a vaquear y en los memoriales de accioneros de 1713 y 1719, la mayor parte de los títulos presentados se remite a derechos que adquirieron sus antepasados no más de dos generaciones atrás, con lo que se confirmaría lo expuesto anteriormente. Enrique Pereyra, Juan Antonio Giles, Petrona Ruiz de Ocaña, María de Espinosa y Bernardo Rodríguez, por ejemplo, hicieron alusión a los títulos que heredaron de sus padres; Pedro de Vera y Aragón, Elena de Vitte, Domingo García y Juan de Zamudio a los de sus suegros; Gonzalo Villoldo, Sabina de Agüero, Joseph de Valdivia y Alderete y los

⁴⁸² AECBA Serie II, Tomo IV, pág. 526.

⁴⁸³ AGN IX-42-8-1, *Diferentes vecinos presentando una solicitud sobre el ganado cimarrón*.

hermanos Francisco y Juan Maciel a los de sus abuelos, y Antonio Igarzábal y Miguel Gerónimo de Esparza a los de los abuelos de sus esposas.⁴⁸⁴

En cambio, eran escasas las acciones que se remontaban a los primeros años de la ciudad, entre ellas la de Juan Bautista Fernández Parra, cuya esposa era descendiente del segundo poblador Cristóbal Naharro, y la de doña María Gutiérrez Palermo, que se manifestaba heredera del cuarto poblador Juan Domínguez Palermo.⁴⁸⁵ Pero la antigüedad de títulos como estos los convertía en blanco de controversias. Sucedió con los derechos que Pedro Romero decía haber heredado de sus antepasados Juan de Garay y Francisca Bernal, “*pobladores y conquistadores de esta ciudad*”, que en 1719 le fueron discutidos por el cabildo.⁴⁸⁶

¿Clientelismo o beneficencia? El cabildo y las *limosnas de cueros* de 1723

A partir de las últimas dos décadas del siglo XVII, las vaquerías fueron por lo general confiadas a individuos del entorno del gobernador de turno. No obstante, los dueños de las acciones solían ser compensados con el llamado *tercio de los accioneros*, es decir, con la tercera parte de las utilidades del tráfico de cueros, abonada en plata o géneros. Pero esta costumbre, refrendada por dos Reales Cédulas de Carlos II en 1695 y 1696, fue alterada por los gobernadores Alonso de Valdés Inclán y Manuel de Velasco y Tejada, que redujeron la cuota asignada a los accioneros e incluyeron en el *reparto de cueros* (como se llamaba a la distribución de las utilidades de una vaquería) a las viudas de los oficiales y soldados del Presidio de Buenos Aires, perjudicadas por el crónico retraso en la llegada del *Real Situado* desde las Cajas de Potosí.

Esto puede apreciarse en la lista de los beneficiados por Valdés Inclán en abril de 1707: aunque pobre en información, se vislumbra claramente que los accioneros habían sido parcialmente desplazados del derecho del *tercio* con el objeto de cumplir con un fin benéfico, el de sustentar a las viudas de los militares de la guarnición y otras mujeres desamparadas.⁴⁸⁷ Ese año, el director del Real Asiento francés había comprado al gobernador 29.151 cueros para llenar las bodegas de sus buques negreros. Las pieles fueron pagadas en plata, pero ésta debió ser invertida en obras de infraestructura como la

⁴⁸⁴ AGN IX-42-8-1 *De las licencias que se dan para recogidas y sacas de ganado*; AGN IX-42-8-1 *Diferentes vecinos presentando una solicitud sobre el ganado cimarrón*; AECBA Serie II, tomo IV, págs. 108-113.

⁴⁸⁵ AECBA Serie II, tomo II, pág. 538 y Serie II, tomo IV, pág. 109.

⁴⁸⁶ AGN IX-42-8-1, *Diferentes vecinos presentando una solicitud sobre el ganado cimarrón*; AECBA Serie II, tomo IV, pág. 111.

⁴⁸⁷ El listado de 1707 se encuentra en AGN IX-11-1-3, *Juicio de Residencia a Juan Valdés Inclán*.

reparación de las fortificaciones de Buenos Aires, las obras de refacción de la casa del cabildo, la construcción de una cárcel y el mantenimiento del Hospital Real de San Martín. El gobernador destinó menos de la quinta parte de lo que pagaron los asentistas franceses a implementar un nuevo sistema de *reparto de cueros*, por el que se intentó tanto dar limosnas a los pobres como resarcir a los vecinos accioneros. De los 5900 pesos en plata que destinó a estos menesteres, 3250 (esto es, el 55,1%) fueron asignados a los accioneros. El dinero restante lo destinó a asistir a las viudas de los militares del Presidio (16,1%) y otras mujeres empobrecidas pero con reconocida calidad de vecinas españolas, manifestada en el tratamiento de *doña* (28,8%).

La mayor parte de las asignaciones de Valdés Inclán recayó en mujeres: éstas fueron el 81% de los beneficiados por el *reparto*. En algunas de ellas coincidieron los atributos de accionera y viuda de militar (11,5%), mientras que otras eran sólo viudas de militares (43,7%) o accioneras (9,2%). No obstante, hubo un 35,6% de mujeres que no podían alegar ninguna de las dos cualidades referidas, y sin embargo recibieron pequeñas cantidades en plata, casi nunca mayores de 25 pesos. Las anotaciones vertidas junto a sus nombres, aunque escasas, muestran con bastante claridad a quienes se consideraba con méritos suficientes para ser asistidas: en rasgos generales, las que se hallaban desvalidas o privadas de contención masculina, o bien las que mantenían parientes inválidos o huérfanos.

Al concluir la Guerra de Sucesión, Felipe V premió la lealtad del cabildo de Buenos Aires durante la contienda restituyéndole el control exclusivo sobre la explotación del ganado cimarrón. Gracias a dos Real Cédulas de 1714 y 1716, la comercialización de los cueros volvió a manos de la corporación municipal. Pero los accioneros siguieron incorporados a un sistema de *repartos* que favoreció también a los pobres vergonzantes, las viudas y los huérfanos de la ciudad. Como ordinariamente las utilidades del tráfico de cueros no resultaban suficientes para implementar una política de beneficencia pública y cumplir a la vez con el *tercio* de todos los accioneros, los alcaldes ordinarios se vieron obligados a decidir –a veces arbitrariamente– a qué accioneros y a qué pobres se favorecía en cada *reparto*.

Desde que volvió a controlar las ventas de corambre a los navíos de registro y los barcos negreros, el ayuntamiento hizo depender sus políticas asistenciales de esos ingresos, a imitación de como lo habían hecho los gobernadores. Los accioneros, como bien dijimos, no quedaron excluidos: su matrícula fue depurada, expurgando de la misma a todos aquellos que presentaran títulos imperfectos, pero se los agregó a un

conjunto mucho más amplio de beneficiarios. Analizaremos quienes componían dicho conjunto a través del análisis de un caso: el *reparto de cueros* efectuado por el cabildo en 1723, al que se postularon varios cientos de vecinos que aspiraban recibir limosna o se consideraban con derechos al *tercio*.⁴⁸⁸

Ese año varias embarcaciones se habían presentado en el puerto solicitando corambre. Los capitanes Salvador García Pose y Joaquín de Tribiños, propietarios de tres navíos de registro que se hallaban en el puerto, solicitaron la carga de 20.000 pieles para embarcar a Cádiz, mientras que la administración local de la *South Sea Company* demandó 40.000 pieles para llenar las bodegas de cuatro barcos negreros. El cabildo se aprestó a otorgar licencias para que se realizaran varias vaquerías. Determinó que los cueros destinados a los registreros, lo mismo que 25.000 de los que había requerido el Real Asiento, serían hechos en la Banda Oriental a un precio de 11 reales por pieza, mientras que los 15.000 restantes se harían en las pampas, a 13 reales por pieza. Lógicamente, los británicos presionaron al ayuntamiento para que autorizara que las dos vaquerías se realizaran en las campañas de San Gabriel, en territorio oriental, a fin de disminuir los costos.⁴⁸⁹

Conminado por los asentistas, el cabildo escrutó si quedaban ganados en áreas no tan lejanas a la ciudad —se organizó una expedición hasta el Tuyú a tal efecto— pero la escasez de animales en las praderas pampeanas ya se presentaba como irreversible. En la sesión del 4 de septiembre de 1723, los cabildantes aceptaron que se habían hallado “*dichas campañas muy destruidas de los ganados vacunos y que los pocos que han quedado se hallan retirados en las Sierras en distancia de más de cien leguas cuyos caminos son muy penosos... y sobre todo lo que más imposibilita estas faenas es el riesgo de los indios infieles para cuyo resguardo será precisa escolta de cien hombres*”.⁴⁹⁰ Un acuerdo posterior reveló que las últimas toradas cimarronas se encontraban a unas 150 leguas del puerto, donde la llanura estaba “*infestada de indios serranos, pegüenches y aucaes que bajan de la cordillera de Chile*”.⁴⁹¹

⁴⁸⁸ Las peticiones de 1723 han sido incluidas por error en IX-19-7-2, *Archivo del Cabildo de Buenos Aires (1774-1809)*.

⁴⁸⁹ AECBA Serie III, Tomo V, Pág. 139 y 154.

⁴⁹⁰ AECBA Serie III, Tomo V, Pág. 122. Para enmarcar este suceso en el proceso de transformaciones que se produjeron en la zona pampeana a raíz del avance de los araucanos, véase la excelente síntesis de Florencia CARLÓN “Repensando los malones del siglo XVIII en la frontera de Buenos Aires” en Darío BARRIERA y Raúl FRADKIN **Gobierno, justicia y milicias, la frontera entre Buenos Aires y Santa Fe 1720-1830** FaHCE, Universidad Nacional de La Plata, 2014, Págs. 256 y ss.

⁴⁹¹ AECBA Serie III, Tomo V, Pág. 142.

La disconformidad de los británicos con los precios propuestos por el ayuntamiento condujo a una nueva negociación y pospuso la realización de la vaquería que debía surtir a los barcos negreros. Pero los navíos de registro de García Pose y Tribiños fueron abastecidos a término. Esto arrojó una entrada de 30.000 pesos, de los que 10.000 debían ser destinados al *tercio de los accioneros*. No fue fácil distribuir libremente estos fondos. Surgió el problema de cómo satisfacer a los accioneros que exhibieran títulos en regla, no sólo a los que se caratulaba como *principales*, y hubo que nombrar dos diputados para ordenar la matrícula y establecer un listado de los beneficiarios, priorizando a aquellos que no habían sido atendidos en anteriores *repartos de cueros*. Sólo entonces pudo desviarse parte de esa suma a socorrer a los *pobres miserables*, cuyo derecho a ser asistidos fue considerado por primera vez tan legítimo como el de los accioneros. El acuerdo del 15 de julio de 1723 refiere que

*“...habiendo reconocido por los repartimientos pasados que sólo se atendían a las personas que se discurrían ser principales en las acciones a repartirles las porciones de cueros que se hacían, y que en esta forma no disfrutaban esta conveniencia los demás que tenían derecho a dichas acciones por ser pobres o por no tenerlos presentes de que se le seguía grave perjuicio a los que no se repartían, fueron de parecer que para obviar estos inconvenientes y que todos los accioneros, así troncos como ramas, gocen de este beneficio **se haga el repartimiento presente y los demás sucesivos en las acciones principales que se hallan matriculadas** y en las justificadas y en las que en adelante se justificasen para que el producto que a cada una tocara se reparta por igualdad entre todos los interesados de la acción repartida y para ellos se nombraron por diputados a dichos señores Don Sebastián Delgado y Don Miguel de Esparza con facultad de poder despachar libremente.*

*...Dijeron que teniendo presente la Real Cédula de S.M. que confirma los repartimientos hechos hasta aquí y estar en práctica que así a los troncos de las acciones como a sus ramas se les ha repartido como consta de dichos repartimientos es de sentir que **se separe lo que es acostumbrado para las pobres viudas y huérfanos**, y son de sentir hoy que en los repartimientos que en adelante hubiere se separe alguna cantidad para los reparos que se puedan ofrecer en orden a las salidas de Campañas para el resguardo de los ganados*

*que con eso se mantendrán que es lo principal a que este Cabildo debe atender...*⁴⁹²

Dos días más tarde se llegó a una decisión respecto de cómo debía realizarse la distribución:

*“...se han hecho en esta sala repetidas juntas y en ellas se ha propuesto y conferido el modo de practicar el referido repartimiento reconociéndose muchas e indisolubles confusiones por la multiplicidad de accioneros incapaces de averiguar sus troncos y ramas de que se originan gravísimos perjuicios, mayores que los que se pretendían excusar en la resolución tomada en el referido acuerdo. Mediante lo cual es de parecer que no obstan lo expresado se **guarde, observe y practique el modo antiguo de repartir los cueros entre los legítimos accioneros** hasta la cantidad que prorratedados alcanzaren según la equidad distributiva, **segregándose trescientos pesos para repartir entre pobres miserables...**”*⁴⁹³

No sabemos en qué momento preciso se implementaron los *repartos*, pero en el transcurso de ese año, tanto los accioneros como los pobres de ambos sexos y los huérfanos fueron convocados al despacho de los alcaldes ordinarios del cabildo a presentar sus peticiones por escrito.⁴⁹⁴ Uno de estos alcaldes, Antonio Gallegos, fue el encargado de recibirlas y el que en definitiva decidió a quien se beneficiaba y a quien se rechazaba. Se realizaron por lo menos dos *repartos de limosnas* o *repartos de cueros* (esos fueron los términos figurativos en que se expresaron la mayor parte de los aspirantes) entre un número bastante reducido de personas: la mayor parte de los peticionantes quedaron descartados por motivos que muy pocas veces fueron aclarados. Contados vecinos (en su mayoría mujeres) recibieron un corto número de varas de tela o excepcionalmente algunos reales en plata. Que las *limosnas* iban a ser sustanciadas

⁴⁹² AECBA Serie III, Tomo V, pags. 98-99. El resaltado es nuestro.

⁴⁹³ AECBA Serie III, Tomo V, pags. 100-101. El resaltado es nuestro.

⁴⁹⁴ Según declara una de las peticionantes, “*han sido llamados los accioneros, viudas y huérfanas de esta ciudad*”; IX-19-7-2, *Archivo del Cabildo de Buenos Aires (1774-1809)*. [A partir de aquí, todas las citas, salvo referencia a contrario, corresponden a este legajo. La totalidad de los subrayados en las mismas son nuestras]

sustanciadas en textiles fue algo que quedó claro desde por lo menos la segunda convocatoria.⁴⁹⁵

Las peticiones que se conservan ascienden a 460 y constituyen sin lugar a dudas una fuente documental invaluable sobre las políticas municipales de asistencia anteriores a la creación del Virreinato. Se trata en todos los casos de breves rogativas, dictadas a un tercero o escritas por los mismos solicitantes en hojas de 10 por 15 centímetros, casi todas ellas utilizando una sola carilla. Algunos supieron firmarlas, pero la mayoría no lo hizo: recordemos que se trataba de una población substancialmente analfabeta, sobre todo en el caso de las mujeres. No obstante, la inmensa mayoría de las solicitudes fueron redactadas en primera persona, lo que indica a las claras que no se aceptaba que fueran presentadas por parientes o gestores. Sólo en contadísimos casos –el de alguna huérfana menor de edad o alguna beata retirada en vida de oración– se permitió, a manera de excepción, que la petición fuera entregada por un tercero.

Parece haberse insistido en que los peticionantes identificaran las causas de su solicitud, pero sin facilitarles formularios ni indicaciones por escrito. En este sentido, las peticiones difieren de las que presentaban los pobres urbanos ante las asociaciones de socorro de Europa Occidental. Una de ellas, la *Congregazione di San Giovanni Battista* de la ciudad de Florencia, estudiada por Stuart Wolf, exigía a los solicitantes que rellenaran un impreso en que se les requería información sobre el nombre del peticionante, su relación con el jefe de la unidad familiar, edad, estado de salud, oficio, nombre del patrón y salario semanal. Además debían especificar la forma de asistencia que esperaban conseguir y refrendar su declaración con el comentario y la firma del cura párroco.⁴⁹⁶ Esto no ocurre con las rogativas de 1723, de las que no tenemos evidencias que siguieran algún tipo de indicaciones o reglas escritas.

Buena parte de los solicitantes se consideraban a sí mismos *pobres vergonzantes*. Estos eran, al decir de Donzelot, los que se sentían avergonzados de pedir ayuda “a causa de su profesión o cuna” y debían ocultar su miseria para no perder su reputación o las de sus familias.⁴⁹⁷ En Buenos Aires, la pobreza también podía contrastar con la *calidad* de una persona. Que alguien se considerara pobre no significaba que fuera

⁴⁹⁵ En esa ocasión, una de las solicitantes rogó que “*se sirva favorecerla con una limosna de los deshechos de algunos retazos de bayeta o lienzo con que en parte pueda honestar su desnudez*”.

⁴⁹⁶ Stuart WOLF **Los pobres en la Europa moderna** Crítica, Barcelona, 1989, Págs. 221-222.

⁴⁹⁷ Jacques DONZELOT **La policía de las familias** Pre-Textos, Valencia, 1979, Pág. 63; Silvia ARROM “Desintegración familiar y pauperización: los indigentes del Hospicio de Pobres de la ciudad de México, 1795” en Pilar GONZALBO AIZPURU y Cecilia RABELL ROMERO (coord.) **Familia y vida privada en la Historia de Iberoamérica** El Colegio de México, 1996, Págs. 125-126.

necesariamente un vagabundo o un mendigo. Ninguno de los vecinos que solicitó ayuda del cabildo en 1723, ciertamente, lo era. Incluso el 68,6% de quienes acudieron por una limosna ostentaba el título de *don* o *doña*. Más allá de que la pobreza de algunos pudiera ser un mero fingimiento, pensamos que podía expresar perfectamente la insatisfacción de no vivir como lo exigía su *calidad* de vecinos españoles. O también el temor de degradarse y convertirse, a la larga, en otro tipo de pobres, los menesterosos.

Al leer los petitorios, lógicamente, no resulta fácil establecer cuánto había de realidad y cuánto de retórico en ellos. No obstante, no debe olvidarse que en 1723 Buenos Aires era una ciudad de unas 9000 almas, donde era poco probable que la información pudiera ser falseada con éxito. No es improbable que algunos de esos “pobres”, descendientes de los *vecinos conquistadores* de la ciudad, se sintieran sinceramente deshonrados al tener que ocupar sus manos en el trabajo. Tampoco que al no tener un lugar donde vivir, temieran que el resto de la vecindad confundiera su peregrinaje por las casas de sus parientes con una suerte de vagabundeo. Pero asimismo es cierto que buscaban la manera más eficaz para persuadir a las autoridades capitulares sobre sus carencias, fingidas o reales, para que se los beneficiara en el *reparto*. Por eso, nos parece importante determinar el repertorio de estrategias discursivas de que se valieron al peticionar ante el cabildo, intentando no arriesgar juicios sobre la sinceridad de sus declaraciones.

Lo primero que importa definir es la actitud preponderante de los peticionantes frente al ayuntamiento. El tenor discursivo de las solicitudes, sobre todo de los que se decían pobres, era de extremo respeto y reverencia a las autoridades corporativas, dando a entender su acatamiento a las consignas de docilidad y pasividad exigidas a los pobres del Antiguo Régimen. En algunas de las peticiones, el cabildo (y en su representación el alcalde ordinario) fue llamado *padre* de los pobres. Sin duda, esta visión de la corporación vecinal, que acaso ella misma alentaba, recogía la concepción de *paternitas* que se atribuía en la Antigüedad al Senado romano.⁴⁹⁸ Así se dirigía, por ejemplo, doña Andrea Ortiz de Leguisamo, vecina accionera, al alcalde Gallegos:

“...presupuesto el repartimiento que Vmd se sirve de hacernos limosna a las pobres necesitadas y hallándome en la mayor [pobreza], que es estar cargada

⁴⁹⁸ Sobre el concepto romano de *paternitas*, véase Moses FINLEY *El nacimiento de la política* Grijalbo, Barcelona, 1986, Págs. 53 y ss.

*de obligaciones de hijos para mantenerlos, pido esta limosna, **que como Padre atenderá a las pobres desvalidas***".

Doña Sabina Flores le dispensaba un tratamiento similar:

*"...respecto de hallarse pobre y desamparada del arrimo así paterno como materno, y sin tener otra comodidad para el mantenimiento natural, pide una limosna de los bienes que el caritativo pecho de Vmd. se ha servido repartir a las pobres necesitadas, **socorriéndolas como su Padre**, pues así lo debemos venerar"*.

No obstante, esta aceptación de las consignas de docilidad y pasividad se adecuaba a los que optaban por presentarse como pobres, pero era resistida por lo menos por una parte de los accioneros. Estos, que se consideraban los únicos beneficiarios legítimos del *reparto*, se creían desplazados a causa de las componendas de los regidores y alcaldes del cabildo, que favorecían a los miembros de sus clientelas personales bajo la excusa de repartir limosnas. Doña María de Hurtado, viuda de don Joseph Suárez, se declaraba a la vez accionera, pobre y cargada de ocho hijos, siendo a la vez candidata a la beneficencia y al tercio de los accioneros. No obstante, siempre quedó apartada de los *repartos*, a su entender por no formar parte de aquellas redes personales. En su solicitud no disimulaba los motivos por los que creía haberse visto excluida:

*"...les suplico que por vía de limosna me socorran con la que fueren servido, pues siendo legítima accionera (como es público y notorio) no he merecido se me haya dado hasta ahora el menor socorro **por faltarme padrino para ello**"*.

El capitán Roque Ximénez de Paz, hijo y nieto de accioneros, tampoco había sido incluido en los *repartos*. Este vecino se creía descartado por pertenecer a un linaje pobre y por lo tanto, con escaso poder de reclamo:

"...dice que en ninguno de los repartimientos que se han hecho para bajeles de registro ni Reales Compañías de esclavos negros de Francia y Inglaterra se le ha incluido por su pobreza".

Los mecanismos de patronazgo a que alude la petición anterior no siempre eran aceptados mansamente. No faltó quien expresara su rechazo a esa política de protección clientelar, aun a riesgo de que su solicitud fuera descartada. La reacción de doña María Suárez de Guzmán y Maldonado, que se decía accionera por partida doble, tanto por línea materna como paterna, respondía a esa tónica. Esta vecina se consideraba con suficientes derechos para ser considerada en los *repartos*, “*sin embargo de la contradicción que se ha hecho por algunos capitulares de depravada intención que **con motivo y pretexto frívolo y de poca sustancia pretenden excluirla de la parte que debe tener en la repartición***”.

“Troncos y ramas”: los vecinos accioneros en el reparto de 1723

Las rogativas de 1723 nos permiten apreciar cómo se percibían a sí mismos los últimos accioneros de Buenos Aires. Estos fueron el 36,6% de los peticionantes: nos encontramos, pues, ante una minoría que pretendía imponerse frente a quienes se decían “pobres”. Minoría que, sin embargo, mostraba una fisonomía bastante compacta: el 96,5% de quienes la componían recibían tratamiento de *don* o *doña*, y en el caso de los hombres, detentaban en unos casos altos grados militares o dignidades sacerdotales y, en algunos otros, antecedentes como funcionarios del cabildo.

Resultaba difícil, tanto para los accioneros como para el mismo cabildo, considerar la acción como un derecho individual. Se advierte claramente una tendencia a la *linajización* de las acciones. No era raro, por lo tanto, que se hablara de la acción “de los Gaetes” o la acción “de los Cobos”.⁴⁹⁹ El cabildo habla en sus acuerdos de “*troncos y ramas*”, refiriéndose a las extensas parentelas que compartían uno o más títulos sobre el ganado cimarrón. Los accioneros buscaban ser reconocidos como parte de las mismas, en algunos casos aludiendo al apellido que los vinculaba, en otros haciendo referencia a un antepasado común, que en ciertas ocasiones había estado ligado a la gesta conquistadora. El clérigo Gerónimo de Avellaneda, por ejemplo, se declaraba “*uno de los principales accioneros herederos de Cristóbal Na[ha]rro*”, uno de los primeros vecinos de la ciudad, mientras que doña Bonifacia de Abalos y Mendoza se decía “*coheredera de Víctor Casco de Mendoza poblador y conquistador de esta ciudad y uno*

⁴⁹⁹ Doña Prudencia Sánchez, viuda de Joseph Torres, por ejemplo, decía representar los derechos de su difunto marido, “*accionero que fue por los Gaetes del ganado vacuno que pasta en estas tierras realengas*”.

de los legítimos accioneros".

Detrás de las acciones se había conformado una tupida red de parentescos, algo que ya podía apreciarse con antelación al *reparto* de 1723. Ya en 1681 se afirmaba que "*hasta los más casamientos han tenido efecto a título de parte de accionero*".⁵⁰⁰ A resultas de esta profusa política matrimonial, algunos de los solicitantes terminaron sosteniendo derechos por parte de padre y de madre, o afirmaban haberlos heredado de más de un antepasado. Tal era el caso de doña María Gutiérrez, "*accionera legítima por ambas líneas paterna y materna, por haberlo sido el capitán Antonio Gutiérrez su padre, como doña Bartolina Maziel por el derecho de su padre el capitán Francisco Maziel, su abuelo*". O el de doña Petronila Benavídez, "*hija legítima del capitán Diego Benavídez y de María de Sanabria, ambos accioneros*". Hubo otros que aludieron a derechos heredados de ambos progenitores o vincularon a antepasados más remotos con el origen de la acción.

En varias de las peticiones pueden detectarse los matrimonios entre accioneros, lo que demuestra que esa tendencia endogámica seguía vigente. Catalina Martínez, viuda del teniente Manuel Flores, decía ser "*accionera por dos partes, la primera por su abuelo Juan García Señero y por la otra parte del difunto su marido*". Juan Bautista de Aguirre Salazar y doña Antonia de Abendaño declaraban serlo los dos, para que les "*apliquen el derecho que les tocan por ambas partes en el repartimiento de los cueros por no habérseles aplicado este tan justo derecho más que una vez y en número tan corto*". Doña Gregoria de Aguirre y Salazar, viuda de don Gregorio Avellaneda, reclamaba ser tenida en cuenta en el *reparto*, "*siendo por dos partes accionera legítima a los ganados de estas Campañas pues es notorio [que] dicho mi marido lo era y juntamente yo*". Y don Nicolás del Pozo y Silva por la acción que heredó de su padre y "*por el derecho que asimismo tiene a dichas Campañas como marido y conjunta persona de doña Beatriz Jimenez Na[ha]rro*".

El cabildo, que percibió esta tendencia a la *linajización*, se valió de ella para reducir al mínimo el cupo de cueros repartidos entre los accioneros. En más de una ocasión, los peticionantes recibieron una negativa por respuesta, fundada en que ya se habían dado cueros a sus parientes en *repartos* anteriores. El derecho al *tercio de los* accioneros pertenecía a la acción, no al individuo que lo poseía, y en ciertos casos la titularidad originaria de una acción se conservaba indivisa ("tronco") mientras que en otros era

⁵⁰⁰ Citado por Julio V. GONZALEZ *Historia Argentina...* Págs. 143-144.

detentada por varios coherederos (“ramas”). De las 168 solicitudes presentadas por accioneros, 28 fueron descartadas por ese motivo. La del clérigo Gerónimo de Avellaneda, por ejemplo, fue rechazada porque “*a su padre se le dio una vez y al dicho otra vez*”. A Francisco Gaete se le respondió que “*a su madre se le ha dado dos veces y a su hermana Teresa una vez*”. A doña María de Arroyo Ponce de León, mujer del capitán Luis Pesoa de Figueroa, “*que por haberse dado cueros a su marido en el repartimiento último se le tendría presente otro año*”. Y al alférez Sebastián de Rocha que “*tres veces se le ha dado a su padre*”.

Estas restricciones provocaban inevitables tensiones en el seno de las familias accioneras. En uno de sus acuerdos de 1723, el cabildo dispuso que los *repartos* debían practicarse de manera tal “*que todos los accioneros, así troncos como ramas, gocen de este beneficio... para que el producto que a cada una tocara se reparta por igualdad entre todos los interesados de la acción repartida*”.⁵⁰¹ No obstante, esta injerencia del cuerpo vecinal, que pretendía normar la distribución de cueros en el interior de las parentelas, indica que en el seno de las mismas existían quienes monopolizaban las acciones, excluyendo a sus allegados. Un ejemplo significativo fue el del alférez Joseph Fluxan, que se decía “*hijo legítimo de doña María Romero de los Cobos y sucesor en la acción de ganados cimarrones que dicha mi madre heredó de sus mayores*”. Este acusaba a su tío materno de haber usufructuado de esa acción y dejado a su madre fuera de los *repartos*. Explicaba el alférez que

“*...mi madre era la mayor heredera en la dicha acción y en toda su vida sólo una vez se le atendió en una muy leve porción de repartimiento, pues aunque haya tenido mayor fortuna en esto mi tío el capitán Pedro Romero en cuyo poder he sabido por los instrumentos de nuestro derecho, nunca asistió a mi madre, hermana suya, con el interés que era la razón partible*”.

Las consecuencias de la endogamia, empero, no deben exagerarse. El efecto dispersor de las herencias, a pesar de que tendió a ser corregido mediante el matrimonio entre accioneros, provocó que las acciones circularan en un espacio social más amplio y escaparan del control de las antiguas familias *beneméritas*. Algunas peticiones permiten reconstruir esos trasposos. Lo ilustra el caso de doña Josefa Rosa de Alvarado, hija de

⁵⁰¹ AECBA Serie III, Tomo V, Págs. 98-99.

un funcionario de la Real Hacienda y viuda del general Miguel de Riblos, que hubo de su esposo la acción que éste había heredado de su primera mujer. Josefa Rosa reclamaba los cueros que hubieran tocado al difunto Riblos *“como heredero a la acción que tenían a los ganados que pastan en estas campañas Doña Gregoria de Cospedal, mujer que fue de dicho Don Miguel, y en ella sus hijos y míos”*.

El cabildo también ejercía su control sobre los accioneros mediante la matriculación de las acciones. Algunos vecinos debieron realizar probanzas para demostrar sus derechos. Tal fue el caso de doña María de Hurtado y Mendoza, que para justificar la acción de sus antepasados presentó el testamento de su padre, en que se le nombraba única heredera. Pero cuanto más antiguas fueran las acciones, más difícil era comprobar sus antecedentes, con lo que menguaban las posibilidades de ser incluido en los repartos. Recordemos el acuerdo del 17 de julio de 1723, en que se deploraban las *“muchas e indisolubles confusiones por la multiplicidad de accioneros incapaces de averiguar sus troncos y ramas”*. Doña María de Saravia, por ejemplo, que se sabía descendiente de accioneros, no tenía manera de probarlo. Era, según decía, *“nieta legítima de Manuel Martínez de Enciso y Saravia por los cuales no duda tener derecho a acción a los ganados de estas campañas pero no siéndole posible, en esta ocasión, exhibir jurídicos instrumentos que manifiesten el mencionado derecho”*. Igualmente vagas fueron las referencias que dio el alférez Antonio Cuenca, quien en su solicitud al cabildo dijo que *“tiene entendido [ser accionero] por parte de su abuelo y abuela don [Enrique] Enríquez y doña Inés de Santa Cruz y Romero accioneros antiguos”*.

Algunos accioneros intentaron reforzar sus derechos aludiendo a los servicios militares de sus antepasados y a la vinculación de estos con la gesta conquistadora. Pero ello no significó que su acción se remontara a épocas tan remotas. El capitán Juan Maziél del Aguila se consideraba con derechos a ser incluido en el reparto *“por ser persona noble y benemérita con adquiridos servicios propios y de sus mayores”*. Doña Mariana Leal afirmaba ser *“de las primeras [accioneras] de esta ciudad y también de las descendientes de pobladores”*. Isabel Rodríguez era, según decía, *“hija y biznieta de los primeros pobladores y conquistadores de esta ciudad y accioneros de ella”*. Doña Ursula de Abalos y Mendoza era *“nieta y biznieta de los primeros pobladores y conquistadores de esta ciudad y accioneros de ella”*. Y una parienta de esta última, doña Catalina de Abalos y Mendoza, juzgaba que su prosapia y las limitaciones físicas de la vejez eran razones de igual peso, cuando pedía que se la tenga en cuenta *“en atención a ser nieta y biznieta de los primeros pobladores y conquistadores de esta*

ciudad y accioneros de ella y al presente se halla sumamente pobre y tullida".

En el caso de los hombres que se presentaron ante el cabildo, estos con frecuencia añadieron una breve relación de los servicios prestados a la Corona. Quizás esto se debió a que en algunas ocasiones, el cabildo había premiado con cueros la participación de los vecinos en las expediciones contra los indígenas.⁵⁰² Las viudas, por su parte, hicieron alusión al desempeño militar de sus difuntos esposos. Doña María Benavídez alegaba que su marido *"perdió la vida a manos del enemigo en servicio de Su Majestad"*, y doña María de Lara que el suyo *"toda su vida empleó en servicio de Su Majestad hasta que murió, así en tierra como en mar"*. También refirieron la participación de sus hijos en la defensa de la ciudad. Doña Juana Leal de Ayala, viuda del capitán Antonio de Aguirre, recordaba *"los servicios del dicho su marido y a imitación un hijo suyo en la guarnición de esta Plaza"*. Y doña Luisa Alvarez, hija de un accionero y viuda de un capitán, aludió a *"sus hijos, que siempre acuden (como buenos vecinos) a cuantas funciones se ofrecen para la defensa contra los indios Caribes"* (sic).

Este tipo de alusiones es un indicador de que los derechos de los accioneros se habían ido debilitando, por lo que necesitaban apoyarse en otros argumentos para ser tenidos en cuenta. Pero esa estrategia dio lugar a que quienes tenían antecedentes militares pero no poseían acción al ganado pretendieran también ser incluidos. Así lo hizo Andrés Gómez de la Quintana, que argüía haber *"servido a Su Majestad desde el año pasado de 81 inclusive y de procurador general al Muy Ilustre Cabildo de esta ciudad"*. Un caso curioso es el de Diego Martínez Tirado, que manifestaba haber cumplido con sus deberes de *vecindad* y pretendía ser retribuido. Afirmaba ser *"vecino de esta ciudad quien como tal ha atendido el suplicante y sus hijos al servicio de Su Majestad en ella cada vez que se ha ofrecido... atendiendo VS a que es vecino muchos años ha en esta ciudad y que en ninguno de los antecedentes repartimientos se le ha atendido por ningún motivo"*.

Los accioneros recalcaron el pasado de sus familias, entroncadas en la gesta fundadora y por tal razón *beneméritas*. Los hombres, además, aludieron a sus antecedentes militares y a otros servicios a la Corona, inclusive al desempeño de funciones en el cabildo. Las mujeres, en cambio, prefirieron contraponer las exigencias de su "calidad"

⁵⁰² Alegaba un accionero, Lázaro Ruiz de Ocaña: *"jamás se me ha hecho repartimiento y sólo lo he tenido en doscientos cueros que se me dieron como a capitán por las veces que he salido a guardar las Campañas"*.

a un presente de pobreza, que en muchos casos pudo haber sido más real que discursivo. Doña Leonor de Astudillo dijo haber heredado una acción de sus abuelos, pero por su extrema pobreza se había visto obligada a alquilar la casa de su morada, y ahora rogaba una limosna en atención “*a ser persona noble y benemérita y a hallarse pobre y en edad crecida*”. Lo mismo ocurrió con doña Isabel Chavero de Oquendo, que se confesaba a la vez “*pobre de solemnidad... accionera legítima... y aunque pobre y necesitada, hija y descendiente de los primeros y más principales conquistadores, así de esta provincia como del Reyno de Chile*”. Sin embargo, cuando pidió ser incluida en el *reparto*, no lo hizo como accionera sino “*por vía de limosna*”.

Buena parte de estas mujeres ya percibía que se estaba privilegiando la condición de *pobre* antes que la posesión de una acción. Por eso hubo vecinas como doña Petrona y doña Agustina de Piña, descendientes del vecino fundador Juan Ruiz de Ocaña, que reconocieron ante el alcalde que “*por su abuelo les viene el ser accioneras, aunque dejando este motivo sólo desean atiende Vmd a remediar en algo lo mucho que padecen por su pobreza*”. O como doña Juana Leal de Ayala, perteneciente también las familias fundadoras, que se reconocía “*descendiente de accioneros legítimos a los ganados vacunos de esta jurisdicción*”, pero prefirió aclarar que “*por esta razón no se opone, sino por la de sus necesidades*”.

La limosna destinada a los pobres: viudas, desvalidas y huérfanos en 1723

En las sociedades del Antiguo Régimen, la asistencia a los pobres era considerada un deber cristiano y la caridad era vista como el modo de comportamiento altruista por excelencia. Estas otorgaban a los ricos una inmejorable oportunidad para la figuración social, a la vez que permitían a la Iglesia poner en funcionamiento su maquinaria ceremonial. Al hacerse pública, la generosidad se hacía ostentosa y se convertía en una cuestión de honra, ya que los legados constituían un motivo de prestigio tanto para el donante como para su familia.⁵⁰³ No obstante, las políticas de beneficencia fueron a la larga acaparadas por los organismos municipales, que servían de expresión a los grupos de poder local. Esto sucedía porque la pobreza era también un problema para los sectores dominantes, que buscaban hallar la manera de redistribuir parte del excedente sin alterar las reglas de acumulación y conservación de la riqueza.⁵⁰⁴ Eso motivó su

⁵⁰³ Abram de SWAM **A cargo del Estado** Pomares-Corredor, Barcelona, 1992, Págs. 32-39.

⁵⁰⁴ Abram de SWAM **A cargo del Estado**... Pág. 24.

interés por socorrer a inválidos, mujeres desamparadas y, en general, todos los pobres que se manifestaran sedentarios, pasivos y respetuosos de la ley, a la vez que se perseguía y castigaba a los individuos considerados físicamente aptos pero socialmente menos dóciles, pues alternaban la mendicidad con el trabajo ocasional y el bandidaje. A estos, caratulados tradicionalmente como *mendigos*, *vagabundos* o *viciosos*, se los encontraba más dignos de un correctivo que de la caridad pública.⁵⁰⁵

Seguendo el modelo de Abram de Swam, puede considerarse a la Buenos Aires de las primeras décadas del siglo XVIII como una comunidad relativamente cerrada, en tanto sus habitantes lograban satisfacer sus necesidades básicas con productos de su entorno rural y la incidencia de las migraciones provenientes de las ciudades vecinas se mantenía en un nivel aceptable. No hubo en este período sacudidas externas que alteraran los modos de dependencia e intercambio de esta ciudad periférica del imperio español. Por ende, faltaron perturbaciones que generaran un aumento en el número de pobres y pudieran afectar el esquema de beneficencia pública, tales como fluctuaciones anormales en el precio de los alimentos básicos, malas cosechas, catástrofes climáticas, rebeliones, guerras o epidemias.⁵⁰⁶

En relación con los precios, el del trigo no exhibió una tendencia a aumentar, pero el de las reses estaba en alza, afectado por la progresiva extinción de las manadas de ganado cimarrón en las praderas pampeanas. El cabildo expresaba en uno de sus acuerdos que “*antes de ahora por la abundancia de ganado que había se comía el cuarto de carne comprado en el matadero lo sumo por un real y medio y hoy por lo escaso del ganado se compra el cuarto de carne por tres reales*”.⁵⁰⁷ Puede decirse, sin embargo, que en el momento del *reparto* de 1723 no se presentaron irregularidades en el normal abastecimiento de pan y carne. En cuanto a los trastornos de tipo epidemiológico, hay referencias a que la ciudad estaba experimentando entonces una *peste*, pero fueron realmente pocos los que solicitaron limosnas por esa causa, lo que indica que tuvo un alcance relativo o, por lo menos, no excesivamente perturbador.

Las aspiraciones de los sectores empobrecidos de las sociedades precapitalistas consistían en asegurarse un techo, los alimentos y la ropa necesaria para sus familias, especialmente en los momentos más vulnerables del ciclo vital, cuando las parejas

⁵⁰⁵ Para la temática de la asistencia de los pobres y la corrección de la vagancia por medio del internado en casas de hospicio en la Nueva España, aunque útil para el estudio de toda la América española, véase Silvia M. ARROM “Desintegración familiar y pauperización...”

⁵⁰⁶ Abram de SWAM **A cargo del Estado...** Págs. 42-43.

⁵⁰⁷ AECBA Serie III, Tomo V, pág. 141.

tenían aún niños pequeños que no podían ganarse el sustento por sí mismos o cuando los padres, abandonados ya por sus hijos, entraban en la ancianidad.⁵⁰⁸ Los historiadores de la pobreza han coincidido en ello: la condición de pobre solía hallarse vinculada a determinadas fases del ciclo vital o familiar, que colocaban a los individuos en una situación de particular vulnerabilidad. De ahí que los niños de menos de 15 años, los ancianos solos y las familias encabezadas por mujeres motivaran una especial atención en quienes articulaban las políticas asistenciales durante el Antiguo Régimen.⁵⁰⁹

El 61,7% de quienes presentaron solicitudes en 1723 se declararon pobres. No puede descartarse que ese reconocimiento encubriera una estrategia discursiva: el 46,2% de los peticionantes (esto es, casi la mitad) se dijo pobre a secas, mientras que sólo un 15,5% se declaró *pobre indigente*. Estos últimos eran por definición los que estaban incapacitados para ganarse el sustento, porque no eran aptos para el trabajo o porque incluso trabajando no conseguían satisfacer por medios propios sus necesidades básicas.⁵¹⁰ La indigencia era, sin lugar a dudas, el último peldaño de la pobreza, o si se quiere, la pobreza más “visible”. No obstante, las solicitudes marcan un aspecto que no deja de ser llamativo: aunque pudiera llegar a ser una mancha en la calidad de una persona, la indigencia no lograba opacarla. Entre las 71 personas que se declararon indigentes, 51 recibían el título de *don* o *doña* y otras 7 se dijeron accioneras al ganado cimarrón.

Resulta evidente que en una ciudad en que las carestías de alimentos alcanzaban raras veces a las proteínas de origen animal y sólo esporádicamente a los cereales, la idea de pobreza estaba menos vinculada a una dieta deficitaria que a la imposibilidad de sobrellevar cierto *modus vivendi* exigido al individuo en función a su posición en la trama estamental. Aunque en el Buenos Aires del primer cuarto del siglo XVIII la indigencia pudo estar en muchos casos vinculada con una crisis en una fase vulnerable del ciclo vital familiar, debe tenerse en cuenta que sólo una minoría de los peticionantes (el 29,6%) se declaró a la vez indigente y a cargo de una progenie numerosa.

Los huérfanos: entre la estigmatización y la beneficencia

La tenencia de huérfanos sirvió a los peticionantes para enriquecer el panorama de la

⁵⁰⁸ Eric HOBSEBAWM *La era del imperio, 1875-1914* Crítica, Buenos Aires, 1999, pág. 37.

⁵⁰⁹ Stuart WOLF *Los pobres en la Europa moderna...* Pág. 13.

⁵¹⁰ Stuart WOLF *Los pobres en la Europa moderna...* Pág. 20.

pobreza, de la que era un componente más. Sin duda se trataba de un elemento persuasivo: la presencia de niños en la casa, propios o ajenos, era difícil de pasar por alto a la hora de determinar a quien se beneficiaba en el *reparto*, sobre todo si conformaban familias numerosas. Por eso, al describir unas condiciones de vida deficientes, los solicitantes solían cargar las tintas sobre ciertos aspectos que podían resultar más convincentes, como tener a cargo hijos de corta edad y muchachas casaderas o haber recogido pequeños sin padres.

Al encarar el tema de la orfandad deben diferenciarse dos situaciones, ambas ilustradas en las solicitudes. Algunos vecinos amparaban a sus nietos, sobrinos o hermanos menores de edad, que de esa manera no traspasaban los límites de la parentela inmediata. Pero otros recogían niños sin filiación reconocida, que según una inveterada costumbre eran abandonados en los umbrales de las casas o el atrio de las iglesias. Algunos de esos pequeños habían sido concebidos en el marco de relaciones socialmente inaceptables, como el adulterio y el amancebamiento, y sus madres habían preferido exponerlos antes de reconocerse públicamente en falta. Pero no podemos descartar que también las moviera la falta de medios con que sustentarlos. En los estratos bajos, las uniones ilícitas seguidas de concepciones no deseadas, combinadas o no con la indigencia, movían a las parejas a abandonar a sus hijos, o bien a cederlos a las familias más pudientes.

La sociedad, paradójicamente, colocaba a los niños abandonados por sus padres entre dos opciones: la beneficencia pública y la caridad privada. Desde la Edad Media, la Iglesia había condenado la adopción. Esto tuvo una explicación: si la validez de los lazos de parentesco no se limitaba a la familia elemental, una pareja sin hijos, que normalmente hubiera legado sus bienes a fines piadosos, hubiera contado con herederos forzosos y se hubiera visto impedida de hacerlo.⁵¹¹ La legislación española, por su parte, estigmatizaba la orfandad. Hasta 1794, los huérfanos fueron excluidos de buena parte de los oficios y profesiones, bajo el presupuesto de un origen considerado infamante. Durante el siglo XVII se abrieron en la península hospicios para niños abandonados, generalmente subsidiados por las corporaciones municipales, pero estas fundaciones estuvieron inspiradas en la necesidad de repoblar un país devastado, que necesitaba de agricultores, soldados y marineros. El hecho de que los huérfanos tuvieran prohibido ingresar en la administración pública o estudiar en las universidades señala que se les

⁵¹¹ James GOODY **Historia de la familia** Espasa, Madrid, 1990, Pág. 136.

coartaba cualquier posibilidad de promocionarse, y que sólo se les consideraba aptos para engrosar el debilitado sector de los trabajadores no calificados.⁵¹²

De las 460 peticiones recibidas por los alcaldes en 1723, 79 fueron presentadas por vecinos que manifestaban mantener huérfanos bajo su tutela, o bien por los huérfanos mismos. El 68,4% de estos peticionantes alegó condición de pobre: se situaban así ligeramente por encima del promedio general, que recordemos era del 61,7%. Sin embargo, resulta poco significativa la intersección entre las condiciones de “cargado de familia” (es decir, con hijos propios, generalmente menores de edad) y “a cargo de huérfanos”: tan sólo el 6,11 % de los que tenían una progenie numerosa criaba además niños ajenos a la familia nuclear. Esto es fácilmente explicable: las familias dotadas de escasos recursos que atravesaban por un momento vulnerable del ciclo vital (fundamentalmente el de la crianza de hijos pequeños) no podían distraerlos en alimentar a niños que no pertenecían a su círculo familiar más inmediato.

Ilustremos ahora lo dicho. Una de las solicitantes hizo referencia a las prácticas de abandono, en este caso la exposición de huérfanos. Se trata de doña Gregoria Machado, quien explicaba que *“se halla en pobreza y con la carga de siete huérfanas que he criado y han venido a mis puertas y... las más de ellas no tienen un honesto y proporcionado vestuario”*. Los apellidos de los huérfanos aluden a dos tipologías en la orfandad. A algunos niños se los había criado desde su más tierna infancia, y como no se conocían sus padres por haber sido abandonados adoptaban el apellido de quien los criaba. Pero también estaban los que, aunque reconocidos por sus padres, fueron cedidos por estos a las familias pudientes, o recogidos al quedar huérfanos siendo ya mayorcitos.⁵¹³ En el caso del capitán Pedro Naranjo, que había criado a varias niñas, parecen haberse producido ambas situaciones. Este albergaba en su casa a *“cuatro huérfanas que son Juana Rodríguez, Ana Romero, Josefa Naranjo, Manuela Naranjo, todas a expensas de mi corta inteligencia, que no se pudieran mantener sino por Altísima Providencia respecto de mis cortas fuerzas”*. Cuando las solicitudes fueron presentadas por las madres de crianza, éstas también recurrieron a argumentos persuasivos como lo era el mantenimiento de una familia numerosa, aunque no fuera sanguínea. Doña Gregoria de Ariza y Valdivia se decía *“con dilatada carga de cinco*

⁵¹² Buenaventura DELGADO **Historia de la infancia** Ariel, Barcelona, 1998, Págs. 135-137.

⁵¹³ En las familias novohispanas, una historiadora ha hallado evidencias del mismo tipo de tipologías; Cecilia RAVELL ROMERO “Trayectoria de vida familiar, raza y género en Oaxaca colonial” en Pilar GONZALBO AIZPURU y Cecilia RABELL ROMERO **Familia y vida privada en la historia de Iberoamérica...** Pág. 116.

menores huérfanos de padre y madre que por caridad tengo a mi cuidado”, mientras que doña Mariana Medrano, “*necesitada y con cuatro huérfanos*”, pedía “*una limosna para poder alimentarlos de los cueros que ahora se reparten*”.

Los niños que circulaban en el interior de las parentelas también fueron mencionados en las peticiones. Las familias extendidas a menudo se conformaban a partir de la desintegración de las familias nucleares, cuando la desaparición de la pareja provocaba la dispersión de los hijos. Estos accidentes en el transcurso del ciclo vital se producían tanto en las familias empobrecidas como en las acomodadas, pero en éstas últimas los pequeños desvalidos tenían más chances de ser recogidos por sus parientes. Algunas vecinas se limitaron a requerir una contribución del cabildo para sustentar a esos niños, sin aludir a otro tipo de necesidades. Tales los casos de doña Dionisia de Samartín Azocar, que afirmaba estar “*a cargo de dos pobres sobrinas de todos desamparadas*”, y de doña Jacinta de Melo, “*con la carga de tres sobrinas huérfanas*”.

No obstante, algunas mujeres que recogieron niños dentro del círculo familiar los mencionaron en las peticiones para enriquecer un cuadro de situación donde la pobreza se manifestaba de otras formas. Doña Juana Méndez Caravallo, según afirmaba, “*se halla cargada de necesidades y a su amparo algunos nietos que por muerte de sus padres los ha recogido*”. Una accionera, doña Dionisia Gil Negrete, pidió cueros “*para la manutención de sus cuatro hijos pequeños y también una pobre huérfana deuda suya*”. Y una muchacha que presentó una solicitud por su propia cuenta, Juana de Salas, se aplicaba a sí misma las calidades de “*huérfana desamparada de padre y madre, pobre de solemnidad*”, y explicaba que “*aunque tengo padre era soldado y se huyó y me dejó sola, y así estoy arrimada a una tía tan pobre como yo*”.

No todos los huérfanos conseguían ser alojados y mantenidos por abuelos, tíos u otros parientes cercanos. La conformación de *frerèches* (grupos de hermanos encabezados por un adulto, que se hacía cargo de los más jóvenes) era una respuesta a esa falta de cooperación de la familia extensa. Los huérfanos procuraban de esa manera sostenerse sin dispersarse ni abandonar el hogar paterno. El accionero Lorenzo Flores de Santa Cruz declaraba, por ejemplo, tener consigo “*una hermana y otro hermano menor*”, aunque reconocía que eran “*los tres muy pobres*”. Luis Giles, por su parte, se decía “*huérfano de padres y con cuatro hermanas doncellas y dos hermanos menores*”.

En uno solo de los casos una huérfana aludió a haber recibido el amparo que le ofreció un pariente ritual. El padrino de Clara del Castillo, que de ella se trataba, había pagado a una familia “honrada” para que la alimentara y educara, pero a su muerte no hubo quien

se hiciera cargo de esos gastos. Eso motivó el pedido de la muchacha, anotado por un escribiente:

“...dice que habiendo quedado huérfana de padre y madre siendo de tierna edad, su padrino de agua tomó a su cuidado su educación y sustento, y para esto la puso en una casa honrada donde la criaron con mucho recogimiento, honestidad y temor de Dios, y en ella se mantiene hasta hoy conservándose en el mismo tenor de vida”.

El alcalde Gallegos la consideró digna de un donativo y le concedió un corte de bretaña e hilo de coser. Clara no fue la única huérfana en pedir limosna por sí misma. Los dos siguientes son ejemplos de cómo dos muchachas presentaron solicitudes por su cuenta, en las que se dijeron a la vez pobres de solemnidad y huérfanas.

“Ysabel María, hija de la Iglesia, pobre huérfana de solemnidad, puesta a los pies de V.S. le suplica por amor del Soberano Cristo de los Afligidos se sirva ampararla y favorecerla con una limosna, pues es tan pobre y desnuda y con tanta necesidad que la obliga a pedirle a V.S. se sirva de ampararla”.

“Tomasa de Soria, huérfana de padre y madre y pobre de solemnidad, a Vmd. pide y suplica que del socorro con que socorre a otras pobres le socorra por verse tan desnuda y desvalida de todo socorro humano. Que en ello recibirá merced de la piedad de Vmd.”.

El interés corporacional en socorrer a estas muchachas sin familia se fundaba en un imperativo de orden moral: el resguardo de su virtud. En una ciudad que era a la vez puerto y guarnición militar, la presencia de hombres solos –marineros, peones y soldados del Presidio– era considerada una amenaza para su continencia. Un cuarto de siglo antes, en 1697, se había abierto con ese objeto un *beaterio* para que se alojasen las muchachas huérfanas, pero cinco años más tarde este hospicio, que funcionó en el Hospital Real, tuvo que ser cerrado.⁵¹⁴ En 1723 se estaba llevando a cabo una

⁵¹⁴ Carlos María BIROCCO “La primera Casa de Recogimiento de Huérfanas de Buenos Aires...” Págs. 21-46.

experiencia parecida, la de una Casa de Recogimiento, de la que no se sabe casi nada.⁵¹⁵ Mientras tanto se buscó la inclusión de las huérfanas en el esquema de beneficencia pública, junto con los accioneros y las mujeres desvalidas, para que contaran con un vestuario decente, aspiraran a ser desposadas y de esa manera reprodujeran el estereotipo de *mujeres de probada honestidad*.

Al brindarles asistencia, los capitulares echaban una mirada moralista sobre esas jóvenes desprovistas de contención masculina: las hallaban expuestas a las tentaciones de la carne, favorecida por la *fragilidad* de la condición femenina. A las jóvenes, por su parte, les costaba salirse de ese círculo vicioso: carecían de quien las contuviera por haber perdido a sus padres, pero tampoco hallaban quien las pidiera en matrimonio por no tener quien las dotara. Doña Antonia Navas, cuya falta de medios no oscureció su condición de española ni la limpieza de su ascendencia, supo expresarlo a la perfección, cuando se describió a sí misma como “*una de las pobres huérfanas desamparadas de todo humano favor, que ni casas en que vivir tengo, y soy española de legítima descendencia, y sobre todo por enferma no hallo arrimo en el Santo Matrimonio, ni en mis parientes lo puedo hallar por [ser] de igual fortuna*”. También doña Teodora Martínez de Saravia (una muchacha a la que le llevaría casi veinte años hallar un vecino que la pidiera como esposa) decía estar “*padeciendo muchas necesidades de pobreza*” y ser “*huérfana de padre y madre y suelta de matrimonio*”.

Mujeres viudas y desvalidas: los atributos de la pobreza

De las 460 solicitudes presentadas en 1723, 413 corresponden a mujeres. De éstas, 131 eran accioneras y 282 eran viudas y desvalidas sin títulos sobre el ganado cimarrón. A fin de diferenciar uno de otro sector, hemos analizado varios indicadores, el más relevante de los cuales es, lógicamente, la manifestación de pobreza. La proporción de mujeres que se dijeron pobres a secas es prácticamente el mismo en los dos sectores: 49,3% en las desvalidas y 48,9% en las accioneras. Pero la diferencia se hacía más pronunciada cuando las mujeres se aceptaban como *indigentes*: allí nos encontramos ante el 22,3 y el 5,3%, respectivamente. En las que poseían acción al ganado, entroncadas en gran parte con los linajes fundadores de la ciudad de Buenos Aires, se observa un marcado rechazo en admitir penurias extremas, siquiera como un artilugio

⁵¹⁵ Entre las solicitudes de limosna se encuentra la de dos “*huérfanas de padre y madre que asisten en la Casa de Recogidas inmediata a la de los Ejercicios*”, Lucía Cervantes y Tomasa Bustillos.

discursivo.

Ambos sectores coincidieron en utilizar con la misma regularidad un argumento en particular: el de sostener una familia numerosa. El 42% de las accioneras afirmaba tener muchos hijos, no demasiado lejos del 39% de las viudas desvalidas que se reconocían en idéntica situación. En el resto tendieron a diferir: la pobreza parece haber tenido atributos propios, distintivos. Las accioneras prefirieron adjudicar sus necesidades a motivos que juzgaban menos degradantes, como el de no haber sido beneficiadas en los anteriores *repartos de cueros* (32,8%) o, en casos contados, tener deudas impagas (2,29%). En cambio, raras veces reconocieron la falta de vestuario decente (5,3%), sobre todo si se compara su actitud con la de viudas y desvalidas, que se mostraron menos remisas a hacerlo (19,1%).

No se trata solamente de estrategias discursivas. El *ser pobre*, como observa Stuart Wolf, era una condición relacionada con el status social de cada uno.⁵¹⁶ En tanto concepto relativo, la pobreza generaba unas actitudes, unos comportamientos y un discurso que diferían según el sector que afirmaba padecerla. Nos encontramos en las solicitudes con mujeres de alcurnia que se decían pobres porque no disponían de servicio de esclavos o ya no contaban con inmuebles que arrojaran una renta suficiente para vivir de acuerdo con las exigencias de su procedencia social.⁵¹⁷ Para ellas, la pobreza era haber tenido que renunciar al consumo suntuario, mientras que para otras era faltarles el pan para sus hijos.

No hay que perder de vista que el conjunto de mujeres que solicitaba limosna se hallaba compuesto mayoritariamente por españolas, como lo demuestra su condición abrumadora de *doñas*. Manifestaban una aguda conciencia de status y no habían renunciado a los privilegios que les deparaba su condición socioétnica en el seno de una comunidad de tipo estamental fuertemente signada por los prejuicios. Ese decidido sentido de pertenencia al estamento dominante hacía a menudo un juego contrastante con su presente de pobreza. Un caso paradigmático fue el de doña María de Rocha, que se definía a sí misma como una “*pobre mujer viuda*”, pero decía hallarse “*exhausta de bienes de que se pueda mantener con la honestidad que requiere su calidad y sustentar la crecida familia que tiene*”.

Otras mujeres remarcaron su honorabilidad a través de epítetos como el de *honrada* o

⁵¹⁶ Stuart WOLF *Los pobres en la Europa moderna...* Pág. 62.

⁵¹⁷ A conclusiones parecidas se ha llegado en el análisis de las “declaraciones de pobreza” del período virreinal. Véase: Silvia MALLO “Pobreza y formas de subsistencia en el Río de la Plata” en *Estudios e Investigaciones* n°1, FaHCE, Universidad Nacional de La Plata, 1989.

notable. Esa terminología se ajustaba a una escala de valores que no se veía alterada por la pobreza y remitía al prestigio original de sus familias, nacido en muchos casos en la gesta conquistadora. Doña Beatriz García, por ejemplo, afirmó que era “*viuda honrada así por mí como por herencia de honrados padres y demás ascendientes*”, y cerró su petición llamando la atención del alcalde sobre la notoriedad de sus declaraciones: “*todo es notorio a V.S. como a todo el pueblo*”. Como se ve, la honorabilidad no sólo se fundaba en criterios de pertenencia, sino que debía ser refrendada por la *pública voz y fama*, es decir, por la opinión corriente de la vecindad. Pero hubo mujeres para las que bastó con resaltar su calidad de *españolas*, que juzgaban suficiente para volver contrastante su pobreza. Doña Antonia Navas declaraba: “*soy española de legítima descendencia... siendo como soy de las descendientes de pobladores*”. Doña Lucía de la Cruz, que era “*público y notorio que es española y pobre vergonzante*”.

Todo lo dicho permite comprender que haya habido vecinos que se declamaran pobres por el solo hecho de haberse quedado sin servidumbre. La *peste* había diezmando a los integrantes de algunos hogares acomodados y se había ensañado especialmente con los esclavos. No obstante, en los tres siguientes ejemplos los peticionantes relacionan la pérdida de sus dependientes con la de su consorte o sus hijos. El derecho a la asistencia era un importante componente de las relaciones maritales o paternofiliales, y la desaparición de los familiares más inmediatos traía especiales complicaciones en los tramos más endebles del ciclo vital. Antonio Vallejos se declaraba “*abrumado de trabajos con la epidemia que Dios ha mandado, habiéndosele muerto su mujer y tres esclavos que únicamente tenía, y hallarse cargado de años y con tres hijas doncellas*”. Doña Leonor de Herrera suplicaba una limosna “*respecto de habérsele muerto la hija que la socorría y dos esclavos que la mantenían*”. La viuda doña Francisca del Peso, por último, afirmaba “*que se halla cargada de diez hijos todos menores de edad y demás familia y para poderlos mantener se halla tan escasa de medios pues los tres esclavos que tenía y podían servirle de algún alivio se murieron en la presente epidemia con más dos hijos de la suplicante, quedando sin otro amparo que el de Dios*”.

Esa conciencia de status también se manifestaba cuando se veían obligados a renunciar a una existencia ociosa, propia de la élite. Empujados a valerse por sí mismos para satisfacer las necesidades elementales de nutrición y vestimenta, consideraban el

trabajo manual como una degradación y un padecimiento.⁵¹⁸ Las mujeres que se veían forzadas a hacerlo se encontraban, además, expuestas a la mirada prejuiciosa de quienes buscaban circunscribirlas al ámbito hogareño. Como se las consideraba proclives a depreciarse en su contacto con el espacio público, alejadas de la protección de sus parientes, ellas mismas expresaron su acatamiento a las consignas de docilidad, remarcando la necesidad de trabajar como una situación aberrante, a la que se veían obligadas para mantener a sus familias.

Esta actitud se apreciaba especialmente en muchachas casaderas como doña Rosa, doña Josefa y doña Juana de Acosta, “*solteras y güerfanas*”, que pidieron limosna al cabildo “*por nuestro desamparo y suma pobreza, hallándonos solas sin tener para nuestra manutención más recurso que nuestra corta inteligencia y nuestro trabajo personal*”. Otras dos vecinas solteras, doña Petrona y doña Agustina de Piña, afirmaban hallarse “*necesitadas de medios para pasar la vida por no alcanzar el trabajo de sus manos para ello y ser sus padres ancianos y de ningunas rentas ni fincas para poderlas mantener*”, y solicitaron 200 cueros cada una, que en su opinión era “*lo menos que pueden pedir atenta su gran necesidad y trabajos que por ella padecen*”. Doña Ana y Petrona de Valdivia decían ser “*doncellas pobres y desamparadas que se mantienen con el trabajo de sus manos*” y doña Antonia García Enríquez hallarse “*sin el amparo y sombra de sus padres por ser difuntos como es notorio, ni más congrua que el trabajo de sus manos que es (aunque mucho) insuficiente para mantener sus obligaciones y familia*”.

Lo llamativo en estas peticiones es la exigüidad de las categorías laborales empleadas. Los solicitantes, descendientes casi todos ellos a una élite degradada que no deponía sus antiguos criterios de pertenencia, casi nunca identificaron la naturaleza de sus oficios. Se movían en el interior de un sector donde el trabajo no era considerado un valor y en el que a lo sumo se admitían dos categorías antitéticas: la posibilidad de vivir de rentas, preservándose de toda ocupación manual, y la necesidad de empeñar los brazos en ganarse el pan, aun a costa de denigrarse frente al resto de la vecindad. Quienes admitían trabajar con sus manos se consideraban a sí mismos dignos de conmiseración y trataban de despertar compasión en los representantes del ayuntamiento. “*Se ha de apiadar Vmd. de mi trabajo*”, suplicaba doña Catalina Villoldo, descendiente de uno de los linajes mejor entroncados de la ciudad, al alcalde que le tomó declaración.

⁵¹⁸ Para la visión del trabajo en las sociedades clásicas y medievales, recogida por el mundo hispano, véase Dominique MEDA *Le travail. Une valeur en vie de disparition* Aubier, Paris, 1995.

Algunas mujeres pedían asistencia al cabildo porque se habían visto obligadas a trabajar y se sentían socialmente rebajadas por ello, pero otras porque por enfermedad, vejez u otras contingencias personales ni siquiera podían hacerlo. Entre estas impedidas se encontraba doña Luisa de Cabrera, una vecina que afirmaba ser “*pobre de solemnidad y viuda con más años de ochenta sin poder echar mano a trabajo alguno y no tener con qué tapar su persona*”. Ejemplos como el de esta anciana nos ponen ante una escala contradictoria, que ponía a los que trabajaban con sus manos tanto por encima como por debajo de los que no lo hacían. Por encima de ellos se encontraban los que no tenían necesidad de hacerlo; por debajo los incapacitados, aquellos que no podían satisfacer por sus propios medios las necesidades más elementales.

Las mujeres que admitían trabajar para mantener a los suyos completaban el cuadro de sus padecimientos con la presencia de niños pequeños o hijas doncellas, que por limitaciones propias de su edad o razones de contención moral no podían abandonar el hogar para contribuir con su sostén. Las peticiones son, en ese sentido, bastante reiterativas, y en general aluden a las fatigas de una jefa de familia que tras haber enviudado, debía cargar con una numerosa progenie. María Avila, “*pobre viuda con seis hijas*”, pedía limosna por “*ser todas inhábiles para poder trabajar*”. Doña Gregoria de Rivadeneyra, por su parte, se dijo “*viuda pobre y cargada de hijos a quien mantener a expensas de su trabajo*” y doña Antonia de Vergara y Larroca “*con la carga de tantos hijos e hijas doncellas que dependen de su asistencia y amparo sin más finca que el trabajo e industria*”. A veces, más de una generación de descendientes dependía de una mujer, como en el caso de doña Francisca de Zeballo, quien afirmaba que “*se halla pobre viuda con una hija de estado doncella y tres nietas de menor edad huérfanas de padre y madre y todas se mantienen a expensas del trabajo de la suplicante*”.

Entre las mujeres que reconocían mantener su hogar con el trabajo de sus manos se hallaba doña Antonia Castellanos, hija del Miguel de Castellanos, un oficial de la corona que fue contador de la Real Hacienda hasta que en 1712 el pesquisidor Mutiloa lo acusó de contrabandista, embargó sus bienes y lo envió a prisión. Esta mujer, dotada en su primer matrimonio en casi 5000 pesos, afirmaba haberse visto sometida a los avatares que siguieron a la caída de su padre:

“*...cargada de trabajos y enfermedades porque me hallo necesitada de medios para poder pasar la vida, así mía como de mis hijos, por no alcanzar a ello el trabajo de mis manos ni tener rentas, antes bien los bienes de mi padre difunto*”

por las dependencias de las Cajas Reales que hubieron se han embargado, vendido y desposeídome de ellos hasta la casa en que vivía... teniendo a mis pobres hijos desnudos padeciendo mil necesidades”.

Tan sólo cuatro de las peticionantes manifestaron tener un oficio: una de ellas se dijo panadera y las demás costureras. Se trataba en todo los casos de labores *mujeriles*, pero no serviles: esto es, de las pocas tareas rentadas que eran aceptadas en las españolas, ya que su desempeño se circunscribía al ámbito hogareño. Estas ocupaciones no debieron ser raras: durante la primera década del siglo XVIII, varias vecinas de Buenos Aires amasaban bizcocho para aprovisionar a las embarcaciones varadas en el puerto. Pero salir del hogar para ganarse el sustento era considerado propio de las mujeres de condición servil. Estas vecinas justificaron su necesidad de trabajar recurriendo a los tópicos acostumbrados, como los de mantener niños propios o recogidos, faltarles parientes que las socorrieran o carecer de vestimenta *decente* para cumplir con los deberes rituales de la catolicidad. A esto último hizo precisamente alusión doña María Ramírez de Sáquez, que encabezaba una *frerêche* de seis mujeres solteras:

*“...en voz y nombre de cinco hermanas... dice que son unas pobres huérfanas, solteras, desamparadas de todo género de alivio **por no tener otra inteligencia que las costuras** que no le alcanzan para el mantenimiento corporal, de suerte que siendo la desnudez de todas tan suma, se ven precisadas para cumplir con la obligación de cristianas de pedir un manto prestado para poder salir a oír misa”.*

Doña Ana Burgueño era viuda y “con la carga de cinco hijos inocentes sin que para su manutención tenga otra inteligencia ni socorro que la que se ofrece de tarde en tarde de **algunas cortas costuras**”. Otra porteña, María Magdalena, se declaraba “pobre viuda de solemnidad” y decía estar “cargada con una huérfana, Paula Flores, de padre y madre... manteniéndola por haberla criado sin más medios que el de **su ejercicio de panadera**, que nunca puede conseguir forma suficiente con que honestarle su desnudez”. También doña Margarita de Llanos y Brizuela había recogido una niña, y decía hallarse “sin medios humanos con qué mantenerse ni mantenerla si no es **con el ejercicio de su aguja**, en que la tiene industriada y buena educación”. Este último ejemplo nos ayuda a comprender el papel de los huérfanos dentro de los hogares

españoles: la niña que doña Margarita tenía a su cargo había sido *industriada* en el oficio de costurera, es decir, colaboraba con la manutención de su hogar y a la vez estaba siendo preparada para poder subsistir de su trabajo, ya que no se esperaba que un matrimonio oportuno pudiera mejorar su suerte.

Fueron escasas las peticionantes que manifestaron no poseer una vivienda en propiedad; a lo sumo reconocieron que la que habitaban no era lo suficientemente apropiada para un *notable*. El no tener morada propia podía echar dudas sobre su condición de *vecinos* y dejarlos fuera de las políticas asistenciales del cabildo: recuérdese que para serlo era requisito ineludible tener residencia en la ciudad. Sólo en casos excepcionales, la falta de inmuebles urbanos y rurales, sumada a tópicos más comunes como el del trabajo manual y la *desnudez*, concurría en convertir a una vecina como la siguiente en una pobre vergonzante, digna de una limosna:

“Catalina de Aguirre, viuda de Francisco Morales, puesta a los pies de V.S., representa la suma necesidad en que se halla, y con cuatro hijos que sustentar, tres hijas y un varoncito todos cuatro tan criaturas que no le pueden ayudar en lo más mínimo, sin casa, chacra ni estancia, y tan necesitada que no alcanza su corto trabajo a ponerse una camisa, motivo que le impide de ir a la iglesia hay más de seis meses, hallándose sin ningún esclavo ni esclava ni persona alguna de servicio, por todo lo cual recurre a la caridad y piedad de V.S. para que se sirvan socorrerla con alguna limosna”.

No más de cuatro mujeres, entre ellas la anterior, reconocieron carecer de una propiedad en el radio urbano.⁵¹⁹ El resto, aunque pudiera admitir que la casa de su morada se hallaba en pésimas condiciones o hipotecada, dio a entender que ésta le pertenecía, o por lo menos se guardó de afirmar lo contrario. Una accionera, doña Leonor de Astudillo, declaró que *“para poderse mantener por estar en pobreza alquiló su casa, saliendo a vivir fuera de ella con notable incomodidad, y que los estipendios de ella aun no alcanzan a su compostura y reparos”*. Doña Mariana Lucía de Póbeda sostenía que se hallaba *“pobre y desamparada sin tener más bienes que la casa de su morada con la pensión de pagar censo y tener dos hijas solteras y un hijo que sustentar”*.

⁵¹⁹ Doña Francisca de Betancor, afirmó que *“ni aun el rancho en que vivo es mío”* y Jacinta de Loza que *“vive en casa alquilada”*. Mariana Leal se decía enferma, sola y *“sin casas”*.

La falta de habitabilidad de la vivienda fue desde siempre uno de los atributos más reconocibles de la pobreza. Algunos de los peticionantes de 1723 aludieron a ella con cierto dejo de patetismo. Doña Mariana de Zárate, por ejemplo, se decía “*encerrada entre cuatro paredes de una pobre casa que por no tener con qué repararla está para arruinarse, con el grave perjuicio que le puede sobrevenir de soterrarla a deshoras, no teniendo forma de evitar el riesgo, ni en qué vivir que no sea con esta pensión*”. Bernarda Méndez convivía con seis hermanas, huérfanas como ella, con bastante precariedad, “*viniéndose abajo una choza de albergue de nuestro reparo...sin tener con qué repararla por falta de efectos*”. Hubo quien aludió a condiciones concretas de deterioro en paredes o techos, como doña Juana del Hoyo y Robles, que afirmaba que su casa estaba “*en estado de arruinarse, como ha sucedido estos días venirse [abajo] parte del enmaderado de la sala de su vivienda, que es forzoso deshacerla toda*”. O como la beata doña Ana Conget aseguraba vivir “*con suma pobreza, con el techo de su casa en el suelo, lloviéndose, sin tener fuerzas para poderlo levantar*”.

Pero sin duda, el atributo más reconocible de la pobreza era la falta de vestimenta decente. Era —y sigue siendo— uno de los criterios exteriores que permitía reconocer el status de una persona. Tanto en las mujeres como en los hombres, el atuendo subrayaba el rango social y la pertenencia étnica, permitiendo una rápida pero infalible identificación de la procedencia estamental de cada individuo. En las vecinas españolas contribuía, además, a realzar la honorabilidad de su condición. En muchas de las peticiones éstas afirmaban estar *desnudas*, expresión hiperbólica que nos remite al uso de una indumentaria desacorde con su status socioétnico. Que las limosnas se abonaban en especie, más precisamente en textiles, era un hecho conocido por las solicitantes y las empujó a solicitar un corte de paño a los alcaldes, a fin de remediar esa falta de vestimentas *decentes*. La vecina que elevó la siguiente petición consiguió que el cabildo le concediera 15 pesos en distintos cortes de tela:

*“Antonia de Torres viuda que fue de un soldado de este Presidio con dos hijos pequeños y el uno enfermo, y tan pobre que apenas con su trabajo se puede sustentar, y hallarse en forma tan desnuda que no puede de día parecer delante de la gente, y ahora tiene noticia que dan algunas limosnas de los cueros que se hacen para los navíos de registro y así tan destituida de todo remedio me valgo del patrocinio de VS suplicándole por amor de Dios **me den alguna cosa para poder tapar mi desnudez**, merced que espero recibir de la piadosa mano de VS”.*

También Juana de Roxas fue favorecida por el ayuntamiento con 15 pesos en textiles. En este caso, se aludió a la imposibilidad de cumplir con los deberes rituales a causa de carecer del atuendo apropiado:

*“Juana de Roxas vecina de esta ciudad, viuda pobre desvalida y tan pobre que para ir a oír una misa pide un manto y pollera prestado, parece ante VS y dice que por Dios se apiaden de ella con una limosna para siquiera **un manto y una pollera para ir a ver a Dios**, que en ello recibirá Vmd de la grandeza de VS de quien espera le hagan una limosna”.*

Otras mujeres de la vecindad admitieron no cumplir con sus deberes rituales por no disponer del atuendo adecuado a su condición. Gabriela Martínez suplicaba al alcalde que la asistiera, *“pues es tanta mi necesidad que ni aún para unos zapatos tengo siquiera para ir a ver a Dios”*. Doña Francisca de Betancor se declaraba *“pobre desvalida y cargada con cinco hijas doncellas sin tener ninguna manto ni pollera con que ir a misa, ni yo tampoco”*. Doña Beatriz Pereyra y sus hermanas pedían una limosna *“por hallarse en suma pobreza, que aún no tienen mantos para poder oír misa con la decencia que a la calidad de sus personas conviene”*. Doña Josefa Prado, madre de cuatro hijos, afirmaba que vivían *“en tal estado que el fatigoso trabajo mío no les alcanza más que para otra cosa que para el natural sustento, hallándose estos desnudos y yo sin forma de cumplir con el precepto de la misa por falta de vestuario preciso a su necesidad”*.

El 13,5% de los peticionantes reconoció que su vestimenta habitual no se hallaba en completa concordancia con su condición socioétnica. Pero este porcentual se distribuía desigualmente: mientras que una de cada cinco desvalidas admitió esa carencia, entre las accioneras sólo lo hizo una de cada veinte. Entre estas últimas se encontraba doña María Cabral de Ayala, que se reconocía como *“perteneciente a los accioneros”*, pero solicitaba una limosna para poder concurrir a misa:

“...ocurre por éste a hacerle manifestación de su güerfandad y total pobreza para que... se le aplique aquella que baste siquiera para hacer un vestido con que ir a la iglesia a cumplir con las obligaciones precisas de cristiana”.

El alférez Sebastián de Rocha era “*vecino feudatario y accionero de esta ciudad*” pero, según decía, mantenía a los suyos labrando la tierra con sus propias manos. Tanto él como su familia padecían “*mucha desnudez*” y sólo podían concurrir a misa a la iglesia de la Santa Recolección, frecuentada por indios, mulatos e indigentes. El cabildo, empero, lo consideró integrante de la matrícula de los accioneros y descartó su solicitud porque su padre había sido incluido en el *tercio* en tres oportunidades anteriores. He aquí su petición:

“...dice que se halla padeciendo grande necesidad causada en la poca salud que ha tres años que padece con la carga de mujer y seis hijos todos menores sin tener más amparo que el de Dios para mantenerlos, y la más sensible es que en todo este tiempo **no ha podido parecer en lo Público ni ir a misa sino a la Recolección** [a] **causa** [de] **la mucha desnudez que padece con su mujer e hijas, que mi corta salud los ha mantenido con el arado en la mano**, y porque a la presente le faltan las fuerzas... suplica a la piedad de VS lo atienda con algunos cueros de los que se han de repartir para la carga de los Navíos de Registro y Real Asiento, que en ello hará VS una obra muy acepta a los ojos de Dios en atención a ser hijo de accionero “.

Debido a la ausencia de atuendo apropiado, el alférez evitaba asistir al mismo templo que frecuentaban los demás vecinos españoles y se había visto obligado a renunciar a un espacio social que, paradójicamente, le estaba deparado por su prototipo socioétnico. La indumentaria favorecía la alternancia entre pares y, en definitiva, posibilitaba que cada estrato socioétnico ocupara los lugares que le estaban asignados durante la concurrencia a los espacios cívicos y rituales.

Entre los que manifestaban no disponer de vestimenta adecuada ocuparon un lugar destacado las que la reclamaban para sus hijas núbiles. La falta de ajuar para dotarlas podía convertirse en un impedimento para casarlas convenientemente. Algunas madres deploraron su carencia de medios materiales, como doña Francisca de Melo, que se hallaba “*con una hija sin estado y ella impedida y con mucha pobreza*”, o doña María Benítez, “*con dos hijas en edad de tomar estado, con la misma pobreza que yo*”. Pero cuando las hijas estaban ya próximas a desposarse, la alusión a la falta de vestimenta adecuada se hacía más directa: así sucedió con doña Isabel Chavero de Oquendo, “*pobre de solemnidad, impedida, con una hija doncella próxima a su estado de*

matrimonio sin ninguna providencia aun para el más corto vestuario”, y con doña Leonor de Roxas y Encinas, que se preparaba *“para dar estado a una de sus hijas y no tiene forma de darle el preciso vestuario”*.

Resulta bastante llamativo, por último, que no haya una referencia más generalizada a factores tradicionalmente ligados las crisis de subsistencia, como el hambre y las epidemias. Salvo para consignar la muerte de esclavos, que habían dejado a algunos vecinos opulentos sin servicio personal y por lo tanto en estado de “pobreza”, contadas peticionantes aludieron a la peste que había estallado en Buenos Aires. Una de las pocas fue la de doña Francisca de Astudillo, que rogó al cabildo que le concediera una limosna *“por haber tenido la familia enferma de esta epidemia y no haber dejado alhaja ni vestido que no hayga vendido con dichas enfermedades y hallándome al presente destituida de un todo, sin tener más consuelo que el de Dios”*. En otra doña Josefa Domínguez pedía por sus *“cinco hijas doncellas, convalecientes de la epidemia que se está experimentando y una de ellas impedida y para poder en parte remediarles algún vestuario de la desnudez en que se hallan”*.

Hubo otras alusiones a padecimientos físicos, pero estos no parecen haberse producido en el marco de ese suceso epidémico concreto. Se trata sobre todo de mujeres que habían quedado postradas a causa de alguna enfermedad, como doña Lucía Santiago, *“pobre de solemnidad enferma en una cama cosa de nueve meses”*, o doña María Morán, *“pobre de solemnidad e impedida en una cama a más tiempo de catorce años de graves achaques que adolece”*. Otra vecina, doña Juana de Vargas y Agüero, dijo haber estado *“tres años en una cama cargada de mil necesidades y con nueve hijos y el uno demente”*.

En cuanto al hambre, una sola petición hace referencia concreta a la falta de ración. Doña Mariana de Zárate confesaba que había días en que le faltaba hasta un trozo de carne de res que comer. Sin duda, aludía al alimento más difundido y barato que se consumía en aquella ciudad. No obstante, puede pensarse que no se trató más que de un artilugio discursivo: más tarde presentó una segunda solicitud, en que descartaba el argumento del hambre y centraba su pedido en el costoso mantenimiento de un huerfanito, al que según decía estaba criando por darle el gusto a su marido. Decía la primera de aquellas peticiones:

“Doña Mariana de Zárate, hija del alférez Lorenzo de Zárate, quien sirvió en este Presidio más de cuarenta [años] y aún casi cincuenta, quien aunque me dio

*estado en vida, mi poca suerte permitió se ausentase al reyno de Chile y ha más de quinze años que en su ausencia he procurado mantenerme a costa de mi sudor y trabajo personal, en cuyo dilatado tiempo he estado muchas veces sacramentada, y con las pagas de médicos para mis enfermedades, he quedado en tan suma miseria e indecencia que no sólo no puedo oír misa, sino **que muchas veces se me pasa el día sin tener un pedazo de carne de vaca que comer**. Recurro a la piedad de V.S. para que por amor de Dios y Su Santísima Madre, de las limosnas que Nuestro Rey y Señor hace a los pobres, en lo que hubiere lugar, V.S. atienda a mi miseria que de Su Divina Majestad tendrá el premio”.*

Viudas y desvalidas: la ausencia de contención masculina

La endeblez de la posición femenina no se limitaba a los trastornos ocasionados por la pobreza. Cuando no había un varón al frente de la familia, la mirada moralista del entorno se centraba en la conducta de la esposa y de las hijas, ya que faltaba un hombre que ejerciera la supervisión de sus comportamientos sexuales dentro y fuera del ámbito doméstico. La limpieza de proceder de las mujeres, sobre todo de las que estaban solas, era evaluada por la comunidad y, de acuerdo con la expresión del historiador francés Jacques Rossiaud, se volvía *tributaria de la fama pública*.⁵²⁰ Situación paradójica, ya que no pocas las vecinas quedaban a la cabeza de sus hogares en forma ocasional o permanente. Mientras que las mujeres de casta que carecían de contención masculina solían agregarse a otros grupos familiares en calidad de sirvientas o dependientes, las españolas se convertían en jefas de familia desde muy jóvenes.⁵²¹ Un repaso a los padrones de habitantes del siglo XVIII bastaría para convencernos de ello.⁵²²

La solución que cada grupo socioétnico daba al exceso de mujeres variaba. En el caso de las españolas, se agregaba el hecho de que la Iglesia porteña no colaboró hasta bastante tardíamente en la absorción de este excedente. Hasta la década de 1740 Buenos

⁵²⁰ Jacques ROSSIAUD “Prostitución, juventud y sociedad en las ciudades del Sudeste del siglo XV” en Arturo FIRPO (comp.) **Amor, familia, sexualidad** Argot, Barcelona, 1984, Pág. 189.

⁵²¹ Cecilia RAVELL ROMERO “Trayectoria de vida familiar, raza y género en Oaxaca colonial”... Pág. 116.

⁵²² El más cercano a la época que estudiamos, el padrón de Buenos Aires de 1744, revela un alto porcentaje de hogares encabezados por mujeres, en la mayor parte de los casos viudas, pero también abandonadas o con maridos ausentes; José Luis MORENO y Marisa DIAZ **Unidades domésticas, familias y trabajo en Buenos Aires a mediados del siglo XVIII** Trabajo presentado en las XVI Jornadas de Historia Económica celebradas en la Universidad Nacional de Quilmes en septiembre de 1998.

Aires no contó con conventos de monjas y las muchachas que deseaban profesar debían trasladarse a Córdoba, o más lejos aún. Una de las órdenes religiosas masculinas, la Compañía de Jesús, procuró ofrecerles una solución alternativa: alentarlas a llevar una vida de devoción “puertas adentro”, en el interior de sus casas. Fueron las llamadas *beatas*. Sin embargo, parecen haber sido pocas las que optaron por llevar una vida de oración, ya que la falta de respaldo de la monarquía o de la Iglesia no les aseguraba una subsistencia dedicada a las prácticas piadosas. Por ello la sociedad porteña contó con una abundancia relativa de mujeres que no habían podido optar ni por el matrimonio ni por tomar los hábitos.

En las peticiones de 1723 esto último resulta evidente. No pocas aluden a *frerèches* compuestas por muchachas solteras, una de las cuales se acercaba al despacho del alcalde para pedir un corte de tela o unos reales en plata. Entre las que lo hicieron estuvo doña Luisa de Aguirre: ella y sus hermanas doña María y doña Francisca afirmaban ser “*pobres mujeres sin alivio de varón que nos asista en nuestras necesidades*”. Pero también concurrieron al cabildo las mujeres que se habían quedado solas y reclamaban una limosna para sus hijos. No todas eran viudas. A veces la ausencia del marido era eventual, pero servía como fundamento para pedir una limosna, sea porque estaba sirviendo a la Corona o porque había dejado a su esposa y a sus hijos sin suficientes recursos para subsistir. Era el caso de Petrona de Abrego, que se declaraba *pobre de solemnidad* y había quedado a cargo de hijos y sobrinos:

“...dice que está con su marido ausente en la correguría de las Salinas y a su cargo tiene su madre enferma en una cama por los muchos años que le asisten y seis hijos, con cuatro huérfanos de padre y madre que quedaron de una hermana suya después de sus días”.

La separación entre los cónyuges podía convertirse en permanente, muchas veces a causa del abandono. Doña Lucía de Monaga, con su marido ausente y su padre enfermo, afirmaba que era “*ella sola la que mantiene a sus padres, hermanos y un hijo que tiene, sin tener para ello más medios que su trabajo personal*”. Bernarda de Avendaño declaraba “*hallarse sin marido por habérsele ido, dejándola preñada de una niña que hoy vive y tiene con suma necesidad de las dos*”. Pero también hubo mujeres que, formando parte de un grupo familiar encabezado por un hombre, debían afrontar por sí mismas la manutención de sus familias. Doña Gerónima Micaela de Barrionuevo y

Mendoza se encontraba, por ejemplo, “*con tres hermanas huérfanas de madre y con el padre sumamente pobre por haberse empleado muchos años en el servicio de Su Majestad y experimentado en él grandes atrasos por la falta de Situados*”.

Cuando no había un esposo o un padre que cumpliera con los deberes de protegerlas, alimentarlas y contenerlas, las mujeres acudían a sus parientes. La parentela, que aportaba a los individuos un sentimiento de identificación frente a los otros, se constituía, sin lugar a dudas, en un puente hacia las redes de vecindad, proporcionando un medio de acceso a la comunidad.⁵²³ El desamparo y la marginación provocados por la ausencia de lazos familiares forman parte de la retórica de varias solicitudes, tanto de las accioneras como por las que no lo eran. Doña Sebastiana Vélez Patrón afirmaba vivir en la ciudad “*sin tener pariente alguno en ella*”. Las hermanas Catalina, Juana y Antonia Ramírez de Sáquez, accioneras por ser herencia de su abuelo, el capitán Bernabé González Filiano, se decían “*unas pobres huérfanas de padre y madre... destituidas de parientes*”. Doña Antonia de Altafulla, que era igualmente accionera, suplicaba una limosna “*por hallarse pobre doncella y sola, e imposibilitada de remedio alguno para trabajar*”.

Donde mejor se aprecia esta doble ausencia de contención masculina y familiar es en las huérfanas. Una de ellas, María de las Nieves, dijo que “*es soltera y no tiene quien por ella sea*”; otra, María Tomasa, que vivía “*sin tener ningún amparo por ser soltera*”. Se presentaron a sí mismas sin dar apellidos, quizá porque eran *hijas de la Iglesia*, sin padres ni parientes desde el momento mismo del bautismo. El cabildo, sin embargo, estaba dispuesto a desviar una parte de las ganancias del comercio de cueros para socorrer a estas muchachas sin medios, asumiéndose como una alternativa frente a la ausencia de una parentela que las asistiera.

Entre los peticionantes, en cambio, faltaron los forasteros y los vagabundos: los primeros porque no eran reconocidos por el ayuntamiento como miembros de la vecindad; los segundos porque habiendo transgredido sus márgenes, se habían colocado fuera de ella. Tan sólo una mujer proveniente de Cuyo se atrevió, sin éxito, a suplicar por una limosna:

“...Doña Rosa de Ordinola... la más desvalida y arrojada forastera, natural de la ciudad de Mendoza, dice hallarse totalmente desvalida, andando de casa en

⁵²³ Martine SEGALÉN *Antropología histórica de la familia* Taurus, Madrid, 1992, Págs. 90 y ss.

casa a expensas de diferentes naturales que la favorezcan, experimentando diferentes vejaciones”.

Las redes de parentesco proporcionaban, como se ve, un sentimiento de estabilidad y de pertenencia, y aunque podían mantenerse latentes, se activaban en ocasión de una crisis o una necesidad. Para las mujeres, socialmente inhabilitadas para mantenerse por sí mismas, el padre o el esposo conformaban el primer círculo de contención, mientras que esas redes actuaban como un segundo círculo, que podía brindar amparo en un trance de crisis o peligro. Cuando carecían de ambas fuentes de apoyo, se veían empujadas a recurrir a la caridad privada o a la beneficencia pública. En la retórica de las solicitudes, esta situación de desamparo es curiosamente identificada con la orfandad. El siguiente testimonio es el de una vecina descendiente de la élite conquistadora, que a pesar de ser viuda y emparentada con las familias más antiguas de la ciudad, afirmaba ser “*una de las pobres huérfanas*”:

*“Doña Mariana Leal, madre del capitán Pedro Ferreira, vecina de esta ciudad, digo que soy una de las pobres huérfanas, tullida en una cama y ciega de llagas que le han pasado a los ojos de las narices, y sin tener un trapo que ponerme, ni qué llevarme a la boca si no fuera [por] unas pobres que lo dejan de comer por mí, sin casas y por fin desamparada de todo humano favor, y soy viuda de edad de setenta años por [lo] menos y soy esposa legítima como consta a toda esta ciudad, de legítima descendencia, y sobre todo que por enferma y tantos años **no soy para esperar el matrimonio ni en mis parientes** y lo puedo hallar por cortos, y siendo como soy de las primeras [accione]ras de esta ciudad y también de las descendientes de pobladores. A VS pido y suplico se sirvan de numerarme en el Número de las pobres viudas huérfanas tullidas y ciegas y desamparadas honradas de esta ciudad y asignarme alguna cantidad de las reparticiones comunes en las reparticiones de pobres en que obrarán Vuestras Señorías con piedad y justicia que de limosna pido por Dios”.*

No faltan en las peticiones las alusiones a la caridad privada, que era seguramente la única alternativa para muchos desvalidos. Algunas de las familias más antiguas habían descendido a una existencia miserable, al punto de haber tenido que salir a mendigar por las calles. Doña Lorenza de Ocampo, que se definía a la vez como “*accionera a los*

ganados retirados en las campañas” y *“pobre desvalida”*, fue señalada por el alcalde como hija *“del pobre ciego que anda por la calle Juan de Ocampo”*. Doña María de la Cruz lamentaba que sus hijos hubieran tenido que salir a pedir, *“echándolos por las calles a la vergüenza en agencia de un pedazo de pan”*.

No obstante, la caridad privada no siempre adoptaba la carátula de la mendicidad. Algunas mujeres habían preferido ponerse bajo el amparo de las familias pudientes, aceptando su patronato, con tal de no salir a recorrer las calles. Tales fueron los casos de doña María de Melo, quien dijo hallarse *“en suma necesidad y pobreza por haberle faltado las señoras beatas Enríquez, que la asistían con lo necesario con su mucha caridad”*, y de Josefa Sánchez, *“huérfana de padres y a las expensas de una pobre señora”*. Pero este tipo de relaciones se daban asimismo dentro de las parentelas, y seguramente adoptaba el mismo régimen de contraprestaciones que el clientelazgo. Doña Ignacia Rodríguez de Figueroa pidió una limosna en nombre de su sobrina doña Ana de Samartín, *“quien se mantiene a mis expensas por no tener otro recurso”*; luego la misma Ana presentó una solicitud, por ser accionera y *“pobre viuda desamparada y cargada de empeños que ha contraído para poder mantenerse”*.

El reparto de cueros y la priorización de un prototipo de pobreza

La modalidad que adoptó el *reparto* entre viudas y desvalidas merece un último párrafo. El acuerdo del 17 de julio de 1723 había dejado establecido que se separarían 300 pesos de lo que reportara la venta de cueros *“para repartir entre pobres miserables”*. No obstante, las sumas distribuidas por el ayuntamiento triplicaron lo previsto, es posible que a expensas del *tercio* de los accioneros.

El perfil de las beneficiadas por el ayuntamiento no queda del todo claro. Obviamente, se nos escapan los vínculos de clientelazgo entre cabildantes y peticionantes, de modo que es poco lo que podemos agregar sobre la existencia de mecanismos encubiertos de contraprestación, que sin duda existían e incluso fueron denunciados en un par de oportunidades. Sin embargo, ciertas tendencias permiten definir los lineamientos de la política seguida por la corporación vecinal. En primer lugar, dos de cada diez mujeres seleccionadas eran accioneras, que aceptaron renunciar a su participación en el *tercio* a cambio de una *limosna*. El antiguo sistema de *reparto de cueros* estaba siendo corroído por un nuevo esquema asistencial, de modo que parte de los antiguos accioneros estaba siendo absorbido por éste. De esta manera, se iba reduciendo la siempre problemática matrícula de los accioneros y se ampliaba el sector de los pobres, que dependía

exclusivamente de la generosidad del cabildo y se presentaba más dócil a sus consignas y menos exigente en sus requerimientos.

Por otra parte, el porcentaje de beneficiadas que expresó carecer de vestuario decente doblaba la media general de las peticionantes. Estas mujeres, necesitadas de un corte de ruan o de bayeta con que *honestarse*, encarnaban el prototipo de pobre que se deseaba priorizar: el que no venía en busca de dinero, sino de bienes de uso. No cabe duda que hubo arreglos encubiertos entre los alcaldes y los registreros, ya que los textiles pasaban de las bodegas de los navíos a manos de las interesadas; al parecer, el alcalde a cargo del *reparto* expedía órdenes de libranza para que fueran a buscarlos a bordo. De esa manera, los registreros abarataban los costos de la corambre, ya que la abonaban con mercancías a precio de embarque y no en plata amonedada.

Dicho en forma sintética: la plata amonedada no pasó del 12% de lo repartido entre huérfanas, viudas y desvalidas, mientras que los textiles ascendieron al 79,6%. Por lo menos la mitad de estos era proveniente de Francia (el ruan y la bretaña), lo que confirma el tradicional rol intermediador de los registreros gaditanos entre una España desahuciada y una Europa ávida de acceder a los metales preciosos de Hispanoamérica a través de la producción de manufacturas. El resto consistió en artículos de mercería, tales como hilo, cintas, encaje y polvillo (5,4%), y otros efectos varios (3,3%), en algunos casos americanos, como el tabaco.

En la política asistencial del cabildo creemos detectar, en conclusión, tres claros objetivos. Primeramente, el de limitar los derechos de los antiguos accioneros, trasvasando a algunos de ellos al nuevo esquema de beneficencia en carácter de *pobres* y excluyendo a otros mediante la revisión de la matrícula o la excusa de haberlos beneficiado en *repartos* anteriores. En segundo lugar, el de socorrer con *limosnas* a las familias que criaban huérfanos, evitándose el gasto de costear un hospicio que se hiciera cargo de los niños abandonados. Por último, el de conseguir que los sectores más necesitados de la vecindad se mostraran sumisos a la corporación y agradecidos con la *limosna* recibida. Las peticiones presentadas en 1723, destinadas a convencer a los alcaldes, son un acabado testimonio de esa imagen del pobre obediente a las autoridades, y le suman otra imagen igualmente nítida, la de la mujer que no traspasa más que ocasionalmente los límites del ámbito doméstico, que sólo se expone al público para cumplir con sus deberes rituales y que obedece las consignas de sometimiento femenino, aunque por eventualidad se convirtiera en jefe de familia.

LOS CABILDANTES

Vecindario sesudo, vecindario notable,
de discurso pausado, de gesto razonable,
gente muy ordenada, con ganado y estancias,
que a la luz de un candil recuenta sus ganancias,
calculando el azar del porvenir incierto,
con la esperanza lueña de que le abran el Puerto,
y que cuando la Reina da al Imperio un Infante,
se ciñe el casacón, se calza el negro guante
y va a ver, en la Plaza, la ingenua luminaria
para la cual reunió la plata necesaria,
muy noble y muy leal, pero no sin protestas,
que los tiempos a veces no estaban para fiestas.

Manuel Mujica Láinez, *Canto a Buenos Aires*

ACERCA DEL ENFOQUE PROSOPOGRÁFICO

Una forma de abordaje: la prosopografía

La biografía sigue siendo –aunque haya quien muestre cierto pudor en reconocerlo– uno de los géneros preferidos por los historiadores. Dirigida en otros tiempos a ensalzar a los grandes hombres de estado, hoy está perdiendo su tradicional valor panegírico y se prefiere recurrir a ella para enmarcar o ilustrar procesos sociales o políticos de carácter más englobador. El atractivo de este género, que ha dado sobradas muestras de sus posibilidades de adecuación a los nuevos requerimientos de la historiografía, consiste en ejemplificar dichos procesos a través de las experiencias, los pensamientos o las pasiones de un individuo. Jean-Claude Passeron lo ha expresado en palabras más que sugestivas: *El mundo puede verse miniaturizado en la vida de un hombre*. La minúscula pero movilizadora singularidad de una trayectoria individual puede llegar a convertirse en una suerte de microcosmos que repite y explica el macrocosmos.⁵²⁴

Con frecuencia, los biografiados siguen siendo personajes de cierta magnitud, que se destacaron más por su excepcionalidad que por su representatividad. Pero en las últimas décadas no han faltado intentos de reconstruir las trayectorias vitales de las personas corrientes. Quienes se abocaron a ello se enfrentaron a una importante limitación: las escasas huellas que han dejado esas personas en la documentación. Para subsanar esa dificultad, los investigadores se han volcado a la técnica de la “biografía colectiva”: ya no se trata de rescatar los tramos significativos de la vida de un único sujeto, sino de un grupo de personas que comparten caracteres externos comunes. La disponibilidad de materiales aumenta progresivamente cuando uno se encuentra ante un conjunto más o menos numeroso de individuos. El objeto de la indagación es ofrecer una reconstrucción de la trayectoria “promedio” de quienes lo integran.

Esa técnica específica, muy apropiada para trabajar a escala microanalítica, ha recibido el nombre de *Prosopografía*. La misma, según lo explica Marcela Ferrari, consiste en delimitar un corpus de individuos que se distinguen por una serie de rasgos comunes o porque desempeñan una misma profesión o función. Los datos que han

⁵²⁴ Jean-Claude PASSERON “Biographies, flux, itinéraires, trajectoires” en **Revue française de sociologie**, Presses de Sciences, París, 1990, N° 31-1, Págs. 3-22.

logrado reunirse sobre cada uno de ellos deben ser sometidos a un cuestionario para determinar las características compartidas (como pueden serlo la edad, el origen social o la procedencia geográfica), los atributos (su título, su ocupación, su patrimonio) y las trayectorias de dichos individuos en el campo específico a analizar. Al procesar esa información pueden establecerse los perfiles del conjunto y el espectro relacional de sus miembros, que no sólo incluye los vínculos entre estos, sino también los que mantuvieron con otros actores colectivos.⁵²⁵

La prosopografía tiende a identificar a la persona como parte de un todo, sin destacar sus características individuales. Para Neitard Bulst, ésta tiene poco interés biográfico en el sentido estricto del término, ya que si en algún momento presta atención a las personalidades es para señalar su lugar en el conjunto. En efecto, cuando se hace alusión a los caracteres de determinado individuo, deberá indicarse si son representativos de la totalidad o, por el contrario, se constituyen en una excepción. La comparación permanente es un elemento indispensable: no se destaca a un sujeto si no es para establecer similitudes o diferencias entre éste y el resto de los que integran una población dada.⁵²⁶

La única condición para que un grupo de individuos pueda convertirse en objeto de un estudio prosopográfico es que sea alcanzable estadísticamente con la ayuda de la interrogación. Se necesita establecer un catálogo de preguntas, semejante al de las entrevistas, y se extrae la contestación de las fuentes. Pocas veces se encontrarán respuestas a todas las preguntas para todos sujetos que integran el grupo. Pero cuanto más grande sea el esquema utilizado para distribuir los datos con que se cuenta, mayores serán las posibilidades de hacer preguntas y de valorar las respuestas. Por tal razón, el historiador deberá definir claramente el grupo de personas que quiere abordar: los resultados dependerán de la elocuencia cuantitativa y cualitativa de los materiales que utilice.⁵²⁷

La tarea del prosopógrafo se inicia precisando el sujeto de estudio y la extensión de la búsqueda. Por lo general, se comienza por una delimitación de la población, es decir, del grupo de personas a estudiar; para circunscribirla, deberá caracterizarla cronológica

⁵²⁵ Marcela FERRARI “Prosopografía e historia política Algunas aproximaciones” en **Antíteses** Universidade Estadual de Londrina, Vol. 3, N°. 5, 2010, Págs. 531. Véase también: Isabelle ROUSSEAU “La prosopografía: ¿un método idóneo para el historiador?” en **Revista Mexicana de Sociología**, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México, N° 3, 1990, Págs. 237-247.

⁵²⁶ Neitard BULST “Sobre o objeto e o método da prosopografia” en **Politéia: História e Sociedade**, Vitória da Conquista, Vol. 5, N° 1, 2005, Pág. 55.

⁵²⁷ Úrsula BONES LIEBENSTEIN “El método prosopográfico como punto de partida de la historia eclesiástica” en **Anuario de Historia de la Iglesia**, Universidad de Navarra, 2005, N° 14, Págs. 351-364.

y geográficamente. Recortado el objeto de análisis, examinará su corpus de fuentes y se verá obligado a realizar una elección más ajustada, preguntándose cuáles son los datos que debe recoger y para cuántos individuos. Una buena búsqueda prosopográfica necesita de una recolección sistemática en función de una problemática formulada previamente. Es necesario formular claramente las preguntas a responder para poder reunir eficazmente el material.⁵²⁸

El criterio más importante para demarcar la población que se pretende estudiar es la presencia de características comunes fácilmente observables. Según Verboven, Carlier y Dumolyna, autores de un conocido manual de prosopografía, los grupos que poseen un encuadre organizado (tales como los gobernantes de una ciudad o los sacerdotes) son los más fáciles de agrupar: una membrecía, una comisión o una consagración pueden convertirse en criterios de pertenencia. En cambio, cuando las características que comparten son más difíciles de observar en las fuentes, resulta más trabajoso establecer criterios de selección y justificar la pertenencia a un grupo. Así sucede, según explican dichos autores, cuando el factor aglutinante es un estatus social (rico, noble, marginal), un origen (judío, bastardo) o una convicción (humanista, protestante).⁵²⁹

La tarea de delimitar la población estudiada se complica aún más cuando el interés del investigador se dirige a sectores cuya magnitud atenta contra una fácil catalogación. Las élites políticas, económicas o culturales, por ejemplo, se superponen entre sí y presentan problemas de etiquetamiento. Además, en esos grupos de grandes dimensiones suele aparecer un cierto número de personas de las que no poseemos ninguna información en concreto. Pero aunque exista la posibilidad de que de algunas de ellas no se conozca más que el nombre, una de las ventajas de la prosopografía es que permite trabajar con una relativa escasez de datos, algo que no resulta viable para el trabajo biográfico en el sentido tradicional.⁵³⁰

Otros dos especialistas, Lemerrier y Piccard, hacen algunas recomendaciones a quienes pretenden aplicar el método prosopográfico. Primeramente, aconsejan que el proyecto tenga una ambición razonable y que las preguntas sean lo más precisas posibles. Ofrecen algunas como ejemplo, por cierto que muy sugerentes: “¿Descripción

⁵²⁸ Kees MANDEMAKERS y Arnoud-Jan BIJSTERVELD. “La prosopographie et les échantillons aléatoires. Le cas des curés en Brabant du nord de 1400 à 1570” en *Histoire & Mesure*, Éditions de l'EHESS, Paris, 1994 Vol. 9, N°1-2. Págs. 51-65.

⁵²⁹ Koenraad VERBOVEN, Myriam CARLIER y Jan DUMOLYNA “A Short Manual to the Art of Prosopography” en K.S.B. KEATS-ROHAN *Prosopography Approaches and Applications. A Handbook*. Oxford, 2007.

⁵³⁰ Neitard BULST “Sobre o objeto e o método da prosopografia...”, Pág. 58.

de rasgos generales o elaboración de una tipología interna? ¿Homogeneidad o diversidad del grupo? ¿Grupo de por sí cohesivo o reagrupamiento de individuos heteróclitos o de facciones opuestas? ¿Modalidades de reclutamiento, de acceso al grupo, orígenes de los individuos? ¿Lazos entre los miembros o con el exterior? ¿Destinos y carreras en el seno del grupo o dirigidos hacia el exterior del mismo?”. En cuanto al grupo en sí, definido como objeto de estudio a partir de tal o cual criterio simple, no debe postularse desde el inicio la coherencia del mismo: por el contrario, esa es una cuestión que quedará abierta a ser investigada.⁵³¹

El abordaje prosopográfico adolece, obviamente, de problemas y limitaciones. En un artículo pionero, Lawrence Stone resaltó algunos de ellos. En su opinión, los alcances de la prosopografía se encuentran estrechamente condicionados por la cantidad y la calidad de los datos acumulados. Explica Stone que en cualquier grupo histórico, “es probable que sea sabido casi todo respecto de algunos de sus miembros y casi nada respecto de otros; algunos ítems faltarán para algunos e ítems diferentes faltarán para otros. Si el montante de cosas desconocidas es muy grande y si éstas, junto con las seriamente incompletas, constituyen una sustancial mayoría, las generalizaciones basadas en las medias estadísticas se tornan de hecho bastante frágiles, cuando no totalmente imposibles”. Quizás sólo se sepa lo suficiente sobre la décima o la vigésima parte del grupo estudiado: podría conjeturarse que se trata de una muestra aleatoria, pero esa suposición es improbable, ya que lo más usual es que si quedan datos sobre la carrera de una pequeña minoría, lo más posible es que ésta sea una minoría atípica. De esa forma se pueden exagerar o distorsionar las conclusiones.⁵³²

Otro factor que debe manejarse con cuidado, asegura Stone, son los indicadores de parentesco. No hay duda de que los lazos familiares desempeñaron un importante papel en la construcción de grupos y partidos políticos en todo momento, desde la Edad Media al siglo XVIII, pero no faltaron ejemplos de miembros de una misma familia que discordaron entre sí, a veces con extrema violencia. Aun cuando los lazos de parentesco eran fuertes, los vínculos genealógicos no siempre resultaban significativos a la hora de conformar facciones políticas, y los parientes podían muchas veces sostener posturas

⁵³¹ Claire LEMERCIER y Emmanuelle PICARD “Quelle approche prosopographique?” en Actas del Coloquio **Définir, classer, compiler: l’approche prosopographique en histoire des sciences** Nancy, 2010, Pág. 20.

⁵³² Lawrence STONE “Prosopography” en **Daedalus: Journal of American Academy of Arts and Sciences**, American Academy of Arts & Sciences, Cambridge. 1971, Vol. 100, N° 1, Págs. 46-79. Hemos recurrido a la versión portuguesa: “Prosopografía” en **Revista de Sociologia Política**, Curitiba, Vol. 19, N° 39, Pág. 123.

políticas o religiosas divergentes. Otro especialista, el holandés Neitard Bulst, suscribe algunas de las prevenciones expresadas por Stone y propone enfocarse en los vínculos externos de las parentelas. Considera que el objetivo prioritario de la pesquisa no es analizar a la familia y a la relación entre sus miembros, “sino a la familia en su relación con el exterior y en su actuación política y su consecuencia para el grupo o los grupos. La presión externa –esto es, sobre los intereses comunes– debe haber frecuentemente reprimido las divergencias internas”.⁵³³

A las limitaciones que provienen de la cantidad y la calidad de la información, Lawrence Stone agrega una tendencia que afecta a quienes recurren a esta técnica: el riesgo de que se vea afectada la comprensión histórica. Al concentrarse con frecuencia en las élites, los prosopógrafos suelen ser proclives a concebir la historia en términos de los sectores dominantes. En ese sentido, considera que los estudios sobre las maniobras políticas de las élites pueden oscurecer, más que iluminar, el funcionamiento de los procesos sociales. Stone también les atribuye una reluctancia a ocuparse de los preconceitos, las pasiones, las ideologías, los ideales o los principios de los individuos estudiados. Ello podría deberse a la escasez de fuentes “privadas” a que recurrir, como la correspondencia íntima, lo mismo que al temor que tenían los sujetos en expresar visiones minoritarias sobre la religión o la política. En función a esto, suele darse preferencia a los intereses materiales, que son los que pueden ser rastreados en las fuentes. Priorizar dichos intereses, concluye este autor, “presupone una sociedad sin convicciones en la cual la manipulación y las intrigas son más importantes que las cuestiones de principios o de políticas públicas”.⁵³⁴

Como se puede apreciar, las élites urbanas –y en particular las que desempeñaron cargos de responsabilidad política– han sido el sector que contó con las preferencias de la prosopografía, ya que se trata de segmento social para el que habitualmente se dispone de mayor abundancia de fuentes documentales y noticias biográficas. En palabras de Aranda Pérez, los miembros de esas élites poseen mayor *espesor documental* que el resto de los actores sociales.⁵³⁵ Es usual que surjan abundantes indicadores sobre su patrimonio y su desempeño en los negocios. No obstante, esos atributos materiales no bastan por sí mismos para explicar el accionar, ni los intereses,

⁵³³ Neitard BULST “Sobre o objeto e o método da prosopografia”, Pág. 58-59.

⁵³⁴ Lawrence STONE “Prosopografia”, Pág. 127.

⁵³⁵ Francisco José ARANDA PÉREZ “Prosopografía y particiones de bienes: una propuesta metodológica para el estudio de las oligarquías urbanas castellanas en la Edad Moderna” en **Cuadernos de Historia Moderna**, Editorial Universitaria Complutense, Madrid, 1991, N° 12, Págs. 259-276.

ni el lugar que ocupaba una élite política en el plano social. “Describir a la dirigencia política a partir de algunos indicadores y variables –advierte Marcela Ferrari– dice poco acerca de su especificidad”. Y agrega: “Conocer los atributos que poseen los individuos es más importante si se comprende el modo en que los valoraba una sociedad y la manera en que ellos los ponían en valor para nutrir su capital político”.⁵³⁶ Observación muy atinada, ya que esa valoración social se fundaba en las representaciones que esos grupos elitistas se hacían de sí mismos e imponían al conjunto de la sociedad.⁵³⁷

Christophe Charle –uno de los más renombrados especialistas del tema– ha cuestionado a quienes, valiéndose de esta técnica, se han limitado a determinar los atributos materiales de los grupos dirigentes y los recursos de que estos se sirvieron para llegar al poder. Ha observado que los investigadores tiene la tendencia a buscar respuestas a dos únicas cuestiones: “¿quiénes gobiernan?” y “¿cómo llegaron al poder?”. Detenerse en tales preguntas no arroja luces sobre la relación que sostuvieron los miembros del grupo dirigente con otros sectores influyentes, ni alcanza para explicar los mecanismos de bloqueo que debieron de afrontar periódicamente, provocando las crisis políticas más profundas, aún sin que mediasen accidentes históricos externos. En su opinión, al estudiar a dichos grupos es necesario hacerlo en perspectiva comparada, a partir de lo cual podrán determinarse con mayor precisión los mecanismos de reproducción y de transformación de los sectores dominantes, de los cuales las élites políticas no son sino la fracción más visible.⁵³⁸

Las fuentes utilizadas

La fecundidad del abordaje prosopográfico implica una tediosa contraparte: la de una sistematicidad y exhaustividad extremas en la recolección de los materiales.⁵³⁹ Se

⁵³⁶ Marcela FERRARI “Prosopografía e historia política...” Págs. 542 y 547.

⁵³⁷ Dichos grupos, sostiene Antonio Hespánha, no sólo se mostraban capaces de producir y reproducir un imaginario propio de su naturaleza y de su rol social, sino que determinaban a partir de él la estructura de los lazos sociales a que estaban integrados. Antonio HESPANHA, Carla ARAUJO y A.X. BARRETO “Les juristes portugais de l’Ancienne Régime. Un banque de donnés prosopographiques” en Jean-Philippe GENET y Günther LOTTES (dir.) **L’Etat moderne et les élites XIIIe-XVIIIe siècle. Apports et limites de la méthode prosopographique** Actes du colloque international CNRS-Université de Paris, 1991, Publications de la Sorbonne, París, 1996.

⁵³⁸ Christophe CHARLE “Légitimités en péril. Éléments pour une histoire comparée des élites et de l’État en France et en Europe occidentale (XIXème-XXème siècles)” en **Actes de la Recherche en Sciences Sociales** Le Seuil, 1997, Vol. 116-117, Págs. 39-52.

⁵³⁹ Christophe CHARLE “Une enquête en cours: le dictionnaire biographique des universitaires français aux XIXe et XXe siècles” en **Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes** T. 100, N°1. 1988. Págs. 63-68.

requiere de una ardua labor de rastreo y selección de fuentes en los repositorios documentales para conformar un fondo de datos que justifique la aplicación de esta técnica. Sólo a partir de una meticulosa catalogación de esa información podrá dilucidarse si el grupo escogido posee cierta homogeneidad y si se está en condiciones de responder con holgura el cuestionario que guiará la investigación.

Como ha podido verse, los historiadores han dado uso preferencial a esta herramienta para caracterizar a los patriciados urbanos y, en el interior de estos, a los sectores políticamente activos. Como por lo general se conserva información relativamente abundante sobre estos grupos, han podido reconstruirse sus trayectorias individuales y se logró en buena parte de los casos establecer un patrón de carrera, prefigurando una suerte de *cursus honorum* que unos transitaban para detenerse en los peldaños inferiores y otros hasta llegar a la cima. Este es el enfoque que dio Peter Burke a su estudio comparado de las élites urbanas de Venecia y Ámsterdam del siglo XVII.⁵⁴⁰ Idéntica atención merecen los trabajos de James Amelang sobre el patriciado de Barcelona entre fines del siglo XV y comienzo del XVIII y de Ana Guerrero Maillo sobre los regidores de Madrid durante el reinado de Felipe II.⁵⁴¹ Atentos al carácter no rentado y con frecuencia venal que tuvieron las magistraturas durante la Modernidad, estos autores se preguntaron cuál fue el soporte económico del ascenso y la consolidación de esos personajes en el plano político. En función a ello, indagaron sobre su participación en el mundo de los negocios, su estilo de vida, su educación, su manera de vincularse con otros miembros de los sectores elitistas y su actitud ante la religión y ante la muerte. Esas oligarquías tuvieron su expresión más visible en los cargos municipales, pero no debe perderse de vista que los integrantes de las corporaciones locales no eran el único grupo que gozaba de prestigio e influencia en las ciudades, sino que existían otros que gozaban de igual crédito, tales como los que conformaban los grandes mercaderes que no participaban en forma directa del gobierno local, los funcionarios locales de la hacienda real o los jerarcas eclesiásticos y militares.

Tanto en Europa como en sus dependencias ultramarinas, estos patriciados urbanos exhibieron ciertos rasgos comunes. Lo usual fue que adquirieran o heredaran inmuebles en la traza urbana, que los hipotecaran con el fin de obtener metálico para solventar sus

⁵⁴⁰ Peter BURKE *Venecia y Amsterdam. Estudio sobre las élites del siglo XVII* Gedisa, Barcelona, 1996.

⁵⁴¹ James AMELANG *Honored Citizens of Barcelona: Patrician Culture and Class Relations, 1490-1714* Princeton, 1986; Ana GUERRERO MAYLLO *Familia y vida cotidiana de una élite de poder. Los regidores madrileños en tiempos de Felipe II* Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1993.

negocios, que participaran del abastecimiento de la ciudad, del comercio local o del tráfico con otras urbes y que al hacerlo se asociaran con sus pares. Esto generó una formidable masa de transacciones que quedó registrada en los archivos notariales y que ha sido de particular utilidad en los estudios prosopográficos. El enorme impulso que ha cobrado en las últimas décadas la utilización de las fuentes notariales en el campo de la Historia Moderna se ha debido a que pueden ser aprovechadas para el estudio específico de cualquiera de las áreas del quehacer humano. La historiografía francesa fue la primera en recurrir a ellas, comenzando por Ernest Labrousse, a quien siguieron Roland Mousnier y Pierre Goubert. Un historiador español, Francisco José Aranda Pérez, ha sintetizado su utilidad para los diferentes campos de la historia. En el de la historia social, por ejemplo, han resultado provechosas para el análisis de las estructuras sociales, los grupos socioprofesionales, las estructuras familiares, las relaciones matrimoniales, la movilidad geográfica y social y los criterios de jerarquía social. En el campo de la historia rural han permitido un acercamiento a las estructuras y transmisión de la propiedad, la estratigrafía social, la sociabilidad rural, el alcance de las crisis agrarias o los niveles de producción y riqueza. También recurrieron a ellas los historiadores de las mentalidades, con el objeto de analizar actitudes religiosas en los testamentos, que generalmente eran dictados a los escribanos. La historia económica, por último, ha encontrado en ellas copiosos materiales para estudiar las actividades mercantiles y crediticias de las élites urbanas y sus prácticas empresariales.⁵⁴²

Sería imposible, en síntesis, emprender el estudio de un sector de la oligarquía urbana sin incurrir en la lectura de las fuentes notariales, ya que estos resguardan buena parte de la información sobre la titularidad y la transmisión de la propiedad y sobre los negocios, acreencias y deudas de sus integrantes. Pero al hacerlo deben tomarse algunas precauciones. Lawrence Stone ha advertido sobre el riesgo de fundar una investigación en la profusa información proveniente de las escribanías. Los protocolos notariales, junto con los registros fiscales y los asientos de la administración pública y privada, conforman una porción considerable de la masa del material escrito que suele conservarse y eso puede condicionar nuestra lectura de las fuentes. Por tal razón, explica, debe evitarse la recurrente inclinación “a tratar a los individuos como *homo aeconomicus* y a estudiarlos primariamente a la luz de sus intereses y comportamientos

⁵⁴² Francisco José ARANDA PÉREZ “Prosopografía y particiones de bienes: una propuesta metodológica para el estudio de las oligarquías urbanas castellanas en la Edad Moderna” en **Cuadernos de Historia Moderna**, Editorial Universitaria Complutense, Madrid, 1991, N° 12, Págs. 260-261.

financieros, pues eso es lo que los registros iluminan con enorme claridad y detalle. Pero los intereses económicos pueden entrar en conflicto y, aun cuando el interés es claro, es imposible estar seguros de que esa es la consideración dominante”.⁵⁴³

En relación con la historia del Río de la Plata colonial, no faltan trabajos que puedan ilustrar el tipo de información extraída de los protocolos notariales y la forma en que ésta ha sido procesada. Creemos que los dos más significativos son el estudio de Susan Socolow sobre los comerciantes virreinales y el de Jorge Gelman sobre la figura de Domingo Belgrano Peri. El primero puede ser considerado un trabajo prosopográfico de tipo convencional: a partir de localizar a 145 traficantes mayoristas en el padrón de Buenos Aires de 1778 y de agregarle otros que radicaron posteriormente, esta autora identificó una población de 178 individuos, en base a lo cual recurrió a otras fuentes para caracterizar al grupo. El comerciante “promedio” habría sido de origen peninsular y llegado a la ciudad a los 25 años, donde se habría insertado en el mundo de los negocios ingresando como dependiente en el despacho de algún pariente o paisano. Las fuentes notariales permitieron a Socolow indagar sobre las primeras actividades de los sujetos, particularmente a partir del matrimonio –por medio de las escrituras de capital y de dote–, lo mismo que las alianzas con otros mercaderes –a través de escrituras de compañía y poderes de representación– y las transacciones con otras regiones –por medio de escrituras de obligación–. No podemos hacer una crítica sobre los alcances de su trabajo, ya que en ningún momento informa sobre la sistematicidad de su indagación en las fuentes notariales. Expone algunos porcentajes sobre determinados caracteres de la población analizada, pero la mayor parte de las veces se limita a ilustrar sus afirmaciones con ejemplos extraídos de los protocolos y de otras fuentes análogas.

El trabajo de Jorge Gelman sobre Belgrano Peri, en cambio, expresa con claridad el tipo de fuentes a que recurrió y la forma en que fueron procesadas. Lejos de encarar una caracterización biográfica, este autor se propone analizar el comportamiento del sector mercantil porteño como vehiculizador del excedente colonial durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, período caracterizado por la elevación de Buenos Aires al rango de capital del virreinato, por la gradual apertura del tráfico entre la metrópoli y sus dependencias americanas y por las convulsiones y guerras europeas, que actuaron como limitante en dicho tráfico. Belgrano Peri fue tomado como un exponente de dicho sector: su particularidad consistió en que se conservó su correspondencia privada y

⁵⁴³ Lawrence STONE “Prosopografía”, Pág. 124.

comercial, al igual que una importante cantidad de expedientes judiciales que hacen alusión directa a su actividad. La utilización de los protocolos notariales asume en este caso un papel subsidiario: a falta de un libro de cuentas en que hacer un seguimiento de las operaciones de este comerciante, Gelman se propuso recurrir a las fuentes notariales hacer un muestreo de la cantidad y calidad de las mismas a lo largo de cuatro bienios. No obstante, acepta que la fuente es muy parcial, ya que sólo una parte del volumen de sus negocios era protocolizada.

El libro de Gelman ha sido objeto de críticas por parte de Mariano Schlez; en este caso, nos interesan las que realizó al uso que hizo de las fuentes notariales. Por entonces había diez escribanos actuantes en Buenos Aires, pero Gelman sólo habría recurrido a los protocolos de siete de ellos para determinar el peso y la diversidad de las actividades de Belgrano Peri, por lo que Schlez cree probable que una parte de los negocios de dicho mercader haya quedado fuera de su análisis, lo que haría flaquear la solidez de sus conclusiones. Este autor considera que la información resguardada por los registros notariales –y particularmente los diferentes tipos de poderes de representación para negocios y pleitos que extendían los escribanos– puede ser de utilidad para realizar un primer acercamiento al entramado social que unía a los comerciantes y apreciar las alianzas que estos fueron forjando, dando una idea de los vínculos tejidos por un individuo con sus pares. Pero advierte que por lo general se trata de un repertorio de datos incompleto, al que en su opinión deberían agregarse otros provenientes de las escribanías de otras ciudades (donde los comerciantes solían tener socios y representantes), de los registros de navíos, de los expedientes judiciales y de las actas de las instituciones en las que actuaron (entre ellas, el cabildo).⁵⁴⁴

Creemos que las críticas de Schlez deben ser relativizadas: Gelman no se ha propuesto seguir la actividad de Belgrano Peri a través de los protocolos –y lo hizo explícito– sino de otras fuentes, entre las cuales se destacaba la frondosa correspondencia de este negociante. Por otra parte, se sabe que los comerciantes solían recurrir a un escribano de su confianza –personaje destacado en sus redes de contactos, ya que a menudo se hallaba bien interiorizado de sus operaciones– y sólo se presentaban excepcionalmente en el despacho otros notarios. Por tal razón, lo más probable es que la masa de las operaciones escrituradas de Belgrano Peri se concentre en una de las escribanías de número y que ésta se halle incluida en la muestra tomada por Gelman, mientras que la

⁵⁴⁴ Mariano SCHLEZ “El estudio de los comerciantes a través de los protocolos notariales porteños (1760-1800)” en **Razón y Revolución**, N° 22, Buenos Aires, 2do semestre de 2011.

correspondencia personal y comercial debe haberle permitido completar el panorama con referencias a las operaciones no protocolizadas. Las advertencias de Schlez pueden resultar más pertinentes para trabajos como el que pretendemos afrontar nosotros, donde la cantidad de individuos estudiados haría inviable la toma de muestras para determinar su participación en el rubro mercantil.

Queremos referir, a grandes rasgos, la utilidad que daremos a las fuentes notariales en nuestro trabajo. Hemos emprendido el relevamiento completo de los protocolos del período que analizamos. En comparación con lo que podría suceder al abordar etapas más avanzadas del siglo XVIII, la masa documental consultada es relativamente acotada: a lo largo del siglo XVII existió una única escribanía en Buenos Aires, a la que en 1707 se le agregó una segunda y en 1716, una tercera. Dichos protocolos suman 32 tomos, que se encuentran en el Archivo General de la Nación: su conservación es buena, por lo que han podido ser examinados en forma íntegra, y la presencia de lagunas temporales es insignificante, gracias a lo cual disponemos de la totalidad de las escrituras que implican a los integrantes del grupo.⁵⁴⁵

Para reconstruir el perfil patrimonial de los 174 individuos que componen nuestra población hemos recurrido a distintos tipos de escrituras protocolizadas. Las escrituras de capital y de dote –en que se detallan los bienes que el individuo declaró poseer al casarse y los que fueron ingresados al matrimonio por su esposa– nos permitieron determinar el estado de su patrimonio en la etapa más temprana de su carrera, o bien, si se trataba de segundas nupcias, disponer de evidencias sobre su incremento o menoscabo en etapas posteriores. Para realizar la misma apreciación al final de su vida, resultaron de utilidad los testamentos, particularmente en lo que toca a las propiedades inmuebles, la posesión de esclavos y la acumulación de plata labrada o amonedada. Pero es necesario advertir que la información que estos contienen se ha caracterizado por su poca precisión, pues se reduce a la sucinta descripción que el testante hizo de sus bienes antes de morir: esa enumeración solía ser vaga y, en el caso de los ganados que

⁵⁴⁵ Del Registro de Escribano N° 1 hemos relevado 21 registros: AGN IX-48-7-7 (1690-92), IX-48-7-8 (1692), IX-49-8-1 (1693-93), IX-49-8-2 (1696-1703), IX-48-8-3 (1696-98), IX-48-8-4 (1697-98), IX-48-8-5 (1699), IX-48-8-6 (1700), IX-48-8-7 (1700-1701), IX-48-8-8 (1702), IX-48-9-1 (1702-12), IX-48-9-2 (1703), IX-48-9-3 (1704-05), IX-48-9-4 (1705-07), IX-48-9-5 (1707-13), IX-48-9-6 (1712-14), IX-48-9-7 (1716-18), IX-49-1-1 (1718-19), IX-49-1-2 (1720-21), IX-49-1-3 (1722-23), IX-49-1-4 (1724-27).

Del Registro de Escribano N° 2, fueron 7 registros: AGN RE N° 2 de 1707-09, RE N° 2 de 1709-12 [el registro se interrumpe y no existen escrituras entre 1713 y parte de 1714], RE N° 2 de 1714-16, RE N° 2 de 1716-19, RE N° 2 de 1720-23, RE N° 2 de 1723-25, RE N° 2 de 1725-27.

Del Registro de Escribano N° 3, fueron 4 registros: AGN RE N° 3 de 1716-19, RE N° 3 de 1720-22, RE N° 3 de 1723-24, RE N° 2 de 1725-27.

poseía en sus fincas rurales, a menudo estaba basada en presunciones. De cualquier manera, cuando no se han conservado las sucesiones testamentarias de esos individuos, esos indicadores patrimoniales son los únicos de que disponemos. En cambio, la lista de deudas que dejaba el testante presumía de ser precisa y exhaustiva –su liquidación era condición previa al reparto de los bienes entre los herederos– y a menudo incluía sumas de poca monta no protocolizadas, que sólo pueden ser conocidas gracias a esta fuente. Las sucesiones testamentarias (de las que hemos revisado algo más de sesenta) aportan información patrimonial más abundante y precisa, ya que antes de ser repartidos en herencia, los bienes del difunto eran puntillosamente inventariados y tasados por peritos.

Las escrituras de compraventa forman también parte de la masa documental que resguardan los protocolos. Se observa en ellas un claro predominio de las transferencias de inmuebles urbanos y de esclavos, lo que posiblemente se deba a que las mismas se hacían al contado. Al igual que las cartas de dotes, los testamentos y las sucesiones, dichas escrituras aportan elementos al conocimiento del estado patrimonial de los individuos en distintas etapas de su vida. En cuanto a las operaciones comerciales, en los protocolos consultados la venta de los efectos de la tierra o de mercancías europeas fue rara vez objeto de escrituración: cuando la misma se hacía a crédito, sólo se expresaba la suma adeudada y no el detalle de las mercancías recibidas por el deudor. No obstante, la falta de información sobre esas transacciones puede ser a veces suplida por los datos que aportan las fuentes fiscales, como lo son el libro manual de alcabalas y el de mayordomía del cabildo. Otras operaciones de compraventa, en cambio, fueron protocolizadas con mayor detalle. El tráfico de mulas a Salta y Jujuy, por ejemplo, que quedó registrado en las escrituras de fletamento, en que se puntualizaba el número de animales recibidos por el fletador. Lo mismo ocurrió con los contratos de venta de cueros a las compañías asentistas autorizados por el cabildo, en lo que usualmente quedó detalle de la corambre entregada.

Otro reservorio de información sobre la actividad mercantil se encuentra en las fuentes judiciales. Como a comienzos del siglo XVIII todavía no existían en Buenos Aires ni un consulado ni tribunales comerciales, los pleitos por incumplimiento de una obligación escriturada o por violación de acuerdos pactados entre negociantes eran zanjados por la justicia ordinaria. De esa manera, la resolución de los mismos recaía por lo general en uno de los alcaldes ordinarios, es decir, en un miembro del cabildo, lo que colocaba a este magistrado en el rol de mediador frente a los conflictos que se generaban en el

interior del sector. En los expedientes judiciales pueden salir a la luz aspectos que carecen de visibilidad en las fuentes notariales, como las desavenencias que quebrantaban las alianzas entre pares –que podían ser tanto los socios en una empresa comercial como los integrantes de una facción política– o los riesgos que corrían quienes vendían mercancías a crédito o las giraban a representantes que se hallaban en ciudades distantes.

Entre los pleitos comerciales merecen especial atención los juicios por quiebra, pues constituyen un mirador privilegiado para apreciar la dinámica de las vinculaciones en el interior del sector mercantil. El fracaso en los negocios, sobre todo si se trataba de un comerciante de envergadura podía implicar (el caso de Miguel de Riblos en 1713 es un ejemplo notable de ello) a buena parte del comercio local. Los acreedores solían solicitar el embargo de papeles personales y libros de cuentas que, en el caso de que hayan sido agregados a los expedientes, suelen aportar un inestimable cúmulo de datos sobre el comerciante ejecutado y su entorno.⁵⁴⁶ Otro tipo de instancia judicial que debe tenerse en cuenta son los juicios de residencia, ya que afectaban no sólo al gobernador saliente sino a los magistrados de la Real Hacienda y al cabildo. Presentados ante un tribunal especial, encabezado generalmente por el gobernador entrante, resultan de gran interés no solamente porque se examinaba en ellos el comportamiento de los miembros del ayuntamiento, sino porque a menudo se sacó a relucir la participación de estos en ilícitos como el contrabando o el cohecho. Por desgracia, sólo disponemos de los que corresponden a los cuatro primeros gobiernos del período estudiado, y no para los restantes.

Las actividades agropecuarias demostraron tener una escasa presencia en las fuentes notariales, reducida a someras descripciones del equipamiento de chacras o estancias en la cláusula de bienes de los testamentos o en las escrituras de compraventa. En cambio, se ha conservado un respetable número de inventarios de fincas rurales en las sucesiones testamentarias, al punto de que nos permitirán caracterizar las peculiaridades de la actividad ganadera durante las primeras décadas del siglo XVIII. En por lo menos dos casos –los de Miguel de Riblos y Diego Sorarte– ha quedado documentada la utilización de peones y esclavos gracias a que se conservaron las cuentas de la

⁵⁴⁶ Los expedientes sobre la quiebra de este comerciante se encuentran en AGN Sucesión 8122 *Concurso de Miguel de Riblos*.

administración de sus haciendas.⁵⁴⁷ Respecto de la participación de los miembros del grupo estudiado en las recogidas de ganado cimarrón y en las vaquerías, contamos con las autorizaciones libradas por el cabildo, que figuran en los libros de acuerdos, y con los contratos firmados por algunos de ellos para proveer de cueros al Real Asiento británico.

Hemos dejado para último lugar las fuentes que utilizaremos para analizar los vínculos y lealtades personales. En primer lugar, se emprendió la reconstrucción detallada de las relaciones de parentesco de los 174 individuos estudiados. Nuestro principal interés fue indagar si las parentelas tuvieron proyección en el ámbito político, detentando cargos en el ayuntamiento a través de dos o más generaciones o conformando facciones en el seno de la corporación para imponerse a los grupos rivales. También nos pareció importante determinar si los individuos articularon sus distintos emprendimientos comerciales y agropecuarios a través de los vínculos de parentesco o si prefirieron hacerlo por medio de otro tipo de alianzas. En función a esos objetivos, se han recuperado los antecedentes familiares de la inmensa mayoría de los sujetos que componen el grupo analizado: no sólo se rastrearon los nombres de sus padres, sino también los de sus abuelos (en el caso de los individuos nacidos en la ciudad). Como el matrimonio fue la principal herramienta de cohesión de que se valieron los sectores elitistas para concretar alianzas duraderas, también se ha indagado sobre sus esposas y los antecedentes familiares de éstas.

Esta búsqueda fue realizada en distintos repositorios documentales. Los testamentos protocolizados y las sucesiones testamentarias aportaron información sobre la filiación, los matrimonios y los herederos de los miembros de la población estudiada. Pero fue en los archivos de la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, en donde se resguardan los libros parroquiales de este período, de donde extrajimos la mayor parte de sus datos biográficos, gracias al relevamiento exhaustivo de sus partidas de matrimonio y de las partidas de bautismo de sus hijos.⁵⁴⁸ Las partidas de defunción constituyeron un

⁵⁴⁷ AGN IX-36-6-6 *Juan Báez de Alpoin con Diego Sorarte sobre se le entregue su legítima*; AGN Sucesión 8122 *Concurso de Miguel de Riblos*.

⁵⁴⁸ Si bien efectuamos el relevamiento íntegro de las partidas parroquiales en forma personal en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, hemos recurrido a conocidas obras genealógicas para corroborar y completar la información. Entre las que fueron consultadas se encuentran: Hugo FERNANDEZ BURZACO **Aportes biogenealógicos para un padrón de los habitantes del Río de la Plata** Buenos Aires, 1986-1991, Tomos I-VI; Carlos JAUREGUI RUEDA **Matrimonios de la Catedral de Buenos Aires** Fuentes Históricas y Genealógicas Argentinas, Buenos Aires, 1985; Aldo Abel BELIERA **Catedral de Buenos Aires. Registro de óleos, bautismos y confirmaciones Libro 4 (1682-1706) – Libro 5 (1706-1713)** Estudios Histórico-Sociales de Buenos Aires, Buenos Aires, 2010; Aldo Abel BELIERA **Catedral de Buenos Aires. Registro de óleos y bautismos Libro 6 (1713-1720) – Libro 7**

faltante, pues no se conservan para esos años, pero las hemos suplantado por las cláusulas testamentarias en que se dispone el ritual fúnebre y el sitio del entierro.

Las partidas bautismales nos permitieron reconstruir otro tipo de vínculos igualmente importante: los del parentesco ritual. El relevamiento de las relaciones de compadrazgo ha permitido reconstruir un primer entramado relacional, de lo que resultó posible establecer proximidades y distancias entre los integrantes del grupo y apreciar la reconfiguración de sus alianzas a medida que transcurrían las décadas. Una segunda red provino de reunir los poderes de representación escriturados en los protocolos, con el objeto de indagar si, a escala local, la misma repetía a grandes rasgos la configuración de las tramas de parentesco y de compadrazgo, ampliándolas, o si dicha red, que se proyectaba a sus ocupaciones y negocios, obedecía en cambio a un comportamiento propio y evidenciaba una delineación diferente.

La población analizada y el cuestionario a aplicar

Luego de que decidimos un acercamiento a la élite dirigente porteña mediante la técnica prosopográfica, la primera tarea fue delimitar con precisión la población a estudiar. En principio, decidimos incluir en ella a todos los oficiales del cabildo de Buenos Aires que tomaron posesión efectiva de sus empleos entre los años de 1690 y 1726. Resultaron comprendidos tanto los que fueron designados por el ayuntamiento como los que formaron parte de él por haber comprado sus empleos. Unos y otros sumaban 174 individuos, de los que en todos los casos existen referencias en los libros de acuerdos. Quedaron excluidos aquellos que fueron objeto de un nombramiento pero no tomaron posesión de su cargo. De tal forma, los miembros del grupo tuvieron en común el haber ejercido uno o más empleos concejiles.

La elección de esos parámetros nos permitió trabajar con una población bien delimitada que –por lo menos nominalmente– no adolecía de faltantes, ya que se cuenta con el listado completo de sus miembros. Eso no significó que la información que se disponía de cada uno de ellos no sufriera de lagunas e imprecisiones. La primera apreciación que pudo hacerse fue la falta de homogeneidad de dicha población, no sólo porque algunos de sus miembros ejercieron empleos electivos y otros de carácter venal, sino porque una parte de los oficios concejiles estaba dotada de responsabilidad política

y el resto sólo gozaba de competencia administrativa o policíaca, siendo objeto de una valoración desigual por parte del estrato social al que pertenecían quienes los detentaban. En función a esto último los hemos dividido en dos subgrupos: el subgrupo A será integrado por quienes desempeñaron *oficios mayores* y el subgrupo B los que desempeñaron *oficios menores*. Como observamos en un capítulo anterior, los primeros se hallaban relacionados con el ejercicio de la justicia ordinaria, la resolución de los asuntos comunales y la representación del cuerpo frente a las autoridades centrales; los segundos, en cambio, no tenían participación en las sesiones del ayuntamiento y auxiliaban a éste en el desempeño de la justicia en las zonas rurales y la administración del erario concejil. El subgrupo A incluyó a los regidores, alféreces reales, alguaciles mayores, alcaldes provinciales de la Hermandad, alcaldes ordinarios y procuradores. El subgrupo B a los alcaldes de la Hermandad y a los mayordomos.

Planteada esta categorización, pasaremos a presentar el cuestionario que utilizamos para estudiar al grupo en su conjunto y a los subgrupos. Quienes recurren a la técnica prosopográfica parten de la reconstrucción de los ciclos de vida de los individuos que componen la población analizada, integrando a ella los datos demográficos propiamente dichos –el nacimiento, el matrimonio, la muerte– y sus trayectorias personales y profesionales, para luego avanzar sobre otros campos específicos de búsqueda.⁵⁴⁹ En nuestro caso, nos hemos volcado a reconstruir el perfil socioprofesional y los atributos patrimoniales de los integrantes del grupo, a partir de lo cual se pretendió demostrar que estos condicionaron el tipo de empleo concejil que ocuparon. Para ello se respondió a las siguientes preguntas, que formaron parte del cuestionario básico que utilizamos.

1. PROCEDENCIA

a- ¿El individuo nació en Buenos Aires, en otra ciudad del continente americano o en España?

b- En el caso de ser español europeo: ¿llegó a la ciudad como soldado? ¿En qué año arribó a la misma?

⁵⁴⁹ Neitard BULST “Sobre o objeto e o método da prosopografia...”

2. INSERCIÓN PARENTAL

- a- ¿Cuál fue el nombre de su padre? ¿Nació en Buenos Aires o procedía de España?
¿Desempeñó cargos en el cabildo?
- b- ¿Cuál fue el nombre de su madre?
- c- ¿Cuál fue el nombre de su abuelo paterno? ¿Desempeñó cargos en el cabildo?
- d- ¿Cuál fue el nombre de su abuelo materno? ¿Desempeñó cargos en el cabildo?
- e- ¿El individuo descende de los fundadores de Buenos Aires?
- f- ¿El individuo descende de los portugueses que se afincaron en la ciudad en la primera mitad del siglo XVII?

3. ALIANZA POR MATRIMONIO

- a- ¿Cuál fue el nombre de su esposa?
- b- ¿En qué año se celebró el matrimonio? ¿Qué edad tenía el individuo?
- c- ¿Cuál fue el nombre del padre de su esposa? ¿Nació en Buenos Aires o procedía de España? ¿Desempeñó cargos en el cabildo?
- d- ¿El individuo recibió bienes por medio de una carta dotal? ¿Qué importancia tenían en relación a los que él mismo poseía?

4. TRAYECTO PÚBLICO

- a- ¿A qué edad ejerció su primer cargo en el cabildo?
- b- ¿Qué número de cargos detentó en dicha corporación?
- c- Partiendo de la reconstrucción de la secuencia: Primer cargo en el cabildo – Cargos intermedios – Último cargo, ¿qué patrones pueden observarse?
- d- ¿Ejerció cargos burocráticos o de otra naturaleza por fuera del ayuntamiento?

5. TRAYECTO PRIVADO

- a- ¿A qué edad se inició sus primeros emprendimientos en el ámbito mercantil o en otros rubros?
- b- ¿En cuáles de los siguientes tipos de emprendimientos participó?: I) compraventa de artículos europeos; II) compraventa de artículos de la tierra; III) posesión de tienda al por mayor y/o tienda al menudeo en Buenos Aires; IV) cría, fletamento y/o venta de

ganados; V) venta de cueros a los capitanes de los navíos de registro y a las compañías asentistas; VI) venta de esclavos en otras ciudades del virreinato del Perú; VII) recaudación de diezmos y de impuestos; VIII) administración de obrajes de materiales; IX) préstamos a otros comerciantes.

c- Partiendo de la reconstrucción de la secuencia: Primer evidencia de negocios – Negocios intermedios – Última evidencia, ¿qué patrones pueden observarse?

d- ¿Predominaron sus actividades como comerciante o se desempeñó preferentemente como hacendado?

6. PATRIMONIO INMUEBLE, SERVIL Y SEMOVIENTE

a- ¿Cuántas casas poseía en la ciudad y dónde se hallaba ubicada la que le servía de residencia? ¿Fue adquirida o heredada?

b- ¿Se sirvió de sus inmuebles urbanos como prenda de hipoteca?

c- ¿Fue propietario de estancias o chacras en el entorno rural de la ciudad?

d- ¿Existen evidencias sobre la composición de sus haciendas? ¿Fue criador de mulas? ¿Emprendió además la producción de trigo?

e- ¿Poseía acción para vaquear?

f- ¿Era propietario de esclavos? ¿En qué número?

g- ¿Fue cabeza de una encomienda de indios?

h- ¿Es posible secuenciar la adquisición de inmuebles urbanos y rurales en el contexto de su actuación empresarial y política?

PARENTESCO Y PROCEDENCIA

¿Existieron “linajes” de cabildantes?

Al enfocar su atención en las oligarquías urbanas del Antiguo Régimen, los estudios prosopográficos han coincidido en destacar el monopolio que éstas ejercieron sobre los cargos políticos municipales. ¿Cuáles fueron las bases sobre las que se habría asentado esa primacía? Para explicarlo, es preciso partir de una verdad incontrovertible: no existe un modelo de sistema político en el que todos los individuos cuenten con las mismas chances de formar parte de los grupos dirigentes. Las restricciones puestas al ingreso a esos grupos, que pueden variar de acuerdo con los modelos políticos pero están siempre presentes, son la condición misma de la existencia de la élite. En el mundo contemporáneo, los que cuentan con mayores posibilidades de inserción son aquellos que disponen de acceso preferencial a la información, controlan los medios internos de comunicación o han demostrado pericia en el arte de la política. Pero en los sistemas pretéritos, esa pertenencia no estaba necesariamente ligada a la posesión de habilidades específicas. En los sistemas aristocráticos, la misma estaba estrictamente regulada por la pertenencia a un linaje, mientras que en los oligárquicos las vinculaciones familiares siguieron siendo con harta frecuencia la llave de acceso a las magistraturas. Aunque hoy en día la apelación a los antecedentes familiares constituye un mecanismo de incorporación de menor relevancia, el mismo continúa funcionando en forma solapada en nuestros sistemas democráticos.⁵⁵⁰

Quienes estudiaron a las sociedades urbanas rioplatenses durante el período colonial han postulado la preponderancia económico-política de un reducido grupo de familias por sobre el resto de la población. En tal sentido, éstas no habrían diferido de otras sociedades urbanas del extenso imperio hispánico. En esas comunidades rígidamente organizadas en estamentos, donde tanto las directivas de la corona como las reglas morales favorecían las relaciones verticales y los lazos de sujeción, resultaba natural que las principales parentelas ocuparan un lugar que parecía estarles destinado. Su encumbramiento estuvo ligado a una serie de restricciones –algunas legales, otras implícitas– que estorbaban la promoción de individuos pertenecientes a los estratos

⁵⁵⁰ Montserrat BARAS “Las élites políticas” en **Revista del Centro de Estudios Constitucionales** Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, N° 10, 1991, Pág. 18.

subalternos a los cargos de responsabilidad política. Esa asimetría se constituía en el basamento del poder de los grupos privilegiados, gracias a la cual tenían garantizadas tanto la explotación como la distribución de los recursos disponibles. El predominio de dichos grupos se fundaba en los vínculos de dominación y protección que ejercían sobre los demás estratos, expresados en el intercambio de servicios y contraprestaciones, en las relaciones de patronazgo y en el clientelismo.⁵⁵¹

En gran parte de la América española el estamento nobiliario estaba prácticamente ausente, por lo que en sustitución de éste existían oligarquías urbanas cuyos privilegios no se fundaban en la sangre sino en la riqueza. Las únicas preeminencias de sangre que se conocieron en todas partes fueron las nacidas de la conquista, que reservaban mercedes de tierras, magistraturas e indios en encomienda a los descendientes de los fundadores, pero ellas fueron extinguiéndose a medida que éstos perdieron su influencia y fueron desplazados por otras familias llegadas en forma más reciente. A lo largo del siglo XVII, esas familias que se incorporaron más tardíamente recibieron de la corona el instrumento que necesitaban para consolidarse en el gobierno municipal: el acceso a los oficios concejiles por medio de la venalidad. En el caso de los empleos que continuaron siendo electivos, debieron apelar a su ascendiente sobre el resto de los miembros de la élite dirigente para conseguir su voto y retener sus asientos en el ayuntamiento. De esa forma, en palabras de Dedieu y Windler, sus descendientes lograron heredar algunos oficios por derecho y apropiarse de los otros de hecho.⁵⁵²

Dos eran los caminos, como se ve, para ingresar y permanecer en el seno de la élite dirigente: el de la venalidad y el del consenso intraoligárquico. Frente a esto se nos presenta una inevitable pregunta: ¿tuvieron los empleos venales y los empleos electivos un peso equivalente? En Buenos Aires, ello parece haber ido variando a lo largo de su primer siglo y medio de historia. En sus primeras tres décadas de existencia, el cabildo porteño estuvo dominado por los conquistadores y sus descendientes, los *beneméritos*: al no existir todavía empleos concejiles de carácter venal, este sector habría podido, de acuerdo con lo afirmado por Jorge Gelman, hacerse elegir en forma indefinida. Pero a mediados de la década de 1610, la corona sacó a subasta los puestos de regidor, alguacil mayor, alcalde provincial, depositario general y alférez real, lo que permitió que

⁵⁵¹ José María IMIZCOZ BEUNZA Y Oihane OLIVERI KORTA “Economía doméstica y redes sociales: una propuesta metodológica” en José María IMIZCOZ BEUNZA Y Oihane OLIVERI KORTA (coord.) **Economía doméstica y redes sociales...** Págs. 35-36.

⁵⁵² Jean-Pierre DEDIEU y Christian WINDLER “La familia: ¿una clave para entender la historia política?...” págs. 201-236.

algunos vecinos adinerados los adquirieran por compra y se perpetuaran en la corporación sin depender del voto del resto de los cabildantes. Esos vecinos, que recibieron el apelativo de *confederados*, no formaban parte de las familias fundadoras (a quienes la monarquía había aconsejado dar preferencia en el uso de dicho empleos) y se hallaban vinculados, en cambio, con los portugueses afincados recientemente en la ciudad, que eran sospechados de participar en el contrabando y de ser “cristianos nuevos”, es decir, descendientes de judeoconversos.⁵⁵³

Las sugerencias de Gelman respecto a la incidencia de la venalidad pueden aplicarse a las dos décadas que se extendieron entre 1615 y 1635. No obstante, los cargos venales no tardaron en quedar vacantes, parte de ellos por falta de confirmación del monarca, sin que se permitiera a nuevos vecinos ocuparlos sino excepcionalmente. No fue hasta la década de 1660, con la instalación de la primera Real Audiencia en Buenos Aires, en que se nombró una nueva camada de oficiales venales, pero el proceso se repitió y veinte años más tarde el cabildo volvía a sesionar casi sin su presencia. En nuestra opinión, la posibilidad de acceder a los cargos por compra fue demasiado esporádica como para convertirse a largo plazo en determinante. Las elecciones anuales de oficiales concejiles, por el contrario, brindaron durante casi todo el siglo XVII a la oligarquía local la oportunidad de participar en el gobierno municipal. Les sirvió como plataforma, además, para poder ocupar el puesto de gobernador en caso de acefalías, ya que estaba dispuesto que uno de esos oficiales electivos –generalmente el alcalde ordinario de primer voto– ejerciera ese interinato.⁵⁵⁴ Creemos, en consecuencia, que la búsqueda de quienes dominaron la política local en Buenos Aires debe enfocarse en los oficios electivos.

Para abordar a fondo el problema de la circulación de los empleos electivos entre los vecinos de la ciudad, consideramos necesario ampliar el período propuesto en esta tesis e indagar sus antecedentes desde los comienzos del siglo XVII. El registro de quienes ocuparon empleos electivos en el cabildo porteño se inicia en 1605, ya que las actas anteriores se encuentran extraviadas. Entre ese año y 1726 (año en que se cierra nuestra investigación) fueron 418 los vecinos que detentaron una o más veces dichos cargos. Sólo una reducida parte de ellos logró mantenerse en forma más o menos continuada en

⁵⁵³ Jorge GELMAN “Cabildo y élite local...” Págs. 10-12.

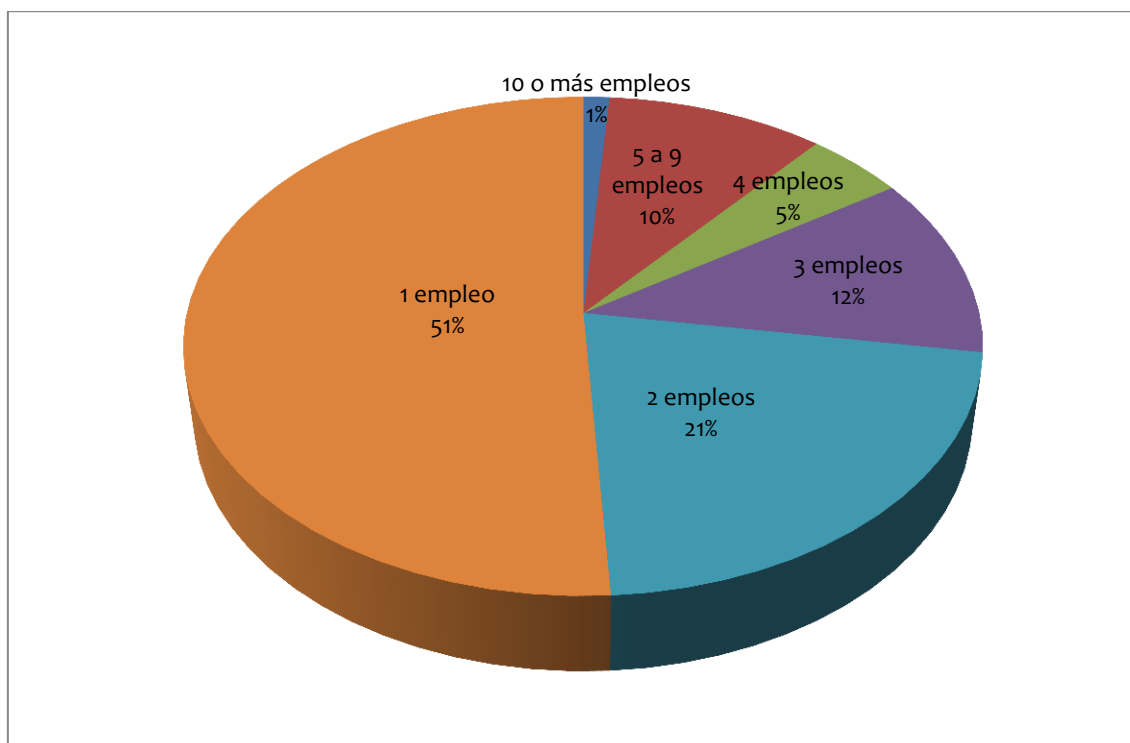
⁵⁵⁴ Durante el siglo XVII, esto sucedió en dos ocasiones: en 1613, cuando el alcalde ordinario Mateo Leal de Ayala asumió el gobierno interino por muerte del gobernador Marín Negrón y en 1622, cuando el también alcalde Diego Páez Clavijo hizo lo mismo tras el deceso del gobernador Diego de Góngora. En 1714, luego del fallecimiento del gobernador Alonso de Arce y Soria, la situación se repetiría, cuando el alcalde Pablo González de la Cuadra fue designado por el cabildo “gobernador en lo político”.

el seno de la corporación, ya que en promedio ejercieron 2,2 empleos *per cápita*.⁵⁵⁵ Tan sólo cinco de ellos detentaron oficios electivos en diez o más ocasiones, tres de los cuales se hallaban relacionados entre sí por vínculos de afinidad: Bernardo de León, su cuñado Antonio Bernalte de Linares y el yerno de éste, Joseph Gil Negrete. Los dos restantes fueron Antonio Gutiérrez Barragán, quien se convertiría en tronco de un linaje que permanecería ligado a la corporación durante más de un siglo, y Hernando Rivera Mondragón, el vecino que se mantuvo durante el lapso más extenso en el ejercicio de los empleos concejiles, pues sumando los electivos y los venales excedió las cinco décadas de permanencia en el ayuntamiento. En cuanto a la actuación de los vecinos fundadores, quisimos constatar si, tal como afirmó Gelman, se valieron de la elección indefinida como una herramienta para perpetuarse en el poder. Tan sólo uno, Miguel del Corro, detentó empleos electivos en siete ocasiones, mientras que otros tres, Pedro de Izarra, Antonio Higuera de Santana y Julián Pavón, lo hicieron cada uno en cuatro oportunidades. Ninguno de estos cuatro fue sucedido por sus hijos en puestos similares y tan sólo Izarra e Higuera de Santana consiguieron colocar en ellos a sus yernos. De modo que si los *beneméritos* dispusieron de instrumentos para eternizarse en el poder, no consiguieron valerse de ellos para conservar su supremacía, lo que puede constatarse incluso antes de que el grupo de los *confederados* los despojara del control del cabildo.

Descartada la reelección continuada de los mismos sujetos, cabe preguntarse con qué asiduidad fueron convocados los vecinos a desempeñar los oficios concejiles. A lo largo de los 122 años que comprende el período propuesto, pudo apreciarse que la mayor parte de los cabildantes (el 51%) no ejerció a lo largo su vida más que un único empleo electivo en el ayuntamiento. Como puede verse en el Gráfico N°12, quienes pudieron ocupar tres o más cargos rondaron el cuarto de la población analizada. El 21% sólo lo hizo en dos oportunidades, mientras que el 12% consiguió ser elegido tres veces y el 16% restante ejerció dichos empleos cuatro veces o más.

⁵⁵⁵ Hemos considerado en este caso todos los empleos electivos que requirieran del nombramiento formal del cabildo, incluyendo los empleos judiciales como defensor de menores o conjuéz.

Gráfico 12 – Cantidad de empleos electivos anuales que desempeñaron los cabildantes (1605-1726)



Fuente de los datos: AECBA (varios tomos); "Aportes biogenealógicos" de Fernández Burzaco (6 tomos); "Diccionario Biográfico" de Molina; Revista Genealogía (varios tomos)

Estos guarismos nos conducen a la pregunta del título: ¿existieron en Buenos Aires verdaderos "linajes de cabildantes" que intentaron perpetuarse en el poder a lo largo de varias generaciones? Lo que interesa dilucidar, en este caso, es si los cargos electivos fueron retenidos por un número reducido de parentelas o circularon, en cambio, en un espacio social más amplio. Analicemos en primer lugar la tendencia secular. Al examinar la cobertura de los empleos electivos entre 1605 y 1726, pudo determinarse que aproximadamente dos tercios de los mismos fueron ocupados por individuos que se hallaban emparentados –por sangre o por afinidad– con otros cabildantes, mientras que el otro tercio recayó en vecinos que carecían de dichas vinculaciones.

Ahora bien, de la constatación de vínculos de parentesco se desprende que los cabildantes, aunque en algunos casos conformaron extensas parentelas, por lo general no consiguieron participar por más de dos generaciones del gobierno municipal, lo que evidencia una fuerte rotación en el interior de la dirigencia concejil. Concordamos con otros autores en que la entidad básica de estudio, cuando de poder se trata, no puede ser

el individuo, sino la familia y que la acción de una persona aislada no se entiende sino en un contexto familiar.⁵⁵⁶ Pero creemos que la influencia de los vínculos primarios en la conformación de las redes de poder puede ser motivo de sobrevaloración si se la da por sobrentendida y no es constatada adecuadamente.

No se descarta que las parentelas más prestigiosas abrigaran el propósito de prorrogar indefinidamente su preponderancia en el plano político, pero si ese deseo existió se convirtió en la práctica en fracaso. Hemos logrado identificar a 69 grupos familiares que participaron en el gobierno municipal entre 1605 y 1726. A ellos pertenecían 196 cabildantes, es decir, el 46% de los vecinos que detentaron cargos electivos en el ayuntamiento. No obstante, casi la mitad de esos individuos (el 47,8%) se hallaban enlazados por una relación de padre e hijo, constatándose en menor grado la presencia de tíos y sobrinos (18,8%) y de hermanos (14,5%). En todos los casos, la permanencia de esas parentelas en la corporación se detuvo allí, sin lograr extenderse a una tercera generación.

Tan sólo un reducido número de esos grupos familiares mantuvo su acceso a los cargos electivos durante tres generaciones o más (14,5%). La permanencia más prolongada correspondió al que posiblemente fuera el linaje porteño más influyente del siglo XVII: los Roxas y Acevedo. Su fundador, Pedro de Roxas, nacido en las islas Canarias pero de ascendencia portuguesa, inició su trayectoria en el cabildo cuando fue designado alcalde ordinario en 1626. En 1640, a poco de haber sido nombrado lugarteniente por el gobernador Ventura de Mujica, recibió la noticia del deceso sorpresivo de éste y fue llamado a asumir durante unos meses el gobierno interino de la Provincia. Casado con la hija bastarda del célebre contrabandista portugués Diego de Vega, su progeie se dispersó a ambos lados del Atlántico. Uno de sus vástagos se avecindó en Portugal y estudió en la Universidad de Coimbra, amparado por un pariente que ejercía un cargo en la corte lisboeta, mientras que otro se mudó a Lima y se graduó de bachiller en la Universidad de San Marcos, para después convertirse allí en cabeza de otra rama de la estirpe.⁵⁵⁷ De los hijos que permanecieron en Buenos Aires, el que logró posicionarse mejor fue Amador de Roxas, quien fue electo alcalde de primer voto en 1660 y ejerció el efímero cargo de corregidor entre 1665 y 1667. La familia Roxas y Acevedo estuvo representada en el cabildo por los miembros de tres generaciones de

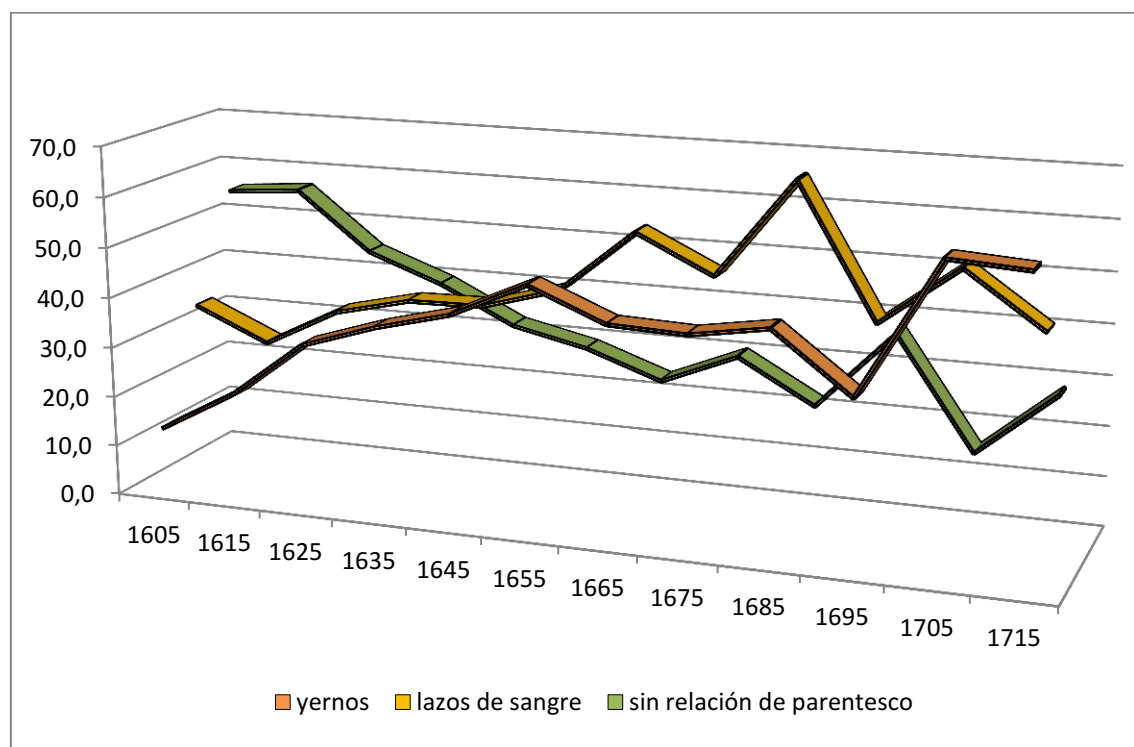
⁵⁵⁶ Jean-Pierre DEDIEU y Christian WINDLER "La familia..." Pág. 215

⁵⁵⁷ Para una genealogía de los Roxas y Acevedo enriquecida con datos biográficos véase Jorge LIMA GONZALEZ BONORINO **Buenos Aires, sus primeros cincuenta años** Estudios Históricos Sociales de Buenos Aires, Buenos Aires, 2013, Págs. 102-124.

descendientes de Pedro, incluso por los que pertenecían a una rama ilegítima. Aunque sin gozar de la notoriedad de aquella, los miembros de otras tres familias –Barragán, Gaete y Rivadeneira– también estuvieron presentes en el cabildo a lo largo de un siglo. Pero esa persistencia deberá ser tomada como excepcional.

Hubo otro tipo de vínculos que gozó de una relevancia semejante a la de los lazos de sangre: las alianzas matrimoniales. Entre 1605 y 1726, fueron 150 los cabildantes que desposaron a las hijas de otros capitulares, constituyéndose en el 35,9% del total de los mismos. La mayor parte de ellos carecía de antecedentes familiares en el gobierno comunal, lo que sugiere que su matrimonio con mujeres de la élite les sirvió de peldaño para ingresar a la dirigencia concejil. Al reconstruir la evolución de las vinculaciones parentales en el seno de ésta, hemos observado un contraste entre la preponderancia adquirida a lo largo del siglo XVII por los lazos de sangre y lo sucedido a partir de la primera década del siglo XVIII, en que se impusieron los vínculos de afinidad. En el Gráfico N° 13 es posible apreciar esta última tendencia.

Gráfico 13 – Inserción familiar de los cabildantes, expresada en número de cargos detentados (1605-1726)



Fuente de los datos: AECBA (varios tomos); "Aportes biogenealógicos" de Fernández Burzaco (6 tomos); "Diccionario Biográfico" de Molina; Revista Genealogía (varios tomos)

El Gráfico anterior permite constatar la sucesión de tres etapas en el proceso de conformación de la dirigencia concejil porteña. La primera se extendió entre 1605 y 1634. En ella, la mayor parte de los empleos electivos recayó en cabildantes no vinculados entre sí por parentesco. Esto resultaba previsible en un sector dirigente de reciente conformación que tendió a absorber a quienes habían llegado en forma más reciente desde Castilla, Portugal y Canarias, atraídos por las ventajas del tráfico ilícito. Pero a partir de 1635, en coincidencia con el inicio de la crisis que dio fin a la unidad de las monarquías ibéricas, esa situación se revirtió. En territorio americano, el proceso de quiebre se iniciaría ese mismo año, cuando los bandeirantes paulistas lanzaron sus primeras incursiones a las Misiones del Tape y el Alto Uruguay. Dos años más tarde estallaron del otro lado del Atlántico los levantamientos populares de Évora, que incitarían a la nobleza lisboeta a plantear la separación de las coronas y conducirían a la proclamación del duque de Braganza como monarca de Portugal en 1640.

En ese momento, los portugueses y sus familias constituían alrededor de la quinta parte de la población de Buenos Aires. Ante la presencia de una minoría de esa envergadura, no nos sorprende que Fernand Braudel considerara al Buenos Aires de la primera mitad del siglo XVII una ciudad semiportuguesa.⁵⁵⁸ Algunos de ellos eran artesanos modestos, pero otros ejercían profesiones honrosas como el comercio y mantenían lazos con el Brasil e incluso con Lisboa.⁵⁵⁹ Pero lo que hacía significativa a esa minoría no era sólo la diversidad de sus ocupaciones sino su integración con el resto de la vecindad. Aunque en un principio, como observa Reitano, los portugueses más acaudalados sostuvieron pautas conyugales endogámicas, escogiendo el enlace con las hijas de otros portugueses de igual rango, finalmente optaron por casarse con las hijas de los vecinos españoles, lo que les aseguró una inserción social más plena.⁵⁶⁰ Al estallar la sublevación del duque de Braganza, el éxito de esta estrategia quedó bien demostrado: cuando Felipe IV decretó la expulsión de los portugueses de las ciudades americanas, la vecindad porteña salió en su defensa y consiguió evitar la deportación, por lo menos de una porción de ellos.⁵⁶¹ En la década siguiente, los hijos de esos

⁵⁵⁸ Citado por Manfred KOSSOK **El virreinato del Río de la Plata** Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, Pág. 30

⁵⁵⁹ Alice PFEIFFER CABABRAVA **O Comercio português no Rio da Prata (1580-1640)** Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de São Paulo, 1944, Págs. 131-140.

⁵⁶⁰ Emir REITANO **La inmigración antes de la inmigración. Los portugueses de Buenos Aires en vísperas de la Revolución de Mayo** Universidad Nacional de Mar del Plata, 2010, Págs. 124-126.

⁵⁶¹ Oscar TRUJILLO "Facciones, parentesco y poder: la élite de Buenos Aires y la rebelión de Portugal de 1640" en Bartolomé YUN CASALILLA **Las redes del imperio. Élités sociales en la articulación de**

portugueses verían franqueado su acceso a los empleos electivos del cabildo. Quienes los detentaron más tempranamente fueron los Báez de Alpoin, y desde 1655 se fueron sumando otras familias luso-criollas como los Fernández de Agüero, Fernández Guillén, Dami Sotomayor, Maciel del Águila, Pereyra, González de Acosta, López Camelo, Rodríguez Flores y Rodríguez Estela, entre otros. La concertación de alianzas matrimoniales les permitió enlazarse con el resto de las parentelas dominantes, aunque manteniendo su perfil como subgrupo.

Pero aunque una parte de las familias luso-criollas se imbricó con el resto de los sectores elitistas, se trató de una incorporación muy selectiva, ya que lo que caracterizó a los grupos dirigentes durante esta segunda etapa fue, por el contrario, la tendencia que manifestaron a la oclusión. En dicha etapa, que se extendió entre 1635 y 1705, la dirigencia concejil tendió a consolidarse por medio de la endogamia, como pudo observarse en los altos índices de vinculación parental entre sus miembros. Esa tendencia alcanzó su ápice en la década de 1680, en que las dos terceras partes de los individuos que detentaban empleos electivos –casi todos ellos criollos– se hallaron emparentados con otros que lo habían sido anteriormente. Como contraparte, el acceso de los peninsulares a esos empleos durante la misma década llegó a su mínima expresión a lo largo de más de un siglo.

La tercera etapa en este proceso se perfiló con el cambio de siglo. En las últimas tres décadas del siglo XVII, arribaron a Buenos Aires contingentes de varios cientos de soldados enviados desde España para reforzar la guarnición. Poco es lo que sabemos sobre cómo fueron enrolados en el ejército: algunos se engancharon voluntariamente y otros fueron reclutados por la fuerza durante las levadas que el monarca ordenó efectuar en los poblados de la península.⁵⁶² A los que consiguieron promocionarse en la carrera militar, su pertenencia a la oficialidad del Presidio los habilitaría para vincularse con la élite dirigente por medio del matrimonio. Más tarde, apoyándose en esos vínculos de alianza, esos peninsulares verían franqueado su acceso a los empleos concejiles. Esta renovación de la dirigencia concejil permite explicar que, entre 1705 y 1726, el vínculo dominante entre los cabildantes fuera el de suegro y yerno.

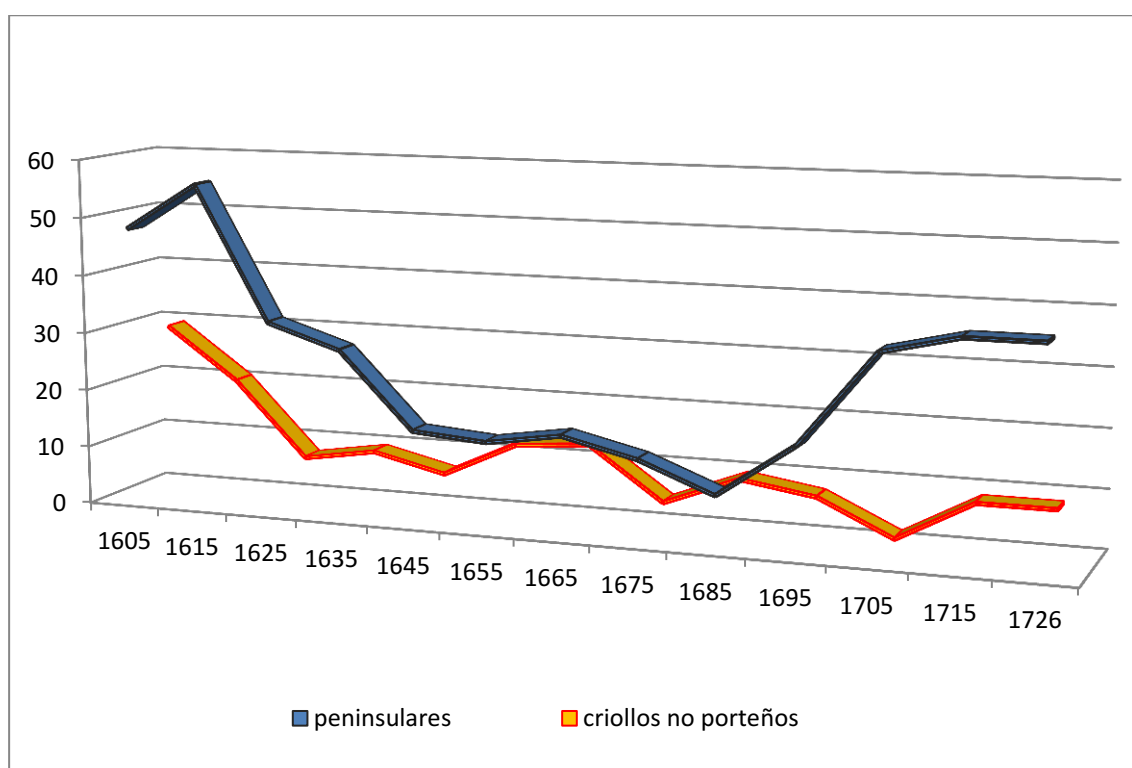
No obstante, los militares de alta graduación no fueron los únicos peninsulares que se incorporaron a la dirigencia concejil luego de contraer matrimonios ventajosos. Se les

la monarquía hispánica, 1492-1714 Universidad Pablo de Olavide-Marcial Pons, Madrid, 2009, Págs. 341-358.

⁵⁶² Cristina BORREGUERO BELTRAN “Del tercio al regimiento” en **Estudis. Revista de historia moderna** Universidad de Valencia, Departamento de Historia Moderna, 2001, N° 27, Págs. 69 y ss.

sumaron otros individuos procedentes del otro lado del Atlántico, como lo fueron los comerciantes en ascenso, los empleados de la Real Hacienda y los miembros de las comitivas de los sucesivos gobernadores. Este reposicionamiento de los peninsulares dentro de la corporación a partir de comienzos del siglo XVIII puede observarse en el Gráfico N° 14, en que se mide la injerencia de los vecinos no nacidos en Buenos Aires por medio del número de empleos concejiles que estos desempeñaron a lo largo de 122 años.

Gráfico 14 – Empleos electivos detentados por cabildantes no nacidos en Buenos Aires (1605-1726)



Fuente de los datos: AECBA (varios tomos); "Aportes biogenealógicos" de Fernández Burzaco (6 tomos); "Diccionario Biográfico" de Molina; Revista Genealogía (varios tomos)

La presencia de foráneos en la corporación merece algunos comentarios. En lo que respecta a los peninsulares, a lo largo de los 122 años analizados hemos hallado que 124 de ellos fueron llamados a desempeñar oficios electivos en 326 ocasiones, ocupando de esa forma el 35,3% de la totalidad de esos empleos. Pero entre 1640 y 1695, esa participación se mantuvo por debajo del 20%, obstruida por la tendencia a la oclusión

manifestada por la dirigencia concejil, que según vimos atravesaba por entonces su momento de mayor inclinación a la endogamia de grupo. Más tarde, al producirse el cambio de siglo, los peninsulares conseguirían reposicionarse en el ayuntamiento, adueñándose de un mayor número de cargos. Este viraje no sólo nos habla de una mayor apertura en los grupos dirigentes: el hecho de que fueran postulados para los empleos de alcalde ordinario o de síndico procurador indica el alto grado de aceptación de que gozaban frente a la sociedad criolla, que sin duda fue el corolario de una exitosa carrera militar, burocrática o mercantil.⁵⁶³

Un segundo grupo de foráneos lo constituyeron los criollos que habían nacido en otros puntos del virreinato del Perú. Se ha logrado individualizar a 47 de ellos, que ejercieron empleos electivos en 125 ocasiones. En los años tempranos del siglo XVII resultó abrumadora la presencia de asunceños, que habían participado en la fundación de la ciudad o arribado poco después respondiendo al llamado de sus parientes ya establecidos. Entre 1605 y 1614, estos todavía acaparaban el 26% de los empleos electivos, pero su importancia declinó rápidamente. A partir de entonces, el ingreso a la corporación de individuos oriundos de otros puntos del virreinato fue escasamente significativo, pero se destacaron entre ellos los que procedían del reino de Chile, que en buena parte eran militares que habían arribado a la ciudad a resultas de los desplazamientos de tropas ordenado por las autoridades centrales debido a necesidades coyunturales. Uno de ellos fue Pedro Home de Pessoa y Saa, vecino de Santiago de Chile, quien antes de establecerse en Buenos Aires había sido lugarteniente y justicia mayor en Cuyo. Sus descendientes adoptaron el apellido Pessoa de Figueroa y se convirtieron en una familia bien representada en los grupos dirigentes hasta la segunda década del siglo XVIII.⁵⁶⁴ Otro vecino oriundo de esa ciudad trasandina fue Alonso del Pozo y Silva, hijo de un chanciller de la Real Audiencia de Santiago, quien afirmó en una relación de méritos ser “*nieto y biznieto de los primeros pobladores y conquistadores de dicho Reino de Chile*”.⁵⁶⁵ En lo militar, Pozo y Silva ejerció primero el cargo de capitán y luego el de sargento mayor del Presidio de Buenos Aires; en lo político, fue nombrado procurador y alcalde ordinario, y en 1664 compró la alcaldía

⁵⁶³ Coincidimos con Hoberman en que una de las razones por la que los peninsulares ocuparon cargos en el cabildo fue para integrarse a la sociedad local; Luisa Schell HOBERMAN **México's merchant elite, 1590-1660: silver, state and society** Duke University Press, Durham, 1991, Págs. 184-185.

⁵⁶⁴ Los orígenes de esta familia pueden hallarse en Hugo de FERNANDEZ DE BURZACO Y BARRIOS “Linaje troncal de los Homem de Pessoa de Saa en Chile y Argentina” en **Revista Genealogía**, Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, Buenos Aires, 1949, N° 8, Pág. 217-232.

⁵⁶⁵ Véase su relación de méritos en AGN IX-41-4-5 *Autos de vacantes de los indios tubichaminís que se dieron al capitán Diego López Camelo (1680)*.

provincial de la Hermandad. Sus hijos Alonso y Gerónimo desempañarían también oficios concejiles.

El trabajo de Ponce Leiva sobre el cabildo de Quito, que también alude a la inserción de foráneos a la élite dirigente, nos ofrece la posibilidad de realizar un ejercicio comparativo. Esta autora observa que, al igual que en Buenos Aires, Quito recibió una corriente inmigratoria procedente de Castilla en los últimos años del siglo XVII. Pero a diferencia de nuestra ciudad, entre 1660 y 1700 se produjo allí un aumento notable del grupo dirigente de origen peninsular, a la vez que la participación de los criollos en el ayuntamiento tendía a descender. También el comportamiento de esos foráneos difirió del que pudo apreciarse en Buenos Aires. Las evidencias de endogamia entre los miembros del cabildo quiteño se presentaron entre los individuos de procedencia europea: de los peninsulares casados con hijas de cabildantes, la mayor parte tuvo un suegro peninsular. Pero Ponce Leiva ha interpretado que ello se debió a la escasa apertura de la oligarquía criolla, argumentando que la endogamia entre peninsulares se debió a la dificultad que suponía para ellos vincularse con las familias criollas acaudaladas hasta que, tras años de convivencia, demostraban tener una actitud afín a la mentalidad y los intereses criollos.⁵⁶⁶

Los cabildantes entre 1690 y 1726: el origen geográfico

Entre 1605 y 1726, el 30% de los oficiales electivos del cabildo de Buenos Aires era oriundo de la península. Entre ellos estaba comprendido un pequeñísimo número de portugueses que consiguieron que la corona les extendiera carta de naturaleza, pero en su inmensa mayoría provenían del reino de Castilla. El restante 70% se componía de americanos, que en sus cuatro quintas partes habían nacido en la ciudad. A medida que avanzaba el siglo XVII, el número de cargos concejiles que lograron apropiarse los criollos fue en decidido aumento y el gobierno comunal tendió a convertirse en una parcela que les estaba reservada. Tras la entronización de los Borbones, la representación del sector criollo en el ayuntamiento menguó en algo, pero sin que llegara a alterarse más que incidentalmente esa relación de fuerzas. Buenos Aires reprodujo de esa manera lo acaecido en el resto de la América española, donde el alto grado de criollización de los grupos dirigentes comenzó a hacerse visible a partir de

⁵⁶⁶ Pilar PONCE LEIVA *Certezas ante la incertidumbre: élite y Cabildo de Quito...* Pág. 218.

1620 y tendió a consolidarse entre lo que restaba de aquel siglo y la primera mitad del siglo siguiente.⁵⁶⁷

El origen geográfico puede convertirse en un marcador de utilidad para determinar los niveles de renovación de los grupos dirigentes. Cuando una ciudad operaba como polo de atracción –como podía ocurrir en el caso de una capital, un puerto de ultramar o un centro minero– era casi inevitable la aparición de sectores económicos emergentes, contra lo cual los grupos dirigentes reaccionaban levantando barreras para evitar ser desplazadas por estos. Pero se trataba de barreras porosas, pues escondían tras de sí un proceso selectivo de incorporación de nuevos miembros, a condición de que adoptaran y defendieran como propios los intereses de los grupos hasta entonces dominantes. De esa manera, al faltar reglas estrictas que detuvieran la movilidad ascendente, los círculos oligárquicos recurrían a la cooptación. Stone llama *elasticidad* a esa capacidad de los sectores mejor posicionados para absorber a familias de diferente extracción social o geográfica y convertirlas a sus valores y a sus géneros de vida.⁵⁶⁸ Naturalmente, hubo oligarquías que mostraron una mayor aptitud para hacerlo que otras. Si recurrimos a los ejemplos de la Europa mediterránea, nos hallaremos con que los patriciados italianos se distinguían por la antigüedad de sus raíces urbanas, situación que contrastaba con la de una ciudad “nueva” como Madrid, que desde que fuera elegida por Felipe II como capital de su imperio fue objeto de un rápido crecimiento: allí, dos quintas partes de los regidores eran forasteros.⁵⁶⁹ El grado de elasticidad que demostraron tener los círculos dirigentes iba sin duda de la mano con su capacidad de adaptación a las alteraciones económicas y con su habilidad para sacar provecho de las modificaciones en el status político-administrativo de las ciudades en que residían.

¿Qué fue lo que determinó que, en los años postreros del siglo XVII, la dirigencia concejil porteña se abriera al ingreso de peninsulares? Los conflictos bélicos en que se vieron inmiscuidos Carlos II y Felipe V movieron a estos monarcas a reconsiderar el rol de Buenos Aires como baluarte defensivo de importancia y los impulsaron a enviar periódicos refuerzos de soldados y armamento. El prestigio de los oficiales de la guarnición, compuesta casi íntegramente por peninsulares, fue en aumento no sólo por manejar en forma eficiente a unas compañías de soldados mal pagos, que en más de una ocasión estuvieron al borde de la rebelión, sino por el trato frecuente que sostuvieron

⁵⁶⁷ Guillermo CESPEDES DEL CASTILLO *América Hispánica...* Págs. 292 y ss.

⁵⁶⁸ Lawrence STONE *La crisis de la aristocracia...* Pág. 38.

⁵⁶⁹ Mauro HERNANDEZ *A la sombra de la Corona. Poder local y oligarquía urbana (Madrid, 1606-1808)* Siglo Veintiuno de España Editores, Madrid, 1995, Pág. 64.

con los gobernadores, que tenían su residencia permanente en el fuerte. Esta relación de proximidad es un factor que no debe subestimarse si se quiere explicar la creciente presencia de oficiales retirados en el ayuntamiento. Dos personajes de reconocida actuación a fines del siglo XVII como lo fueron Gabriel de Aldunate y Miguel de Riblos, que eran dueños de una larga foja de servicios militares, ingresaron al cabildo tras haber sido apadrinados por el gobernador Agustín de Robles. En 1707, Alonso de Valdés Inclán convertiría en regidores a Juan Bautista Fernández Parra y Gaspar de Avellaneda, dos oficiales retirados que habían llegado como soldados rasos a Buenos Aires en 1674, a bordo del navío Santa María de Lubeque. Antonio Meléndez de Figueroa, que llegó en un piquete de soldados en 1677 y se retiró de la carrera militar con el grado de capitán en 1698, administró los negocios privados de los gobernadores Valdés Inclán y Velasco y Tejada y fue procurador del cabildo en 1704.

Uno de los testimonios más expresivos del espaldarazo recibido por un militar del Presidio es el de Miguel de Obregón. Al igual que Fernández Parra y que Avellaneda, éste había sido uno de los soldados que habían sido remitidos desde Sevilla para la dotación del fuerte en 1674. Al sentar plaza en la guarnición fueron consignadas sus señas particulares: era de dieciocho años, pecoso, con una cicatriz debajo del ojo izquierdo. Su carrera militar, rápida y exitosa, se vio interrumpida en 1687, cuando luego de haber sido ascendido capitán de una compañía de caballería, el gobernador Joseph de Herrera y Sotomayor le concedió la baja y lo designó alguacil mayor del cabildo, cargo en que permanecería hasta la pesquisa de Mutiloa. Cuarenta años después de haber arribado a la ciudad, Obregón resumiría su trayectoria en una información de servicios: *“Yo he servido a S.M. en este Presidio en el tiempo de catorce años y venido de los Reinos de España con plaza de soldado raso, y después me hicieron cabo de escuadra, alférez de caballos, capitán de infantería y pasé a de caballos corazas de este Presidio... y también he servido más tiempo de veinticuatro años el empleo de Alguacil Mayor de Mar y Tierra de esta ciudad, y en todo he servido con los réditos y buena opinión que es notoria...”*⁵⁷⁰

¿De dónde procedían puntualmente esos peninsulares? Mientras que en sus comienzos la migración ultramarina al Río de la Plata se había compuesto de andaluces,

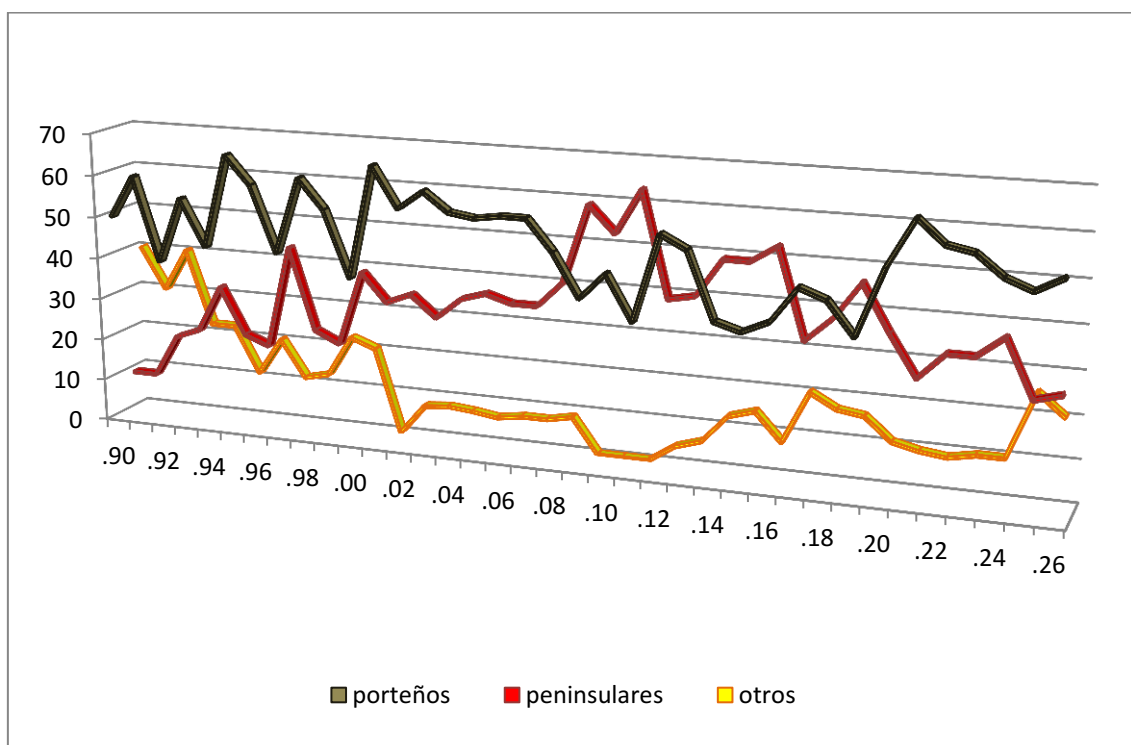
⁵⁷⁰ Esta declaración fue hecha en noviembre de 1714 y se encuentra en AGN IX-42-9-2 *Despacho de varios títulos de regidores y otras providencias de gobierno*. En 1693, Obregón había afirmado en su testamento que era *“vecino de esta ciudad de la Trinidad y puerto de Buenos Aires de donde vine de los reinos de España habrá tiempo de diecinueve años sirviendo a Su Majestad con plaza de soldado”*. AGN IX-48-8-1 *Escribanías Antiguas (1693)*, f. 324.

portugueses y canarios, en el primer cuarto del siglo XVIII la lista estuvo encabezada por los nacidos en las provincias nor-atlánticas y la meseta castellana. Esto último se vio reflejado en el ayuntamiento porteño: entre 1690 y 1726, casi tres cuartas partes de los cabildantes que habían nacido en la península resultaron oriundos del País Vasco, Navarra, Galicia, Asturias, León y Castilla la Vieja. Dicho en porcentajes: el 35,4% de los peninsulares que detentaron cargos concejiles –nos referimos aquí tanto a cargos venales como a los electivos– eran vascuences y navarros, mientras que otro 37,5% era originario del centro y el norte del reino de Castilla. El 27,1% restante se componía de andaluces, canarios, aragoneses y portugueses naturalizados.

Ahora bien, la presencia de los peninsulares en el ayuntamiento no se mostró pareja a lo largo del período estudiado. Al examinar cómo se hallaron representados en los distintos empleos concejiles entre 1690 y 1726, nos encontramos con que el porcentaje de cabildantes procedentes de la península fue del 26,4%. No obstante, al tratarse de los cargos más honorables, ocuparon un lugar más destacado. Fueron peninsulares el 39,3% de quienes desempeñaron los oficios electivos mayores (recordemos que este grupo de oficios comprendía a las alcaldías ordinarias y la procuradurías) y el 37,1% de quienes ejercieron oficios venales (regidurías, alferecías reales, alguacilazgos mayores y alcaldías provinciales). ¿Por qué se le dio tal cabida a un sector claramente minoritario como éste? Las explicaciones pueden ser muchas: pudieron haber influido los estrechos vínculos que mantenían con otros peninsulares bien posicionados en las tramas de poder –como lo eran los empleados de la Real Hacienda, la plana mayor del Presidio o el mismo gobernador–, los lazos de alianza que los unieron a la élite criolla –alrededor de la mitad de ellos estaban casados con las hijas de otros cabildantes– o el prestigio personal que habían ganado gracias a sus carreras mercantil o militar.

Si analizamos la trayectoria de los cabildantes oriundos de la península a lo largo de esos años, nos hallaremos con que existieron breves períodos en que llegaron a concentrar un número mayor de cargos concejiles en sus manos que los criollos. En el Gráfico N° 15 puede apreciarse, en efecto, que entre mediados del gobierno de Velasco y comienzos del gobierno de Zavala, hubo años en que los cabildantes de origen peninsular superaron en número a estos.

Gráfico 15 – Porcentaje de porteños y peninsulares en el cabildo porteño (1690-1726)



Fuente de los datos: AECBA (varios tomos); "Aportes biogenealógicos" de Fernández Burzaco (6 tomos); "Diccionario Biográfico" de Raúl Molina; Revista Genealogía (varios tomos)

Nuestro conocimiento de la historia política del período nos permite hacer una lectura más completa de este último Gráfico. Lo primero que puede observarse es que entre 1690 y 1708, los criollos preponderaron claramente. En 1702, el incremento de los empleos concejiles les permitió afirmarse, ya que cuando el gobernador Prado Maldonado dio la orden de subastar seis regidurías y otros oficios venales, el clan vernáculo de los Samartín, liderado por Joseph de Arregui, se apropió de una parte de ellos, mientras que el resto pasó a manos de miembros de antiguas y prestigiosas familias locales como los Gaete y los Rivera Mondragón. Pero en 1708, durante el gobierno de Velasco y Tejada, la relación de fuerzas se invirtió, ya que éste expulsó a los anteriores de sus puestos y colocó en ellos a los integrantes de su camarilla. Estos últimos eran, en parte, militares retirados de origen peninsular, a quienes la falta de alianzas con las principales parentelas locales había dejado hasta entonces al margen de las tramas de poder.

El pesquisidor Mutiloa, tras poner en prisión a Velasco, repuso en 1712 a las parentelas locales en los empleos concejiles, en particular en los de carácter venal, que ordenó devolver a sus antiguos propietarios. Pero en 1714, cuando el ayuntamiento recibió de la corona la facultad de ofrecer en subasta nuevas regidurías, los peninsulares sacaron ventaja de ello y superaron por un breve lapso a los criollos. Con la llegada de Bruno Mauricio de Zavala al gobierno, empero, las parentelas locales recuperaron ese nicho de poder. Su predominio en el ayuntamiento no se vio interrumpido hasta que Antonio de Larrazábal, lugarteniente de dicho gobernador, expulsó en 1724 a parte de los regidores, como respuesta a los duros cuestionamientos que recibió de una facción de los cabildantes. Es posible percibir, en conclusión, un evidente contraste entre la intervención de Mutiloa –inclinado a devolver a la oligarquía criolla su posición dominante en el ayuntamiento– y la de Larrazábal –que dejaría afuera de éste a buena parte de los criollos–.

La inserción familiar vista desde el conjunto de los oficios concejiles

Entre la segunda década del siglo XVII y hasta la primera del XVIII, los regidores tuvieron una presencia inconstante en el ayuntamiento porteño. No obstante ello, el comportamiento exhibido por estos en relación con los vínculos de parentesco y las alianzas facciosas ha sido considerado con frecuencia como representativo de un conjunto más amplio –y poco conocido– de oficiales concejiles. La historiografía no ha hecho sino enfatizar la vinculación que habría existido en Buenos Aires entre la venta de regidurías y el encumbramiento de determinadas parentelas. Esta postura la encontramos, por ejemplo, en un conocido artículo de Zacarías Moutoukias, en el que éste se propone recalcar la relevancia de los lazos de sangre, alianza y lealtad personal, que habrían servido a las familias de la oligarquía local no sólo para consolidarse como grupo sino también para controlar los asuntos comunales y la explotación de los recursos disponibles. Para ejemplificar el papel fundamental que cupo a la venta de oficios como articulador de esa configuración, este autor recurrió a la figura de Juan de Vergara, natural de Sevilla, quien se avecindó en Buenos Aires en los primeros años del siglo XVII y en 1609 fue nombrado teniente de gobernador. Pocos años más tarde, éste visitó Potosí y allí compró a la Real Hacienda seis regidurías para distribuir las entre sus parientes y aliados. Esos escaños en el cabildo porteño habrían cumplido la función de brindar un soporte institucional a una red de vínculos mucho más amplia que se

extendía de uno y otro lado del Atlántico, por intermedio de la cual se canalizaron las operaciones comerciales de sus integrantes, en su gran mayoría ilícitas.⁵⁷¹

El ejemplo de Juan de Vergara ha sido citado repetidas veces para ilustrar la concentración de cargos en el seno de una parentela local. En su conocido libro sobre *Hernandarias*, Raúl Molina fue el primero en destacar la “vigorosa personalidad” de Vergara y las provechosas vinculaciones que sostuvo con otros miembros de la élite porteña.⁵⁷² Jorge Gelman consideró a la trama faccioso-parental centrada en este sevillano el caso más significativo de un grupo de vecinos que logró controlar las magistraturas locales con la finalidad de asegurar el éxito de sus emprendimientos comerciales. Para dominar el ayuntamiento porteño, explica este autor, Vergara se había reservado una regiduría para sí y asignó las otras cinco a su suegro Diego Trigueros, sus cuñados Tomás Rosendo y Juan Gutiérrez Barragán, su socio portugués Francisco de Melo y su ahijado Juan Bautista Ángel.⁵⁷³

No es nuestro propósito poner en discusión el lugar que ocupó Vergara en las tramas de poder. Es innegable que éste y sus allegados inmediatos lograron apoderarse del manejo de la corporación, pero el tiempo en que ocuparon sus empleos fue relativamente breve y no consiguieron legarlos a sus descendientes. Gelman ha demostrado que, contabilizando empleos venales y electivos, llegaron a sumar 73 escaños anuales en el cabildo.⁵⁷⁴ Pero a pesar de esa impresionante acumulación de cargos, se vieron obligados a sortear una serie de contingencias que los desestabilizó como facción. A comienzos de la década de 1620 gozaron de las complacencias del gobernador Diego de Góngora, pero a fines de la misma se enfrentaron con quien sucedió a éste, Francisco de Céspedes, quien los desalojó de sus puestos e incluso llegó a encarcelar a algunos de ellos. En enero de 1629, éste expulsó a Juan Bautista Ángel haciendo exhibición de una real provisión que prohibía que fuesen admitidos en los oficios las personas que tuviesen deudas con la Real Hacienda. Entre tanto, Juan de Vergara, Juan Gutiérrez Barragán y otros tres oficiales venales habían sido detenidos y puestos a disposición de la Real Audiencia de Chuquisaca.⁵⁷⁵ Tan sólo dos de los seis regidores que representaban a esta facción, los referidos Vergara y Gutiérrez Barragán,

⁵⁷¹ Zacarías MOUTOUKIAS “Gobierno y sociedad en el Tucumán y Río de la Plata, 1550-1800” en Enrique TANDETER (comp.) *Nueva Historia Argentina* Sudamericana, Buenos Aires, 2000, Tomo 2, Págs. 376-379.

⁵⁷² Raúl MOLINA *Hernandarias, el hijo de la tierra* Buenos Aires Lancestremere, 1948, Págs. 194 y ss.

⁵⁷³ Jorge GELMAN “Cabildo y élite local...” Págs. 11-12.

⁵⁷⁴ *Ibidem*.

⁵⁷⁵ AECBA Tomo VII, Libro IV, Págs. 7 y ss. y 35

lograrían conservar sus escaños en el ayuntamiento, aunque el primero de ellos se vio sometido a las vejaciones de tres gobernadores y obligado a abandonar la ciudad en varias oportunidades, la última de las cuales acaeció en 1648, cuando fue desterrado a Mendoza por Jacinto de Laris. Si hubo algo que caracterizó a los empleos venales en Buenos Aires con anterioridad a 1714 fue su escasa estabilidad, que al parecer estaba fuertemente condicionada por la empatía o la animadversión que generaban en el gobernador de turno.

Menos conocida que la anterior fue la camada de oficiales venales que se recibieron de sus empleos en tiempos de la primera Real Audiencia de Buenos Aires. Contamos con noticias sobre sus antecedentes familiares y personales provenientes de la “*Relación de todos los vecinos que había en la ciudad y jurisdicción de Buenos Aires con expresión de sus naturalezas y familia*”.⁵⁷⁶ Esta pieza documental, comúnmente identificada como *Padrón de Vecinos* de 1664, menciona a ocho regidores, todos ellos criollos, de los cuales siete eran naturales de Buenos Aires y el restante de Córdoba. Los rasgos que definieron a la dirigencia concejil entre 1635 y 1705, tal como los hemos expuesto, se muestran aquí con toda claridad: por un lado, aparecen tupidos vínculos de parentesco que unían a estos regidores entre sí; por otro, se aprecia la inserción de los hijos de los portugueses en el grupo dirigente. Cuatro de dichos regidores estaban emparentados con Mateo Leal de Ayala, un acaudalado oficial de la Real Hacienda de los tiempos de Hernandarias: Cristóbal Ximénez era su yerno, Joseph Guerrero y Sebastián Cabral de Ayala eran sus nietos y Agustín Gayoso era el esposo de una de sus nietas. El referido Cabral de Ayala, descendiente de portugueses, era por su parte el cuñado de otros dos regidores: Juan Fernández Guillén, hijo de un portugués, y Manuel Ferreira de Aguiar. Pero aunque estos parentescos ponen en evidencia la existencia de un sólido armazón de lazos personales, el mismo no parece haber resultado lo suficientemente consistente como para garantizar su permanencia en las regidurías. Tres años más tarde, sólo Gayoso y Fernández Guillén se conservaban en sus puestos y el resto de las regidurías era ocupado por otros vecinos, pero en la década de 1680 habían quedado casi todas vacantes.

Tras revisar la permanencia de los oficiales venales en el cabildo porteño a lo largo del siglo XVII, las conclusiones a las que arribamos se asemejan bastante a las que

⁵⁷⁶ Las dos versiones que hoy se conservan de este Padrón –una más extensa y otra más breve– han sido transcritas por Jorge LIMA GONZALEZ BONORINO y Hernán Carlos LUX WURM **Colección de documentos sobre los conquistadores y pobladores del Río de la Plata** Instituto Histórico de San Isidro, 2001, Págs. 243-279.

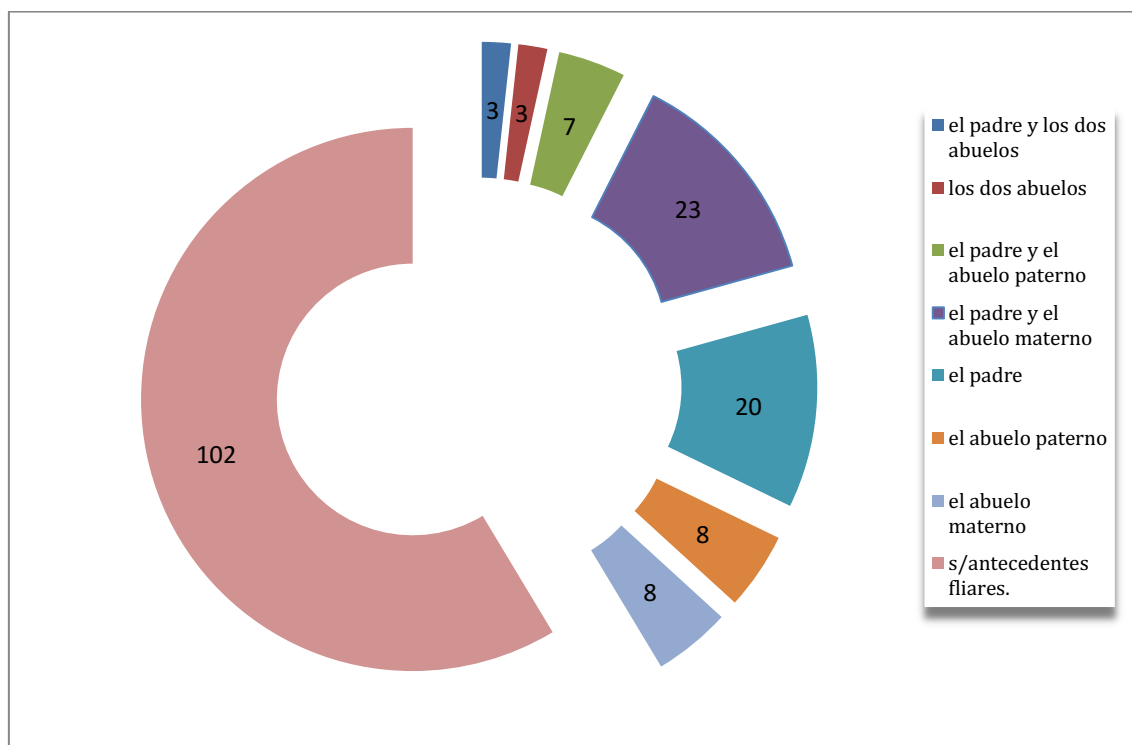
expusimos al examinar la continuidad de determinadas familias en el desempeño de los oficios electivos. Las parentelas influyentes pudieron hacer despliegue de sus vínculos tanto para ocupar los empleos electivos en forma esporádica como para apoderarse de los empleos venales, pero el traspaso de los mismos a los miembros de las nuevas generaciones se observó contadas veces. Imposibilitadas de permanecer en los grupos dirigentes durante lapsos demasiado extensos, sus estrategias estaban más bien dirigidas a aprovecharse de una coyuntura favorable para colocar a alguno de sus miembros en el gobierno comunal. Pero el cambio de una coyuntura por otra –por ejemplo, luego del arribo de un nuevo gobernador– podía ser suficiente para desbaratar los continuados esfuerzos hechos por una familia o una facción para mantenerse en la cumbre y provocar que fueran desplazadas por otras. El reducido número de escaños que podían ocupar en el cabildo obligó a esas parentelas a alternarse en los empleos concejiles y a competir por ellos.

Ahora bien, ¿puede decirse lo mismo de la etapa inmediatamente posterior, coincidente con los tiempos del recambio dinástico? Para responder a esta cuestión hemos analizado los orígenes familiares de los 174 vecinos que detentaron cargos concejiles venales y electivos entre 1690 y 1726, recuperando en la manera de lo posible sus antecedentes hasta los tiempos de la fundación de la ciudad. Más de la mitad de ellos (un total de 102 individuos, que representan el 59% de la muestra) fueron verdaderos *homini novi*, ninguno de cuyos antepasados había ejercido cargos en el cabildo. No necesariamente tenía que tratarse de sujetos que se habían afincado en forma reciente en Buenos Aires, sino que podía darse el caso de miembros de familias antiguamente establecidas que habían quedado hasta entonces marginadas de las tramas de poder. No obstante, en este caso se sintió con fuerza el impacto de la integración de los migrantes que habían llegado de la península en las décadas precedentes, arribados en gran parte como soldados de leva, pues estos se constituyeron en alrededor de la mitad de esos cabildantes de nuevo cuño. La incorporación de sectores emergentes, entre quienes se destacaban los oficiales del Presidio, debe ser visto como un factor que provocaría una aceleración en el proceso de rotación de los integrantes del sector dirigente.

No obstante esa renovación en la dirigencia concejil, también se aprecia la supervivencia de algunas familias que ya estaban ligadas con el gobierno municipal desde hacía dos o más décadas. En el Gráfico N° 16 hemos sistematizado los antecedentes familiares de nuestros 174 cabildantes. Es importante remarcar que poco

menos de un tercio de estos (el 30,5%) era hijo de otro capitular, mientras que un porcentaje similar (29,9%) era nieto de capitulares por línea materna, por línea paterna o por ambas.

Gráfico 16 –Antecedentes familiares en el ejercicio de empleos concejiles (1690-1726)



Fuente de los datos: AECBA (varios tomos); "Aportes biogenealógicos" de Fernández Burzaco (6 tomos); "Diccionario Biográfico" de Molina; Revista Genealogía (varios tomos)

Estas cifras no hacen sino reforzar la idea antes expresada: frente al ascenso de los individuos recientemente afincados en la ciudad, los linajes de antiguo arraigo fueron espaciando su presencia en el gobierno municipal. De los 174 individuos que integran nuestra muestra, sólo tres podían afirmar que su padre y sus dos abuelos habían sido también cabildantes. Dos de ellos pertenecían a la familia Gaete, cuya larga trayectoria en el ayuntamiento es merecedora de un comentario. El fundador de la misma fue el opulento vecino Gaspar de Gaete, personaje destacado de la primera mitad del siglo XVII, que había servido como sargento en los destacamentos de Flandes pero luego pasaría a América respondiendo al llamamiento de sus parientes aquí establecidos. Residió primero en Potosí y luego bajó a Buenos Aires, donde fue alcalde ordinario en

cuatro oportunidades y teniente de gobernador. Uno de los hijos de éste, Pedro de Izarra Gaete, y dos de sus yernos ejercerían asimismo oficios de honra en el ayuntamiento porteño. La familia siguió ocupando posiciones de prestigio durante una tercera generación: Baltasar de Gaete, hijo de Pedro, se desempeñó como regidor durante el primer lustro del siglo XVIII, mientras que su hermano Gerónimo, que fue alcalde ordinario en 1701 y 1705, fue designado teniente de gobernador cuando Valdés Inclán emprendió la toma de la Colonia de Sacramento. También fue cabildante Pascual de Torres Salazar, cuñado de estos por su casamiento con Francisca de Gaete, quien fue elegido alcalde ordinario en 1706 y procurador en 1707. La cuarta generación quedaría, empero, excluida de la sala del concejo y sólo uno de sus miembros, Francisco de Gaete, uno de los hijos de Gerónimo, ejercería un oficio menor, el de alcalde de la Hermandad. Es un claro ejemplo de cómo el empuje de nuevas familias poderosas acarrearía, a la larga, el desplazamiento de antiguos linajes como éste.

Descender de fundadores, descender de portugueses

Caracterizada desde sus inicios por la ausencia casi absoluta de dignidades nobiliarias, la ciudad de Buenos Aires tampoco vio consolidarse a una cerrada estirpe de *beneméritos* —esto es, de descendientes de los conquistadores de la región— que monopolizara cargos y prebendas y mantuviera su cohesión por medio de una rigurosa endogamia. Nos hallamos, por el contrario, ante una oligarquía local dotada de una receptividad selectiva, acentuada por la llegada periódica de militares que engrosaban la guarnición del Presidio, cuya plana mayor no desdeñaba vincularse a los grupos locales de poder por medio del matrimonio, favoreciendo de esa forma la conformación de redes familiares con una marcada orientación cognaticia.⁵⁷⁷ Una memoria genealógica de corto alcance, propia de una élite cuyos méritos no excedían la breve historia de una ciudad que tenía poco más de un siglo, se contraponía a una prodiga red de conexiones horizontales, donde la profusión de lazos de afinidad y colateralidad compensaba la ausencia de poderosos linajes de antiguo arraigo.

Varios son los motivos que explican que no se hubiese cristalizado una casta de *beneméritos* en la sociedad porteña. La escasez de indios que pudiesen ser entregados en

⁵⁷⁷ Entendemos por *cognaticio* a aquel grupo de filiación en que tanto varones como mujeres resultan hábiles para la reproducción del mismo. Puede consultarse para la definición de este concepto a Robin FOX **Sistemas de parentesco y matrimonio** Alianza, Madrid, 1985, Págs. 135-139.

encomienda y la posibilidad de adquirir la propiedad de la tierra por medio de la compra terminaron por convertir a la *merced real* (un mecanismo de reparto que daba prioridad a los descendientes de los antiguos pobladores) en un recurso de utilización relativamente restringida. Tampoco los linajes más antiguos detentaban ya el monopolio de las *acciones para vaquear*, que les daban derecho a usufructuar el ganado cimarrón, ya que buena parte de éstas había pasado por compra o por matrimonio a manos de otras familias más recientemente establecidas. De todos modos, existían aún prerrogativas de orden local que, aunque mostraban signos de vetustez, beneficiaban a los descendientes de las viejas familias colonizadoras. Todavía a principios del siglo XVIII, aquellos que descendían de los *vecinos conquistadores* podían recurrir la alusión de sus ancestros con la finalidad de que se les diera preferencia en el acceso a un cargo en el cabildo. En una disputa surgida en una subasta de oficios concejiles en 1710, Tomás de Arroyo y Domingo de Oliva solicitaron que se les reconociera prioridad para ejercerlos por tratarse de “*descendientes de los conquistadores y pobladores*” de la ciudad.⁵⁷⁸

Desde la primera mitad del siglo XVII, desde que el número de vecinos comenzó a acrecentarse con la llegada de migrantes de Castilla y Portugal, esas prerrogativas no se adquirían solamente por descender en forma directa de los conquistadores, sino también por sostener vínculos de afinidad con quienes descendían de estos. En 1706 el capitán Francisco de Rocha, que pretendía que le fueran encomendados catorce indios de nación *caguané* con sus caciques, añadió en su informe de méritos (que incluía su propia foja de servicios como militar y las de sus hijos) la circunstancia de estar casado con doña Catalina Gutiérrez de Carbajal, “*nieta de los pobladores*”.⁵⁷⁹ También Sebastián Delgado –que llegó a Buenos Aires en 1680 con la leva de Miluti pero hizo una extensa carrera en los oficios concejiles, empezando como mayordomo y terminando como regidor– se juzgó en 1715 merecedor de un cargo en la Real Hacienda por sus servicios a la corona y por “*estar casado con nieta de los pobladores de esta ciudad*”.⁵⁸⁰ En realidad, si estudiáramos detalladamente las genealogías de las familias más prominentes, no sería raro encontrar que se hallaban entroncadas por línea femenina con los linajes más antiguos de la ciudad. Esto revela que por medio de una política de matrimonios que ya llevaba varias décadas se había logrado que los beneficios que originariamente estaban reservados a los descendientes de los fundadores circularan en

⁵⁷⁸ AGN IX-41-1-4, Pablo González de la Cuadra sobre nulidad de remate.

⁵⁷⁹ AGN IX-42-2-7, Autos sobre la pertenencia de diferentes indios.

⁵⁸⁰ AGN IX-40-7-5, Sebastián Delgado contra Faustino de Larrea.

un espacio social más amplio. De esa manera se había contribuido a neutralizar a las familias *beneméritas* como grupo de poder, desdibujándolas como sector diferenciado en el espectro sociopolítico local.

Si en ese proceso de renovación de los sectores dirigentes nos situamos en momentos del recambio dinástico, nos hallaremos con que los descendientes de los fundadores de la ciudad ya habían sido desplazados hacía tiempo de su lugar de privilegio. Entre 1690 y 1726, tan sólo el 11,5% de los cabildantes podía presumir de descender de los primeros colonizadores de la región. Las líneas masculinas de las familias fundadoras se habían extinguido casi por completo, por lo que las ramas subsistentes se entroncaban con los linajes originarios por línea materna. Aunque eran conscientes de su prosapia y llegaron a hacerla valer para obtener favores de los gobernadores o de la misma corona, cada vez eran menos los vecinos que podían declamar un pasado familiar que se remontara a los orígenes de Buenos Aires, y pronto la invocación de ese antecedente iría perdiendo crédito frente a otros valores mucho más difundidos y mejor aceptados socialmente, como lo eran los méritos militares.

Un lugar no desdeñable en las tramas de poder lo seguían ocupando, en cambio, las parentelas de origen portugués. Recordemos que durante la segunda mitad del siglo XVII, los grupos dirigentes se habían mostrado poco permeables al ingreso de foráneos en sus filas, pero habían acogido en ellas, en cambio, a los miembros de las familias luso-criollas. Entre 1690 y 1726, todavía el 25,9% de los oficiales concejiles descendía de portugueses en primera, segunda o tercera generación. Los luso-criollos se vieron ante la incómoda situación de proceder de una nación hostil a España y se sintieron obligados a ofrecer muestras de lealtad al monarca castellano. Diego López Camelo, que fue alcalde ordinario en 1711 y procurador del cabildo en 1712, dio ejemplo de ello cuando proclamó que su padre, proveniente de Oporto, siempre había sido fiel a los reyes de España. “*Sin embargo de ser de nación lusitana –expresó– el capitán Diego López Camelo, mi legítimo padre, vino a avecindarse a esta dicha ciudad con expresa licencia de Su Majestad estando el reino de Portugal debajo del dominio y obediencia suya, y en esta República tuvo la estimación y crédito de hidalgo y noble, y en todas las ocasiones que se ofrecieron del Real Servicio acudió y sirvió con prontitud y obediencia como leal vasallo de Su Majestad y buen soldado con armas, caballos, criados y todo lustre de su persona, a su costa y mención*”. Al igual que su padre, el alcalde López Camelo demostró su lealtad a la corona a través de prestaciones militares. En su juventud había participado de las malocas contra los indios serranos y pampas como

teniente de caballería, en ocasión a lo cual fue puesto al frente de 150 milicianos y de una partida de mulatos e indios amigos. En 1680 estuvo presente en la toma de Colonia del Sacramento y seis años más tarde fue ascendido a capitán de la compañía de lanzas ligeras españolas. De acuerdo a lo que declaró uno de sus comandantes, se mantuvo *“siempre con crédito y aplauso de buen soldado, vigilante, puntual y obediente en todo lo que por sus superiores y oficiales le era dispuesto y mandado”*.⁵⁸¹

Una de las características más remarcables de las familias más destacadas del sector luso-criollo fue su tendencia a las uniones endogámicas: gracias a ello, sus miembros se mantuvieron emparentados entre sí hasta comienzos del siglo XVIII. De acuerdo a lo que ha podido detectarse, la mayor parte de los cabildantes de ese origen tenía como ascendientes a seis migrantes portugueses arribados a Buenos Aires en una fase bastante temprana, el primero de ellos en 1598 y el último en 1627. Se trató de Antonio González de Acosta, Amador Báez de Alpoin, Melchor Maciel del Águila, Diego López Camelo, Cristóbal Rodríguez Pazos y Nuño Fernández Lobo, que en las primeras décadas del siglo XVII fueron destacados personajes del comercio local, además de propietarios de inmuebles urbanos y de esclavos y, en algunos casos, de tierras de chacra y estancia que les fueron entregadas en merced por los gobernadores. Aunque el decreto de expulsión de Felipe IV los afectó en forma directa, consiguieron mantenerse en la ciudad en razón a tener “casa poblada”, esposa e hijos en ella, y su descendencia no sólo logró extenderse a lo largo de las generaciones siguientes sino también estar representada en el gobierno comunal.

Acaso el linaje luso-criollo más influyente entre la segunda mitad del siglo XVII y comienzos del XVIII haya sido el de los Báez de Alpoin. Este llegó a detentar los más altos cargos militares locales y los asientos más honorables en el cabildo. El fundador del mismo fue Amador Báez de Alpoin, natural de las Azores, que en 1596 había abandonado la isla de Santa María de las Terceras para pasar junto con su familia al Brasil, pero tres años más tarde arribó a Buenos Aires en la comitiva del gobernador Diego Valdés de la Banda.⁵⁸² En la siguiente generación la familia se dispersó por las

⁵⁸¹ IX-41-4-5 *Autos de vacantes de los indios tubichaminís que se dieron al capitán Diego López Camelo (1680)*.

⁵⁸² Para las conexiones genealógicas de la familia Báez de Alpoin hemos recurrido a Hjalmar Edmundo GAMMALSSON **Los pobladores de Buenos Aires y su descendencia** Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, 1980, Págs. 45 y 187-189; Ricardo de LAFUENTE MACHAIN **Los portugueses en Buenos Aires** Librería Cervantes, Buenos Aires, 1931, Pág. 125; Boleslao LEWIN “Los portugueses en Buenos Aires en el período colonial” en las **Actas del VI Congreso Internacional de Historia de América** Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1982, tomo IV, Págs. 47-62; Raúl MOLINA **Diccionario Biográfico de Buenos Aires...** Págs. 87-88.

ciudades del Litoral y se emparentó con otras oligarquías municipales, mientras que una rama de la misma permaneció en el puerto. Uno de los hijos de Amador, Manuel Cabral de Alpoin, fue alcalde de la Hermandad en Buenos Aires pero luego se avecindó en Corrientes, donde llegó a ser teniente de gobernador. Otros integrantes de la misma se afincaron en Santa Fe, donde en 1687 se enfrentarían en una lucha de facciones con otras familias allí establecidas.⁵⁸³

La rama de la familia que permaneció en Buenos Aires se insertó en las tramas relacionales locales cuando Amador Báez de Alpoin, hijo del portugués homónimo, casó con Ana Romero de Santa Cruz, nieta de un expedicionario de Pedro de Mendoza, y su hermano Juan Cabral de Melo desposó a Inés Leal, hija del influyente vecino Mateo Leal de Ayala.⁵⁸⁴ Este segundo Amador fue el primero de la familia en ejercer oficios concejiles: en 1629 fue alcalde de la Hermandad y al año siguiente alférez real electivo. Ambos hermanos adquirieron por compra los títulos de regidor, pero los mismos no les fueron aceptados por el ayuntamiento, que pretextó para rechazarlos la existencia de vicios legales. Los miembros de la siguiente generación continuaron ocupando escaños en el cabildo: Juan Báez de Alpoin, el hijo mayor del primero, fue alcalde ordinario y alférez real electivo en 1667, mientras que Sebastián Cabral de Ayala, hijo del segundo, se desempeñaría como alcalde ordinario en 1674 y como procurador en 1700.

Sería uno de los nietos del fundador de la familia, el recién nombrado Juan Báez de Alpoin, quien conduciría al clan a su apogeo, asumiendo un rol patriarcal en el manejo de los asuntos familiares a lo largo de casi dos décadas. Este tuvo una estrecha relación con el general Miguel de Riblos, esposo de una de sus primas, quien es sin lugar a dudas el personaje mejor estudiado del Buenos Aires de comienzos del siglo XVIII: natural de Tudela en Navarra, había llegado al Río de la Plata con plaza de soldado y se había emparentado con esta familia en 1673, al unirse en matrimonio a Gregoria Silveyra Gouvea, hija del mercader portugués Antonio Silveyra Gouvea y de Isabel Cabral Báez de Alpoin.⁵⁸⁵ Tanto Báez de Alpoin como Riblos formaron parte de la camarilla que

⁵⁸³ Miguel de Riblos, a quien el gobernador Herrera y Sotomayor nombró lugarteniente de Santa Fe con el encargo de terminar en ella con la lucha entre facciones, se excusaría de ejercer el cargo debido al parentesco que su esposa Gregoria Silveyra Gouvea, que era una Báez de Alpoin por parte de madre, tenía con el cabecilla de uno de los bandos en pugna; AGN IX-42-2-7, *Miguel de Riblos contra Jorge Hays*.

⁵⁸⁴ Ana Romero de Santa Cruz era, en efecto, nieta de Bartolomé González, hidalgo nacido en León, que según Lafuente Machain fue primero compañero de Pedro de Mendoza y luego de Alvar Núñez Cabeza de Vaca; Ricardo LAFUENTE MACHAIN **Conquistadores del Río de la Plata** tomo I, Pág. 247.

⁵⁸⁵ Raúl A. MOLINA "Miguel de Riblos. El hombre que llenó medio siglo de Buenos Aires y su

rodeaba al gobernador Agustín de Robles, quien ofreció a ambos el más alto cargo de que se disponía en la oficialidad del Presidio, el de *cabo y gobernador de la caballería*, una suerte de comisariato militar que ejercieron uno después del otro. Ambos administraron, además, los almacenes que surtían de alimentos y de vestuario a los soldados de la guarnición, que era sin duda la prebenda más redituable en Buenos Aires, reservada al hombre de confianza del gobernador de turno, el primero en la década de 1680 y el segundo en la de 1690.

La buena estrella de los Báez de Alpoin declinó cuando Agustín de Robles debió ceder el mando a su sucesor, Manuel de Prado y Maldonado. A este último tocó celebrar en Buenos Aires la entronización de Felipe V. Al parecer, Riblos no era partidario de la nueva dinastía y durante las fiestas de la coronación de este rey, oficiadas en febrero de 1702, se mostró “*inquieto y revoltoso*” y desobedeció las órdenes del gobernador, lo que le valió una orden de detención, que eludió refugiándose en la iglesia catedral. Báez de Alpoin también fue visto con recelo por la flamante burocracia borbónica y en octubre de 1701 la Junta de Guerra de Indias solicitó al monarca que se lo exonerara del cargo de cabo y gobernador de la caballería de Buenos Aires, acusado de “*ser portugués, inexperto en la milicia y oponerse a órdenes*”.⁵⁸⁶ La situación tuvo para él una salida honrosa, ya que si bien se lo desvinculó del cargo, se le asignó la capitanía de uno de los regimientos de la ciudad. Pero resulta revelador que en un momento en que las relaciones hispano-portuguesas atravesaban un momento de tensión, se remarcara la ascendencia lusitana de este criollo de segunda generación como un obstáculo para formar parte de la plana mayor porteña. Para los Báez de Alpoin, más de un siglo de residencia en la ciudad no había resultado el tiempo suficiente para que se los asimilara por completo a la condición de vecinos españoles.

Al examinar el comportamiento de los patriarcas en relación a los demás integrantes del clan han quedado en evidencia dos estrategias ostensibles: la utilización de las mujeres de la parentela para la instrumentación de alianzas con algunos de los personajes de mayor preeminencia de la ciudad –como la alta oficialidad del Presidio, los oficiales de la Real Hacienda y los oficiales concejiles– y el sostén que ofrecieron a

biblioteca histórica” en **Revista Historia** n°11, Buenos Aires, 1958; Carlos M. BIROCCO “Historia de un latifundio bonaerense: las estancias de Riblos en Areco, 1713-1813” en **Anuario de Estudios Americanos** Consejo Superior de Investigaciones científicas, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1996, tomo LIII, n° 1; Carlos M. BIROCCO “Los vascos en los antiguos curatos de Areco y la Cañada de la Cruz” en José MARILUZ URQUIJO, César GARCIA BELSUNCE y otros **Los vascos en Buenos Aires, 1713-1810. Ciudad y campaña** Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay, Buenos Aires, 2001.

⁵⁸⁶ ME Carpetta H n°12, *La Junta de Guerra de Indias al rey*.

sus parientes más pobres a cambio de contraprestaciones u otros beneficios. En referencia a lo primero, la utilidad de un matrimonio ventajoso era doble: por un lado, en razón al “capital” de vínculos que éste aportaba; por otro, debido a la posibilidad que ofrecía de exhibir ante las autoridades locales, usualmente desconfiadas de los portugueses, voluntad de arraigo y respeto por las pautas de asentamiento sostenidas por la corona.⁵⁸⁷ Es un hecho destacable que cuatro oficiales de la Real Hacienda estuvieran vinculados con Juan Báez de Alpoin por medio de alianzas matrimoniales. Uno de ellos fue Miguel de Castellanos, esposo de su prima Francisca Enríquez de Santa Cruz, quien se desempeñó como contador y fiscal de las Reales Cajas en el Río de la Plata y Paraguay hasta enero de 1711. Fueron asimismo oficiales reales tres de los yernos de Báez de Alpoin, Pedro de Guezala, Diego de Sorarte y Alonso de Arce y Arcos: el primero de ellos se desempeñó como tesorero de la Real Hacienda desde junio de 1703 hasta junio de 1707, el segundo asumió la contaduría de las Reales Cajas cuando Castellanos se jubiló del cargo y el tercero ocupó ese mismo cargo a partir de 1715. Quedó en evidencia que esta política de alianzas era considerada provechosa por el clan en su conjunto cuando se concertó el enlace entre Sorarte y Juana Báez de Alpoin en 1703. Este recibió de su suegro una rica dote valuada en 10.900 pesos, de los cuales 3000 fueron sustanciados en plata, a los que el general Miguel de Riblos y su esposa Gregoria Silveyra Gouvea aportaron otros 1382 pesos en su calidad de “*tíos y padrinos*” de Juana.⁵⁸⁸

El segundo aspecto remarcable fue, según dijimos, la asistencia que brindó el clan a sus miembros menos favorecidos, que sirvió para reforzar los vínculos de verticalidad en el interior de esa extensa parentela. Tanto Miguel de Riblos como Juan Báez de Alpoin asumieron a manos llenas la obligación, propia del patriarca, de socorrer a los parientes pobres. Refiriéndose a uno que había fallecido recientemente, Juan Ramón Machado, Riblos alegaba que le había tenido “*voluntad por [ser] pariente de mi mujer*”, y según se desprende de sus palabras (“*pendió siempre de mí, y que hice por el dicho todo cuanto pude mientras vivió así en atender a sus ascensos como a sus intereses*”) lo mantuvo hasta el momento mismo de su muerte.⁵⁸⁹ No obstante, esta relación parasitaria tenía una contraparte: Machado había sido alcalde de la Hermandad en 1694, por lo que puede presumirse que, como agente del cabildo, defendió los intereses del clan en el

⁵⁸⁷ Emir REITANO *La inmigración antes de la inmigración...* Págs. 164-165.

⁵⁸⁸ AGN IX-48-9-2, *Escribanías Antiguas*, f. 231.

⁵⁸⁹ AGN Sucesiones 7700, *Testamentaria de Juan Pereyra*, f. 42.

ámbito en que actuó. Báez de Alpoin, por su parte, corrió con el sustento de una de sus primas, Isabel de Enríquez, quien por su condición de *beata* llevaba una vida de recogimiento y oración. Esta reconocería en su testamento que su primo había “*socorrido y socorre mis necesidades y ha asistido en mis enfermedades y todo cuanto es necesario para mi alivio y acudido a todos mis negocios con toda puntualidad*”.⁵⁹⁰ También este vínculo era socialmente redituable debido al prestigio que otorgaba a la familia sostener a una mujer consagrada a una vida de piadosa devoción.

El clan Báez de Alpoin no superó la serie de contratiempos que se le presentaron luego de la pesquisa de Mutiloa. Guezala y Sorarte, los yernos de Juan Báez de Alpoin, fueron procesados por el pesquisidor a causa de su participación en el contrabando con los franceses, mientras que Riblos fue empujado por sus enemigos a la quiebra y debió refugiarse en el convento de los jesuitas para evitar ser conducido a prisión. A ello le siguieron la muerte de Báez de Alpoin en 1716 y la de Riblos tres años más tarde. No obstante, en los años que siguieron a estos decesos la parentela aún siguió representada en el cabildo a través de los esposos de las sobrinas de Juan Báez de Alpoin. Dos oficiales venales de comienzos de la década de 1720 –el regidor Miguel Gerónimo de Esparza y el alguacil mayor Francisco Díaz Cubas– estaban casados, en efecto, con dos de las biznietas de Amador, el fundador de este linaje.

El momento de mayor presencia del sector luso-criollo en la dirigencia concejil se produciría precisamente durante los primeros años del gobierno de Bruno Mauricio de Zabala, cuando cuatro miembros de las parentelas de origen portugués ocuparon escaños en el ayuntamiento. Amador Fernández de Agüero y Francisco Fernández Guillén –ambos regidores, el primero entre 1716 y 1722 y el segundo entre 1718 y 1722– eran nietos por línea masculina de Nuño Fernández Lobo, natural de la Extremadura portuguesa. Al revisar su ascendencia nos hallamos con que ambos eran enteramente portugueses, ya que también lo eran por línea materna. Miguel Rodríguez de Sosa –regidor entre 1718 y 1724– y Bernardino Rodríguez de Agüero –elegido varias veces mayordomo del cabildo entre 1720 y 1726– fueron nietos por línea masculina de Cristóbal Rodríguez Pazos, procedente de la villa Caminha en la región del Minho, y primos del referido Fernández Guillén por parte de la madre de éste. Como se ve, ninguno de ellos llevaba el mismo apellido que su abuelo migrante, sino que lo había

⁵⁹⁰ AGN RE N°2 1709-1712, f. 84

sustituido por los apellidos de su familia materna o combinado con estos, lo que no hizo sino resaltar su intención de disimular su origen lusitano.

La colateralidad en la conformación de las parentelas influyentes: el ejemplo de los Samartín-Gutiérrez de Paz

Hasta ahora nos hemos referido a los vínculos de afinidad como una estrategia utilizada por los sectores emergentes –en este caso, por los peninsulares afincados en la ciudad– para relacionarse las familias locales de mayor raigambre y así escalar socialmente. Pero todavía no se ha dicho nada del papel que cumplieron dichos vínculos para las parentelas locales más influyentes, las cuales se valieron de las alianzas matrimoniales para incorporar a individuos que podían resultarles útiles para consolidar su primacía o extender el radio de sus emprendimientos. Las nuevas parejas no pasaban a constituirse en una unidad autónoma, sino que daban origen a una rama más dentro del grupo de parentesco criollo y se subordinaban a los intereses de éste.⁵⁹¹

En las sociedades del Antiguo Régimen, se agrupaba bajo el rótulo de *parientes* tanto a aquellos que estaban vinculados por la sangre como por afinidad y se extendía, en un sentido más laxo, a quienes sostenían vínculos de domesticidad o de crianza. Estos lazos podían ser invocados por quienes ejercían la dirección de los asuntos familiares con el propósito de instrumentar alianzas matrimoniales ventajosas o con cualquier otra finalidad. Esto último era posible debido a una clara estructuración jerárquica en el interior de la familia, basada en una dimensión más o menos intensa de proximidad y afecto entre sus miembros y cimentada en la cooperación, el apoyo mutuo y los intercambios. Esa capacidad de movilizar las relaciones familiares, de acuerdo con Michel Bertrand, se observaba incluso cuando había cierto alejamiento geográfico entre los integrantes de la parentela, y por lo general se llevaba a cabo con un mínimo de esfuerzo y un rendimiento efectivo elevado.⁵⁹²

La instrumentación de alianzas matrimoniales no siempre estaba ligada a una trama vertical de vínculos, sino que gracias a ellas podía llegar a configurarse una red familiar en que existiera más de una cabeza visible. Ya hemos visto en el caso del clan luso-

⁵⁹¹ John E. KICZA **Empresarios coloniales...** Pág. 181.

⁵⁹² Michel BERTRAND “La élite colonial en la Nueva España en el siglo XVIII: un planteamiento en términos de redes sociales” en Bernd SCHRÖTER y Cristian BÜSCHGES **Beneméritos, aristócratas y empresarios. Identidades y estructuras sociales de las capas altas urbanas de América hispánica** Vervuert-Iberoamericana, Frankfurt, 1999, Pág. 45 y ss.

criollo de los Báez de Alpoin como el rol de patriarca era compartido por Juan Báez de Alpoin y por el esposo de una de las primas de éste, Miguel de Riblos. Eso también se observa en una parentela que tuvo una inmensa gravitación en la vida política de las primeras dos décadas del siglo XVIII: los Samartín-Gutiérrez de Paz. Nos encontramos inicialmente en este clan con la presencia de dos figuras patriarcales. Una es la de un criollo, el maestre de campo Juan de Samartín, individuo que contaba con preciosos antecedentes militares y políticos. En 1680 había comandado una expedición punitiva contra los indígenas, en la que ordenó la matanza de unos indios serranos y trajo a prisioneros a Buenos Aires unos doscientos prisioneros para repartir entre los vecinos. Al año siguiente fue elegido alcalde ordinario y en 1688 procurador del cabildo. Pero existía una segunda figura rectora dentro de esta extensa parentela, el capitán Antonio Guerreros. Este era oriundo de Portugal y había llegado en 1671 a Buenos Aires en una zumaca de su propiedad. Pronto el cabildo le extendió carta de vecindad, pues entre 1676 y 1679 le encomendó la mayordomía del Hospital de San Martín de Tours y fue elegido procurador en 1684 y alcalde ordinario en 1685, 1697 y 1702. Aunque su actividad como comerciante se inició a poco de llegado al puerto —el fechado de los primeros libros-abecedarios de su tienda, que se iniciaban en 1673— tardó largos años en tramitar el permiso del monarca para hacerlo. No fue hasta 1689 en que recibió el beneficio de una real cédula de Carlos II, confirmada por una provisión de la Real Audiencia de Chuquisaca, que le otorgaba licencia para que “*pueda tratar y comerciar en los reinos de las Indias sin embargo de ser portugués*”.⁵⁹³

En la década de 1690, este lusitano secundaría al general Miguel de Riblos, favorito del gobernador Agustín de Robles, en el reparto de *socorros* de ropas y alimentos a los soldados del Presidio, con motivo del crónico atraso en la llegada del pago.⁵⁹⁴ En 1697, Robles lo designó para ocupar el cargo político más destacado que estaba reservado a un vecino: el de teniente de gobernador. Fue así que se abrió paso para ocupar un lugar de preeminencia junto a otro gobernador del Río de la Plata, Alonso de Valdés Inclán, quien en 1702 le encargó el aprovisionamiento de las ocho compañías de la guarnición, obligadas a proveerse en su tienda mediante un sistema de vales canjeables. Pero este golpe de fortuna sería breve: una real cédula de Felipe V, obedecida en Buenos Aires en julio de 1705, dispuso una represalia contra todos los portugueses que residieran en sus posesiones americanas, a causa de lo cual los bienes

⁵⁹³ AGN IX-42-8-1, *Diversos procedimientos de represalia contra los portugueses*.

⁵⁹⁴ AGN Sucesiones 6249, *Testamentaria de Antonio Guerreros*.

de Guerreros fueron confiscados.

La caída en desgracia de Antonio Guerreros en 1705 y el deceso del maestre de campo Juan de Samartín en 1707, seguido de la muerte de aquel en 1709, favorecieron el ascenso de una nueva figura de poder dentro del clan: el alférez real Joseph de Arregui. Este, que era sobrino del referido Samartín, actuaría como cabecilla de la resistencia contra el gobernador Velasco y Tejada y se convertiría en el principal beneficiario de la intervención del pesquisidor Mutiloa. No obstante, aunque Guerreros no llegó a presenciar estos sucesos, es sin duda a él a quien el clan debía su cohesión interna. Varios de los vecinos que participaron activamente de las protestas contra el gobernador y que luego se movilizaron para aportar pruebas en su juicio de residencia ingresaron al clan de los Samartín entre fines del siglo XVII y los primeros años del XVIII gracias a que Guerreros facilitó su casamiento con las sobrinas de su esposa, a quienes proveyó de bienes dotales.

Antonio Guerreros y su esposa Ana de Samartín no tuvieron hijos, lo que permitió a este comerciante distraer una parte de su patrimonio para contribuir a la crianza de las jóvenes pertenecientes al clan y colocarlas con ventaja en el mercado matrimonial. “*En vida de mi primera esposa criamos y alimentamos en mi casa desde su niñez a dos sobrinas tuyas llamadas llamadas doña Antonia de Azócar y doña Gregoria Gutiérrez de Paz*”, aclara Guerreros en su testamento; a ambas, además, las dotó generosamente, la primera cuando casó con Joseph Martínez de Aberasturi y la segunda al unirse con Joseph Narriondo. Antonia recibió en esa ocasión 6500 pesos, mientras que Gregoria fue beneficiada con 6325 pesos, de los que 4000 eran en plata corriente y 320 en plata labrada.⁵⁹⁵

A dos hermanas de Antonia de Azócar, Dionisia y María, aunque no refiere haberlas criado las dotó con vestuario, cama y ajuar. Al esposo de la primera, Antonio Pereyra, le entregó además 1500 pesos en mercancías que compró a Francisco de Retana, capitán de un navío de registro, para que pasara al Tucumán a beneficiarlos. Cuando Pereyra murió, Dionisia de Azócar casó en segundas nupcias con Pedro Constanza y su tío volvió a dotarla con vestidos. En cuanto a María, cuando se unió a Andrés Gómez de la Quintana le concedió permiso para construir una casa en un solar de su propiedad. Como Gómez de la Quintana era capitán de una de las compañías del Presidio, Guerreros no sólo lo asistió prestándole “*más de seiscientos pesos para vestuario suyo y*

⁵⁹⁵ AGN IX-39-9-5, *Copia de la demanda que puso Joseph de Narriondo en la residencia de Valdés Inclán.*

de su familia”, sino que extendió el fiado a los soldados que estaban bajo su mando. Aunque en noviembre de 1704 llegó a Buenos Aires un situado, el mercader jamás recuperó las sumas que le insumiera la manutención de este militar, su familia y sus subordinados. En su testamento, dispuso que le fueran condonadas estas deudas: “*siempre le hemos procurado asistir y socorrer... mando que no se le cobre cosa alguna*”. También socorrió, por último, a una prima de las Azócar, Ana de Ruiloba, “*por haberle tenido el amor que a todas*”, cuando contrajo matrimonio con Gerónimo Gutiérrez de Escobar, aportando a la carta dotal 4576 pesos en bienes, ya que el cuñado de Ana, Joseph de Narriondo, sólo había podido dotarla en la suma de 1433 pesos.⁵⁹⁶

Gracias a las alianzas matrimoniales pergeñadas por Guerreros se lograría que el clan contara con representantes tanto en la cúpula del Presidio como en la sala del cabildo. Algunos de esos matrimonios añadieron también una proyección regional a su red de vínculos. Uno de los esposos de sus sobrinas, Gerónimo Gutiérrez de Escobar, hermano del gobernador del Paraguay, Antonio de Escobar. Otro, Joseph de Narriondo, era sobrino de Francisco de Narriondo y Oquendo, una de las máximas autoridades de la Real Hacienda y de la Casa de la Moneda de Potosí.

Guerreros no sólo solventó los matrimonios de las sobrinas de su esposa sino que también colaboró en sostener a los sobrinos varones de ésta. A Francisco y Juan Ignacio de Ruiloba los hubo “*asistido en lo que se les ha ofrecido*”, especialmente al último, a quien mantuvo mientras estudió en el colegio de Nuestra Señora de Montserrat, en Córdoba. Otro de los sobrinos, Joseph de Azócar, reconocería que aquel lo había “*criado y asistido como a hijo*”.⁵⁹⁷ Los miembros jóvenes del clan, de esta manera, contaban para hacer sus primeras armas en el comercio con el respaldo de uno de sus parientes acaudalados. Gracias a ello, Roque de Azócar pudo embarcarse a España y su primo Francisco Ruiloba emprender “*viaje a las provincias de Arriba, para que pudiese bandearse y buscar la vida por estar ya en edad de poderlo hacer*”.⁵⁹⁸

Aunque corresponde reconocer en Antonio Guerreros a quien por medio de alianzas matrimoniales llevó a cabo el reclutamiento que más tarde daría al clan una amplia base para enfrentar el poderío del gobernador Velasco, fue Joseph de Arregui el que alineó a sus integrantes tanto política como económicamente. Sus excursiones mercantiles al Alto Perú se sostuvieron tanto en el tráfico de negros como en el de ganado mular. En

⁵⁹⁶ AGN RE N°2 1707-1709, f. 128.

⁵⁹⁷ AGN IX-48-9-1, *Escribanías Antiguas*, f. 78; AGN IX-48-9-5, *Escribanías Antiguas*, fs. 68 y 240.

⁵⁹⁸ AGN IX-48-9-4, *Escribanías Antiguas*, f. 582.

1705 adquirió la mitad de los esclavos que el navío *Amphitrite* traía desde Angola, mientras que en 1709 compró una parte de los que trajo el navío *La Esphera*, que planeó vender en las provincias arribeñas, ya que en febrero de ese año preparaba su partida al Tucumán y el Perú. Paralelamente, en asociación con el maestro de campo Antonio de la Tijera, vecino de Jujuy, implementó en 1705 una *compañía* con el mercader peruano Francisco Díaz de Pereda por la cual le remitiría anualmente 6000 mulas a las invernadas de Salta y Jujuy, que éste retribuiría en plata y ropa de la tierra.⁵⁹⁹ Todos estos emprendimientos estaban, sin duda, relacionados con su participación en el contrabando con aquellas provincias, de donde se lo acusaría de “*haber extraviado ropa de Castilla, piñas, barras y tejos de oro y plata y fundiciones que había hecho*”.⁶⁰⁰ Asimismo tuvo negocios en las plazas meridionales del virreinato. En noviembre de 1711, extendió un poder a Santiago y Lucas Ruiz Gallo para que lo obligaran en la ciudad de Santa Fe por hasta 10.000 pesos, y un mes más tarde comisionó a Ignacio de Ibarra, de partida a Chile, para que comprara mercaderías en ese reino por la suma de 8000 pesos.⁶⁰¹

Los compromisos que Joseph de Arregui adquiriera con Díaz de Pereda contribuyeron a integrar verticalmente las actividades económicas del clan. Como acopiador de ganados, Arregui se aseguró parte de los animales que debía remitir a las provincias andinas mediante adelantos en metálico que hizo a sus parientes hacendados. Juan de Samartín, la anterior cabeza del clan, era su tío materno y poseía un extenso latifundio en el pago de los Arrecifes en que criaba ganado mular. Este se comprometió a entregar a Arregui “*todas las mulas que tengo en las crías de mis cuatro estancias de tres y cuatro años a doce reales cada mula*”, pues declaró que “*por cuenta de lo que montaren las mulas que se entregaren tengo recibidos quinientos pesos*”.⁶⁰² Pedro Gutiérrez de Paz, otro de los tíos de Arregui, propietario de tres suertes de estancia en el mismo pago, reconoció en su testamento deberle 2000 cabezas de ganado vacuno.⁶⁰³

Como advertimos en el caso de los Báez de Alpoin, también los miembros ricos del clan Samartín se aprestaron a sustentar monetariamente a sus deudos pobres, solventando los ritos mortuorios de los difuntos y sosteniendo a las viudas y a sus hijos. Al morir Joseph Martínez de Aberasturi, esposo de una de sus sobrinas, Antonio

⁵⁹⁹ AGN IX-48-9-4, *Escribanías Antiguas*, f. 143.

⁶⁰⁰ AGI Charcas 212, *Denuncia de Fernando de Esquivel contra Joseph de Arregui*.

⁶⁰¹ AGN IX-48-9-1, *Escribanías Antiguas*, f. 533 y 552.

⁶⁰² AGN IX -48-9-4, *Escribanías Antiguas*, f. 65.

⁶⁰³ AGN IX -48-9-2, *Escribanías Antiguas*, f. 857.

Guerreros costeó los gastos que insumió su funeral.⁶⁰⁴ El capitán Gerónimo de Escobar, por su parte, recogió a su cuidado a las niñas Ana y María, hijas del fallecido, “*como sobrinas carnales de mi mujer doña Ana de Ruiloba*”.⁶⁰⁵ Detrás de esta preocupación solidaria por los más jóvenes estaba, obviamente, el interés de que el patrimonio del difunto no saliera de la órbita de la parentela, para lo cual sus miembros adultos se sirvieron de la figura jurídica de los *réditos pupilares*, gracias a la cual los bienes de menores pasaban a manos de un tutor y administrador. Fue así que Joseph de Arregui se apoderó de 4000 pesos que pertenecieron a los hijos pequeños de Martínez de Aberasturi, lo mismo que de 444 pesos pertenecientes a su primo Roque de Azócar, que se hallaba en España, cuando falleció el padre de éste.⁶⁰⁶

Las alianzas matrimoniales no sólo acrecentaron la potencialidad económica del clan sino que le aportaron un sólido armazón con que resistir cambios desfavorables en la coyuntura política. De allí su preocupación por colocar a uno o más de sus miembros en el cabildo, donde lograron sortear en varias ocasiones las contingencias de la lucha facciosa e imponerse. Cuatro de los esposos de las sobrinas de Juan de Samartín y Antonio Guerreros desempeñaron los oficios concejiles. Dos de ellos adquirieron empleos por compra y los ejercieron durante más de una década: Baltasar de la Quintana Godoy fue regidor entre 1702 y 1725 –con algunas interrupciones debidas a los traspies políticos– y Lucas Manuel Belorado lo fue entre 1712 y 1726. Los dos restantes ocuparon sus cargos por períodos más breves: Joseph Narriondo fue alguacil mayor entre 1712 y 1714 y alcalde ordinario en 1719 y Andrés Gómez de la Quintana fue procurador en 1714. También fueron llamados a integrar la corporación dos de los parientes de sangre de los mencionados patriarcas: quien los sucedería a la cabeza del clan, Joseph de Arregui, fue alcalde ordinario en 1708 y se desempeñó como regidor y alferez real entre 1702 y 1714 –asimismo con interrupciones– mientras que su primo Bernardo Saavedra fue alcalde ordinario en 1720. Los miembros de esta parentela mostrarían la capacidad de sobreponerse a las contingencias políticas conformando sucesivos frentes facciosos, hasta que luego del enfrentamiento del ayuntamiento con el teniente de gobernador Antonio de Larrazábal en 1724, a pesar de que apoyaron a éste, quedaron desarticulados como grupo de influencia.

⁶⁰⁴ AGN IX-48-9-4, *Escribanías Antiguas*, f. 668.

⁶⁰⁵ AGN Sucesiones 3858, *Testamentaria de Antonia de Azócar*.

⁶⁰⁶ AGN IX-48-9-2, *Escribanías Antiguas*, f. 736v.; AGN IX-48-9-4, *Escribanías Antiguas*, f. 668.

Parentesco y procedencia: los caminos hacia la dirigencia concejil

Es imposible explicar cómo ciertos individuos oriundos de la península llegaron a gozar de una posición hegemónica si no buscamos detrás de ellos a las parentelas criollas que les sirvieron de soporte. Los casos de Miguel de Riblos y Antonio Guerreros lo ilustran bien. El primero había llegado a Buenos Aires como soldado de leva y el segundo, a bordo de una pequeña embarcación cargada de mercancías pero sin licencia para comerciar. Nada hacía prever el ascenso social de uno ni de otro, ni menos aún que un día disfrutarían de la prebenda más codiciada por la vecindad: la provisión de alimentos y vestuario a los soldados del Presidio. El hecho de que ocuparan un lugar de preeminencia junto a un gobernador se vio precedido por una alianza matrimonial ventajosa y por su paso por la sala del cabildo. Haber sido elegidos para detentar cargos en la corporación suponía la consideración y el respeto del resto de las familias prominentes de la ciudad. Pero aunque ésta era una buena carta de presentación, fueron otros los motivos por los que se les confió la administración de los almacenes de abastecimiento de la guarnición. Se trataba de personajes de gran solvencia que podían respaldar con su propia fortuna cualquier traspié en el ejercicio de ese cometido y que podían brindar crédito a sus benefactores y secundarlos con eficacia en el emprendimiento de negocios ilícitos.

Uno podría cuestionarse hasta qué punto individuos prominentes como estos resultaban representativos del conjunto de los peninsulares que consiguieron integrar la dirigencia concejil. Lo que queda fuera de duda es que la procedencia geográfica se constituyó en un importante factor de incidencia en una trayectoria política. Haber nacido en la ciudad o haberse afincado en ella suponían el recorrido de caminos distintos para llegar al mismo lugar. Quienes habían nacido Buenos Aires podían recibir de sus mayores un capital relacional ya consolidado, mientras que los foráneos debían ganarse la aceptación de los grupos dirigentes dando muestras de acatamiento a sus pautas de sociabilidad y ofreciéndose a servir los intereses de estos. Si lograban ese reconocimiento, crecían las posibilidades de que un matrimonio los vinculara con alguna familia de arraigo. Ese tránsito era mucho más trabajoso cuando el individuo en cuestión había llegado a Buenos Aires como soldado raso y escalado posiciones en la oficialidad militar. El regidor Gaspar de Avellaneda, que arribó en 1674 con plaza de soldado, sólo consiguió desposar a la hija de Agustín de Lavayén en 1681, tras haber conseguido ascender al puesto de alférez de una compañía. Otro oficial concejil, el

alguacil mayor Miguel de Obregón, que había llegado como soldado el mismo año y ascendido luego a alférez y a capitán, contrajo matrimonio con Juana del Hoyo en 1685, cuando ya detentaba el último de esos empleos militares. Pero la inserción se agilizaba si se trataba de un funcionario que venía a ocupar un cargo burocrático. Pedro de Guezala, que arribó a Buenos Aires como contador de una pesquisa y más tarde se convertiría en oficial de la Real Hacienda y en cabildante, tardó menos de un año en encontrar una esposa apropiada a su rango en Francisca Báez de Alpoin, lo que le permitió ligarse desde entonces al poderoso clan de ese nombre.

El lugar que ocuparon los peninsulares en la dirigencia concejil no debe ser sobredimensionado. Desde mediados del siglo XVII, las parentelas criollas dominaban claramente el ayuntamiento porteño, y aunque a comienzos del siglo siguiente aquellos lograrían tener una participación más destacada, no lograron opacarlas. La excepción la constituyeron unos pocos años signados por las turbulencias políticas, que transcurrieron entre 1708 y 1716. Los foráneos tuvieron, es cierto, una participación destacada en los enfrentamientos facciosos que dividieron al cabildo porteño, pero fue la posición de debilidad en que los colocó su condición la que los movió a formar camarillas, en las que hallaron respaldo frente al embate de otros grupos más consolidados. Esas facciones políticas, por otra parte, no se conformaron en base a los vínculos de paisanaje —como sucedió por ejemplo en Potosí, donde una de ellas nucleó a vascuences y navarros en el bando de los “vascongados”— sino que se cimentaron por medio de lazos de parentesco que tenían como plataforma a las familias criollas.⁶⁰⁷ En razón a ello, sólo conseguirían un anclaje seguro en los grupos dirigentes incorporándose a estos por medio de las alianzas matrimoniales.

El examen de los antecedentes familiares de quienes detentaron los oficios concejiles electivos entre 1605 y 1726 mostró que las parentelas locales supieron aprovechar las coyunturas que les fueron favorables para colocar a sus miembros en el gobierno comunal. Pero lo común era que los ocuparan en forma discontinua, a veces sin retornar a la sala del cabildo hasta después de que transcurriera más de una década. En ello pudo haber influido el carácter anual de esas magistraturas y el reducido número de puestos en que podían rotarse, pero no deja de ser reveladora lo poco significativa que fue la reincidencia en el ejercicio de esos cargos. Los empleos venales, por su parte, les

⁶⁰⁷ Para el caso potosino véase Bernd HAUSBERGER “La guerra de los vicuñas contra los vascongados en Potosí y la etnización de los vascos a principios de la edad moderna” en Christian BÜSCHGES y Frédérique LANGUE (coord.) **Excluír para ser: procesos identitarios y fronteras sociales en la América hispánica (siglos XVII-XVIII)** Köln, 2005, Págs. 23-58

permitieron retener un escaño durante un lapso mayor, pero su posesión fue con frecuencia interrumpida en forma accidentada. A lo largo de esos 122 años pasaron por la sala del concejo 56 regidores, cuya permanencia en sus cargos fue, en promedio, de 7,7 años. Sólo una decena de ellos continuaron en su cargo por más de una década y tan sólo uno le legó su asiento a otro miembro de su familia.

El anudamiento de los vínculos de parentesco podía darse en dos formas, cada una de las cuales evidenció particularidades en el momento de consolidar o transmitir el poder: el entroncamiento vertical en la forma de linajes y el despliegue horizontal a través de las parentelas. La estructuración en linajes era eficiente cuando cabía la posibilidad de legar el poder a los descendientes: según observa Martine Segalen, en algunas comarcas europeas existían verdaderas dinastías familiares que se perpetuaban en los concejos municipales, testimoniando con ello su influencia en el territorio local y la duración de su patrimonio económico, social y simbólico.⁶⁰⁸ Esto no fue lo que ocurrió en Buenos Aires, donde las posiciones de influencia eran más bien resultado de determinadas coyunturas y raras veces se consolidaban al punto de constituirse en un legado familiar. Por tal razón, la organización en parentelas resultaba mucho más funcional, tanto más cuando las ramificaciones conseguidas a través de las alianzas matrimoniales aumentaba las posibilidades de que sus miembros adultos pudieran beneficiarse con un cargo, con una prebenda o con el vínculo privilegiado con una autoridad y mejorar de esa forma la situación del resto. Por tal razón, preferimos hablar en estos casos de “frentes de parentesco”, esto es, de la disposición coyuntural de un grupo de individuos emparentados para lograr los favores de un gobernador, aprovechar una posibilidad concreta de emprender negocios lícitos o ilícitos u ocupar cargos en el gobierno municipal. Esto acarreaba un esfuerzo mancomunado para alargar el disfrute de ese posicionamiento, para sostener el cual los empleos concejiles no fueron sino uno de tantos recursos a echar mano.

⁶⁰⁸ Martine SEGALÉN *Antropología histórica de la familia* Taurus, Madrid, 1992, Pág. 69.

MATRIMONIO Y ALIANZA

El lugar del matrimonio en la normativa eclesiástica y secular

Al referirse a la importancia de los vínculos de parentesco durante la Edad Media, James Casey lanzó una sugerente hipótesis sobre el origen de los lazos de vecindad en las ciudades de la Europa occidental. Quienes las poblaban se habrían visto igualmente obligados hacia dos grupos familiares distintos, el del padre y el de la madre, lo que sembró confusión al establecer lealtades y debilitó las enemistades hereditarias entre los clanes. De allí provendría, sostiene este autor, el temprano auge de la territorialidad como alternativa al parentesco en las comunas medievales, que dando protección a sus integrantes y defendiendo sus privilegios fiscales habrían conseguido que las disputas entre estos se solucionaran en forma pacífica y que la lealtad a la ciudad se impusiera por sobre los lazos familiares.

Esta transformación, que Casey catalogó como un “avance revolucionario”, fue de particular relevancia en la península ibérica, donde las ciudades castellanas aceptaban la soberanía nominal de la monarquía pero se había constituido en *repúblicas* que gozaban de gran autonomía. Obviamente no faltó en ellas la lucha facciosa entre las principales familias, fundada en los derechos que cada una de estas se atribuía a por lo menos una porción de los cargos comunales. Aprovechándose de esa conflictividad, la corona –a partir de los Reyes Católicos pero con mayor énfasis durante los Habsburgo– intervino para favorecer a unos bandos sobre otros y orientar de esa manera la lealtad de sus miembros hacia el monarca, quien la premió con la patrimonialización de los oficios concejiles, depositándolos desde allí en manos de quienes se habían mostrado fieles a sus intereses. Para imponerse a sus rivales y consolidarse en el poder, las familias debieron movilizar tanto a los miembros de la rama masculina como a sus parientes por línea femenina: esa sería una de las razones que explicaría la relevancia que se dio a la colateralidad en la estructuración de los vínculos parentales.⁶⁰⁹

Este reconocimiento de la importancia del parentesco por vía paterna y materna resulta fundamental para diferenciar la unilinealidad del “linaje” del concepto bilineal

⁶⁰⁹ James CASEY **Historia de la familia** Espasa Calpe, Madrid, 1990, Págs. 92-97.

de “parentela”.⁶¹⁰ Al equiparar la valoración que se daba a las ascendencias paterna y materna, un individuo adquiría obligaciones con ambos grupos familiares; estos, por su parte, estaban en la posición de exigirle lealtad y prestaciones a un número ampliado de parientes. En ese espectro de las vinculaciones familiares fundadas en la consanguinidad y la afinidad y matizadas por las diferencias generacionales y jerárquicas, las alianzas matrimoniales asumieron un rol articulador indiscutible. Permitían sumar nuevos integrantes y recursos para afrontar imprevistos y amenazas externas, aunque exigiesen como contraparte la implementación de estrategias que permitieran balancear la inevitable pérdida de bienes que insumía la formación de nuevas parejas.

Pero el matrimonio tradicional no sólo debe ser apreciado desde la capacidad de ampliación y reforzamiento que otorgaba a las parentelas. Al ser tutelado por la monarquía castellana, que estaba interesada en proteger el vínculo desde el momento de la concertación de las nupcias hasta que la muerte de uno de los contrayentes provocaba su disolución, su importancia adquiría una dimensión más profunda. De acuerdo con un especialista en el tema, Jean Gaudemet, el matrimonio podía ser definido como “la unión de los esposos en el seno de una comunidad, con todo lo que ello entraña de afectivo y de material, pero también es el *estatuto jurídico* que determina las condiciones de adhesión a ese estado, así como los derecho y deberes que de él se derivan”. Basado en un conjunto de normas del derecho canónico y el derecho profano, ese estatuto jurídico le aportaba un marco institucional a la unión y favorecía el pleno desarrollo de la pareja, a la vez que salvaguardaba las exigencias de orden moral.⁶¹¹ La tradición jurídica romana había sostenido el carácter monogámico de las uniones matrimoniales y fundado su validez en el consentimiento de los contrayentes; la Iglesia Católica le agregó el carácter de indisolubles y les otorgó la calidad de sacramento.

En Castilla, la monarquía recogería ambas tradiciones como propias y las impondría y defendería en sus dominios a uno y otro lado del océano. La normativa castellana había ido forjando desde el siglo XIII una posición propia en relación con las implicancias jurídicas del matrimonio. Ya encontramos referencias a los vínculos matrimoniales tanto en el *Fuero Juzgo*, que se compiló por orden de Fernando III (1241), como en las

⁶¹⁰ Como observa Bertrand, la capacidad integradora de la parentela sobrepasaba la del linaje, ya que tenía una proyección bilineal horizontal, mientras que el linaje entroncaba a los sujetos a partir de una ancestralidad compartida, que por lo general solía adoptar caracteres patrilineales. Michel BERTRAND “La élite colonial en la Nueva España del siglo XVIII: un planteamiento en término de redes sociales” en Bernd SCHRÖTER y Christian BÜSCHGES **Beneméritos, aristócratas y empresarios. Identidades y estructuras sociales en las capas altas urbanas en América hispánica** Vervuert, Frankfurt, 1999, Págs. 44-45.

⁶¹¹ Jean GAUDEMET **El matrimonio en Occidente** Taurus, Madrid, 1993, Págs. 23-24.

Siete Partidas del rey Alfonso el Sabio (1265). No obstante, a finales de la Edad Media existía cierta confusión respecto a cómo proceder en relación con determinadas cuestiones, ya que esas compilaciones habían sido seguidas por diferentes ordenanzas que las contradecían en sus interpretaciones. Fueron los Reyes Católicos quienes sentaron principios firmes en relación con el matrimonio en las *Leyes de Toro*, que fueron redactadas a petición de las Cortes celebradas en Toledo en 1502 y publicadas por orden de Fernando de Aragón en 1505.⁶¹²

Entre los muchos problemas abordados por la legislación castellana, uno fue el de los matrimonios clandestinos. Las Partidas de Alfonso el Sabio reprobaban los matrimonios encubiertos y proponían una clasificación en tres categorías: los que se hacían a escondidas y sin testigos, obstaculizando con ello la comprobación de impedimentos, los que los contrayentes realizaban sin haber obtenido la previa autorización de los padres y los que no cumplían con la formalidad de la publicación de proclamas en la parroquia de los novios. En las Leyes de Toro se insistió en perseguir esta costumbre, lo cual no hizo sino confirmar su persistencia. La cuestión sólo fue cerrada por la Iglesia en el Concilio de Trento, que declaró que en adelante serían inválidos los matrimonios celebrados privadamente y ordenó que fueran realizados ante el párroco y frente a dos testigos.⁶¹³

Otra controversia tratada por las leyes castellanas fue si los contrayentes necesitaban o no del consentimiento paterno para unirse en matrimonio. De acuerdo con el Fuero Juzgo y las Siete Partidas, las hijas que incurrían en el delito de omisión podían ser castigadas con la pérdida de sus derechos hereditarios. Las Leyes de Toro confirmaban la potestad paterna en ese terreno, pero la negaban a los hermanos en el caso de que las doncellas hubieran quedado huérfanas. Hasta el siglo XVI, sólo la descendencia femenina se vio afectaba por las normas restrictivas: no fue hasta Felipe II que se confirieron al padre idénticas prerrogativas en relación con el casamiento de los hijos varones, como lo dispuso este rey en las cortes de Madrid de 1563.⁶¹⁴

En otras cuestiones referentes al matrimonio, la corona se limitó a hacer respetar las prescripciones de la Iglesia Católica. La autoridad eclesiástica se reservaba el derecho a interponerse en el caso de que dos personas emparentadas entre sí pretendieran unirse

⁶¹² Su nombre proviene de haber sido promulgadas en las Cortes de Toro, cuando la reina Isabel ya había fallecido y Fernando gobernaba Castilla como regente en nombre de su hija Juana.

⁶¹³ Manuel Ángel BERMEJO CASTRILLO *Entre ordenamientos y códigos. Legislación y doctrina sobre familia a partir de las leyes de Toro de 1505* Dykinson, Madrid, 2009, Págs. 122-124.

⁶¹⁴ Manuel Ángel BERMEJO CASTRILLO *Entre ordenamientos y códigos...* Págs. 140-144.

en matrimonio. Movida por el horror al incesto, la Iglesia consideraba el parentesco cercano entre los novios como un impedimento. Se estudiaron con verdadero refinamiento los antecedentes familiares de los contrayentes basándose en un método de cálculos conocido como *sistema germánico* o *canónico*, que consideraba al hermano pariente en primer grado, al primo carnal pariente en segundo grado, al primo segundo pariente en tercer grado, al primo tercero pariente en cuarto grado, y así en lo sucesivo. En el siglo XI hubo una extraordinaria ampliación de los grados prohibidos y se llevó la prohibición hasta el séptimo grado de parentesco, pero en 1215 el Concilio de Letrán la redujo al tercer grado. No obstante, tanto en las comunidades rurales del Viejo Continente (donde la adscripción a la tierra de los campesinos les impedía buscar pareja fuera de la comarca natal) como en los sectores aristocráticos, rara vez se hallaba una unión matrimonial que no pudiera ser impugnada por alguna violación a estas normas canónicas. Obligado a mostrarles cierta tolerancia, el pontífice se atribuyó la potestad de “dispensar” estas uniones o bien la delegó en los obispos, quienes podrían autorizar las nupcias, previo pago de una compensación monetaria a la curia.⁶¹⁵

Desde que el matrimonio fuera reconocido explícitamente como sacramento por el Concilio de Florencia, en 1439, el papado reclamó la resolución de toda cuestión relacionada con éste. Pero no sería hasta el siglo XVI en que, en una clara reacción contra la posición tomada por los teólogos protestantes, el catolicismo decidió sentar la suya propia y se abocó a un conjunto de problemas cuya solución se había mantenido hasta entonces pendiente. La expresión más acabada de ese espíritu contrarreformista se hallará en el Concilio de Trento, que contradijo el posicionamiento de luteranos y calvinistas sosteniendo el carácter sacramental y la indisolubilidad del vínculo matrimonial. En los debates conciliares –que se extendieron entre 1562 y 1563– se trató el tema de la clandestinidad de las nupcias, que a partir de entonces sería combatida por la Iglesia, aunque no se consideró inválidas las que habían sido celebradas a escondidas hasta ese momento. Una parte de los acuerdos, dada a publicidad bajo el nombre de decreto *Tametsi*, ofrecía un dictamen sobre problemas como el consentimiento paterno y la celebración del matrimonio. Respecto a la necesidad de consentimiento, los obispos franceses, que lo consideraban condición esencial del matrimonio, intentaron imponer su parecer, pero primó el posicionamiento sostenido por la Iglesia desde antiguo, por lo que se decidió que todo lo que se necesitaba para que las nupcias fueran válidas era el

⁶¹⁵ Jack GOODY *La evolución de la familia y el matrimonio en Europa* Herder, Barcelona, 1986, Págs. 190-201.

consentimiento de los contrayentes, el cual debía ser expresado en palabras de presente. No obstante, hubo una concesión a los representantes del clero francés en el texto del decreto cuando se juzgó reprobable la falta de aprobación de los padres. En cuanto a los impedimentos por consanguinidad, se restringió la prohibición al cuarto grado de parentesco, pero se extendió al parentesco por afinidad (reducido a dos grados de parentesco) y al parentesco espiritual (es decir, a los vínculos de compadrazgo).⁶¹⁶

Para evitar la clandestinidad de las nupcias y los fraudes cometidos por quienes ocultaban un primer matrimonio para contraer otro, el decreto *Tametsi* estableció que en la parroquia donde se celebrarían las nupcias, durante tres domingos consecutivos, el sacerdote debía anunciar en el transcurso de la misa los nombres de los futuros contrayentes.⁶¹⁷ Estas proclamas, conocidas como *amonestaciones*, daban la oportunidad a que quienes tuvieran motivos para oponerse a las bodas para que los comunicaran al párroco. Pero el remedio más efectivo contra la clandestinidad fue disponer que la ceremonia se realizara mediante un acto solemne *in facie ecclesiae*, esto es, en forma pública y obedeciendo a todos los requisitos rituales. El celebrante, en presencia de dos o tres testigos, debía interrogar a los contrayentes sobre su intención de casarse y tras recibir el consentimiento de ambos, los declararía unidos en matrimonio.⁶¹⁸

Motivaciones personales y decisiones familiares

La monarquía hispánica coincidió con la Iglesia en señalar al matrimonio como un acto solemne que requería de publicidad, y aunque no pudo otorgar a los padres el derecho de vetar las decisiones de los hijos, les procuró herramientas con que poder castigar su desobediencia. Es indudable que ambas respaldaron el papel rector de los progenitores con el fin de evitar que los jóvenes contradijeran el orden social y buscaran una pareja fuera del estrato al que pertenecían, pero la Iglesia lo hizo con algo de ambigüedad, pues en teoría defendía la libertad individual en la elección del cónyuge. En el Concilio de Trento, empero, la doctrina católica sancionó el derecho de los hijos de hacer valer su voluntad por encima de los intereses de los parientes. Entró así en una

⁶¹⁶ Lloyd BONDFIELD “Avances en la legislación familiar europea” en David KERTZER y Mario BARBAGLI **Historia de la familia europea** Paidós, Barcelona, 2002, Tomo I: “La vida familiar a principios de la era moderna (1500-1789)”, Págs. 175-176.

⁶¹⁷ Esta costumbre ya había sido fijada por el Concilio de Letrán (1215).

⁶¹⁸ Jean GAUDEMET **El matrimonio en Occidente...** Págs. 190-201.

contradicción insalvable con las pretensiones del monarca, quien como “padre” de sus súbditos se veía reflejado en los jefes de familia: como guardianes de la paz del hogar, estos debían tutelarla como él tutelaba la paz del reino. La inobediencia en el seno de la familia se convertía de esa forma en un equivalente al desorden social en el interior del reino y debía ser aplacada por la autoridad del padre, que reproducía a escala minúscula la autoridad del soberano. A esto Donzelot llamó atinadamente “gobernar a través de las familias”, pues éstas, que eran reconocidas como la mínima organización política posible, reflejaban en su estructuración jerárquica a la monarquía misma.⁶¹⁹

No obstante ello, durante siglos la monarquía hispánica no otorgó a los padres de familia sino poderes indirectos, disuasivos, como lo era la amenaza de desheredación a los hijos que contrariaran sus deseos. No sería hasta fines del siglo XVIII en que, con la Real Pragmática sobre los casamientos, el soberano español intervendría en forma más concreta y prohibiría a los jóvenes que se casasen sin contar con el consentimiento paterno, las hijas hasta que cumplieran los 23 años y los hijos hasta los 25. Fue de esa forma que desde 1776, año de la proclamación de la Real Pragmática en Madrid, la decisión final quedó reservada a los progenitores.⁶²⁰ Este decreto no se conoció en el Río de la Plata hasta dos años más tarde, de modo que durante la mayor parte del siglo XVIII, los hijos disconformes libraron sus batallas en el seno de sus familias, pero no se vieron molestados por los agentes de la monarquía siempre que no atentaran contra el orden público por medio del escándalo.

Al instrumentar el matrimonio de sus hijos, los padres no ignoraban que éste tenía efectos jurídicos y materiales concretos. La unión de una heredera con un hombre poco comprometido con los intereses de la parentela podía acarrear la pérdida de bienes cuantiosos. El efecto dispersor que podían tener los matrimonios desventajosos sobre el patrimonio familiar se explica por las características del régimen sucesorio castellano, que consideraba herederos legítimos a todos los hijos nacidos del matrimonio y confería a las mujeres los mismos derechos que a los varones.⁶²¹ Pero al ser las hijas legalmente inhábiles, los bienes que éstas heredaban pasaban a ser administrados por sus maridos,

⁶¹⁹ Jacques DONZELOT *La policía de las familias* Pre-Textos, Valencia, 1990, Págs. 51 y ss.

⁶²⁰ Robert Mc CAA “Tratos nupciales: la constitución de uniones informales en México y España, 1500-1900” en Pilar GONZALBO AIZPURU y Cecilia RABELL ROMERO *Familia y vida privada en la historia de Iberoamérica* El Colegio de México, Universidad Autónoma de México, 1996, Pág. 37.

⁶²¹ Dicho régimen estaba basado en la división igualitaria de los bienes y en la obligación forzosa de considerar herederos de los mismos a los descendientes (o, por falta de estos, a los ascendientes); Máximo GARCIA FERNANDEZ *Herencia y patrimonio familiar en la Castilla del Antiguo Régimen (1650-1834) Efectos socioeconómicos de la muerte y la partición de bienes* Universidad de Valladolid, Zaragoza, 1995, Págs. 26-30.

lo cual explica que los padres de familia se empecinaron en alinear a sus yernos tras sus propios intereses y rechazaran como tales a aquellos que no estaban capacitados para contribuir al fomento del patrimonio familiar.

Las leyes castellanas otorgaban a los padres las herramientas para corregir el mal comportamiento de sus hijos. En el testamento, aquellos debían transmitir forzosamente las cuatro quintas partes de sus bienes a estos, pero podían disponer de un quinto de la herencia para destinarla a distintos fines, como lo eran solventar el entierro y los rituales fúnebres o a mejorar a alguno de sus descendientes. Dicha mejora era utilizada con cierta frecuencia para premiar a los hijos e hijas que hubiesen demostrado piedad filial hacia sus progenitores, auxiliándolos en la enfermedad o en su vejez. Pero así como podían beneficiar a sus vástagos mediante legados especiales, los padres también podían decidir castigarlos mediante la desheredación. La amenaza de hacerlo constituía un instrumento de disuasión para que aquellos no descuidaran la sumisión y respeto que debían a sus mayores. Y una de las faltas graves que podían ser punidas con la privación de la herencia era la desobediencia a las indicaciones del padre en el momento de escoger cónyuge.

Las tensiones provocadas entre padres e hijos a causa de la elección de cónyuge han sido bien estudiadas en algunos países de Europa occidental. En el que quizás sea su libro más conocido, Lawrence Stone estudió los comportamientos de los sectores acomodados de la sociedad británica del Antiguo Régimen y tipificó los convenios matrimoniales de acuerdo al grado de intrusión que tenían los padres y al nivel de decisión que se otorgaba a los hijos. Entre las familias de corte más tradicional, los padres ejercían el derecho a opción, concediendo en ocasiones el derecho a veto a sus hijos, entendiéndose que si lo hacían era porque comprendían que para mantener unida a la pareja debía existir una compatibilidad mutua. Pero en otras familias los términos se invertían y los hijos varones gozaban de la libertad de escoger a su futura consorte, conservando a sus padres el derecho a veto. En la Inglaterra de los siglos XVI a XVIII, la balanza se fue inclinando hacia este segundo modelo, dando por supuesto que los jóvenes aceptaban los valores que les habían transmitido sus mayores y que harían una elección adecuada dentro del grupo social al que pertenecían. Los demás países del occidente europeo le fueron a la zaga pero a la larga también aceptaron el derecho de los

hijos (el de los varones, por lo menos) a aceptar o no las propuestas de sus progenitores, para finalmente dejarlos escoger por sí mismos.⁶²²

Cabe preguntarse si esa decreciente capacidad de los padres de imponer candidatos a sus hijos, apreciable en algunos países europeos, tuvo algún parangón en el Río de la Plata y el Tucumán durante los siglos XVII y XVIII. En los dominios americanos de la monarquía hispánica, el proceso parece haber sido más bien el contrario: los Borbones habrían apuntado a reforzar la autoridad paterna y a dejar escaso margen de decisión a los hijos, forzando a la Iglesia a un repliegue. Ese retroceso habría tenido su más cabal expresión en la Real Pragmática de 1776, pero ya venía observándose desde hacía varias décadas.⁶²³ Patricia Seed describe los lineamientos generales de ese proceso. Hacia 1690, la Iglesia cambió su metodología para proteger a las parejas de jóvenes que querían casarse contra la voluntad de sus padres: por un lado, permitió en esos casos que la ceremonia nupcial se realizara en secreto, para evitar la interferencia de los parientes; por otro, defendió a las muchachas contra la violencia paterna colocándolas en “depósito” en una casa de un tercero, con lo que se ofreció una protección temporal pero no siempre efectiva, ya que en un corto tiempo eran devueltas a sus hogares. Pero desde 1730, los tribunales eclesiásticos se mostraron más cautelosos frente a los conflictos prenupciales, alentando a las partes en discordia a llegar a un acuerdo, y sólo intervinieron activamente cuando alguna de ellas denunciaba impedimentos o malicia. Seed atribuye estos cambios a que durante el siglo XVIII, fue imponiéndose la creencia de que este tipo de disputas ya no eran cuestiones de preocupación pública, en que tanto la Iglesia como la comunidad se veían forzadas a intervenir, sino que pasaron a convertirse en un asunto privado entre el individuo y su familia.⁶²⁴

Este nuevo concepto de privacidad, que favoreció los controles de los padres sobre su prole, fue aprovechado por la monarquía para avanzar en el mismo sentido. Pero la Iglesia, aunque se mostró más cauta que en los siglos anteriores, no dejó de promover la capacidad individual de resistirse a una unión impuesta y dio amparo a quienes

⁶²² Lawrence STONE **Familia, sexo y matrimonio en Inglaterra, 1500-1800** Fondo de Cultura Económica, México, 1990, Págs. 149 y ss.

⁶²³ Se hallará un análisis de los efectos de la aplicación de la Real Pragmática de 1776 en dos ciudades del actual territorio argentino –Buenos Aires y Córdoba– en: Susan SOCOLOW “Cónyuge aceptables: la elección de consorte en la Argentina colonial, 1778-1810” en Asunción LAVRIN (coord.) **Sexualidad y matrimonio en la América hispánica. Siglos XVI-XVIII** Grijalbo, México, 1991, Págs. 229-259. Las secuelas de la Real Pragmática en una zona rural fueron estudiadas por: Carlos M. BIROCCO **Cañada de la Cruz. Tierra, producción y vida cotidiana en un partido bonaerense durante la Colonia** Municipio de Exaltación de la Cruz, Buenos Aires, 2004, Págs. 135 y ss.

⁶²⁴ Patricia SEED **Amar, honrar y obedecer en el México colonial. Conflictos en torno a la elección matrimonial, 1574-1821** Alianza, México, 1991, Págs. 218-232.

solicitaron la anulación de un matrimonio por haber sido forzados a contraerlo. Justamente, uno de los recursos abusivos utilizados por los padres que fue combatido por los tribunales eclesiásticos fue el “miedo reverencial”: la obligación moral que tenían los hijos de obedecer a sus progenitores. Estos últimos debían limitarse a la persuasión; si se comprobaba el uso de la fuerza para compeler a un hijo a casarse, el matrimonio contraído sería considerado inválido.⁶²⁵

Por todo lo que se lleva dicho, los testimonios que se conservan sobre la resistencia ofrecida por los hijos a las imposiciones de los padres proceden en casi todos los casos de los archivos eclesiásticos. Sin embargo, el hecho de que la Iglesia defendiera la libertad de consentimiento de los contrayentes no significaba que se mostrara complaciente frente a todas las demandas. Mónica Ghirardi ha analizado los pleitos judiciales de divorcio presentados ante el tribunal eclesiástico de la diócesis de Córdoba, algunos solicitando la nulidad matrimonial y otros la separación de cuerpos, y logró determinar un promedio general de 1,3 causas gestionadas por año entre 1688 y 1850 en los territorios dependientes de ese obispado. No obstante, tan sólo el 10% de las solicitudes de nulidad matrimonial y un 11% de las de separación de cuerpos obtuvieron una sentencia favorable. Ese tribunal se habría mostrado como un celoso guardián de la institución matrimonial y por lo tanto renuente a autorizar la disolución de los vínculos, que aprobó sólo en circunstancias excepcionales. No obstante, esta autora halló que la aplicación de violencia y miedo en el momento de celebrarse el casamiento, fue junto con la existencia de bigamia, uno de los causales que justificaron sentencias aprobatorias de la nulidad. Ghirardi también exploró los motivos expresados por los padres al presentarse a los tribunales para oponerse al casamiento de sus hijos y destacó que predominaron dos: uno de ellos fue el peligro de la consumación de una unión desigual, debido a la carencia de limpieza de sangre o la procedencia social infamante del cónyuge, el otro, la simple negativa de los hijos a considerar las razones de sus mayores, sean cuales fueran éstas.⁶²⁶

Otro notable aporte es sin duda el de Raúl Molina, que también extrajo preciosa información de las fuentes eclesiásticas. Este autor, que centró sus trabajos en el siglo XVII y comienzos del XVIII, no ofrece resultados estadísticos pero tiene el mérito de

⁶²⁵ Patricia SEED Amar, **honrar y obedecer...** Págs. 234-235.

⁶²⁶ María Mónica GHIRARDI **Matrimonios y familias en Córdoba. Prácticas y representaciones** Tesis de Doctorado, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, 2004; María Mónica GHIRARDI y Antonio IRIGOYEN LOPEZ “El matrimonio, el Concilio de Trento e Hispanoamérica” en **Revista de Indias**, Universidad Complutense de Madrid, 2009, Vol. 69, N° 246, Págs. 241-271.

haber resguardado parte de la documentación del hoy desaparecido Archivo de la Curia Diocesana de Buenos Aires. Al igual que Ghirardi en Córdoba, Molina pudo constatar en las causas presentadas ante el tribunal eclesiástico porteño algunas que solicitaban la anulación de matrimonio por vicios en el consentimiento. Esto sucedía cuando uno de los cónyuges podía probar que había sido casado por la fuerza o por miedo, entendiendo por este último a la perturbación del entendimiento o la imposibilidad de expresarse por temor a los castigos. En el caso de las mujeres, según observa, primaba el sentimiento del “temor reverencial”: el respeto debido a los padres, que las movía a obedecer las indicaciones de estos y a ocultar o posponer sus propias inclinaciones.

Este autor extrajo del Archivo de la Curia varios testimonios de mujeres que, tras ser obligadas a casarse, mostraron diversas formas de resistencia durante la convivencia y fueron brutalmente castigadas por sus maridos, pero consiguieron solicitarle al obispo que decretara la nulidad del vínculo. Una de ellas fue Gregoria Silveyra Gouvea, descendiente de portugueses tanto por su padre como por los Báez de Alpoin, su familia materna. Siendo muy joven, había sido obligada por su padrastro, Diego de Cospedal, a casarse con Amador de Roxas y Acevedo, a pesar de que ya estaba comprometida con uno de los nietos del influyente Mateo Leal de Ayala. Ella era, según lo refirió más tarde en el pleito, “*mujer de tierna edad, humilde y obediente y tímida*” y cedió a los deseos de Cospedal, que la atemorizó por medio de amenazas, golpizas y encierros. Ya casada, le tocó someterse a los maltratos de su marido, que correspondía con violencia la falta de afecto que ella le demostraba. Luego de un largo viaje al Perú, Roxas regresó de improviso, advertido por cartas de sus parientes de la supuesta infidelidad de Gregoria. Presentándose sorpresivamente en su casa, hirió a ésta de seis estocadas, además de agraviar de palabra a su madre y de golpear a sus esclavas, quizás por sospecharlas cómplices de su ama, a una de las cuales le cortó las orejas.

Al presentarse al tribunal, Gregoria solicitó “*la nulidad, la cual consiste en la fuerza que se me hizo al tiempo y cuando me hicieron casar con el dicho Amador de Roxas, porque se hallará que yo no tuve voluntad para casarme con él y se me forzó y violentó para el dicho efecto*”. Luego de presentar numerosos testigos, en 1657 se dio por nulo el matrimonio, se le devolvió la dote y se le asignaron la mitad de los gananciales que le correspondían por los años en que convivió con Roxas. Gregoria fue, sin duda, uno de los personajes femeninos más fascinantes de la época. Luego de divorciarse, se casó con el militar lisboeta Gaspar Freyre Rosa y, tras enviudar de éste, con Miguel de Riblos, joven soldado que era casi veinte años más joven que ella, pero que fue su esposo por

más de treinta años.⁶²⁷ Este último, como se recordará, habría de mantener fuertes lazos con los Báez de Alpoin, familiares de su esposa, y llegaría a tener una destacada participación en el cabildo porteño, primero como alcalde ordinario y luego como depositario general.

¿Deben ser tomados los casos como éste como representativos de los sentimientos de los hijos frente a las imposiciones de sus mayores? ¿O los mismos generan, por el contrario, un efecto distorsionador? La parquedad con que hablan las fuentes nos impide responder en forma satisfactoria a estas preguntas. Pero se presume que, más allá de sus sentimientos frente a los matrimonios arreglados, era común que los jóvenes solteros resignaran sus propias inclinaciones y escucharan las recomendaciones de sus padres en la elección del cónyuge. Cualquiera fueran los deseos de las partes implicadas, esa elección raras veces pasaba por encima de las convenciones sociales y normalmente se adecuaba a los valores que determinaban la aceptabilidad de una unión.

La dirigencia concejil porteña y el matrimonio

Hemos visto cómo en la segunda mitad del siglo XVII, la dirigencia concejil porteña tendió a cerrarse en sí misma y llegó a ostentar en la década de 1680 el más alto índice de endogamia conocido entre sus miembros, que se hallaban fuertemente unidos entre sí por vínculos de consanguinidad y afinidad. Esa tendencia a la oclusión, que puede ser vista como una estrategia para evitar que los honores salieran de manos de las parentelas dominantes, ha de ser también considerada como una forma más de fortalecer las relaciones entre sus miembros, dándoles el carácter de lazos familiares y, por lo tanto, volviéndose más estrechas.

No obstante, el afincamiento de un número cada vez mayor de peninsulares en Buenos Aires acabó por ejercer presión sobre la oligarquía local y la movió a incorporarlos selectivamente, particularmente si se trataba de miembros de la oficialidad del Presidio o de la burocracia. A partir de ello, penetraría en la dirigencia concejil un sector que se había ya fogueado en otros ámbitos del poder y que estaba en condiciones de capitalizar el prestigio que había ganado frente a las parentelas locales de mayor arraigo. Prestigio que les sería reconocido tanto el abrírseles las puertas de la sala del cabildo como al permitírseles desposar a las hijas de anteriores cabildantes.

⁶²⁷ Raúl MOLINA **La familia porteña en los siglos XVII y XVIII. Historia de los divorcios en el período hispánico** Fuentes Históricas y Genealógicas Argentinas, Buenos Aires, 1991, Págs. 178-190

Un fenómeno de características similares ha sido constatado por Mauro Hernández entre los magistrados municipales de Madrid. Este autor ha observado que si la endogamia no se dio tan frecuentemente como pudiera haberse esperado entre los regidores madrileños, ello se debió a que sus estrategias de alianza fueron más bien expansivas, o de ascenso si se quiere, y les exigieron diversificar sus vínculos. Tan sólo un tercio de ellos contrajo matrimonio con mujeres emparentadas con otros miembros del ayuntamiento. Hernández contrapone a esa relativamente débil “endogamia oligárquica” una fuerte “endogamia económica”, pues encontró una notable paridad entre las fortunas de los regidores y las de las familias con las que estos se vinculaban por medio del matrimonio, aunque admite que las dotes no se constituyeron en un buen indicador para demostrarlo.⁶²⁸

¿Obedecieron los cabildantes porteños del período que estudiamos a motivaciones parecidas? Ante todo, se impone una reflexión: el historiador debe ser cauteloso antes de presumir que hubo especulación en la implementación de una unión matrimonial. A tres siglos de distancia, nos permitimos hacer conjeturas con demasiada libertad. En particular cuando presuponemos que si un individuo tramaba un matrimonio ventajoso durante su juventud, lo hacía para facilitar su “despegue” económico, o cuando presumimos que esa situación se repetía al contraer segundas nupcias, luego de verse obligado a repartir entre sus hijos y yernos los bienes acumulados durante el primer matrimonio, ya que una segunda unión le permitiría compensar esas pérdidas con la dote de su nueva esposa. Si el viudo disfrutaba de suficientes riquezas, creemos en cambio que éste actuaba por desquite, pues estaba en posición de permitirse elegir una nueva compañera guiándose por la atracción y no por las conveniencias. Pero no se trata de ecuaciones en que las mismas premisas arrojan resultados idénticos. Juzgamos razonable, en tal sentido, el llamado a la prudencia que lanza Jack Goody cuando nos advierte sobre el peligro de contraponer con cierto automatismo la atracción entre los novios con la imposición paterna o las conveniencias sociales.⁶²⁹

En los círculos oligárquicos, el matrimonio era el estado socialmente recomendable para un varón adulto. La doctrina cristiana consideraba que la vida marital era el remedio contra el pecado de fornicación, razón por la cual moralistas y sacerdotes aconsejaban a los padres de familia que impulsaran a sus hijos a casarse para que no se

⁶²⁸ Mauro HERNÁNDEZ *A la sombra de la Corona. Poder local y oligarquía urbana (Madrid, 1606-1808)* Siglo Veintiuno de España Editores, Madrid, 1995, Pág. 169.

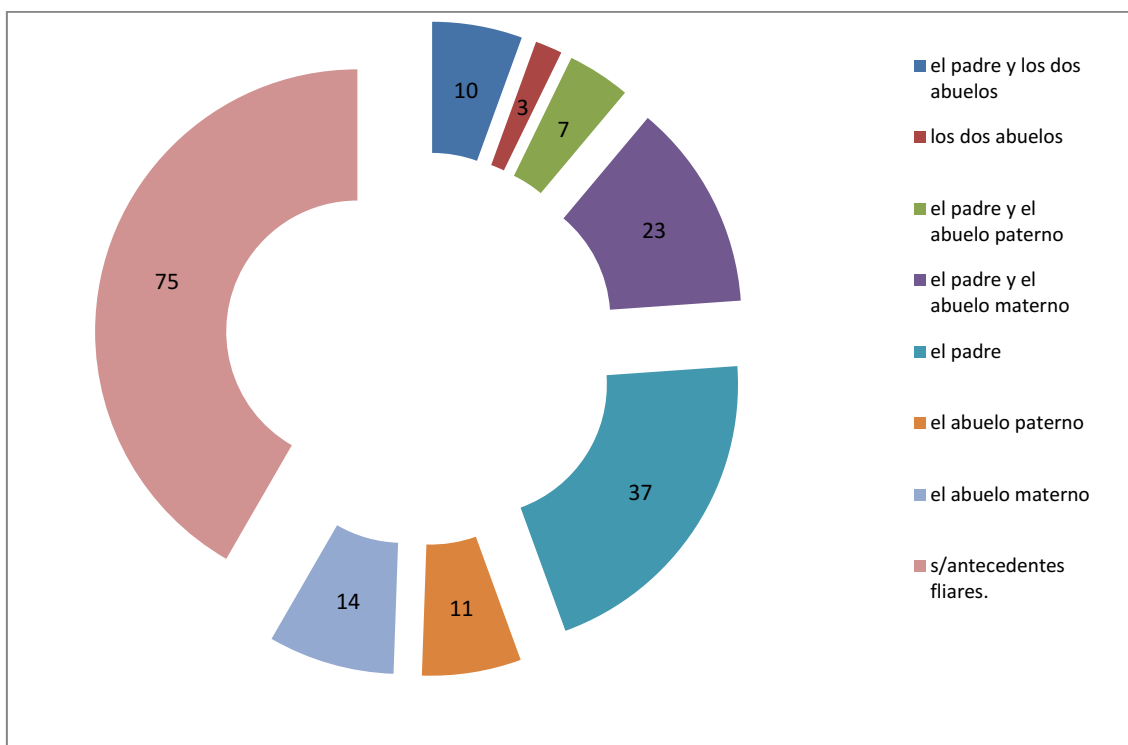
⁶²⁹ Jack GOODY *Historia de la familia...* Pág. 290.

abandonaran a sus pulsiones sexuales.⁶³⁰ En la América española, se agregaba el hecho de que la condición de “vecino”, que aseguraba el uso pleno de los derechos políticos, sólo se le reconocía a aquellos que tenían “familia y casa poblada” en la ciudad, es decir, a los padres de familia. Nuestros cabildantes no desoyeron ese mandato: tan sólo cinco permanecieron solteros hasta su muerte. Uno de ellos, Domingo de Acasuso, fue uno de los personajes más influyentes y opulentos de la época: arribado a Buenos Aires como soldado de leva, llegó a ser un comerciante exitoso con un amplio radio de operaciones y desempeñó cargos honrosos tanto en el cabildo como en la Real Hacienda. Pero a pesar del importante lugar que le tocó ocupar en la sociedad porteña jamás tomó esposa, aunque sí fue padre de cuatro hijos naturales, lo que sugiere que mantuvo vínculos informales quizás duraderos con una o más mujeres de la ciudad.

En el otro extremo, hallamos a una veintena de individuos que se casaron en dos o más oportunidades. Nuestros cabildantes, empero, fueron en su inmensa mayoría hombres de una sola mujer. Disponemos de información sobre 180 de sus consortes, un puñado de las cuales lo fueron en segundas o terceras nupcias. Al ser rastreados los antecedentes familiares de estas mujeres, resultó que el 20,6% de ellas eran hijas, el 15,6% nietas y el 22,2% hijas y nietas de oficiales concejiles. Dicho de otra forma, seis de cada diez de ellas descendían de cabildantes, tal como podrá apreciarse en el Gráfico N° 17. Estas cifras se muestran más elevadas de las que ostentaban sus propios esposos, clara evidencia de que el matrimonio fue utilizado por estos como una estrategia de ascenso. Pero el hecho de que procedieran de las familias que formaban parte de la dirigencia concejil no era el único indicador de prestigio que podía volver atractiva una unión. El 26% de dichas mujeres era hija de oficiales de la guarnición y el 20% descendía de los fundadores de la ciudad, cifra que, en este último caso, duplicaba la que exhibían sus consortes.

⁶³⁰ Jean-Luis FLANDRIN *La moral sexual en Occidente. Evolución de las actitudes y comportamientos* Gránica, Barcelona, 1984, Págs. 311 y ss.

Gráfico 17 – Esposas de los cabildantes: antecedentes familiares en el ejercicio de oficios concejiles (1690-1726)



Fuente de los datos: AECBA (varios tomos); "Aportes biogenealógicos" de Fernández Burzaco (6 tomos); "Diccionario Biográfico" de Molina; Revista Genealogía (varios tomos)

Pasemos ahora al origen geográfico de estas mujeres. Casi todas ellas habían nacido en ciudad. Las características de los flujos migratorios ofrecen una explicación a esa preponderancia: las tandas de migrantes procedentes de la península se componían en su mayor parte de varones, y ese desequilibrio entre los sexos era también apreciable, aunque en forma bastante menos acusada, entre quienes llegaban desde otros puntos de América. En una ciudad portuaria como Buenos Aires, que además era capital de provincia, era habitual el ingreso de comerciantes, funcionarios, soldados y marineros, en su gran mayoría hombres solos. Las mujeres, cuando se desplazaban, lo hacían por lo general acompañando a sus grupos familiares y estos distaban de ser los pasajeros más frecuentes en los viajes interoceánicos o en las largas travesías en carretas.

Si bien las esposas de los cabildantes fueron en su inmensa mayoría porteñas, alrededor de la mitad de ellas lo era en primera generación. Según se ha podido determinar, 79 fueron hijas de porteños, mientras que 58 lo eran de europeos afincados en la ciudad y 22 de vecinos llegados desde otros puntos del virreinato. A ello debe agregarse que casi un tercio de las mismas tenía sangre lusitana: el 31,7%, en efecto,

descendía de portugueses en primera, segunda o tercera generación. Estaban vinculadas a las estirpes luso-criollas en mayor medida que sus esposos.

Sólo tenemos noticia de doce cabildantes que se casaron con foráneas: diez de éstas procedían de otras ciudades del virreinato del Perú y las dos restantes eran europeas. Una de estas últimas fue Elena de Vitte, mujer del alcalde provincial de la Hermandad Alonso del Pozo y Garro, cuya historia atestigua cómo el inicio de la vida matrimonial podía significar para una mujer la pérdida completa del soporte familiar.⁶³¹ Ella era natural de Flandes y había llegado a Buenos Aires en compañía de su hermana Catalina y del esposo de ésta, el valenciano Fernando de Rocaful, un militar que tras haber servido en los dominios flamencos de Carlos II había sido premiado por éste con los cargos de corregidor de Coquimbo y gobernador de La Serena. En el fugaz paso de este grupo familiar por Buenos Aires, Alonso del Pozo quedó prendado de esta muchacha y la solicitó en matrimonio. Rocaful le entregó su mano en una fastuosa ceremonia en que participó todo el clero de la ciudad y luego, acompañado de su esposa, continuó su viaje a Chile.⁶³² En los años que siguieron, Elena fue madre de varios hijos. Aunque no volvió a ver a su familia, le llegaron noticias de dos de sus hermanas, a quienes menciona en su testamento: Juana María, que había fallecido en la villa flamenca de Courtrai, le había dejado algunos bienes en herencia, y lo mismo había hecho Catalina, quien luego de enviudar y casarse nuevamente, había vuelto a Europa y muerto en Rennes.⁶³³ Posiblemente haya hecho referencia a ellas porque las leyes sucesorias ordenaban que se invocara la existencia de todo bien sujeto a herencia, pero es poco probable que hubiera podido reclamar esos legados.

Entre las esposas provenientes del interior del virreinato, hubo tres que procedían de ciudades que se hallaban dentro del radio geográfico en que sus esposos, que eran reconocidos personajes del comercio local, realizaban sus negocios. María Castellanos,

⁶³¹ Otros autores han vinculado la pérdida de las redes familiares con la vejez, cuando la desaparición de padres, hermanos, tíos o hijos dejaba a la mujer sin sostén, y la han relacionado con el proceso de pauperización y la falta de recursos con qué subsistir. Pero ésta podía quedar privada de referentes y contención en cualquier momento de su vida, sin que se viera por ello afectada su posición económica. Para una visión de ese proceso, véase Silvia ARROM “Desintegración familiar y pauperización: los indigentes del Hospicio de Pobres de la ciudad de México, 1795” en Pilar GONZALBO AIZPURU y Cecilia RABELL ROMERO **Familia y vida privada en la historia de Iberoamérica** El Colegio de México, Universidad Autónoma de México, 1996, Pág. 119-131.

⁶³² Un documentadísimo artículo sobre los antecedentes genealógicos y la trayectoria de esta mujer y de sus parientes flamencos se hallará en José María MARTINEZ VIVOT y Philippe SCHIETERE DE LOPHEM “Sangre Flamenca en los del Pozo Silva porteños. Ascendencia de Da. Helena de Witte y van Enghen, casada en Buenos Aires con D. Alonso del Pozo Silva y Garro” en **Genealogía, Revista del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas** Buenos Aires, 2008, N° 33, Págs. 259-324.

⁶³³ AGN IX-49-1-4 *Escribanías Antiguas (1732)*, f. 1011.

esposa del alférez real Joseph de Arregui, María Bazán de Tejeda, mujer de Gerónimo Gaete, y Margarita Jofré de Arce, esposa de Miguel Rodríguez de Sosa, eran respectivamente oriundas de Salta, La Rioja y San Juan y pertenecían a linajes locales de antigua raigambre y prestigio. No hay duda de que esos enlaces les aportaron una apoyatura para colocar mercaderías en el interior del virreinato, al poder recurrir a los contactos e influencias que podían facilitarles sus parientes políticos. No obstante, este tipo de uniones eran raras, quizás porque los padres de familia eran poco proclives a enviar a sus hijas a casarse a otra ciudad, donde alejadas de la protección que le daban los suyos quedaban a merced del amparo que podían recibir (o no) de la parentela de sus esposos. Quizás esa sea la razón que explique que casi no se conocen (por lo menos en el período que analizamos) matrimonios concertados entre los miembros de las familias prominentes de Buenos Aires con las de ciudades tan próximas como podían serlo Santa Fe y Córdoba.

Ahora bien, ¿cuál era la posición económica de estos hombres y de sus esposas al concertarse el matrimonio? ¿Podemos hablar, como lo hace Mauro Hernández para Madrid, de la existencia de una “endogamia económica” o predominaron, en cambio, las uniones desparejas? Para responder a estas preguntas, deberá confrontarse el volumen y las características de los bienes aportados por cada cónyuge al momento de contraer el matrimonio. Contamos con información para 131 de las 180 parejas conocidas: aunque la misma carece de homogeneidad, ya que la densidad de los datos de que disponemos para cada una de ellas es ciertamente muy desigual, el porcentaje no deja de ser representativo. Tres son las fuentes documentales de las que nos hemos nutrido. En primer lugar, la cláusula de los testamentos en que usualmente se enumeran los bienes que cada consorte “entró” al matrimonio, que fueron por lo general descritos sin demasiados pormenores pero a veces incluyen la tasación general de los mismos, lo cual resulta de gran valor, ya que en ocasiones estos no fueron objeto de escrituración al contraerse las nupcias y no figuran en otra parte. En segundo, las escrituras de dote, que en su inmensa mayoría se encuentran protocolizadas y que se caracterizan por su detallismo. Por último, las escrituras de capital, que consistían en la declaración de bienes que hacía el varón antes de contraer nupcias, con el objeto de evitar que estos fueran confundidos más tarde con los gananciales, y que aparecen en los protocolos notariales bastante más raramente que las dotes.

En cierto número de casos se conoce el valor monetario de los bienes que ingresaron ambos contrayentes, lo cual nos permitió establecer tendencias respecto a cuál fue el

aporte patrimonial de cada cónyuge en el inicio de la vida en común. En ellos, las mujeres contribuyeron con un lote promedio de bienes valuado en 4021 pesos, mientras que el introducido por los hombres ascendía a 8475 pesos. La contribución de la esposa fue, entonces, algo menor a un tercio del patrimonio inicial de estas parejas. Tratándose en buena parte de las ocasiones de las más familias más opulentas de Buenos Aires, queda en claro que la contribución material femenina a las cargas del matrimonio fue moderada.

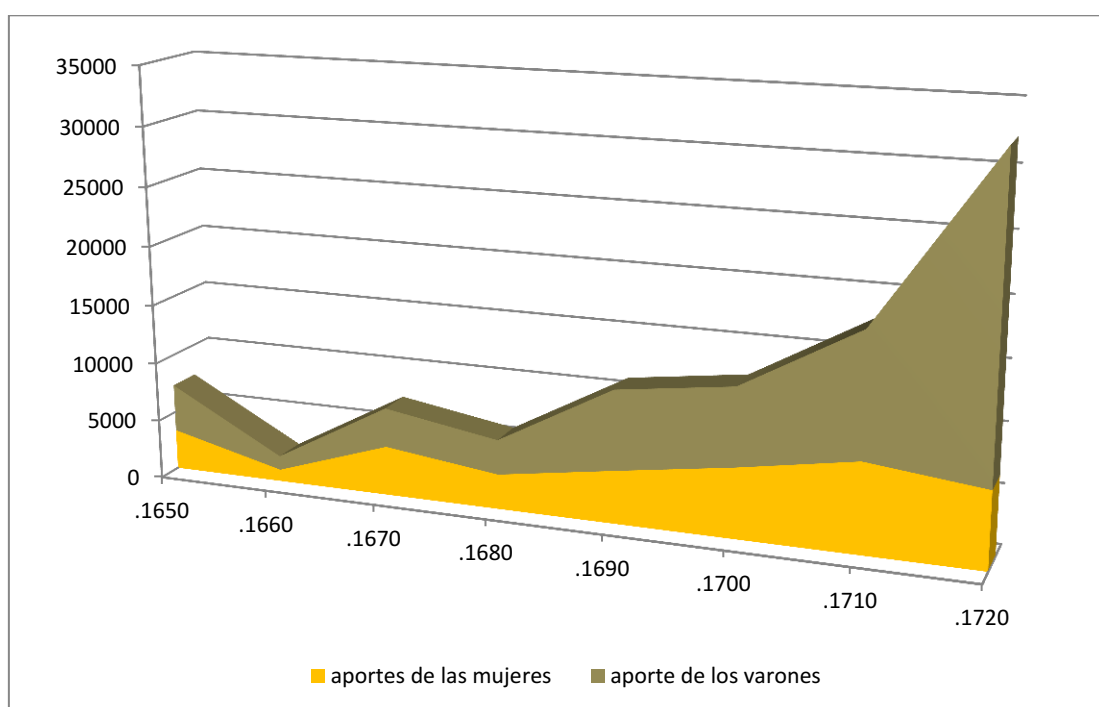
Estos guarismos deben ser analizados en términos de la “feria nupcial” local.⁶³⁴ En una ciudad portuaria como Buenos Aires, con una creciente afluencia de hombres jóvenes que supieron aprovechar las ocasiones de prosperar, no debieron faltarles a los padres de familia oportunidades para casar adecuadamente a sus hijas. No obstante, esa disponibilidad de candidatos no llegó al extremo de que no tuvieran que comprometer parte de sus bienes para atraer a quienes habían demostrado poseer habilidades empresariales o políticas. Para aquellos que habían arribado desde la península y acumulado algunas riquezas, por su parte, desposar a una muchacha nacida en la ciudad era la llave a la condición de vecinos. Por esas razones no llama la atención que en el 75% de los casos, el aporte del hombre al patrimonio conyugal superara, y a veces holgadamente, al de la mujer. Un caso ilustrativo fue el de Antonio Gallegos, un comerciante burgalés que había llegado a la ciudad como factor de un navío de registro y que desposó en 1721 a Sabina de Ramila, la hija de un oficial de la guarnición. El padre de la muchacha ofreció una modesta dote valuada en 2060 pesos, que se componía de dos esclavas, algunos géneros de Castilla, el ajuar de la novia y la promesa entregarle 1000 pesos en plata en el transcurso de dos años. El patrimonio de Gallegos al casarse fue estimado en 70.291 pesos, por lo que el aporte material de la novia podría parecer irrisorio. Pero gracias a este casamiento se lo consideró miembro de la vecindad y dos años más tarde, el cabildo le eligió para que desempeñara el cargo de alcalde ordinario.

Cabe preguntarse si esa desproporción entre los aportes de uno y otro cónyuge al matrimonio se mantuvo invariable a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta que las nupcias de nuestros cabildantes se celebraron entre la década de 1650 y la de 1720, es

⁶³⁴ Preferimos hablar de “feria nupcial” en vez de “mercado matrimonial”. En tal sentido, seguimos las consideraciones de Mc Caa, quien considera que este último “sugiere un terreno de juego parejo entre los numerosos compradores y vendedores, novios y novias por igual”. La “feria”, en cambio, sugiere la concertación del mejor trato entre las partes dentro del marco de las restricciones sociales, que eran con frecuencia favorables al varón. Véase Robert Mc CAA “Tratos nupciales...” Págs. 22-23.

posible medir el valor monetario de dichas contribuciones en el transcurso de varias décadas. En el Gráfico N° 18 hemos volcado el valor promedio de los aportes por década y por sexo. En él se puede apreciar que los mismos mantienen una cierta paridad en las décadas de 1670 y 1680, pero el de los varones tiende a crecer desde finales del siglo XVII y se dispara en la tercera década del siglo siguiente. Puede presumirse que estos hombres, entre los cuales había un significativo número de peninsulares radicados en la ciudad durante su juventud, necesitaron hacer ostensibles sus riquezas para ser aceptados: para ellos, el ascenso económico se convirtió en requisito para conseguir su inserción en las parentelas locales influyentes. Esa exhibición era característica de los inmigrantes enriquecidos: cuando las familias prominentes los incluían en el círculo de selección conyugal, se debía a que se habían convertido en pretendientes atractivos por la fortuna que habían acumulado o por sus habilidades empresariales.⁶³⁵

Gráfico 18 – Evolución del importe ingresado al matrimonio por los cabildantes y sus esposas



Fuente de los datos: Testamentos, escrituras de dote y escrituras de capital en AGN Serie Escribanías Antiguas y Registros de Escribano N° 2 y N° 3, varios tomos.

⁶³⁵ Eugenia RODRIGUEZ SAENZ “Hemos pactado matrimoniarnos. Familia, comunidad y alianzas matrimoniales en San José (1827-1851)” en Pilar GONZALBO AIZPURU y Cecilia RABELL ROMERO **Familia y vida privada en la historia de Iberoamérica...** Págs. 182-183

Otro aspecto que merece ser analizado es la composición de las contribuciones al matrimonio. Lo primero que llama la atención es la escasa presencia de plata amonedada o labrada entre los bienes ingresados por los varones. Ello pudo deberse a un subregistro, pero no debe descartarse que se hallaran atravesando un momento de iliquidez a causa de la escasez de moneda circulante y de la inversión en mercancías. Un número comparativamente pequeño de mujeres aportó, en cambio, cantidades variables en plata, que promediaron los 2117 pesos *per cápita*. Nos hallamos, pues, ante dos situaciones contrapuestas: por un lado, la del padre de la novia, que había atesorado o pedido prestado dinero para incluirlo en la dote de su hija; por otro, la del novio, que se hallaba falto de metálico porque se estaba iniciando en los negocios o había invertido el que tenía en ellos.

Las mujeres superaron a los varones en otro rubro: el aporte de negros y mulatos al patrimonio conyugal. Mientras que sólo 16 varones declararon haber estado en posesión de esclavos en el momento de casarse, 52 mujeres los llevaron consigo a su nuevo hogar. Los que poseían aquellos sumaron 68, mientras que los que fueron incluidos en las dotes treparon a 97. Lo que se aprecia en el caso de los hombres es que hubo una concentración en muy pocas manos, mientras que casi la mitad de las mujeres aportó mano de obra esclava a la unión conyugal. Esto último se debió a que los padres quisieron asegurarse de que sus hijas estuviesen liberadas de los trabajos domésticos y no “mancharan” sus manos con labores manuales, preocupación muy extendida entre los españoles de los sectores acomodados.

Un tercer rubro fue el de los inmuebles urbanos. Un número considerable de las esposas los aportaron al matrimonio: 27 de ellas recibieron de sus padres una casa o un grupo de habitaciones en condiciones de ser habitados, mientras que a otras les fueron entregados 20 solares para edificar en ellos; tan sólo 7 de los varones, en cambio, declararon poseer una casa. Como explicaremos más adelante, ha podido apreciarse en los estratos altos de la sociedad porteña una cierta tendencia a la *uxorilocalidad*: la nueva pareja solía afincarse en un sector de la casa de los padres de la esposa, en las cercanías de ella o en otras casas que habían pertenecido a su familia. Los lotes y viviendas a que nos referimos antes, en efecto, fueron con frecuencia desgajamientos de conjuntos habitacionales que pertenecían a los padres o parientes de la contrayente. Estos proporcionaban a la nueva pareja una residencia propia y esclavos a su servicio, pero al precio de mantenerlos bajo su influencia.

Un último rubro a considerar fue el de los bienes rurales. Su importancia es destacable porque, como veremos, casi todos los cabildantes llegarían a ser propietarios de una chacra o de una estancia en algún momento de su vida. En el momento de contraer matrimonio, 15 individuos ya lo eran. Otros dijeron ser dueños de yeguas, mulas y ganado vacuno pero no declararon tierras propias, posiblemente porque aún no habían heredado ni adquirido una parcela de terreno y sus animales permanecían aún mezclados con las haciendas de la familia. En cuanto a las esposas, 20 de ellas incluyeron tierras de chacra o estancia en sus dotaciones, y otras, más pobres quizás, aportaron un número variable de cabezas de ganado yeguarizo, vacuno u ovino. Este traspaso de inmuebles rurales y de semoviente confirma la significatividad de los mismos como parte del patrimonio de los miembros de la oligarquía dirigente. La cría de mulas o el cultivo de trigo eran actividades no sólo aceptadas sino comúnmente emprendidas por estos, como lo sugieren los frecuentes pedidos de licencia de regidores y alcaldes para retirarse a sus haciendas para supervisar faenas como la cosecha o la yerra.

Al comparar los aportes de los contrayentes al patrimonio conyugal nos hallamos con situaciones divergentes. En el momento de casarse, algunos de los varones ya habían amasado fortunas considerables, mientras que otros recién se estaban iniciando como mercaderes o ganaderos. La contribución de las mujeres, si se tiene en cuenta el volumen y el valor monetario de los bienes que trajeron consigo, se caracterizó por su moderación, pero si se analiza la alianza desde una perspectiva no material, lo compensaron con una mejora en la posición de sus esposos, ya que sus familias se hallaban por lo general mejor insertadas en las redes vinculares que estos.

El caudal de los bienes introducidos por las porteñas no fue ni de lejos comparable con el que se incluyó en las dotes en ciudades opulentas como México, Lima, Potosí o Cuzco. A comienzos del siglo XVIII, el valor promedio de la dote de la mujer de un regidor limeño fue estimado en 30.722 pesos.⁶³⁶ En Buenos Aires, ni siquiera las dotes más abultadas de que tenemos noticia alcanzaron esa suma, habiéndose estimado el valor promedio de las que fueron protocolizadas en 6737 pesos. Ello no nos sorprende, pues todo parece indicar que en nuestra ciudad la dotación de la esposa estuvo menos dirigida a apuntalar los negocios de su consorte que a proporcionar a la nueva pareja el

⁶³⁶ Guillermo LOHMANN VILLENA **Los Regidores Perpetuos del Cabildo de Lima (1535-1821) Crónica y estudio de un grupo de gestión** Publicaciones de la sección Historia de la Excm. Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1983.

estándar de vida que correspondía a su posición socio-estamental y a que ganaran con ello la aceptación de sus pares. Ese estándar, ciertamente, era menos espléndido que el de las capitales virreinales y por tal razón requería de una inversión bastante menor: el importe de las dotes en Buenos Aires se hallaba en consonancia con ello.

Las dotes protocolizadas

En los territorios castellanos de la monarquía hispánica regía la divisibilidad hereditaria de los bienes, que otorgaba igualdad de derechos a varones y mujeres. Esto convirtió al matrimonio en un canal de transferencia patrimonial, a la vez que en un vehículo para la conformación de coaliciones entre los grupos masculinos.⁶³⁷ Esa movilización de bienes de una generación a otra se hacía en el caso de las mujeres en dos tiempos. Una parte de ellos solía serle entregada por medio de una dote cuando contraían matrimonio; los restantes, si los había, los recibían luego de producirse el deceso de sus progenitores.

Era usual que cuando una muchacha de la oligarquía urbana se casaba, sus padres (o el pariente que los sustituía) se presentaran en una notaría para que protocolizar su carta de dote. De esa forma, la transferencia era convalidada por las firmas de su esposo, del escribano y de dos o más testigos, ofreciendo un detalle de los bienes entregados y el precio en que habían sido tasados. A menudo se indicaba que la intención de esta operación era la de ayudar a la nueva pareja a sobrellevar las “cargas” del matrimonio, pero su verdadero propósito era asegurarse de que la novia disfrutara de un buen pasar económico mientras estuviera casada, al igual que brindarle recursos con que afrontar la viudez, ya que el valor de la dote le era restituido en forma íntegra luego del deceso de su marido.⁶³⁸ De esa manera quedaba garantizada su seguridad material. Como contraparte, la dote otorgaba al padre de familia un mayor control sobre sus hijas, ya que al tener la disposición absoluta sobre los bienes familiares éste decidía cuál de ellas

⁶³⁷ Francisco CHACON JIMENEZ “La familia en España: una historia por hacer” en James CASEY y otros **La familia en la España mediterránea (siglos XV-XIX)** Centre d’Estudis d’Historia Moderna “Pierre Vilar”, Crítica, Barcelona, 1987, Págs. 30-32.

⁶³⁸ La dote se restituía antes de que se liquidaran las deudas que el difunto había dejado pendiente y se repartieran los bienes sobrantes a los herederos. La Iglesia respaldaba el derecho de la mujer a recuperar el valor de su dote y a heredar los bienes gananciales luego de la muerte del esposo, ya que eran éstas quienes a su muerte destinaban los legados más cuantiosos a conventos y mandas piadosas. Rechazó, a la vez, la adopción de niños por parte de parejas estériles y la habilitación de los hijos bastardos como herederos legítimos, ya que tanto los unos como otros la alejaban de esos legados, que tenían lugar cuando hombres y mujeres no contaban con herederos forzosos.

se casaba y en qué momento, a la vez que se hallaba en posición de enviar a otras al convento para que tomaran los hábitos o de relegarlas a una vida de soltería.⁶³⁹ Una joven que no aceptaba el candidato propuesto por su padre debía resignarse no sólo a ser apartada de la herencia, sino también a no contar con bienes dotales.

El hecho de que una muchacha hubiera sido dotada no la apartaba de la sucesión de los bienes paternos, pero se consideraba que había recibido una porción de estos en concepto de adelanto. Como explica Jack Goody, la dote era una de tantas formas de transmisión de bienes a los herederos, sólo que no se sustanciaba tras la muerte del propietario de dichos bienes sino en vida de éste. Se trataba de lo que correspondía a la mujer en un sistema en que la propiedad se transmitía de la pareja conyugal a los hijos de ambos sexos, proporcionado a cuenta de lo que le tocaría en herencia a la muerte de sus padres.⁶⁴⁰ En cuanto a la significancia económica de la dote, en el caso de la América colonial española todavía se discute si se constituía en un traspaso de riquezas destinado a consolidar la posición del marido o si, por el contrario, preponderaba en ella la función de proporcionarle ajuar y protección a la esposa. Esta falta de certeza responde al carácter ambiguo de ciertos elementos que normalmente eran incluidos en las cartas dotales, como lo eran las alhajas o el servicio de platería, los cuales en su carácter de objetos suntuarios favorecían la imagen de status elevado que se quería proyectar, pero también se constituían en un fondo de resguardo para situaciones de emergencia.⁶⁴¹

Este adelanto de bienes acarreaba la necesidad de reorganizar el patrimonio familiar. Aunque la aparición de un candidato adecuado era un hecho fortuito, eso no significaba que los padres no actuaran con cierta previsión, preparándose para ello desde el momento en que las hijas entraban en su primera juventud y se las consideraba en condiciones de “tomar estado” —o lo que es lo mismo, en que se convertían en jóvenes casaderas—. Era una eventualidad de naturaleza menos azarosa, por lo menos, que el

⁶³⁹ Christine HUNEFELDT “La dote en manos limeñas” en Pilar GONZALBO AIZPURU y Cecilia RABELL ROMERO **Familia y vida privada...** Págs. 255 y ss.

⁶⁴⁰ Jack GOODY **La evolución de la familia...** Págs. 281-282.

⁶⁴¹ Para la temática de la dote en América española colonial puede consultarse, entre otros: Asunción LAVRIN “La mujer en la sociedad colonial hispanoamericana” en Leslie BETHEL (comp.) **Historia de América Latina**, tomo IV, Págs. 111-115; Christine HUNEFELDT “La dote en manos limeñas” en **Familia y vida privada...** Págs. 255-287; Pilar GONZALBO AIZPURU “Las cargas del matrimonio. Dotes y vida familiar en la Nueva España” en Id., Págs. 207-225; Paul RIZO-BOYLAN “La familia noble en la Lima Borbónica: patrones matrimoniales y dotales” en **Boletín del Instituto Riva-Agüero** Pontificia Universidad Católica del Perú, 1989, N° 16, Págs. 265-302; Eduardo CAVIERES y René SALINAS **Amor, sexo y matrimonio en Chile tradicional** Universidad Católica, Valparaíso, 1991, Págs. 35-50; Daisy RIPODAS ARDANAZ **El matrimonio en Indias: realidad social y regulación jurídica** Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Buenos Aires, 1977.

reparto de los bienes en herencia, determinado por un suceso imprevisible: la muerte de uno de los progenitores. Cuando se presentaba un pretendiente que se ajustaba a las expectativas del padre de familia, éste último seguramente ya había atesorado parte del ajuar y de las alhajas destinadas a la futura novia y movía contactos dentro y fuera de la parentela para completar la dote, todo lo cual requería de esfuerzo y recursos. Semejante despliegue presuponía que la unión fuera duradera e indisoluble, pues de haber ocurrido lo contrario, la parentela se hubiera visto en la incomodidad de recalcular sus estrategias patrimoniales una y otra vez. Uno de los móviles de las trabas puestas al divorcio por la Iglesia era, precisamente, el de dar solidez al patrimonio conyugal.

La entrega de los bienes dotales no siempre ocurría al mismo tiempo que se celebraban las nupcias, sino que en ocasiones se demoró por varios años. No era infrecuente que el traspaso de una parte de los mismos se realizara al concretarse la unión y que el resto quedara en promesa, a la espera de los resultados de un negocio aún no concretado. Juan Maciel del Águila, por ejemplo, firmó el contrato de dote de su hija Catalina a los dos meses de celebrado su matrimonio con Martín Segura. En el mismo se incluían 1600 pesos que su yerno recibiría en dos años, los cuales, según este último aclaró, “*me ha de entregar del procedido de una tropa de mulas que ha de enviar el dicho mi suegro dentro de un año a las Provincias de Arriba*”.⁶⁴² Algo similar le sucedió a Vicente de Vetolaza y Luna y a Juan Martín de Mena y Mascarúa cuando desposaron a las hijas de Antonio Meléndez de Figueroa, quien prometió a cada uno de sus yernos una suma cercana a los 4000 pesos luego de que se vendieran unas mulas que había enviado a las tabladitas de Salta.⁶⁴³

La sustanciación de una dote al momento del matrimonio no era, por cierto, el único canal de transmisión patrimonial. Sucedió que algunas jóvenes huérfanas ya estaban entonces en posesión de la herencia de sus padres y no se consideró necesario proceder a la formalidad de extender una carta dotal. Una situación parecida se suscitó con las viudas que disponían de los gananciales de un matrimonio anterior. No faltaron, por último, las mujeres que no recibieron escritura de dote por la exigüidad de los bienes que traían consigo. Antonio Barragán declararía que al casarse con Clara González Cabezas, “*no trajo mi mujer cosa alguna ni yo tampoco*”.⁶⁴⁴ Años más tarde, Luis Navarro sería regidor y ejercería otros cargos honrosos en el cabildo, pero al contraer

⁶⁴² AGN IX-48-8-1 *Escribanías Antiguas (1693)*, f. 399.

⁶⁴³ AGN Registro de Escribanos N° 2 de 1709-1712, fs. 608 y 610.

⁶⁴⁴ AGN Registro de Escribanos N° 2 de 1716-1719, fs. 182 y ss.

matrimonio con Petrona García no era más que un soldado de la guarnición, y en su testamento declararía que al iniciar una vida en común “*no trajimos más bienes que nuestra decencia*”.⁶⁴⁵

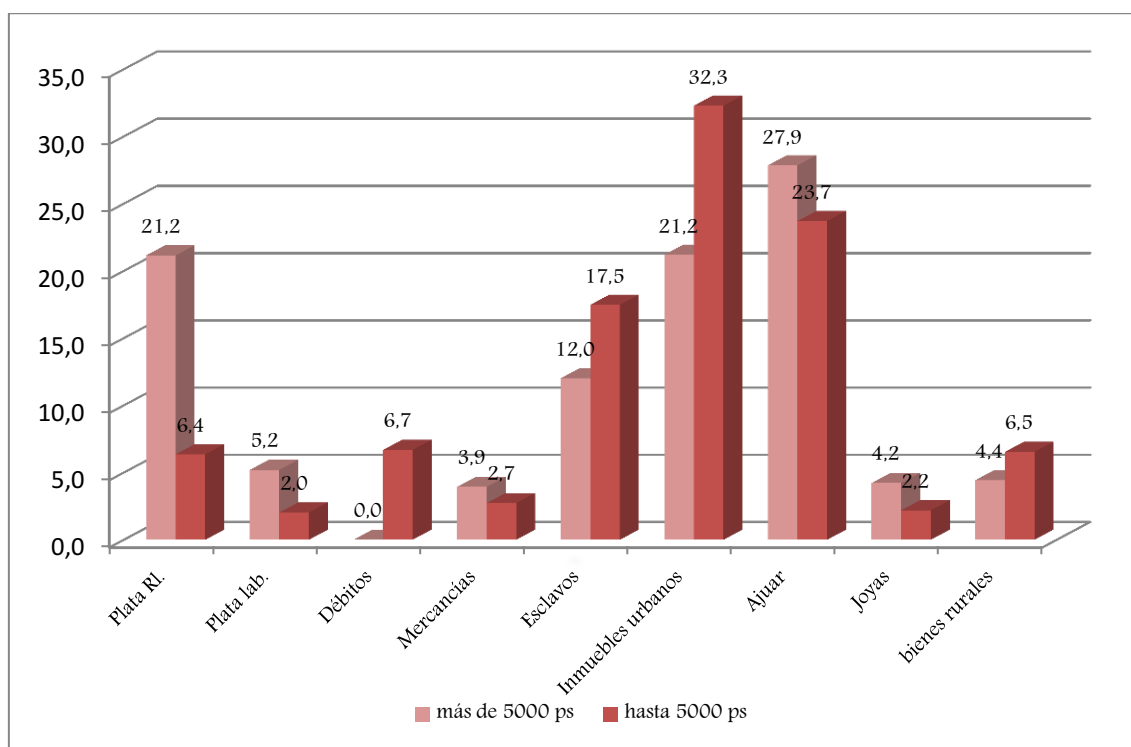
Hemos hallado en los registros notariales las cartas de dote de las esposas de 42 de nuestros cabildantes. En dos de esos casos poseemos las de sus esposas en sucesivas nupcias, por lo que el número de escrituras protocolizadas se eleva a 44. Al analizar el tipo de bienes que fueron inventariados fue posible comprobar lo afirmado anteriormente: que la dotación estuvo principalmente dirigida a asegurar el estilo de vida que correspondía a la posición socio-estamental de la pareja, y sólo en forma secundaria a promover las empresas del esposo. Al promediar el monto de esas dotes nos hemos encontrado con que el elemento más apreciado fue el ajuar de la novia, que incluía sus vestidos, el mobiliario y demás menaje doméstico (26,9%), mientras que el segundo puesto correspondió a los inmuebles urbanos (22,9) y el cuarto puesto a los esclavos (13,2). Estos tres renglones, que apuntaban a sostener los estándares de la pareja, sumaron las dos terceras partes del monto promedio de una dotación. En cuanto a la plata amonedada, que suponemos incluida por el suegro con el fin de impulsar los negocios del contrayente, no ocupó sino el tercer lugar (18,2). Otros renglones fueron, en escala descendente, los bienes rurales (4,7) la plata labrada (tanto en barras como en menaje, 4,5), las mercancías (4,3), las joyas (3,8) y las escrituras de débito firmadas por terceros (1,5). Algunos de estos rubros, tal como ya advertimos, tenían una función ambigua. La platería y las joyas, tan apropiados para la ostentación, podían convertirse sin embargo en bienes fungibles, a los que se podía recurrir en momentos de iliquidez. El papel de algunas mercancías tampoco queda muy claro, por ejemplo cuando se trataba de un surtido reducido de textiles europeos, que podía ser puesto a la venta o bien utilizado en la confección de vestidos para los miembros de la familia.

Estos valores promedio esconden tras de sí una realidad que distaba de ser uniforme. Basten un par de ejemplos: mientras que la dote de Teresa Gámiz de las Cuevas, esposa de Antonio Díaz, fue tasada en apenas 441 pesos y apenas constaba de un lote de terreno y de algunos vestidos de su uso, el monto de las que recibieron dos de las mujeres del general Miguel de Riblos, María Leocadia de Torres y Gaete y Josefa Rosa de Alvarado, ascendió respectivamente a 21.467 y 24.447 pesos, con inclusión de costosas alhajas, plata labrada y amonedada, vestidos finos, mobiliario y numerosos

⁶⁴⁵ AGN IX-49-2-7 *Escribanías Antiguas (1753)*, fs. 683 y ss.

esclavos. Pero aunque la situación económica de los padres de la novia podía ser contrastante, detrás de ella existía una misma aspiración: la de garantizar a sus hijas una vida desahogada. No obstante, con la finalidad de analizar más de cerca esas diferencias, hemos establecido dos grupos de dotes: las que fueron tasadas hasta en 5000 pesos y las que superaron esa suma. La composición promedio de las mismas podrá apreciarse en el Gráfico N° 19.

Gráfico 19 – Composición de las dotes en grupos de hasta 5000 pesos y de más de 5000 pesos



Fuente de los datos: Testamentos, escrituras de dote y escrituras de capital en AGN Serie Escribanías Antiguas y Registros de Escribano N° 2 y N° 3, varios tomos. Expresados en porcentajes.

Es indudable que los individuos que recibieron de sus mujeres dotes de más de 5000 pesos estaban ya afianzados económicamente, lo que justifica que dos de los elementos que podríamos juzgar necesarios para asegurar un estándar de vida acomodado –una vivienda y esclavos– tuvieron un lugar no tan destacado. Creemos que en este caso los contrayentes pudieron ofrecerle esas comodidades a sus esposas sin necesitar de la colaboración de sus suegros, pues ya las habían conseguido antes del matrimonio. Fue importante, por el contrario, la presencia de plata amonedada, plata labrada y

mercancías entre los bienes dotales: si los suegros pudieron dedicarse a solventar con ellas los negocios de sus yernos fue porque no necesitaban hacer una contribución material para consolidarlos socialmente. En las dotes de hasta 5000 pesos, en cambio, se aprecia cómo los padres de la novia reforzaron la inversión en inmuebles y esclavos a expensas del ajuar, procurando que la nueva pareja participara de los estándares de vida propios de la élite, de los que posiblemente aún no disfrutaba plenamente. Otro aspecto notable en este segundo grupo es que la transferencia de escrituras de débito suplió a la entrega de sumas en plata, lo que indica que la disponibilidad de metálico de los dotantes era limitada, confirmando que existía una circulación diferenciada de moneda entre los distintos estratos de la población. Respecto al lugar que ocuparían años más tarde en el cabildo, el primer grupo se compuso preferentemente de aquellos que habrían de desempeñar empleos de honra como regidurías y alcaldías ordinarias, mientras que los que fueron llamados a desempeñar oficios menores –alcaldías de la Hermandad y mayordomías– preponderaron en el segundo grupo.

Retornemos ahora a las tendencias generales. Uno de los objetos primordiales de la dote era proporcionarle un ajuar a la recién casada, en el que su indumentaria ocupaba un lugar destacado. En casi todos los inventarios aparecen camisas, polleras y rebozos, a los que se agregaban mantos y pañuelos, guantes y abanicos, enaguas, corpiños, medias y calcetas. Variaban la calidad y el precio de cada prenda, así como la utilidad que pretendía dársele: algunas eran sólo adecuadas para su uso en el ámbito hogareño, mientras que otras habían sido confeccionadas para ser exhibidas públicamente. Una mujer de escasos recursos como lo fue Gerónima de Castro, esposa de Lázaro Rodríguez Flores, se contentó con poco más que “*un vestido para la Iglesia de mujer y un manto nuevo*” y “*un vestido para casa de lana*”.⁶⁴⁶ En cambio María Rosa Avellaneda, esposa de Juan de Samartín, recibiría de su padre, el opulento mercader Gaspar de Avellaneda, un vestido de tisú dorado, uno de tisú de seda y otro de damasco de Holanda, entre un sinnúmero de polleras, casacas, mantellinas y tocados.⁶⁴⁷ A partir de 1703, en que se estableció en Buenos Aires el Real Asiento francés, la plaza se vio abarrotada de textiles europeos, algunos traídos de contrabando por los buques negreros y otros llegados en los navíos de registro. La indumentaria femenina incluida en las dotes aumentó a partir de entonces en variedad y en número de piezas, con una abultada mención a prendas de vestir confeccionadas con géneros de ultramar como la bretaña, el

⁶⁴⁶ AGN IX-48-6-4 *Escribanías Antiguas (1669-1671)*, fs. 304 y ss.

⁶⁴⁷ AGN IX-48-9-6 *Escribanías Antiguas (1713-1715)*, fs. 377 y ss.

ruán, el tafetán, la holandilla o el cambrai. Al parecer esa abundancia también influyó sobre las modas. Provocó que el estilo mesurado de las porteñas del siglo XVII, cuyos rasgos esenciales eran la sobriedad en las líneas y en los colores de las prendas, fuera paulatinamente abandonado y se imitara cada vez más la usanza francesa en el vestir.⁶⁴⁸

Dentro del ajuar se incluían el mobiliario y los servicios de mesa y de cocina. Era corriente que fueran los padres de la novia quienes aportaran el lecho para la pareja. Algunos se esforzaron por proporcionales una cama con dosel, y entre las más ricas se destacaban las cujas fabricadas en Cajamarca, con colgaduras de telas ricas, respaldos de raso, pilares que imitaban a las columnas salomónicas y rodapiés. Iban acompañadas normalmente por colchones, frazadas, sobrecamas, sábanas de hilo con encajes flamencos y almohadas. El amueblamiento de la casa se completaba con mesas, sillas, armarios y escritorios, que aparecen con variada frecuencia en los inventarios de las cartas de dote, al igual que los utensilios de cocina y algunos recipientes como frascos y tachos. El servicio de mesa fue objeto de particular atención. Como era exhibido a las visitas, a menudo se invirtió excesivamente en él. El que recibió Juan de Zamudio de su esposa María Josefa Pesoa de Figueroa, por ejemplo, constaba de fuentes, platos y candeleros de plata y fue valuado en 430 pesos.⁶⁴⁹

En el ajuar no faltaban algunos objetos de uso ritual. Sabemos los valorados que eran la virginidad y el recogimiento en las mujeres solteras de la élite, tanto más cuando sus parientes estaban interesados en que concertaran un matrimonio honorable.⁶⁵⁰ Una vez casadas, se esperaba que siguieran mostrándose recatadas en público y que se volcaran al rezo y a la devoción en el interior del hogar. Esas prácticas piadosas se reflejan en las dotes: no era infrecuente que incluyeran relicarios, pequeñas imágenes de bulto, crucifijos y cuadros de vírgenes y santos. A veces se trató de obras artísticas: al casarse con el futuro regidor Juan de la Palma, Paula Gaete llevó a su nueva casa doce pinturas de ángeles traídas del Cuzco, mientras que la dote de Isabel Fernández Parra, esposa de Pablo González de la Cuadra, incluyó doce cuadros que narraban la historia de Sansón, valuados en 300 pesos.⁶⁵¹ La mayor parte de estas mujeres apenas sabía firmar, por lo que no podía dedicar su tiempo a las lecturas piadosas y su devoción se veía limitada a las plegarias. Sólo sabemos que una de ellas, Josefa Rosa de Alvarado, había sido

⁶⁴⁸ Nelly PORRO, J.E. ASTIZ y María Margarita ROSPIDE **Aspectos de la vida cotidiana en el Buenos Aires virreinal** Universidad de Buenos Aires, 1982, Tomo I, Págs. 342 y ss.

⁶⁴⁹ AGN IX-48-9-6 *Escribanías Antiguas (1713-1715)*, fs. 63 y ss.

⁶⁵⁰ Esa valoración por la virginidad decrecía cuando la unión se basaba en el consenso o el afecto entre los contrayentes; Jack GOODY **La evolución de la familia...** Pág. 290.

⁶⁵¹ AGN IX-48-9-5 *Escribanías Antiguas (1707-1708)*, f. 144.

educada por sus tutores en un beaterio y recibido allí una esmerada formación religiosa. Cuando contrajo matrimonio con Miguel de Riblos, su dote incluyó 23 libros, todos ellos piadosos, entre los que se destacaban la vida de Santa Margarita y las Meditaciones de San Agustín.⁶⁵²

Tan sólo 7 de las 44 dotes analizadas no incluyeron esclavos. Aunque la presencia de los asentistas franceses e ingleses en Buenos Aires abarató sensiblemente el precio de los negros traídos del África, la mayor parte de ellos procedía de los planteles familiares y no de la compra. Predominaron los mulatos criados en casa de la novia, las mujeres acompañadas de hijos pequeños o los muchachos que recién asomaban a la adolescencia. Todos ellos se caracterizaban por su docilidad y por una probable relación de familiaridad con su ama. Esto indica que se pretendían dos cosas: que la joven esposa dispusiera de mano de obra ya capacitada para auxiliarla en las labores domésticas, o bien de jovencitos a los que pudiera formar a su gusto. No descartamos que el padre de familia hubiera seleccionado desde tiempo atrás a parte de su esclavatura para destinarla a servir a alguna de sus hijas cuando se casase. A este respecto, es ilustrativa la decisión tomada por el regidor Tomás Monsalve y por su esposa, que advirtieron al resto de su familia que dos de las esclavas nacidas en su casa, llamadas Ángela y Brígida, estaban reservadas a sus hijas Margarita y María, a quienes serían entregadas cuando contrajeran matrimonio.⁶⁵³

Dos de cada tres esposas trajeron en propiedad inmuebles urbanos: en unos casos se trató de un lote de terreno, en otros de una vivienda de escuetas dimensiones y sólo excepcionalmente de un caserón con numerosos cuartos y dependencias. Esto último fue lo que sucedió en el caso de Bernarda Revilla, mujer de Antonio de Igarzábal, quien recibió de su padre una mansión con siete cuartos, dos cocinas, dos despensas y una alacena, valuada en 4200 pesos.⁶⁵⁴ Varias de las casas incluidas en las dotes contaban con tiendas con salida a la calle, adecuadas para que el yerno montara algún emprendimiento o las alquilara a algún trabajador manual. Poseían tiendas, por ejemplo,

⁶⁵² AGN IX-48-9-1 *Escribanías Antiguas (1702-1712)*, f. 94.

⁶⁵³ Tomás Monsalve y su esposa, María de la Rosa y Melo, “hubieron y procrearon seis hijos y tres hijas, la una de 18 años nombrada María y la otra de 17 nombrada Margarita de Monsalve, a quienes tenía tratado dar estado de matrimonio, y por cuanto tiene una negra nombrada Ana que compró a Monsieur Hays con dos hijas, la una nombrada Ángela como de 18 para 19 años, con la cual hizo dicha compra en 600 pesos, y la otra llamada Brígida de 13 a 14 años, y desde que compró a la dicha Ana con su cría Ángela siendo de tres años la dicha, su esposa la adjudicó la dicha Ángela a la referida María, y a la dicha Margarita la referida Brígida desde que nació...” AGN IX-49-1-1 *Escribanías Antiguas (1719-1720)*, f. 565v.

⁶⁵⁴ AGN IX-48-9-4 *Escribanías Antiguas (1705-1707)*, f. 893.

las que recibieron como parte de la dote de sus esposas Juan de la Palma, Pablo González de la Cuadra, Lucas Manuel Belorado, Juan del Pozo y Silva, Diego Sáenz y Andrés de Ávila. También había una tienda y una trastienda en la fracción de la casa que Pedro de Izarra Gaete entregó a Pascual de Torres Salazar cuando éste casó con su hermana Francisca, habiéndose reservado aquel la otra mitad de los cuartos para seguir viviendo con sus otros hermanos solteros.⁶⁵⁵

Ya hemos advertido que esta estrategia de subdividir un inmueble no era inusual y constituía una forma de reducir los costos de la dote, obligando a la nueva pareja a residir en las inmediaciones de la familia de la esposa. La abuela de Inés Ledesma, Polonia de Cáceres, entregó a ésta la casa que había habitado hasta entonces pero se reservó un cuarto para sí. Incluyó en la carta de dote de Inés una cláusula en que obligó a Mateo Verdún, el esposo de ésta, a proporcionarle *“una persona, ora varón o fêmeina, liberta o esclava, para que la misma me asista a servirme de lavar, cocinar y otros ministerios comunes y ordinarios que precisamente son necesarios a cualquier persona principal y falta de caudal como lo estoy y soy”*.⁶⁵⁶ También Paula de las Casas, suegra de Francisco de Tagle Bracho, incluyó una casa en la dote de su hija, con la condición de seguir ocupando una habitación para seguir viviendo en ella: *“El aposento dicho, con el sitio que le corresponde para la calle, los reservo para mí mientras Dios me diere vida”*.⁶⁵⁷

Hubo otros padres que recurrieron a separar una porción del solar familiar para que la nueva pareja construyera allí una vivienda propia. Martín Segura recibió por dote de su esposa un sitio *“a las espaldas de las casas de los dichos sus suegros”*.⁶⁵⁸ También se entregó a Amador Fernández de Agüero, Vicente de Vetolaza y Luna y Juan Martín de Mena y Mascarúa la propiedad de terrenos desprendidos de los solares que ya eran habitados por la familia de sus esposas.⁶⁵⁹

Aunque las evidencias aportadas por las dotes parecen indicar que hubo un cierto predominio de la *uxorilocalidad* (residencia de la nueva pareja junto a la familia de la esposa o en las inmediaciones de donde vivía ésta) y de la *neolocalidad* (residencia

⁶⁵⁵ La dote incluía *“un cuarto de solar y la mitad de sus casas y sitio en que vivo yo el dicho capitán Don Pedro de Izarra Gaete, que son cinco piezas entrando en ellas las tiendas de la esquina con su trastienda, una sala con su recámara, y otro aposento seguido que corre de este a oeste”*; AGN IX-48-7-6 *Escribanías Antiguas* (1689-1690), f. 341.

⁶⁵⁶ AGN IX-48-7-5 *Escribanías Antiguas* (1687-1688), fs. 374 y ss.

⁶⁵⁷ AGN IX-48-8-7 *Escribanías Antiguas* (1700), f. 41.

⁶⁵⁸ AGN IX-48-8-1 *Escribanías Antiguas* (1693-1694), fs. 399 y ss.

⁶⁵⁹ AGN IX-48-8-3 *Escribanías Antiguas* (1696-1698), f. 146; AGN Registro de Escribanos N° 2 de 1709-1712, fs. 608 y 610.

separada de ambas familias de origen) ello no significó que la alianza matrimonial provocara un debilitamiento de los lazos del esposo con su propio círculo parental. No debemos olvidar que buena parte de los contrayentes varones había nacido en la península y por tanto carecía de parientes de sangre en la ciudad, por lo que las únicas opciones de residencia con que contaban eran las que les ofrecían los parientes de su consorte. No obstante, también los cónyuges varones nacidos en Buenos Aires optaron por lo mismo, lo que demuestra que sus parientes no se vieron obligados a cederle parte de su patrimonio inmobiliario para prolongar los vínculos de dependencia luego de concertado el matrimonio. Era más bien la familia de la novia la que necesitaba apelar a ese recurso para atraer a un pretendiente que había demostrado poseer habilidades empresariales o políticas: era parte del costo de incorporar nuevos miembros masculinos a una parentela.

El pago de la dote fue, como sostiene James Casey, un sensible indicador de la posición de las familias que pretendían aliarse y del valor que suponía unirse a ellas.⁶⁶⁰ El Buenos Aires de comienzos del siglo XVIII no parece haber sido en ese sentido una excepción. Pero la elección de cónyuge fue un evento de por sí complejo, de cuyas motivaciones y negociaciones es muy poco lo que podemos entrever y mucho (quizás demasiado) lo que damos por supuesto. Detrás de una dote cuantiosa estamos tentados a suponer que existió la pretensión de enlazar una posición bien consolidada con otra que resultaba altamente promisoría. Pero ello no significaba necesariamente que el marido se hubiera guiado solamente por las posibilidades de ascenso que ofrecía esa unión y no por la atracción. Y cuando nos hallamos frente a una dote cuyo caudal en bienes o dinero fue escasamente significativo, tampoco debería presuponerse que esa parquedad era suplida por las prelacións sociales y contactos –la llamada “dote inmaterial”– que aportaba una empobrecida pero honorable familia política. Estos lugares comunes deben ser revisados, cuando no cuestionados. Por tal razón queremos remarcar el carácter tendencial de todo lo que hemos afirmado hasta ahora.

¿Cuál era el destino de los bienes dotales luego de celebradas las bodas? La administración de los mismos quedaba por entero en manos del esposo. En Castilla éste tenía plena capacidad de servirse de ellos mientras durase el matrimonio, sin que ningún freno jurídico pudiese impedírselo. Si la mujer disponía de bienes parafernales –es decir, que fueran propios y no hubiesen ingresado en su dote, como los que heredaba de

⁶⁶⁰ James CASEY **Historia de la familia...** Pág. 115.

sus padres estando ya casada— podía teóricamente administrarlos, pero los mismos se hallaban en realidad inmovilizados, ya que no se le reconocía capacidad legal para firmar contratos ni para disolver los ya existentes sin la licencia de su marido, quedando limitada a percibir sus frutos.⁶⁶¹ Aunque luego de la muerte de la esposa podía ser llamado a responder sobre la forma en que había gerenciado los bienes aportados por ésta, la autoridad marital sobre el patrimonio conyugal era prácticamente absoluta, al punto de que podía llegar a dilapidarlos sin que nadie pudiese interponerse.

Ese manejo arbitrario del patrimonio conyugal lo comprobamos al repasar la historia de una porteña que fue esposa de dos cabildantes: Tomasa Ruiz de Robles. El padre de ésta, Juan Ruiz de Ocaña, era descendiente de conquistadores y había servido al cabildo como alcalde de la Hermandad y mayordomo. Pero no era más que un pequeño hacendado y el hecho de que Tomasa aguardase hasta los 31 años para casarse quizás se debiera a que no pudo entregarle hasta entonces una dote. Su primer esposo fue el sargento mayor Juan del Pozo y Silva, alcalde provincial de la Hermandad y vecino de gran caudal, a cuya muerte ella no sólo recuperó el importe de su dote, sino que se le agregaron los gananciales, todo lo cual sumó 5267 pesos. He aquí un ejemplo de cómo la viudez podía colocar a una mujer en una situación más desahogada que al contraer sus primeras nupcias, favoreciéndola para negociar por ella misma una segunda unión más ventajosa. Su segundo marido fue otro vecino opulento, Francisco de Arroyo, que ejerció los empleos de alcalde ordinario y alférez real. Este, que en la década de 1680 se había enriquecido abasteciendo de alimentos y vestuario a la guarnición, ingresó al matrimonio 12.000 pesos en bienes y ofreció la décima parte de ellos en concepto de arras a su esposa, haciendo honor a la calidad de su persona. Pero pronto Tomasa debió empeñar todo lo acumulado en su matrimonio anterior para atender a su nuevo esposo, que padeció de violentos delirios hasta el momento de su muerte. Ya viuda, iniciaría pleito contra sus hijastros para recuperar sus bienes dotales, que según afirmó habían sido despilfarrados por los malos manejos de su consorte. En el momento en que testó, el litigio aún no había concluido y Tomasa ordenó a sus albaceas que no cesaran en sus reclamos: “...por fallecimiento de dicho Dn Francisco de Arroyo hubo mucha quiebra en dicha mi dote, por haberse disipado la mayor parte en la manutención de dicho mi

⁶⁶¹ Enrique GACTO “El grupo familiar en la Edad Moderna en los territorios del Mediterráneo hispánico: una visión jurídica” en en James CASEY y otros **La familia en la España mediterránea...** Págs. 39-42.

*segundo marido en la dilatada enfermedad de 12 años de demencia que tuvo, cuya quiebra es mi voluntad la ajusten y perciban dichos albaceas”.*⁶⁶²

La edad de las primeras nupcias y el ingreso a la dirigencia concejil

Al ocuparse del rol que tuvo el matrimonio para la oligarquía del Buenos Aires colonial, José Luis Moreno señaló que las estrategias que precedieron a los matrimonios tendieron a entretejer una red de relaciones destinadas a unificar el poder económico y el poder político. Este autor considera que el control del cabildo era uno de los objetivos privilegiados de quienes dominaban esa red, ya que podían manejar esa institución con mayor autonomía que a otras instituciones de la burocracia local.⁶⁶³ No obstante, dominado como se hallaba por una élite mercantil que se caracterizaba por su alta movilidad social, el ayuntamiento podría haberse visto sometido al mismo proceso de recambio, con la esporádica incorporación de los nuevos sectores ascendentes a la dirigencia concejil. Ciertamente esa rotación existió, pero el matrimonio sirvió como un instrumento moderador frente a la presión de esos sectores surgentes, que se veían obligados a compartir intereses y recursos, por lo menos durante una generación. Como ha afirmado otro estudioso de la intimidad en los tiempos coloniales, Ricardo Cicerchia, al convertirse en pieza de alianza entre parentelas, la mujer cumplía desde su posición subordinada una función estabilizadora.⁶⁶⁴

Ahora bien, hasta aquí se ha visto el rol del matrimonio desde una perspectiva de grupo, en que las decisiones personales estaban condicionadas por los intereses de la parentela. Pero es importante también establecer las implicancias que éste tuvo para los individuos. Cabe preguntarse, entonces, cómo incidió el matrimonio en las trayectorias individuales de los miembros de la dirigencia concejil. Ello genera un par de cuestiones a resolver. Una de ellas es estimar la edad que tenían los sujetos que estudiamos al momento de contraer las primeras nupcias, un indicador escasamente relevado al tratarse de los estratos altos de la sociedad porteña colonial, y menos aún en el caso de los varones. Esto nos permitirá deducir si los enlaces se producían durante la temprana juventud, una etapa en la vida del individuo en que se hallaba más afectado por las presiones familiares, o bien algo más tarde, cuando ya había realizado sus primeros

⁶⁶² AGN IX-48-9-7 *Escribanías Antiguas (1715-1718)*, fs. 718 y ss.

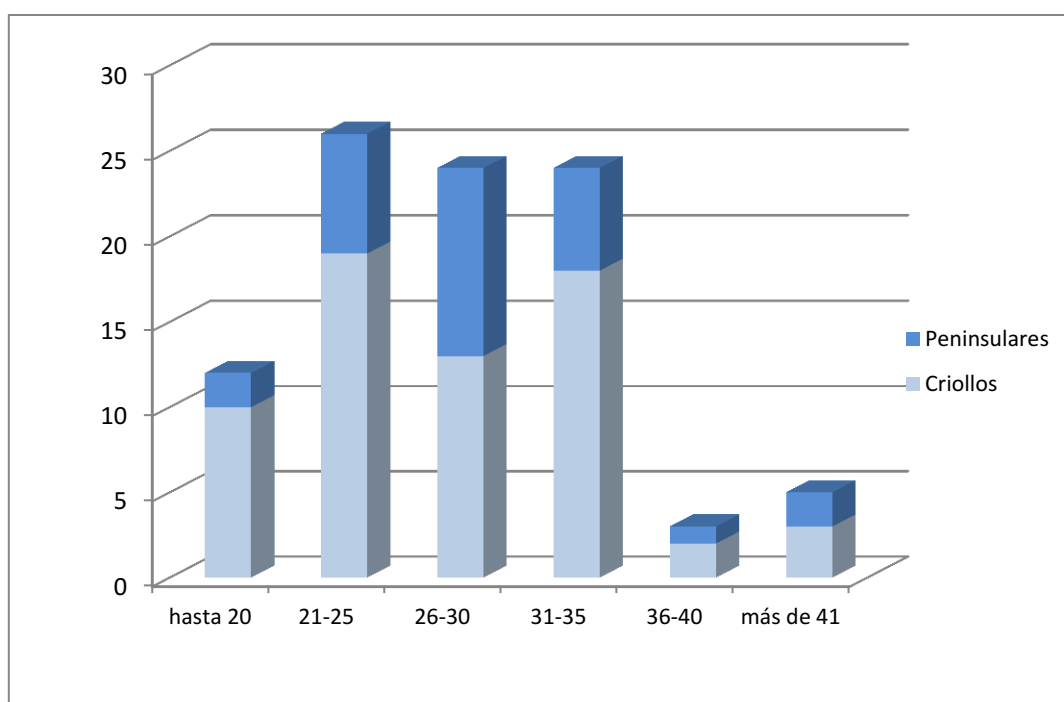
⁶⁶³ José Luis MORENO *Historia de la familia en el Río de la Plata* Sudamericana, Buenos Aires, 2004, Pág. 51

⁶⁶⁴ Ricardo CICERCHIA *Historia de la vida privada en Argentina* Troquel, Buenos Aires, 1998, Pág. 18.

emprendimientos propios en el comercio o en la producción pecuaria y estaba mejor posicionado para acordar con la parentela en vez de subordinarse llanamente a sus decisiones. También deberá establecerse qué ocurría con los peninsulares, que no tenían una parentela en la ciudad a la que complacer.

Disponemos de información sobre la edad con que contaban los oficiales concejiles al contraer nupcias por primera vez en casi un centenar de casos. La misma promedió los 27 años y medio. Para un individuo de esa edad, el matrimonio no venía a ponerle bases a sus primeras actividades ganaderas o mercantiles, sino más bien a apuntalar las que ya estaban emprendiendo siendo solteros. Lawrence Stone halló que durante el siglo XVII y principios del XVIII, los varones de la baja nobleza inglesa se casaban a una edad bastante similar. Coincidimos con este autor en que a esa edad se hallaban en un momento de sus vidas en que gozaban una libertad mayor para escoger pareja, aunque ello no los autorizara a desatender los intereses de sus padres y su parentela.⁶⁶⁵

Gráfico 19 B – Edad de los miembros de la dirigencia concejil al momento de las primeras nupcias



Fuente de los datos: Se han calculado las edades de los individuos en base a un enorme número de legajos del AGN; también se han tomado datos de las más diversas fuentes genealógicas

En el Gráfico 19 B se ha distribuido la información en franjas etarias. Puede apreciarse que no fueron pocos los que contrajeron nupcias por debajo de la edad

⁶⁶⁵ Lawrence STONE **Familia, sexo y matrimonio...** Págs. 33-36.

promedio, pues el 13% de nuestros cabildantes lo hizo cuando tenía menos de 21 años de edad, y otro 28% entre los 21 y los 25 años. De acuerdo con las leyes castellanas, todavía eran “hijos de familia”, por completo sujetos a sus padres. Pero casi la mitad de los individuos considerados lo hizo entre los 26 y los 35 años: intuimos que se trataba de adultos jóvenes que ya habían acumulado ingresos y experiencia en los negocios, lo que les daba mejores chances para aspirar a una alianza matrimonial beneficiosa. El hecho de que el período de soltería de los peninsulares fuera más prolongado que el de los criollos, siendo su edad promedio al casarse de 29 años y medio, nos indica que al no contar estos con el respaldo de la propia parentela, el despegue económico les llevó más tiempo y les tardó más convertirse en “cónyuges aceptables” para las familias de la vecindad porteña.

Un segundo aspecto que nos interesa conocer es cuál era la edad promedio que tenían los miembros de la dirigencia municipal al desempeñar el primer oficio concejil, y a partir de ello estimar el lapso de tiempo que hubo entre uno y otro evento, para poder inferir si el matrimonio tuvo una rápida incidencia en su ingreso a la planta funcionarial del ayuntamiento. Teniendo en cuenta de que la condición básica de ingreso al cabildo era la de ser vecino, y que para poseerla había que tener familia y *casa poblada* en la ciudad, ninguno de nuestros oficiales concejiles hubiera podido ocupar un asiento en el cabildo o desempeñar funciones sin estar casado. Este requisito de admisión no parece haber sido tan estricto, ya que 19 de ellos lo hicieron siendo todavía solteros. Los 155 restantes contrajeron matrimonio antes de ingresar al cabildo. Entre los oficiales concejiles mayores (regidores, depositarios generales, alguaciles mayores, alcaldes provinciales, alcaldes ordinarios y procuradores) se observó un lapso entre las primeras nupcias y el desempeño del primer oficio concejil que promedió los 15 años, mientras que la edad promedio al ejercerlo fue de unos 42 años. Entre los oficiales concejiles menores (alcaldes de la Hermandad y mayordomos) ese lapso fue de 16 años y la edad promedio al ejercer el empleo fue de 38 años. En ambos casos nos hallamos con que el ayuntamiento porteño tendió a incorporar a sus filas a individuos en la plenitud de su madurez, que se hallaban en el momento de sus vidas en que seguramente ejercían también la dirección de los asuntos familiares y gozaban de ascendiente sobre su parentela, lo que sin duda contribuía a fomentar su prestigio frente al resto de la vecindad. Para los peninsulares afincados en la ciudad, por su parte, los vínculos con la comunidad de vecinos se habían afianzado para entonces lo suficiente como para poder exhibir indubitables lazos de pertenencia a ella y aspirar a representarla en el cabildo.

EL PERFIL OCUPACIONAL: ¿UNA CORPORACIÓN DE COMERCIANTES?

Los cabildantes porteños: ¿un grupo ocupacional compacto?

Al elegir a los oficiales concejiles como objeto de nuestro análisis, nos preguntamos si su delimitación como grupo se circunscribía a su pertenencia a un cuerpo político-administrativo –el cabildo de Buenos Aires– o si, excediendo esa caracterización básica, compartían otros rasgos significativos, como el de ocupar un lugar preciso en la trama estamental o mostrar una cierta homogeneidad en su perfil ocupacional. Era una pregunta ineludible, ya que no había una razón para suponer que esa élite de poder fuera un sector económicamente uniforme. La falta de uniformidad podía generar la sospecha de que el grupo analizado no era más que un *artefacto*, es decir, un mero constructo recreado por el prosopógrafo con el objeto de aplicarle un cuestionario y extraer conclusiones. Algunos autores, en efecto, se han cuestionado si al estructurar a un grupo o sector a partir de criterios de carácter jurídico –como podría ser, en nuestro caso, el desempeño de una magistratura municipal– uno no corre el riesgo de atribuirle al mismo más realidad de la que verdaderamente poseía. Así lo planteó, por ejemplo, Michel Bertrand al estudiar a los oficiales de la Real Hacienda de México. En un meduloso estudio, este autor logró resolver ese dilema al constatar que esos oficiales fiscales, que se comportaban corporativamente en su actuación pública, se definían además por una fuerte homogeneidad profesional, y aunque no poseían las mayores fortunas, eran respetados y temidos por su poder e influencia y conformaban un grupo relativamente coherente.⁶⁶⁶

¿Hallaremos la misma coherencia en el grupo que analizamos? Si nos dejáramos guiar por las suposiciones implantadas desde el campo historiográfico, la respuesta debería

⁶⁶⁶ Bertrand, empero, se resiste a considerar a los oficiales de la Real Hacienda miembros plenos de las élites dirigentes, pues no acumularon títulos ni honores ni manifestaron poseer (por lo menos en comparación con otros miembros del aparato administrativo colonial) una abundancia de bienes que realzara sus posibilidades materiales de ostentación. La mirada cuantificadora de este autor es imposible de aplicar a nuestros oficiales concejiles, pues si tomáramos como indicador de pertenencia a la élite las fortunas de los grandes empresarios y burócratas de una capital virreinal como lo eran México o Lima, sus moderados patrimonios no resistirían la comparación. Michel BERTRAND *Grandeza y miseria del oficio...* Págs. 15 y ss.

ser afirmativa. Al señalarlos como el más poderoso de los actores sociales del mundo urbano, se ha insistido en el lugar destacado que ocuparon los grandes comerciantes en la escena política municipal, razón por la cual cuando se habla de los cabildos americanos suele resaltarse la posición preponderante que ocuparon en ellos. Sin embargo, los mismos no ejercieron invariablemente su dominio sobre los gobiernos municipales. Durante el siglo XVI y buena parte del siglo XVII, en muchas ciudades hispanoamericanas las corporaciones estuvieron dominadas por las familias de encomenderos, incluso después de que éstas fueran relegadas de su superioridad económica por otros sectores.⁶⁶⁷ También se conocen casos en que los ayuntamientos se hallaron en manos de grandes hacendados. Susan Ramírez aporta un ejemplo al referirse a la élite terrateniente de la región de Lambayeque, cuya sede era la ciudad de Trujillo, en la costa norte del Perú. El cabildo de dicha ciudad era dominado por un puñado de familias propietarias de la tierra, que se transmitían los cargos de padre a hijo u ocasionalmente a un sobrino o primo. Había ocho posibilidades contra una de que los alcaldes ordinarios elegidos anualmente fueran hacendados; también lo eran tres de cada cuatro oficiales venales que ocupaban escaños en aquella corporación.⁶⁶⁸ Algo similar sucedería durante la segunda mitad del siglo XVIII en otro asentamiento urbano rioplatense, la villa bonaerense de Luján, donde los hacendados ocuparon un lugar destacado en el ayuntamiento y los comerciantes un lugar subsidiario.⁶⁶⁹

Lo que sí puede aceptarse es que en las ciudades portuarias de cierta envergadura, cuyas economías estaban dominadas por los grandes comerciantes, estos tendieron a acaparar los asientos más honrosos en las corporaciones municipales. Este supuesto nos ha servido de punto de partida para preguntarnos si nuestra dirigencia concejil obedecía mayoritariamente a ese perfil socio-profesional. No se puede negar que durante el siglo XVII y las primeras décadas del XVIII, los comerciantes opulentos ocuparon un lugar destacado en el seno del cabildo porteño, pero en gran parte de los casos su permanencia en él fue bastante breve. Por regla general, la mayor o menor honorabilidad de los oficios concejiles se hallaba en consonancia con la posición económica de quienes los

⁶⁶⁷ Fred BRONNER "Peruvian encomenderos in 1630: Elite Circulation and Consolidation" en **Hispanic American Historical Review** Duke University Press, Vol. 57 N° 4, 1977, Págs. 633-659; James LOCKHART **Spanish Peru 1532-1560. A Colonial Society** Madison, University of Wisconsin Press, 1968.

⁶⁶⁸ Susan RAMÍREZ **Patriarcas provinciales. La tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú colonial** Alianza, Madrid, 1991, Pág. 200.

⁶⁶⁹ Dedier Norberto MARQUIEGUI "Estancia y poder político en un partido de la campaña bonaerense (Luján, 1756-1821)" en Herbert KLEIN y otros **Estructuras sociales y mentalidades en América Latina. Siglos XVII y XVIII** Biblos, Buenos Aires, 1990, Págs. 293 y ss.

desempeñaban. Los alcaldes ordinarios eran en a menudo comerciantes mayoristas, mientras que los mayordomos y los alcaldes de la Hermandad eran mercaderes que poseían fortunas más discretas o hacendados de mediano pasar. Sin embargo, más que las riquezas y el estilo de vida suntuoso, eran el reconocimiento del prestigio y los vínculos familiares y personales los que servía de puente hacia los empleos concejiles. Expresado en términos de capital relacional, quienes gozaban de un espectro más extenso y redituable de contactos e influencias eran quienes tenían las mayores chances de ser tenidos en cuenta cuando se seleccionaba a los oficiales concejiles electivos.

A lo largo de este capítulo y del que sigue intentaremos esclarecer cuáles fueron las ocupaciones de los oficiales concejiles, en un intento por dilucidar sobre qué sustento económico descansó su participación en el gobierno municipal. Quienes estudiaron a los sectores elitistas porteños de la etapa anterior a la creación del virreinato del Río de la Plata han postulado la existencia de dos únicas alternativas ocupacionales, que podían presentarse en estado “puro” o combinadas entre sí: la de ser comerciantes o hacendados.⁶⁷⁰ Ciertamente, es incuestionable que el comercio de efectos de Castilla y de frutos de la tierra y la ganadería del vacuno y el mular fueron las principales actividades de la vecindad de Buenos Aires (y lo seguirían siendo a lo largo de casi toda nuestra historia colonial) pero hubo otras opciones que apuntaron a diversificar las actividades económicas emprendidas por la oligarquía local. Por otra parte, aun asumiendo que esas dos categorías ocupacionales fueron las más apropiadas para caracterizar a la vecindad porteña de finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, todavía queda por indagar cuál de ellas preponderó entre quienes conformaron la dirigencia concejil entre 1690 y 1726. Dicho en otras palabras, la cuestión va más allá de preguntarse si el cabildo porteño estuvo dominado por los hacendados o los comerciantes. Esta problemática se considera virtualmente resuelta en el caso de este ayuntamiento durante el virreinato, cuando el predominio del sector mercantil en la corporación resultaba incuestionable, pero aún debe ser revisada en relación con el período anterior, una fracción del cual analizaremos en esta tesis.⁶⁷¹

⁶⁷⁰ Tal es la posición de Fernando Jumar, que en un sugerente artículo propone la existencia de cuatro tipologías posibles sobre la base de dos variables principales: los comerciantes puros, los comerciantes-hacendados, los hacendados-comerciantes y los hacendados. Consúltese: Fernando JUMAR **El primer boom de la exportación de cueros y la sociedad local. Río de la Plata. Fines del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII** Trabajo presentado en XXI Jornadas de Historia Económica, 2008, Caseros, Disponible en línea en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.712/ev.712.pdf

⁶⁷¹ “La participación de comerciantes en el Cabildo de Buenos Aires creció desde mediados del siglo XVIII en adelante. Durante muchos años entre 1770 y 1810, la facción comerciante comprendía una mayoría tan abrumadora de cabildantes que el Cabildo se convirtió en efecto en un consejo de

El mundo del comercio como punto de partida

Desde los inicios del siglo XVII, Buenos Aires fue la sede de un grupo de comerciantes que se presentó como una alternativa a los poderosos mercaderes limeños y compitió con estos en las regiones meridionales del extenso virreinato peruano. Gracias a que combinaron el tráfico con la metrópoli con el comercio directo con otras potencias europeas, la actividad de dicho grupo contribuiría a la larga a que este puerto se transformara en un importante centro de distribución que se proyectaba hacia esas otras regiones, amenazando con disputárselas a quienes negociaban con ellas desde el corazón mismo del virreinato. De acuerdo con Garavaglia, la ciudad comenzó a perfilarse como un poderoso polo de arrastre a partir de la década de 1740. Nosotros estamos persuadidos de que ese despegue se produjo con una o dos décadas de antelación a lo que afirma este autor.⁶⁷²

Los comerciantes porteños mostraron tener hacia los navíos de registro la misma actitud ambigua que mantuvieron sus pares limeños frente al sistema de flotas y galeones. A sabiendas de que podían abastecerse por los circuitos alternativos, se volcaron al tráfico legal sólo cuando lo hallaban ventajoso y le escatimaron su apoyo económico. Los porteños raras veces recurrieron a los transportistas gaditanos para hacerse enviar mercancías: apenas un puñado de ellos se sirvió de representantes en España para hacérselas remitir desde Cádiz. A lo largo del período estudiado, los cabildantes más acaudalados tuvieron con cierta frecuencia representantes en la península, pero se trató casi siempre de procuradores de la corte o de personajes que gozaban de influencias en Madrid, a quienes recurrían para conseguir la confirmación de un cargo venal u otra concesión de honores, y muy rara vez para que les remitieran mercancías. Las grandes casas exportadoras de Cádiz todavía no eran, como lo serían casi un siglo más tarde, las principales proveedoras de artículos europeos de los mercaderes locales.⁶⁷³

Sólo hemos hallado en los registros notariales poderes extendidos por cinco de nuestros cabildantes –todos ellos mercaderes de renombre– para la adquisición de manufacturas en Cádiz: Joseph de Arregui, Pedro Guezala, Diego Sorarte, Juan Bautista

comerciantes”; Susan SOCOLOW **Los mercaderes de Buenos Aires virreinal: familia y comercio** Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1991, Pág. 141.

⁶⁷² Juan Carlos GARAVAGLIA **Mercado interno y economía colonial** Grijalbo, México, 1983, Págs. 416-417.

⁶⁷³ Confróntese con lo afirmado para el período virreinal por Susan SOCOLOW **Los mercaderes de Buenos Aires virreinal...** Pág. 34.

Fernández Parra y Antonio de Igarzábal.⁶⁷⁴ La mayor parte de esos poderes fueron protocolizados durante la Guerra de Sucesión Española, lo que no deja de ser notable, ya que indica su confianza en el debilitado poder naval de los españoles. Aunque no puede descartarse que hubiera algún envío pactado con los mercaderes de Cádiz que no haya quedado reflejado en los fondos documentales que se conservan en Buenos Aires, es claro que se trató de casos excepcionales. A comienzos del siglo XVIII, los pactos de envíos de remesas de efectos europeos con los mercaderes gaditanos estaban lejos de constituirse para los comerciantes porteños en la manera estandarizada de adquirir mercancías ultramarinas.

La sobreoferta de manufacturas europeas que conoció la plaza porteña a partir de 1703 gracias a la presencia francesa en el puerto fue motivo suficiente para que los comerciantes locales no se vieran necesitados a compartir los riesgos de la navegación oceánica. Desde que Felipe V confirió a la *Compagnie de Guinée* el derecho a poseer una factoría negrera en Buenos Aires, se les presentó la alternativa de conseguir de manos de los asentistas franceses las manufacturas europeas que estos introducían en forma clandestina: esto dejaba a los porteños en la cómoda posición de optar entre esta oferta y la de los cargadores que operaban desde Andalucía. En 1714, con el tratado de Utrecht, los asentistas británicos de la *South Sea Company* reemplazarían a los franceses y Buenos Aires seguiría siendo un enclave utilizado por las burguesías mercantiles europeas para quebrar las pretensiones monopolísticas de la corona española.

Al hallarse avecindados en uno de los puertos con acceso a las regiones argentíferas de Sudamérica, los porteños se encontraban en una posición de superioridad frente a los cargadores de los navíos de registro, que por lo general se veían obligados a recurrir a ellos para colocar sus mercancías en los codiciados mercados andinos. Así sucedió durante la estadía de los últimos navíos que se presentaron en el puerto durante el siglo XVII: las naos Nuestra Señora del Rosario y la Nuestra Señora de los Reyes, comandadas por Carlos Gallo Serna. Estas embarcaciones tenían permitido cargar unas 800 toneladas de mercancías. En ellas llegó el gobernador que suplantaría a Agustín de Robles, Manuel Prado y Maldonado, acompañado de su familia y de un piquete de

⁶⁷⁴ En 1703, Pedro Guezala otorgó un poder a Manuel de Ibarlueta para que lo endeudara por mercaderías hasta 4000 pesos. Dos años más tarde, Diego Sorarte encargó a tres vecinos de Cádiz mercaderías por hasta 8000 pesos y Juan Bautista Fernández Parra a Joaquín Tribiños por hasta 4000 pesos. Joseph de Arregui, por último, dio en 1710 a un poder a dos peninsulares para que lo obligaran por hasta 4000 pesos; AGN IX-48-9-2 *Escribanías Antiguas (1703)*, f. 690v., IX-48-9-4 *Escribanías Antiguas (1705)*, f. 322v. y 436; RE N° 2 de 1709-1712, f. 203. Del caso de Igarzábal, distinto de los anteriores, nos ocuparemos luego.

soldados de infantería para reforzar la guarnición de la ciudad. De acuerdo con los registros de la Casa de Contratación, su cargazón estaba valuada en algo menos de 164.000 pesos.⁶⁷⁵ Pero un testimonio de la época refiere que este registrero no estaba dispuesto a abrir sus fardos en el puerto —es decir, a hacer “feria” para ofrecer las mercancías que traía— sino que prefirió acudir a los comerciantes de la ciudad y confiárselos para que las llevaran a Potosí y otros destinos más lucrativos. “*Don Carlos Gallo Serna no ha tenido deliberación de abrir tal feria si no es en secreto y [en] bosquejos ha despachado la hacienda para el Pirú con diferentes personas*”.⁶⁷⁶ Buenos Aires, con una capacidad de consumo sumamente limitada, no se presentaba como la plaza comercial más ventajosa, por lo que no le quedaba otra alternativa que recurrir a los negociantes locales para venderles su carga o asociarse con ellos para que la internasen hasta las provincias andinas centrales.

Durante la última década del siglo XVII, el puerto de Buenos Aires fue visitado por cuatro navíos de permiso procedentes de Cádiz, mientras que durante el primer cuarto del siglo XVIII se agregó una docena de embarcaciones más. Las naos de Gallo Serna, que arribaron en 1699, retornaron a la península en 1703, pero fueron capturadas por los ingleses a la altura de Río de Janeiro. En 1702 habían llegado a Buenos Aires los navíos de Bartolomé de Urdinsu y Arbeláez —la fragata Santa Teresa y la nao Nuestra Señora del Rosario— que conducían al gobernador Valdés Inclán junto con soldados y pertrechos para el Presidio; las mismas permanecieron alrededor de tres años en aguas del estuario, donde en 1705 sirvieron de soporte en el asedio de la Colonia del Sacramento, colaborando en el traslado de la mayor parte de las tropas. En 1712 anclaron en el puerto la nao Nuestra Señora de la Concepción y la balandra Nuestra Señora del Pópulo, ambas al mando de Andrés Martínez de Murguía, en las que llegó el pesquisidor del rey, Juan Joseph de Mutiloa y Andueza, que venía a punir los excesos del gobernador Velasco y a hacerse transitoriamente cargo del gobierno de la provincia. Un año más tarde entraban al estuario los navíos de permiso de Joseph de Ibarra Lazcano, Nuestra Señora de la Concepción y San Joseph, que se retiraron de Buenos Aires en 1715. En 1723, por último, arribaron a este puerto cuatro navíos de registro comandados por Salvador García Posse, que a pedido del Bruno Mauricio de Zavala habrían de participar en la fundación de Montevideo.

⁶⁷⁵ El dato procede de Zacarías MOUTOUKIAS *Contrabando y control colonial...* Pág. 96.

⁶⁷⁶ AGN IX-48-8-8 *Escribanías Antiguas (1702)*, f. 158.

Como puede apreciarse, la frecuencia con que arribaban los navíos de registro al Río de la Plata era bastante irregular. La permanencia de los mercaderes peninsulares que viajaban en ellos resultó relativamente breve: usualmente retornaba a Cádiz en las embarcaciones en que habían llegado luego de una estancia que podía prolongarse durante dos o tres años. Al abandonar la ciudad se veían obligados a confiar a los comerciantes locales lo que quedaba de las mercancías que habían traído consigo, pactando con ellos compartir las ganancias, y les encargaban que cobrasen las deudas que dejaban pendientes. Juan Pérez de Meza, por ejemplo, fue uno de los cargadores que había venido en los navíos de registro de Retana y nombró encargados de esas cobranzas a Miguel de Revilla y Antonio Guerreros.⁶⁷⁷ Otro cargador, Tomás de la Calzada, al volver a la península en los navíos de Ibarra Lazcano dejó un cargamento de polvillo en manos de Gaspar de Avellaneda para que éste los administrase.⁶⁷⁸

Hasta que se produjo la intervención de Mutiloa, empero, la compra de manufacturas a los registreros ofreció una ventaja para los porteños: como las autoridades locales no estaban en condiciones de ponerle restricciones, se mantuvo abierta a todo aquel que contara con caudales para emprenderla. El tráfico con los asentistas franceses, en cambio, conoció la creciente interferencia de gobernadores, que se valieron de una serie de artilugios para acaparar las manufacturas ingresadas ilegalmente en los buques negreros y sólo las compartieron con un reducido número de allegados. La mayor parte de esos cargamentos fue a parar a los almacenes de Antonio Guerreros durante el gobierno de Valdés Inclán y a los de Antonio Meléndez de Figueroa durante el de Velasco. Un testigo referiría que cuando uno de los buques de la *Compagnie de Guinée*, perteneciente a Benoit Benac, descargó sus fardos en el puerto, estos no fueron expuestos públicamente sino conducidos a los depósitos de Meléndez. Afirmó aquel que “*las mercaderías de Don Benito Benac se vendieron en casa de Don Antonio Meléndez y que el gobernador y oficiales reales tuvieron la cuarta parte de 60.000 pesos a los costos de Francia*”.⁶⁷⁹

En la primera década del siglo XVIII, el contrabando de efectos europeos y su introducción en los mercados del interior del virreinato requirieron del beneplácito de los gobernadores, y en muchos de los casos se hicieron en asociación con estos. El referido Benac consiguió desembarcar los fardos gracias a un arreglo satisfactorio (y

⁶⁷⁷ AGN IX-48-8-1 *Escribanías Antiguas (1693)*, f. 173.

⁶⁷⁸ AGN IX-49-1-2 *Escribanías Antiguas (1720-1722)*, f. 194.

⁶⁷⁹ AGN IX-41-5-8 *Causa contra Francisco Antonio Martínez de Salas (1712)*.

oneroso) con Velasco. Pero a veces no se llegaba a un acuerdo y el gobernador procedía a la incautación de la carga y enviarla a los almacenes de sus *privados*. En 1708, la corbeta *El Pájaro* encalló en uno de los bancos del río y su capitán, Joaquín Descasseaux, rogó que se le dejara vender algunos efectos para poder pagar las reparaciones, pero éste ordenó confiscar su cargamento y lo depositó en manos de Meléndez.⁶⁸⁰ Valiéndose de estas mercancías, se darían socorros a la guarnición de la ciudad hasta los primeros meses de 1709. Ese mismo año se llevaron al almacén de Meléndez fardos de ropa que trajeron los navíos franceses *L'Amphitrite*, el *Sólido* y el *Héroé*, cuyos capitanes lograron hacer acuerdos beneficiosos con Velasco.⁶⁸¹ Meléndez no fue el único que sacó provecho de esta connivencia. Otros miembros de la camarilla del gobernador adquirieron géneros europeos con la complicidad de éste. Uno de ellos fue Pedro Guezala, que invirtió 7102 pesos en comprar varios fardos de la carga que trajo el capitán francés Louis Cauvet en un barco negrero.⁶⁸²

Los gobernadores Valdés Inclán y Velasco no hubieran conseguido convertirse en los principales beneficiarios del contrabando sin la colaboración de por lo menos una parte de la vecindad. Debió recurrir a ella por razones de logística: una porción considerable de las mercancías fueron depositadas provisoriamente en las fincas que se encontraban en las costas de los ríos Paraná y de la Plata, en las cuales se montaron desembarcaderos clandestinos. La chacra de Joseph Antonio de Roxas y Acevedo en el Riachuelo, cercana al puerto de la ciudad, fue utilizada por Valdés Inclán con ese fin: entre 1704 y 1706, se ocultaron allí los fardos de ropa que trajeron los barcos negreros franceses *Amphitrite*, *Mendemblique* y *La Dichosa*, una parte de los cuales sería enviado luego a Potosí en las carretas de un mercader alto peruano y rendiría a este gobernador 160.000 pesos de utilidades.⁶⁸³ Esa complicidad se continuó con Velasco, quien por medio de extorsiones consiguió que el capitán de los barcos franceses *La Esperanza*, *Isabela* y *El Atlas* le entregaran 38.000 pesos en mercaderías, parte de las cuales fueron descargados en la chacra de Juan Ruiz de la Fuente. La expedición a Potosí fue encargada a Diego de Sorarte, que se dirigió primero con unas 20 carretas a Santa Fe a trocar parte del cargamento por yerba y luego subió a aquella villa, de la cual volvió con un cargamento

⁶⁸⁰ AGN IX-41-5-8 *Francisco Nicolás Maillet contra Manuel de Velasco y Tejada y otros* (1713).

⁶⁸¹ AGN IX-39-8-2 *Juan de Carmona, testimonio de su prisión* (1714).

⁶⁸² AGN RE N° 2 de 1709-1712, f. 198.

⁶⁸³ AGN IX-39-9-5, *Demanda que Joseph de Narriondo puso en la residencia de Alonso de Valdés*; AGN IX-39-9-3, *Prisión y embargo de Diego de Sorarte y Miguel Castellanos*.

de ropa de la tierra.⁶⁸⁴

Mientras que el círculo de allegados de Velasco se enriquecía de esa forma, el cabildo se convirtió en el órgano de expresión de los comerciantes que se vieron excluidos de participar en el tráfico ilegal y se agruparon en torno al clan de los Samartín. Esa fue la causa principal de las tensiones que trastornaron los vínculos entre la corporación y este gobernador a fines de la primera década del siglo XVIII. Cuando en 1712 Mutiloa hizo encarcelar a Velasco y a sus allegados debido a su participación en el contrabando, los Samartín y sus aliados pretendieron ocupar el lugar que habían ocupado estos en el tráfico de mercancías europeas con el Alto Perú. Pero el pesquisidor no estuvo dispuesto a consentirlo e hizo apresar a, Joseph de Arregui, su cabecilla, cuando se descubrió que éste había conducido a Potosí un enorme cargamento de mercancías que también había adquirido gracias al contrabando con los franceses. Lo cierto es que luego de la pesquisa de Mutiloa, las condiciones de la plaza comercial sufrieron una transformación. Por un lado, los gobernadores ya no volverían a actuar como mediadores obligados en el tráfico con el interior del virreinato y permitirían a los comerciantes locales internarse libremente en el territorio, siempre que abonaran la contribución correspondiente en las aduanas terrestres. Por otro, los registreros obtuvieron de la corona la libertad de internarse con sus mercancías, por lo que desde entonces no debieron recurrir a los mercaderes locales para comerciar en forma directa con los altoperuanos.

Durante la segunda década del siglo XVIII, el sistema de flotas y galeones entre Cádiz y el Caribe quedó virtualmente interrumpido, lo que propició el tráfico entre el Perú y Buenos Aires. Entre 1708 y 1721, las flotas que partían desde Cádiz no volvieron a visitar Portobello y la entrada de mercancías por la ruta de Panamá decreció en forma significativa. Pero desde el cambio de siglo, los franceses habían literalmente invadido el Pacífico con sus navíos mercantes: unas 150 embarcaciones de esa nacionalidad se desplazaron por este océano en las primeras décadas del siglo XVIII, a pesar de que no contaban con permiso de la corona española para hacerlo.⁶⁸⁵ La impotencia de Felipe V para impedirlo quedó expresada en las repetidas (e incumplidas) reales cédulas en que prohibió a los habitantes de las colonias comerciar con los extranjeros, en que en

⁶⁸⁴ AGN IX-40-1-2, *Autos contra Juan Joseph de Ahumada*; AGN XIII-43-2-9, *Libro menor borrador de la Real Hacienda, 1707-1715*.

⁶⁸⁵ Jakob SCLUPMANN *Cartas edificantes sobre el comercio y la navegación entre Perú y Chile a comienzos del siglo XVIII. Correspondencia y contabilidad de una compañía comercial, 1713-1730* Instituto Francés de Estudios Andinos, Lima, 2006, Págs. 46 y ss.

algunos casos los amenazó con la pena de muerte e incautación de todos sus bienes.⁶⁸⁶ Como resultado de la penetración de los franceses en las costas del Pacífico, los mercados del Alto y el Bajo Perú se vieron inundados tanto por las mercancías introducidas por estos como por las remesas de manufacturas europeas que habían entrado por Buenos Aires, conducidas hasta allí por los comerciantes porteños y por los agentes de los registreros.

Esa saturación se hizo patente cuando los navíos de registro comandados por Ibarra Lazcano debieron emprender su viaje de retorno a la península. Poco antes de zarpar, éste último reconocería su frustración al intentar recoger las utilidades del tráfico con el Alto Perú: “...las mercaderías que traje en dichos navíos quedan casi todas ellas en este reino sin haber podido conseguir su venta a ningún precio, así en esta ciudad como en la villa de Potosí... por hallarse estos reinos llenos de mercaderías francesas que se han introducido por las costas y puertos del Mar del Sur”. Debido a esos atrasos, Miguel Martínez de Zubiegui, el maestre de dichos navíos, se vio obligado a permanecer en Sudamérica, ya que le faltaba hacerse restituir el valor de 180.000 pesos en mercaderías.⁶⁸⁷ Todavía en 1718 varios cargadores llegados con Ibarra Lazcano se encontraban “en Lima, Potosí y otras partes, y entre ellos el maestre de dichos navíos de registro con mucha parte de los intereses de su cargazón y de las encomiendas de su cargo”.⁶⁸⁸

Con la creciente presencia de los franceses en el océano Pacífico, Buenos Aires, que durante el siglo XVII había sido elegida por los navíos de bandera no española como una de las puertas preferenciales de acceso al espacio peruano, compitió con muchas otras que comenzaron a gozar de esa posición ventajosa. Concepción, Valparaíso, Coquimbo, Arica, Pisco, Guayaquil y El Callao serían con frecuencia visitados por embarcaciones procedentes de Francia que transportaban manufacturas y barras de hierro, descargadas unas veces con sigilo y otras con el visto bueno de las autoridades locales. Esto provocaría que los mercados andinos quedaran con frecuencia saturados de esos efectos. Esa concurrencia de oferentes no dejaría de afectar a los grandes comerciantes porteños, pero estos supieron sobrellevar ese contratiempo diversificando la composición de sus remesas, en que incluyeron artículos que no rivalizaban con los introducidos por los franceses.

⁶⁸⁶ Carlos Daniel MALAMUD RIKLES *Cádiz y Saint Malò...* Págs. 120-121.

⁶⁸⁷ AGN IX-42-9-6 *Navío Nuestra Señora del Rosario*.

⁶⁸⁸ AGN RE N° 2 de 1716-1719, f. 393.

Hasta 1714, el tráfico de ganados había sido su principal opción. Desde la década de 1670, Buenos Aires no sólo enviaba hacia el norte carretas cargadas de mercancías europeas sino también grandes recuas de mulas y tropas de ganado vacuno, las que usualmente se detenían en las ferias de Salta o en Jujuy, aunque eventualmente podían ser internadas por sus conductores hasta el Alto Perú. El respaldo de la corona facilitó la ampliación del área geográfica de las operaciones legales de los comerciantes porteños. Una real cédula que entró en vigencia en 1698 suprimió la Aduana Seca que funcionaba en Córdoba desde hacía ocho décadas y la reubicó en la ciudad de Jujuy, lo que les permitió desplazarse por los actuales territorios argentino y paraguayo sin necesidad de enfrentar barreras fiscales. Como el epicentro de las operaciones de venta de mulas y de vacunos en pie se encontraba en Salta, que formaba parte del área que les había sido liberada, se volcaron al tráfico de ganados. Entre 1700 y 1714, lograrían colocar en las ferias del valle de Lerma unos 150.000 vacunos y 100.000 mulas, casi la mitad de las cuales fueron conducidas hasta allí por dos de los comerciantes más ricos de Buenos Aires, Joseph de Arregui y Miguel de Riblos. Ambos ocuparon escaños en el cabildo: el primero fue alférez real y regidor y el segundo depositario general. Se caracterizaron por la diversificación en el radio geográfico y el contenido de los negocios, ya que no sólo traficaron con efectos europeos que recibieron de Cádiz sino con toda una gama de productos de la tierra, de los cuales el ganado fue sólo uno de tantos.⁶⁸⁹

Al indagar sobre la actividad económica de la élite local, el año de 1714 ha de ser considerado un punto de inflexión. Ese mismo año, la *Compagnie de Guinée* abandonaba Buenos Aires y su lugar era ocupado por la *South Sea Company*. Pero el reemplazo de los franceses por los británicos no fue un mero enroque provocado por la diplomacia de la corona, sino que se vio acompañado de otras transformaciones que afectarían el tráfico regional. El precio de las mulas en las ferias de Salta había iniciado una tendencia al declive, y tras la desaparición de los dos principales acopiadores de ganado mular de la ciudad –Arregui por haber sido detenido en Potosí a causa de su participación en el contrabando y Riblos por haber sido víctima de un concurso de acreedores– no surgió en Buenos Aires quien los reemplazara, ocasionando que los cordobeses se adueñaran a mediano plazo de ese mercado. La presencia de los asentistas británicos permitiría a los porteños abandonar el alicaído tráfico de ganado mular y abocarse a la internación de esclavos hasta el Alto Perú.

⁶⁸⁹ Carlos M. BIROCCO “Cambio de dinastía y comercio interregional...” Págs. 380-381.

La participación de los porteños en el comercio de esclavos no era ciertamente cosa nueva. A partir de 1703, en que Buenos Aires comenzó a ser visitada por los buques negreros franceses, algunos de los mercaderes locales remitieron lotes de esclavos que adquirieron a los asentistas, pero durante la primera década del siglo este rubro asumió un carácter secundario frente a su participación en la venta de ganado mular. Ello quizás se debió a que los gobernadores Valdés Inclán y Velasco ejercieron una estrecha vigilancia sobre las actividades de la *Compagnie de Guinée*, con el objeto de garantizar que las manufacturas que ésta contrabandeaba pasaran directamente a sus manos o a las de sus camarillas. Pero a partir de 1714, paralelamente a que se radicaba en Buenos Aires la *South Sea Company* el mando supremo recayó en el Río de la Plata en gobernadores militares como Baltasar García Ros y Bruno Mauricio de Zavala, que a diferencia de sus predecesores combatieron el tráfico ilícito en vez de fomentarlo. Varias embarcaciones francesas, a pesar de haber caducado el tratado de asiento con su país, intentaron continuar su trato con los habitantes de la ciudad, pero fueron capturadas y sus cargamentos embargados y rematados en pública almoneda. Así fue como varios de nuestros cabildantes se adueñaron de las mercancías incautadas y las llevaron a vender al Alto Perú o a otras regiones. En 1716, Antonio Merlo, Gregorio Avellaneda y Antonio Díaz adquirieron las que fueron decomisadas a la fragata *La Golondrina*, mientras que Domingo Acasuso remató en 14.000 pesos las que se confiscaron al queche *La Dorada de Bayona*.⁶⁹⁰ Al año siguiente, Joseph Ruiz de Arellano se adueñaría en una subasta de los fardos de textiles apresados a los navíos *Saint-François* y *Danycan*, valuados en 3603 pesos.⁶⁹¹

Varios de nuestros cabildantes adquirieron lotes de varias decenas de esclavos a los asentistas británicos para conducirlos al Alto Perú. Domingo de Acasuso compró en 1715 un lote de 233 esclavos transportados en el navío Wiltshire, con indicación de que se trataba de “*varones y hembras, grandes, medianos y pequeños, enfermos y sanos*”, a los que se sumaban 87 “*crías de pecho*” nacidas en cautiverio.⁶⁹² También participó en este tráfico Joseph Ruiz de Arellano, que en 1716 adquirió “*toda la cargazón de negros y negras*” que condujo el navío *La Europa* en 58.300 pesos.⁶⁹³ Tres años más tarde, se asociaría con Pablo Cabrera para comprar en 20.000 pesos un centenar de esclavos traídos en el navío británico *La Saragatera* y conducirlos a Santiago de Chile,

⁶⁹⁰ XIII-43-2-10 *Libro menor de la Real Hacienda (1715-1726)*

⁶⁹¹ Carlos Daniel MALAMUD RIKLES *Cádiz y Saint Malò...* Pág. 164.

⁶⁹² AGN RE n° 2 de 1714-1716, f. 325v.

⁶⁹³ AGN RE n° 2 de 1714-1716, f. 416v.

conviniendo que compartirían las ganancias y que éste traería de vueltas “*algunos géneros de los que se comercian en aquellas provincias*”.⁶⁹⁴ En 1720, Ruiz de Arellano compró en 21.000 pesos otro lote de negros con un préstamo que le hicieron su suegro Pedro Giles y el exgobernador García Ros.⁶⁹⁵

El tráfico de esclavos sirvió también para enriquecer a comerciantes de menor envergadura que hasta entonces habían manejado tiendas en Buenos Aires y aún no habían adquirido relevancia en el tráfico interregional. En 1717, Antonio Díaz pagó 27.000 pesos por 150 negros, mientras que Joseph González Marín pagó 30.400 pesos por 152 “cabezas” y Juan Vicente de Vetolaza y Luna 40.000 pesos por 200 “piezas”.⁶⁹⁶ Las diferentes expresiones utilizadas en las escrituras de venta indican distintas formas de cuantificación de los esclavos, enunciando una de ellas la unidad y la otra la calidad de esta mercancía humana. En 1725, este último repetiría la operación y compraría 300 negros de ambos sexos al Real Asiento de Inglaterra en 60.000 pesos.⁶⁹⁷ En todos los casos, el destino fue la villa de Potosí. Mientras que Acasuso y Ruiz de Arellano ya contaban con experiencia en el tráfico con las provincias arribeñas, los tres últimos formarían parte de la camada de nuevos comerciantes que surgió al calor de la nueva coyuntura.

Al internarse hasta el Alto Perú con tropas de mulas, lotes de esclavos negros o carretas cargadas de manufacturas, los comerciantes porteños no descartaban comprar o vender mercancías en los puntos intermedios de su travesía. Y no se trataba solamente de hacer intercambios en las ciudades españolas que jalonaban el camino real. En los largos tramos que separaban una ciudad de otra entraban en contacto con comunidades campesinas mestizas o aborígenes, a las que ofrecían cortes de tela para trocarlos por productos locales, maderas para reparar sus carretas o vituallas. En esas circunstancias, no necesitaban desembolsar cantidades en plata sino que lo normal era el pago en especie. Las limitaciones que sufría la circulación monetaria en las regiones que se hallaban al sur de Potosí jugaban en este caso a favor de los porteños, que a cambio de un corto número de efectos europeos, ofrecidos casi siempre a precios inflados, podían adquirir artículos locales como pelotas de cera, bloques de sal o sacos de ají. Señalaba

⁶⁹⁴ AGN RE N° 2 de 1716-1719, fs. 69 y 71v.

⁶⁹⁵ AGN RE N° 3 de 1720-1722, fs. 51 y 52.

⁶⁹⁶ AGN IX-42-2-9 *Asiento de los Ingleses contra Antonio Díaz por cobro de pesos (1719)*; IX-42-2-9 *Asiento de los Ingleses contra Joseph González Marín por cobro de pesos (1719)*.

⁶⁹⁷ AGN RE n° 2 de 1723-1725, f. 420v.

Joseph de Arregui que, para los mercaderes que visitaban el Tucumán, “*su regular modo de comprar allí es a trueque de ropa*”.⁶⁹⁸

También los peones carreteros recibían textiles al liquidarse sus jornales. Al enviar un cargamento al Alto Perú, Domingo Acasuso reservó un lote de géneros de Castilla por valor de 1262 pesos para saldar los sueldos de su peonada, lo mismo que para afrontar los gastos eventuales del viaje. Alegó que esto era “*estilo, práctica y costumbre... pues se llevan para servirse de ellos en el camino como monedas, así para la paga y socorro de los carreteros, peones y mayordomos, como para el alquiler de caballos, bueyes, comprar de comer y otras cosas necesarias en tan dilatado viaje*”.⁶⁹⁹ Algo similar refirió un traficante que se aprestaba a conducir una tropa de mulas a las Provincias de Arriba: éste había adquirido en los almacenes de Antonio Gallegos 471 pesos “*en géneros de mercaderías para los avíos y gastos de la conducción de la dicha tropa*”.⁷⁰⁰ El pago en especie normalmente era bien aceptado: como han observado Enrique Tandeter y Jorge Gelman, la utilización del metálico se volvía cada vez menor a medida que se descendía socialmente.⁷⁰¹

Se recurría a esa modalidad de pago incluso al abonar los fletamentos. Esto sucedió cuando el referido Domingo Acasuso subastó los efectos decomisados en Buenos Aires a un navío francés, el queche *La Dorada de Bayona*, valuados en 39.259 pesos, entre los que se contaban tanto textiles enfardados en los puertos de origen como barras de hierro. Este comerciante confió la carga a un dependiente, un tal Velásquez, que en un primer tramo la condujo en 38 carretas hasta Santiago del Estero, donde una parte de la misma fue vendida. El resto pasó en 35 carretas a Jujuy. En camino a esa ciudad, la flota de carretas se dividió en dos: una parte siguió por el camino de Tenene y otra por el de Tucumán. Velásquez se detuvo durante cuatro meses en Jujuy para concretar nuevas ventas, tanto a los vecinos de esa localidad como a los que se acercaron desde Salta. Hasta allí, tanto la paga de jornales a los peones como la reparación de las carretas averiadas fueron solventadas con un lote de textiles que Acasuso había incluido en el cargamento con ese fin.

⁶⁹⁸ AGN IX-40-5-1 *Isabel Castaño contra Miguel de Riblos (1705)*.

⁶⁹⁹ AGN IX-42-9-7 *Registro de navíos (1713-1718)*.

⁷⁰⁰ AGN RE N° 3 de 1720-1722, f. 508v.

⁷⁰¹ Jorge GELMAN **De mercachifle a gran comerciante...** Pág. 53; Enrique TANDETER “El papel de la moneda macuquina en la circulación monetaria rioplatense” en **Cuadernos de Numismática** Buenos Aires, 1975, Vol. 4, N° 14. Págs. 1-11. Es útil el estado de la cuestión elaborado por Ana María PRESTA “Potosí y la minería en la historiografía argentina: El espacio de los maestros” en **Surandino Monográfico** Buenos Aires. 2010, Vol. 1, N° 2.

Desde Jujuy, las mercancías sobrantes fueron portadas por 386 mulas de carga, gracias a un contrato firmado con el fletador Alonso de Alfaro, que recibió como pago un cierto número de fardos de mercancías. Así llegaron hasta la villa de Potosí, donde Velásquez alquiló una casa en la calle del convento de San Francisco para abrir una tienda. La mayor parte de la mercancía que llegó a esa villa se componía de barras o utensilios de hierro: el quintal se vendió a distintos precios, que oscilaron entre 18 y 25 pesos.⁷⁰² Como pudo apreciarse, en todos los tramos del viaje los gastos fueron en su mayor parte pagados en especie. Esto ocurrió tanto al correr con los avíos de las carretas y los jornales de los peones como al “tercerizar” el transporte por medio de un contrato de fletamento. Entre los artículos entregados en pago no sólo hubo géneros incautados a los franceses, sino también textiles de la tierra y sacos de yerba procedentes de los almacenes de Acasuso.

La variable espacial también solía jugar a favor de los porteños. En las regiones que se hallaban menos vinculadas con las que producían metales preciosos, la circulación monetaria era poco fluida. Cuando los comerciantes de Buenos Aires se presentaban en ellas con manufacturas europeas, se valían de otros medios de intercambio para no recurrir al metálico, fundamentalmente haciéndoselos pagar en especie. Esta relación de asimetría se percibía particularmente en el caso del comercio con el Paraguay. Así lo ilustran los beneficios que obtuvo Miguel de Riblos al establecer en 1698 una compañía a mitad de ganancias con Bartolomé de Chavarría. Este viajó a la ciudad de Asunción con un cargamento que se componía de 30 piezas de holandilla, 48 sombreros de breña y vicuña, 75 libras de acero y 80 docenas de cuchillos. Chavarría no le remitió sumas en plata sino sólo productos locales que los vecinos de esa ciudad le entregaron a cambio: 3780 arrobas de yerba, 44 arrobas de tabaco y un lote de maderas evaluado en 9000 pesos.⁷⁰³

Otro importante comerciante porteño, Joseph Ruiz de Arellano, tuvo una experiencia similar al enviar a otro mercader, Onofre de Hoyos, con mercaderías por valor de 4167 pesos al Paraguay. En este caso no se trató de una compañía a mitad de ganancias, sino que se trató de un contrato de factoraje, por el que este último recibiría como retribución el 12% del importe de lo que vendiere. El cargamento incluía 1700 varas de ropa de la tierra y 154 varas de paños de Quito, además de diversos cortes de géneros europeos

⁷⁰² AGN IX-16-1-2 *Autos tocantes a los cargos hechos a Domingo de Acasuso e Ignacio Velásquez*

⁷⁰³ AGN Sucesión 8122 *Miguel de Riblos contra Bartolomé de Chavarría*.

como bretaña, ruán, cambray y raso.⁷⁰⁴ Al ser vendidos, la mayor parte de los mismos fueron pagados en yerba. Cuando se escrituraba una deuda, tampoco era inusual que se estableciera que la misma se cancelaría a través del pago en productos locales. En 1707, un vecino de Asunción, Juan Pablo Cantarero, se obligó con Domingo de Acasuso en 6683 pesos y se comprometió a pagar “*en yerba, azúcar y tabaco a los precios que corren en la ciudad de Santa Fe*”.⁷⁰⁵ A ello agreguemos que al emprender un viaje de negocios al Paraguay, por lo común la peonada recibía sus jornales en especie: en el tráfico por el Paraná, los conchabados que conducían la yerba en balsas solían recibir como remuneración 4 varas de paño y 5 varas de bayeta.⁷⁰⁶

Para llevar a cabo sus negocios en otras provincias, los comerciantes porteños disponían de una profusa red de vínculos que se ramificaba por su inmenso territorio. El tráfico interregional se asentaba sobre esos lazos que se formaban entre las oligarquías del sur del virreinato del Perú. Quizás la más extensa y eficaz de esas redes personales haya sido la de Miguel de Riblos, que contaba con representantes y corresponsales en casi todas las ciudades que jalonaban los caminos que conducían a Lima y a Santiago de Chile, lo mismo que en las que se encontraban sobre el río Paraná. En el inventario de sus papeles, que se realizó cuando se lo sometió a un concurso de acreedores, se alude a 897 cartas que recibió de diferentes vecinos de Santa Fe, 633 que le remitieran algunos vecinos del Tucumán y el Alto Perú y 52 escritas por varios sujetos de Chile, Mendoza y San Juan.⁷⁰⁷ La red conformada por Riblos se fundaba en un cúmulo de préstamos e intercambios que abarcaban a miembros de casi todas las élites urbanas del virreinato. Pero su caso fue excepcional. El resto de los comerciantes prefirió depositar cualquier tipo de negocio que importara un riesgo en parientes que se hallaban residiendo en otras ciudades o, a falta de ellos, en personas muy allegada, amigos o paisanos.

Entre los comerciantes que se valieron de parientes para llevar a cabo operaciones en el interior se encontraba Antonio de Larrazábal, que tenía a un hermano que residía en Potosí y actuaba allí como su representante. Joseph de Arregui envió a uno de sus sobrinos, Fernando de Armasa, a Lima, para que lo auxiliara desde allí en sus negocios.⁷⁰⁸ Uno de los hermanos de Joseph Ruiz de Arellano era vecino de Santa Fe y otro de Asunción, y a menudo les hacía encargos. Miguel Alejo Arpide, cuñado de

⁷⁰⁴ AGN RE N° 3 de 1716-1719, f. 1.

⁷⁰⁵ AGN IX-48-9-5 *Escribanías Antiguas (1707-1713)*, f. 84.

⁷⁰⁶ AGN IX-41-9-6 *Miguel de Peñaloza y Diego Gutiérrez de Paz contra Francisco Maciel del Águila (1712)*.

⁷⁰⁷ AGN Sucesión 8122 *Concurso de los bienes de Miguel de Riblos*.

⁷⁰⁸ AGN IX-39-9-7 *Contra Manuel de Velasco por abuso de poder*.

Antonio Meléndez, se había establecido en Salta y le serviría para establecer contactos en las provincias arribañas. Quienes no tenían allegados en esas ciudades recurrían a los funcionarios locales, seguramente a cambio de favores o de una participación en las utilidades. Joseph Narriondo, que vendió mulas a vecinos de Arequipa y de Arica, se sirvió de Tomás Figueroa, teniente de gobernador de Jujuy, para cobrar a sus deudores.⁷⁰⁹ Matías Solana, que confirió un poder a Tomás de la Rena, corregidor y capitán a guerra de la ciudad de Mendoza, y Domingo Acasuso, que otorgó otro a Alonso Videla, alcalde provincial de la Hermandad de la misma ciudad, actuaron de la misma manera.⁷¹⁰

La principal motivación que llevó a los comerciantes porteños a incursionar en el comercio con las regiones andinas centrales era la obtención de la plata potosina. No obstante, la presencia de contrabandistas franceses en el Pacífico parece haber tenido el efecto de drenar la moneda circulante y afectar notoriamente la liquidez en aquellas regiones. Es por tal razón que quienes enviaban mulas, esclavos o manufacturas al Alto Perú se vieron obligados a aceptar que una porción de sus mercancías le fuera abonada en especie, casi siempre en textiles de la tierra. Comerciantes que condujeron enormes cargamentos de manufacturas francesas o grandes tropas de ganado en pie, como Diego Sorarte y Joseph de Arregui, aceptaron que las mismas les fueran pagadas en fardos de textiles procedentes de los obrajes peruanos. Así como los comerciantes de Buenos Aires podían imponer sus términos de pago a los vecinos de Asunción, los altoperuanos podían conducirse de la misma forma con los negociantes porteños. Los niveles de circulación del metálico creaban relaciones asimétricas entre las oligarquías mercantiles de las distintas regiones del virreinato, que permitían a aquellas que accedían con mayor facilidad a la plata imponer sus condiciones a las que disponían en menor grado de ella.

Gracias a la internación de mulas, esclavos negros y manufacturas europeas, los comerciantes porteños gozarían durante poco más de dos décadas de la posibilidad de emprender succulentos negocios en Potosí y otras plazas andinas. Esa actividad, según creemos, dio sustento al despegue económico de Buenos Aires, el cual se vio reflejado en el crecimiento edilicio que experimentó la ciudad a comienzos de la década de 1720. Pero las bonanzas del tráfico de esclavos se interrumpirían en 1726, cuando la corona entró en guerra con Gran Bretaña y ordenó la confiscación del Real Asiento inglés. A la par de ello, el Marqués de Castelfuerte, virrey del Perú, decidido a proteger los intereses

⁷⁰⁹ AGN IX-48-8-4 *Escribanías Antiguas (1699)*, f. 309v. y 431.

⁷¹⁰ AGN IX-49-1-2 *Escribanías Antiguas (1720-1722)*, f. 396v.

de los cargadores de la flota que había llegado recientemente a Portobello desde Cádiz, decretó la prohibición de sacar plata amonedada o en barras hacia las provincias del Tucumán y el Río de la Plata, como una manera de frenar la competencia que representaban para aquellos los mercaderes porteños. El creciente flujo de metálico en dirección al Río de la Plata se vio así temporalmente obstruido.

Ser comerciante y magistrado: una aproximación a partir de las fuentes

Al robustecerse la posición de Buenos Aires como puerto oceánico, los grandes comerciantes locales se encontraron frente a una oportunidad inmejorable para asumir la intermediación entre Europa y las regiones meridionales del virreinato del Perú. Ahora bien, ¿qué tan atractivo les resultó a estos el desempeño de los empleos concejiles? ¿A qué segmento del sector mercantil nos referimos al analizar su inclusión en el seno de la dirigencia concejil? Si queremos responder a estas preguntas, lo primero que ha de tenerse en cuenta es la extrema heterogeneidad de dicho sector. Se ha coincidido en caracterizar a los comerciantes de Hispanoamérica colonial como un amplio arco que se extendía desde los opulentos importadores hasta los modestos dueños de tiendas y pulperías. Pero no hay duda de que fueron los primeros, los que anudaban el tráfico entre las rutas comerciales marítimas y las terrestres, quienes dominaban la escena urbana. La ciudad era, sin dudas, su base de operaciones: allí era donde se encontraban sus depósitos y donde efectuaban las primeras transacciones antes de girar sus mercancías hacia otros destinos.⁷¹¹ En un esquema de círculos concéntricos que simbolizaba el alcance geográfico de sus negocios, la ciudad y sus inmediaciones representaban un primer anillo: ello explica su interés por supervisar las condiciones del mercado urbano y su eventual participación en el gobierno municipal.

Al perfilar a los grandes comerciantes de la Hispanoamérica colonial, la historiografía ha tomado habitualmente como modelo a los mercaderes novohispanos, bien estudiados por John Kicza y David Brading. Estos autores parten de la afirmación de que no existía ninguna estructura corporativa ni institucional que los diferenciara como grupo. Se caracterizaban, en todo caso, por exhibir una conducta social propia, que era objeto de imitación por parte del resto de la población blanca: en tal sentido, Brading asegura que los comerciantes acomodados de la Nueva España “constituían la médula de la

⁷¹¹ Catherine LUGAR “Comerciantes” en Louisa HOBERTMAN y Susan SOCOLOW **Ciudades y sociedad en Latinoamérica colonial** Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Págs. 67 y ss.

comunidad española y eran los que daban su sello a su estilo de vida”.⁷¹² También se destacaban por la profusión de sus contactos personales y profesionales y por sus carreras exitosas, aunque no todos los miembros del sector satisfacían todas estas características simultáneamente. En el plano comercial, Kicza explica que su estrategia más común era diversificar los negocios que emprendían: el nivel de desarrollo económico era demasiado bajo para permitirle a un empresario especializarse en un único campo de la economía por un período prolongado, pues se exponía a que las fuertes oscilaciones en el volumen y la rentabilidad de la producción lo condujeran a un desastre. Sus múltiples inversiones los llevaron a integrar verticalmente sus empresas, colocando bajo el control de un patriarca las operaciones económicas realizadas por los demás miembros de la familia.⁷¹³

Al referirse a la participación de estos sectores en el cabildo de la ciudad de México, Kicza opina que “si bien no era un coto exclusivo de la élite más alta, contenía un número importante de representantes de las familias dominantes”. Allí se mezclaban los comerciantes internacionales surgidos más recientemente con los miembros de la élite ya establecida, no todos los cuales pertenecían a las familias más destacadas, pero sí a los linajes de probada respetabilidad y riqueza.⁷¹⁴ Si los grandes comerciantes ocupaban un número considerable de asientos en el ayuntamiento, fue también por que contaban con una mejor preparación para hacerse cargo de los empleos concejiles: por lo general, se trataba de los individuos más educados y, por lo tanto, mejor capacitados para ejercerlos.⁷¹⁵ Agreguemos a ello que al disponer de fortunas considerables, su posición más desahogada les permitía apartarse por un tiempo del manejo personal de sus negocios y delegarlos en sus dependientes, y así abocarse con cierta exclusividad a las magistraturas.

Gran parte de los caracteres que Brading y Kicza describieron como propios de los comerciantes de la Nueva España fueron atribuidos por Susan Socolow a la élite mercantil de Buenos Aires. Al definir el perfil de los comerciantes virreinales porteños, esta autora los diferenció en tres categorías, para lo cual aseguró haber tenido en cuenta no sólo el volumen de los negocios y el tipo de mercancías transadas sino también el status social y prestigio conseguidos: los mayoristas, los minoristas y los proveedores de

⁷¹² David A. BRADING *Mineros y comerciantes del México borbónico...* Pág. 149.

⁷¹³ John E. KICZA. *Empresarios coloniales: familias y negocios en la ciudad de México durante los Borbones* México, Fondo de Cultura Económica, 1986, Págs. 27 y ss.

⁷¹⁴ John E. KICZA. *Empresarios coloniales...* Págs. 50-52.

⁷¹⁵ David BRADING *Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810)* Fondo de Cultura Económica, México, 1995, Págs. 41 y ss.

alimentos. Pero en su interior, estos grupos no eran homogéneos. Dentro de los comerciantes mayoristas, Socolow encontró que algunos lo eran a gran escala y otros a escala mediana y pequeña, incluyendo entre los primeros a quienes habían invertido sumas de 50.000 pesos o más en sus negocios. Al combinar el comercio de ultramar con el tráfico terrestre, los más acaudalados trabajaban con una variedad de mercados y eso les permitía realizar especulaciones comerciales para proteger sus inversiones. Pero también intervinieron en el mercado urbano: afirma esta autora que una vez recibidas las mercancías desde Europa, intentaban en principio venderlas en la ciudad y luego enviaban los sobrantes al interior, recurriendo a sus contactos para canalizar las ventas en otras regiones. Consideró esa búsqueda de otros mercados como una estrategia para evitar los frecuentes problemas de sobresaturación que se presentaban en Buenos Aires —una plaza con limitada capacidad de consumo y un alto nivel de competencia— cada vez que arribaba un convoy desde el otro lado del Atlántico.⁷¹⁶

Socolow no explica por qué estratificó a los comerciantes mayoristas de acuerdo con la escala de sus inversiones mercantiles ni qué fue lo que la llevó a colocar en los 50.000 pesos la frontera entre los más acaudalados y los que le seguían en importancia. Tampoco indica cómo fue que calculó esos montos de inversión, ya que prácticamente no se han conservado libros de cuentas ni otras fuentes contables de carácter privado que aportasen indicadores relativamente fiables. No obstante, podemos hacer algunas presunciones de cómo llegó a obtenerlos. Una forma de reconstruir esos montos pudo basarse en las sumas que se les adeudaban al momento de sus muertes, ya que fueron inventariadas en sus testamentarias. Estas últimas, que no se han conservado en todos los casos, al ser sustanciadas tras el deceso del individuo reflejan un momento en que la enfermedad, la vejez o incluso la quiebra lo habían obligado a aminorar el ritmo de sus negocios o a abandonarlos. Por tal razón las testamentarias raras veces logran expresar la capacidad óptima de emprendimiento que tuvieron los mercaderes ni los caudales que movilizaron en otros momentos de sus vidas. Otras fuentes a las que se puede recurrir son los libros de la administración del ramo de alcabalas o las escrituras protocolizadas de compraventa. Cuando se las utiliza debe ser a sabiendas de que no manifiestan más que parcialmente las operaciones mercantiles, porque sólo un diminuto porcentaje de las transacciones se realizaba ante un notario y porque los comerciantes eludían en lo posible la contribución al fisco.

⁷¹⁶ Susan SOCOLOW **Los mercaderes de Buenos Aires virreinal...** Pág. 73.

Con el objeto de individualizar quienes fueron los comerciantes de mayor envergadura que participaron del gobierno comunal entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII nos hemos valido de un método de identificación indirecto. Hemos recurrido a las escrituras de crédito monetario que fueron protocolizadas, donde se encuentran cuantificadas las sumas en plata que prestaron a terceros. La presencia de sobrantes en metálico destinados a operaciones crediticias, que resultaban más significativos en un medio en que la circulación de la plata amonedada era bastante acotada, denota el éxito de sus emprendimientos y nos permite suponer la existencia de un volumen equivalente o mayor de dinero insumido en operaciones comerciales. En el Cuadro N° 6 se presentan en una columna las cantidades de plata que invirtieron dichos cabildantes en ofrecer crédito monetario, dispuestas en orden decreciente, y en otra los empleos concejiles que estos desempeñaron.

Cuadro N° 6 - Oferta de crédito monetario y participación en el ayuntamiento (1690-1726)

Cabildante	Da crédito por	Período en que ejerció empleos concejiles
Riblos, Miguel	197.821	1708 (AlcO), 1709-1712 (DepG)
Acasuso, Domingo	88.624	1716 (AlcO)
Gallegos, Antonio	69.463	1723 (AlcO)
Avellaneda, Gaspar	48.646	1703-1704 (AlcO), 1712 (AlcO), 1705-1714 (Reg)
Arregui, Joseph	42.868	1702-1708 (Reg), 1708 (AlcO), 1711-1714 (Reg)
Larrazábal, Antonio	31.750	1713 (AlcO), 1718 (AlcO)
Meléndez de Figueroa, Antonio	30.684	1704 (Proc)
Ruiz de Arellano, Joseph	29.862	1709 (Proc), 1711 (AlcO), 1716 (AlcO), 1711-1726 (AlcP)
Guezala, Pedro	28.275	1701 (Proc)
Guerreros, Antonio	22.782	1697 (AlcO), 1698 (AlcO), 1702 (AlcO)
Peso de Figueroa, Luis	20.345	1691 (AlcO), 1707 (AlcO)
Solana, Matías	19.429	1711 (Mdm), 1716 (Proc), 1718-1726 (Reg)
Narriondo, Joseph	10.774	AlgM (1712-1714), 1719 (AlcO)
Quintana Godoy, Baltasar	9.365	1694 (AlcO), 1702-1708 (Reg) 1709 (AlcO) 1717 (AlcO), 1726 (AlcO)
Fernández Parra, Juan Bautista	9.288	1703 (AlcO), 1704 (AlcO), 1705- 1714 (Reg)

Referencias – AlcO: alcalde ordinario, AlcP: alcalde provincial de la Hermandad, AlgM: alguacil mayor, Proc: síndico procurador, Reg: regidor, DepG: depositario general, Mdm: mayordomo.

Fuente de los datos: escrituras de obligación en AGN Serie Escribanías Antiguas y Registros de Escribano N° 2 y N° 3, varios tomos.

Lo primero que salta a la vista es la superioridad descollante de Miguel de Riblos, cuya inversión en brindar crédito duplica a la de aquel que le sigue en el listado. Fue, según creemos, el único cuya talla se aproximó a la de los comerciantes del período virreinal estudiados por Susan Socolow y Jorge Gelman. El segundo y el tercero en la lista, Domingo de Acasuso y Antonio Gallegos, le iban muy a la zaga en riqueza, pero

por la diversidad de sus operaciones y sus estrechos contactos con sus pares anticipaban el modelo de mercader mayorista de finales del siglo XVIII. No obstante, los tres vivían en un Buenos Aires muy distinto al que sería la capital del virreinato, en el cual el negocio más redituable era todavía el de aprovisionar a las tropas acantonadas en la ciudad, y de hecho la mayor parte de los que aparecen listados así lo hicieron. Lo que se aprecia es que aquellos que hicieron una mayor inversión en brindar crédito tendieron a permanecer en el cabildo durante un breve período, mientras que las inversiones menos cuantiosas procedieron de quienes se mantuvieron en él durante períodos más extensos. Ello posiblemente se debió a que estos últimos no encontraron la manera de promocionarse por fuera de la corporación. Tras su paso por ésta, los más acaudalados fueron llamados a ocupar cargos más honrosos: Acasuso y Gallegos se desempeñaron como contador y tesorero de la Real Hacienda del Río de la Plata y Paraguay, Ruiz de Arellano y Larrazábal fueron nombrados tenientes de gobernador, el primero por Baltasar García Ros y el segundo por Bruno Mauricio de Zavala, y Arregui consiguió que el Consejo de Indias lo designara gobernador de Tucumán, aunque la muerte le impidió asumir el cargo. Sólo los menos acaudalados se conformaron con la ocupación de sus escaños en el cabildo y lo hicieron por tiempo prolongado, como sucedió, por ejemplo, con Matías Solana y Baltasar de Quintana Godoy.

Con motivo de indagar la participación de los cabildantes en el tráfico atlántico y regional hemos recurrido a un segundo método de identificación, ya no con el fin de estimar la envergadura de sus operaciones mercantiles sino tan sólo para apreciar la diversidad de los productos implicados en ellas. Hemos rastreado esa diversidad en los libros manuales de la alcabala. Ya hemos advertido sobre los problemas de utilizar esta fuente de carácter fiscal. Este impuesto cobrado por la corona al comercio terrestre era usualmente recaudado por los alcaldes ordinarios del cabildo, con quienes los traficantes se componían en forma personal, anteponiendo en ciertos casos el uso de algún privilegio para no ajustarse con el fisco y escatimando en otros el pago de esta contribución, que a veces se retrasaba durante años. Se han volcado en el Cuadro N° 7 los nombres de los oficiales concejiles que fueron mencionados como contribuyentes, añadiendo el período dentro del cual quedaron asentados sus nombres, lo mismo que sus aportes al erario, que fueron expresados en pesos. En dicho Cuadro se podrá apreciar como algunos comerciantes de peso como Miguel de Riblos o Antonio Gallegos pagaron sumas irrisorias, si se las compara con el volumen de sus negocios, mientras que otros jamás abonaron las que debían.

Cuadro N° 7 - Caracterización de las actividades económicas de los comerciantes en base al libro manual de alcabalas (1703-1724)

NOMBRE	período	Alca bala (en pesos)	Tienda propia	aguardiente	vino	Verba	tabaco	Ropa Tierra	Ropa Castilla	cordobanes	suelas	Lienco	azúcar	cueros	Mulas	T	M	M P	P
ABALOS Y MENDOZA Luis	1710-12	36		x		x										0	1	0	0
ACASUSO Domingo	1703-24	1801	x	x		x	x	x					x			1	1	0	0
AGUILA Luis del	1707-21	40,5				x								x	X	0	0	1	0
ANDRADA Antonio	1703	9	x													1	0	0	0
ARREGUI Joseph	1704-11	400			x			x								0	1	0	0
ARROYO Rodrigo	1708-13	4												x		0	0	0	1
ARROYO Y ESQUIVEL Tomás	1711	302		x	x											0	1	0	0
AVELLANEDA Gaspar	1704-14	66	x					x								1	1	0	0
AVELLANEDA Gregorio	1713-16	16	x													1	0	0	0
AVELLANEDA Joseph	1720-23	45			x										x	0	0	1	0
AVILA Andrés	1717	35	x													1	0	0	0
BARRAGAN Antonio	1707	0												x		0	0	0	1
BARRAGAN Pablo	1705-14	45												x		0	0	0	1
BARRAGAN PACHECO Pablo	1720	0				x		x								0	1	0	0
BEORADO Lucas Manuel	1710-14	80				x	x			x						0	1	0	0
BERESOSA CONTRERAS Alonso	1703-07	80	x													1	0	0	0
CABRAL DE AYALA Sebastián	1708-11	10												x		0	0	0	1
CASCO DE MENDOZA Francisco	1707-21	24,5												x	x	0	0	0	1
CEBALLOS Joseph	1710-24	92,5	x	x	x	x	x	x								1	1	0	0
CHAVARRIA Mateo	1705-13	86	x													1	0	0	0
CHAVARRIA Ventura	1706-22	14	x													1	0	0	0
DELGADO Sebastián	1703	178	x	x	x	x					x					1	1	0	0
DIAZ Antonio	1707-21	8	x													1	0	0	0
ESPARZA Joseph	1718	0				x										0	1	0	0
ESPARZA Miguel Jerónimo	1703-15	15	x		x											1	1	0	0
FERNANDEZ DE AGÜERO Amador	1709-13	23												x		0	0	0	1
FERNANDEZ PARRA Juan Bautista	1711-19	16			x			x							x	0	0	1	0
GAETE Gerónimo	1705	5												x		0	0	0	1
GALLEGOS Antonio	1713-20	46	x					x								1	1	0	0
GASTAÑETA Antonio	1714	0		x												0	1	0	0
GIL NEGRETE Ambrosio	1707	10												x		0	0	0	1
GILES Pedro	1709	0												x		0	0	0	1
GONZALEZ Antonio	1711-12	14	x													1	0	0	0
GONZALEZ BAUTISTA Pedro	1706	34				x										0	1	0	0
GONZALEZ DE ACOSTA Domingo	1706	12						x								0	1	0	0
GONZALEZ DE COSIO Juan	1714-21	37	x			x					x					1	1	0	0
GONZALEZ DE LA CUADRA Pablo	1708-19	37				x		x	x							0	1	0	0
GONZALEZ MARIN Joseph	1724	0						x					x			0	1	0	0
GUERREROS Antonio	1703-08	322				x								x		0	0	1	0
GUEZALA Pedro	1707-16	46		x		x	x	x		x			x			0	1	0	0
GUTIERREZ DE PAZ Juan	1720-21	0													x	0	0	0	1
IGARZABAL Antonio	1703-23	243	x	x	x			x		x			x			1	1	0	0
ILLESCAS NIETO Francisco	1710	35		x	x											0	1	0	0
ILLESCAS NIETO Juan	1707-13	0												x		0	0	0	1
LARRAZABAL Antonio	1703	186		x	x	x		x	x							0	1	0	0
LOBO SARMIENTO Antonio	1707-10	0		x	x											0	1	0	0
LOPEZ CAMELO Diego	1705-14	102												x		0	0	0	1
MACIEL DEL AGUILA Juan	1707	38												x	x	0	0	0	1
MARTINEZ PANTOJA Antonio	1718	0														0	0	0	1

MELENDEZ Antonio	1704-12	227	x	x		x	x	x							x			1	1	0	0
MELO Juan	1720	0															x	0	0	0	1
MENA Y MASCARUA Juan Martín	1714-22	72				x	x										x	0	0	1	0
MERLO Antonio	1703-23	360	x	x	x	x		x							x			1	1	0	0
MONSALVE Tomás	1709-20	0														x	x	0	0	0	1
MONTANER Bartolomé	1710	61				x		x		x								0	1	0	0
MUÑOZ DE LA ROSA Bernardo	1720	0															x	0	0	0	1
NARRIONDO Joseph	1704-20	49				x					x				x		x	0	0	1	0
NAVARRO Luis	1703-24	131	x	x		x				x					x			1	1	0	0
OJEDA Juan Manuel	1703-17	66	x		x	x	x								x			1	1	0	0
PALMA LOBATON Juan de la	1711-17	81				x	x								x			0	1	0	0
PEÑALBA Toribio	1709	0														x		0	0	0	1
PEREDO Martín	1713-21	0														x	x	0	0	0	1
PEREYRA Francisco	1712	3	x															1	0	0	0
PESOA DE FIGUEROA Luis	1713-21	3														x	x	0	0	0	1
POZO Y GARRO Alonso	1709	4				x	x	x								x		0	0	1	0
QUINTANA GODOY Baltasar	1719-21	14															x	0	0	0	1
RAMILA Pablo	1703-10	36	x	x		x												1	1	0	0
RESA Y HARO Agustín	1721	0						x										0	1	0	0
RIBLOS Miguel	1704-11	140		x	x	x	x	x							x			0	1	0	0
RIVERA MONDRAGON Fernando	1709	0														x		0	0	0	1
ROCHA Bernardino	1713	0														x		0	0	0	1
ROCHA Juan	1708-13	0														x		0	0	0	1
RODRIGUEZ Bernardino	1707-08	14	x															1	0	0	0
RODRIGUEZ DE SOSA Miguel	1704-17	41	x	x	x													1	1	0	0
RODRIGUEZ Diego	1707	30														x		0	0	0	1
RODRIGUEZ FLORES Marcos	1707-21	29		x	x	x										x		0	0	1	0
ROXAS Y ACEVEDO Joseph A.	1704-21	40				x											x	0	0	1	0
RUIZ DE ARELLANO Joseph	1703-24	61		x	x		x	x								x	x	0	0	1	0
SAAVEDRA Pedro	1707-11	23				x		x		x					x			0	1	0	0
SAENZ Diego	1713-24	4	x														x	1	0	0	1
SAGASTIBERRIA Juan Bautista	1714	40						x										0	1	0	0
SAMARTIN Juan	1714-23	0															x	0	0	0	1
SEGURA Martín	1706-12	70										x						0	1	0	0
SOLANA Matías	1708-24	380	x	x	x	x		x										1	1	0	0
SORARTE Diego	1706	32						x		x								0	1	0	0
TAGLE BRACHO Francisco	1705	27														x		0	0	0	1
VALDIVIA Y ALDERETE J. Jacinto	1708-21	30	x															1	0	0	0
VERA Y ARAGON Pedro	1710	2				x												0	1	0	0
VERDUN Bartolomé	1708	11														x		0	0	0	1
VETOLAZA Y LUNA Juan Vicente	1712-24	71	x															1	0	0	0
VILLOLDO MINAYA Antonio	1713	0														x		0	0	0	1
VILLOLDO MINAYA Gonzalo	1708-21	0		x	x	x											x	0	0	1	0
ZAMUDIO Juan	1715-16	11	x															1	0	0	0

Referencias – T: propietario de una tienda; M: mercader en efectos europeos y de la tierra; MP: mercader en efectos europeos y de la tierra y en productos pecuarios; P: productor/vendedor de productos pecuarios.

Fuente de los datos: AGN XIII-41-7-5 y XIII-41-7-6 *Alcabalas de Buenos Aires*.

La utilización de esta fuente, empero, no carece de algunas ventajas: por un lado, nos permite apreciar someramente cuál era la composición de los cargamentos que dichos comerciantes traían o recibían desde otras regiones; por otro, detalla si estos poseían bocas de expendio en la ciudad para la venta al menudeo, tales como tiendas, tendejones y pulperías. Los libros manuales de la alcabala mencionan a 93 de nuestros cabildantes,

que representan algo más de la mitad de la población analizada. Al estudiar sus ocupaciones, lo primero que sale a relucir es que casi un tercio de ellos (el 31,6%) poseía un local de venta al menudeo en la ciudad, de los cuales una parte significativa no parece haber emprendido ninguna otra actividad. Ello indicaría que un pequeño número de tenderos logró ingresar al cabildo. No obstante, su caracterización como comerciantes minoristas a veces sólo resultó apropiada para una etapa más o menos temprana de sus trayectorias profesionales ya que más tarde sus negocios se diversificaron. Tal fue el caso de Juan de Zamudio, que en sus inicios fue propietario de una tienda y luego se puso a la cabeza de un importante obraje de materiales. Pero hubo otros vecinos que tuvieron una destacada participación política, como Ventura de Chavarría y Juan Vicente de Vetolaza y Luna, cuya actividad preponderante a lo largo de casi toda su vida activa fue la de administrar tiendas al menudeo. Aunque los tenderos ocuparon esporádicamente escaños en el cabildo durante todo el período estudiado, los mismos llegaron a tener cierta preponderancia en la corporación durante el gobierno de Bruno Mauricio de Zavala, en un momento en que el crecimiento demográfico y edilicio de Buenos Aires auguraba oportunidades ventajosas para el comercio al por menor. No casualmente fueron los mismos que desde el ayuntamiento iniciaron la costumbre de arancelar regularmente los principales productos de consumo básico: al reglamentar las transacciones locales de poca cuantía, apuntaban a dejar fuera de la lid a competidores molestos como los dueños de tendejones y los mercachifles, a los que se les dificultaba amoldarse a los precios fijados por el gobierno municipal. Su interés en pertenecer a la corporación pudo haberse fundado en la pretensión de ejercer su control sobre el comercio urbano, reservándose la decisión de qué artículos se convertirían en objeto de regulaciones y cuáles no.

Cuando se trata de indagar los alcances del tráfico de mercancías con otras ciudades, esta fuente documental resulta menos fiable. Debido a la evasión o al ocultamiento, una buena parte de las transacciones no se ha visto reflejada en ella. Una evidencia de ello es que sólo dos del poco menos de un centenar de individuos listados manifestaron haber traficado con efectos de Castilla, lo que constituye de por sí un absurdo, pues nadie ignora que estos eran uno de los pilares del comercio con otras regiones. De cualquier forma, ello no nos impide examinar cuáles fueron las mercancías que fueron objeto de tributación y tratar de establecer ciertas tendencias. Algo más de la mitad de estos 93 oficiales concejiles participó del comercio mayorista, de los cuales una importante porción (el 42% del total de la muestra) negoció casi exclusivamente con

efectos traídos del interior, mientras que unos pocos les agregaron productos de origen local como los cueros y las mulas (12%). Hubo, por último, un sector más o menos equivalente a un tercio de la muestra que sólo pagó la alcabala por vender corambre y tropillas de mulas, lo cual sugiere que se trataba de productores de ganado mular o de faenadores de ganado vacuno cimarrón. En este caso nos hallamos ante una tendencia a la especialización, ya que tres cuartas partes de quienes transaron con productos de origen pecuario parecen no haber incursionado en ningún otro tipo de actividad mercantil.

Comerciantes que fueron cabildantes

Para referirnos a los grandes comerciantes que ocuparon escaños en el cabildo, creemos que se debe partir de sus orígenes profesionales, con el fin de examinar la diversidad de sus trayectorias y el momento de éstas en que se produjo su participación en el gobierno municipal. Teniendo en cuenta que muchos eran oriundos del Viejo Continente, al intentar revisar dichos orígenes ha de considerarse si ya habían empezado su carrera en la península o la misma comenzó en Buenos Aires; en este último caso, deberá indagarse si contaron con el respaldo de familiares o, por el contrario, no dispusieron de apoyo en sus vínculos primarios y debieron recurrir a benefactores o al crédito para iniciarse en el sector.

Lo primero que debe destacarse es que a pesar de una parte significativa de los mismos nació en la península, en su inmensa mayoría se iniciaron profesionalmente en Buenos Aires. Partiendo de la apertura de una pequeña tienda al menudeo o de una modesta excursión con unas pocas carretas a Santa Fe, Cuyo o el Tucumán, fueron escalando lentamente posiciones hasta contar con los caudales y contactos suficientes para poder consolidarse como negociantes. Algunos de ellos habían arribado a la ciudad como soldados y buscaron en el comercio minorista una manera de subsistir frente a la irregularidad en el pago de los sueldos militares, que a veces se retrasaba durante años. En estos casos, sus incursiones en el ramo comenzaron, salvo contadas excepciones, cuando ya habían sido promocionados a la condición de oficiales, lo que sugiere que los movió la necesidad de encarar un estilo de vida más apropiado para ese rango.

En contraposición con ello, fueron realmente contados quienes ya habían hecho sus primeras armas en el comercio antes de afincarse en Buenos Aires. Hasta donde se sabe, sólo tres hicieron ese recorrido: Antonio Guerreros, Antonio de Igarzábal y Antonio

Gallegos. Los primeros dos llegaron a nuestro puerto durante el siglo XVII y el tercero en la segunda década del siglo siguiente. Es poco lo que conocemos de sus emprendimientos antes a que arribaran al Río de la Plata, pero podemos decir que se incorporaron a la sociedad porteña en momentos distintos y se valieron para ello de estrategias relacionales diferentes, por lo que sus trayectorias profesionales no fueron las mismas. Tampoco su participación en el gobierno municipal se perfiló como idéntica: mientras que Gallegos fue llamado a desempeñar el empleo de alcalde ordinario en una única ocasión, hallándose en el ápice de su fortuna como mercader, los otros dos serían convocados en varias oportunidades para ocupar cargos concejiles electivos.

De los tres, el que llegó a Buenos Aires más tempranamente fue Antonio Guerreros. Este había nacido en Portugal y era propietario de una zumaca con la que en varias ocasiones había enlazado los puertos del Brasil con Buenos Aires, confiscada en 1671 por orden del gobernador Martínez de Salazar. Ese año, demorado en la ciudad a la espera de que le retornaran su embarcación, contrajo matrimonio con Ana de Samartín, lo que le permitió vincularse con ese poderoso clan, en el seno del cual llegaría una década más tarde llegaría a convertirse en una figura patriarcal. En el momento de casarse declaró un capital de 4000 pesos en plata labrada y amonedada. Los primeros libros-abecedarios de su tienda se iniciaron en 1673 y 1674, lo que indica que sus negocios como mercader ya establecido en Buenos Aires comenzaron por esos años. El cabildo le reconoció como vecino en 1676, cuando lo nombró mayordomo del Hospital de San Martín de Tours. En 1684 lo llamó a ocupar el cargo de síndico procurador y al año siguiente el de alcalde ordinario de primer voto. Por entonces negoció con la corona su carta de naturaleza y consiguió por medio de una real cédula, expedida el 3 de agosto de 1689 y confirmada por una provisión de la Real Audiencia de Chuquisaca, que se le otorgara licencia para *“tratar y comerciar en los reinos de las Indias sin embargo de ser portugués”*.⁷¹⁷

La carrera de Guerreros en el ámbito concejil corrió paralela con su ascenso en el mundo de los negocios. No obstante, el lugar preeminente que ocupó en la vecindad lo debió a su proximidad con los gobernadores Joseph de Herrera y Sotomayor, Agustín de Robles y Manuel de Prado y Maldonado. En 1685, Herrera lo nombró teniente de gobernador, y a comienzos de la década siguiente, Robles le encargaría que secundara al

⁷¹⁷ AGN IX-42-8-1, *Diversos procedimientos de represalia contra los portugueses*, f. 57 y ss.

general Miguel de Riblos en el reparto de *socorros* a los soldados de la guarnición, proveyéndolos de indumentaria y de alimentos, con lo que se intentó paliar el retraso en la llegada del *situado*.⁷¹⁸ Prado y Maldonado, por último, le solicitó que actuase como su fiador en el momento en que fue investido gobernador. El ayuntamiento porteño reconocería sus vínculos privilegiados con dichos gobernadores al elegirlo nuevamente alcalde ordinario en 1697 y 1702.

Entre 1690 y 1702, Guerreros otorgaría varios poderes a vecinos de Santiago de Chile, adonde envió parte de las manufacturas compradas a los cargadores de los navíos de registro. En por lo menos dos oportunidades incursionó, además, en el tráfico de mulas con el Perú.⁷¹⁹ Pero el momento de mayor encumbramiento se produjo cuando el gobernador Valdés Inclán le encargó el aprovisionamiento de las ocho compañías del Presidio. La soldadesca se vio obligada a acudir a la tienda de este comerciante a surtir de textiles a precios que superaban los del mercado. Se afirmó que, obedeciendo al gobernador, Bartolomé de Urdinsu y Joseph de Ibarra, capitanes de los navíos de permiso que estaban anclados en puerto, surtieron dicha tienda de ropa suficiente “*para vestir este Presidio como se hizo dos veces, fardándolos por cuenta de su sueldo por mano del capitán Antonio Guerreros, quien administró dicha farda por vales que para ello se libraba abonados del gobierno*”.⁷²⁰ Se instrumentó una suerte de reparto forzoso de mercancías por medio del sistema de vales, cuyo valor nominal era previsto descontar de la paga a la llegada del próximo *situado*: en el juicio de residencia de Valdés Inclán se acusaría a ambos de repartir textiles “*por precios altísimos, no siendo los más de dichos géneros a propósito para los pobres soldados*”.⁷²¹

Este golpe de fortuna sería breve: una real cédula de Felipe V, que dio a conocer en Buenos Aires en julio de 1705, ordenó una represalia contra todos los portugueses que residieran en sus posesiones americanas, a causa de lo cual los bienes de Guerreros fueron confiscados por disposición del mismo Valdés Inclán. Su caída en desgracia impulsaría el ascenso de otro gran comerciante, Antonio Meléndez de Figueroa, del que tendremos la ocasión de ocuparnos más adelante, al que se le confiaría el reparto de efectos y provisiones entre los militares del Presidio.

Las historias de los otros peninsulares que ya habían hecho carrera antes de arribar a

⁷¹⁸ AGN Sucesiones 6249, *Testamentaria de Antonio Guerreros*.

⁷¹⁹ AGN IX-48-7-7 *Escribanías Antiguas (1690-1692)*, f. 243; AGN IX-48-8-3 *Escribanías Antiguas (1696-1698)*, f. 526v.

⁷²⁰ AGN IX-39-9-5, *Demanda que Joseph de Narriondo puso en la residencia de Alonso de Valdés Inclán*.

⁷²¹ AGN IX-1-1-3, *Capítulos puestos en la residencia a Alonso de Valdés Inclán*.

Buenos Aires –Antonio Igarzábal y Antonio Gallegos– tienen algunos puntos en común entre sí. Igarzábal fue el que llegó más tempranamente de los dos: vino a la ciudad en los navíos de permiso de Carlos Gallo Serna en 1699, trayendo consigo varias “*cajas de ropa de vestir*” para vender.⁷²² Lo que llama la atención, en su caso, es que a lo largo de dos décadas encargó remesas de mercancías a sus representantes en Cádiz, operación que como ya referimos ejecutaron rarísimas veces los otros comerciantes locales, y mucho menos con esa sistematicidad. Oriundo del norte de la península (había nacido en San Sebastián) se había avecindado primero en Cádiz y luego pasó a Buenos Aires como cargador de los referidos navíos. En 1701 contrajo aquí matrimonio con la hija de otro mercader peninsular asentado en Buenos Aires, Miguel de Revilla. En 1703 y 1705 otorgó poderes a sus representantes en aquel puerto andaluz para que lo obligaran en el primer caso hasta 6000 pesos en mercancías y en el segundo por 12.000.⁷²³ En 1712, con la llegada de los navíos de registro de Ibarra Lazcano, recibió de otro traficante gaditano, Juan Iñíguez de la Calle, dos lotes de mercancías: uno que le había encargado por medio de un poder y otro que éste le mandó para que las administrase en su nombre. Por el traslado de las que recibió le fue cobrado el 13% del importe de la factura original, lo que según se dijo era “*estilo y práctica establecida y corriente en el comercio*”.⁷²⁴ En 1719 solicitó a Bernardo Recaño, vecino de Cádiz, que le comprase hasta 6000 pesos en géneros de Castilla y se los enviara.⁷²⁵

Si nos enfocamos en sus estrechos vínculos con el comercio gaditano, el caso de Igarzábal ha de ser señalado como excepcional. El resto de sus operaciones se volcaron al tráfico con el interior: en 1705 otorgó poderes a vecinos de Mendoza y Córdoba con el objeto de colocar en esas ciudades las mercancías que había recibido de la península, y en los años que siguieron le remitieron desde allí cordobanes, panes de azúcar y fardos de ropa de la tierra. En el ámbito local fue propietario de una tienda y posiblemente acopiador de trigo, ya que en 1710 arrendó a la Iglesia la recaudación del diezmo de granos. A diferencia de Guerreros, durante sus primeros años se lo consideró “persona del comercio de la ciudad” y no vecino. Su caso es un ejemplo de cómo los éxitos en el comercio no siempre se traducían en la aceptación conseguida en la vecindad local. Quizás ello explique por qué su incorporación al gobierno municipal tardó más de una

⁷²² AGN RE n° 2 DE 1707-1709 f. 318.

⁷²³ AGN IX-48-9-2 *Escribanías Antiguas* (1703), f. 817v.; AGN IX-48-9-4 *Escribanías Antiguas* (1705), fs. 261v. y 305v.

⁷²⁴ AGN RE N° 2 de 1716-1719, f. 393.

⁷²⁵ AGN IX-49-1-1 *Escribanía Antiguas* (1719), f. 372. El poder se repite un año más tarde, en AGN IX-49-1-2 *Escribanía Antiguas* (1720), f. 525.

década en sustanciarse: fue nombrado procurador en 1712 y alcalde ordinario en 1715 y 1719.

También en el caso de Antonio Gallegos la oligarquía local se mostró en un principio reticente a reconocerlo como vecino. Este había llegado a Buenos Aires en 1712 en los navíos de registro de Ibarra Lazcano, a cargo de “*diferentes porciones de mercaderías a factoraje de cuenta de varios interesados del comercio de Cádiz*”.⁷²⁶ Todavía en 1720, no obstante, se lo señalaba como un mero “mercader tratante”, es decir, como un foráneo. Ello sucedía cuando ya estaba radicado en forma definitiva en la ciudad y sostenía una exitosa carrera como comerciante mayorista, jalonada por los más diversos emprendimientos: había enviado manufacturas europeas a la mayor parte de las ciudades del litoral y de las regiones andinas, comprado cueros para remitirlos a Cádiz y fletado tropas de mulas a las ferias de Salta.⁷²⁷ También mantuvo tratos con el Real Asiento británico, al que había adquirido un lote de negros por valor de 20.000 pesos que envió a vender a Chile por medio de su socio Joseph Frías, a quien correspondían la mitad de las ganancias.

Gallegos no habría de ser reconocido como vecino hasta después de su casamiento con Sabina de Ramila, hija de un alto oficial del Presidio de Buenos Aires, en 1721. La dote de esta muchacha apenas sobrepasó los 2000 pesos y se componía en su mayor parte de su ajuar personal, mientras que el patrimonio de su esposo fue entonces estimado en 70.291 pesos. Pero la unión resultó ventajosa por los vínculos que Justo de Ramila, el suegro de Gallegos, poseía con la oficialidad militar y con las principales familias de la vecindad, y se convirtió para este último en la llave de su ingreso a la dirigencia local: dos años más tarde, el cabildo lo nombraba alcalde ordinario, y poco más tarde escalaría otro peldaño al ser nombrado contador de la Real Hacienda local con consentimiento del gobernador Bruno Mauricio de Zavala.

Distinto fue el camino emprendido por quienes llegaron como soldados a Buenos Aires y luego se promocionaron gracias a su participación en el comercio. Estos manifestaron poseer un patrón de ascenso propio, diferente al de los tres individuos a que nos acabamos de referir. En la inmensa mayoría de los casos, no existen evidencias de que hayan encontrado en la ciudad parientes o paisanos anteriormente establecidos que los apuntalaran en su carrera. Eso los distinguió de los grandes comerciantes del período virreinal, que buscaron soporte en otros peninsulares ya afincados para iniciarse

⁷²⁶ AGN RE n° 2 de 1716-1719, f. 393

⁷²⁷ AGN RE n° 3 de 1720-1722, f. 421; AGN RE n° 2 DE 1725-1727 f. 152v. y 153.

en los negocios o bien se insertaron en carácter de aprendices en las principales casas comerciales porteñas.⁷²⁸ A fines del siglo XVII o comienzos del XVIII, lo que dio impulso a los peninsulares para escalar socialmente fue la posibilidad de promocionarse en la carrera militar. No era poco común que al ser ascendidos a oficiales de la guarnición hicieran sus primeras armas en el comercio. Ello posiblemente se debiera a que a partir de su ingreso a la oficialidad se ganaban la aceptación de las familias locales, a las que se entroncaban por medio del matrimonio, a la vez que conseguían de ellas el crédito que necesitaban para propulsar sus primeros negocios. Necesitaban, además, procurarse mayores ingresos para llevar el tren de vida ostentoso de los principales vecinos, que querían imitar, y el crónico retraso de la llegada del *situado* era un obstáculo frente a esas pretensiones.

Un ejemplo de ello lo tenemos en Gaspar de Avellaneda. Oriundo de la villa de Sopuerta, en el País Vasco, llegó a Buenos Aires en 1674 a bordo del navío Santa María de Lubeque, en calidad de soldado de leva. Tenía 24 años de edad y, según se lo describió en su papeleta de alistamiento, era blanco y picado de viruelas. Su ascenso a alférez se produjo en 1681, el mismo año en que contrajo matrimonio con Juana Lavayén, cuyo padre difunto, Agustín de Labayén, había sido contador de la Real Hacienda. Su carrera militar se completaría cuando se lo nombró capitán de la compañía de coraceros a que pertenecía, pero a comienzos del siglo XVIII se le otorgaría el retiro y se abocaría desde entonces de lleno al comercio. En 1702 se endeudó con Tomás Calzada, uno de los cargadores de los navíos de registro llegados con Francisco de Retana, por 27.466 pesos en mercancías, parte de las cuales parece haber enviado a Cuyo y al Paraguay.⁷²⁹ Durante dos años consecutivos, en 1703 y 1704, sería llamado por el cabildo a ejercitarse como alcalde ordinario, y en 1705 adquiriría una regiduría a instancias del gobernador Valdés Inclán. Al recibirse Avellaneda de ese empleo se afirmó que era “*benemérito graduado, y casado con nieta de pobladores y treinta años de residencia en la ciudad, capitán de infantería del Presidio*”: sus méritos para ejercerlo se basaban en su antigüedad como vecino, en sus servicios militares a la corona y en sus lazos con una familia porteña de raigambre.⁷³⁰ Aunque durante el gobierno de Velasco formó parte de la facción que se oponía a éste y fue removido de

⁷²⁸ Tal es el modelo aportado por Susan SOCOLOW **Los mercaderes de Buenos Aires virreinal...** Págs. 30 ss.

⁷²⁹ AGN IX-48-8-8 *Escribanías Antiguas (1702)*, f. 612.

⁷³⁰ Posiblemente se afirmara que su mujer, María Ponce de León, era nieta de fundadores porque descendía de Domingo de Irala, pero no porque alguno de sus antepasados hubiera acompañado a Garay en 1580.

su escaño en la corporación, sería reintegrado a la misma por el pesquisidor Mutiloa y siguió actuando como regidor hasta 1714, en que renunció al cargo.

Seis futuros cabildantes llegaron a Buenos Aires en 1674 en el navío Santa María de Lubeque, uno de los comandados por Miguel Gómez del Rivero, formando parte del mismo contingente de soldados: Juan Bautista Fernández Parra, Miguel Revilla, Miguel Obregón, Joseph Manuel Rubín de Celis, Mateo Chavarría y el referido Avellaneda. A su arribo, sus edades oscilaban entre los 19 y los 24 años. Quien se integró más tempranamente a la vecindad fue Fernández Parra, que en 1679 contrajo matrimonio con una muchacha perteneciente a una de las familias de más antiguo arraigo en la ciudad, Catalina Ponce de León. Tras obtener su retiro como capitán de una de las compañías de infantería del Presidio, inició su carrera en el cabildo: fue elegido alcalde ordinario en 1685, 1703 y 1704. Su cercanía con Valdés Inclán motivó que éste lo nombrara su lugarteniente y le concediera en 1705 una regiduría, lo que generó una protesta en el cabildo, que le negaba a esa potestad al gobernador. Su trayectoria mercantil, vinculada al tráfico de mulas con las provincias andinas, se desarrolló en paralelo con su carrera política. En 1690 envió hacia ellas una tropa de 4000 cabezas, a las que sumó dos carretas cargadas de ropa de la tierra para el avío del viaje.⁷³¹ Entre 1695 y 1704 remitiría a las ferias de Salta otras 17.000 cabezas, parte de ellas formando compañías con otros dos vecinos de Buenos Aires, Pedro Saavedra y Antonio Meléndez de Figueroa. Al igual que Gaspar Avellaneda, Fernández Parra integró la facción de los cabildantes que se opuso a Velasco y eso lo llevó a que éste lo despojara de su regiduría, pero fue repuesto en ella por el pesquisidor Mutiloa y permaneció en su escaño hasta 1714.

Dos que llegaron en el mismo contingente que Fernández Parra, Miguel Obregón y Joseph Manuel Rubín de Celis, militaron en cambio entre los partidarios del gobernador Velasco y gozaron del favor de éste. El primero ascendió hasta convertirse en capitán de una compañía de caballería, pero en 1687 el gobernador Herrera y Sotomayor le concedió la baja para que pudiera asumir el empleo de alguacil mayor del cabildo. En este caso, el despegue no se debió a sus éxitos en el comercio sino al patronazgo de un gobernador. Obregón se mostraría obsecuente con los sucesivos gobernantes, y en particular con Velasco, que lo designó recaudador del *nuevo impuesto* que la corona ordenó cobrar al tráfico de vinos y aguardientes. No obstante, llevó a cabo algunos

⁷³¹ AGN IX-48-7-7 *Escribanías Antiguas (1690-1692)*, f. 714.

emprendimientos comerciales. En 1693 emprendió un viaje a las provincias arribeñas conduciendo una tropa de 500 mulas y un modesto cargamento de textiles que se componía de 54 varas de ruán florete, 60 varas de ropa de la tierra, 17 varas de lienzo de algodón, 32 cuchillos, un corte de encaje negro, una cajeta de hilo blanco y 30 pares de medias de seda y de lana, todo ello enfardado en un carretón tirado por 12 bueyes.⁷³² Pudo haberse tratado de su única expedición mercantil fuera de Buenos Aires, ya que en adelante no extendió poderes a vecinos de otras ciudades ni solicitó permiso para ausentarse del cabildo con motivo de atender sus negocios. Velasco lo arrastró consigo en su caída: Mutiloa encontraría una excusa para hacerlo encarcelar por el hecho de no haber rendido oportunamente cuentas de la administración del *nuevo impuesto*.

La trayectoria de Obregón como comerciante parece haber sido breve, lo mismo que la de su aliado político Joseph Manuel Rubín de Celis, quien como referimos llegó en el mismo contingente de soldados que éste, en el navío Santa María de Lubeque. Este último, elegido síndico procurador por el cabildo en 1697, se convirtió en regidor luego del remate fraudulento de los empleos concejiles hecho por Velasco en 1710. Respecto a su participación en el comercio, sólo sabemos que en 1693 encargó a un pariente que se hallaba en Cádiz que le enviara mercancías por valor de 2000 pesos, pero dudamos que le hayan sido remitidas, ya que no han quedado vestigios de su participación posterior en el comercio local. Posiblemente no pudo competir con otros comerciantes de mayor envergadura, que fueron quienes se agruparon en torno a Joseph de Arregui en la facción que se opuso a Velasco desde el cabildo. Creemos que Obregón y Rubín de Celis representaron a ese sector que no había podido sólo había podido progresar modestamente y buscó el patrocinio de ese gobernador para quebrar la hegemonía del clan de los Samartín en Buenos Aires.

Un nuevo contingente de soldados arribó a Buenos Aires en 1677, esta vez en los navíos de registro de Miguel de Vergara. Entre ellos se hallaban dos futuros cabildantes: Gabriel de Aldunate y Rada y Antonio Meléndez de Figueroa. El primero de ellos casó al año de haber llegado a la ciudad con una mujer de una familia de poco renombre,

⁷³² Es interesante el detalle de los bienes personales que llevaba para su servicio en el carretón: una fuente, 3 platillos, una cuchara y una tembladera de plata, una bacinica y un colchón, 2 pares de sábanas de ruán, 4 almohadas de breaña. Además se enumeró su vestuario, consistente en 8 camisas de breaña con encajes finos de Flandes y 6 camisas de ruán con encaje de Lorena, 8 pares de calzoncillos de ruán, 4 jubones blancos, 2 vestidos negros de tafetán, un vestido de paño de Inglaterra con capote de felpa, una capa de paño, 2 sombreros blancos de castor y uno negro de vicuña, un aderezo de espada y daga de pavonado negro, una escopeta, 4 pistolas. A ello se agregaba un escritorio con papeles, una olla y una chocolatera de cobre y un estuche con navajas. Lo acompañó en el viaje para servirlo una esclava mulata. AGN IX-48-8-1 *Escribanías Antiguas (1693-1694)*, f. 324.

Lucía Salvatierra, que no recibió su dote hasta después de haber pasado un lustro.⁷³³ Aldunate debió ganarse un lugar en la oligarquía local a partir de sus destacados servicios militares, tanto por su desempeño en la primer expedición contra los portugueses en Colonia como en excursiones contra los indígenas. Fue nombrado en 1682 capitán de una compañía de infantería, al mando de la cual se mantuvo durante nueve años, y en 1691 capitán de una compañía de caballería. En 1692 fue designado alcalde ordinario por el cabildo y al año siguiente éste le encargó que pasara a España a presentar las demandas de la corporación ante la Corte de Carlos II. Regresó cinco años más tarde de la península con varias reales cédulas expedidas por el monarca a favor de la ciudad y con un título de corregidor para ejercer en el distrito alto peruano de Andahuayllas. Los escasos meses que pasó en Buenos Aires antes de trasladarse junto con su familia a su nuevo destino los dedicó a comprar mercancías por un valor cercano a los 3500 pesos, que le proveyeron los cargadores de los navíos de Gallo Serna y al mercader Miguel de Revilla, para poder beneficiarlas en las provincias andinas.⁷³⁴

El segundo soldado arribado en 1677 que se convertía en cabildante sería Antonio Meléndez de Figueroa, personaje de gran significación a lo largo de la primera década del siglo XVIII, que secundó a Valdés Inclán y a Velasco en sus negocios personales y que asumió durante un lustro el aprovisionamiento de la guarnición de la ciudad. Este andaluz nativo de Granada llegó a Buenos Aires de sólo 16 años, pero a pesar de su extrema juventud ascendió rápidamente en la carrera militar. Llegó a su rango más alto, el de capitán de una compañía de infantería, en 1696, pero dos años más tarde se le concedió el retiro. A los 20 años había contraído matrimonio con Isabel de Arpide, que provenía de una familia de escaso arraigo y fortuna. Posteriormente se diría que Meléndez “*nunca tuvo gran caudal*”, probablemente haciendo referencia al período anterior a su alianza con aquellos dos gobernadores.

Luego de abandonar la oficialidad militar incursionó en el comercio de mulas con las provincias arribeñas. Implementó una compañía con otro mercader porteño, Juan Bautista Fernández Parra, que cubría todas las instancias de este tráfico: el acopio de animales y su traslado y venta en las ferias del valle de Lerma o el Alto Perú.⁷³⁵ Esta sociedad tuvo un período de intensa actividad en los primeros años del siglo: entre 1701 y 1703 vendieron alrededor de 9000 cabezas de ganado mular al capitán Juan de

⁷³³ AGN IX-48-6-8 *Escribanías Antiguas (1693-1694)*, f. 599.

⁷³⁴ AGN IX-48-8-5 *Escribanías Antiguas (1699)*, f. 854.

⁷³⁵ AGN IX-48-9-2, *Escribanías Antiguas (1703)*, f. 619.

Ordazgoiti, vecino de la villa de Potosí, y se obligaron a entregar a Antonio y Agustín de la Tijera otras 2000 cabezas en una invernada de la localidad salteña de Algarrobal.⁷³⁶

Su rápido enriquecimiento le permitió acercarse al gobernador Valdés Inclán y ofrecerle crédito para sus emprendimientos personales. Desde 1702 ayudó a solventar las reparaciones del fuerte y tres años más tarde, la deuda que tenía con él la Real Hacienda llegaba a los 12.500 pesos, en que se incluían 8000 pesos que prestó para equipar las embarcaciones que en 1704 sostuvieron el desembarco de tropas españolas para la toma de Colonia del Sacramento.⁷³⁷ Como las leyes de Indias prohibían a Valdés Inclán participar del comercio, Meléndez encubrió los negocios de éste. En una carta a un mercader altooperuano, se afirmaba que parte de las mulas que Meléndez se disponía a fletar en 1702 hacia las provincias de Arriba pertenecía a dicho gobernador.⁷³⁸ Se ganó así su favor, y consiguió que su pulpería fuera habilitada para brindar *socorros* a las compañías del Presidio.

Fue entonces que Meléndez fue llamado integrar la planta concejil. Su presencia en el ayuntamiento fue breve, posiblemente porque su relación con los linajes representados en él era más bien distante, pues carecía de vínculos estrechos con ellos. La única ocasión en que desempeñó un oficio en la corporación fue en 1704, en que fue electo síndico procurador. Tres años más tarde, el alguacil mayor Miguel de Obregón lo propondría para alcalde ordinario de segundo voto, pero el resto de los cabildantes se inclinaron por otorgar dicho oficio a Diego Sorarte.⁷³⁹

En 1705, Meléndez se dispuso a pasar “*al Reino de Chile y otras partes*” y, como era aconsejable antes de emprender viajes de riesgo, dictó su testamento. En él se declaró deudor de varios sujetos por más de 35.000 pesos, pero acreedor de otros por cantidades que excedían los 80.800 pesos. El caudal en plata y mercancías que llevaba consigo ascendía a 30.364 pesos.⁷⁴⁰ En esta travesía condujo cinco carretas, en las que iban 31 esclavos comprados a la *Compagnie de Guinée* y unas barras de fierro. Retornó del mismo con 84 fardos de ropa de la tierra, 14 fardos de ají, 21 botijas de aguardiente y 16 botijas de vino. Al año siguiente, emprendió otro viaje en ocho carretas, en las cuales

⁷³⁶ AGN IX-48-8-7, *Escribanías Antiguas (1700-1701)*, f. 551v; IX-48-9-2, *Escribanías Antiguas (1703)*, fs. 611v. y 619, IX-48-9-6, *Escribanías Antiguas (1713-1715)*, f. 452.

⁷³⁷ AGN Documentos Diversos, Sección Colonia. Legajo 19. *Ramo de Fortificaciones*

⁷³⁸ Así lo afirmaba en una de sus cartas Joseph Beláustegui, mercader altooperuano que traficó con Buenos Aires; para su correspondencia véase Carlos María BIROCCO “Cambio de dinastía y comercio interregional...” Págs. 368-370.

⁷³⁹ AECBA Serie II, tomo I, Págs. 254 y 545.

⁷⁴⁰ AGN IX-48-9-4, *Escribanías Antiguas (1705-1707)*, f. 346.

iban 96 negros, para cuyo cuidado fue asistido de más de 20 peones. También llevaba en ellas unos fardos de ropa que le había confiado Valdés Inclán para venderlos.⁷⁴¹ Cuando Meléndez se detuvo en Santa Fe se le presentó un negocio no previsto: la posibilidad de pasar a las provincias andinas con una tropa de vacas que adquirió al teniente de gobernador de esa ciudad, el capitán Juan Joseph Moreno, quien a su vez las había recogido con licencia del convento franciscano. No obstante, Valdés Inclán le denegó el permiso para conducir las al Perú, por lo que Meléndez se vio precisado venderlas a un vecino de Córdoba que ya tenía otorgada una licencia de saca.⁷⁴² Detalle sin duda de interés, pues muestra a todas luces que el gobernador no quería dejarle margen para sus propios negocios, limitando cualquier intento de maniobrabilidad propia y acotando su desempeño a ser un mero agente de quien lo enviaba.

Cuando en febrero de 1708 se produjo el relevo de Valdés Inclán por su sucesor, Manuel de Velasco y Tejada, Antonio Meléndez de Figueroa pasó de la comitiva de uno a la del otro. Mientras Velasco estuvo en el poder, éste fue una verdadera llave de acceso al gobernador. Los testimonios redundan al respecto: todo aquel que quería dirigirse a éste debía pasar por la antesala de su *privado*. Los capitanes de los buques negreros franceses debieron a menudo sobornarlo antes de efectuar el desembarco de esclavos y manufacturas. Monsieur Vivien, capitán del navío *Las Dos Coronas*, debió cederle un tercio de su cargamento antes de que se le dejara siquiera cargar provisiones para abastecer a la tripulación de su barco. Este solo negociado dejó para el gobernador y su *privado* 7212 pesos en utilidades.⁷⁴³ Velasco confió a Meléndez el almacenamiento de los textiles y otros efectos confiscados a los navíos franceses, gracias a lo cual éste brindó suministros a la guarnición, tal como antes lo había hecho Antonio Guerreros, hasta que Mutiloa se presentó en la ciudad y los aprisionó a ambos.

También llegarían a ser cabildantes tres de los soldados que llegaron en un tercer contingente, transportado en los navíos de registro de Tomás Miluti en 1681: Domingo Acasuso, Sebastián Delgado y Andrés Gómez de la Quintana. El primero de ellos, que incursionó exitosamente a lo largo de más de tres décadas en el tráfico con otras ciudades del virreinato, sólo tuvo una breve estadía en el gobierno municipal. Acasuso

⁷⁴¹ Sabemos por un testigo que en 1706 el gobernador había girado a la plaza de Santa Fe “*porción de ropa de su cuenta con el capitán don Antonio Meléndez*”; AGN IX-39-9-5, *Demanda de Joseph de Narriondo en la residencia de Alonso de Valdés Inclán*.

⁷⁴² AGN IX-41-5-7, *Antonio Márquez Montiel contra Manuel de Velasco*.

⁷⁴³ Meléndez pretendía, según fue acusado posteriormente, el “*treinta y cinco por ciento de las cabezas en especie*”, AGN IX-49-7-1, *Testimonio de la demanda sobre el Navío Las Dos Coronas y de la confesión de Meléndez*.

era oriundo de Balmaceda, en el País Vasco, y su carrera como militar de la guarnición nos es poco conocida. El primer indicio que hemos encontrado de su participación en el comercio con las regiones vecinas data de 1694, en que envió 10.600 cabezas de ganado vacuno a Salta.⁷⁴⁴ En los diez años que siguieron, ofreció préstamos en plata a varios mercaderes de Buenos Aires, Cuyo, Santa Fe, Asunción y el Tucumán, cuya devolución fue con frecuencia pactada en efectos de la tierra tales como la yerba o las telas bastas. Pero no por ello renunció a enviar hacia otras regiones carretas cargadas de su propia cuenta, como lo hizo en 1709 cuando giró hacia las provincias arribeñas 8436 pesos en géneros de Castilla.⁷⁴⁵

El momento de mayor actividad de este comerciante se produjo durante los gobiernos de Baltasar García Ros y Bruno Mauricio de Zavala. Desde que estuvieron presentes en Buenos Aires los agentes de la *South Sea Company*, Acasuso fue uno de los principales adquirentes de esclavos, que hizo conducir en lotes de varios cientos al Alto Perú.⁷⁴⁶ También proveyó a esos distantes mercados de artículos de origen europeo: en 1718, remitió por medio su socio Santiago de Zapiain al Perú una “*porción de fierro*” valuada en 10.278 pesos, que éste se comprometió a vender a los más altos precios y a traer su producto a este puerto para partir las ganancias.⁷⁴⁷ Asimismo compró en pública almoneda las mercancías que habían sido embargadas a un navío francés capturado en el río de la Plata, el queche *La Dorada de Bayona*.⁷⁴⁸ Uno de los dependientes de Acasuso las condujo en carretas y fue vendiéndolas en Santiago del Estero, Jujuy y Potosí, llevando efectos cuyo valor había sido calculado en 39.259 pesos. Entre ellos se contaban utensilios de hierro que se consideraban apropiados para el laboreo de la tierra en los valles montañosos o para trabajar en las minas, como combillos, palas y azadas, aunque también incluyó en el cargamento hojas de espadas, cuchillos y clavos; a ellos agregó una gran variedad de textiles europeos como el ruán francés, los camelotes, los paños azul y grana, la sarga negra y la sempiterna inglesa.⁷⁴⁹

La participación de Acasuso en el cabildo fue, como dijimos, de escasa trascendencia. Ello no significó que careciera de ambiciones de poder, sino que había escogido otros canales para alcanzar esas pretensiones. Aunque no tuvo participación en la lucha

⁷⁴⁴ AGN IX-48-8-1 *Escribanías Antiguas (1693-1694)*, f. 472.

⁷⁴⁵ AGN IX -48-9-1, *Escribanías Antiguas (1709-1712)*, f. 129v.

⁷⁴⁶ La primera de estas compras data de 1715, y se extendieron hasta 1724. AGN RE n° 2 de 1714-1716, f. 325v.

⁷⁴⁷ AGN RE n° 2 de 1716-1719, f. 306v.

⁷⁴⁸ AGN RE n° 2 de 1720-1723, f. 934v.

⁷⁴⁹ AGN IX-16-1-2 *Autos tocantes a los cargos hechos a Domingo de Acasuso e Ignacio Velásquez*

facciosa que dividió a la vecindad porteña durante el gobierno de Velasco, consiguió luego de la caída de éste acercarse al entorno del pesquisidor Mutiloa. Gracias a esa proximidad se lo designó tesorero de las Reales Cajas de Buenos Aires, empleo en que se desempeñó entre abril de 1712 y junio de 1714. El ayuntamiento lo nombró alcalde ordinario en 1716, pero su actuación sería de poco lustre, quizás porque se trató de un año en que la corporación tuvo escasa actividad. En 1721, al haberse producido la vacancia de los principales cargos de la oficialidad de la Real Hacienda, los cabildantes lo incluyeron en una lista de sujetos que consideraban dotados de “*celo y suficiencia*” para ejercerlos. El gobernador Bruno Mauricio de Zavala atendió a su recomendación y lo nombró contador de las Reales Cajas, cargo que ocupó desde diciembre de 1721 hasta octubre de 1722.

Dos de los compañeros de travesía de Acasuso, Andrés Gómez de la Quintana y Sebastián Delgado, que también llegaron como soldados en 1681, militarían durante el gobierno de Velasco en bandos opuestos. Ambos fueron capitanes de compañías del Presidio y sostuvieron tiendas de suministros para abastecer a sus soldados. Pero Gómez de la Quintana contrajo matrimonio en 1691 con una muchacha perteneciente al clan de los Samartín, María de Azócar, y fue asistido por el tío de su mujer, el poderoso Antonio Guerreros, que no sólo se ocupó de costear el vestuario de la pareja y de sus hijos sino también de extender el fiado a los soldados que se hallaban bajo el mando de su sobrino político.⁷⁵⁰ La participación de Gómez de la Quintana en el gobierno municipal se resumió a ser procurador en 1714, en momentos en que la facción encabezada por su parentela recuperó el manejo de la corporación, amparada por el pesquisidor Mutiloa. Sebastián Delgado, por el contrario, sostendría una larga y conflictiva trayectoria política. Esta se superpuso con su carrera militar, ya que fue capitán de una compañía del Presidio entre 1702 y 1715. Paralelamente incursionó en el comercio regional, haciéndose traer yerba del Paraguay, y abrió una tienda en la ciudad, en la que ofreció suministros a los hombres de su propia compañía.⁷⁵¹ Según explicaría años más tarde, no les brindó provisiones por voluntad propia sino que fue forzado por el gobernador Valdés Inclán, quien le obligó a darles fiado movido por el atraso en la llegada del *situado*.⁷⁵²

⁷⁵⁰ AGN RE N°2 1707-1709, f. 128.

⁷⁵¹ En 1704, un vecino de Asunción, Juan Díaz Cantarero, se obligó con Sebastián Delgado por 540 pesos, a pagar en yerba a 20 reales la arroba; AGN IX -48-9-3, *Escribanías Antiguas*, f. 51.

⁷⁵² En 1715 aseguraría que “*es público le deben los soldados de este Presidio 30.000 pesos que dio de socorro violentado del Sr. Dn. Alonso Juan de Valdés, Gobernador y Capitán General que fue, cuya paga*

Durante el gobierno de Velasco, Delgado habría de plegar a la facción que rechazaba la posición hegemónica del clan de los Samartín y formó parte de la camarilla de aquel. En 1709, por medio de un remate fraudulento, hizo suyo el empleo de alcalde provincial de la Hermandad, pero el mismo le sería arrebatado dos años más tarde por orden del pesquisidor Mutiloa. Cuando este último cedió el mando a Alonso de Arce y Soria, Delgado fue llamado por el nuevo gobernador a desempeñarse como tesorero de la Real Hacienda, empleo en que sólo se mantuvo por algunos meses. En noviembre de 1717, finalmente, compró una regiduría y la ocupó hasta 1724: ese año, su participación en la intriga contra el teniente de gobernador Antonio de Larrazábal le valdría la expulsión de la corporación.⁷⁵³ Este tendero, en síntesis, desempeñó un papel destacado en el cabildo a lo largo de casi dos décadas de lucha facciosa, a resultas de lo cual perdió en dos oportunidades su escaño.

El más notable entre quienes ingresaron a Buenos Aires como soldados y llegaron a convertirse en cabildantes sería Miguel de Riblos. Este fue, de todos los peninsulares que analizamos, el que arribó a la ciudad más tempranamente. Había sido reclutado en su Navarra natal por una leva y pasó al Río de la Plata en 1669, enviado a servir como soldado raso en una de las compañías de número auxiliares de la guarnición. En breve alcanzaría el rango de capitán de la caballería de lanzas ligeras y posteriormente, en 1681, el de capitán de caballos corazas. Un año más tarde, fue nombrado alcalde ordinario por el cabildo. Su condición de vecino la había adquirido en 1673, luego de su unión con Gregoria de Silveira Gouvea, nieta, hija y viuda de importantes mercaderes portugueses afincados en la ciudad.

En los siguientes años, Riblos se volcó principalmente al comercio de artículos europeos, adquiridos a los cargadores de los navíos de registro. Con el objeto de proveerse de mercancías castellanas comprometió en dos ocasiones su ya numeroso plantel de esclavos. En 1678 se obligó por 2300 pesos con Miguel de Vergara, capitán de uno de dichos navíos, para lo cual hipotecó cuatro negros, cinco negras, cinco mulatos y seis mulatas.⁷⁵⁴ En 1687 Riblos adquirió del comandante de otra embarcación

no se le ha hecho a la hora de ésta por la retardación de los situados"; AGN IX-40-7-5 *Sebastián Delgado con Faustino Larrea sobre exhibición de documentos (1715)*.

⁷⁵³ Delgado compró la regiduría de Juan Martín de Mena y Mascarua: AGN RE nº 3 de 1716-1719, f. 147v.

⁷⁵⁴ AGN IX-48-6-7, *Escribanías Antiguas (1677-1679)*, f. 298v.

española, Francisco de Retana, mercancías por valor de 3445 pesos, esta vez ofreciendo como prenda hipotecaria a sus esclavos varones, que sumaban ocho piezas.⁷⁵⁵

A lo largo de las últimas dos décadas del siglo XVII, Riblos lograría formar parte del círculo de allegados de los sucesivos gobernadores. En 1688, Joseph de Herrera y Sotomayor lo designó teniente de gobernador de Santa Fe, adonde le encargó que pusiera fin a los disturbios que habían sido provocados por una contienda entre facciones locales. A pesar de que el líder de una de ellas era pariente de su esposa, logró armonizarlas. Ya de regreso en Buenos Aires, el gobernador le manifestó su favor poniéndolo a la cabeza de la *Compañía de los Gobernadores*, especie de “guardia de corps” que tenía a su servicio. Pero su encumbramiento se produjo durante el gobierno del sucesor de Herrera y Sotomayor, Agustín de Robles. A comienzos de 1697, éste lo promovió a “*lugarteniente general y capitán a guerra de esta ciudad y provincia*”, en ocasión de hallarse unos corsarios franceses al asecho de los navíos que salían del puerto de Buenos Aires.⁷⁵⁶ En junio de ese año, finalmente, Miguel de Riblos fue ascendido por dicho gobernador a *cabo y gobernador de la caballería del Presidio*, que era el cargo de mayor rango en este destacamento militar.

Robles le confirió, además, la prebenda más codiciada por los comerciantes porteños: la provisión de *socorros* a los oficiales y soldados del Presidio. Este negocio, como ya vimos, solía ordinariamente recaer en algún personaje allegado al mandatario de turno, en cuya tienda se abastecía a algunas o a la totalidad de las compañías. Aunque se han conservado abundante material documental sobre las empresas mercantiles de Riblos, no contamos con sus libros de cuentas. No obstante, entre los papeles que años más tarde se encontraron en el despacho de este mercader se mencionaron “*unos autos obrados por el señor don Agustín de Robles sobre los socorros de vestidos y comidas que mandó dar a don Miguel de Riblos para la guarnición de este Presidio*” y un listado que contenía “*lo que deben los soldados de este Presidio a don Miguel de Riblos*”.⁷⁵⁷ Entre tanto, éste no renunció a sus emprendimientos personales, y en 1695 remitió una tropa de ganado vacuno al Noroeste con miras a colocarlo en el Potosí, adonde lo representaba Juan de Echeversea, al mismo tiempo que recibía 310 libras de

⁷⁵⁵ AGN IX-48-7-2, *Escribanías Antiguas (1683-1686)*, f. 321v.

⁷⁵⁶ AGN IX-48-8-1, *Escribanías Antiguas (1693-1694)*, f. 145v.

⁷⁵⁷ AGN Sucesiones 8122, *Concurso de bienes de Miguel de Riblos*.

cera blanca de Santiago del Estero y 1896 libras de cobre de Chile, junto con sedas y otros géneros procedentes de ese reino.⁷⁵⁸

A principios del siglo XVIII, Riblos no tuvo vínculos cordiales con los gobernadores Prado y Maldonado y Valdés Inclán. El primero lo desterró a la isla de Martín García por no haber querido jurar a Felipe V, condena que pudo sortear refugiándose en la iglesia catedral. Posteriormente Valdés Inclán le ofreció su perdón pero lo excluyó de cualquier vínculo privilegiado. Alejado provisoriamente de la camarilla del gobernador, Riblos se dedicó a articular la red de vínculos con otros comerciantes merced a la cual se convertiría en el más destacado acopiador y traficante de ganado mular de la ciudad. A lo largo de una década, que se extendió entre 1700 y 1709, procedería al envío de 41.454 mulas hacia el Noroeste. Su socio más destacado fue el mercader peruano, Juan de Beytía y Aguirre, a quien en 1701 se comprometió a enviarle 4000 cabezas anuales a la ciudad de Lima. Las mismas partirían de las estancias que aquel poseía en Areco y serían entregadas a un fletador “*libres de los gastos, quiebras y demás pérdidas que traen consigo en la saca de los parajes donde se crían*”.⁷⁵⁹ Riblos se obligaba a pagar los 11 reales de flete por cabeza colocada en Salta o Jujuy, lo mismo que los 6 reales que insumía su internada en los potreros norteños, donde los animales se recuperaban de su largo viaje. Un segundo fletador despachado por Beytía recogería la remesa luego del engorde para conducirla al Perú; en este segundo tramo, el socio limeño atendería los gastos del fletamento, pagados en plata o ropa. Sabemos que el primer envío, que partió de Areco en octubre de 1701, fue conducido por los capataces de Alonso de Alfaro hasta los potreros de Bartolomé de Argañaraz en el paraje jujeño de Yalacuya, donde la tropa fue entregada en enero de 1702 a Antonio y Joseph Márquez de la Tixera, podatarios de Riblos. Posteriormente Miguel de Gaete, fletador de Beytía, condujo la tropa hasta Lima, donde se procedió a la venta. A partir de entonces se pactaron otras seis remesas anuales como ésta.

A diferencia de otros traficantes de mulas, Riblos nunca abandonó Buenos Aires. En el Alto Perú, lo mismo que en Cuyo, el Tucumán y el Paraguay, contó con socios o representantes que le enviaban frecuentes remesas de productos locales. Otra manera de recibir estos envíos fue vender a los mercaderes de esas regiones partidas de artículos europeos y hacérselos pagar con yerba, lana de vicuña o textiles de la tierra. Siendo el más acaudalado de los comerciantes porteños, les ofrecía préstamos en plata o les fiaba

⁷⁵⁸ AGN IX-48-8-2, *Escribanías Antiguas (1693-1703)*, fs.10, 174v., 311v. y 440.

⁷⁵⁹ AGN IX-48-9-2, *Escribanías Antiguas (1703)*, f. 409.

mercaderías que más tarde recuperaba en la forma de pagos en especie. Esta disponibilidad de metálico fue sin duda uno de los motivos por el que gobernador Velasco y Tejada lo llamó a integrar su círculo de allegados, y cuando éste hizo expulsar del cabildo a los oficiales venales pertenecientes a la facción de los Samartín y fraguó el remate de los empleos vacantes, Riblos se adueñó del cargo de depositario general del ayuntamiento.

Con la llegada de Mutiloa, Miguel de Riblos fue el único de los oficiales venales introducidos al cabildo por Velasco que no perdería su empleo, debido a que éste último no había debido desalojar a otro vecino del mismo para cedérselo. Pero el pesquisidor, confabulado con la facción de los Samartín, consiguió jaquearlo de otra manera: ordenando que se hiciera cumplir una ejecutoria lanzada por la justicia a favor de uno de sus proveedores, el mercader gaditano Francisco de Rivera, por 9025 pesos. Como Riblos no contaba en ese momento con metálico suficiente para satisfacer esa deuda, Mutiloa decretó su prisión y sometió sus bienes a un concurso de acreedores. Ante la posibilidad de ser conducido públicamente a la cárcel del cabildo, una medida humillante para un personaje de su notoriedad, buscó refugio en el Colegio de San Ignacio de la Compañía de Jesús, donde permanecería encerrado durante un par de años. Posteriormente los gobernadores Alonso de Arce y Soria y Bruno Mauricio de Zavala le darían permiso para que abandonase esa casa conventual, pero Riblos no volvería a recuperar el control directo de su patrimonio, que permanecería en manos de un administrador nombrado por el concurso de acreedores.

Entre los grandes comerciantes que actuaron en política, los criollos fueron una pequeña minoría. El caso más notorio fue el de Joseph de Arregui, quien había nacido en Buenos Aires en 1658. Su padre, Juan Antonio de Arregui, era oriundo de Guipúzcoa, de donde llegó como soldado de leva, mientras que por su madre, Juana Gutiérrez de Paz, estaba emparentada con el clan de los Samartín. Al parecer debió aguardar la partición de los bienes de su progenitor (que falleció en 1689 dejando en herencia 3000 pesos en plata, numerosos esclavos y cuantiosos bienes) para contar con los medios suficientes para iniciarse en el tráfico con las provincias arribeñas. Pero su participación en dicho tráfico en la última década del siglo XVII fue más bien esporádica: hasta donde sabemos, sólo remitió hacia allí dos tropas de mulas, una en 1696 y otra en 1699.

El rol protagónico que jugó en el cabildo, que se extendió a lo largo de la primera década de la centuria siguiente, corrió en paralelo con el papel destacado que llegaría a

tener en el comercio con el Tucumán y el Alto Perú. En 1702, gracias a que el gobernador Prado y Maldonado puso en ejecución la real cédula que ampliaba el número de regidurías en el ayuntamiento porteño, Arregui adquirió una de ellas, lo mismo que el honroso título de alférez real. Meses más tarde se ofreció como fiador del sucesor de Prado, Alonso Valdés Inclán. Mantuvo por un corto tiempo relaciones cordiales con éste, lo que le permitió alternar su actividad política con sus empresas comerciales y ausentarse cuando lo requería alguno de sus emprendimientos. En 1703, condujo una tropa de 6272 mulas hacia las provincias norteañas. Al año siguiente, ya de regreso, abonó la alcabala por los 20 fardos de ropa de la tierra que recibió como parte de pago en dichas provincias, lo mismo que por 123 botijas de vino que le trajeron tres carreteros desde Cuyo.

A partir de 1705, el hecho de que se convirtiera en el líder de la facción de los Samartín, luego de la confiscación de los bienes de Antonio Guerreros, parece haber sido una razón de peso para optar por conformar compañías comerciales y a delegar en sus socios la conducción de mercancías, ganados o esclavos a otras regiones. Una de dichas compañías fue la integró junto con el maestre de campo Antonio de la Tixera, vecino de la ciudad de Tarija, por la que en mayo de ese año ambos se comprometieron a entregar en Salta o Jujuy al mercader peruano Francisco Díaz de Pereda 6000 mulas por año, mientras que éste último les enviaría durante los dos primeros años 20.250 varas de ropa de la tierra desde Lima para pagar la internada y el flete, más 30.000 varas de dicha ropa en concepto de participación en las ganancias. Todas ellas serían remitidas a Buenos Aires a través de los puertos chilenos, bajo el compromiso de que ésta sería “*de Guanuco y Guamalies y no del Cuzco y otras partes como menos a propósito para estas provincias*”. En los años subsiguientes, flete e internada serían saldados dos tercios en ropa y un tercio en plata, mientras que las ganancias de Arregui y Tixera consistirían en 20.000 varas de ropa de la tierra y 8.000 pesos en plata.⁷⁶⁰

Un mes más tarde, Arregui establecería una segunda sociedad con un comerciante alto peruano, Pedro García de la Yedra. En este caso, ambos pactaron con Georges Hays, director de la *Compagnie de Guinée*, la compra de la mitad de los negros que trajera el navío *L'Amphitrite* en 20.000 pesos, que serían abonados en un lapso de 15 meses. Hays estableció un precio de 270 por cabeza y se comprometió a mantener esas condiciones a lo largo de seis años, destinándoles la mitad de las cargas de los barcos negreros que

⁷⁶⁰ AGN IX-48-9-4, *Escribanías Antiguas (1705-1707)*, f. 143.

arribaran. Pero cuando el primer navío llegó a puerto se descubrió que la mayor parte de los esclavos, que eran alrededor de 300, padecían de viruela, y el cabildo prohibió que se los desembarcara: puede sospecharse que Arregui, que dominaba al ayuntamiento por medio de parientes y aliados, esperaba retrasar el momento de la transacción para que mientras tanto la muerte aligerara de enfermos el cargamento. Aunque Hays intentó que se declarase por nulo el contrato de 1705, con el fin de contrarrestar esa maniobra, pero Valdés Inclán falló en su contra, y al finalizar el pleito Arregui y De la Yedra consiguieron apropiarse de los negros que habían sobrevivido al contagio.⁷⁶¹ Cuatro años más tarde, Arregui seguía siendo un comprador regular de esclavos, y adquiría toda la carga de esclavos del navío asentista *L'Esphere*.⁷⁶²

Durante el gobierno de Velasco, Joseph de Arregui se convertiría en cabecilla de la facción que se le opuso, motivo por el cual sería despojado de su escaño en el cabildo, bajo el pretexto de que la regiduría que ocupaba no había recibido aún la confirmación del Consejo de Indias. En un principio pareció que se alejaría de la lucha facciosa y se replegó en sus negocios. Se ausentó durante más de un año de Buenos Aires y se estableció en Salta, donde contrajo matrimonio con María Castellanos, perteneciente a un linaje destacado de esa ciudad. Esta estrategia matrimonial no era nueva en el seno del clan de los Samartín: una de sus primas, Ana de Samartín, se había casado anteriormente con Nicolás Bazán de Pedraza, que era miembro de uno de las principales familias de La Rioja. Mantuvo, además, su vinculación con Tixera y García de la Yedra y siguió abocado al tráfico de mulas y de esclavos.

A comienzos de la década de 1710, el enfrentamiento entre Velasco y el clan de los Samartín alcanzó su pico de mayor tensión y Arregui, que retornó a Buenos Aires y cuestionó públicamente al gobernador, fue enviado a prisión, pero pudo escapar de ella y guarecerse en el convento de San Francisco, donde profesaban dos de sus hermanos. Con el arribo de Mutiloa pudo abandonar su refugio y recuperar su escaño en el cabildo. Enseguida preparó, junto con su socio Pedro García de la Yedra, un nuevo viaje al Alto Perú, conduciendo una caravana de carretas hacia aquellas provincias cargadas de una de fardos de textiles comprados secretamente a los asentistas franceses. Pero el pesquisidor, aunque había valorado su rol de aliado político al enfrentar a la camarilla

⁷⁶¹ AGN IX-48-9-4, *Escribanías Antiguas*, f. 174v.; IX-42-2-7, *El Real Asiento contra Pedro de la Yedra y Joseph de Arregui*, f. 3.

⁷⁶² En enero de ese año, Arregui se obligó a pagar a Hays 31.375 pesos, “los mismos que son y proceden de resto de mayor cantidad que importó la cargazón de negros que compré a dicho director del navío nombrado la *Esphera*, perteneciente a dicho Real Asiento”; AGN RE N°2 1707-1709, f. 492.

de Velasco, no estaba dispuesto a tolerar el descaro con que despachaban artículos de contrabando, y ordenó que ambos fueran detenidos en Potosí, donde se les fueron incautados la mayor parte de su cargamento y fuertes sumas de plata amonedada no declaradas al fisco.⁷⁶³ Unas semanas más tarde, Arregui fallecía en aquella ciudad altoperuana, y su patrimonio, al igual que había sucedido con Miguel de Riblos, quedaba a disposición de los tribunales de la justicia ordinaria.

Perfilando a la dirigencia concejil: algunos lineamientos

Las historias personales que acabamos de exponer ilustran el ensamble entre la actividad mercantil y la participación política. Se demostró un interés mayor en ingresar al cabildo cuando se trató de defender la posición o los privilegios de la facción o el sector a que se pertenecía. Pero el desempeño de un oficio concejil fue con frecuencia percibido como un incómodo pero obligado servicio a la corona, o bien como un escalón en el camino que conducía a otros empleos más redituables. Creemos que lo importante es apreciar cómo se conjugaban ambas actuaciones y establecer a partir de ello los procesos de rotación que atravesó la dirigencia municipal. Si bien los grandes comerciantes formaron siempre parte de la planta concejil, no fueron los únicos que la compusieron ni se constituyeron invariablemente en el sector dominante. Nuestro intento de reconstruir dichos procesos se cernirá a un subgrupo bastante amplio, integrado por aquellos que ejercían empleos venales –regidores, alféreces reales, alguaciles mayores, alcaldes provinciales de la Hermandad y depositarios generales– y aquellos que hemos dado en llamar “oficios mayores” electivos –alcaldes ordinarios y síndicos procuradores–. Hemos dejado de lado en este análisis a quienes se desempeñaron como alcaldes de la Hermandad, pues normalmente eran seleccionados entre quienes poseían haciendas de campo y por lo tanto rara vez se abocaban a otras actividades que no fueran las agroganaderas.

Durante las primeras dos décadas del período analizado, los traficantes de ganado mular (que también eran criadores de este híbrido) jugaron un importante papel en el ayuntamiento. En Buenos Aires, el apogeo del comercio de mulas con las provincias andinas se produjo entre 1680 y 1710, por lo que era esperable que los mismos

⁷⁶³ Quizás con exageración, un cronista potosino refiere que se trató de varios millones en plata y ropa. Bartolomé de ARZANS DE ORSUA Y VELA **Historia de la villa imperial de Potosí...** tomo III, Págs. 5 y ss.

estuvieran bien representados en la dirigencia concejil. De hecho, no resulta difícil reconocer el lugar que estos ocuparon en la dirección de la corporación entre los gobiernos de Agustín de Robles y Manuel de Velasco Tejada. Entre quienes participaron de la cría, el acopio y la venta de mulas podemos destacar a Miguel de Riblos, Joseph de Arregui, Antonio Guerreros, Juan Bautista Fernández, Pedro Saavedra, Alonso de Beresosa y Contreras, Joseph Ruiz de Arellano, Antonio Meléndez de Figueroa, Pedro Guezala, Martín Segura, Miguel Obregón, Luis Pesoa de Figueroa, Baltasar de Quintana Godoy y Joseph Narriondo, entre los más notables. Muchos de los que protagonizarían de la vida política porteña durante el turbulento período que se extendió entre 1705 y 1715 se habían enriquecido gracias a ese tráfico en los años precedentes. No obstante, ninguno de quienes se abocó a la cría y la venta de ganado mular lo hizo de forma excluyente y eventualmente alternaron esta actividad con el envío de tropas de carretas cargadas de manufacturas europeas o de yerba paraguaya, o bien con el manejo de una tienda en la ciudad.

Como ya hemos dicho, la principal motivación que movía a los porteños a internarse hasta las provincias andinas centrales fue la obtención de plata amonedada, pues la necesitaban para pagarles a sus proveedores de efectos europeos. La venta de ganado mular en dichos mercados, a diferencia de la yerba u otros productos locales, ofrecía la ventaja de que había pocos competidores con quienes lidiar. Pero hubo otras causas que condujeron a los negociantes locales a concentrarse en ese rubro al intervenir en el tráfico interregional. Una de ellas fue la creciente intromisión de los gobernadores en el mercado local de manufacturas ultramarinas. Al ejercer un fuerte control sobre el desembarco clandestino de las mercancías francesas, lograron apartar a gran parte de los negociantes locales de la posibilidad de adquirirlas a bajos costos y reservar para su reducido círculo de allegados ese lucrativo negocio. Otro motivo pudo haber sido la reducción de las ventajas que ofrecía por entonces el comercio minorista en Buenos Aires debido al sesgo monopólico que adoptó durante la primera década del XVIII el aprovisionamiento a los oficiales y soldados de la guarnición y a sus familias, quienes componían una porción significativa de la población de la ciudad.

Desde hacía más de medio siglo, los retrasos en el pago habían instado a los gobernadores a distribuir entre los militares del Presidio provisiones e indumentaria a cuenta de sus sueldos, sustanciadas a través de vales que sólo podían ser canjeados en los almacenes señalados al efecto. Este abastecimiento, como ya se señaló, estaba en manos de personajes allegados al mandatario de turno. Ese rol fue desempeñado por

Miguel de Riblos durante el gobierno de Agustín de Robles y por Antonio Guerreros durante el gobierno de Valdés Inclán. Este último, no obstante, dio participación a otros mercaderes, mencionados por el *libro manual de alcabalas*: Antonio de Merlos, quien cambió ropa por vales en 1703; Alonso de Beresosa y Contreras, que proporcionó comida a cuatro compañías entre 1703 y 1704, y Antonio Meléndez de Figueroa y Sebastián Delgado, cuyas pulperías brindaron *socorro* a los soldados en 1705 y 1706. Pero durante el gobierno de Velasco, éste otorgó el manejo exclusivo de los suministros a Antonio Meléndez. Ambos serían acusados de haber abierto “*almacenes públicos de ropas y mercaderías, obligando a los vecinos... a que fuesen a ellos a comprar dichos géneros*”, e incluso de haber puesto trabas a los cargadores de los navíos de registro para desembarcar sus mercancías, una maniobra cuyo propósito era acaparar el mercado local.⁷⁶⁴

En Velasco nos encontramos frente a la exacerbación de los poderes discrecionales acumulados por los gobernadores del Río de la Plata desde el último cuarto del siglo XVII. Durante su mandato, la posibilidad de realizar buenos negocios estuvo supeditada a su anuencia o aprobación. El cabildo de Buenos Aires tardó en hacer frente a esa progresiva acumulación de poder. A fines de los Seiscientos, contaba con un número tan escaso de miembros que no le fue posible desempeñar ningún rol de contrapeso. En la década siguiente, con la incorporación de una nueva camada de oficiales venales a su planta, intentó desafiar las arbitrariedades de Valdés Inclán y de Velasco, pero con éxito más que limitado. El fracaso en rechazar las imposiciones de los gobernadores incidió en que a lo largo de más de dos décadas la oligarquía local se concentrara en el tráfico de ganado mular, estimulado por la demanda del mercado alto peruano. Ello se debió a que fue el único rubro que brindó a los comerciantes la oportunidad de realizar negocios sin sufrir la injerencia de las autoridades locales.

En 1712, bajo la influencia directa de Mutiloa, la coyuntura local se vio sometida a profundos cambios. El pesquisidor desarticuló las redes de vínculos personales urdidas por Velasco y sus predecesores para llevar a cabo el contrabando de manufacturas europeas y la distribución de suministros a la guarnición. En el lapso de unos meses desaparecieron de escena, además, los tres comerciantes más acaudalados de la ciudad, los cuales habían tenido una amplia participación en los enfrentamientos facciosos dentro y fuera del cabildo: Joseph de Arregui, a causa de su detención en Potosí y de su

⁷⁶⁴ AGN IX-39-9-7, *Contra Manuel de Velasco por abuso de poder*.

inesperada muerte; Miguel de Riblos, por haber sido sometido a un concurso de acreedores, y Antonio Meléndez de Figueroa que fue encausado por encubrir los negociados de Velasco. Otros vecinos de renombre se vieron arrastrados por la caída de este gobernador, entre ellos Diego Sorarte, Miguel Obregón y Pedro Guezala, a quienes se acusó de defraudación al fisco y de participar en el contrabando con los asentistas franceses. Ello facilitaría el ascenso de otras figuras, que hasta entonces habían debido permanecer en un discreto segundo plano.

El monopolio de los suministros a la guarnición llegó a su fin debido a la intervención de Mutiloa. A partir de 1712, la Real Hacienda local se encargó de repartir una porción de los efectos incautados a dos embarcaciones francesas, la corbeta *Falmut* y del queche *La Dorada de Bayona*, en carácter de *socorros* a los soldados. A lo largo de tres años no llegó el *situado* desde Potosí, pero las tropas pudieron subsistir gracias a esos adelantos, no quedando ya la tarea de abastecerlos reservada al *privado* de ningún gobernador. En 1715, la corona dispuso el cobro del “nuevo impuesto” al ingreso de yerba, vino y aguardiente a la ciudad y ordenó que una parte de la recaudación del mismo estuviera destinada al abastecimiento de los militares del Presidio. A partir de 1717, finalmente, el *situado* comenzará a llegar a Buenos Aires con regularidad y ya no fue necesaria una política de *socorros* a oficiales y soldados. Estas últimas medidas explican en parte la mayor circulación de metálico que se observó en la ciudad entre finales de la década de 1710 y comienzos de la siguiente, la cual sin duda incidió en la proliferación de tendejones y pulperías que el cabildo denunció por entonces e intentó moderar.

El impacto de la pesquisa de Mutiloa, en síntesis, no sólo tuvo implicancias políticas sino también económicas. Este atacó a la facción del cabildo que apoyaba a Velasco, expulsándola de él y llevándola a los tribunales de la justicia ordinaria, y con ello provocó desplazamientos en el seno de la dirigencia concejil. Pero cuando hizo procesar por contrabando e incautar los bienes de algunos de los grandes comerciantes porteños, independientemente de su filiación política, produjo un recambio en el interior de la oligarquía mercantil, que perdió a sus más destacados oferentes de crédito y los vio alejarse del mundo de los negocios. Es necesario reconocer que aunque había una clara intersección entre la élite económica y la dirigencia concejil, éstas no eran del todo coincidentes. Pero en este caso, las medidas de carácter correctivo ordenadas por un representante de la monarquía habrían de repercutir en la conformación de ambas, desestructurándolas y reordenándolas.

Entre 1715 y 1726, los grandes acopiadores y traficantes de mulas prácticamente desaparecieron del cabildo. Entre los nuevos integrantes de la corporación siguió habiendo quienes se volcaron al tráfico con el Alto Perú, como Domingo Acasuso, Joseph Ruiz de Arellano, Juan Vicente de Vetolaza y Luna, Antonio Díaz y Joseph González Marín, pero estos se volcaron a otro rubro: la adquisición de grandes lotes de esclavos a la *South Sea Company* para enviarlos a ser vendidos a Potosí. El resto de los oficiales concejiles fueron empresarios con una proyección más local, entre los que se destacaron los comerciantes minoristas. A ellos se agregó un nuevo sector de peso: los propietarios de obrajes de materiales para la construcción.

Ese pasaje de un perfil ganadero-mercantil a otro mercantil-manufacturero no resulta de extrañar en momentos en que la planta urbana experimentaba un decidido crecimiento. La ampliación del tejido edilicio era resultado de una coyuntura económica favorable, sustentada por las riquezas provenientes del comercio de cueros con el asiento británico, la regularización de la llegada del *situado* para la guarnición y el comercio de esclavos y manufacturas con las provincias arribeñas. Varios cabildantes fueron fabricantes de materiales. El obraje del regidor Juan de Zamudio, afirmaría el deán de la catedral, había producido unos 2 millones de ladrillos, mientras que su madre Inés Salazar y sus hermanos los regidores Santiago y Pedro Zamudio regenteaban un segundo horno. El deán indicó también como propietarios de obrajes al regidor Lucas Manuel Belorado, al alguacil mayor Francisco Díaz Cubas y al depositario general Joseph Esparza.⁷⁶⁵ Belorado era propietario de un obraje de fábrica de adobes y tejas en el ejido de la ciudad, que se componía de dos hornos y tres galpones y ranchos que le servían de depósito y que era atendido por ocho esclavos negros.⁷⁶⁶ El ejemplo de otro regidor, Miguel Rodríguez de Sosa, que tenía un horno de ladrillos en su chacra, es revelador respecto de la rápida afirmación de este sector: en 1716, al casarse, sólo era dueño de unos pocos vestidos de su uso, mientras que 9 años más tarde poseía 17 esclavos, lo que muestra el vertiginoso crecimiento de su fortuna.⁷⁶⁷ El alcalde provincial Joseph Ruiz de Arellano, por su parte, explotaba una calera en el pago de la Magdalena, en cuyos hornos trabajaban en 1726 un capataz paraguayo, siete conchabados y diez esclavos.⁷⁶⁸

⁷⁶⁵ AGN IX-40-5-3 *El Cabildo Eclesiástico sobre diezmos* (1725).

⁷⁶⁶ AGN Sucesión 4300, *Testamentaria de Lucas Manuel Belorado*.

⁷⁶⁷ El horno de Rodríguez de Sosa es citado en AGN RE N° 3 de 1725-1727, f. 162.

⁷⁶⁸ **Documentos para la Historia Argentina** Tomo X: "Padrones de la Ciudad y Campaña de Buenos Aires" (1726-1810), Buenos Aires, Peuser, 1955, Pág. 181.

La presencia de este sector manufacturero y de sus aliados en el seno de la corporación provocó que en 1724 ésta se opusiera tenazmente a que la jerarquía eclesiástica extendiera el cobro del diezmo a la producción de adobes, tejas y ladrillos, llevando el pleito hasta el mismo Consejo de Indias. En 1713 se había encomendado a fray Gabriel de Arregui gobernar el obispado en carácter de interino, quien estaba emparentado con el clan de los Samartín, que hegemonizaba por entonces el cabildo, y había sostenido cordiales relaciones con éste. Pero en 1717 llegó a Buenos Aires para suplantarle fray Pedro Fajardo, en carácter de nuevo titular de la diócesis. Este se propuso apuntalar el sistema rentístico de la Iglesia porteña y procuró con éxito el respaldo del monarca para que se pagase diezmo por la producción de cal, ladrillo, cueros y sebo, por la recolección de maderas y por la captura de ganado cimarrón. Dos diputados del cabildo salieron a responderle que desde la erección de este obispado, al tiempo de separarse del de Asunción, jamás se había dispuesto que se pagasen esos diezmos, con excepción de la llamada *veintena del ganado cimarrón*, y que el mismo había contado con ingresos suficientes con que mantener a sus jerarcas y con el socorro continuo del vecindario y del ayuntamiento cada vez que había sido necesario reparar o reformar el edificio de la catedral. Pero Felipe V lanzaría en 1727 una real cédula en que se ratificaba lo ordenado en 1724.⁷⁶⁹

El ingreso del sector de los fabricantes de materiales al *staff* del cabildo coincidió con la construcción del nuevo edificio del cabildo, llevado a cabo entre 1724 y 1726, para la cual en varias ocasiones fueron los mismos cabildantes quienes facilitaron la mano de obra especializada y los ladrillos. No obstante esta fuerte presencia de tenderos y de dueños de obrajes, el perfil de la dirigencia concejil bajo los gobiernos de Baltasar García Ros y Bruno Mauricio de Zavala se caracterizó por su heterogeneidad. A aquellos se les sumaron algunos ganaderos, como lo fueron los regidores Tomás Monsalve y Juan de la Palma, y también quienes combinaron la cría de animales con el tráfico de esclavos y de manufacturas en dirección a Potosí, como Joseph Ruiz de Arellano. La trayectoria de este último –que como poseedor de una calera, también estaba estrechamente vinculado al sector manufacturero– merece ser examinada con algún detenimiento. Fue el único cabildante que ostentaba una dilatada permanencia en la corporación –algo de por sí algo poco usual entre los comerciantes de su talla– que llegó a conseguir una posición de primacía gracias a su cercanía con un gobernador.

⁷⁶⁹ AGN IX-41-8-7 *El Obispado sobre diezmos (1726)*.

Ruiz de Arellano era oriundo de Navarra y se había avecindado en Buenos Aires en 1692. Su carrera política en el ayuntamiento contó con el respaldo de su suegro, el acaudalado e influyente vecino Pedro de Giles, quien compró para él el oficio de alcalde provincial de la Santa Hermandad. No resulta extraño que la totalidad de la actuación pública de este navarro, que se ufanaría de “*haber obtenido todos los oficios políticos de aquella república*”, hubiera transcurrido con posterioridad a 1699, año en que desposó a Rosa de Giles. Al casarse con Rosa de Giles, su suegro le entregó una dote valuada en 7000 pesos, mientras que él no pudo declarar como propio bien alguno.⁷⁷⁰ Sus primeras experiencias consistieron en la venta de tropas de mulas y ganado vacuno en las ferias de Salta, todas ellas procedentes de las estancias que su suegro poseía en el pago de Areco. Cuando éste murió, esas haciendas pasaron a manos de Ruiz de Arellano, lo mismo que su casa en la ciudad y sus esclavos, por ser Rosa la única heredera.

Podemos considerar a Ruiz de Arellano como representativo de la nueva camada de grandes comerciantes que aprovecharon la abrupta desaparición de la anterior generación de mercaderes de gran talla –Arregui, Riblos, Meléndez– para ocupar el espacio dejado por estos. Entre 1715 y 1717 adquirió a la *South Sea Company* la mayor parte de los esclavos desembarcados de los navíos *Príncipe de Gales*, *Reino de la India*, *La Europa* y *La Saragalera*.⁷⁷¹ Paralelamente a ello, inició negocios con el Paraguay. En 1716 remitió textiles europeos y ropa de la tierra por intermedio de un socio, Onofre de Hoyos, con quien estableció un contrato de factoraje.⁷⁷² En los años que siguieron se hizo enviar cargamentos de yerba a través de su hermano Antonio, que se había avecindado en Asunción.⁷⁷³

La carrera de Ruiz de Arellano en el cabildo se inició en 1709, cuando fue elegido síndico procurador. Dos años más tarde se desempeñaría como alcalde ordinario. En 1713 su suegro subastó para él el oficio de alcalde provincial de la Hermandad, en que fue investido en julio de ese año. Le fueron negadas algunas de las prerrogativas que las leyes castellanas otorgadas a ese empleo, como la de nombrar alguaciles para que lo auxiliaran, y ello generó roces con los demás cabildantes, pero el pesquisidor Mutiloa

⁷⁷⁰ Así lo referiría en su testamento: “*al tiempo de contraer dicho matrimonio yo no entré a él caudal ninguno más que la decencia de mi persona por cuya razón no hice [escritura de] capital porque no tenía de qué hacerlo*”; AGN IX-49-2-6, *Escribanías Antiguas* (1752), f. 109.

⁷⁷¹ AGN RE n° 2 de 1714-1716, fs. 399v., 401 y 416v; RE n° 2 de 1716-1719, f. 69 y 71v.

⁷⁷² AGN RE n° 3 de 1716-1719, f. 3v.

⁷⁷³ En 1724 Juan de Narbona sale de fiador a pedido de la mujer de Joseph Ruiz de Arellano, pues el gobernador le embargó 10 carretas cargadas de yerba que venían para éste desde el Paraguay. Estas carretas “*le remitía Don Antonio Ruiz de Arellano, su hermano y vecino de dicha ciudad, en cuenta de paga de los que le era deudor a dicho su marido*”. AGN RE n° 2 de 1723-1725, f. 374v.

intervino para que le fueran reconocidas. En 1716 fue nombrado por segunda vez alcalde ordinario, a pesar de ostentar ya un oficio venal, y Baltasar García Ros, que era navarro como él, lo nombró su teniente de gobernador y lo puso a la cabeza de la corporación. Tuvo con dicho gobernador un lazo de amistad y recurrió a él cuando se vio falto de metálico para saldar sus deudas con los asentistas británicos.⁷⁷⁴ El vínculo que tuvo con su sucesor, Bruno Mauricio de Zavala, resultó en cambio distante ser distante y conflictivo, y en 1724 sería uno de los oficiales concejiles a quienes éste cesaría por haber cuestionado a su teniente de gobernador, Antonio de Larrazábal. Ruiz de Arellano se presentaría en la Real Audiencia de Chuquisaca a hacer oír el reclamo de los cabildantes exonerados.⁷⁷⁵

En el Buenos Aires del recambio dinástico, entre finales de los Seiscientos y comienzos de la siguiente centuria, no existía nada que se asemejara a la burocracia formal que secundó un siglo más tarde a los virreyes del Río de la Plata. No había un Consulado de Comercio, ni una Real Audiencia, ni los superintendentes, secretarios y asesores que administraban los ramos de gobierno. Por entonces las jerarquías de poder tenían un alto contenido informal. Entre 1690 y 1712, en el entorno de un gobernador se conformaba por algunos individuos que gozaban de un acceso privilegiado a él. Sobresalía entre estos quien ejercía el rol de *privado*, que atendía sus negocios personales y regenteaba los almacenes donde se aprovisionaban a los militares del Presidio. Ninguno de los *privados* tuvo una carrera descollante en el cabildo ni había desempeñado empleos venales antes de ocupar esa posición. Miguel de Riblos fue alcalde ordinario en 1682 y luego recibió un nombramiento militar de alto rango, el de *cabo de la caballería*, antes de secundar a Agustín de Robles. Su carrera en la corporación se desarrollaría en realidad más tarde, al ser elegido nuevamente alcalde en 1708 y tras adquirir el cargo de depositario general en 1710. Antonio Guerreros, el *privado* de Valdés Inclán, tuvo una mayor participación previa en el gobierno municipal, pues había sido alcalde ordinario en 1685, 1697 y 1702. En cuanto a Antonio Meléndez de Figueroa, el *privado* de Velasco, sólo había sido síndico procurador en 1704. Luego de la pesquisa de Mutiloa, tan sólo dos individuos llegaron a tener un vínculo privilegiado con los gobernadores: el referido Ruiz de Arellano junto a García

⁷⁷⁴ García Ros le prestó 11.500 pesos para pagar 21.000 que debía al Real Asiento por la compra “*de diferentes piezas de esclavos negros de ambos sexos en la casa que llaman del Retiro*”; AGN RE N° 3 de 1720-1722, f. 51.

⁷⁷⁵ En 1724 Ruiz de Arellano viajó a Chuquisaca “*a seguir las defensas sobre la privación de mi oficio y de los alcaldes y demás regidores*”; AGN RE N° 3 de 1723-1724, f. 194v.

Ros y Antonio Larrazábal junto a Bruno Mauricio de Zavala. Larrazábal había sido dos veces alcalde ordinario, en 1713 y 1718, antes de que este último lo designara teniente de gobernador y le confiara el mando de la provincia para poder pasar a la Banda Oriental a frenar el avance de los portugueses.

Un segundo lugar de importancia lo tenían entonces en Buenos Aires los oficiales de la Real Hacienda. Los empleos de contador y tesorero de las Reales Cajas eran los más apetecidos por los grandes comerciantes locales, tratándose de los más redituables, ya que además de recibir un sueldo de la corona les permitían moderar las cargas fiscales de sus allegados y sacar tajada de los negociados que se hacían en la ciudad, fraguando el monto de las contribuciones en el libro de caja de la contaduría. No nos sorprende que el pesquisidor Mutiloa afirmara sin tapujos que *“toda la cuenta que está en dicho libro es un puro fingimiento”*.⁷⁷⁶ El nombramiento de estos oficiales dependía de los gobernadores, si bien eran ejercidos en forma interina hasta que fueran confirmados por la Real Audiencia en Chuquisaca o el virrey en Lima. En este caso, el desempeño de empleos concejiles otorgó a los candidatos un antecedente distinguido que seguramente fue tomado en cuenta al realizarse la elección. En ocasiones fue el mismo cabildo el que presentó una terna para que el gobernador escogiera al futuro tesorero o contador, compuesta por antiguos oficiales concejiles.

Entre aquellos que fueron cabildantes y luego se convirtieron en oficiales de la Real Hacienda figuraron Pedro Guezala, Diego Sorarte, Domingo de Acasuso, Martín de Mena y Mascarúa, Antonio Gallegos, Alonso de Beresosa y Contreras y Sebastián Delgado. Las observaciones que haremos sobre estos son similares a las que volcamos en relación con los *privados* de los gobernadores. Con excepción de los dos últimos, solamente participaron del gobierno municipal desempeñando un único empleo electivo. Si aceptaron ejercitarse en una alcaldía ordinaria o una procuraduría se debió a que éstas resultaban menos onerosas que las regidurías u otros oficios venales, adquiridos en subasta a precios no menores a 300 pesos, y a que aquellos empleos eran de duración anual, por lo que debían desempeñarse en ellos durante el lapso más breve asignado a un servicio a la corona.

El caso de Pedro Guezala, según creemos, ejemplifica a grandes rasgos los pasos que debieron seguir para finalmente ser seleccionados como oficiales reales. Oriundo de Guernica en el País Vasco, había pasado a Buenos Aires desde Santiago de Chile en

⁷⁷⁶ AGN IX-45-7-6 *Pedro Guezala, expedientes 1705-1707*.

1691, acompañando a Lucas Francisco Bilbao, que era oidor de la Real Audiencia de esa ciudad y había sido enviado a ésta para realizar una inspección a las Reales Cajas. Un año más tarde contrajo matrimonio con una de las hijas del prestigioso Juan Báez de Alpoin, comisario de la caballería del Presidio y cabecilla de uno de los clanes locales dominantes. Con esto vio garantizada la condición de vecino de la ciudad, gracias a lo cual pudo ser nombrado síndico procurador del cabildo en 1701. El gobernador Valdés Inclán, por último, lo designó tesorero de las Reales Cajas, cargo en que se mantuvo entre junio de 1703 y junio de 1707.

En el caso de Martín de Mena y Mascarúa, el proceso de inserción se produjo de manera algo distinta. También era nativo del País Vasco, en este caso de Bilbao, aunque no sabemos cómo ingresó al Río de la Plata. En 1711 contrajo matrimonio con María Josefa Meléndez, hija del todavía poderoso *privado* de Velasco, Antonio Meléndez de Figueroa. Un año más tarde se vio enredado junto con el resto de su familia política en el proceso judicial que Mutiloa le inició a su suegro. Tras el alejamiento del pesquisidor, el cabildo lo señaló como candidato a una regiduría, pero él declinó aceptarla, pretextando ser pobre. La corporación rechazó su negativa y recurriendo a la potestad que le daba una real cédula expedida por Felipe V lo obligó a subastarla. Mena y Mascarúa se resignó a ocupar ese escaño, pero en septiembre de 1716 el gobernador García Ros lo nombró contador de la Real Hacienda. Como su nuevo empleo le imposibilitaba concurrir a los acuerdos del cabildo, pudo desembarazarse del oficio de regidor vendiéndolo a Sebastián Delgado.⁷⁷⁷ Estuvo a cargo de dicha contaduría por el lapso de algo menos de cuatro años. En 1722, cuando ya había sido exonerado de la misma, fue llamado nuevamente por el ayuntamiento, esta vez para desempeñarse como alcalde ordinario.

Ambos ejemplos ilustran que los empleos del cabildo podían servir de puente hacia otros cargos más honrosos y redituables, y que cuando estos últimos se alcanzaban aquellos dejaban de ser atractivos. Los empleos concejiles, en suma, se hallaban lejos de brindarles los mismos beneficios pecuniarios que los favores de los gobernadores o la administración de las Reales Cajas. Eran fuente de honra y de prestigio, sí, pero escasamente rentables: a pesar de que las leyes de Indias les asignaban honorarios (como podían serlo el porcentaje que les tocaba en las multas a los regidores que inspeccionaban las tiendas o los emolumentos que recibían los alcaldes ordinarios al

⁷⁷⁷ AGN XIII-43-2-10 *Libro menor de la Real Hacienda (1715-1726)*; RE N° 3 de 1716-1719, f. 147v.

actuar en los estrados) estos eran liquidados con irregularidad y no eran lo suficientemente significativos para justificar su trabajoso desempeño. Por el contrario, al restarle tiempo a la actividad profesional de quienes los ejercían resultaban más bien onerosos. Ello no significaba, empero, que la cuota de poder que se les asignaba fuera desdeñable, pues quedaban depositados en sus manos el ejercicio de la justicia ordinaria y la emisión de bandos de buen gobierno, dos instrumentos que les permitían custodiar los privilegios de la oligarquía local e impedir que los estratos más bajos desafiaran el orden impuesto por ésta.

No es un detalle menor que, en su inmensa mayoría, los grandes comerciantes que ejercieron empleos en el cabildo fueran nacidos en la península y arribaran a Buenos Aires despojados de fortuna y conexiones. Para ellos, el hecho de haber sido elegidos para ocupar los cargos concejiles dejaba fuera de toda duda su carácter de vecinos. En la América española, se consideraba vecino a aquel que formaba parte de una comunidad política –la ciudad, en su carácter de *república*– y el único criterio tomado en cuenta era la demostración de lealtad a ésta y a sus miembros. El proceso de inserción se iniciaba al contraer matrimonio en la ciudad y fijar en ella su residencia permanente. La lealtad, por su parte, se hacía visible por medio de los servicios brindados a la *república*, entre los cuales se destacaba el ejercicio de los empleos concejiles. Como afirma Tamar Herzog, la normativa municipal rara vez se expresaba sobre los requisitos para adquirir la carta de vecindad.⁷⁷⁸ Para ésta no bastaba con su condición de español. La buena reputación y el reconocimiento de sus logros eran con frecuencia las cartas que debía jugar al negociar la aceptación de la comunidad de la que aspiraba formar parte. Al designarlos para ejercer los oficios ciudadanos, el cabildo ofreció a dichos peninsulares una posibilidad de constatar la aprobación de ésta.

⁷⁷⁸ Tamar HERZOG “La vecindad: entre condición formal y negociación continua. Reflexiones en torno de las categorías sociales y las redes personales” en **Anuario del IEHS** Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, 2000, N° 15, Págs. 127-128.

EL PERFIL OCUPACIONAL: LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD AGROGANADERA

El Buenos Aires pre-reformista en el debate sobre la historia agraria

El problema de los orígenes del sector terrateniente en Buenos Aires ha sido una temática abordada en forma recurrente por la historiografía, que puso especial énfasis en el período que se extendió entre 1790 y 1840. Se ha sugerido que durante ese medio siglo, la expansión ganadera en la zona pampeana habría estado ligada al surgimiento de una clase terrateniente que, tras resignarse a ocupar una posición subordinada durante la colonia, habría pasado a convertirse luego de la década de 1820 en el sector dominante de la economía regional. Pero la corriente historiográfica que postuló este proceso de rotación en el interior de la élite porteña no se limitó a verificar esas transformaciones, sino que proclamó el descubrimiento de una campaña socialmente más compleja que la pregonada por las visiones anteriores. Se constató la coexistencia de varios ecosistemas rurales sobre los que se sustentaba una producción agraria más diversificada de lo que se había sostenido hasta entonces, lo mismo que la presencia de un campesinado compuesto por pequeños y medianos pastores y labradores, algunos de los cuales no eran siquiera propietarios de la tierra, en marcado predominio por sobre los grandes ganaderos latifundistas. Esa fue la posición que prevaleció entre los historiadores que participaron en el debate en las décadas de 1980 y 1990, luego de las cuales la misma se convirtió en *canon*, es decir, en una explicación que gozó de aceptación general, dándose por cerrado el debate.⁷⁷⁹ Incluso quienes la hicieron objeto de cuestionamientos acallaron sus críticas a este modelo explicativo hace ya más de una década.⁷⁸⁰

⁷⁷⁹ La síntesis “final” del debate podrá hallarse, por sólo destacar algunos textos, en Juan Carlos GARAVAGLIA y Jorge GELMAN “Rural history of the Rio de la Plata, 1600-1850: results of a historiographical renaissance” en **Latin American Research Review**, 1995, Págs. 75-105; Juan Carlos GARAVAGLIA y Jorge GELMAN “Mucha tierra y poca gente: un nuevo balance historiográfico de la historia rural platense (1750-1850)” en **Historia Agraria**, 1998, vol. 8, N° 15, Págs. 29-50; Raúl FRADKIN “Procesos de estructuración social en la campaña bonaerense (1740-1840): elementos para la discusión” en **Travesía. Revista de Historia Económica y Social**, Universidad Nacional de Tucumán, N° 1, 1998, Págs. 41-62; Raúl FRADKIN “Antigüedad de asentamiento, orientaciones productivas y capital comercial” en **Revista de historia**, Universidad Nacional del Comahue, 1995, N° 15.

⁷⁸⁰ El nuevo posicionamiento frente a la historia agraria colonial bonaerense que hegemonizó la opinión del mundo académico ha sido objeto de contestaciones por parte del Azcuy Ameghino y su equipo. Una síntesis de esta corriente historiográfica se hallará en Eduardo AZCUY AMEGHINO **La otra historia...**, Gabriela GRESORES y Gabriela MARTINEZ DOUGNAC “En torno a la economía y la sociedad

No pretendemos reflatar aquí esas discusiones, aunque en su momento aportamos a ellas. Sólo deseamos destacar que las mismas se centraron en el análisis de un período relativamente corto –que se extendió, en el mejor de los casos, entre la aplicación de las primeras reformas de Carlos III y la implantación del régimen rosista– y que fueron acompañadas de un inexplicable silencio en torno a lo ocurrido con anterioridad a éste. Con excepción de los trabajos de Rodolfo González Lebrero para comienzos del siglo XVII y de algunas referencias al período que se extiende entre 1680 y 1750 en los textos de Juan Carlos Garavaglia y en los de nuestra propia autoría, lo escrito sobre la historia agraria bonaerense anterior a la segunda mitad del siglo XVIII se reduce a muy poco.⁷⁸¹ Esto causa extrañeza, ya que quienes estudiaron el proceso formativo del grupo terrateniente que acabaría por hegemonizar la economía regional, desplazando al capital comercial, subestimaron la existencia de un sector de grandes productores pecuarios cuya aparición había precedido en más de un siglo a las reformas borbónicas.

Quienes estudiaron la etapa anterior al virreinato dieron por sentado el predominio de la oligarquía comercial, contra la cual los ganaderos no se habrían constituido en rivales de peso a la hora de disputar el poder. No obstante, al constituirse dicha oligarquía en un círculo muy reducido, se hacía bastante difícil diferenciar a comerciantes de ganaderos, ya sea porque ambas actividades se hallaban en manos de los mismos individuos o bien porque estaban agrupadas estratégicamente en el seno de las mismas familias y los patriarcas asignaban roles de comercializadores o productores a sus miembros. Zacarías Moutoukias, quien expresó su desacuerdo con quienes buscaron *a priori* enfrentamientos entre oligarquías terratenientes y burguesías mercantiles, ha hablado de una “élite polivalente” con una escasa diferenciación económica y social entre sus miembros, que con frecuencia eran al mismo tiempo comerciantes, funcionarios de la corona, propietarios rurales y dueños de esclavos.⁷⁸² Jorge Gelman matizó en algo esa consideración al afirmar que a comienzos de dicha centuria hubo un sector que fue propietario de tierras recibidas en merced y de encomiendas de indios, el

rioplatenses en el siglo XVIII. Debates historiográficos actuales” en **Ciclos en la historia, la economía y la sociedad**, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, 1992, Vol. 2, N° 3, Págs. 173-195.

⁷⁸¹ Más allá de que los autores de varios artículos pregonan en sus títulos la inclusión de todo el siglo XVIII, son contados los que realmente han profundizado sobre algún aspecto de la historia agraria bonaerense entre 1600 y 1750. Entre ellos podemos citar a Rodolfo GONZÁLEZ LEBRERO **La pequeña aldea...**; Juan Carlos GARAVAGLIA **San Antonio de Areco, 1680-1880. Un pueblo de la campaña, del Antiguo Régimen a la “modernidad” argentina** Prohistoria Ediciones, Rosario, 2009, Págs. 98 y ss.; Carlos María BIROCCO **Cañada de la Cruz Tierra, producción y vida cotidiana en un partido bonaerense durante la Colonia** Municipalidad de Exaltación de la Cruz, 2003, Págs. 70 y ss.

⁷⁸² Zacarías MOUTOUKIAS **Contrabando y control colonial...** Págs. 201 y ss.

cual en un principio dominó el ayuntamiento pero más tarde fue despojado del gobierno de la ciudad por los mercaderes más recientemente afincados, que se constituyeron en un grupo más monetarizado y terminaron adquiriendo de aquellos (por compra o por dote al casarse con sus hijas) sus grandes fincas rurales, a partir de lo cual ostentaron un perfil mixto en que se superponían su rol de comerciantes y el de hacendados.⁷⁸³

Esta idea de una oligarquía urbana con inversiones diversificadas logró imponerse en el mundo académico. Veamos cómo quedó condensada, por ejemplo, en un sólido compendio de historia iberoamericana colonial editado a mediados de la pasada década, que al referirse al área rioplatense durante el siglo XVII afirmaba: “Tenemos, pues, en Buenos Aires, una élite burocrática y mercantil, propietaria de tierras de pan llevar y con frecuencia de estancias ganaderas, que regía los destinos de la ciudad”.⁷⁸⁴ Se nos ha mostrado, en síntesis, a los ganaderos anteriores al período reformista como un sector con escasa individualidad, pudiendo llegar a conformar, a lo sumo, un subgrupo en el interior de la oligarquía mercantil, que se hacía visible cuando esporádicamente salía a defender sus intereses, y a cuyos integrantes las autoridades locales recurrían en busca de un dictamen cada vez que había que resolver problemas vinculados con el control de la campaña. Se acepte o no esta premisa, no deja de ser llamativo que hasta 1750 las autoridades locales y el mismo cabildo no reconociesen cierto grado de notabilidad a un grupo selecto de ganaderos que a partir de entonces fue reconocido como el de los “hacendados”, el cual sobresalía por entre los demás ganaderos por su status más prominente.

El significado de este término ha sido ampliamente estudiado en las últimas décadas. Para Raúl Fradkin, el mismo tenía una acepción poco precisa, pero solía ser aplicado a un segmento social más bien reducido, del que quedaba excluida una parte sustancial de los ganaderos. A diferencia de otros términos corrientes como “criador” o “estanciero”, indicaba una posición social asociada a un cierto nivel privilegiado de riqueza y un mayor grado de honorabilidad. Hacia fines del siglo XVIII, la expresión “hacendado” habría perdido esa pretensión de prominencia y habría pasado a utilizarse para designar a un sector mucho más vasto, que daba incluso cabida a los pequeños propietarios rurales. Desde entonces se habría usado para designar a los ganaderos que se hallaban

⁷⁸³ Jorge GELMAN “Economía natural-Economía monetaria. Los grupos dirigentes de Buenos Aires a principios del siglo XVII” en *Anuario de Estudios Americanos*, Sevilla, 1987, XLIV, Págs. 89-107.

⁷⁸⁴ Juan Carlos GARAVAGLIA y Juan MARCHENA *América Latina de los orígenes a la independencia* Crítica, Barcelona, 2005, Tomo I: “América precolombina y la consolidación del espacio colonial”, Pág. 466.

en una etapa de sus vidas en que podía visualizarse la posición adquirida y en la que detentaban una mayor influencia sobre sus pares, un mayor arraigo local y un sólido control sobre sus subalternos y sus rebaños. De esa manera, concluye este autor, el mismo no se circunscribía a un perfil ocupacional preciso, sino evocaba el rango que se les asignaba dentro del sector a que pertenecían.⁷⁸⁵

El criterio de notabilidad utilizado por Garavaglia se asemeja a la segunda acepción esgrimida por Fradkin. Los hacendados, propone dicho autor, eran propietarios de la tierra, de considerables rebaños de ganados y esclavos. La inversión que realizaban en sus viviendas rurales, que al estar hechas de teja y ladrillos contrastaban con los ranchos del pobrerío, y el agregado de otras mejoras, como la implantación de corrales y de montes de árboles, formaban parte de los signos exteriores de prestigio, que los distinguían del resto de los productores rurales. Eran bien conceptuados públicamente, no sólo en la campaña sino también en Buenos Aires. Se trataba del “núcleo duro del grupo social y económicamente dominante de ese mundo rural”.⁷⁸⁶ Pero ese predominio se circunscribía al pago o partido en que residían, y los miembros de la élite mercantil urbana, aunque los consideraban útiles aliados en el ámbito rural, estaban lejos de tenerlos por sus pares. Baste constatar, para comprobarlo, el lugar poco significativo que se habría permitido ocupar a estos hacendados en el gobierno municipal.

Un tercer autor, Eduardo Azcuy Ameghino, no se detiene en la polisemia del término y prefiere homologar a los hacendados con el sector terrateniente, definiéndolos como los propietarios de las condiciones de producción rurales. Este autor, que centró su análisis en la etapa virreinal, encontró en ellos las raíces del sector que dominaría la economía regional en el siglo siguiente y puso todo el énfasis en esa condición de terratenientes, en tanto que explotaban el trabajo de esclavos, arrendatarios, agregados y peones. Pero admitió la existencia de intersecciones entre los distintos sectores que componían la oligarquía local, y al detectar casos de individuos que alternaban el manejo de un establecimiento rural con el tráfico de cueros, ganados o artículos importados de Europa, se refirió a ellos como “comerciantes-hacendados”.⁷⁸⁷

⁷⁸⁵ Raúl FRADKIN “¿Estancieros, hacendados o terratenientes? La formación de la clase terrateniente porteña y el uso de las categorías históricas y analíticas (Buenos Aires 1750-1850)” en Marta BONAUDO y Alfredo PUCCIARELLI **La problemática agraria. Nuevas aproximaciones** Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1993, Tomo I, Págs. 22-26.

⁷⁸⁶ Juan Carlos GARAVAGLIA **Pastores y labradores de Buenos Aires, una historia agraria de la campaña bonaerense 1700-1830** Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1999, Págs. 326-327.

⁷⁸⁷ Eduardo AZCUY AMEGHINO **La otra historia...** Págs. 74-76.

Frente a este tratamiento del problema, nos preguntamos si efectivamente hubo una evolución del término “hacendado”, que con el paso del tiempo englobó a una franja cada vez más extensa de individuos, o si se trató más bien de su aplicación a escalas diferentes, ya que se recurría a él tanto cuando se medía la importancia de los grandes ganaderos absentistas en el seno de la oligarquía dominante, como cuando se comparaba en cada pago a los ganaderos de mayor arraigo local con el resto de los productores pecuarios. En todos los casos, el mismo hacía alusión a un segmento caracterizado por un nivel relativo de riqueza, por su pertenencia a los estratos acomodados de la vecindad (haciendo referencia, hasta comienzos del siglo XVIII, a la vecindad urbana, y a partir de entonces a las vecindades de la campaña) y por ostentar un acabado conocimiento (o, por lo menos, una cierta pericia) en el manejo de grandes rodeos de animales.

Durante el período que estudiamos, la denominación “hacendado” no era aún la utilizada para designar a los ganaderos que gozaban de renombre en la ciudad. Al referirse a ellos, el cabildo de Buenos Aires o sus agentes los llamaba sencillamente “vecinos”, término al que agregaba una adjetivación que daba cuenta de su riqueza, honorabilidad o pericia. En 1694, por ejemplo, cuando la corporación debió arbitrar de qué medios valerse para obligar a los propietarios de estancias a sostener rodeos de ganado vacuno a fin de que nunca faltase la carne de res en los mataderos de la ciudad, se convocó a un puñado de “*vecinos y naturales en este Puerto que tengan inteligencia y ciencia*” para consultar su parecer.⁷⁸⁸ El problema subsistió y en 1712, el ayuntamiento recurrió a dos “*personas prácticas*” para revisar los rodeos de la jurisdicción y señalar las que estaban en condiciones de aportar novillos al abasto.⁷⁸⁹ En 1718 la dificultad que se suscitó fue otra: en las praderas pampeanas, el ganado cimarrón se encaminaba ya a su desaparición definitiva y el ayuntamiento emplazó a quince vecinos para que conformaran una junta y debatieran si aún quedaban toros suficientes para salir a vaquear. Al referirse a los miembros de esta junta en los acuerdos, los definió como “*hombres estancieros de aquellos que más práctica tuvieron en estas campañas*”. En un escrito en que Luis Navarro, el alguacil mayor del cabildo,

⁷⁸⁸ AECBA Serie I, Tomo XVIII, págs. 218 y ss.

⁷⁸⁹ AECBA Serie II, Tomo II, pág. 491.

informó al gobernador Zavala sobre lo resuelto por dicha junta, explicó que ésta se hallaba compuesta por “*vecinos prácticos y experimentados*”.⁷⁹⁰

Como puede apreciarse, lo que caracterizaba a estos ganaderos era su condición de vecinos, a la que se acompañó de adjetivos que aludían a su habilidad o conocimientos en el manejo del semoviente. El término “*hacendados*” no se haría corriente hasta la década de 1750, en que la antigua vecindad de Buenos Aires se atomizó y comenzó a considerarse la existencia de otras vecindades en la campaña, nucleadas en torno a los antiguos “pagos”. Los hacendados fueron los vecinos de mayor arraigo e influencia en aquellas incipientes comunidades, que ya no alternaban su residencia entre la ciudad y el campo sino que se habían convertido en *localresidentes* al instalarse junto con sus familias en forma más o menos permanente en sus tierras de labranza o de pastoreo. Paralelamente a ello, la misma expresión fue utilizada para denominar a los vecinos de Buenos Aires que eran propietarios de estancia de gran porte y de considerables rebaños de animales, quienes en contraposición con los anteriores eran normalmente absentistas. Un par de décadas más tarde, estos últimos se agruparían para defender sus intereses en un cuerpo, el *Gremio de Hacendados*. Ambas acepciones aludían, pues, a la existencia de dos sujetos colectivos de contornos más o menos precisos, mientras que los términos utilizados anteriormente sólo hacían referencia a la cualificación de los individuos a los que se aplicaban.

No conviene hablar de “*hacendados*” antes de 1750, pues este término todavía no era de uso corriente para designar a los ganaderos de cierta envergadura. El único sujeto colectivo al que se hace referencia a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII y las primeras tres décadas del XVIII es el de los “*vecinos accioneros*”, que eran aquellos a los que se les reconocía la posesión de títulos sobre el ganado cimarrón. Las actas de la corporación, que llevaba la matrícula de dichos vecinos, hacen frecuente alusión a ellos. Jamás llegaron a agruparse en defensa de sus intereses, sino que se caracterizaron por la pasividad con que aceptaron las decisiones de los gobernadores o del ayuntamiento. Cada vez que se trataba la venta de corambre a los registreros o a los asentistas les estaba asignado un tercio en el valor de las pieles embarcadas por estos, pero esto no siempre se cumplía con la regularidad esperada. Aunque varios de los cabildantes fueron accioneros, ya sea por derecho propio o por el de sus esposas, no por ello asumieron la representación del resto cuando no se respetaba esa práctica.

⁷⁹⁰ AGN IX-41-03-05 *Juan Truppe sobre información por la venta de unos cueros pertenecientes al cabildo de Buenos Aires.*

La explotación del ganado cimarrón

Ya hemos referido en un capítulo anterior que aunque el cabildo reconoció a los vecinos accioneros como propietarios del ganado vacuno cimarrón, a estos no se les tenía permitido proceder libremente a su captura. Al llevar la matrícula de quienes contaban con una o más acciones, el ayuntamiento se había convertido en el administrador de este recurso, pues en teoría, en respuesta a la demanda de los registreros o los asentistas, debía establecer el número de cueros que se hacían y la cuota que le correspondía a cada accionero. Como una porción significativa de aquellos vecinos (ancianos, viudas o miembros de las corporaciones religiosas) no estaba en condiciones de emprender las faenas, estos solían acudir a personas con pericia, los *vaqueadores*, y les encargaban la labor a cambio de una participación en las utilidades. Estas salidas recibían el nombre de *vaquerías* cuando el propósito era la obtención de cueros y grasa, y de *recogidas* cuando se buscaba formar tropas de reses para conducir las al abasto de la ciudad o para ser engordadas en las estancias y luego venderlas las ferias de ganado de las provincias arribeñas. Antes de comenzar las faenas, los vaqueadores también debían dirigirse al cabildo para que los autorizara a entrar en la campaña.

Las toradas cimarronas ya habían comenzado a esparcirse por las praderas pampeanas desde comienzos del siglo XVII, pero a mediados de esa centuria se vieron notablemente incrementadas a resultas de un evento epidemiológico que afectaría gravemente a la población de Buenos Aires: la peste de 1651. Esta, que se ensañó especialmente con indios o esclavos, dejó a las estancias bonaerenses casi sin mano de obra y provocó el alzamiento de los ganados, que no fueron recuperados por sus antiguos dueños y se volvieron montaraces. A raíz de este episodio, los estancieros que perdieron sus haciendas fueron sumados a la matrícula de los vecinos accioneros. Pero poco más tarde, la corporación sería despojada del control sobre este recurso. Entre 1663 y 1712, aprovechando la laxitud con que actuó la corona entre el reinado de Carlos II y la Guerra de Sucesión, los gobernadores no encontraron obstáculo para pasar por encima de las facultades del cabildo y concertar libremente la venta de cueros. Cuando el comandante de una embarcación quería cargar corambre, eran ellos quienes procedían al *reparto de cueros*, seleccionando a los vaqueadores que lo proveerían y asignando a cada uno de ellos una cuota de pieles de toro a entregar. Fijaban asimismo los precios que regirían las transacciones y a menudo les libraban algún adelanto en plata para que

pagasen peones o aviaran sus carretas. Pero a pesar de que usurparon las facultades que varias reales cédulas habían concedido al ayuntamiento, los gobernadores preservaron los derechos de los accioneros, a quienes se siguió asignando el tercio de las utilidades de esos convenios. Las repetidas quejas que el cabildo de Buenos Aires elevó al Consejo de Indias a causa de este despojo no obtuvieron una respuesta concreta hasta la segunda década del siglo XVIII, en que Felipe V lo reconoció como el único autorizado para arbitrar las ventas de cueros y la selección de los vaqueadores.

La intrusión de los gobernadores se incrementó durante los mandatos de Valdés Inclán y Velasco. La intromisión del primero provocó un encarecimiento en los precios de la corambre. Estos, que habían variado entre 6 y 8 reales por piel hasta fines del siglo XVII, oscilaron a partir de entonces entre los 9 y 12 reales, aunque existen testimonios aislados de cifras más bajas.⁷⁹¹ Ello no respondió al libre juego de la oferta y la demanda, pues este gobernador, siguiendo la práctica de sus antecesores, se interpuso entre la vecindad y la *Compagnie de Guinée*, que fue la principal compradora, ejerciendo un verdadero monopolio sobre el reparto de los permisos para vaquear. Valdés sería acusado de haber autorizado a vaquear solamente “*a tres o cuatro particulares*”, pero en su juicio de residencia supo defender su pretendido derecho a intervenir en los repartimientos de cueros, bajo el curioso argumento de que estos eran “*regalía de los señores gobernadores por ser las campañas realengas*”.⁷⁹² De cualquier manera, Valdés Inclán no excluyó del todo al cabildo en los ajustes entre los vecinos y los capitanes de los navíos franceses. El segundo director del Real Asiento en Buenos Aires, Nicolás Maillet, aseguraba que éste había permitido en ocasiones que los alcaldes, en representación del ayuntamiento, hicieran tratos con su antecesor, Georges Hays.⁷⁹³ Atribuía, por el contrario, un manejo exclusivista extremo al sucesor de aquel, Manuel de Velasco y Tejada, quien “*les empezó a disputar la acción*” a los vecinos. Sólo un puñado de personas resultó eximido de esta imposición, en general los miembros de su camarilla, pues concluía el director que “*si repartió unos pocos sin pensión fue a los alcaldes y regidores o a algunos beneméritos o criados suyos*”.⁷⁹⁴

Velasco se valió de la extorsión para apropiarse de una porción de las utilidades del

⁷⁹¹ En 1705, los capitanes Domingo Cabezas, Diego López Camelo y Pablo Barragán concertaron con el director del Real Asiento entregarle en tres meses 6000 cueros de toro, los cuales serían pagados a 6 reales por unidad, “*los cinco reales de ellos en negros*”, con prioridad para escoger las mejores partidas, y el real restante en plata; AGN IX-48-9-4, *Escribanías Antiguas*, f. 37v.

⁷⁹² AGN IX-11-1-3, *Juicio de residencia a Valdés Inclán*.

⁷⁹³ AGI Escribanía de Cámara 877B, *Interrogatorio a Maillet en la causa de éste contra Velasco*.

⁷⁹⁴ AGI Escribanía de Cámara 877B, *Presentación de Maillet en su causa contra Velasco*.

tráfico de cueros. Se valió de Domingo González Cabezas (singular personaje con gran experiencia en la captura del cimarrón, que era hijo de una india pampa pero descendía por línea paterna de una de los principales linajes locales) cuando necesitó conferenciar con los vaqueadores y hacerles saber a quienes había seleccionado para concederles las licencias. En cierta ocasión en que el Real Asiento requirió una carga para el retorno de sus barcos negreros, Cabezas convino con varios de ellos que les pagaría 10½ reales por cada piel de toro, además de ofrecerles la plata que necesitaran para la preparación de la faena. Ocho días más tarde, los llamó para comunicarles que sólo se les pagarían 8½ reales por piel y que Velasco se quedaría con los 2 restantes. Los que lo increparon por haber trastocado los términos del trato, recibieron por única respuesta *“que era orden cerrada del dicho señor don Manuel de Velasco y que el que no quisiese hacer dichos cueros a los ocho reales y medio que volviese el dinero que se le había dado”*. Para entonces, los vaqueadores ya habían recibido adelantos en plata y los habían invertido en avíos, por lo que debieron aceptar la imposición de Velasco. Uno de ellos, Pablo Barragán, explicaba que la mayor parte de los implicados no había podido negarse, pues *“reconociendo la tiranía maliciosa, poder e imposibilidad de volver dicha plata haríamos dichos cueros, violentados de la pobreza como los hicimos, disimulando por entonces con temor de súbditos”*.⁷⁹⁵

Hacia finales de su gestión, empero, el gobernador corrigió en algo su política, aunque sin hacer renuncia a su tajada sobre la corambre. A imitación de su antecesor, delegó en los capitulares las tratativas con el Real Asiento, a fin de que las fricciones se produjeran entre la *Compagnie de Guinée* y el cabildo. Maillet supo apreciar lo meramente superficial de este cambio: *“cogió otro rumbo dicho señor gobernador para el ajuste, y fue hacer que el cabildo nombrase personas que la ajustasen conmigo como lo hizo nombrando a los capitanes don Pedro de Giles, alcalde de primer voto, y Amador Fernández de Agüero, procurador general, los cuales me pidieron veinte reales [por cuero] y después de varias contiendas que tuve con ellos ajustamos a doce reales”*. El motivo del regateo era que los diputados del concejo querían lograr por cada piel el más alto precio posible con objeto de salvar los costos de la faena y la paga de peones, pues *“habiendo de pedir dicho señor gobernador la cuarta parte a los que los habían de hacer, era destruirlos si los ajustaren por menos”*.

Fue Mutiloa quien devolvió al cabildo todas sus atribuciones. En 1713 permitió que

⁷⁹⁵ AGN IX-40-3-5, Pablo Barragán contra Manuel de Velasco.

dos diputados nombrados por la corporación, Alonso de Beresosa y Contreras y Lucas Manuel Belorado, ajustaran con el director Maillet la venta de 20.000 cueros de toro a los primeros navíos de la Compagnie de Guinée que llegasen al puerto. Exceptuado de las imposiciones de Velasco, el precio de los mismos descendió a 9 reales por pieza, de los cuales el vaqueador recibiría 1 real de contado para costear “*los avíos y precisos gastos de los peones*” y el resto en plata en el transcurso de un año.⁷⁹⁶ Pero la victoria definitiva de la corporación no se produjo hasta la emisión de la real cédula del 28 de septiembre de 1716, que devolvía al cabildo de Buenos Aires sus facultades privativas para entender en las ventas de corambre.⁷⁹⁷ De esta manera, la pesquisa de Mutiloa aparece como un verdadero parteaguas en el proceso que condujo a la recuperación de las facultades corporacionales. Con anterioridad a ella, las posibilidades de hacer valer una acción al ganado cimarrón o de conseguir el permiso para entrar a la campaña a vaquear estaban supeditadas a la aprobación de los gobernadores, que a menudo favorecieron a aquellos que estaban vinculados con su círculo de allegados.

El reconocimiento por parte del monarca coincidió con el agotamiento de las manadas de cimarrones en la región pampeana. Como las estancias bonaerenses aún no estaban en condiciones de satisfacer la demanda de cueros, y a veces ni siquiera de atender la provisión de reses para el abasto de la ciudad, hubo que reorientar la explotación del recurso hacia la Banda Oriental, donde las toradas cimarronas todavía abundaban. Esto provocó desórdenes en el territorio oriental, porque los vaqueadores porteños debieron competir por ellas con los faenadores que venían de Santa Fe, con los indios tapes de las Misiones Jesuíticas y con los portugueses. El cabildo porteño intentó intervenir para preservar el recurso y regular la actividad y colocó un comisionado en el río Uruguay para que vigilase los vados por donde se conducía a las tropas de ganado hacia Santa Fe y Buenos Aires. Entre 1717 y 1721 ordenó en varias ocasiones la inspección de los campos de la Banda Oriental, decretando en algunos casos la prohibición temporaria de las capturas y confiscando las carretas de quienes se habían excedido en el número de cueros que tenían autorizado producir. Los vaqueadores no se mantuvieron pasivos frente a tal embestida y en 1718 uno de ellos, Juan Illescas, denunció al ayuntamiento

⁷⁹⁶ AGN IX-48-9-6, *Escribanías Antiguas*, f. 25v.

⁷⁹⁷ Manuel Josef AYALA **Diccionario de gobierno y legislación de Indias** Madrid, 1989, tomo V, Pág. 7.

ante la Real Audiencia de Chuquisaca por los embargos que habían sufrido.⁷⁹⁸ Durante ese quinquenio, sólo se permitió operar con entera libertad en aquella banda a personajes muy allegados a los gobernadores García Ros y Zavala, como lo fueron Juan de Samartín y Joseph Ruiz de Arellano, que bajo el pretexto de ofrecer reses en los mataderos de la ciudad condujeron desde allí tropas de varios miles de cabezas. La corporación autorizó esas recogidas, pues la escasez de ganado vacuno en territorio bonaerense se había hecho acuciante y se había llegado al extremo de tener que sacrificar vacas lecheras para suministrar carne a la población.⁷⁹⁹

Hacia los primeros años de la década de 1720, el ayuntamiento porteño arbitró un conjunto de medidas para procurarse un mayor control sobre la campaña oriental. Firmó dos *concordias* con el cabildo de Santa Fe y con los jesuitas con el fin de fijar las cuotas de animales que aprovecharían anualmente. Asimismo, alertado de que al desplazarse de una faena a otra, la peonada depredaba por su cuenta las manadas de cimarrones (“*peones vagabundos que viven a su antojo*”, los llamó) procuró someter a vigilancia a esa población flotante, aunque en un principio con poco éxito, ya que aún no contaba allí con aparato policíaco propio.⁸⁰⁰ Otro problema lo conformaron las etnias indígenas locales, particularmente las de los bojanos y minuanes, que asaltaban cada vez con más frecuencia las faenas, a los que gratificó con envíos de yerba y tabaco en un intento por mantener relaciones amistosas. A partir de 1721, se levantaron las vedas para la captura y los vaqueadores acrecentaron su actividad. La corporación autorizó a Robert Cross, uno de los directores del Real Asiento británico, a que edificase una barraca en territorio oriental, en las inmediaciones del puerto de las Vacas, para almacenar provisoriamente la corambre. En 1724, Cross obtuvo licencia para adquirir 40.000 cueros a 11½ reales por pieza, los que acordó recibir en ese puerto.⁸⁰¹

⁷⁹⁸ Illescas nombró un representante para que se presentara ante la Audiencia “*por los embargos hechos en la otra banda de este río de las porciones de cueros que los vecinos de esta ciudad tenían hechos, y condenación que de ellos se me hizo*”; AGN IX-49-1-1 *Escribanías Antiguas (1718-1719)*, f. 134v.

⁷⁹⁹ AECBA Serie II, Tomo IV, pág. 520. En 1716 Juan de Samartín pidió licencia para traer 20.000 vacunos de la Banda Oriental para abasto de la ciudad, aunque sólo fue autorizado en 1718. En 1717. Ruiz de Arellano solicitó permiso para traer desde allí una tropa que recogió para el abasto de la ciudad.

⁸⁰⁰ AECBA Serie II, Tomo V, pág. 268.

⁸⁰¹ AGN RE N° 3 de 1723-1724, f. 34.

Cuadro N° 8 - Cabildantes que actuaron como vaqueadores: período en que se desempeñaron en esa actividad y en sus oficios concejiles

Cabildante	Activo en	Años	Nro. cueros	oficio concejil
CASCO DE MENDOZA Francisco	1706-1724	18	7134	1715 (AlcH)
MACIEL DEL AGUILA Juan	1707-1724	17	11000	1707 (AlcH), 1710 (AlcO)
ILLESCAS NIETO Juan	1710-1724	14	17046	1706 (AlcH)
ROCHA Bernardino	1711-1725	14	10150	1706 (AlcH)
ROCHA Juan	1710-1725	14	12300	1708 (AlcH)
BARRAGAN Antonio	1706-1719	13	2000	1691 (Mdm), 1702 y 1720 (AlcH)
GIL NEGRETE Ambrosio	1706-1718	12	1000	1709 (AlcH)
BARRAGAN Pablo	1707-1714	7	5380	1690 (Mdm), 1691 y 1711 (AlcH)
LOPEZ CAMELO Diego	1708-1714	6	15044	1711 (AlcO), 1712 (Proc)
PEREDO Martín	1712-1718	6	2500	1723 (AlcH)
AGUILA Luis del	1709-1712	4	4515	1701 (AlcH)
RUIZ DE ARELLANO Joseph	1707-1711	4	6915	1709 (Proc), 1711 y 1716 (AlcO)
JIBAJA Ignacio Justo	1711-1714	3	4300	1714 (AlcH)
ARROYO Rodrigo	1708-1710	2	1400	1693 (AlcH)
FERNANDEZ DE AGÜERO Amador	1711-1712	2	2000	1700 (AlcH), 1710 (Proc), Reg (desde 1716)
MONSALVE Tomás	1709-1712	2	10482	Reg (desde 1721)
QUINTANA GODOY Baltasar	1711-1712	2	1000	1694, 1709, 1717, 1726 (AlcO), Reg de 1702 a 1725
SOSA Miguel	1724-1725	2	6000	1724 (AlcH)
AVALOS Juan	1712	1	100	1708 (AlcH)
FERNANDEZ PARRA Juan Bautista	1710	1	500	1703 y 1704 (AlcO), Reg (desde 1707)
PEÑALBA Toribio	1710	1	500	1709 (AlcH)
PESOA DE FIGUEROA Luis	1714	1	1000	1691 y 1707 (AlcO)
POZO Y GARRO Alonso	1710	1	1000	1707 (AlcH)
RIVERA MONDRAGON Hernando	1710	1	400	1693 (AlcO)
VALDIVIA Joseph Jacinto	1724	1	2500	1723 (Mdm)
VILLOLDO MINAYA Antonio	1714	1	2500	1716 (AlcH)
RODRIGUEZ Diego	1706	1	1000	1704 y 1705 (AlcH)
CABRAL DE AYALA Sebastián	1707	1	1000	1700 (Proc)

Referencias – AlcO: alcalde ordinario, AlcH: alcalde de la Hermandad, AlcP: alcalde provincial de la Hermandad, Proc: síndico procurador, Reg: regidor, Mdm: mayordomo.

Fuente de los datos: escrituras de obligación en AGI Escribanía 877B, *Copia del libro de la Compañía de Guinea en Buenos Aires*; AGN Serie Escribanías Antiguas y Registros de Escribano N° 2 y N° 3, varios legajos; XIII-41-7-15 *Libro Manual de Alcabalas*; AECBA, varios tomos.

Entre los cabildantes que emprendieron vaquerías y recogidas, algunos sólo lo hicieron en una o dos oportunidades, mientras que otros se mantuvieron vinculados a la

actividad durante más de una década, proveyendo primero de pieles de toro a las embarcaciones de la *Compagnie de Guinée* y luego a los asentistas británicos. En casos como los de Luis del Águila y Tomás Monsalve, pudo observarse que hicieron cueros para los franceses pero luego se volcaron a producir mulas para los mercados andinos, a la vez que otros, como Juan Maciel del Águila, Martín Peredo, Juan de Illescas Nieto, Francisco Casco de Mendoza y los hermanos Juan y Bernardino Rocha suministraron corambre primero a los asentistas franceses y luego a los ingleses, y alternativamente a los capitanes de los navíos de registro. Su desigual permanencia en esta actividad puede apreciarse en el Cuadro N°8, en el que también se expresa cuál la participación individual en los oficios concejiles.

En dicho cuadro se menciona a los 28 cabildantes que participaron en la provisión de cueros a los navíos, cuya permanencia en el sector promedió los 5 años. Menos de una decena de ellos alcanzaron ese promedio o lo superaron; del resto podemos decir que incursionó en las vaqueadas en forma eventual, cuando la rentabilidad de los cueros así lo justificaba y la coyuntura política les permitía participar en dicho negocio. Aunque varios de los nominados se dedicaron a la cría de mulas, sólo uno de ellos —Juan Bautista Fernández Parra— emprendió su venta en las provincias andinas. La ganadería del mular fue posiblemente la actividad de base de casi todos ellos, que sólo salían a hacer cueros a la campaña cuando las circunstancias se los permitían. Siete de cada diez se desempeñarían en una o más ocasiones como alcaldes de la Hermandad, lo que sugiere que su incorporación a la planta concejil provino de la valoración de sus conocimientos sobre la campaña.

Hasta que se devolvió al cabildo de Buenos Aires la facultad exclusiva para pactar la venta de cueros con los capitanes de las embarcaciones, a los vaqueadores les resultó dificultoso encontrar alguna estabilidad en la actividad. Debían ganarse el favor del gobernador de turno, casi siempre a costa de cederle una parte de los cueros para que éste les otorgase una licencia para vaquear. Si a ello se le sumaba el pago de la alcabala y del “tercio” para los accioneros, a menudo les quedaba un margen de ganancia de escasa significación. Antonio Barragán lo expresaría en el juicio de pesquisa contra Velasco, a quien acusó de haberles impuesto una quita de 2 reales sobre el precio de cada cuero, que había sido fijado en 10½ reales. Cuando junto con otros corambreros increpó a Domingo Cabezas, que actuaba como personero del gobernador, por este atropello, se les respondió “*que no tenía remedio, que era orden cerrada del dicho Sr. Don Manuel de Velasco y que el que no quisiese hacer dichos cueros a los 8 reales y*

medio que volviese el dinero”. Como ya habían invertido en acondicionar sus carretas y contratar peones, se vieron obligados a aceptar la imposición: “*respondí con los demás –recordó Barragán– que ya teníamos gastado en los avíos necesarios y que reconociendo la tiranía maliciosa, poder e imposibilidad de volver dicha plata haríamos dichos cueros, violentados de la pobreza, como los hicimos disimulando entonces con temor súbditos*”.⁸⁰² El de Barragán es sólo uno entre muchos ejemplos de las arbitrariedades a que se vieron sometidos y explicaría que, por lo menos hasta 1712, el faenamiento de reses para cueros, sebo y grasa fuera tomado como una actividad esporádica.

No obstante, algunos supieron acomodarse y reaparecer cada vez que la coyuntura así lo permitía. Un caso que lo ilustra es el de la familia Rocha, que realizó faenas de cueros a lo largo de una década y media. El tronco de la misma fue Francisco de Rocha, que era hijo de un portugués pero estaba casado con Catalina Gutiérrez Carvajal, “*nieta de los pobladores*” y accionera, quien le dio cuatro hijos varones, tres de los cuales serían nombrados alcaldes de la Hermandad por el cabildo. Participó en varias malocas y en la toma de la Colonia de Sacramento y recibió del gobernador Valdés Inclán una encomienda de indios caguanés.⁸⁰³ En 1710, los Rocha fueron apartados por Velasco de los repartimientos y se vieron obligados a sobornar al secretario de éste, Francisco Antonio Martínez de Salas, para que les cediera una licencia para hacer 600 cueros. A cambio de ello, Martínez de Salas les retuvo la exorbitante suma de 6 reales en el valor de cada piel.⁸⁰⁴ Al año siguiente Juan y Bernardino Rocha, hijos de Francisco, lograron que se les concedieran otros 1100 cueros. Durante el juicio de pesquisa, estos afirmarían que, en tiempos de Velasco, “*dicho Sr no les daba cueros siendo accioneros y que se los daba a otros que no lo eran*”.⁸⁰⁵

Esta omisión respondía a los fuertes vínculos que tenían los Rocha con la facción de cabildantes que enfrentó a Velasco. No deja de ser sugerente que Bernardino fuera nombrado alcalde de la Hermandad en 1706 y Juan en 1708, cuando dicha facción dominaba aún el ayuntamiento. Como era de esperarse, la situación de la familia se revirtió con la llegada de Mutiloa a Buenos Aires. En 1714, Juan y Bernardino estuvieron entre los más beneficiados por los repartos, pues se les asignaron 7650

⁸⁰² AGN IX-40-3-5 *Demanda puesta por Pablo Barragán a Manuel de Velasco*.

⁸⁰³ AGN IX-42-2-7 *Sobre la pertenencia de diferentes indios que se encomendaron en Francisco de Rocha*.

⁸⁰⁴ AGI Escribanía 877B “*Interrogatorio de Francisco Nicolás Maillet a varios vecinos*”.

⁸⁰⁵ AGN IX-39-9-7 *Manuel de Velasco, por abuso de poder*.

cueros para entregar en las barracas de Ibarra Lazcano, comandante de los navíos de registro que se hallaban entonces en el puerto. En la década siguiente, ambos tendrían un papel destacado entre los vaqueadores que tras el agotamiento de los cimarrones en las praderas pampeanas, pasarían a la Banda Oriental. En 1721 Juan de Rocha remató el abasto de sebo y grasa de la ciudad y se comprometió a entregar en un año 1778 sacos de sebo y 1200 pelotas de grasa traídos de territorio oriental, con la condición que no haría matanzas en los meses de parición, entre agosto y noviembre.⁸⁰⁶ Tres años más tarde, ofreciendo como fiadores al poderoso Juan de Samartín y a Luis Pesoa de Figueroa, consiguió permiso para realizar allí dos recogidas anuales de 40.000 cabezas cada una, de las cuales destinaría 26.000 al abasto de la ciudad, que serían engordadas en las tablas del río Areco antes de ser faenadas en los mataderos.⁸⁰⁷ El cabildo aceptó que lo acompañaran 20 peones desde Buenos Aires.⁸⁰⁸ A comienzos de 1726, pasados 18 meses de habersele otorgado la licencia, se lo acusó de haber sembrado un “*gran desorden*” en las campañas orientales y de haber cruzado el río Uruguay con 4000 cabezas más de las que se le había permitido. El cabildo castigó sus excesos demorándolo con sus animales en las tablas de Areco, cuyo cuidado le insumió un alto costo de jornales pagados a sus conchabados, y absteniéndose de convocarlo para que enviara reses a los mataderos de la ciudad.⁸⁰⁹

Mientras tanto, su hermano Bernardino acampaba con sus peones en el paraje de los Sauces, en la Banda Oriental, donde acopiaba pieles de toro para proveer a los asentistas británicos. Según relató, lo pedregoso del terreno hacía dificultoso clavar las estacas y los cueros quedaban defectuosos al secarlos al sol.⁸¹⁰ Lo precario de los depósitos en que los apiló provocó, además, que muchos se estropearan a causa de los insectos y los roedores. En enero de 1725 le refería a Pablo Ayluardo, empleado de la *South Sea Company*, que la única manera de evitar más pérdidas era entregarlos sin tardanza a los emisarios de dicha Compañía. “*Ha entrado la polilla con tan grande fuerza –se lamentaba– que se pierden muchos cueros sin poderlo remediar, se van entregando bastantes, y bastantes se desechan*”. Los rudimentarios métodos de conservación utilizados (aún no se recurría al arsénico como insecticida) no lograban impedir el

⁸⁰⁶ AGN IX-49-1-2 *Escribanías Antiguas (1720--1721)*, f. 538.

⁸⁰⁷ AGN RE N° 3 de 1723-24, f. 124.

⁸⁰⁸ AECBA Serie II, Tomo V, pág. 486

⁸⁰⁹ AECBA Serie II, Tomo V, págs. 603 y ss.

⁸¹⁰ Refería Rocha que “*en diciembre, enero y febrero aunque fuera la estaca de fierro, no entrará cuatro de dos [sic] debajo de tierra porque la tierra está convertida en piedra, y en llamando el sol la estaca que tire el cuero no queda ninguna chalada y no puede quedar el cuero perfecto...*”; AGN IX-6-9-6 *Compañía de Jesús (1725)*.

desove de estos lepidópteros. Pero el problema que más lo acuciaba era la indisciplina de sus peones. El juego era su única distracción y no estaban dispuestos a que se los reprendiera por ello. “*Yo quise evitar en mi tropa el juego –explicaba a su corresponsal– y fue causa para que toda la gente se me fuese, pagada la más, a buscar las tropas donde había juego, cosa que allá [en Buenos Aires] no se estila, y aquí donde no lo hay, no hay gente*”. Sus trabajos se habían visto demorados por haberse quedado casi sin conchabados, por lo que se aprontaba a volver a la ciudad a contratar otros.⁸¹¹

En septiembre de ese año, Bernardino de Rocha volvía a escribirle a Ayluardo. Esta vez la amenaza era otra: la posibilidad de un ataque indígena. Mientras que la campaña bonaerense, el avance de los aucas hacía imposible internarse en ella, la oriental era presa de las correrías de los minuanes. “*Estamos atajados de los indios, de suerte que si lo de allá está malo, peor está esto, porque ya nadie se atreve a salir a la campaña, temiendo no le suceda alguna avería con ellos, porque a los más, sobre muertes que han hecho los han dejado a pie y desnudos*”. Bernardino se había visto obligado a pagarles 200 pesos a los habitantes de la reducción de Santo Domingo Soriano (que eran un grupo de familias chanás ya sedentarizadas e hispanizadas) para que vigilaran sus faenas y lo alertaran sobre los incidentes que pudiesen provocar los minuanes en los campos.⁸¹²

Como antes habían hecho los franceses, los directores del Real Asiento británico sólo sustanciaban una parte del pago de los cueros en plata. En 1715, a poco de establecerse, pretendieron liquidar sus deudas en plata con sus proveedores de cueros trocándola por ropa facturada a precios arbitrarios, lo que generó “clamores” entre los vecinos y obligó al gobernador García Ros a intervenir.⁸¹³ Los convenios firmados por el cabildo a partir de 1716 indicaban que la corambre debía ser pagada en plata al contado, pero los británicos hallaron la forma de burlar esa imposición, entregando esclavos a cambio. Cuando en octubre de 1726, Juan y Bernardino Rocha concluyeron con la faena de cueros, eran ellos quienes estaban en deuda con el Real Asiento, del que habían recibido un lote de cuatro negros y dos negras valuados en 1300 pesos, además de 482 pesos por adelantos en plata que necesitaron para pagar los jornales de sus conchabados. Pocos días antes, Bernardino de Rocha había pedido por medio de una carta que le facilitaran

⁸¹¹ AGN IX-6-9-6 *Compañía de Jesús* (1725). Las citas de la correspondencia de Rocha que siguen pertenecen a este mismo legajo.

⁸¹² Refería Rocha: “...temiendo yo lo mismo me hallo obligado para acabar mi faena a darles a los indios de la Reducción 200 pesos por su pertenencia por verme libre de gentío...”

⁸¹³ La queja de los vaqueadores se fundaba en que “se les precisa a que saquen ropa para sus avíos de tiendas señaladas a los precios que les imponen”; AGN IX-41-1-4 *Legajo que contiene diferentes autos*.

por medio de otro hermano que se hallaba en Buenos Aires 50 pesos en plata, justificando que se hallaba “*apurado de peones*”. No fue el único de los vaqueadores que pidió adelantos a los asentistas: antes de emprender una faena, Miguel de Sosa se llevó fiados 425 pesos en mercancías y tres negros valuados en 600 pesos y Juan Maciel del Águila les pidió 550 pesos para comprar una lancha.⁸¹⁴

Los corambreros fueron, sin lugar a dudas, uno de los sectores que dio impulso la economía porteña en la década de 1720, al igual que los fabricantes de materiales para la construcción, los traficantes de esclavos y los dueños de las grandes tiendas minoristas, todos estos relacionados estrechamente con la dirigencia concejil. Pero mientras que los tres últimos se hallaban bien representados en dicha dirigencia, los corambreros sólo fueron llamados por éste para desempeñar oficios menores como el de alcaldes de la Hermandad. Ello no significó que se los mantuviera marginados: por el contrario, en dicha década reforzaron su capacidad de presión. Si bien es cierto que en tiempos de Valdés Inclán y de Velasco mantuvieron un perfil bajo y soportaron los desafueros de los gobernadores, bajo García Ros y Zavala hicieron escuchar sus reclamos e incluso buscaron negociar un aumento en el precio de la corambre. En 1723 seis vaqueadores, entre los que se encontraba Juan de Rocha, acudieron a la sala del cabildo a solicitar que el precio de los cueros subiera de 12 a 14 reales, alegando que las rudas condiciones del terreno en la Banda Oriental, que destruía las ruedas de sus carretas, aumentaba el costo de los fletes. Lograron que los miembros de la corporación escucharan su pedido y luego lo debatieran y votaran, encontrando entre ellos dos aliados, los regidores Juan de la Palma y Tomás Monsalve, que apadrinaron calurosamente su pretensión.⁸¹⁵

La oligarquía porteña y la ganadería del mular

Hasta finales de la década de 1720, cuando las manadas de cimarrones de las pampas se encontraban ya casi extinguidas, el ganado vacuno no ocupó sino un lugar secundario en las estancias bonaerenses. Hasta entonces resultaron poco fructíferos los intentos de reintroducirlo y sólo era posible de hallar en ellas pequeños rebaños, destinados al consumo de peones y de esclavos o a engordarlos antes de ser conducidos al matadero. En atención a que las toradas cimarronas habían comenzado a menguar, desde los

⁸¹⁴ AGN IX-6-9-6 *Compañía de Jesús* (1725).

⁸¹⁵ AECBA Serie II, Tomo V, págs. 159-167.

primeros años del siglo XVIII los gobernadores impulsaron la domesticación como alternativa. Tanto Manuel de Prado y Maldonado como Alonso de Valdés Inclán exhortaron a que los vecinos poblaran con ganado vacuno sus estancias: el último sugirió que la mejor manera era ingresar vacas preñadas durante la primavera, a fin de que pariesen formando rodeo y sus terneros se criaran aquerenciados.⁸¹⁶ Velasco ordenó que las vaquerías se suspendiesen, a fin de que las cimarronadas se recuperasen, pero dio permiso a los estancieros que quisiesen conformar sus rodeos para apropiarse de un corto número de animales.⁸¹⁷ La falta de reses para el abasto comenzó a hacerse acuciante desde la llegada de Mutiloa a Buenos Aires. El pesquisidor envió en 1713 a un comisionado a recorrer las estancias de la campaña con el objeto de indagar si existía en ellas ganado vacuno doméstico. Luego de visitar los pagos de Areco y la Cañada de la Cruz, éste envió un informe al cabildo en que declaró haber hallado dispersas menos de 6000 cabezas, distribuidas en una docena de rodeos. Entre los propietarios de esos rebaños se hallaban cinco de nuestros cabildantes: Pedro Giles, Juan Ruiz de la Fuente, Luis del Águila, Tomás Monsalve y Francisco Casco de Mendoza.⁸¹⁸ Tres años más tarde, el gobernador García Ros encargó al alcalde provincial Joseph Ruiz de Arellano que volviese a recorrer las estancias para tomar razón de los rodeos, ya que el cimarrón era tan escaso que ya no podían recogerse más de 300 animales por vez.⁸¹⁹

Entre finales de la década de 1710 y comienzos de la de 1720, tanto el cabildo como el gobernador Zavala seguirían intentando propiciar la domesticación del vacuno en las estancias bonaerenses. En 1716 el ayuntamiento planteó la conveniencia de adquirir 12.000 vacas y repartirlas entre los estancieros a fin de que pudiesen “*lograr multiplico*” y se acabara con la dependencia que se tenía de las tropas traídas desde Santa Fe o la Banda Oriental.⁸²⁰ Todavía siete años más tarde, cuando Juan de Rocha condujo desde la campaña oriental una tropa para el abasto de la ciudad, la corporación trataba de alentar a los vecinos que querían poblar sus estancias dándoles preferencia para seleccionar los animales que necesitasen para sus crías.⁸²¹ Pero la abundancia de ganado cimarrón en la Banda Oriental hacía de la crianza un negocio escasamente rentable y conspiró contra este tipo de medidas: en 1723, un cuero valía 13 reales si había sido hecho en los campos bonaerenses, pero sólo costaba 10 u 11 reales si venían de la otra

⁸¹⁶ AECBA Serie II, tomo I, págs. 480-488.

⁸¹⁷ AECBA Serie II, tomo II, págs. 241 y 248.

⁸¹⁸ AGN IX-19-1-7, *Archivo del Cabildo de Buenos Aires (1690-1728)*.

⁸¹⁹ AECBA Serie II, Tomo III, pág. 287.

⁸²⁰ AECBA Serie II, Tomo IV, págs. 570-571.

⁸²¹ AECBA Serie II, Tomo V, págs. 567-568.

orilla. En tales circunstancias, el ganado vacuno doméstico se iría imponiendo en nuestras estancias con bastante lentitud y su presencia no ganaría contundencia hasta la década siguiente, luego de Buenos Aires sufriera el recorte de una parte del territorio de la Banda Oriental en que usualmente vaqueaban los vecinos para serle otorgado a los vecinos de la recién fundada Montevideo, mientras que en la porción que quedó bajo el dominio del cabildo porteño comenzaban a establecerse estancias y, junto con ellas, otros criterios de explotación de los rebaños.

Entre la segunda mitad del siglo XVII y las primeras tres décadas del XVIII, la escasa presencia del ganado vacuno doméstico en las estancias bonaerenses permitió que los ganaderos se enfocaran en otro rubro: la producción de mulas. Esta fue, por entonces, la principal actividad desarrollada en el *hinterland* de la ciudad, seguida bastante de lejos por la siembra de trigo y el engorde de reses destinadas al abasto. Buenos Aires aún no cuenta con estudios sobre el surgimiento y desarrollo de la cría de mulas que tengan la magnitud de los que existen para Córdoba, donde Carlos Sempat Assadourian ha reconstruido las series de precios y los circuitos de producción y comercialización para todo el siglo XVII. Hasta hoy, sólo se han difundido para el caso de Buenos Aires las cifras seriadas por Eduardo Saguier (y utilizadas por Zacarías Moutoukías) todas ellas referidas a los fletamentos de tropas al Noroeste.⁸²² Las mismas se inician en 1653, muy posiblemente porque en la primera mitad de dicho siglo la cría de mulas todavía se hallaba poco difundida en los establecimientos rurales bonaerenses, que estuvieron consagrados al ganado vacuno doméstico hasta que estalló la epidemia de 1651 y éste se dispersó.

Este episodio, como ya referimos, sirvió de corte entre dos momentos bien definidos. El alzamiento general del bovino provocado por la desaparición masiva de los esclavos y los sirvientes indígenas se correspondió con un cambio en la especialización productiva de las estancias, volcadas desde entonces a la cría del mular. Las primeras evidencias de esa innovación se observan en el volumen de las mulas fletadas a las provincias del interior a partir de 1653, tal como ha sido reconstruido por Saguier: partiendo de una media de 760 cabezas anuales en el quinquenio 1653-1657, ascendió a 1120 cabezas en el quinquenio 1658-1662 y a 1608 cabezas en el quinquenio 1663-1667. Sin duda, este tímido despegue se traducía en resultados aún modestos: eso puede explicar que todavía en 1660, el cabildo porteño sentenciara que “*el único fruto de esta*

⁸²² Zacarías MOUTOUKIAS *Contrabando y control colonial...* Págs. 180-181.

ciudad de Buenos Aires son los cueros".⁸²³ Sospechamos que la producción de mulas, bastante restringida en la década de 1650, pudo haber pasado por un período experimental en la década anterior.

Assadourian presenta una serie de precios de mulas en Córdoba, que juzgamos pertinente comparar con los que nosotros extrajimos de los protocolos de escribano de Buenos Aires. En la segunda mitad del siglo XVII, se produce en la ciudad mediterránea una notoria caída de los mismos, que entre los años de 1637 y 1660 oscilaron de 22 a 24 reales, bajando a 20 reales en 1665, 16 en 1670, 14 entre 1675 y 1695, y 10 entre 1695 y 1700.⁸²⁴ La revisión de las fuentes notariales, aunque llevada a cabo sistemáticamente, no nos ha permitido reconstruir una serie tan completa para Buenos Aires, ya que la información que se pudo extraer se manifestó por demás discontinua. Pero las cifras de que disponemos permiten determinar las mismas tendencias que en la ciudad mediterránea, con una caída aún más pronunciada en los precios. Teniendo en cuenta estas pautas, se observa que en 1661 se pagaban 32 reales por mula, 34 reales en 1662, 24 en 1663, entre 18 y 20 en 1666, entre 12 y 14 entre 1667 y 1678, y entre 10 y 12 hacia fines del siglo.⁸²⁵ Notamos que en un comienzo las utilidades del comercio de ganado mular están mejor repartidas entre productores y traficantes que en Córdoba, pero desde el último cuarto de siglo las fluctuaciones de precios en una y otra ciudad parecen calcarse. Queda claro que este ajuste en los precios, nacido de la competencia con otras regiones productoras, se hizo a costa de los criadores bonaerenses, y no de los acopiadores.

Assadourian ha desechado la idea de que la tendencia descendente en los precios estuviera relacionada a una reducción en el costo real de la producción, ya que aunque el precio de las yeguas de cría sufrió una baja continua hasta fines de siglo, el de la mano de obra tendió a subir. Aunque no contamos con elementos para establecer como evolucionaron los jornales en Buenos Aires sabemos que estos, lo mismo que el precio de los esclavos, sufrieron sucesivos incrementos finales de siglo. No obstante, contamos con un renglón de inversión no contemplado por Assadourian: el de los sementales. En 1661, según se desprende de la venta de una estancia en el pago de la Magdalena, un

⁸²³ Citado por Eduardo AZCUY AMEGHINO *El latifundio y la gran propiedad colonial rioplatense* Fernando García Cambeiro editor, Buenos Aires, 1995, Pág. 35.

⁸²⁴ Carlos Sempat ASSADOURIAN *El sistema de la economía colonial* Nueva Imagen, México, 1983, Págs. 48-52.

⁸²⁵ Estas cifras proceden de las ventas en que participaban los criadores y en ningún caso de las reventas que hacen los acopiadores a los traficantes de otras ciudades. En lo que respecta a las mulas, se ha tomado el precio de las que tenían entre uno y dos años

burro *hechor* fue tasado en 25 pesos.⁸²⁶ Dos décadas más tarde, cuando los puestos de cría de mulas ya resultaban indisociables de la fisonomía de las estancias bonaerenses, el precio de un asno garañón había descendido a 7 u 8 pesos por cabeza.

Es evidente que este abaratamiento en el costo de los padrillos y el siempre irrisorio precio de las yeguas de cría facilitó la aparición de criadores de menor envergadura, que habrían de actuar como proveedores de los acopiadores y traficantes. El primer ejemplo que conocemos de acaparamiento mediante compras a los criadores es el concierto que firmaron en 1671 el sargento mayor Juan del Pozo y Silva y Mateo Pereyra, por el cual este último, acompañado de seis peones, habría de “*recogerle por las estancias todas las mulas que le señalare se le deben por los vecinos de esta ciudad*”, y las conduciría a una invernada situada sobre el río Areco.⁸²⁷ Este convenio ya alude a la estrategia de la que se valieron los acopiadores de comienzos del siglo XVIII: la de asegurarse una cuota anual de animales mediante adelantos en plata a los productores medianos y pequeños.

Podemos afirmar que desde el último tercio del siglo XVII, se produce en una diferenciación cada vez más marcada entre los criadores de mulas y los acopiadores. Muchos de los criadores se encontraban fuertemente endeudados: el endeudamiento sirvió para limitar las actividades de los productores, imposibilitando que condujeran sus propias tropas de animales a las ferias andinas, y eliminándolos de esa manera como posible competidores en la trata. Todavía a fines del siglo XVII hallamos a algunos ganaderos-trafficantes vendiendo sus mulas a Salta: en el siglo siguiente ya no los volveremos a encontrar. Las deudas subordinaron los intereses de estos ganaderos a los de sus acreedores, quienes los redujeron al papel de simples criadores.

Cada acopiador contaba con su propio elenco de pequeños y medianos abastecedores a los que recurrir. No faltan ejemplos de estos vínculos de dependencia. Tomemos un caso: el de los productores que suministraron animales a uno de los acopiadores de mayor envergadura, el regidor Joseph de Arregui. Uno de ellos, que tenía 600 mulas en su estancia en la Matanza, declaraba: “*tengo tratado y concertado el vendérselas al capitán don Joseph de Arregui, las que fuesen de dos años por precio de diez reales cada una y a cuenta de ellas me ha dado doscientos pesos*”.⁸²⁸ Otro, poseedor de una estancia en la Magdalena, afirmó que “*tenía ajustado y celebrado trato con el capitán*

⁸²⁶ AGN IX -48-5-6, *Escribanías Antiguas*, f. 349.

⁸²⁷ AGN IX -48-6-3, *Escribanías Antiguas*, f. 604.

⁸²⁸ AGN IX -48-9-4, *Escribanías Antiguas*, f. 513v.

don Joseph de Arregui por tiempo de seis años para le dar y vender en cada uno todas las mulas que produjesen las dichas sus estancias a precio de diez reales cada una".⁸²⁹

Incluso un latifundista, Juan de Samartín, reconoció en su testamento tenerle vendidas "*todas las mulas que tengo en las crías de mis cuatro estancias de tres y cuatro años a doce reales cada mula... y declaro que por cuenta de lo que montaren las mulas que se entregaren tengo recibidos quinientos pesos*".⁸³⁰ Como Arregui operaba desde la ciudad, le fue indispensable contar con auxiliares en la campaña, que colectaban los pequeños hatos de animales con que los pequeños productores satisfacían sus deudas. Sabemos que les pagaba 1½ real por cabeza recogida, más los jornales de los peones.⁸³¹ Uno de ellos fue Francisco Casco de Mendoza, alcalde de la Hermandad, que fue propietario de una estancia en la Cañada de la Cruz, donde tenía una cría de mulas, y también un asiduo vaqueador en las campañas bonaerense y oriental.

Ante los recurrentes problemas de escasez de metálico, los ganaderos saldaban usualmente sus deudas con mulas. Es un ejemplo más de la sectorización de la circulación de la plata, cuyo flujo era estorbado por los grandes comerciantes, que la atesoraban para traficar con los asentistas y los registreros. No llama la atención que un estanciero de mediana envergadura recibiera mercaderías de los depósitos de Arregui a cambio de dos "vales", uno de ellos comprometiendo la entrega de 430 mulas y otro de 391.⁸³² Pero eso sucedía también en el caso de un personaje de incuestionable fortuna como lo era Juan del Pozo y Silva, alcalde provincial de la Hermandad, quien en 1697 pagó las deudas que tenía con dos comerciantes de la ciudad, Miguel de Riblos y Baltasar de Quintana Godoy, entregándoles sendas tropas de mulas por medio de un esclavo que oficiaba como capataz de su estancia en Arrecifes, a un precio fijado en 20 reales cabeza.⁸³³

En 1713, los dos acopiadores de mayor envergadura de Buenos Aires se vieron obligados abandonar el tráfico de mulas con las provincias andinas, en ambos casos debido a su complicación en causas judiciales: Arregui, como se recordará, fue detenido en Potosí por orden de Mutiloa y murió a las pocas semanas y Riblos fue sometido a concurso de acreedores y buscó asilo en el colegio de los jesuitas para no ir a prisión. A partir de ello, los porteños perdieron protagonismo en las ferias de ganados de San

⁸²⁹ AGN RE N°2 1707-1709, f. 225v.

⁸³⁰ AGN IX -48-9-4, *Escribanías Antiguas*, f. 65.

⁸³¹ AGN Sucesión 8821, *Testamentaria de Gonzalo Zárate*.

⁸³² AGN IX-48-9-3 *Escribanías Antiguas (1704-1705)*, f. 353.

⁸³³ AGN IX-48-8-4 *Escribanías Antiguas (1697-1699)*, f. 35.

Felipe del Valle de Lerma, en Salta, y su lugar fue ocupado por los traficantes cordobeses. Estos últimos intentaron también incursionar en la compra de animales en las estancias de Buenos Aires, que en su mayor parte siguieron dedicadas a la producción del mular. Aunque los actores que antes dominaban la intermediación con los mercados andinos fueron relevados por otros, ello no afectó en nada la estructura productiva del *hinterland* porteño.

Gracias a un episodio acaecido en 1717 –el conflicto entre un comerciante y uno de sus deudores– conocemos el modo en que los cordobeses penetraron en el mercado de ganados local. Gregorio Avellaneda, alférez real del cabildo, actuaba por entonces como representante de un acopiador de ganados de Córdoba, Francisco de Tejeda.⁸³⁴ Para conseguir los animales que éste le requería, se vio obligado a recurrir a criadores y traficantes locales. Para adquirirlas acudió a Juan de Samartín, que era entonces el más grande productor de mulas de la campaña bonaerense, pero también a dos estancieros del pago de La Matanza, pagando 15 reales por cada una de ellas, a la vez que contrató a un tercero para “guardarlas” a razón de 4 reales por cabeza. Asimismo, movilizó a otros comerciantes locales como Pablo Barragán y Juan de Zamudio, que le eran deudores por algunas sumas en plata o por géneros que les había entregado al fiado, para que colectaran los animales y los condujeran a su invernada. He aquí que se formaba una red que, de funcionar correctamente, permitiría al intermediario local reunir los animales que le solicitaba el acopiador. Pero sobre todo se aprecia cómo las mulas podían servir como una suerte de “moneda de la tierra” que estaba en condiciones de suplir en algunas de las transacciones a la plata.

Para apreciar la importancia de la producción de mulas en el conjunto de las actividades pecuarias será indagar cuáles era las características de los establecimientos productivos. Aunque una parte muy significativa de los individuos aquí estudiados eran propietarios de estancias, tan sólo conocemos la composición de sus rebaños en 19 de los casos. Los estancieros de comienzos del siglo XVIII estaban lejos de tratarse de un grupo fisonómicamente compacto. Lo primero que los diferenciaba era el tamaño de dichos establecimientos. Los hubo propietarios de fincas unitarias de grandes dimensiones que podríamos conceptualizar como latifundios, como lo fueron las estancias de Juan de Samartín en Arrecifes y de Miguel de Riblos en Areco, ambas de varias leguas de superficie. También los hubo de terrenos de variable extensión diseminados

⁸³⁴ AGN IX-42-9-2 *Juan de Zamudio contra Gregorio de Avellaneda por dinero (1716)*.

por distintos pagos que podrían ser considerados como “latifundios dispersos”, en tanto que eran explotados por un mismo individuo siguiendo criterios de conjunto.⁸³⁵ Tal fue el caso de Juan del Pozo y Silva y de su hijo Alonso del Pozo y Garro, que poseyeron una estancia en Arrecifes, otras dos en la boca del río Luján, unas tierras de cabezadas en el Rincón del Tala, más una rinconada conocida como Rincón de Samborombón en la Magdalena, o de Baltasar de Quintana Godoy, que era dueño de dos estancias en Arrecifes y de otra en la Magdalena.⁸³⁶ Pero entre los sujetos estudiados aquí, lo que primó fue la posesión de *suertes de estancia*, de unas 2700 has de superficie, así como de fracciones desprendidas de éstas a causa de los procesos hereditarios y de las ventas. Recordemos que a poco más de un siglo de los primeros repartos de tierras, las particiones hereditarias no habían tenido aún demasiada incidencia sobre la estructura de la propiedad, de tal manera que la *suerte de estancia* –cuyas medidas, normalizadas en los tiempos de Juan de Garay, eran de 3000 varas de frente por 9000 de fondo– seguía siendo la unidad de explotación estándar, mientras que los pequeños y medianos propietarios eran aún escasos.⁸³⁷

Pasemos ahora a la composición de los rebaños. Contamos con datos para casi una veintena de aquellas estancias (en un par de ellas para dos años diferentes) que se verán expresados en el Cuadro N° 9. Estos provienen de las descripciones ofrecidas por los testamentos o de los inventarios de bienes que se realizaron con motivo de la sucesión testamentaria de alguno de los individuos listados, y deben aplicárseles las mismas reservas a que hicimos alusión en el capítulo anterior al referirnos a estas fuentes, que reflejan el estado patrimonial de un sujeto en un momento próximo a su deceso, con todas las implicancias que ello podía tener en el estado y conservación de los bienes.

⁸³⁵ Antonio Miguel BERNAL **Economía e historia de los latifundios** Instituto de España-Espasa Calpe, Madrid, 1988, Pág. 22 y ss.

⁸³⁶ AGN IX-49-1-4 *Escribanías Antiguas (1724-1733)*, f. 973

⁸³⁷ En un estudio anterior, establecimos que en 1690, en los establecimientos del pago de Areco la extensión de frontada al río promediaba las 10.727 varas, mientras que en los pagos de Cañada de la Cruz y Pesquería las frontadas promedio eran de 5665 y 6150 varas; Carlos María BIROCCO “La propiedad de la tierra en la campaña bonaerense durante el período colonial. Un estudio de caso: Areco, 1690-1789” en **Cuadernos de Trabajo** Universidad Nacional de Luján, 2000, N° 18, Pág. 142.

Cuadro N° 9 - Estancias y ganados pertenecientes a los miembros de la dirigencia concejil (1700-1726)

Propietario	año	localización	yeguas	vacas	mulas	burros	caballos	ovejas	bueyes	carretas
SAMARTIN Juan	1714	Arrecifes	10500	800	1850	220	270	3000	50	4
RIBLOS Miguel	1713	Areco	4641	200	1207	148	720		12	
CABRAL DE AYALA Sebastián	1711	Matanza	600	600		200	150	800	100	8
BARRAGAN Antonio	1717	Magdalena	800	500		650	150		90	5
MACHADO Juan Ramón	1700	Cda. Honda	2000	200	600	250	20			
MACHADO Juan Ramón	1702	Cda. Honda	1000	400	700	420				5
VALDIVIA Y ALDERETE Joseph Jacinto	1702	Luján	1165	471	950	375	71	400	23	
VELASCO Isidro Antonio	1718	Matanza						800		
NARRIONDO Joseph	1714	Matanza	400	20		15	12	100	14	
AGUILA Luis del	1718	Cda. Cruz	1000		100	50		1000	50	
AVALOS Y MENDOZA Mateo	1724	Conchas	1000	400	80			519		
BENAVIDEZ Juan	1718	Conchas	1000		200	34	60	3000	12	1
BENAVIDEZ Juan	1720	Conchas	1000	36	508	26	30	800	10	
CASTRO Felipe	1724	Luján	592	18	208	10	215		5	
CASTRO NAHARRO Juan	1701	Matanza	400			40		100		
GAETE Gerónimo	1705	Magdalena			134	20	20	1850	20	4
GONZALEZ DE ACOSTA Diego	1704	Matanza	350				28			
BARRAGAN Pablo	1722	Magdalena					30	600		
LOPEZ CAMELO Pedro	1725	Conchas	1000		500		10	400	8	1
MUÑOZ DE LA ROSA Bernardo	1724	Luján	811	1510	97	11	261		20	1
RODRIGUEZ Diego	1718	Matanza	400				60	100	20	

Fuente de los datos: AGN Serie Escribanías Antiguas y Registros de Escribano N° 2 y N° 3, varios legajos; Sucesiones, varios legajos.

Las cifras detalladas en el cuadro anterior no hacen sino confirmar el lugar secundario que todavía ocupaba el ganado vacuno doméstico y la preponderancia de la producción de mulas por sobre otras actividades agroganaderas. Esto último se desprende del gran número de yeguas que se halló en esas estancias, aunque es posible que no todas ellas estuvieran destinadas a la cría del mular. Recordemos que por lo general, los estancieros criaban por separado dos tropillas, una destinada a reproducirse en su especie, es decir, a parir potrillos (conocidas como yeguas *de entero*) y otra a producir mulas (yeguas *de*

vientre o de retajo). Aquellos que por falta de recursos no podían permitirse tenerlas por separado se conformaban con mantener una manada de yeguas de vientre y salían periódicamente a capturar yeguas *bagualas*, que no tenían dueño y eran aún abundantes en casi toda la campaña, para reponer las que faltaban en sus puestos de cría.

En los establecimientos productivos analizados, las yeguas constituían el 48,2% de los animales existentes; si a éstas les agregamos los burros (4,2%) y las mulas (12%), sumaban cerca de las dos terceras partes del semoviente. Tras haber pasado medio siglo de que se produjera el alzamiento de los vacunos a resultas de la epidemia de 1651, los estancieros se seguían volcando casi enteramente a la producción del ganado mular. La crianza del mismo no era tarea fácil, sino que demandaba de técnicas especiales. Como el acoplamiento entre yeguas y burros no se producía naturalmente debían recurrir a una trabajosa maniobra, la de acercar a aquellas un caballo *de retajo* (llamado así porque su miembro había sido sometido a una incisión que lo inhabilitaba para cubrir a la hembra) pero cuando se disponía a aceptarlo se lo apartaba y su lugar era ocupado por un burro hechor. En el caso de que la yegua resultara preñada, el alumbramiento se producía tras una gestación de doce meses, por lo general durante el mes de noviembre. Se ha dicho que alrededor de la mitad de las cópulas resultaban infértiles, pero en base a los datos suministrados por dos grandes productores, el cociente de parición resultó ser bastante más bajo: en las estancias de Riblos nacía anualmente una mula por cada 5 yeguas y en las de Juan de Samartín, una por cada 13 yeguas.⁸³⁸ Las mulas permanecían en la estancia hasta que contaran con la resistencia suficiente para ser fletadas a las provincias andinas. A medida que crecían, había que apartarlas de las más jóvenes, ya que se trataba de animales muy agresivos; un acopiador aseguraba que convenía deshacerse de ellas con la mayor presteza posible “*por el gran daño que las mulas de edad siempre hacen*”.⁸³⁹

Pero aunque disponemos de pocos casos, es posible advertir ciertas diferencias entre los establecimientos situados al norte de la campaña y los que estaban localizados más al sur, tomando como límite entre ambas zonas el río de las Conchas (hoy río Reconquista) que era el mismo de que se servía entonces el cabildo para fijar el área de actuación de los dos alcaldes de la Hermandad. Al norte de dicho río, en los pagos de Arrecifes, Areco, Luján y Conchas, la proporción de yeguarizos superaba la media y

⁸³⁸ En estas dos estancias no existían tropillas de yeguas de entero, lo que sugiere que todas las yeguas estaban dedicadas a la producción de mulas.

⁸³⁹ AGN IX-42-9-2 *Juan de Zamudio contra Gregorio de Avellaneda por dinero (1716)*.

llegaba a constituirse en el 52,2% del semoviente, mientras que al sur, en los pagos de Matanza y Magdalena, estos no superaban el 29%. Los estancieros, como puede apreciarse, prefirieron concentrar los puestos de cría en los pagos atravesados por el camino real, que era aquel que recorrían los acopiadores para conducir los animales a las ferias de Salta. Un ejemplo de ello lo dio el regidor Baltasar de Quintana Godoy, que al heredar tres estancias en el pago de Arrecifes de su hermana soltera Leonor, trasladó a una de ellas la cría de mulas que poseía en una estancia de su propiedad en la Magdalena.⁸⁴⁰ ¿Cuál era entonces el perfil productivo de las estancias ubicadas al sur del río de las Conchas? Dado a que a comienzos del siglo XVIII aún eran visitadas por el ganado cimarrón, es posible las rinconadas de la Magdalena, ricas en pastos y aguadas, hayan servido para emboscarlo, o bien para retenerlo temporariamente hasta que se lo faenara o se lo trasladara a los mataderos del abasto.

Algunas de los grandes productores poseían dos o más puestos de cría de mulas. Los criterios de organización parecen haber respondido a la disponibilidad de pasturas y al acceso a las aguadas, que los llevaron a desconcentrar a los yeguarizos asignándoles parcelas separadas donde apacentarse. Ello los obligó a redoblar la inversión en mano de obra, pero hasta la primera década del siglo XVIII el precio pagado por animal lo justificaba. Miguel de Riblos, que fue el comerciante más opulento del Buenos Aires de comienzos de los Setecientos, inició su trayectoria como ganadero. En 1687 afirmaba: *“mi hacienda... se compone de cosas de campo, y lo principal de ella son dos estancias que fructifican 500 mulas cada año”*.⁸⁴¹ A partir de una parcela que su primera mujer, Gregoria Silveyra Gouvea, ingresó al matrimonio, Riblos incrementó notablemente la superficie originaria de esta finca rural a través de la adquisición de tierras, con lo que alcanzó a tener 5 leguas de frente al río Areco por 5 leguas de fondo sobre la Cañada Honda. En 1713 contaba allí con cuatro puestos de cría, con un promedio de más de mil mulas en cada uno de ellos, que eran atendidos por quince esclavos: siete eran adultos y estaban distribuidos a razón de uno o dos en cada puesto, posiblemente a causa de sus conocimientos sobre la manera de acoplar a las yeguas y de cuidar a sus vástagos, mientras que el resto, compuesto en parte por negros bozales comprados a los asentistas, rondaba los 20 años y atravesaba un período de instrucción. Vivían diseminados en once ranchos de paredes de adobe y techos de paja, donde alternaban con los peones contratados para tareas estacionales como el herrado de las mulas. Su amo introdujo en

⁸⁴⁰ AGN RE N° 3 de 1737, fs. 732 y ss.

⁸⁴¹ AGN Sucesión 8122 *Francisco Rivera contra Miguel de Riblos*.

sus estancias un rebaño de 200 vacas, garantizando con ello una dieta basada en proteínas animales, pues según se dijo que estaban reservadas “*para el sustento de la gente de las estancias y su manutención*”.⁸⁴²

La distribución de los yeguarizos en distintos puestos de cría, cada uno provisto de su parcela de pastoreo, se veía facilitada cuando los estancieros eran propietarios de fincas que se hallaban geográficamente dispersas. Bernardino Antonio de Acosta, quien poseía una suerte de estancia en el pago de las Conchas y otras dos suertes situadas a ambas bandas del río Luján, brinda un ejemplo de ello. En la estancia que estaba situada en la otra banda de dicho río contaba con una casa de sólida construcción, un rancho que servía de depósito y un horno para cocer pan. Junto a ellos había sembrado trigo y plantado un monte de una cuadra de largo, “*la tercera parte de madera gruesa y lo demás de monte nuevo de durazno y árboles frutales*”, entre ellos perales, manzanos y membrillos. Entre los utensilios resguardados por Acosta figuraban dos desjarretadotas y un desvasador, lo que indica que en algún momento se sirvió de esta finca como base de operaciones para salir a vaquear cimarrones. En aquellas tierras había tres puestos de cría de mulas. La estancia que poseía sobre el río de las Conchas tenía instalaciones más modestas, pues sólo contaba en ella con un rancho con dos horcones, pero había montado allí otro puesto de cría.

Durante la primera década del siglo XVIII, el precio pagado por las mulas en las ferias de Salta se desplomó y ello repercutió en Buenos Aires. A fines del siglo anterior, se le pagaban al criador 12 reales por cabeza, mientras que ahora éste sólo recibía 8 reales. No obstante, la producción en las estancias bonaerenses no parece haber declinado a causa de ello. Son varias las explicaciones a tener en cuenta. Una es la que ofrece Jorge Gelman, quien al analizar el declive de la producción de mulas en Córdoba refiere que una parte de la misma estaba a manos de familias campesinas, y que éstas reaccionaban a los estímulos de los mercados de manera inversa a las grandes empresas mercantiles. Frente a una baja en los precios incrementaban la producción y las ventas para solventar los gastos mínimos de la subsistencia; la disposición de mano de obra familiar gratuita les permitiría subsistir durante largos períodos en esas condiciones. Aun así, este autor admite que a veces el estímulo negativo de los mercados podía llegar a conducirlos por el camino inverso, reforzando su tendencia a la autosuficiencia.⁸⁴³

⁸⁴² No obstante, también había en las estancias de Riblos un horno de cocer pan; AGN Sucesión 8122 *Concurso de bienes de Miguel de Riblos*.

⁸⁴³ Jorge GELMAN “En torno a la Teoría de la Dependencia, los polos de crecimiento y la crisis del siglo

¿Podemos aplicar la misma lógica al Buenos Aires de comienzos del siglo XVIII? No hemos hallado aquí evidencias de un campesinado ligado a la producción de mulas y mucho menos entre los individuos que formaban parte del grupo que estudiamos, en tanto recurrían a la mano de obra esclava y a la contratación de peones, y no a la utilización semiexclusiva de mano de obra familiar. Pero más allá de ello, había otros motivos que los disuadían de abandonar la ganadería del mular. Una de ellas era que establecer un puesto de cría podía llevar varios años de intenso trabajo, por lo que no era posible desarticularlo en épocas de precios bajos para volver a montarlo cuando estos subían nuevamente. Tras “retobar” una nueva camada de jumentos –colocándolos al pie de las yeguas para que éstas, confundiéndolos con potrillos, los amamantaran y se acostumbraran a ellos– seguía una espera de dos años hasta que los asnos alcanzaran la madurez sexual, lo que los obligaría a atravesar un trienio de baja productividad o a depender de los padrillos alquilados a otros criadores. Un ejemplo de ello lo brindó Sebastián Cabral de Ayala, propietario de dos suertes de estancias en el pago de la Matanza, quien respondió a la caída de los precios dejando de acoplar las yeguas con los asnos. *“Por el poco valor que han tenido las mulas –explicaba en 1712– [las yeguas] casi están en su especie, pero no obstante se han ido ahora reparando y tienen algunas mulas y borricos nuevamente retobados”*.⁸⁴⁴ La capacidad productiva del puesto de cría, tal como refiere este productor, se recuperaba con lentitud. La versatilidad con que los criadores podían reaccionar a los estímulos de mercados tan lejanos, como puede verse, era más que relativa, por lo que desmontar sus puestos de cría no parece haber estado entre sus opciones.

El descenso de los precios desalentó a los productores de mulas de menor envergadura a conducir tropas por su cuenta hasta las ferias de Salta. Estos aún se internaban hasta allí a finales del siglo XVII pero desaparecieron casi por completo de ese mercado a comienzos de la siguiente centuria, ya que los costos del viaje frustraban sus expectativas de extraer utilidades. Ello sin duda contribuyó a que el fletamento fuera monopolizado por los grandes acopiadores. Estos últimos serían los verdaderos responsables de que la producción de mulas no cesara: al someter a los criadores a endeudamiento, comprometiéndolos a pagar en animales las sumas de plata o los géneros europeos que les prestaban, los obligaron a que siguieran criándolas. La

XVII. Algunos debates sobre la historia colonial americana” en José María SANCHEZ NISTAL y otros **Problemas actuales de la historia. Terceras Jornadas de estudios históricos** Universidad de Salamanca, 1994, Pág. 110.

⁸⁴⁴ AGN Sucesión 5335 *Testamentaria de Sebastián Cabral de Ayala*.

sociedad conformada por Antonio Meléndez y Juan Bautista Fernández Parra para traficar mulas en Salta y el Alto Perú, por ejemplo, se sirvió de este mecanismo para obligar a los proveedores a entregarles sus tropillas año a año.⁸⁴⁵

Pero quizás el caso que mejor lo ilustra es el de Juan Maciel del Águila, alcalde de la Hermandad en 1707 y alcalde ordinario en 1710, que fue propietario de una estancia en la Magdalena y participó repetidas veces en las vaquerías, haciendo corambre tanto en la campaña bonaerense como en la oriental. En 1707 recibió del acopiador Miguel de Riblos un préstamo por 1000 pesos, a cambio de lo cual pactó entregarle “*las cabezas de bestias mulares de edad de dos y tres años que produjere mi estancia, empezando desde este presente año hasta que haya cumplido el número de mil cabezas, respecto de que por ellas me ha abonado el dicho don Miguel de Riblos ocho reales por cada una tengan más o menos subido precio en esta ciudad*”.⁸⁴⁶ Merced a esta cláusula, este criador quedaba excluido de cualquier reacomodamiento en los precios que pudiera favorecerlo, a la vez que se lo forzaba a seguir produciendo animales hasta saldar por completo su deuda. Situaciones como ésta nos hacen ver a las deudas a pagar en mulas como una estrategia de los acopiadores para garantizarse una cuota permanente de animales, ya que no podían confiar en que los mercados receptores presentaran mejores perspectivas y estimularan la producción.

Cinco años más tarde, Maciel del Águila ya había saldado sus dependencias con Riblos y, al parecer, había abandonado la crianza de mulas. En su estancia de la Magdalena, sólo fue posible hallar entonces 800 cabezas de ganado vacuno, que parecen haber sido el remanente de una vaquería que había realizado en asociación con Pedro de Olivares, en las que este último aportó los peones y las carretas y él su experiencia en la producción de cueros.⁸⁴⁷ La presencia de los asentistas franceses e ingleses en Buenos Aires colocaría a los ganaderos como él frente a una alternativa: la de reemplazar las decrecientes utilidades de la venta de mulas por la explotación del ganado cimarrón. El hecho de que varios de nuestros cabildantes fueran a la vez productores de ganado mular y corambreros es una muestra de que supieron acomodarse y atender a la

⁸⁴⁵ Hay varias evidencias de obligaciones contraídas por los criadores con estos. Juan Pereyra declaró en 1700 deberles 100 cabezas de ganado mular, la mitad a pagarle ese año y la otra el año siguiente, mientras que Gabriel de Castro les era deudor de un número no expresado de cabezas; AGN IX -48-8-6, *Escribanías Antiguas (1700)*, f. 110 y 258. Francisco Martínez de Saravia manifestó en 1703 haberse comprometido a entregarle 66 cabezas; AGN IX -48-9-2, *Escribanías Antiguas (1703)*, f. 317.

⁸⁴⁶ AGN RE N°2 1707-1709, f. 97.

⁸⁴⁷ AGN IX-41-9-6 *Miguel de Peñaloza y Diego Gutiérrez de Paz contra Francisco Maciel del Águila*.

demanda del mercado ultramarino cuando los estímulos del mercado andino se hacían sentir con menos fuerza.

La agricultura del trigo y la producción de panificados

A comienzos de febrero de 1713, cuando se inició uno de los capítulos del juicio de pesquisa contra Velasco, varios de los corambreros de Buenos Aires fueron llamados por Mutiloa a presentar su testimonio. Dos de ellos, Francisco de Rocha y Ambrosio Gil Negrete, antiguos alcaldes de la Hermandad, fueron citados a atestiguar contra el gobernador depuesto pero no pudieron ser notificados porque se encontraban en sus haciendas de campo recogiendo sus cosechas de trigo.⁸⁴⁸ No debe llamarnos la atención que ganaderos como estos incursionaran también en la agricultura. Muchos de los grandes comerciantes fueron también propietarios de chacras y abandonaban periódicamente de la ciudad para visitarlas e instruir a sus esclavos y conchabados sobre el cuidado de sus sembrados. Esta fue una de las principales causas de ausentismo a las sesiones del ayuntamiento, particularmente en los meses de febrero y marzo, en que una vez segados los trigales era necesario arbitrar con urgencia el almacenamiento del grano o su traslado a la ciudad.

La agricultura era a comienzos del siglo XVIII una actividad que se desarrollaba principalmente (aunque no en forma exclusiva) en el área que bordeaba la ciudad. Esta sectorización se originó en el reparto de suertes de chacra y suertes de estancia que hizo Juan de Garay en 1582. Se estableció entonces que las “tierras de pan llevar” —es decir, las que conformaban el cinturón de chacras— se situarían, a grandes rasgos, entre el río Matanza, el río de las Conchas y la costa del río de la Plata. En la década de 1660, el gobernador Joseph Martínez de Salazar intentó dar mayor precisión a la norma y dispuso que las mismas se extendiesen en un radio de 7 leguas en torno al ejido, mientras que más allá de éstas comenzarían las tierras de estancia, en que se priorizaría la cría de ganado. Debido a que los criadores de mulas no respetaron esos límites y se introdujeron en las “tierras de pan llevar”, Valdés Inclán ordenó por medio de un bando en 1702 que se sacasen de allí los caballos y las yeguas en el término de ocho días, lo que generó no pocas protestas.

⁸⁴⁸ AGN IX-39-9-8 *Diferentes autos que tocan a la recusación hecha a Manuel de Velasco.*

En gran parte de su recorrido, los ríos Matanza y Conchas sirvieron para separar las tierras de chacra de las tierras de estancia. El regidor Juan de Castro Naharro, que era propietario de terrenos a una y otra orilla del río Matanza, se sirvió de éste para mantener a sus yeguarizos alejados de sus cultivos.⁸⁴⁹ Pero aunque el pago de la Magdalena y el extenso territorio situado entre el río Luján y el arroyo del Medio estaban reservados a la ganadería, los estancieros también tenían allí sus sembrados, tomando la precaución de rodearlos de cercos de palo a pique o de fosos con el fin de evitar que las yeguas o las vacas los destruyeran. En 1702, un grupo de criadores afirmó que “*en el pago de la Magdalena, la otra banda del río de las Conchas, Luján, Areco y Arrecifes, que todas son estancias, se recogen abundantes cosechas sembrando a su riesgo*”.⁸⁵⁰

¿Qué tan comprometida estaba la vecindad de Buenos Aires con la producción de trigo? Un observador francés afirmaba que aunque disponían de abundantes tierras fértiles, los porteños eran demasiado perezosos para cultivarlas y que sólo sembraban el grano suficiente para abastecer a la ciudad.⁸⁵¹ Se trató de una apreciación un tanto superficial, pero que compartían otros europeos que visitaron la ciudad, y que expresa su decepción frente a la enorme extensión de terrenos feraces que quedaban baldíos. El autor de esta afirmación, que había arribado en un barco negrero, *L'Esphere*, en 1708, no pudo haber pasado por alto que las tripulaciones de ese y otros navíos obtenían abundante pan y biscocho de los vecinos, que lo horneaban en sus casas. Ciertamente es que en determinadas coyunturas faltaba el grano y el precio crecía enormemente. A mediados de la década de 1690, la fanega de trigo se vendía al exorbitante precio de 10 pesos y los soldados, en su mayor parte peninsulares, estuvieron a punto de provocar una revuelta por faltarles el pan en sus mesas.

Otro momento de notable encarecimiento fueron los años de 1704 y 1705, mientras duró el asedio a la Colonia de Sacramento, cuando gran parte del grano existente fue incautado para que las tropas tuvieran su ración diaria de biscocho. El regidor Joseph de Arregui explicó que en los años “más fértiles”, es decir con mayor abundancia de granos, el precio había llegado a descender a 2 pesos, mientras que mientras duró la

⁸⁴⁹ AGN IX -48-8-7, *Escribanías Antiguas*, f. 271.

⁸⁵⁰ AGN IX -41-1-3, *Autos obrados para que se desocupen las tierras de chacras de las yeguas, bueyes y caballos que hay en ellas*.

⁸⁵¹ André DAULIER-DESLANDES “Extrait d'un journal de voyage fait en 1707, 1708 &c. aux costes de Guinée en Affrique et a Buenos Aires dans l'Amerique meridionale par le vaisseau du Roy: la Sphere avec la carte de la Riviere de la Plata” en **Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas** Buenos Aires, enero-marzo de 1929, año VII, N° 39, Pág. 295.

expedición contra los portugueses no se lo conseguía ni a 20 pesos. “*No es el presente el único año en que ha tenido el trigo y minestras el valor que en el presente –refería el regidor– sino lo fue también en otros, y particularmente cuando han concurrido navíos de registro en este puerto, y la carestía de dichos frutos se ha tenido prevista desde el tiempo de su cosecha*”.⁸⁵²

Los alcaldes de la Hermandad fueron enviados a recorrer chacras y estancias para apoderarse de las existencias de grano. Se les dieron 700 pesos para que compensaran a los labradores por el trigo que les fue requisado. Para asediar la Colonia, fueron movilizadas desde Buenos Aires las compañías de infantería y caballería del Presidio y las de las milicias, con inclusión de los cuerpos de mulatos, pardos y naturales, y allí se les sumaron tres compañías de milicianos venidas de Córdoba y un regimiento de 3000 indios tapes bajados desde las Misiones. A todos ellos hubo que aprovisionarlos de tabaco, sal, carne salada, ají, biscocho y minestras. Varios miembros de la dirigencia concejil y sus esposas aprovecharon la oportunidad de brindar suministros que les fueron pagados en plata por la Real Hacienda. Unos ofrecieron el grano para hacer harinas y otros las panificaron. Joseph de Arregui recibió 100 pesos por 40 fanegas de trigo y Antonio de Merlo 55 pesos por 22 fanegas. A Juan Bautista Fernández Parra se le pagaron 318 pesos por 106 quintales de biscocho, a Antonio Guerreros 291 pesos por 97 quintales y a su esposa Ana de Samartín 31 pesos por 11 quintales, y a Gerónimo de Gaete 324 pesos por 107 quintales. El negocio del amasado del biscocho para las tropas fue monopolizado por las familias de la oligarquía porteña, que gracias a sus vínculos con los oficiales de la Real Hacienda fueron las primeras en ser convocadas al organizarse el envío de provisiones al frente de batalla.

Pero esto sucedió en una coyuntura excepcional. En años “normales”, la producción de trigo atendía no sólo a abastecer a la población de la ciudad –donde como ya dijimos, el consumo de pan y biscocho prevalecía entre la vecindad española y fundamentalmente entre los soldados y otros peninsulares afincados en ella– sino también a la tripulación de las embarcaciones. La presencia casi ininterrumpida de navíos de registro y buques negreros en el puerto aumentó la demanda de panificados, pues sus capitanes los requerían no sólo mientras su dotación permanecía en la ciudad, sino también para recargar sus bodegas antes de hacerse nuevamente a la mar. Mientras uno de los navíos de Carlos Gallo Serna se mantuvo anclado en la boca del Riachuelo,

⁸⁵² AGN IX-42-2-7 *El Real Asiento contra Pedro de la Yedra y Joseph de Arregui*.

hubo que alojar a sus marineros y repartirles la ración de bizcocho durante 8 meses, a razón de una libra diaria por persona, lo que insumió para su capitán un gasto de 5694 pesos. Para ello recurrió a los vecinos, uno de los cuales sostendría que tuvo “*cuenta corriente con el capitán Don Carlos Gallo Serna de biscocho*”.⁸⁵³ La dotación del bajel de guerra español Nuestra Señora del Carmen consumió en el puerto 1345 quintales de biscocho y a su regreso a España se cargaron en sus bodegas otros 669 quintales. En cuanto a los buques negreros franceses, por lo general transportaban menos tripulantes, lo que explica que a uno de ellos, el *Águila Negra*, se le proveyera tan sólo de 129 quintales de bizcocho.⁸⁵⁴

Todo apunta a mostrar que los acopiadores, molenderos y fabricantes de biscocho se fueron delineando cada vez más como un grupo separado de los grandes productores de grano. En la elaboración de biscocho no sólo participaron las principales familias de la ciudad, sino que incluyó a otros sectores de la vecindad española. Luis Navarro, que llegaría a ser alcalde ordinario en 1725, era sólo un soldado retirado cuando se le entregaron 581 pesos por la hechura de 138 quintales de biscocho ordinario y biscocho blanco para aprovisionar a las tropas que sitiaban la Colonia de Sacramento. Más tarde proveyó de biscocho al buque negrero de Monsieur Benac, que le fue pagado en piezas de escarlatilla y otros textiles.⁸⁵⁵ De manera similar a lo sucedido con los corambreros, hubo vecinos que saldaron sus deudas mediante remesas de grano, pan o biscocho. Isidro Gutiérrez Garcés sacó algunas mercancías de los almacenes de Joseph de Ibarra Lazcano, comandante de un navío de registro, y los pagó “*en trigo y otras miniestras*”.⁸⁵⁶ Juan de la Camara relató cómo su segunda esposa, Juana de Castro, había adquirido en las barracas del Real Asiento francés una esclava negra “*a pagar su valor en biscocho*”, por lo que se había visto obligado a contribuir con “*el trigo, leña y demás avíos para el dicho biscocho, y conchabando un negro y una mulata para ayuda del trabajo*”.⁸⁵⁷

La actividad de atahoneros, panaderos y fabricantes de biscocho, como dijimos, tendía a aumentar cuando se agolpaban las embarcaciones en el puerto. El acrecentamiento del número de consumidores, imprevisto y contundente, a menudo coincidía con un año de malas cosechas. Ello ocasionaba fuertes oscilaciones en los precios del grano, forzando

⁸⁵³ AGN IX-48-8-7 *Escribanías Antiguas (1700-1701)*, f. 399.

⁸⁵⁴ AGN IX-45-7-6 *Pedro Guezala, expedientes 1705-1707*.

⁸⁵⁵ AGN IX-39-9-7 *Manuel de Velasco, por abuso de poder*.

⁸⁵⁶ AGN IX-48-9-6 *Escribanías Antiguas (1713-1715)*, f. 310.

⁸⁵⁷ AGN RE n° 3 1742, f. 890v.

al cabildo a ensayar distintas estrategias para moderarlos. La más corriente fue disponer que los alcaldes de la Hermandad saliesen a inspeccionar las chacras y forzaran a los productores a conducir sus reservas a la Plaza Mayor para venderlas. La posibilidad de que el pan faltase en las mesas de los habitantes de la ciudad también preocupó a los gobernadores. Estos condenaron la exportación de cargamentos de grano hacia las ciudades más próximas e intentaron que las ventas se restringieran a los límites de la jurisdicción de Buenos Aires. No obstante, el único que impidió en forma sistemática la remesa de cereales hacia otras ciudades fue Bruno Mauricio de Zavala. Sus predecesores tuvieron una actitud ambigua y toleraron la exportación en años de buenas cosechas.

Todavía a comienzos del siglo XVIII hallamos a un comerciante conduciendo un cargamento a una ciudad vecina como Córdoba, que se hallaba a un mes de viaje en carreta. Pero ello sucedía raramente, menos porque se respetaran las políticas restrictivas que por las dificultades que conllevaba transportar el grano en sacos de cuero, exponiéndolo a que se arruinase a causa de la humedad y de las lluvias. Se trató de Francisco de la Fuente, que había sido mayordomo del cabildo en 1701 y que al año siguiente se hizo cargo del cobro del diezmo de granos del pago de las Conchas y de las primicias de toda la campaña, dos gravámenes exigidos por la Iglesia a los labradores, cuya recaudación se concedía usualmente a un laico a cambio de una suma previamente convenida. De la Fuente se asoció con Martín Gutiérrez de Escobar para enviar a Córdoba el trigo que había recogido y le encargó transportarlo en 17 carretas. Se cargaron en cada una de ellas 20 o más fanegas de grano, que se mandó enfardar en cueros de toro, sumando entre todas unas 374 fanegas. Allí se las redujo a harina, pagando la molienda en especie, y se obtuvieron 1166 pesos en utilidades. Pero el viaje sería aprovechado también para vender en dicha ciudad algunos cortes de paño de Quito y de bayeta amusgada, y para conducir 200 mulas a Santa Fe, donde otro vecino las esperaba para subirlas a las tablas de Salta.⁸⁵⁸

Varios de los individuos que estudiamos fueron propietarios de suertes de chacra o de fracciones de éstas. No fue inusual que combinaran la explotación de una parte del terreno, que fue confiada a peones y esclavos, con el arrendamiento de la porción restante a familias de campesinos. Por desgracia, los inventarios de las testamentarias sólo describen el sector explotado en forma directa. Al igual que en épocas posteriores,

⁸⁵⁸ AGN IX-48-9-1 *Escribanías Antiguas (1709-1712)*, f. 672v.

los propietarios invirtieron más en la infraestructura de las chacras en la de las estancias. A las viviendas del propietario y de la gente de servicio se sumaban las construcciones que servían para almacenar el grano, de factura rústica e insuficientemente preparadas para resistir los embates de la humedad. En su interior rara vez contaban con más instalaciones que los *percheles*, estanterías donde se acomodaban los sacos de trigo.⁸⁵⁹ Otro elemento común eran los corrales, necesarios para encerrar de noche a los animales de labranza o a las majadas de ovejas, ya que era menester mantenerlos bajo control para que no depredaran los cultivos ni las arboledas.

Una explotación que podemos considerar típica fue la suerte de chacra que Bernardino Antonio de Acosta, que fue dos veces alcalde ordinario, poseía en el pago de las Conchas. Este había hecho edificar en ella un rancho para su uso, sólido pero modesto, con paredes de tapia francesa y techado de paja, el cual contaba con una sala y un aposento. Junto a él había otros dos ranchos, uno que servía de despensa y otro de cocina, además de una atahona, dos hornos de cocer pan y un gallinero. El grano se resguardaba en percheles en un granero que, a juzgar por la descripción, era de bastante capacidad, ya que la techumbre de paja se sostenía sobre 4 horcones y 36 tijeras de sauce. En el momento en que se hizo el inventario se hallaban almacenadas allí 28 fanegas de trigo y 3 fanegas de cebada. El cuadro de completaba con un triguero de unas 4 fanegas de sembradura que, según se dijo, estaba “*mediano en bondad*” (a medio crecer) y con un monte de manzanos, perales y duraznos.⁸⁶⁰

El casco de la suerte de chacra de Antonio Guerreros en Matanza tenía una distribución parecida. La casa de la finca, con techumbre de tejas y bordeada por uno de sus costados por un corredor cerrado, se hallaba en 1705 algo descuidada. Cuando pasaba una temporada en ella, este rico comerciante aspiraba a gozar de las mismas comodidades que en la ciudad, por lo que en su habitación disponía de una suntuosa cama cubierta con un pabellón de Cajamarca. También pretendió continuar allí con sus devociones privadas, pues hizo entronizar en la sala una imagen de bulto de Nuestra Señora de la Soledad y adornar las paredes con estampas religiosas. Junto a ella había una atahona y un rancho con cuatro horcones y techo de paja con un perchel, en el que en el momento de llevarse a cabo el inventario resguardaba 2 fanegas de trigo en sacos de cuero. Tres esclavos negros componían el servicio permanente de la chacra y se

⁸⁵⁹ Juan Carlos GARAVAGLIA *Pastores y labradores de Buenos Aires* Pág. 194.

⁸⁶⁰ AGN XI-48-9-3, *Escribanías Antiguas (1704-1705)*, f. 372.

alojaban en otros dos ranchos. Estos atendían un sembrado de trigo y un monte de durazneros, nogales, perales y guindos.⁸⁶¹

Conocemos la ubicación de las chacras de veinte de los individuos estudiados. Casi la mitad de ellas se hallaban en el pago de Matanza y el resto repartidas entre los pagos de Montegrande y Conchas. Se sabe que por lo menos cinco de ellas disponían de atahonas en funcionamiento. Debido a que la campaña no contaba por entonces con la suficiente población como para que se justificara la elaboración de harinas para consumir *in situ*, se nos ocurre que la construcción de esas norias formaba parte de una estrategia para maximizar los rendimientos de la mano de obra esclava que residía en dichas fincas, aprovechable sobre todo cuando se atravesaban momentos de bajo requerimiento estacional. Pudo haber sido, además, parte de una maniobra para eludir las medidas de control ensayadas por el cabildo contra el acaparamiento de grano y la especulación, que se concentraban en las compraventas de trigo y no en las de harinas.

Había más atahonas en la ciudad, pero las mismas no se hallaban en manos de propietarios de chacras sino de grandes comerciantes, que encontraron en la fabricación de harinas una manera de diversificar sus emprendimientos. El sector de los molenderos y de los fabricantes de panificados no era del todo coincidente con el que producía la materia prima. Una excepción notable fue la de Domingo Acasuso, dueño de una chacra en Montegrande, quien poseía una atahona frente a la plazoleta de San Juan, pero la vendió en 1713 a Domingo Álvarez. Esta noria, con su terreno y aparejos, pasó en 1721 a manos de Juan de Samartín, quien fue uno de los más grandes productores de mulas de la campaña bonaerense pero, que sepamos, no lo fue de trigo. En el momento del último traspaso la misma constaba de dos juegos de piedras y herrajes, un rancho con techo de paja y una tropilla de caballos y yeguas atahoneros.⁸⁶² Otra atahona fue la adquirida en 1688 por Miguel de Revilla, quien la traspasaría por medio de la dote de su hija a su yerno Antonio de Igarzábal. Este último la poseyó hasta 1721: el aparejo, que contaba con una barreta y dos picos, se situaba en una casa de adobe crudo con techo de tejas y contaba con 10 caballos con sus madrinas a su servicio y con un corral de palos para encerrarlos.⁸⁶³ Otros dos miembros de la dirigencia concejil que fueron propietarios de atahonas en la planta urbana fueron Lucas Manuel Belorado y Francisco Fernández Guillén.

⁸⁶¹ AGN IX-42-8-1 *Diversos procedimientos de represalia contra los portugueses*.

⁸⁶² AGN IX-49-1-1 *Escribanías Antiguas (1719-1720)*, f. 607.

⁸⁶³ AGN IX-49-1-1 *Escribanías Antiguas (1719-1720)*, f. 654. AGN RE N° 2 de 1716-1719, f. 270 v.

Otro indicador del rol que desempeñó la oligarquía mercantil en el acopio de trigo y la manufacturación de harinas fue su frecuente intervención en la recaudación del diezmo de granos y de las primicias. El diezmo, como se sabe, era uno de los gravámenes que la Iglesia impuso a los productores locales, convirtiéndose en uno de los ingresos estables de la jerarquía episcopal. En Buenos Aires, los labradores estaban obligados a entregar la décima parte de sus cosechas, mientras que los ganaderos apartaban para ello la décima parte de los animales nacidos cada año. La Iglesia porteña no se arriesgó a recaudarlo por su cuenta y prefirió arrendar su recaudación a los laicos, sacando la misma a remate anualmente. Solían presentarse varios postulantes a la almoneda pública y el que ofrecía la suma más alta adquiría el derecho a percibir esa exacción y de apropiarse del grano o de los ganados.⁸⁶⁴ La campaña estaba dividida en varios *partidos decimales*, cuya recaudación era la mayor parte de las veces arrendada por separado. En cuanto a las primicias, estaban consagradas a sufragar los gastos del párroco de una localidad rural y sólo eran cobradas a los labradores. Consistían en un cesto de grano que simbolizaba la ofrenda de las primeras mieses a la divinidad. También en este caso se arrendaba la cobranza de este gravamen a un particular a cambio de una suma fijada en remate público.

Los miembros de la dirigencia concejil participaron con frecuencia en la recaudación de ambas exacciones, tal como puede apreciarse en el Cuadro N° 10. Lo usual era que emprendieran la cobranza de un partido decimal por vez, aunque hubo ocasiones quienes se hicieron cargo de dos partidos el mismo año. En dos oportunidades un solo individuo se hizo cargo del diezmo de granos de todos los partidos de la campaña, lo que se convertiría en regla durante el período virreinal pero entonces era excepcional. Nótese la presencia del *partido decimal* de la ciudad, que abarcaba los establecimientos hortícolas del ejido y el cinturón de quintas que bordeaba Buenos Aires. En la columna central del cuadro se indica el número de años en que cada individuo afrontó la cobranza de estos gravámenes: el promedio fue de dos años por recaudador.

⁸⁶⁴ Sobre la percepción de diezmos en el Buenos Aires colonial, consúltense: Samuel AMARAL y José María GHIO “Diezmos y producción agraria. Buenos Aires, 1750–1800” en **Journal of Iberian and Latin American Economic History** Cambridge University Press, 1990, Segunda Serie, Vol. 8, N°3, p. 619-647; César GARCIA BELSUNCE “Diezmos y producción agrícola en Buenos Aires virreinal...” Págs. 317-355; Juan Carlos GARAVAGLIA “Producción cerealera y producción ganadera...” Págs. 207-240; Eduardo AZCUY AMEGHINO **La Otra Historia...** Págs. 253-292.

Cuadro N° 10 - Participación de los miembros de la dirigencia concejil en la recaudación del diezmo de granos y de las primicias (1700-1726)

Nombre del recaudador	años	Partido decimal u otro rubro de recaudación
AGUILA Luis del	1	Matanza (1698)
ANDRADA Antonio	4	Ciudad (1696, 1697, 1699, 1700)
BARRAGAN Pablo	1	Magdalena (1699)
CAMARA Juan de la	1	Ciudad (1710)
CASCO DE MENDOZA Francisco	5	Luján (1707, 1713, 1716, 1718, 1721)
DELGADO Sebastián	3	Magdalena (1705), Primicias (1710), Conchas (1711)
DIAZ Antonio	1	Montegrande (1717)
ESPARZA Joseph	2	Conchas (1708), Matanza (1726)
FUENTE Francisco de la	3	Luján (1695), Conchas (1702), Primicias (1702)
GUERREROS Antonio	4	Conchas (1693, 1694, 1697, 1704)
GUEZALA Y LUNA Pedro	1	Luján (1702)
HERRERA Y GUZMAN Alonso	3	Montegrande (1698), Diezmo y Primicias de todos los partidos (1700), Conchas (1703), Primicias (1703)
IGARZABAL Antonio	1	Matanza (1710)
ILLESCAS NIETO Juan	1	Magdalena (1717)
LOPEZ CAMELO Diego	1	Luján (1704)
MATOS Juan Bautista	1	Matanza (1690)
MELLENDEZ DE FIGUEROA Antonio	7	Montegrande (1694, 1695, 1697, 1702, 1705, 1707, 1712), Diezmo y Primicias de todos los partidos (1696), Conchas (1705), Luján (1705), Primicias (1705), Ciudad (1712)
MERLO Antonio	3	Matanza (1698, 1699), Magdalena (1726)
MONSALVE Tomás	1	Luján (1709)
MORENO Juan Joseph	1	Magdalena (1694)
NAVARRO Luis	3	Conchas (1709, 1716), Luján (1726)
PALMA LOBATON Juan de la	2	Conchas (1718), Montegrande (1726)
POZO Y GARRO Alonso	1	Magdalena (1693)
REVILLA Miguel	2	Matanza (1694, 1697)
RIVERA MONDRAGON Hernando	1	Conchas (1699)
RODRIGUEZ Diego	1	Montegrande (1692)
RUBIN DE CELIS Joseph	1	Ciudad (1704)
SAAVEDRA Bernardo	1	Magdalena (1716)
SAAVEDRA Pedro	5	Montegrande (1693, 1721), Matanza (1714), Ciudad (1717, 1718)
SAENZ Diego	1	Luján (1721)
SEGURA Martín	1	Ciudad (1691)
VERA Y ARAGON Pedro	2	Montegrande (1704), Matanza (1705)
VERDUN Mateo	2	Montegrande (1690), Luján (1693)
ZAMUDIO Juan	1	Conchas (1721)

Fuente de los datos: AGN IX-13-2-1 *Diezmos Clase II*.

Más allá de los altos beneficios que arrojaba la cobranza de diezmos y primicias, el acopiamiento de una porción importante del grano cosechado daba a los recaudadores un amplio margen para especular, pudiendo estos optar por almacenarlo o por sacarlo a la venta de acuerdo a su conveniencia. Un aspecto digno de ser resaltado es la participación que tuvieron en ella los *privados* de los gobernadores Valdés Inclán y Velasco, Antonio Guerreros y Antonio Meléndez de Figueroa, quien como se ha dicho manejaban el reparto de provisiones a los militares de la guarnición a cambio de vales. El arrendamiento del diezmo fue una de las herramientas de que se valieron para controlar el proceso de aprovisionamiento en todas sus fases, desde la molienda hasta la distribución de pan y galleta entre la soldadesca. Pero el caso de Meléndez resulta revelador en un sentido distinto: el primer emprendimiento conocido de quien fuera el comerciante más poderoso de Buenos Aires fue la recaudación del diezmo de granos y las primicias. No tenemos evidencias de que este haya incurrido en el tráfico con otras regiones hasta 1703, mientras que ya venía arrendando la cobranza del diezmo desde los primeros años de la década anterior, antes de que se le concediera el retiro de su cargo de capitán de una compañía del Presidio. En 1704, al iniciarse el sitio de Colonia del Sacramento, su fortuna era lo suficientemente consistente como para ofrecer en préstamo a la Real Hacienda las sumas que se necesitaban para costear los suministros para las tropas. Todo parece indicar que las bases de su fortuna estuvieron en el acopio de grano y que sus actividades se diversificaron gracias al patrocinio de esos dos gobernadores.

Entre los recaudadores del diezmo y las primicias se destacaban, en primer lugar, aquellos que también participaban del proceso de molienda y panificación. Entre ellos hallamos a Miguel de Revilla y Antonio de Igarzábal, que fueron propietarios de una atahona en la ciudad, a Juan de la Palma y Juan de Illescas Nieto, que poseían atahonas en el cercano pago de Montegrande, y a Luis Navarro, que actuó repetidas veces como proveedor de biscocho de las tripulaciones de los navíos. La recaudación del grano les permitió asegurarse de que no les faltaran insumos cuando creciese la demanda de pan o biscocho. Los productores de mulas y los corambreros se constituyeron en un segundo grupo dentro de los arrendatarios del diezmo y las primicias. Entre ellos se contaban Luis del Águila, Tomás Monsalve, Francisco Casco de Mendoza, Diego Rodríguez, Pablo Barragán y Diego López Camelo, todos ellos reconocidos ganaderos que en más de una ocasión fueron convocados por el cabildo para ser consultados sobre los problemas que aquejaban a la campaña. No cabe duda de que su acabado conocimiento

del territorio y de sus pobladores se constituía en una ventaja a la hora de alternar sus actividades de rutina con la recaudación de estas exacciones. Estaban por último quienes no estaban vinculados en forma permanente con el tráfico de trigo o de harinas, para los que la percepción del diezmo no significó sino un emprendimiento eventual. Puede señalarse como ejemplo a Juan de Zamudio, que era propietario de un horno de materiales en la ciudad, pero que ocasionalmente incursionó en la compra de mulas y el acopio de granos.

La propiedad de la tierra

Una importante porción de la dirigencia concejil estuvo ligada a la producción y al acopio de mulas, al faenamiento de reses para hacer corambre y, en menor medida, al cultivo de trigo y la elaboración de harinas y panificados. Destacar esto nos permite matizar el perfil de este sector de la oligarquía y subrayar su estrecha ligazón con el conjunto de actividades primarias que fueron la base de la modesta economía local. Pero si una parte de esa dirigencia participó en la producción de mulas, cueros y cereales, otra se enfocó en acopiar esos bienes y en ejercer a partir de ello la intermediación con los mercados. La propiedad de la tierra sirvió eventualmente de plataforma para ese acopio. Cuando aparecen en los inventarios de las chacras y estancias desjarretadoras y otros implementos para vaquear, o atahonas en condiciones de moler grano, es posible constatar cómo los predios rurales servían como base de operaciones a un conjunto de actividades más extenso que el que tradicionalmente se les había asignado, reducido al pastoreo y a la siembra. Debido a la rusticidad de los medios de almacenamiento, dichos predios no resultaban del todo adecuados para acaparar el grano, pero podían ser utilizados por los acopiadores de mulas como puestos de invernada en los que reunían las tropas antes de fletarlas a las provincias andinas, o por los corambreros para estaquear las pieles de toro obtenidas en una vaquería y secarlas al sol antes de venderlas a los asentistas.

Una parte muy significativa de los miembros de la dirigencia concejil era propietaria de tierras en la campaña. En tal sentido, podemos considerarlos representativos de la oligarquía urbana, que hasta los inicios del período borbónico no despreció la adquisición de fincas rurales, principalmente de chacras en el cinturón cerealero que bordeaba la ciudad. Habiendo transcurrido poco más de un siglo desde la fundación de Buenos Aires, eran pocas las familias que se hallaban aún en posesión de las *mercedes*

de tierras que sus ancestros habían recibido de manos de los primeros gobernadores. Pero a lo largo del siglo XVII, al extenderse el área dominada por los españoles hacia el noroeste y hacia el sur, se produjo un proceso de apropiación de nuevas tierras, que también fueron dadas en merced. Tarde o temprano, todas se vieron afectadas por las particiones hereditarias y por distintas formas de *traspaso intervivos* (denominación que alude a toda transferencia de la propiedad del suelo producida en vida del propietario, tales como ventas, donaciones y dotes). Dichos traspasos, que implicaron en muchos casos su desglose en parcelas de menor tamaño, tendrían un efecto dispersor sobre la propiedad inmueble, pues permitirían acceder a ella a los sectores de la vecindad que habían sido excluidos del reparto de *suertes* emprendido por Juan de Garay y de las mercedes de tierras otorgadas por sus sucesores. Pero en otras oportunidades facilitaron la concentración de la tierra en manos de un propietario, pues permitieron la unificación de varias parcelas colindantes en manos de un único adquirente.

Distintos autores han afrontado el problema de la rotación de la propiedad durante el período colonial. Quienes lo han hecho han concentrado parte de sus esfuerzos en demostrar la existencia de un mercado de tierras. Eduardo Saguier debe ser considerado un pionero en enfocar esta temática. Basándose en 1684 operaciones notariales, reconstruyó la historia dominial de 965 predios rurales bonaerenses entre 1701 y 1810 y estableció un promedio de las transacciones que los afectaron. Este osciló de acuerdo con la localidad, hallando su expresión más baja en el pago de Areco. Según se desprende de sus conclusiones, los traspasos tendieron a afectar en mayor medida a los predios que se hallaban en el cinturón cerealero que a los que se hallaban fuera de él, aunque provocaron un fuerte parcelamiento en algunas de las zonas ganaderas de más antigua ocupación, como el pago de Luján. Este autor halló, no obstante, un número considerable de predios que permanecieron en manos de las mismas familias durante varias generaciones. Estas parentelas intentaron no desprenderse de ciertos bienes inmuebles y recurrieron a diversas estrategias para evitar subdividirlos, entre ellas la de apelar al derecho de abolengo, que cuando un terreno era puesto en venta daba prioridad para adquirirlo a los familiares del propietario.

Respaldándose en una sólida apoyatura documental, Saguier propuso la existencia de un mercado inmobiliario rural con una movilidad intensa. El fraccionamiento de la propiedad rural que siguió a las particiones hereditarias y al loteo del terreno —a su juicio, uno de los más acentuados de la Hispanoamérica colonial— habría fortalecido el poder económico de algunas de las familias terratenientes tradicionales pero vulnerado

el de otras, contribuyendo a una fuerte inestabilidad de la estructura social existente, pues al perder la vecindad española la exclusividad sobre la propiedad de la tierra permitió el acceso a ella de un pequeño campesinado étnicamente no homogéneo, que incluía a la población de casta.⁸⁶⁵ La dificultad que presenta su análisis es que no determina qué porción de la tierra apropiada se encontró en movimiento en ese hipotético mercado y cuál se mantuvo por fuera de él. Pero a diferencia de otros autores que menospreciaron la propiedad de la tierra como fuente de promoción social, Saguier postuló que los procesos de rotación facilitaron a distintos sectores de la población la posibilidad de ascender o de consolidarse socialmente.

Más recientemente, otros tres autores han intervenido en el debate sobre el proceso de rotación de la propiedad de la tierra en la campaña. Estos han recurrido al análisis microrregional para reconstruir la evolución de la propiedad fundiaria y evaluar las implicancias de dicho proceso. Sin duda esa perspectiva ha sido destacada como la más atinada, ya que esa evolución recorrió en cada localidad bonaerense un itinerario diferente.⁸⁶⁶ Esas particularidades se diluirían en un cuadro general, que por otra parte aún no está en condiciones de confeccionarse, pues son contados los trabajos que han abordado la historia dominial de un pago o partido. Uno de ellos fue el de Mariana Canedo, que reconstruyó el proceso de apropiamiento y fraccionamiento de la tierra en el pago de los Arroyos. Otro fue aquel en que nosotros mismos analizamos los cambios que se produjeron en estructura de la propiedad en los pagos de Areco, Cañada de la Cruz y Pesquería entre 1690 y 1789.⁸⁶⁷ Un tercer trabajo, escrito por Guillermo Banzato, encaró el problema en los partidos de Chascomús, Ranchos y San Miguel del Monte, incorporados tardíamente al área de dominación española. Aunque abocado a un período más largo y más interesado en explorar la incidencia del mercado inmobiliario a lo largo del siglo XIX, este último ha aportado valiosas reflexiones sobre la apropiación de la tierra y los inicios del proceso de fraccionamiento de la propiedad inmueble en los partidos situados sobre la frontera del Salado.

⁸⁶⁵ Eduardo SAGUIER **Mercado inmobiliario y estructura social. El Río de la Plata en el siglo XVIII** Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1993, Págs. 29 y ss.

⁸⁶⁶ Juan Carlos GARAVAGLIA “La propiedad de la tierra en la región pampeana bonaerense: algunos aspectos de su evolución histórica (1730-1863)” en Raúl FRADKIN y Juan Carlos GARAVAGLIA **En busca de un tiempo perdido. La economía de Buenos Aires en el País de la Abundancia, 1750-1865** Prometeo, Buenos Aires, 2004, Pág. 103.

⁸⁶⁷ Mariana CANEDO **Propietarios, ocupantes y pobladores. San Nicolás de los Arroyos, 1600-1860** Universidad Nacional de Mar del Plata-Grupo de Investigación en historia rural rioplatense, Mar del Plata, 2000; Carlos María BIROCCO “La propiedad de la tierra en la campaña bonaerense...”

Mariana Canedo abordó estas temáticas en un partido de antiguo poblamiento, San Nicolás de los Arroyos. La singularidad del mismo residía en su cercanía con la jurisdicción de Santa Fe y en ser atravesado por el camino real que se dirigía a Córdoba, lo que incidió fuertemente en su temprano poblamiento, en el que prevalecieron los migrantes llegados de esas regiones y de Buenos Aires. La apropiación del terreno comenzó allí en 1602, con una merced de tierras, modalidad de privatización del terreno que a pesar de su arcaísmo siguió siendo utilizada en esta zona hasta 1725. Los predios otorgados en merced, de enorme extensión, permanecieron indivisos hasta la primera mitad del siglo XVIII. No fue hasta después de 1740 que quienes se habían asentado en esos terrenos en calidad de arrendatarios o de simples ocupantes lograron adquirir fracciones en propiedad. Esta autora considera que la prolongada presencia de estos últimos en la zona actuó como una forma de “presión” sobre la tierra, induciendo a los propietarios originarios a lotearla. De allí en más el ritmo de las ventas se mostraría desigual, activándose hasta 1760 para luego desacelerarse y volverse a activar a partir de 1780. Al enfocarse en la superficie de tierra transferida, encontró que la venta de parcelas se concentró significativamente entre 1740 y 1760.

A lo largo del siglo XVIII, aunque entre los adquirentes figuraban algunos personajes venidos de Buenos Aires, se destacaron las ventas entre parientes y allegados. Canedo descubrió tras ellas la instrumentación de estrategias familiares, pues las mismas respondieron a la necesidad de reagrupar las parcelas fragmentadas por la herencia o al interés de los padres en beneficiar a uno de los herederos. El mérito de su análisis consiste en presentar las particiones hereditarias y el loteo no como formas opuestas de traspaso sino como complementarias, pues otorgaban a las familias residentes la posibilidad de reconfigurar sus propiedades rurales luego de la muerte de alguno de sus miembros. En cuanto a la posible formación de un mercado de tierras, la autora admite con cautela que sólo se encuentra en condiciones de brindar “elementos” que podrían justificar el uso de esta categoría de análisis, aceptando que el mismo ha sido objeto de fuertes críticas por su utilización indiscriminada. Un dato significativo que aporta es que hasta 1850, quienes adquirían terrenos por compra no se desprendían de ellos hasta el fin de sus días, mientras que sí podían hacerlo quienes los heredaban, aunque a menudo los vendiesen a miembros de su propia familia o de otras familias residentes. Pese a que comprueba ese comportamiento, Canedo titubea en caracterizar estos intercambios

como socialmente limitados y prefiera hablar de una “tendencia a la formación de un mercado durante el siglo XVIII” a reconocer en forma directa su existencia.⁸⁶⁸

Guillermo Banzato, a diferencia de la anterior, eligió para su análisis un territorio de incorporación más tardía, dispuesto alrededor de los fortines de Chascomús, Ranchos y San Miguel del Monte. A pesar de su lateralidad, el mismo llegó a ser alcanzado por las mercedes de tierras hechas en el siglo XVII, pero éstas acarrearían una ocupación más nominal que efectiva del suelo y sólo afectarían a una ínfima porción del mismo. La apropiación del terreno se activaría a partir de 1770, con la aplicación del sistema de *moderada composición*, que consistía en denunciar un predio como baldío para luego mensurarlo, tasarlo y obtener títulos sobre él. Luego de privatizadas, estas tierras afrontarían el mismo proceso de fraccionamiento y loteo que en otros lugares, dando lugar en este caso a que intervinieran en el intercambio oferentes y demandantes locales y, en menor medida, los inversionistas porteños. No obstante ello, durante la etapa colonial no se observó sino un exíguo movimiento general de transacciones.

Aunque se sitúa decididamente a favor de la aparición temprana de un mercado de tierras y contradice a otros autores que la niegan, Banzato reconoce que los grupos terratenientes locales incidieron en forma negativa sobre la conformación del mismo, trabando la circulación de la propiedad inmueble mediante la utilización de diversas estrategias para conservar intacto su patrimonio rural. Una de ellas era la compraventa entre parientes, que permitía a uno de los miembros de la parentela recomponer el fundo originario luego de la división que seguía a las particiones hereditarias. De manera similar funcionaba la entrega de un fundo en concepto de adelanto de herencia a uno de los hijos. Una tercera estrategia habría sido la de manipular el reparto de los bienes en herencia, luego de producida la tasación del conjunto del patrimonio, asignando el fundo a uno de los herederos mientras se reservaban otros bienes de valor equivalente para los demás. Este autor encuentra evidencias de estas trabas hasta épocas bastante tardías. En uno de los partidos que analiza, San Miguel del Monte, dicho mercado aún sufriría de la obstrucción de los grandes propietarios hasta avanzada la década de 1850.⁸⁶⁹

En tercer lugar debemos ocuparnos de nuestro propio trabajo sobre la estructura de la propiedad en los pagos de Areco, Cañada de la Cruz y Pesquería. En él preferimos no

⁸⁶⁸ Mariana CANEDO **Propietarios, ocupantes y pobladores...** Págs. 83-159.

⁸⁶⁹ Guillermo BANZATO **La expansión de la frontera bonaerense. Posesión y propiedad de la tierra en Chascomús, Ranchos y Monte, 1780-1880** Universidad Nacional de Quilmes, Sarandí, 2005, Págs. 118 y ss.

adentrarnos en la discusión sobre la existencia de un mercado de tierras, ateniéndonos a indagar los procesos de rotación de la propiedad inmueble en una zona acotada de la campaña bonaerense. Nos concentramos en establecer las dimensiones promedio de los predios a lo largo del período escogido y la incidencia de los traspasos *inter vivos* en su fraccionamiento. Para ello reunimos datos sobre 183 transmisiones de parcelas *inter vivos* para el período que se extendió entre 1690 y 1789, de las cuales el 85,9% correspondía a ventas y el resto a cartas de dote, donaciones y fallos judiciales a favor de un litigante. A diferencia de los autores anteriormente reseñados, pudimos establecer un indicador de esa movilidad: de cada 100 varas frontales de tierra detentadas en propiedad, 84,4 sufrieron durante ese siglo el traspaso *inter vivos*, mientras que las 15,6 varas restantes se conservaron durante toda esa centuria en poder de los descendientes de su adquirente originario, sin conocerse otra mediación que la de los mecanismos de la herencia.

Estas transacciones condujeron a modificaciones en las dimensiones de las parcelas en poco más de la mitad de los casos, mientras que el 46,6% de la superficie del terreno no se vio afectada. En las que sí lo fueron, los traspasos sirvieron en menor medida para acrecentar la frontada de la parcela del adquirente (12,7%) que para fraccionar la parcela del transmisor (33,6%). Quedó en evidencia que tanto la herencia como los loteos tuvieron una incidencia mayor sobre los predios medianos y pequeños, que se hallaban generalmente en manos de familias residentes, que sobre los fundos de grandes extensiones, pertenecientes a propietarios absentistas. Las estrategias para corregir esa atomización (ventas o donaciones entre parientes) no fueron tan comunes como se pensaría, aunque se las complementó con otras, como el retraso en la subdivisión hereditaria. Los lazos de parentesco fortalecieron esa tendencia al fraccionamiento, ya que aunque los miembros masculinos de las familias propietarias tendieron a establecer uniones homogámicas, casándose dentro del sector, los miembros femeninos se unieron con frecuencia con individuos que no eran propietarios, los cuales encontraron en el matrimonio una manera de acceder a una porción del terreno como parte de la herencia de sus esposas.⁸⁷⁰

Al presentar una cronología del proceso de apropiación de la tierra, nuestro trabajo y el de Canedo muestran una reveladora coincidencia: ambos señalan un incremento de las transacciones durante el período que se extendió entre 1740 y 1760. Ese fue el

⁸⁷⁰ Carlos María BIROCCO “La propiedad de la tierra en la campaña bonaerense...”

momento preciso en que se produjo en la campaña bonaerense el surgimiento de las vecindades rurales, escindidas a partir de entonces de la vecindad porteña. Evidentemente, ello tuvo mucho que ver con la conversión de los antiguos ocupantes en propietarios, pues los afirmó en el territorio y los ayudó a reconocerse a sí mismos como vecinos del pago. Semejante sentimiento de pertenencia se consolidó luego de que adoptaron nuevas pautas de residencia –observándose una fuerte tendencia a *localresidencia*, esto es, al afincamiento permanente en sus tierras– y de que adquirieron nuevas pautas de religiosidad, al asumirse como feligreses de las parroquias comarcales. Esto se contrapuso con el período anterior, en que los propietarios se proclamaban vecinos de Buenos Aires y residían la mayor parte del año en sus casas de la ciudad.

Al afrontar la problemática de la evolución de la propiedad de la tierra en la campaña bonaerense, los cuatro autores reseñados apuntaron, en síntesis, a establecer en qué sentido se produjo la rotación de la propiedad y cuáles fueron los limitantes, tanto jurídicos como sociales, que ofrecieron trabas a esa circulación. Tres de ellos indagaron los alcances de este proceso desde un período temprano, que coincide en forma parcial o completa con el que estamos analizando aquí, por lo que nos servirán de referentes cuando intentemos determinar qué participación tuvo la dirigencia concejil en la transmisión de la propiedad rural. Los miembros de la oligarquía porteña que participaron de los traspasos *inter vivos* entre 1690 y 1726 observarían, por cierto, comportamientos diferentes a los evidenciados por las comunidades rurales descritas en dichos trabajos, fundamentalmente a causa de su patrón de residencia urbana y de su carácter de propietarios absentistas. Mientras que un siglo más tarde, durante el período virreinal, el absentismo se constituiría en excepcional, en el período que estudiamos sería la norma. Ello conllevó un vínculo distinto con la tierra, conduciendo a otras formas de encarar su explotación.

Para reconstruir los procesos de rotación de la propiedad rural entre 1690 y 1726 hemos acudido a las escrituras de venta, donación y permuta que se encuentran asentadas en los registros notariales. En esos años fueron escriturados 344 traspasos de predios, 13 de los cuales se sustanciaron mediante la figura de la donación y 331 a través de la compraventa. En todos los casos contamos con datos sobre la ubicación de esos predios y sólo en 27 no se transcribieron sus medidas, casi siempre expresadas en varas de frontada. A partir de ello decidimos estandarizar las dimensiones de las fincas recurriendo a los mismos criterios que utilizamos al enfocar el problema en los pagos de Areco, Cañada de la Cruz y Pesquería. Se hablará de *pequeñas propiedades* en relación

con los predios de hasta 999 varas de frontada y de *propiedades medianas* cuando su frente oscilaba entre las 1000 y las 2999 varas: para establecer un corte entre ambas, nos fundamos en la valoración de los mismos estancieros coloniales, que le ponían un piso de 1000 varas de frontada a una explotación ganadera de la que podía esperarse una rentabilidad aceptable y juzgaban que de las menores dimensiones eran más apropiadas para el cultivo. Por último, se consideraron *grandes propiedades* a aquellas cuya frontada igualaba o superaba en extensión a la de una *suerte de estancia*, fijada en 3000 varas.⁸⁷¹ En función a estos criterios, se constató la transferencia de 164 predios de hasta 999 varas de frontada, 69 de entre 1000 y 2999 varas y 84 de 3000 o más varas. Como se aprecia claramente, hubo en los traspasos una marcada preponderancia de los predios pequeños por sobre los fundos medianos y grandes.

De una primera lectura de estas cifras podría deducirse que los traspasos *inter vivos* operaron a favor de la progresiva reducción de la superficie de las parcelas. Pero independientemente de las dimensiones de los predios transferidos, lo que se ha hallado es que una significativa porción de los mismos pasó a engrosar el patrimonio inmobiliario de los grandes propietarios rurales. Gracias a que los nombres de los dueños de las propiedades linderas eran usualmente expresados en las escrituras, pudo apreciarse que el comprador figuró como lindero de los terrenos que adquiría en el 17,7% de los casos. Ello indica una tendencia a ampliar la superficie de los predios a través de la compra de los terrenos lindantes. Pero no se trata de la única evidencia concreta de que las compraventas incidieron en la concentración de la propiedad rural. Al listar los nombres de los adquirentes, se encontró que el 45,6% de estos emprendió a lo largo del período analizado la adquisición de dos o más predios. Lo llamativo fue que, aunque por discreto margen, prevalecieron entre ellos quienes adquirieron fincas en distintos pagos de la campaña, imponiéndose la modalidad de la propiedad dispersa. Pudo así establecerse que de las 495.285 varas de frontada que fueron traspasadas entre 1690 y 1726, 261.648 (el 53%) pasaron a manos del sector que recurrió a las transacciones para incrementar su patrimonio inmobiliario, contribuyendo con ellas a ampliar la superficie de una finca o bien a convertir al comprador en multipropietario.

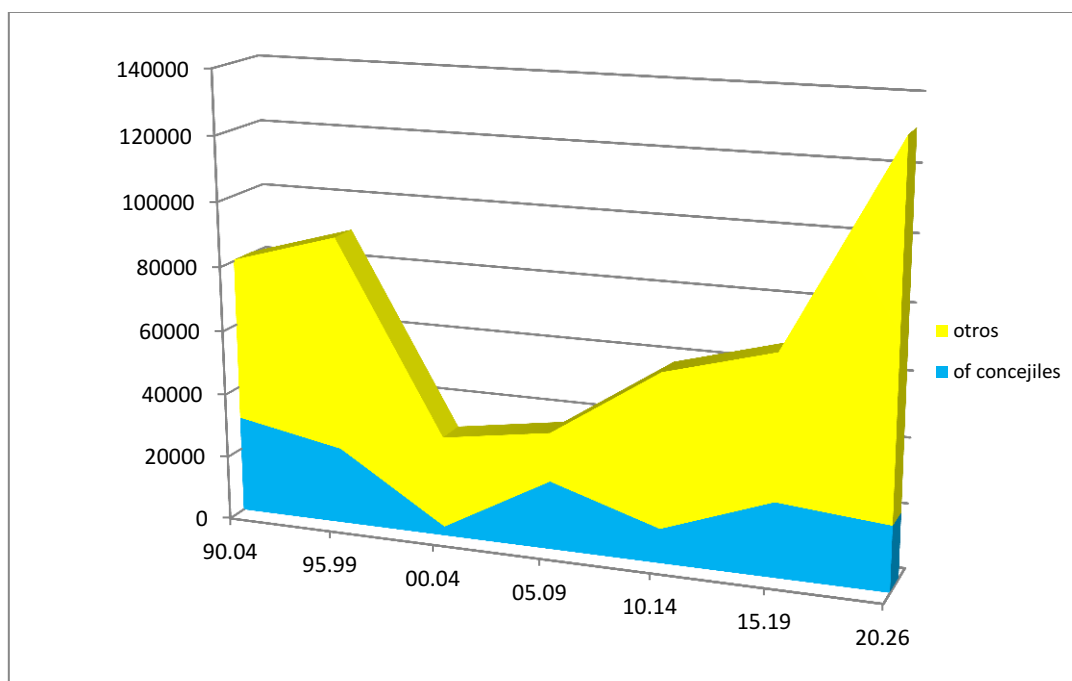
La tendencia al fraccionamiento, desde luego, es imposible de negar, pero se debe ser cuidadoso antes de considerarla la principal consecuencia de los traspasos *intervivos*. Se encontró que en el 18,6% de las escrituras, el vendedor figuraba como lindero de los

⁸⁷¹ Carlos María BIROCCO “La propiedad de la tierra en la campaña bonaerense...”, Págs. 137-138.

terrenos traspasados, indicando que estaba fraccionando un predio para vender una fracción del mismo. El 81,4% restante no ofreció en venta una fracción de sus tierras, sino el predio entero. Ello indica que la fragmentación se produjo anteriormente, ocasionada por las particiones hereditarias. El poder erosivo de la herencia se constata claramente en las dimensiones de las propiedades vendidas o donadas. Si nos remitimos a los pagos ganaderos, éstas tuvieron una dimensión promedio de 2458 varas de frontada en la zona de Areco (conformada por los pagos de Areco, Cañada de la Cruz y Pesquería), de 1923 varas en la zona de Luján (conformada por Luján y la Cañada de Escobar) y de 1216 varas en Matanza. En los pagos que se hallaban más alejados de la ciudad, la *suerte* de estancia continuó siendo la unidad de traspaso preponderante, probablemente porque la propiedad había sido repartida más tardíamente y resultó menos afectada por las particiones entre herederos. La extensión promedio de las parcelas fue de 3064 varas en Arrecifes y de 3057 varas en Magdalena.

Ahora bien, ¿cuál fue el papel que cupo a la dirigencia concejil en estos procesos antagónicos, pero a la vez complementarios, de fragmentación y concentración de la propiedad inmueble en la campaña bonaerense? Aquellos que desempeñaron oficios concejiles entre 1690 y 1726, pese a conformar un grupo minoritario en el seno de la vecindad española, incidieron significativamente en dichos procesos, fundamentalmente en el rol de compradores: fueron los adquirentes de 137.813 varas de frontada, esto es, del 27,8% de las que entraron en circulación durante ese período, y participaron como tales en 96 transacciones, que representaron el 27,9% del total de las que fueron escrituradas. Importa destacar que en 65 de esos traspasos adquirieron fincas que no lindaban con las que ya poseían, mientras que en las otras 31 tuvieron la intención de ampliar la superficie de un predio propio añadiéndole fracciones linderas. Los miembros de este grupo aparecen, según ha podido apreciarse, como más ligados a la tendencia de poseer fincas rurales geográficamente dispersas que a la concentración del terreno en un sitio concreto. En cuanto a la especialización productiva, en 37 de los casos adquirieron tierras de chacra y en otros 59, tierras de estancia. Sin embargo, como se apreciará en el Gráfico 20, su participación en las transacciones tendió a amesetarse, mientras que la cantidad de traspasos aumentó progresivamente, ofreciendo un indicio de que la propiedad de la tierra circuló en dirección a otros sectores.

Gráfico 20 – Intervención de los oficiales concejiles y de otros pobladores en los traspasos *inter vivos* (1690-1726) expresada en varas de frontada adquiridas



Fuente de los datos: AGN Serie Escribanías Antiguas y Registros de Escribano N° 2 y N° 3, varios legajos.

Dos tercios de las transacciones en que participó la dirigencia concejil se produjeron durante los gobiernos de Agustín de Robles, Valdés Inclán y Velasco. Se trató de la etapa en que el cabildo de Buenos Aires estuvo en gran medida integrado por criadores y acopiadores de ganado mular, que podemos suponer interesados en incrementar sus puestos de cría y sus parcelas de pastoreo a través de la compra de tierras de estancia. No obstante, durante los dos últimos gobiernos mencionados ese interés tendió a declinar, posiblemente por influjo de la caída en el precio de las mulas que se observó desde principios del siglo XVIII en los mercados andinos. Paralelamente, su apetencia por las tierras de chacra fue en aumento. Entre 1710 y 1726, las mismas fueron objeto de 38% de las operaciones de compraventa. Este vuelco hacia las tierras de laboreo se produjo en una etapa en que la cría del mular no era ya un negocio tan beneficioso, ni tampoco lo era la domesticación del ganado vacuno, que aún estaba siendo lentamente reintroducido en las estancias. Pero también se debió a que el perfil de la dirigencia concejil había cambiado y ésta incluía ahora a un sector que estaba más atento en la rentabilidad del mercado local que en la de los mercados andinos y que se mostraba

interesado en especular con el acopio de granos o en su conversión en harina y en biscocho.

El lento camino hacia un cambio en los patrones de residencia

Todavía a fines del siglo XVII, el territorio que se hallaba bajo el dominio efectivo de los españoles —un estrecho corredor que se extendía, de sudeste a noroeste, desde el pago de la Magdalena hasta Pergamino— distaba de haber sido completamente apropiado. El mismo formaba parte de la región geográfica conocida como *Pampa Ondulada*, cuyo relieve se caracteriza por sus extensas lomadas con suaves pendientes. Los ríos y arroyos tributarios del Paraná y del Plata corren por las “cañadas” o zonas bajas que alternan con esas ligeras ondulaciones. De ellos tomaron su nombre los pagos de la campaña, porque la distribución de la propiedad rural se estructuró en torno a sus márgenes. A partir del reparto originario realizado por Juan de Garay en 1582, se fueron entregando en merced las *suertes principales* o *tierras de frontada*, esto es, las que tenían por frente dichos cursos de agua. Cuando ya no quedaron terrenos disponibles con frente a ríos y arroyos, comenzaron a darse en merced las *tierras de cabezadas* y las *tierras de sobras* que se hallaban por detrás de dichas suertes.

Esa apetencia por los terrenos fiscales que no contaban con un acceso directo al agua ya se venía apreciando desde las primeras décadas del siglo XVII. Por lo general los solicitaban los dueños de las chacras o estancias que se hallaban por delante de ellos con la finalidad de extender sus fondos, pero esto no sucedió en todos los casos, sino que también fueron otorgadas en merced a otros propietarios. Hasta las primeras décadas del siglo XVIII, las tierras de cabezadas y de sobras conformaron auténticas reservas que permitieron a los gobernadores seguir privatizando la tierra sin necesidad de extenderse en dirección al río Salado. Todavía en 1715, en un pago tan cercano a la ciudad como lo era La Matanza, existían tierras de cabezadas que aún no habían sido apropiadas y que Antonio de Gastañeta solicitó para sí.⁸⁷²

Esas tierras alejadas de los cursos de agua no quedaron al margen de los procesos de rotación de la propiedad. Entre los 344 traspasos *inter vivos* que fueron escriturados entre 1690 y 1726, se destacó la venta de 21 predios identificados como “cabezadas de tierras de chacra” o “cabezadas de estancia”. Considerando que sumaban 54.590 varas

⁸⁷² AGN RE n° 2 de 1716-1719, f. 199v.

de frente, se constituyeron un no despreciable 11% de las tierras transadas a lo largo de ese período. Es necesario aclarar que el hecho de que se tratara de predios menos favorecidos que los que tenían frente a los ríos no significó que fueran ocupados por vecinos pobres o gente de casta. Contra lo afirmado por Saguier, fueron escasos los individuos de casta que participaron en las transacciones en el transcurso del período estudiado. Hemos hallado sólo a nueve de ellos, quienes movieron un insignificante 2% de las tierras que circularon, de los cuales cinco lo hicieron para comprar un predio y el resto para vender el que poseían.

El mapa de la propiedad en la campaña bonaerense se configuró, en síntesis, a partir de una serie de procesos confluyentes. La apropiación más temprana de la tierra se produjo en torno a los ríos y arroyos más próximos a la ciudad –Matanza, Conchas, Luján, Cañada de la Cruz– y en la ribera de los ríos Paraná y Plata –Magdalena, Pesquería–. Poco tiempo más tarde, cuando finalizaba el siglo XVI, el trajinar de las primeras carretas hacia el norte dio lugar al “descubrimiento” del que sería el camino real a Córdoba, que habría de facilitar la incorporación de los pagos que éste atravesaba –Areco, Arrecifes, las Hermanas, los Arroyos– al área dominada por los españoles y la apropiación de nuevas tierras, también en torno a ríos y arroyos. A lo largo del siglo siguiente, el reparto de mercedes apuntaría a avanzar sobre los bolsones de tierras realengas que aún quedaban entre las zonas en que la propiedad ya había sido repartida entre los vecinos de la ciudad. En las zonas ocupadas desde más antiguo, entretanto, la apropiación de la tierra cubrió los claros que habían dejado los repartos anteriores, y en algunos casos contribuyó a ampliarla, ascendiendo hacia las nacientes de los cursos de agua, donde aún quedaban terrenos disponibles. Pero fuera del otorgamiento de dos mercedes de tierras en la región de las lagunas encadenadas (hoy partido de Chascomús) la expansión hacia el Salado se demoraría hasta mediados del siglo XVIII.

En este proceso de consolidación de la propiedad a través de la acción concomitante del reparto de terrenos fiscales y de la circulación de los ya apropiados por medio de la compraventa, nuestra dirigencia concejil no se diferenció del resto de la oligarquía urbana, que apuntó a aprovecharse de ambos para incrementar la superficie de sus predios o adquirir otros en parajes diferentes a los que ya poseía. Esa concentración de la tierra en manos de un único individuo podía continuarse en la siguiente generación, gracias a la aplicación de estrategias de compensación en las particiones sucesorias, o bien quebrarse a su muerte a resultas de la división entre los herederos. Pero no creemos que el aumento que se produjo en la circulación de la propiedad a partir de 1720 deba

ser vista como el efecto exclusivo de las particiones hereditarias. Mientras que la campaña bonaerense no contó con una población estable, fue posible sostener la posesión de predios de gran extensión o la acumulación de fincas dispersas en distintos parajes. Pero a medida que avanzaba el siglo XVIII, se produjo la reintroducción del ganado vacuno en las estancias y ambas modalidades de concentración del terreno tendieron a ser gradualmente abandonadas. Mientras predominó la producción de mulas, que requería de inversión y preparación, el acceso a la tierra se mantuvo más restringido. La reaparición de la crianza del vacuno, basada en criterios de explotación extensivos, favoreció la aparición de pequeños pastores, que en un principio ocuparon el terreno sin títulos pero luego presionaron con éxito al sector propietario para conseguirlos.

Falta, por último, establecer cuál fue el vínculo que los miembros de la dirigencia concejil sostuvieron con la tierra. Hemos sostenido que predominaron los propietarios absentistas, cuya domicilio permanente y el de sus familias se hallaba en la ciudad, y que estos delegaban el manejo de sus haciendas en mayordomos, capataces, peones y esclavos, sobre los que ejercían una periódica supervisión. No caben dudas de que esto todavía era así en la última década del siglo XVII y la primera del XVIII: en los juicios de residencia de Agustín de Robles, Manuel de Prado y Maldonado y Alonso de Valdés Inclán, se interrogó a los poquísimos residentes de la campaña sobre el desempeño de los alcaldes de la Hermandad y ninguno de quienes declararon formaba parte de dicha dirigencia, ni tampoco eran miembros de las familias de grandes propietarios. Pero en la década de 1720, comienzan a observarse variaciones en los patrones de residencia, pues se constata que algunos de los miembros del grupo analizado ya se habían afincado en sus fincas rurales.

Las evidencias de esta transformación provienen del padrón levantado por orden del gobernador Zavala en 1726.⁸⁷³ Este gobernador ordenó al cabildo inscribir a “*toda la vecindad de esta ciudad y su jurisdicción sin exceptuar a nadie*”, haciendo distinción de los foráneos y los no propietarios. El objeto de la medida era aleccionar a los habitantes de Buenos Aires a que pasasen a avecindarse en la recién fundada Montevideo, noticiándoles de los beneficios que los esperaban al mudarse a la otra banda del río. No se ha conservado el padrón completo, siendo la pérdida más sensible la de los registros correspondientes a la ciudad. Lo que aún subsiste de él tampoco abarca todos los pagos

⁸⁷³ Este padrón ha sido publicado en **Documentos para la Historia Argentina**, Buenos Aires, Peuser, 1955, Tomo X: “Padrones de la Ciudad y Campaña de Buenos Aires (1726-1810)”, Págs. 137-188.

de la campaña, sino que se reduce a los Arroyos, Montegrande, Luján, Cañada de Escobar, Cañada de la Cruz, La Matanza y Magdalena, faltando los de las Conchas, Areco y Arrecifes. Las observaciones de los empadronadores son de valor muy desigual y no en todos los casos apuntaron si los censados eran propietarios del terreno o meros ocupantes. Tampoco brindaron detalle sobre el número de esclavos, con excepción del de Magdalena, y por lo general sólo se señaló su presencia, pues no formaban parte de la población que eventualmente podía llegar a ser movilizada a Montevideo.

El padrón de 1726 hace alusión a 21 miembros de la dirigencia concejil, de los cuales por lo menos 10 pueden ser considerados absentistas. Ellos sobresalen por haber explotado sus establecimientos con mano de obra esclava. En Montegrande, las chacras de Joseph Ruiz de Arellano, Sebastián Delgado, Joseph Esparza y Juan de Melo estaban atendidas por sus negros y mulatos. En Matanza, en las fincas de Francisco Illescas Nieto, Joseph Narriondo, Pedro Zamudio y Amador Fernández de Agüero sólo se encontró a “gente de servicio”: seguramente también se trataba de esclavos, ya que de lo contrario se hubiera brindado detalle de sus nombres. Pero aunque no se descarta que hubiesen combinado la utilización del trabajo forzado con la contratación de jornaleros, los empadronadores no siempre fueron prolijos al momento de individualizar el tipo de vínculo entre los ocupantes del predio y su propietario. En la estancia de Joseph Narriondo en Luján se halló poblado a un santafecino que había llegado dos años atrás a la jurisdicción, acompañado de su mujer y sus hijos pequeños, mientras que en la chacra de Francisco Díaz Cubas en Montegrande vivían un mozo paraguayo y otro sin mención de origen: en ninguno de los casos sabemos si se trataba de peones o de agregados. En la tierras que Bernardino Rocha poseía en Matanza, por último, se encontró a tres indios y un mulato cordobeses que, según afirmaron los propietarios vecinos, se resistían a conchabarse, por lo que el empadronador dedujo que “*lo más factible es que viven haciendo daño a la misma vecindad*”.⁸⁷⁴ Más allá de las denuncias, ha de recordarse que Rocha se hallaba desde hacía dos años vaqueando en la Banda Oriental, por lo que lo más probable es que los ocupantes hayan aprovechado su prolongada ausencia para plantar allí sus ranchos y sembrar el terreno.

Una decena de miembros de la dirigencia concejil fueron hallados en sus chacras y estancias cuando en 1726 se empadronó a la población de la campaña. Pero el hecho de que se encontraran en sus tierras no significa que tuvieran allí su domicilio permanente.

⁸⁷⁴ Documentos para la Historia Argentina, tomo X, Pág. 172.

Ante todo, es necesario contextualizar este padrón, enmarcándolo en el calendario de las labores estacionales. El mismo fue levantado entre el 16 de septiembre y el 4 de octubre, un período del año con bajo requerimiento de mano de obra, ya que no se desarrollaba ninguna faena específica que estuviera vinculada a la agricultura del trigo o a la cría de mulas. De cualquier manera, la presencia del propietario podía responder a otros imperativos, en especial si consideramos el estrecho control que debía ejercerse sobre los esclavos, que parecen haber sido la fuerza de trabajo preponderante, para que no desatendiesen sus tareas o estuviesen tentados a huir.

Posiblemente, el mejor indicador de que el propietario residía la mayor parte del año en su finca rural era que tuviera allí a su familia consigo. En Luján, Marcos Rodríguez Flores fue empadronado en compañía de su esposa y de su hijo; Bernardo Peñalba, que era viudo, con sus cuatro hijos varones y su hija, y Andrés de Espinosa, con su esposa y sus dos hijas. En la Cañada de la Cruz, Francisco Casco de Mendoza fue empadronado junto con su segunda esposa y sus tres hijos más pequeños, y a continuación lo fue su yerno Pedro Santellán y la esposa de éste, Ana Jacoba Casco. En Matanza, Antonio Villoldo fue hallado en compañía de su mujer y sus cinco hijos, aunque el empadronador se sintió obligado a aclarar que era “*vecino de esta ciudad*”. Al remarcar su pertenencia a la vecindad porteña —que estaba más asociada a la respetabilidad de que gozaba Villoldo que a su domicilio— probablemente quiso indicar que alternaba su residencia entre la ciudad y el campo.

Quizás el caso más llamativo fue el de Pablo González de la Cuadra, personaje que tuvo una actuación relevante en los tiempos de mayor turbulencia política. Había formado parte de la facción que había enfrentado a Velasco y que luego se había aliado con Mutiloa para recuperar el control sobre el cabildo. En 1714, siendo alcalde ordinario de primer voto, asumió el *gobierno político* de la Provincia del Río de la Plata debido a la controvertida vacancia que se produjo tras la muerte de Alonso de Arce y Soria, y debió enfrentarse con el sargento mayor Joseph Bermúdez, que se consideraba destinado a ese cargo. Dos años más tarde se convirtió en regidor, empleo en que se mantuvo hasta que renunció a él en 1722. Desde entonces ya no participó del gobierno municipal y quedó al margen de las disputas facciosas que conmocionaron al cabildo en 1724. Se retiró a su estancia de La Matanza, donde el empadronador lo hallaría junto con su mujer y sus siete hijos. Sabemos por otras fuentes que todos sus vástagos se hallaban en la infancia, pues tenían entre 3 y 13 años de edad. Su decisión de trasladarse

al campo con ellos en una etapa de sus vidas que era considerada crítica es, según creemos, una prueba de que decidió radicarse allí en forma permanente.

En otros casos nos hallamos con que el propietario de la finca fue encontrado en ella acompañado por alguno de los hijos, mientras que el resto de la familia había quedado en la ciudad. En la Magdalena, Antonio Barragán fue empadronado en su estancia junto a dos de sus hijos varones, Juan de 22 años e Ignacio de 20, mientras que su mujer y el resto de su prole se hallaba en Buenos Aires. Lo mismo sucedió con Ambrosio Gil Negrete, que fue censado en el mismo pago en compañía de su hijo Carlos, de 15 años. Tanto Barragán como Gil Negrete hacían servir sus haciendas por conchabados y esclavos, como quedó asentado en el padrón, por lo que no se puede presumir que sus hijos se hayan constituido en mano de obra familiar. Pero sí se puede conjeturar que los llevaban consigo para prepararlos en el manejo de la estancia, que necesitaría quien se hiciera cargo cuando no pudiesen trasladarse a ella debido a los achaques de la vejez. Esto parece que ya sucedía en el caso del regidor Tomás Monsalve, dueño de una estancia de más de dos leguas de frontada en la Cañada de la Cruz, en la que el empadronador halló en 1726 a su hijo Antonio.

La cooperación entre padres e hijos en la administración de un establecimiento rural ha quedado atestiguada en los testamentos de varios miembros de la dirigencia concejil. Aunque agradecieron la ayuda que habían recibido de sus vástagos, se vieron obligados a premiarla cediéndoles una porción de los multiplicos de las haciendas, con lo que se les permitió tener sus propias crías de mulas o sus propios rodeos de ganado vacuno y, a la larga, ganar autonomía. Pedro López Camelo había tenido cinco hijos de su segundo matrimonio y en el momento en que testó, ellos ya habían adquirido sus propios animales. “*Mis hijos varones –reconoció– me han asistido y ayudado a mantenerme y cuidar la hacienda, y sin perjuicio de ella y con expreso consentimiento mío han adquirido con su industria y trabajo personal algunas manadas de yeguas y caballos, y están herrados con el yerro de mi hacienda, menos Pedro, que tiene herradas sus yeguas y caballos por tener yerro propio*”.⁸⁷⁵

Cristóbal de Melo había delegado la administración de su estancia en uno de sus hijos varones, en la que éste había hecho algunas mejoras pero también introducido yeguas y su propio puesto de cría de mulas. Aquel se vio obligado a reconocerlo para que éstas no entrasen en el reparto sucesorio y para que la estancia fuera entregada a su vástago

⁸⁷⁵ AGN Sucesiones 6720 Testamentaria de Pedro López Camelo.

luego de su muerte. “*Es mi voluntad – expresó– que a dicho Cristóbal mi hijo se le cargue a cuenta de lo que hubiese de haber de legítima todo lo que hubiere poblado, plantado, labrado y edificado en dicha estancia del Pago de Luján y alguna herramienta con que yo le fomenté al tiempo que la pobló, por cuanto me ha mantenido en todo lo que se ha ofrecido de más de treinta años a esta parte*”.⁸⁷⁶

Al preparar a alguno de sus hijos para gestionar el manejo de las haciendas de campo, estos propietarios de estancias fomentaban una tendencia a la especialización, que conduciría, a la larga, al arraigo de una parte de sus descendientes en las zonas rurales. Las nuevas generaciones se habrían de afincar en la campaña, forzados en muchos de los casos por los repartos hereditarios, que asignaron a unos la casa familiar en la ciudad y dejaron a otros el patrimonio rural. Este proceso de avecindamiento en la campaña acompañaría a otro, el del afianzamiento de la ganadería vacuna, que entraría en su fase expansiva en las décadas siguientes. Ambos, aun insuficientemente conocidos, han de ser vistos como parte de la rica complejidad de la historia rural bonaerense, que no fue, por cierto, un *continuum* ascendente que se prolongó desde los tiempos de la conquista hasta la consolidación de una clase terrateniente a mediados del siglo XIX.⁸⁷⁷ Tuvo, por el contrario, significativos altibajos, el más pronunciado de los cuales se produjo tras la extinción del ganado cimarrón en la década de 1720, acompañado de la exigua presencia de ganado vacuno doméstico en las estancias, lo que hizo necesario repoblarlas con animales traídos desde la Banda Oriental.

⁸⁷⁶ AGN IX-48-9-7, *Escribanías Antiguas (1715-1718)*, f. 111v.

⁸⁷⁷ Hemos estudiado estos procesos en un partido de la campaña en Carlos María BIROCCO **Cañada de la Cruz**... Págs. 70-82.

REFLEXIONES FINALES

El desierto de un lado y del otro las aguas. Este verso de Mujica Láinez, que citamos al principio de nuestra tesis, pareciera ser la más prolija síntesis del lugar que ocupaba la ciudad de Buenos Aires en el imaginario de los mismos porteños a comienzos del siglo XVIII... Las *aguas* simbolizaban un Río de la Plata todavía indisputado, en el que la presencia de los portugueses en Colonia del Sacramento no parecía constituirse en una amenaza territorial para la monarquía hispánica, dispuesta en un principio a soportar la molestia de ese diminuto enclave en el estuario a cambio de mantener a raya a Portugal en otros ámbitos. El puerto de Buenos Aires era por entonces el indiscutido señor del área litoraleña, pues el flujo de metales preciosos que le llegaba desde el Alto Perú le permitía encaramarse –por lo menos en términos económicos– por sobre las demás ciudades que se erguían en torno al Paraná-Plata. No olvidemos que todavía estamos en los momentos previos a la conformación del *complejo portuario rioplatense*, que nacería con la fundación de Montevideo.

Y del otro lado, el *desierto*. Prescindimos aquí de las connotaciones que más tarde habría de tener esta palabra: en este caso adquiere un significado distinto. La campaña, que se extendía desde los bordes de la ciudad hasta la frontera con la jurisdicción santafecina al norte y los límites imprecisos del pago de la Magdalena al sur, era aún una entidad difusa, que para la cultura política de aquel entonces carecía de personalidad propia. Estaba casi despoblada, ya que las modalidades productivas imperantes –por un lado, las puramente extractivas, como las vaquerías; por otro, las que requerían de inversión y mano de obra relativamente calificada, como lo era la cría de mulas– habían dado escasos incentivos al despegue demográfico. El concepto de *vecindad*, por su parte, aún era netamente urbano, más allá de que muchos de quienes la componían eran propietarios de vastos predios rurales. Pero al finalizar el período que estudiamos nos hallamos en los umbrales del cambio. No pasarían más de un par de décadas para que esos enormes espacios semivacíos estuvieran poblados de una multitud de familias de labradores y pequeños pastores y se irguieran en ellos

parroquias y poblados, cuyas comunidades reclamarían para sí la condición de *vecindades*. En tal sentido, el territorio bonaerense prestaría su marco a un proceso que Darío Barriera ha sabido describir para todo el ámbito rioplatense: el de la construcción de una nueva trama de relaciones entre las autoridades políticas y la población que incluirá por primera vez a la campaña. El lugar central ocupado por la ciudad se verá sometido a un lento proceso de deterioro, cuyas consecuencias ya serían visibles hacia finales de aquel siglo.⁸⁷⁸

Aquella campaña no había nacido todavía a la individualidad, es cierto. Por tal razón, un término como el de *vecino hacendado* todavía no había cobrado significación alguna en los inicios del siglo XVIII: se era sólo *vecino*, y eso en razón a un patrón de residencia citadino. Pero ello no significó que la propiedad de tierras y de ganados no haya sido un elemento constitutivo de primer orden para esa oligarquía que por sus comportamientos sociales y políticos era eminentemente urbana. Más bien lo contrario. Cuando reconstruimos el perfil ocupacional de la dirigencia concejil entre 1690 y 1726, nos encontramos con que el sector mercantil estaba bien representado en ella, pero los contornos de ese sector se ajustaban a una tipología muy precisa: la del peninsular que había llegado a este puerto como soldado o como cargador de mercancías y había adquirido la condición de vecino gracias al matrimonio. En contraste con ello, casi todos los cabildantes, independientemente de que se tratara de peninsulares o de criollos, eran propietarios de fincas rurales y en algún momento de sus vidas estuvieron relacionados en forma directa con las actividades agropecuarias. A raíz de eso, el ayuntamiento jamás estuvo desvinculado de los intereses agropecuarios de la vecindad, un renglón que habitualmente encabezaba la agenda de los temas tratados en las sesiones. En tal sentido, nos parecen acertadas las prevenciones de Fernando Jumar y Javier Kraselsky frente a quienes calificaron al cabildo de Buenos Aires como un mero órgano de expresión de los intereses mercantiles, cuando existen sobradas evidencias de

⁸⁷⁸ Este autor coloca los inicios de este proceso en el momento mismo en que se cierra el período que trabajamos en esta tesis: “Entre 1720 y 1780 tiene lugar un proceso crucial. Allí comienza el lento pero inexorable desmoronamiento de la ciudad como unidad preponderante de la composición de lugar jurisdiccionalista en la cultura política en el Río de la Plata. No es en el mundo de las ideas o de las concepciones doctrinarias sino en el orden de las relaciones reales entre las personas (en clave de pobladores) y sus autoridades políticas donde comienza a advertirse el lento pero seguro deterioro de la ciudad como centro neurálgico desde el cual irradiaba la jurisdicción”; Darío BARRIERA “Instantánea de una pausa. Estudiando a los agentes que producen fronteras en el *largo* siglo XVIII rioplatense” en Darío BARRIERA y Raúl FRADKIN **Gobierno, justicias y milicias...** Pág. 11.

que hasta 1730 se dio prioridad al tratamiento de los asuntos vinculados con la explotación pecuaria.⁸⁷⁹

Este dilema interpretativo quizás se origine en una generalización apresurada. No puede negarse el lugar preponderante que ocuparon los comerciantes importadores-exportadores en el ayuntamiento después de la creación del Virreinato del Río de la Plata, lo cual pudo haber movido a que se creyera que mantuvieron esa posición a lo largo de toda la dominación hispánica. No podemos, por cierto, endilgarle ese error a Susan Socolow, quien se remitió al período tardocolonial –entre 1770 y 1810– al aseverar que “la facción comerciante comprendía una mayoría tan abrumadora de cabildantes que el cabildo se convirtió en efecto en un consejo de comerciantes”.⁸⁸⁰ Tal error debe adjudicarse a quienes la citaron: en un reconocido trabajo sobre la evolución de las élites en Argentina, por ejemplo, no se distingue ningún período específico cuando afirma que durante la colonia “el cabildo fue un coto de la élite local, lo cual, para Buenos Aires, implica hablar de los grandes comerciantes”.⁸⁸¹ Nos parece oportuno recordar que entre el último cuarto del siglo XVII y la primera década del XVIII, el ayuntamiento porteño estuvo dominado por los criadores-acopiadores de ganado mular, que eventualmente internaban sus recuas hasta las ferias de Salta, pero cuyo principal sostén era la producción de este híbrido. En la segunda y tercera décadas del siglo XVIII, el lugar de aquellos fue ocupado por un grupo de tenderos que tenían una proyección más local y por productores de materiales para la construcción, y en una proporción menos significativa, por traficantes de esclavos, casi todos los cuales complementaban esas ocupaciones con actividades agropecuarias. Hablamos en suma, de una dirigencia concejil que pasó a estar integrada por un grupo concentrado en el vínculo con las regiones andinas centrales a otro que estuvo más apoyado en un

⁸⁷⁹ Refieren estos autores: “En los estudios sobre el Río de la Plata durante el siglo XVIII se tiende a adjudicar al Cabildo de Buenos Aires la calidad de órgano de expresión de los intereses mercantiles. Se ha propuesto que al menos hasta mediados de dicho siglo (y desde el siglo XVII) tal vez resulte más acertado pensar al cabildo local como una institución estrechamente ligada a los intereses vinculados a la explotación bovina. Los vecinos accioneros, primero, y los hacendados después, encontraban en el cabildo un ámbito propicio para canalizar sus inquietudes, ya que lo que necesitaban a nivel local caía en la entera jurisdicción del cabildo y lo que superaba dicha esfera local, también pudo ser negociado a través del cabildo, al menos hasta los años 1730. [...] En los años 1730 se dieron una serie de cambios que tuvieron por resultado que el cabildo perdiese la capacidad de negociar en favor de los intereses agropecuarios cuando se tratase de decisiones reales”; Fernando JUMAR y Javier KRASELSKY “Las esferas del poder. Hacendados y comerciantes de Buenos Aires ante los cambios de la segunda mitad del siglo XVIII” en **Anuario del Instituto de Historia Argentina**, FaHCE, Universidad Nacional de La Plata, 2007, N° 7, Págs. 31-58.

⁸⁸⁰ Susan SOLOW **Los mercaderes del Buenos Aires virreinal...** Pág. 141.

⁸⁸¹ Leandro LOSADA **Historia de las élites en la Argentina. Desde la conquista hasta el surgimiento del peronismo** Buenos Aires, Sudamericana, 2009, Pág. 39.

mercado local en expansión. Ciertamente es que nunca habrían de faltar grandes comerciantes ligados al comercio con la península ocupando algún empleo concejil, pero generalmente lo hicieron durante lapsos breves y a la espera de ocupar magistraturas más redituables por afuera del cabildo.

Lo que sí puede afirmarse es que los grandes comerciantes de origen peninsular, a pesar de no ser sino un sector minoritario en la corporación municipal, tuvieron una fuerte incidencia en la desarticulación de los criterios de *notabilidad* que habían sido esgrimidos hasta entonces por la oligarquía urbana, cuyos orígenes estaban enraizados en la conquista. Si bien es cierto que a lo largo de todo el período estudiado esos criterios se mantuvieron teóricamente en vigencia –por ejemplo, cuando se invocaban los ancestros fundadores de los padres o de la esposa para ser beneficiados con una merced de tierras o una encomienda de indios o para que se les diese prelación a ocupar una magistratura– poco a poco fueron siendo desplazados por otros, basados en los servicios a la corona, en los antecedentes militares o incluso en la antigüedad como vecino. Estos últimos, que sirvieron de cuña a los peninsulares enriquecidos para acceder a cargos y prebendas, dieron el golpe de gracia a las pautas de inclusión recreadas por la primitiva oligarquía de *beneméritos* a finales del siglo XVI. Estas transformaciones no sólo eran visibles cuando se disputaba la primacía en el ámbito de la política. También se vislumbraron, como hemos visto, en el caso de los vecinos accioneros que pidieron ser incluidos en el *reparto de cueros* en 1723, quienes comprendieron que autoproclamarse como “pobres” podía ser una estrategia mucho más efectiva que la de invocar un pasado ligado a la conquista.

Estos cambios le dejarían el camino llano para que, a medida que iba avanzando el siglo, el cabildo de Buenos Aires fuera dominado por un pequeño número de grandes comerciantes nacidos en la península. El trabajo de Laura Cristina del Valle sobre la élite capitular del Buenos Aires virreinal da prueba de ello. Esta coincide con Socolow en que esa élite se componía fundamentalmente de mercaderes, entre los que predominaban los que se dedicaban al comercio mayorista y a la distribución de mercaderías europeas en el interior del virreinato, y que incluía en grado menor a quienes sólo poseían tiendas en la ciudad. Ciertamente es que dicha autora, que también concentra su análisis en la dirigencia concejil, recurrió a criterios distintos a los nuestros para determinar la membrecía a este grupo, en el que sólo incluyó a alcaldes ordinarios y regidores (que a finales de siglo se convirtieron en electivos o “cadañeros”), con lo que dejó de lado a los oficiales venales (que tenían voz y voto como los anteriores) y a

los oficiales electivos que no tenían escaño en la sala capitular. Hecha esta salvedad merece destacarse que, de acuerdo con sus cálculos, el 85% de las alcaldías ordinarias y las regidurías fue desempeñado entre 1776 y 1810 por individuos dedicados a esos ramos del comercio.⁸⁸² Para contraponer nuestros resultados con los suyos, puede afirmarse que entre 1690 y 1726, menos de la mitad de nuestros 174 cabildantes tuvieron participación en el tráfico de efectos europeos, esclavos, ganados y yerba con las provincias del interior del Virreinato del Perú, y los que participaban del comercio con la península apenas rondaban el 10% del total.

Otra concepción proveniente de la época virreinal es la de un cabildo dominado por un puñado de familias de la oligarquía urbana. Del Valle llegó a comprobar que entre 1776 y 1810, las alcaldías ordinarias y las regidurías rotaron efectivamente entre una docena de familias. Posiblemente en ese caso sí sea apropiado hablar de “linajes de cabildantes”, pero no antes. Como creemos haber probado en los capítulos anteriores, el predominio de un “frente de parentesco” en el ayuntamiento porteño siempre fue la excepción más que la regla. Entre la fundación de la ciudad y la tercera década del siglo XVIII, sólo podemos afirmar que ello ocurrió dos veces con toda contundencia: cuando Juan de Vergara se adueñó por medio de la compra de casi todas las regidurías del cabildo, entre 1619 y 1635, y colocó en ellas a sus allegados, y cuando el “clan” de los Samartín alcanzó a hegemonizar la corporación, entre el gobierno de Valdés Inclán y la intervención del pesquisidor Mutiloa. Eran comunes, en cambio, la rotación de los empleos entre un conjunto más o menos amplio de familias de la oligarquía urbana y la esporádica inclusión de individuos de origen foráneo que se emparentaban con éstas últimas por medio del matrimonio y que luego accedían a los oficios concejiles. No deja de ser sintomático que entre 1690 y 1726, más de la mitad de los miembros de la dirigencia concejil porteña carecieran de antecedentes familiares propios en el desempeño de esos oficios.

El período de treinta y siete años que hemos analizado en esta tesis se caracterizó por la intensidad de la conflictividad política. Esta, sin embargo, se limitó a los estratos más altos de la vecindad y no se extendió al resto de la población. El único momento en que advertimos fuertes signos de alteración en los estratos más bajos se suscitó durante el gobierno de Agustín de Robles, en que se produjeron dos conatos de rebelión entre los soldados de la guarnición a causa del crónico retraso en el pago. Pero no quedan

⁸⁸² Laura Cristina del VALLE *Los hijos del poder...* Pág. 78.

evidencias de que se manifestaran nuevos descontentos en el Presidio en los años siguientes. Quizás haya habido también alguna agitación entre la “gente de casta” pero los testimonios son muy escasos. En 1704, el cabildo mandó que se obedeciera un auto del gobernador por el que se condenaba a doscientos azotes y se desterraba de la ciudad al mulato Gerónimo Núñez por “papelista”. No sabemos, sin embargo, de qué trataban los panfletos o libelos que distribuyó ni contra quién era la protesta.⁸⁸³ De cualquier manera, parece haberse tratado de un episodio aislado. No aparecen referencias a una vinculación problemática con la población mestiza, afromestiza e india, ya que de lo contrario el ayuntamiento habría ultimado medidas de disciplinamiento social, cosa que no ocurrió, salvo cuando la forzó a conchabarse a causa de la falta de brazos para levantar la cosecha de trigo.

La conflictividad política a la que aludimos fue propia de la oligarquía urbana y no se limitó a los miembros del cabildo sino que se extendió a la jerarquía eclesiástica local y a la oficialidad de la guarnición. Cuando el gobernador Velasco enfrentó a la facción de los Samartín no sólo introdujo a miembros de su camarilla en el ayuntamiento y expulsó a sus rivales por no haber recibido de la corona la confirmación de sus regidurías. También se aseguró de ganarse un aliado en la cúpula del Presidio —el ingeniero artillero Joseph Bermúdez, que estaba a cargo del fuerte— y en la de la Iglesia —el canónigo Rodríguez de Armas, que desde la muerte del obispo Antonio de Azcona Imberto estaba a cargo de la diócesis de Buenos Aires—. Pero también hubo miembros de las cúpulas militar y eclesiástica que se alinearon con los Samartín: entre ellos, el *cabo y gobernador de la caballería* Manuel de Barranco y Zapiáin, principal autoridad de la guarnición, quien fue quien denunció a Velasco ante el Consejo de Indias, y el prior de los franciscanos, Juan de Arregui, que convirtió a su convento en epicentro de la oposición.

Uno de los móviles del juicio de pesquisa iniciado por Juan Joseph de Mutiloa en 1712 fue depositar el gobierno municipal en manos de la facción de los Samartín, a la vez que se expurgaba o se castigaba con la prisión a los acólitos de Velasco, tanto en el cabildo como en el Presidio. En cuanto a la Iglesia porteña, la diócesis pasó a las manos de Gabriel de Arregui, hermano de quien fuera el líder de aquella facción, Joseph de Arregui, quien desde entonces fue obispo provisorio de la diócesis. Pero el orden recreado por Mutiloa no duró por mucho tiempo, ya que los antiguos partidarios de

⁸⁸³ AECBA Serie II, Tomo I, pág. 275.

Velasco se agruparon en torno al nuevo gobernador, Alonso de Arce y Soria, cuya muerte prematura no le permitió combatir la preponderancia de dicha facción en el cabildo. A su deceso se produjo un último choque entre bandos, cuando los dos líderes de esa facción, el alcalde ordinario Pablo González de la Cuadra y el *cabo y gobernador de la caballería* Manuel de Barranco y Zapiáin, enfrentaron al sucesor designado por Arce, el sargento mayor Joseph Bermúdez. La lucha entre ambos no culminó con el acantonamiento en el fuerte y la posterior rendición de este último en 1714, sino que continuó en los despachos de la Real Audiencia de Chuquisaca y del virrey en Lima, cuyas resoluciones llevaron a que tanto Bermúdez como Barranco fueran reconocidos por breves períodos como gobernadores.

Esta fase de anarquía condujo a la corona a intervenir, restringiendo las facultades del cabildo de Buenos Aires para entender en las vacancias que se produjeran en el mando de esta Provincia. Sin embargo, lo compensó devolviéndole los recursos corporacionales que le arrebataron los gobernadores y ampliando sus facultades al permitirle que pudiera nombrar nuevos regidores. Esto llevó a que el número de estos oficiales concejiles aumentara exponencialmente, dando cabida a que los antiguos partidarios de Velasco reingresaran al ayuntamiento y junto con ellos a los miembros de otras familias antes no representadas en él, algunas de origen criollo-portugués y otras de nuevo cuño. Este reclutamiento dejó a lo que quedaba de la facción de los Samartín en un lugar minoritario. Tal sería el cabildo con que conviviría el primer gobernador militar enviado por los Borbones, Bruno Mauricio de Zavala, en los primeros años de su mandato.

Este gobernador inauguraría un nuevo tipo de vínculo con la corporación municipal. Sus predecesores habían trabado fuertes lazos con alguna de las facciones de la vecindad, ya que comprendieron que de esa forma se apropiaban de una red de vínculos que les ayudaría a convertir en redituable su cargo. Al convertirlos en miembros de su camarilla, recibía de ellos conocimientos y recursos, y como contraparte les brindaba una participación en los beneficios de la corrupción administrativa. Aunque al privilegiar a unos y excluir a otros se exacerbaban las divisiones facciosas que ya existían en el seno de la vecindad porteña, contribuyendo a la conflictividad intraoligárquica, no caben dudas de que el cabildo porteño (como órgano de representación de los bandos en pugna) quedaba colocado en un lugar central en los espacios de negociación política.

La red de vínculos en que se sostendría Zavala, por el contrario, marginaba a la vecindad y particularmente al cabildo. Este y otros gobernadores militares que lo sucedieron no necesitaron de las alianzas locales, ya que a diferencia de sus predecesores no debían resarcirse de los gastos que les ocasionara acceder al cargo, sino que los movía su comprobada lealtad a la dinastía reinante. La afirmación de Zavala en el mando supondría el triunfo de una red de vínculos paisanales (en su caso, compuesta de otros cántabros como él) por sobre las que se habían conformado anteriormente, que privilegiaban a una porción de la vecindad porteña. Se rodeó del teniente de rey Baltasar García Ros, del veedor del Presidio Blas de Gainza, del teniente de gobernador Antonio de Larrazábal y del suegro de éste, Gaspar de Avellaneda, todos ellos oriundos de Navarra y del País Vasco. El ayuntamiento porteño puso en cuestionamiento esta red vincular al enfrentar en 1724 a Larrazábal, pero sólo consiguió con ello que varios de sus miembros fueran expulsados de sus cargos. Desde hacía más de una década que la corporación no sufría semejante impacto, y en este caso vino acompañado de una merma en sus miembros y de un renovado control sobre su actuación.

Hemos sostenido que Zavala, al respaldar a Larrazábal en su enfrentamiento con un sector de los cabildantes, respondía también, aunque en forma indirecta, a las directivas de la corona. Necesitaba en Buenos Aires de un cabildo dócil que acompañara los encargos que había recibido del influyente Joseph Patiño, el más importante de los cuales era la fundación de la ciudad de Montevideo. Patiño fue el último sostenedor del vetusto sistema impuesto por los Habsburgo, pues defendió en América la pervivencia de una estructura administrativa basada en dos enormes virreinos que se hallaban conectados con la península a través del cuestionado sistema de flotas y galeones. En la concepción de este funcionario de la corona, la presencia española en el Río de la Plata se sostenía en la importancia dada a la región como bastión militar frente al avance portugués y debía ser apuntalada mediante la fundación de una nueva ciudad en los márgenes del estuario. El cabildo de Buenos Aires, la única entidad que podía interponerse en virtud a que esa fundación le acarrearía un significativo recorte en su jurisdicción territorial, no estuvo en 1726 en condiciones de ofrecer resistencia alguna.

Más allá de esta última derrota, lo que caracterizó al ayuntamiento porteño a lo largo de los treinta y siete años estudiados fue la versatilidad con que se adaptó a las diversas coyunturas políticas. Entre 1690 y 1711, se resolvió en algunas ocasiones a confrontar la arbitrariedad con que se manejaron Agustín de Robles, Alonso de Valdés Inclán y Manuel de Velasco y Tejada, pero en otras evitó el enfrentamiento directo, espaciando

las sesiones o asistiendo formalmente a ellas para no tratar asunto alguno. Las perturbaciones políticas que se suscitaron entre 1712 y 1715, surgidas de la pesquisa de Mutiloa, fueron sin embargo acompañadas por la devolución de las antiguas facultades corporacionales. El cabildo incrementó su capacidad de presión fiscal (pudo volver a recaudar impuestos como el de leña y anclaje a los navíos y se le sumaron otros, como el “nuevo impuesto” cobrado al tráfico interno) y recobró el papel de intermediario obligado entre los vecinos accioneros, los corambreros y los cargadores de los navíos de registro y los buques negreros, con potestad para regular los precios de las transacciones y de establecer las cuotas que tocaban a cada sector. Esto le permitió no sólo llenar las cuasi vacías arcas corporacionales sino posicionarse como árbitro entre los actores que participaban en la explotación del único recurso local de carácter extractivo: el faenamiento del ganado vacuno cimarrón.

Cuando Zavala llegó al Río de la Plata, todos esos dispositivos comenzaban a ponerse lentamente en funcionamiento. De ello resultó una corporación que, además de haber aumentado su planta con el ingreso de nuevos regidores, había engrosado notablemente los recursos que manejaba, aunque debía administrarlos en una ciudad que se expandía y presentaba problemas a resolver que exigirían gravosos desembolsos. La Buenos Aires de la década de 1720, por cierto, se parecía en poco a la de fines del siglo anterior. Con la regularización de la liquidación del *situado* a las tropas del Presidio y la intensificación de los intercambios con registreros y asentistas, los niveles de circulante habían aumentado y la capacidad adquisitiva de la oligarquía urbana se había acrecentado notablemente, lo que se hizo visible en la envergadura y el ornato de sus viviendas y en las donaciones que destinaron a las iglesias, varias de las cuales se construyeron o refaccionaron en dicha década. Ese súbito enriquecimiento obró como incentivo para moverla a integrar la dirigencia concejil, por un lado porque estaba interesada en defender las bases de esa riqueza a través de su participación en el gobierno municipal y por otro porque se hallaba ávida del prestigio que podía ofrecerle la adquisición de un oficio venal o el desempeño de una alcaldía. Pero esa ostentación no sólo se canalizó a nivel individual sino que también encontró su expresión como *cuerpo*. El ayuntamiento se propuso dejar atrás el antiguo y deteriorado edificio consistorial y levantar en su lugar uno nuevo, más acorde a aquella ciudad que exhibía su nueva opulencia y se extendía a costas del ejido por fuera de sus límites originarios.

Los treinta y siete años que hemos analizado constituyeron, en síntesis, un momento crítico para la monarquía hispánica. El traspaso del cetro de una dinastía a otra

presupuso testear si los múltiples actores que la componían –corporaciones y territorios, cada uno de ellos con un ordenamiento jurídico propio– se acomodarían rápidamente al cambio o responderían, por el contrario, en forma anárquica, contradictoria o desfasada. Afortunadamente acaeció lo primero, quedando con ello demostrado que esta “monarquía compuesta” contaba con sólidos mecanismos de adecuación internos, siempre y cuando no se vieran trastocados los presupuestos de legitimidad en que se basaba la transmisión del mando. El recambio dinástico puso a prueba a la oligarquía urbana de Buenos Aires y sirvió de telón de fondo a la sucesión de conflictos políticos que se vivieron a nivel local. No obstante, acarreó también un fuerte reajuste en las reglas de negociación política en que participó la dirigencia concejil. Durante los Habsburgo, ésta dispuso de un amplio margen de acción al tratar con la corona, acostumbrada a obtener beneficios a cambio de donativos y de gestos de lealtad. Luego de concluida la Guerra de Sucesión española, los Borbones iniciarían una modalidad de vínculo distinto, donde los márgenes de negociación serían menores y sólo se le reconocerían al ayuntamiento porteño incumbencias de orden municipal, excluyéndolo de cualquier otro papel a desempeñar por encima de ellas. En tal sentido, la real cédula que otorgó a la ciudad de Buenos Aires el tratamiento de *Muy Noble y Muy Leal* premió su lealtad a lo largo de la contienda dinástica, pero encubrió tras de sí los deseos de municipalizar de allí en más la actuación política de su cabildo.

BIBLIOGRAFÍA

a) Fuentes documentales editas y obras antiguas

- Francisco C. ACTIS **Actas y documentos del Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires** Junta de Historia Eclesiástica Argentina, Buenos Aires, 1943, tomo I.
- Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires** Archivo General de la Nación, Buenos Aires, 1925, tomos XVIII, XIX, XX, XXI y XXII.
- Manuel Josef de AYALA **Diccionario de Gobierno y Legislación de Indias** Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 1988.
- Bartolomé de ARZANS DE ORSUA Y VELA **Historia de la villa imperial de Potosí** Edición a cargo de Lewis Hancke y Gunnar Mendoza, Providence, Rhode Island, 1965, tomo III.
- Cartografía y relaciones históricas de Ultramar** Servicio Histórico Militar y Servicio Geográfico del Ejército, Madrid, 1992, tomo VII: "Río de la Plata".
- André DAULIER-DESLANDES "Extrait d'un journal de voyage fait en 1707, 1708 &c. aux costes de Guinée en Affrique et a Buenos Aires dans l'Amerique meridionale par le vaisseau du Roy: la Sphere avec la carte de la Riviere de la Plata" en **Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas** Buenos Aires, enero-marzo de 1929, año VII, n° 39.
- Documentos para la Historia Argentina** Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires, 1915, tomo V: "Comercio de Indias. Antecedentes legales (1713-1778)" y tomo X: "Padrones de la ciudad y campaña de Buenos Aires (1726-1810)".
- Oscar Luis ENSINCK **Propios y arbitrios de la ciudad de Buenos Aires, 1580-1821** Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1990.
- Ricardo de LAFUENTE MACHAIN **Conquistadores del Río de la Plata** Amorrortu, Buenos Aires, 1937.
- Libros Registros-Cedularios del Río de la Plata (1534-1717)** Instituto de Investigaciones de Historia del derecho, Buenos Aires, 1991, tomos I, II y III.
- Manuel MOREYRA PAZ-SOLDAN **El tribunal del consulado de Lima. Cuaderno de Juntas (1706-1720)** Lima, 1956, tomo I.
- Pablo PASTELLS **Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia del Paraguay** Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1933, tomos IV, V y VI.
- Enrique PEÑA **Documentos y planos relativos al período edilicio colonial de la ciudad de Buenos Aires** Municipalidad de la Capital-Jacobo Peuser, Buenos Aires, 1910, tomos I-II-III.
- José TORRE REVELLO (compilador) **Documentos históricos y geográficos relativos a la colonización rioplatense** Comisión Oficial del IV Centenario-Jacobo Peuser, Buenos Aires, 1941, tomo I

b) Compilaciones genealógicas

- Aldo Abel BELIERA **Catedral de Buenos Aires. Registro de óleos, bautismos y confirmaciones Libro 4 (1682-1706) – Libro 5 (1706-1713)** Estudios Histórico-Sociales de Buenos Aires, Buenos Aires, 2010;
- Aldo Abel BELIERA **Catedral de Buenos Aires. Registro de óleos y bautismos Libro 6 (1713-1720) – Libro 7 (1720-1727) – Libro 8 (1727-1732) – Libro 9 (1732-1747) – Libro 10 (1747-1752) – Bautismos Capilla de Luján (1714-1730)** Estudios Histórico-Sociales de Buenos Aires, Buenos Aires, 2012.
- Hugo FERNANDEZ DE BURZACO **Apuntes biogenealógicos para un padrón de los habitantes del Río de la Plata** Buenos Aires, 1986-1991, tomos I-VI

Hjalmar Edmundo GAMMALSSON **Los pobladores de Buenos Aires y su descendencia** Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, 1980.

Genealogía. Revista del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas Buenos Aires, tomos I-XXVII.

Carlos JAUREGUI RUEDA **Matrimonios de la Catedral de Buenos Aires, 1656-1760** Fuentes Históricas y Genealógicas Argentinas, Buenos Aires, 1987.

Raúl MOLINA **Diccionario biográfico de Buenos Aires 1580-1720** Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 2000.

Revista del Centro de Estudios Genealógicos de Buenos Aires Buenos Aires, tomos I-IV.

c) Elite, familia y poder: una aproximación teórica y una visión desde las metrópolis ibéricas y sus colonias

Manuel ALVARADO MORALES "El cabildo y regimiento de la ciudad de México en el siglo XVII. Un ejemplo de oligarquía criolla" en **Historia Mexicana** El Colegio de México, 1978-1979, nº 112.

Michael ANDERSON **Aproximaciones a la historia de la familia occidental (1500-1914)** Siglo XXI, Madrid, 1988.

Philippe ARIÈS **El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen** Taurus, Madrid, 1987.

Ignacio ATIENZA HERNANDEZ "*Paterfamilias*, señor y patrón: *oeconómica*, clientelismo y patronato en el Antiguo Régimen" en Reyna PASTOR (comp.) **Relaciones de poder, de producción y de parentesco en la Edad Media y Moderna** CSIC, Madrid, 1990.

Gerald E. AYLMER "Centro y localidad: la naturaleza de las élites del poder" en Wolfgang REINHARD (comp.) **Las élites del poder y la construcción del Estado** FCE, México, 1997.

Jacques BARBIER "Elites and cadres in Bourbon Chile" en **Hispanic American Historical Review** Durham, 1972, 52:3.

Barry BARNES **La naturaleza del poder** Pomares-Corregidor, Barcelona, 1990.

Arnold J. BAUER "Chilean rural society from the spanish conquest to 1930" en **Hispanic American Historical Review** 59:2, Durham, 1979.

Michel BERTRAND "De la richesse en Amérique: la gènese des patrimoines familiaux des officiers de finances de Nouvelle-Espagne (XVIIe-XVIIIe siècles)" en **Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine** Paris, Nros. 41-42, 1994.

Stephanie BLANK, Stephanie "Patrons, clients and kin in seventeenth century Caracas: a methodological essay in colonial south american social history" en **Hispanic American Historical Review** Durham, 1972, 54:2.

Tom BOTTOMORE **Elites y sociedad** Talasa, Madrid, 1995.

David BRADING **Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810)** Fondo de Cultura Económica, México, 1975.

David BRADING "La ciudad en la América Borbónica: élite y masas" en **Ensayos histórico-sociales sobre la urbanización en América Latina** CLACSO, Buenos Aires, 1978.

Rudolf BRAUN "Mantenerse arriba: reproducción sociocultural de las élites del poder europeas" en Wolfgang REINHARD (comp.) **Las élites del poder y la construcción del Estado** FCE, México, 1997.

Fred BRONNER "Urban Society and Stratification in Colonial Spanish America: Research Trends" en **Latin American Research Review** 21:1, 1986.

Neithard BULST "Gobernantes, instituciones representativas y sus miembros como élites del poder: ¿rivalos o socios?" en en Wolfgang REINHARD (comp.) **Las élites del poder y la construcción del Estado** FCE, México, 1997.

Peter BURKE **Venecia y Amsterdam. Estudio sobre las élites del siglo XVII** Gedisa, Barcelona, 1996.

Christian BÜSCHGES "Nobleza y estructura estamental entre concepto y realidad social, El caso de la ciudad de Quito y su región (1765-1810)" en **Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas** Colonia, Nro. 33, 1996.

- Christian BÜSCHGES y Frédérique LANGUE (coords.) **Excluír para ser, Procesos identitarios y fronteras sociales en la América Hispánica (XVII-XVIII)** Iberoamericana, Frankfurt-Madrid 2005.
- James CASEY **Historia de la familia** Espasa Calpe, Madrid, 1990.
- Janes CASEY, Francisco CHACON JIMENEZ y otros **La familia en la España Mediterránea (siglos XV-XIX)** Centro de Estudios de Historia Moderna Pierre Vilar-Crítica, Barcelona, 1987.
- Carmen CASTAÑEDA GARCIA (comp.) **Círculos de poder en la Nueva España** Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 1998.
- Eduardo CAVIERES **La Serena en el siglo XVIII. Las dimensiones del poder local en una sociedad regional** Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 1993.
- Francisco CHACON JIMENEZ, Francisco y Juan HERNANDEZ FRANCO **Poder, familia y consanguinidad en la España del Antiguo Régimen** Antropos, Barcelona, 1992.
- Gabriela DALLA CORTE "La red social frente a la crisis del orden colonial: compensación judicial y vínculos de parentesco entre Buenos Aires y Cataluña" en **Colonial Latin American Historical Review** 9:3, Albuquerque, 2000.
- Jacques DONZELOT **La policía de las familias** Pretextos, Valencia, 1990.
- Arlette FARGE **La vida frágil. Violencia, poderes y solidaridades en el París del siglo XVIII** Instituto Mora, México, 1994.
- Arturo R. FIRPO (comp.) **Amor, familia, sexualidad** Argot, Barcelona, 1984.
- Michel FOUCAULT **Historia de la sexualidad** Siglo XXI, México, 1987, tomo I.
- Jean-Louis FLANDRIN **Familles: parenté, maison, sexualité dans l'Ancienne Société** Editions du Seuil, París, 1983.
- Jean-Louis FLANDRIN **La moral sexual en Occidente** Granica, Barcelona, 1984.
- José Ignacio FORTEA "Poder real y poder municipal en Castilla en el siglo XVI" en Reyna PASTOR y otros **Estructuras y formas de poder en la historia** Universidad de Salamanca, 1991.
- Robin FOX **Sistemas de parentesco y matrimonio** Alianza, Madrid, 1985.
- Paul GANSTER "Miembros de los Cabildos eclesiásticos y sus familias en Lima y la ciudad de México en el siglo XVIII" en **Familias novohispanas, siglos XVI al XIX** Seminario de historia de la familia del Centro de Estudios Históricos, México, 1992.
- Juan Carlos GARAVAGLIA y Juan Carlos GROSSO "Mexican elites of a provincial town: the landowners of tepeaca" en **Hispanic American Historical Review** n°70:2, Durham, 1990.
- Manuela Cristina GARCIA BERNAL "Las élites capitulares indianas y sus mecanismos de poder en el siglo XVII" en **Anuario de Estudios Americanos** Sevilla, LVII:1, 2000.
- Jean GAUDEMET **El matrimonio en Occidente** Taurus, Madrid, 1993.
- Pilar GONZALBO AIZPURU **Familias Novohispanas. Siglos XVI al XIX** El Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma, México, 1991.
- Pilar GONZALBO AIZPURU y Cecilia RABELL ROMERO (coord.) **Familia y vida privada en la Historia de Iberoamérica** El Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma, México, 1996.
- Victoria GONZALEZ MUÑOZ y Ana Isabel MARTINEZ ORTEGA **Cabildos y élites capitulares en Yucatán** Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1989.
- Jack GOODY **La evolución de la familia y el matrimonio en Europa** Herder, Barcelona, 1986.
- Jack GOODY **Cocina, cuisine y clase. Estudio de sociología comparada** Gedisa, Barcelona, 1995.
- Serge GRUZINSKI, André BURGUIÈRE y otros **Familia y sexualidad en Nueva España** Fondo de Cultura Económica, México, 1982.
- Ana GUERRERO MAYLLO **Familia y vida cotidiana de una élite de poder. Los regidores madrileños en tiempos de Felipe II** Siglo XXI, Madrid, 1993.
- Luisa S. HOBERMAN **Mexico's merchant elite, 1590-1660: silver, state and society** Duke University Press, Durham, 1991.
- John Norman KENNEDY "Bahian Elites, 1750-1822" en **Hispanic American Historical Review** Durham, 1973, 53:3.
- John KIKZA **Empresarios coloniales. Familias y negocios en la ciudad de México durante los Borbones** México, 1986.

- John KIKZA "The Great Families of Mexico: Elite Maintenance and Business Practices in Late Colonial Mexico City" en **Hispanic American Historical Review** Durham, 1982, 62:3.
- Frédérique LANGUE "Las élites en América española, actitudes y mentalidades" en **Boletín Americanista** Universidad de Barcelona, 1993, año XXXIII, nº 42-43.
- Frédérique LANGUE "Las élites en América colonial (siglos XVI-XIX). Recopilación bibliográfica" en **Anuario de Estudios Americanos** Sevilla, 1997, tomo LIV, nº 2.
- Peter LASLETT **El mundo que hemos perdido, explorado de nuevo** Alianza, Madrid, 1987.
- Asunción LAVRIN "La mujer en la sociedad colonial hispanoamericana" en Leslie BETHEL (comp.) **Historia de América Latina**, Cambridge University Press-Crítica, Barcelona, 1990, tomo IV.
- Asunción LAVRIN "Dowries and Wills: a View of Women's Socioeconomics Roles in Colonial Guadalajara and Puebla, 1640-1790" en **Hispanic American Historical Review** Durham, 1979, 59:2.
- Asunción LAVRIN (coord.) **Sexualidad y matrimonio en la América Hispánica, Siglos XVI-XVIII** Grijalbo, México, 1991.
- Gunner LIND "Grandes y pequeños amigos: el clientelismo y la élite del poder" en Wolfgang REINHARD (comp.) **Las élites del poder y la construcción del Estado** FCE, México, 1997.
- Guillermo LOHMANN VILLENA "Los regidores del Cabildo de Lima desde 1535 hasta 1635" en **Revista de Indias** Madrid, 1972, nº 32.
- Guillermo LOHMANN VILLENA **Los regidores perpetuos del Cabildo de Lima (1535-1821). Crónica y estudio de un grupo de gestión** Diputación Provincial, Sevilla, 1983, tomo I.
- Niklas LUHMANN **Poder** Anthropos-Universidad Iberoamericana, Barcelona, 1995.
- Fernando MARTINEZ RUEDA y Miquel URQUIJO GOITIA "Estrategias familiares y poder" en **Boletín de la Asociación de Demografía Histórica** 1994, XII, nº2-3.
- Robert McCAA "Calidad, clase y matrimonio en el México colonial: el caso de Parral, 1788-1790" en GONZALBO, Pilar (compiladora) **Historia de la familia** Instituto Mora, Universidad Autónoma, México, 1993.
- José Luis MORENO **Historia de la familia en el Río de la Plata** Sudamericana, Buenos Aires, 2004.
- Magnus MÖRNER "Economic Factors and Stratifications in Colonial Spanish America with special Regards to Elites" en **Hispanic American Historical Review** 63:2, mayo de 1983.
- Magnus MÖRNER "Estratificación social de Hispanoamérica durante el período colonial" en **Historia general de América** Caracas, 1989, tomo IV.
- Roland MOUSNIER **Las jerarquías sociales** Amorrortu, Buenos Aires, 1972.
- Luis NAVARRO GARCIA "Los oficios vendibles en Nueva España durante la Guerra de Sucesión" en **Anuario de Estudios Americanos** Sevilla, 1975, XXXII.
- Luis NAVARRO GARCIA (comp.) **Élites urbanas en Hispanoamérica: de la conquista a la independencia** Secretariado de Publicaciones, Universidad de Sevilla, 2005.
- Stanislaw OSSOWSKI **Estructura de clase y conciencia social** Península, Barcelona, 1972.
- José de la PEÑA y María Teresa LOPEZ DIAZ "Comercio y poder. Los mercaderes y el cabildo de Guatemala, 1592-1623" en **Historia Mexicana** El Colegio de México, 1981, nº 120.
- Pilar PONCE LEIVA y Arrigo AMADORI "Élites en la América Hispana: Balance bibliográfico (1992-2005)" en **Nuevo Mundo Mundos Nuevos**, 2006, Puesto en línea el 31 de enero de 2006. URL : <http://nuevomundo.revues.org/index1576.html>.
- Susan RAMIREZ **Patriarcas provinciales. La tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú colonial** Alianza, Madrid, 1991.
- Wolfgang REINHARD "Las élites del poder, los funcionarios del Estado, las clases gobernantes y el crecimiento del poder del Estado" en Wolfgang REINHARD (comp.) **Las élites del poder y la construcción del Estado** FCE, México, 1997.
- Emir REITANO La comunidad portuguesa de Buenos Aires durante el período colonial tardío Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de La Plata, 2000.
- Paul RIZO-BOYLAN "La familia noble en la Lima Borbónica: patrones matrimoniales y dotales" en **Boletín del Instituto Riva-Agüero** Pontificia Universidad Católica del Perú, 1989, nº 16.
- Ricardo RODRIGUEZ MOLAS **Divorcio y familia tradicional** C.E.A.L., Buenos Aires, 1984.

- Ángel RODRIGUEZ SANCHEZ "El poder familiar: la patria potestad en el Antiguo Régimen" en Reyna PASTOR y otros **Estructuras y formas de poder en la historia** Universidad de Salamanca, 1991.
- María Dolores RUBIO FERNANDEZ **Elecciones en el Antiguo Régimen (La reforma municipal de Carlos III en Alicante, 1766-1770)** Universidad de Alicante, 1989.
- Eduardo SAGUIER "El parentesco como mecanismo de consolidación política de un patriciado colonial. El caso de las provincias rioplatenses del virreinato peruano (1700-1776)" en **Estudios de historia social y económica de América** Alcalá de Henares, 1993, n° 10.
- Raffaella SARTI **Vida en familia. Casa, comida y vestido en la Europa Moderna** Crítica, Barcelona, 2003.
- James SCOTT "¿Patronazgo o explotación?" en Ernest GELLNER y otros **Patronos y clientes en las sociedades mediterráneas** Júcar, Madrid, 1985.
- Martine SEGALÉN **Antropología histórica de la familia** Taurus, Madrid, 1992.
- Edward SHORTER **El nacimiento de la familia moderna** Anesa, Buenos Aires, 1977.
- Lawrence STONE **Familia, sexo y matrimonio en Inglaterra, 1500-1800** Fondo de Cultura Económica, México, 1990.
- Javier de la TABLA DUCASSE **Los encomenderos de Quito: origen y evolución de una élite colonial** Escuela de Estudios Americanos, Sevilla, 1993.
- John TUTINO "Power, Class and Family: Men and Women in the Mexican Elite, 1750-1810" en **The Americas** 1983, n° 39.
- Ann TWINAM "Enterprise and Elites in Eighteenth-Century Medellín" en **Hispanic American Historical Review** Durham, 1979, 59 :3.
- Alex WEINGROD "Patronazgo y poder" en Ernest GELLNER y otros **Patronos y clientes en las sociedades mediterráneas** Júcar, Madrid, 1985.

d) Los vínculos jurídicos, económicos y políticos entre la metrópoli y sus colonias

- Alejandro AGÜERO "Ciudad y poder político en el Antiguo Régimen. La tradición castellana" en **Cuadernos de Historia** Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 2005, N° 15
- Joaquim ALBAREDA Y SALVADÓ **La guerra de sucesión de España (1700-1714)** Crítica, Barcelona, 2010.
- Kenneth ANDRIEN "The sale of Fiscal Office and the Decline of Royal Authority in the Viceroyalty of Peru: 1633-1700" en **Hispanic American Historical Review** Durham, 1982, 62:1.
- Aníbal ARCONDO "La noción de mercado en economía y su utilización en historia" en Juan Carlos GROSSO y Jorge SILVA RIQUER **Mercados e historia** Instituto Mora, México, 1991.
- Carlos Sempat ASSADOURIAN **El sistema de la economía colonial. El mercado interior, regiones y espacio económico** Nueva Imagen, México, 1983.
- Antonio Miguel BERNAL **La financiación de la Carrera de Indias (1492-1824) Dinero y crédito en el comercio colonial con América** Fundación El Monte, Sevilla, 1992.
- Fernando de BORDEJÉ Y MORENCOS **Tráfico de Indias y política oceánica** Mapfre, Madrid, 1992.
- David BRADING "El mercantilismo ibérico y el crecimiento económico en la América Latina del siglo XVIII" en Enrique FLORESCANO (comp.) **Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América Latina (1500-1975)** Fondo de Cultura Económica, México, 1979.
- David BRADING "La España de los Borbones y su imperio americano" en Leslie BETHEL (comp.) **Historia de América Latina** Cambridge University Press-Crítica, Barcelona, 1990, tomo II.
- Guillermo CESPEDES DEL CASTILLO **Lima y Buenos Aires. Repercusiones económicas y políticas de la creación del Virreinato del Río de la Plata** Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1947.
- Guillermo CESPEDES DEL CASTILLO "América hispánica (1492-1898)" en Manuel TUÑÓN DE LARA (director) **Historia de España** Labor, Barcelona, 1982, tomo VI.
- Bartolomé CLAVERO **Antidora, Antropología Católica de la Economía Moderna** Milán, Giuffrè Editore, 1991.

- Janine FAYARD "La Guerra de Sucesión (1700-1714)" en Manuel TUÑÓN DE LARA (director) **Historia de España** Labor, Barcelona, 1982, tomo V.
- José Ignacio FORTEA PEREZ "Economía, arbitrismo y política en la Monarquía hispánica a fines del siglo XVI" en **Manuscripts Revista d'història moderna**, Universidad Autónoma de Barcelona, Departamento de Historia Moderna, Nº 16, 1998.
- Antonio GARCIA BAQUERO GONZÁLEZ **Cádiz y el Atlántico (1717-1778)** Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1976.
- Lutgardo GARCIA FUENTES **El comercio español con América, 1650-1700** Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1980.
- Carlos GARRIGA "Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen" en **Istor, Revista de Historia Internacional** Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, 2004, Año IV, Num. 16, Págs. 9-18.
- Jorge GELMAN "En torno a la Teoría de la Dependencia, los polos de crecimiento y la crisis del siglo XVII. Algunos debates sobre la Historia Colonial Americana" en José SANCHEZ NISTAL y otros **Problemas actuales de la historia. Terceras Jornadas de Estudios Históricos** Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 1994.
- Rafael GUERRERO ELECALDE **Las élites vascas y navarras en el gobierno de la Monarquía Borbónica. Redes sociales, carreras y hegemonía en el siglo XVIII (1700-1746)** Universidad del País Vasco, Bilbao, 2012.
- Agustín GUIMERA (ed.) **El reformismo borbónico** Alianza, Madrid, 1996.
- Antonio HESPAÑA **La gracia del derecho. Economía de la cultura en la Edad Moderna** Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993.
- Louisa S. HOBBERMAN y Susan M. SOLOW **Ciudades y sociedad en Latinoamérica colonial** Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1986.
- José María IMIZCOZ BEUNZA Y Oihane OLIVERI KORTA (coord.) **Economía doméstica y redes sociales en el Antiguo Régimen** Sílex ediciones, Madrid, 2010.
- Fernando JUMAR **Le commerce atlantique au Río de la Plata, 1680-1778** Tesis de Doctorado, École des Hautes Études en Sciences Sociales, París, 2000.
- Lyman JOHNSON y Enrique TANDETER **Economías coloniales. Precios y salarios en América Latina, siglo XVIII** Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1992.
- Henry KAMEN **La España de Carlos II** Crítica, Barcelona, 1981.
- Henri KAMEN **Felipe V, el rey que reinó dos veces** Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 2000.
- Carlos Daniel MALAMUD RIKLES **Cádiz y Saint-Malò en el comercio colonial peruano (1698-1725)** Diputación provincial de Cádiz, Cádiz, 1986.
- José Antonio MARAVALL **Teoría del Estado en España en el siglo XVII** Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997.
- Carlos MARICHAL y Matilde SOUTO MANTECÓN "Silver and *Situados*: New Spain and the financing of the Spanish Empire in the Caribbean in the eighteenth century" en **Hispanic American Historical Review** Duke University, 1994, nº 74:4.
- Pedro PEREZ HERRERO **Comercio y mercados en América Latina colonial** Mapfre, Madrid, 1992.
- Pablo Emilio PEREZ-MALLAINA BUENO **Política naval española en el Atlántico, 1700-1715** Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1982.
- Horst PIETSCHMANN "Burocracia y corrupción en Hispanoamérica colonial. Una aproximación tentativa" en **Nova Americana** Torino, 1982, nº5.
- Ruggiero ROMANO **Coyunturas opuestas. La crisis del siglo XVII en Europa e Hispanoamérica** Fondo de Cultura Económica, México, 1993.
- Julián RUIZ RIVERA y Manuela GARCIA BERNAL **Cargadores a Indias** Mapfre, Madrid, 1992.
- Enrique TANDETER **Coacción y mercado. La minería de la Plata en el Potosí colonial, 1692-1826** Sudamericana, Buenos Aires, 1992.
- Sergio VILLALOBOS **Comercio y contrabando en el Río de la Plata y Chile** Eudeba, Buenos Aires, 1965.

Bartolomé YUN CASALILLA **Las redes del imperio. Élités sociales en la articulación de la monarquía hispánica, 1492-1714** Universidad Pablo de Olavide-Marcial Pons, Madrid, 2009.
 Geoffrey WALKER **Política española y comercio colonial, 1700-1789** Ariel, Barcelona, 1979.

e) El Río de la Plata: ámbito urbano y ámbito rural

- Samuel AMARAL "Rural production and labour in late colonial Buenos Aires" en **Journal of Latin American Studies** n°19, Londres, 1987.
- Samuel AMARAL "Trabajo y trabajadores rurales en Buenos Aires a fines del siglo XVIII" en **Anuario IEHS** n° 2, UNCPBA, Tandil, 1987.
- Samuel AMARAL **Producción y mano de obra rural en Buenos Aires colonial. La estancia de Clemente López Osornio, 1785-1795** Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 1989.
- Carlos Sempat ASSADOURIAN **El tráfico de esclavos en Córdoba de Angola a Potosí. Siglos XVI-XVII** Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Córdoba, 1966.
- Eduardo AZCUY AMEGHINO **Comercio exterior y comercio de cueros en el virreinato del Río de la Plata** Documento de trabajo n° 3, CIES-Facultad de Ciencias Económicas, UBA, 1988.
- Eduardo AZCUY AMEGHINO "Economía y sociedad colonial en el ámbito rural bonaerense" en RAPOPORT, Mario (comp.) **Economía e Historia. Contribuciones a la historia económica argentina** Tesis, Buenos Aires, 1988.
- Eduardo AZCUY AMEGHINO **El latifundio y la gran propiedad colonial rioplatense** Fernando García Cambeiro, Buenos Aires, 1995.
- Eduardo AZCUY AMEGHINO **La Otra Historia. Economía, Estado y Sociedad en el Río de la Plata Colonial** Imago Mundi, Buenos Aires, 2002
- Guillermo BANZATO **La expansión de la frontera bonaerense. Posesión y propiedad de la tierra en Chascomús, Ranchos y Monte, 1780-1880** Universidad Nacional de Quilmes, Sarandí, 2005.
- Darío BARRIERA **Conquista y colonización hispánica. Santa Fe la Vieja (1573-1660)** (Tomo II de la "Nueva Historia de Santa Fe") Prohistoria, Rosario, 2006.
- Darío BARRIERA **Abrir puertas a la tierra. Microanálisis de la construcción de un espacio político. Santa Fe, 1573-1640** Museo Histórico Provincial de Santa Fe, 2013.
- Darío BARRIERA **Instituciones, gobierno y territorio: Rosario, de la capilla al municipio (1725-1930)** Rosario, ISHIR-CONICET, 2010.
- Darío BARRIERA y Raúl FRADKIN **Gobierno, justicias y milicias. La frontera entre Buenos Aires y Santa Fe, 1720-1830** Universidad Nacional de La Plata, 2014.
- Carlos M. BIROCCO "Arrendamientos rurales en la primera mitad del siglo XVIII" en Gabriela GRESORES y Carlos M. BIROCCO **Arrendamientos, desalojos y subordinación campesina** García Cambeiro, Buenos Aires, 1992.
- Carlos M. BIROCCO **Comercio de mulas y producción rural: Miguel de Riblos, tratante y hacendado de Buenos Aires (1673-1719)** II Jornadas de Historia Colonial celebradas en el Museo Roca, Buenos Aires, 1993.
- Carlos M. BIROCCO "Historia de un latifundio bonaerense: las estancias de Riblos en Areco, 1713-1813" en **Anuario de Estudios Americanos** Sevilla, 1996, tomo LIII, n° 1.
- Carlos M. BIROCCO **Sociedad y política en Buenos Aires durante la Guerra de Sucesión Española (1700-1714)** Tesis de Licenciatura mimeografiada, Universidad Nacional de Luján, 1996.
- Carlos M. BIROCCO "La estructuración de un espacio de poder local en la campaña bonaerense: las alcaldías de la Santa Hermandad de los partidos de Areco y la Cañada de la Cruz (1700-1790)" en Gabriela GRESORES y Carlos M. BIROCCO **Tierra, poder y sociedad en la campaña bonaerense colonial** Cuadernos del PIEA, Buenos Aires, 1998.
- Carlos María BIROCCO **Cañada de la Cruz. Tierra, producción y vida cotidiana en un partido bonaerense durante la colonia** Buenos Aires, Municipalidad de Exaltación de la Cruz, 2003.
- Carlos María BIROCCO "Los indígenas de Buenos Aires a comienzos del siglo XVIII: los reales pueblos de indios y la declinación de la encomienda", **Revista de Indias** Vol. LXIX, Nro. 247

- Cayetano BRUNO **Historia de la Iglesia en la Argentina**_ Don Bosco, Buenos Aires, 1968, vol. IV.
- Mariana CANEDO **Propietarios, ocupantes y pobladores. San Nicolás de los Arroyos, 1600-1860** Universidad Nacional de Mar del Plata-Grupo de Investigación en historia rural rioplatense, Mar del Plata, 2000.
- Rómulo CARBIA **Historia eclesiástica del Río de la Plata** Alfa y Omega, Buenos Aires, 1914, tomo II.
- Julián CARRERA **Pulperos y pulperías en la campaña bonaerense, 1770-1820** Prohistoria, Rosario, 2011.
- Ricardo CICERCHIA **Historia de la vida privada en la Argentina** Troquel, Buenos Aires, 1998.
- Emilio CONI **Historia de las vaquerías del Río de la Plata** Platero, Buenos Aires, 1979.
- Raúl FRADKIN (comp.) **La historia agraria del Río de la Plata colonial. Los establecimientos productivos** C.E.A.L., Buenos Aires, 1993.
- Juan Carlos GARAVAGLIA "El pan de cada día: el mercado del trigo en Buenos Aires, 1700-1820" en **Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani**_ Tercera Serie, n°4, Buenos Aires, segundo semestre de 1991.
- Juan Carlos GARAVAGLIA **Mercado interno y economía colonial** Enlace-Grijalbo, México, 1983.
- Juan Carlos GARAVAGLIA **Pastores y labradores de Buenos Aires. Una Historia Agraria de la campaña bonaerense (1700-1830)**_ Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1999.
- Juan Carlos GARAVAGLIA y Jorge GELMAN **El mundo rural rioplatense a fines de la época colonial: estudios sobre producción y mano de obra** Biblos, Buenos Aires, 1989.
- Juan Carlos GARAVAGLIA y Juan MARCHENA **América Latina de los orígenes a la independencia: La sociedad colonial ibérica en el siglo XVIII** Crítica, Madrid, 2005.
- Juan Carlos GARAVAGLIA y Raúl FRADKIN **La Argentina colonial: el Río de la Plata entre los siglos XVI y XIX** Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2009.
- Margarita GASCON "La articulación de Buenos Aires en la frontera sur del imperio español, 1640-1740" en **Anuario IEHS** n° 13, UNCPBA, Tandil, 1998.
- Jorge GELMAN "Economía natural y economía monetaria: los grupos dirigentes de Buenos Aires a principios del siglo XVIII" en **Anuario de Estudios Americanos** 1987, tomo XLIV, n° 1.
- Jorge GELMAN "Cabildo y élite local. El caso de Buenos Aires en el siglo XVII" en **HISLA Revista Latinoamericana de Historia económica y social** N° 6, 1985, Págs. 3-20.
- Jorge GELMAN **De mercachifle a gran comerciante: los caminos del ascenso en el Río de la Plata Colonial** Universidad Internacional de Andalucía, Huelva, 1996.
- Horacio GIBERTI **Historia económica de la ganadería argentina** Solar, Buenos Aires, 1986.
- Rodolfo GONZALEZ LEBRERO **La pequeña aldea. Sociedad y economía en Buenos Aires (1580-1640)** Biblos, Buenos Aires, 2002.
- Lyman JOHNSON "La historia de precios de Buenos Aires durante el período virreinal" en Lyman JOHNSON y Enrique TANDETER **Economías coloniales. Precios y salarios en América Latina, siglo XVIII** Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1992.
- Ricardo de LAFUENTE MACHAIN **Los portugueses en Buenos Aires** Librería Cervantes, Buenos Aires, 1931.
- Ricardo de LAFUENTE MACHAIN **Buenos Aires en el siglo XVIII** Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, 1980.
- Boleslao LEWIN "Los portugueses en Buenos Aires en el período colonial" en las **Actas del VI Congreso Internacional de Historia de América** Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1982, tomo IV.
- José MATEO **Población, parentesco y red social en la frontera: Lobos en el siglo XIX** Grupo de Investigación en Historia Rural Rioplatense, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata, 2001.
- José María MARILUZ URQUIJO **El régimen de la tierra en el derecho indiano** Perrot, Buenos Aires, 1978.

- José María MARILUZ URQUIJO "Solidaridades y antagonismos de los comerciantes de Buenos Aires a mediados del setecientos" en **Investigaciones y ensayos** Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1987, nº 35.
- Dedier Norberto MARQUIEGUI **Estancia y poder político en un partido de la campaña bonaerense (Luján, 1755-1821)** Biblos, Buenos Aires, 1990.
- Carlos MAYO "Estancia y peonaje en la región pampeana en la segunda mitad del siglo XVIII" en **Desarrollo Económico** nº 92, Buenos Aires, 1984.
- Carlos MAYO "El peonaje rural rioplatense en una época de transición" en **Anuario de estudios americanos** Tomo XLVI, Sevilla, 1990.
- Carlos MAYO **Estancia y sociedad en la pampa. 1740-1820** Biblos, Buenos Aires, 1995.
- Carlos MAYO (comp.) **Pulperos y pulperías de Buenos Aires, 1740-1830** Facultad de Humanidades, Mar del Plata, 1996.
- Raúl A. MOLINA **Hernandarias, el hijo de la tierra** Lancetremere, Buenos Aires, 1948.
- Raúl A. MOLINA "Miguel de Riblos. El hombre que llenó medio siglo de Buenos Aires y su biblioteca histórica" en **Revista Historia** Buenos Aires, 1958, nº11.
- Raúl A. MOLINA **Las primeras experiencias comerciales del Plata. El comercio marítimo, 1580-1700** Sin mención a editor, Buenos Aires, 1966.
- Raúl A. MOLINA **La familia porteña en los siglos XVII y XVIII. Historia de los divorcios en el período hispánico** Fuentes Históricas y Genealógicas Argentinas, Buenos Aires, 1991.
- Alfredo Juan MONTOYA **Cómo evolucionó la ganadería en la época del virreinato** Plus Ultra, Buenos Aires, 1984.
- Zacarías MOUTOUKIAS "Power, Corruption and Commerce: The Making of the local Administrative Structure in Seventeenth-Century Buenos Aires" en **Hispanic American Historical Review** Durham, 1988, 68:4.
- Zacarías MOUTOUKIAS **Contrabando y control colonial en el siglo XVII** Centro Editor de América Latina., Buenos Aires, 1988.
- Zacarías MOUTOUKIAS "Burocracia, contrabando y autotransformación de las élites. Buenos Aires en el siglo XVII" en **Anuario del IHES** Tandil, 1988, nº 3.
- Zacarías MOUTOUKIAS "Comercio colonial y espacio económico: 30 años de historiografía" en **Historiografía argentina: 1958-1988. Una evaluación crítica de la producción histórica argentina** Comité Argentino de Ciencias Históricas, Buenos Aires, 1990.
- Zacarías MOUTOUKIAS "Réseaux personnels et autorités coloniales: les négociants de Buenos Aires au XVIIIe siècle" en **Annales E.S.C.** 1993, tomo 1, nº1.
- Zacarías MOUTOUKIAS "Redes sociales, comportamiento empresario y movilidad social en una economía de no mercado (el Río de la Plata en la segunda mitad del siglo XVIII)" en Blanca ZEBERIO y Hernán OTERO (comp.) **Reproduccion social y sistemas de herencia en una perspectiva comparada: Europa y los países nuevos (siglos XVIII al XX)** Instituto de Estudios Histórico-Sociales, Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, 1998.
- Zacarías MOUTOUKIAS "Gobierno y sociedad en el Tucumán y el Río de la Plata 1550-1800" en **Nueva Historia Argentina** Buenos Aires, Sudamericana, 2000.
- Zacarías MOUTOUKIAS **Configuraciones y redes de poder: un análisis de las relaciones sociales en América Latina** Fondo Editorial Tropykos, 2002.
- Zacarías MOUTOUKIAS "Las formas complejas de la acción política: justicia corporativa, faccionalismo y redes sociales (Buenos Aires, 1750-1760)" en **Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas** Colonia, 2002, Nro. 39.
- Alice PFIFFER de CANABRAVA **O comércio português no Rio da Prata (1580-1640)** Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Universidad de Sao Paulo, 1944.
- Eduardo SAGUIER "Economic impact of indian immigration and commercial capital on the formation of a colonial labor force. The case of Buenos Aires in the early seventeenth century" en **Revista de Historia de América** Instituto Panamericano de Geografía e Historia, México, 1986.

- Eduardo SAGUIER "La naturaleza estipendiaria de la esclavitud urbana colonial. El caso de Buenos Aires en el siglo XVIII" en **Revista Paraguaya de Sociología** Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, Asunción, enero-abril de 1989.
- Eduardo SAGUIER "La conducción de caudales de oro y plata como mecanismo de corrupción. El caso del situado asignado a Buenos Aires por las Cajas Reales de Potosí en el siglo XVIII" en **Historia** Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 1989, vol. 24.
- Eduardo SAGUIER "Transformaciones del Estado colonial. Un balance de la cuestión rioplatense" en **Iberoamericana. Nordic Journal of Latin American Studies** Estocolmo, 1991, XXI:1-2.
- Eduardo SAGUIER **El mercado de mercancías y su influencia en la estructura social. El rol del crédito mercantil en el dinamismo de los mercados** Ponencia presentada en las II Jornadas de Historia Colonial celebradas en el Museo Roca, Buenos Aires, 1993.
- Eduardo SAGUIER **Mercado inmobiliario y estructura social. El Río de la Plata en el siglo XVIII** Centro Editor de América Latina., Buenos Aires, 1993.
- Ricardo SALVATORE y Jonatan BROWN "Trade and proletarianization in late colonial Banda Oriental: evidence from the Estancia de las Vacas" en **Hispanic American Historical Review**, n° 67:3, Durham, 1987.
- Nicolás SANCHEZ ALBORNOZ "La extracción de mulas de Jujuy al Perú. Fuentes, volumen y negociantes" en **Estudios de Historia Social** Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 1965, n°1.
- Nicolás SANCHEZ ALBORNOZ "La saca de mulas de Salta al Perú, 1778-1808" en **Anuario** Universidad de Rosario, 1968.
- Jorge A. SERRANO REDONET **La sociedad de Buenos Aires en sus derechos a mayorazgos y a otras fundaciones españolas (siglo XVII)** Academia Americana de Genealogía, Buenos Aires, 1992.
- Hernán Asdrúbal SILVA "El Cabildo, el abasto de carne y la ganadería. Buenos Aires en la primera mitad del siglo XVIII" en **Investigaciones y Ensayos** Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, julio-diciembre de 1967, n° 3.
- Susan SOCOLOW **Los mercaderes del Buenos Aires virreinal: familia y comercio** Ed. de la Flor, Buenos Aires, 1991.
- Susan SOCOLOW "Cónyuges aceptables: la elección de consorte en la Argentina colonial, 1778-1810" en LAVRIN, Asunción (coord.) **Sexualidad y matrimonio en la América Hispánica, Siglos XVI-XVIII** Grijalbo, México, 1991.
- Susan SOCOLOW **The bureaucrats of Buenos Aires, 1769-1810: Amor al Real Servicio** Duke University Press, 1987.
- Elena F. S. de STUDER **La trata de negros en el río de la Plata durante el siglo XVIII** Eudeba, Buenos Aires, 1958.
- Griselda TARRAGÓ "Las venas de las Monarquía. Redes sociales, circulación de recursos y configuraciones territoriales. El Río de la Plata en el siglo XVIII" en José María IMÍZCOZ y Oihane OLIVERI (coords.) **Economía doméstica y redes sociales en el Antiguo Régimen** Sílex, Madrid, 2010.
- Griselda TARRAGÓ "De las montañas al Río de la Plata: gobernadores cántabros en Buenos Aires (primera mitad del siglo XVIII) en **Monte Buciero** 2006, N° 12, Págs. 95-126.
- Estela TOLEDO "El comercio de mulas en Salta, 1657-1698" en **Anuario del Instituto de investigaciones históricas** Rosario, 1962-1963, n° 6.
- José TORRE REVELLO "Los gobernadores de Buenos Aires (1617-1777)" en Ricardo LEVENE **Historia de la Nación Argentina** El Ateneo, Buenos Aires, 1961, vol. III.
- José TORRE REVELLO **La sociedad colonial** Pannedille, Buenos Aires, 1970.
- Fernando URQUIZA "Etiquetas y conflictos: el obispo, el virrey y el cabildo en el Río de la Plata en la segunda mitad del siglo XVIII" en **Anuario de Estudios Americanos** 1994, tomo L, n° 1.
- Martín WASSERMAN **Más allá de las redes: deudas y contratos en Buenos Aires durante el temprano siglo XVII** Tesis de Maestría en Investigación Histórica, Universidad de San Andrés, 2012.

RESUMEN

LA ÉLITE DE PODER EN BUENOS AIRES COLONIAL: CABILDO Y CABILDANTES ENTRE LOS HABSBURGOS Y LOS BORBONES (1690-1726)

Autor: Carlos María BIROCCO

El objeto de este proyecto es estudiar a la dirigencia concejil porteña en un período de recambio dinástico, no sólo en referencia a su rol de minoría dirigente, sino a través del desciframiento de los resortes económicos y sociales que determinaron su primacía social. Se indagó si esa élite manipuló desde su plataforma institucional (el cabildo de Buenos Aires) la administración de los recursos locales, en especial las matanzas de ganado cimarrón y el control sobre las ventas de cueros, y desvió las utilidades de su explotación con claros fines sectoriales. A partir de ello se estudió la dinámica de funcionamiento del cabildo, qué peso tuvieron los distintos oficiales concejiles – regidores y otros oficiales venales y electivos– en la toma de decisiones y cuál fue la agenda de asuntos que manejaba esta corporación. Posteriormente nos abocamos a analizar a los cabildantes desde un enfoque prosopográfico, para determinar si hubo rotación entre las familias que ocupaban escaños en el ayuntamiento y dilucidar si los patrones de reclutamiento y las posibilidades de ascenso fueron distintos a los del Buenos Aires virreinal. A partir del origen familiar y geográfico de los oficiales concejiles y de las alianzas matrimoniales que tramaron fue posible reconocer sus estrategias de promoción. Reconstruyendo sus actividades como comerciantes o productores rurales, por último, pudo apreciarse cómo evolucionó su perfil socioprofesional a lo largo del período escogido para este estudio.

Palabras Clave: Río de la Plata colonial – Cabildo de Buenos Aires – Cabildos americanos durante la dominación española – Élités hispanoamericanas coloniales – Oligarquías urbanas hispanoamericanas – Comercio colonial – Producción agropecuaria en el Río de la Plata colonial – Evolución de la propiedad de la tierra.